RAMA JUDICIAL DE PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA
SALA PENAL DE JUSTICIA Y PAZ

Magistrado Ponente:

DR. JOSÉ HAXEL DE LA PAVA MARULANDA.

SENTENCIA PARCIAL

Acta de Discusión y Aprobación de Proyecto N° 015[1]

Barranquilla, Atlántico.
Primero (01) de diciembre de dos mil veinticinco (2.025)

Radicado de Sala: 08001-22-19-000-2023-00036-00
Postulado: SALVATORE MANCUSO GÓMEZ.
Estructura: Bloque Norte - Frente Contrainsurgencia Wayúu de las extintas AUC.
Requirente: Fiscalía 10ª delegada de la Dirección Nacional Especializada de Justicia Transicional.

INDICE

I. ASUNTO PARA DECIDIR. 2
II. IDENTIDAD DEL POSTULADO Y SITUACIÓN JURÍDICA 3
III. ACTUACIÓN PROCESAL. 10
1. ETAPA ADMINISTRATIVA. 10
2. ETAPA JUDICIAL. 13

IV. CONTEXTO. 15
V. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD. 34
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA. 38
1. DE LA COMPETENCIA. 38
2. LEGALIDAD FORMAL Y MATERIAL DE LA ACEPTACIÓN DE CARGOS. 38
3. PATRONES DE MACRO-CRIMINALIDAD: 42
4. DECISIÓN LEGALIZACIÓN DE CARGOS. 52
4.1. CONCIERTO PARA DELINQUIR 53
4.2. LEGALIZACIÓN PATRON DE MACROCRIMINALIDAD DE HOMICIDIO. 54

[1] Veintiséis (26) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

4.3. LEGALIZACIÓN DEL PATRÓN DE MACROCRIMINALIDAD DE DESAPARICIÓN FORZADA. 102
4.4. PATRÓN DE MACRO CRIMINALIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 107
4.5. PATRÓN DE MACRO CRIMINALIDAD DE VIOLENCIA CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS. 137
4.6. PATRÓN DE MACRO CRIMINALIDAD DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO. 144
5. LA RESPONSABILIDAD DEL POSTULADO. 161
6. LA DOSIFICACIÓN PUNITIVA 164
7. DE LA ACUMULACIÓN JURIDICA DE PENAS. 181
8. COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DEL POSTULADO. 181
9. EXTINCIÓN DE DOMINIO. 182
10. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN. 184
11. DE LOS INFORMES: 188
12. DEL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE CARÁCTER EXCEPCIONAL A LAS VÍCTIMAS. 208
12.1. PRELIMINARES. 212
12.2. FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 212
12.3. EL HECHO VICTIMIZANTE. 213
12.4. EL DAÑO 215
12.5. DAÑO INDIVIDUAL Y COLECTIVO. 215
12.6. RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE EL HECHO Y EL DAÑO 216
12.7. DEL DEBER GENERAL DE REPARACIÓN. 216
12.8. LAS VÍCTIMAS. 217
12.9. LA REPARACIÓN INTEGRAL 227
12.10. LA PRUEBA 245
12.11. TRÁMITE INCIDENTAL. 249
12.12. DE LAS LIQUIDACIONES EN CONCRETO. 250
12.13. DAÑO COLECTIVO. 623
13. OTRAS DETERMINACIONES DE LA SALA: 629

VII.RESUELVE. 630
1. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD. LEGALIZACIÓN DE CARGOS. ACUMULACIÓN JURIDICA DE PENAS, PENAS PRINCIPALES, ACCESORIAS Y ALTERNATIVIDAD PENAL. 630
2. PATRONES DE MACRO CRIMINALIDAD 631
3. ACREDITACION DE VÍCTIMAS Y MEDIDAS DE REPARACIÓN ORDENADAS. 632
4. EXHORTOS 632

I. ASUNTO PARA DECIDIR.

Procede la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a proferir Sentencia parcial, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1592 de 2012, que modificó el artículo 24 de la Ley 975 de 2005 y demás normas concordantes y aplicables dentro del presente proceso transicional de Justicia y Paz, dentro del proceso con radicado número **08001-22-19-000-2023-00036-00**, adelantado en contra del postulado **SALVATORE MANCUSO GÓMEZ**, quienes fuera integrante del grupo armado organizado al margen de la ley, Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia del cual hizo parte el denominado Frente Contrainsurgencia "Wayúu", lo anterior teniendo en cuenta que se desarrolló audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos y posteriormente Incidente de Reparación Integral a las Victimas.

II. IDENTIDAD DEL POSTULADO Y SITUACIÓN JURÍDICA

SALVATORE MANCUSO GÓMEZ.

Del análisis de la hoja de vida documentada por la fiscalía 10 delegada, la biografía y antecedentes del postulado aquí procesado, Salvatore Mancuso Gómez, ya han sido expuestos con suficiencia en las múltiples sentencias que en su contra se han proferido en esta jurisdicción penal especial de justicia transicional, conocida como Justicia y Paz, no obstante, para los efectos que corresponden a esta decisión, se expondrá una breve síntesis de su historia y participación como miembro del grupo armado ilegal, otrora conocido como *"Autodefensas Unidas de Colombia"*

Salvatore Mancuso Gómez es hijo de Salvatore Mancuso D'Angiolela y Gladys de Jesús Gómez Villadiego; nació el 17 de agosto de 1964 en la ciudad de Montería del Departamento de Córdoba y se identifica con la Cédula de Ciudadanía No. 6.892.624 expedida en esa misma ciudad. En el año 1981 contrajo matrimonio con Martha Elena Dereix Martínez; después de haber cursado estudios en la Universidad de Pittsburg, ubicada en el Estado de Pensilvania de los Estados Unidos de Norte América en el año 1983 y, luego estudiar Ingeniería Civil en una universidad de la ciudad de Bogotá D.C., sin terminar ninguna de las dos carreras cursadas,
decidió estudiar Administración Agropecuaria, para regresar a la ciudad de Montería en el año 1989, dedicándose a administrar la finca denominada *"Campamento"* ubicada en la zona de Tierra Alta del departamento de Córdoba, la cual había sido heredada por su esposa.
La zona del Alto Sinú, dentro de la cual se encontraba ubicada la finca administrada por Mancuso Gómez, se encontraba sometida al hostigamiento armado del grupo guerrillero conocido como "Ejército Popular de Liberación" -EPL- , quienes mediante secuestros, extorsiones, hurto de ganado y amenazas, mantenían en zozobra a ganaderos y comerciantes de la zona, es por ello que en la ciudad de Montería se instaló la primera Brigada Móvil del Ejército en el país, con el fin de combatir y hacer frente a los ataques armados del EPL en contra de la población civil.

Con ese propósito, el ejército se reunió con miembros de la población, entre quienes se encontraban ganaderos y comerciantes que suministraron información sobre la posible ubicación de miembros de la subversión y reses hurtadas, arrojando resultados positivos; no obstante, el ejército decidió trasladar la Brigada Móvil al departamento de Santander, dejando al departamento de Córdoba nuevamente en condiciones de vulnerabilidad frente a los ataques de la guerrilla.

En esas circunstancias, Salvatore Mancuso Gómez, logró el respaldo de miembros de la Brigada XI del Ejército ubicada en Montería, quienes le suministraron el apoyo de militares para hacerle frente a un grupo de subversivos que habían extorsionado a su padre y otros ganaderos de la región, él por su parte habría servido de guía a los militares, logrando de esta forma el reconocimiento como líder de la comunidad destacado por su compromiso con la seguridad de la región.

Posteriormente, en el año 1992 conoce al Mayor Walter Fratini, comandante de la Brigada del Ejército Nacional instalado en Córdoba, y con el respaldo y la financiación de éste, decide conformar un grupo de "autodefensa" que se denominó "El Caramelo", el cual cobraba, además, con fines de financiación, una suma de dinero anual a los ganaderos, fijada con base al número de hectáreas que fueran de su propiedad. De igual forma, el Mayor Fratini les suministró armamento, municiones y material de intendencia al recién surgido grupo paramilitar.

En el año 1993, luego del fallecimiento de Mayor Walter Fratini, Salvatore Mancuso empieza a financiar al grupo de autodefensa con recursos propios y con donaciones de otros ganaderos y comerciantes de la región, logrando recuperar y consolidar la seguridad de la zona, hasta el punto de que, en el año 1994, logró instalar antenas de comunicación en la base militar del Ejército, creando una infraestructura que permitió mantener comunicación permanente entre los ganaderos y el ejército y de esta forma incrementar los patrullajes conjuntos entre el ejército y los miembros del grupo de autodefensa.

Debido al inusitado avance y consolidación del grupo de autodefensa liderado por Salvatore Mancuso Gómez, es contactado por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, quienes por su parte ya tenían consolidado un grupo paramilitar que operaba en el margen izquierdo del Río Sinú, y lo invitan a unir fuerzas y crear una estrategia conjunta que les permitiera seguir combatiendo a los grupos guerrilleros que operaban en la zona. Fue así como Mancuso Gómez le facilitó un grupo de hombres a los hermanos Castaño para que hicieran parte de una incursión armada que estos planearon en el Departamento de Antioquia, iniciándose así el paramilitarismo liderado por la que se denominó como "Casa Castaño".

De manera paralela, el 11 de febrero de 1994 se expide el Decreto 356 del Ministerio de Defensa Nacional, por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, dando paso a las organizaciones que se conocieron como "Convivir", las

cuales parten del servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada, suministrado por la misma comunidad en forma de cooperativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperados o miembros dentro del área donde tiene asiento la respectiva comunidad[2]. Estas organizaciones privadas de seguridad terminaron convirtiéndose en grupos de "justicia privada" generadores de violencia y violaciones de los Derechos Humanos y, por su parte, Salvatore Mancuso Gómez, fungió como representante legal de la "convivir" denominada "Horizonte Limitada" que operaba en el municipio de Tierralta, según resolución 1732 de 19 de diciembre de 1.995.

A finales del año 1996, Salvatore Mancuso Gómez logró replegar los grupos subversivos FARC y EPL, mediante enfrentamientos armados sostenidos en la zona del Nudo de Paramillo, consolidado el control de esa zona del país, para luego apropiarse, en compañía de los hermanos Castaño, del cultivo de la hoja de coca ejercido por los campesinos de la región, con el propósito de vender la misma a narcotraficantes y así lograr una fuente de financiación del grupo paramilitar.

Con el tiempo, Mancuso Gómez logró conformar lo que se conoció como la Primera Dirección de Autodefensas, entrando a formar parte de las denominadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá – ACCU-, comandadas por Carlos Castaño Gil, Rodrigo Tovar Pupo, Alias "Jorge 40", "Hernando H2" y, Carlos Mauricio García, Alias "Rodrigo Doble Cero".

El postulado, aquí procesado, en sus inicios destacó por su pericia en manejo de armas y como piloto de helicópteros y con el paso del tiempo logró consolidarse como líder paramilitar en otras zonas y departamentos del país como el Catatumbo en el departamento de Norte de Santander en compañía de otros lideres en otras zonas del país como Ramón Isaza, en el Magdalena Medio, Iván Roberto Duque, a. "Ernesto Báez", en el Sur de Bolívar, Rodrigo Tovar Pupo, a. "Jorge 40" en el departamento del Cesar, Adolfo Berrio, a. "El Alemán", en el departamento del Chocó y, Alias "Rodrigo Doble Cero" como líder del Bloque Metro de Medellín; todo esto al tiempo que aumentaba el poderío paramilitar mediante el financiamiento del narcotráfico.

Todo lo anterior permitió finalmente el nacimiento el 18 de abril de 1997 de las Autodefensas Unidas de Colombia, como resultado de la Unión de las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio, las Autodefensas Unidas de Sucre, Antioquia y Córdoba, el Grupo de Tolú, de alias "Cadena", del "Guamo" y de a. "El Alemán".

En el año 1997, Carlos Castaño, renuncia a la dirección política de las AUC, lo que le permitió a Salvatore Mancuso asumir el liderazgo político de la organización, procurando el inicio de un proceso de paz, motivado además por la inclusión de las

[2] "***Artículo 42. DEFINICIÓN**: Se entiende por servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada, la organización de la comunidad en forma de cooperativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperados o miembros dentro del área donde tiene asiento la respectiva comunidad."*

AUC dentro del listado de organizaciones terroristas reconocidas como tal internacionalmente.

La salida negociada al conflicto explorada por las AUC con el liderazgo de Mancuso Gómez se materializó con los que se denominó como Acuerdo de Santa Fe de Ralito, celebrado en el año 2002, seguido por el Acuerdo de Fátima en Santafé de Ralito el 13 de mayo de 2004 y la Agenda de Negociación el 25 de mayo de 2004, lo que permitió que, finalmente, el 10 de diciembre de 2004 se diera la desmovilización del Bloque Catatumbo de las AUC, en la Finca "Brisas de Sardinata", ubicada en el corregimiento "Campo Dos" del municipio de Tibú – Norte de Santander, bajo la comandancia de Salvatore Mancuso Gómez, quien se desmovilizó en compañía de 1433 miembros de ese GAOML.

En síntesis SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, conocido dentro del grupo armado ilegal con los alias de "*Mono Mancuso, Santander Lozada, Uno Quince, Manuel y Triple Cero",* se desmovilizó el 10 de diciembre de 2004, como máximo comandante del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, habiendo militado adicionalmente en los Bloques Norte, Córdoba y Montes de María de esa organización criminal, siendo posteriormente postulado por el Gobierno Nacional el 15 de agosto de 2006 al beneficio de la Ley 975 de 2005.

No obstante lo anterior, el 13 de mayo de 2008 el postulado, aquí procesado Salvatore Mancuso Gómez fue extraditado a los Estados Unidos de Norte América por el delito de Concierto para fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de cocaína, con la intención y a sabiendas que la cocaína se importaría de manera ilegal a los Estados Unidos de América, dentro del periodo comprendido desde 1º de enero de 1997 al 17 de septiembre de 2002, fecha en que se radicó el escrito de acusación formal, por parte de la justicia de los Estados Unidos de Norte América, siendo condenado en consecuencia por ese país el 30 de junio de 2015 a 190 meses de prisión.

En contra del postulado se han emitido cuatro sentencias parciales proferidas por las Salas de Conocimiento de Justicia y Paz, las cuales se encuentra debidamente ejecutoriadas, a saber:

1. Sentencia del 31 de octubre de 2014, proferida por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, bajo el radicado No. 11 001 600 253 2006 80008;

2. Sentencia del 20 de noviembre de 2014, proferida por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, bajo el radicado No. 11 001 225 2000 2014 00027;

3. Sentencia del 13 de diciembre de 2022, proferida por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, bajo el radicado No. 08 001 22 52 002 2020 00007;

4. Sentencia del 7 de octubre de 2024, proferida por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla bajo el radicado No. 8-001-22-52-002-2020-00005-00, las dos últimas con ponencia del suscrito Magistrado.

En ese orden se tiene que, el 27 de febrero de 2019 el Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional (en adelante J.E.S.T.N.) dispuso acumular las penas impuestas contra Salvatore Mancuso en las sentencias transicionales proferidas por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá; para tal efecto, mantuvo la pena alternativa de 8 años de prisión y estableció como penas principales acumuladas 40 años de prisión y multa equivalente a 50.000 SMLMV y la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años.

En la decisión en cita se señaló que la orden de captura emitida por la J.E.S.T.N[3] el 2 de mayo de 2018, que hacía parte del radicado No. 11 001 6000 253 2006 80008, también incluiría el proceso radicado No. 11 001 225 2000 2014 00027 para que, una vez el postulado Salvatore Mancuso Gómez terminara de cumplir su condena en Estados Unidos, fuera trasladado a este país y puesto a disposición de los procesos acumulados con el fin de cumplir la pena alternativa.

El 25 de noviembre de 2019 la J.E.S.T.N, concedió la libertad a prueba al MANCUSO GÓMEZ, por considerar que cumplió la pena alternativa y las obligaciones impuestas en los fallos parciales aludidos, decisión que fue impugnada por la representante de la Fiscalía General de la Nación y por un abogado representante de víctimas.

En consecuencia, el 11 de agosto de 2020 la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia de la Magistrada Alexandra Valencia Molina, al resolver el recurso interpuesto revocó la decisión referida y dispuso librar orden de captura con fines de extradición en contra del postulado Mancuso Gómez, con el fin de garantizar su comparecencia en sede de Justicia y Paz, ordenando además su vinculación a la agencia para la reintegración y la normalización, dentro de los 30 días siguientes a su llegada a Colombia, advirtiendo que una vez cumplido lo ordenado, podría la J.E.S.T.N. pronunciarse sobre el descuento de libertad.

En lo que corresponde a la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2022 por el Magistrado José Haxel de la Pava Marulanda, dentro del trámite de radicado No.

[3] Jueza Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional

080012252002 2020-00007, se tiene que la J.E.S.T.N. no dispuso acumulación jurídica de penas impuestas en la justicia ordinaria.

Posteriormente, el postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ solicitó nuevamente ante la J.E.S.T.N., la concesión de la Libertad a Prueba, petición que fue le fue negada mediante decisión del 6 de marzo 2023, en la que se resolvió *"NEGAR la segunda solicitud de libertad a prueba"* y, "*FIJAR el término de libertad a prueba al postulado condenado parcialmente SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, por cumplimiento a la fecha de los presupuestos establecidos en el inciso 4º del artículo 29 de la Ley 975 de 2004, por un término de 4 años"*; decisión que fue objeto de recursos de reposición y en subsidio apelación, por parte de la defensa del postulado.

En consecuencia, el recurso de alzada fue resuelto mediante decisión del 19 de julio de 2023, por parte de la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá[4], confirmando la decisión apelada en sus numerales 1, 2, 3, 4, 7 y 8.

El 23 de febrero de 2024 la J.E.S.T.N., resolvió acumular la pena condenatoria impuesta al postulado Mancuso Gómez mediante la sentencia del 29 de noviembre de 2022, proferida dentro del radicado No. 080012252002 2020-00007[5], la cual quedó ejecutoriada el 13 de diciembre de 2022. Para tal efecto, mantuvo la pena alternativa de 8 años de prisión, fijó una pena principal definitiva acumulada de 480 meses de prisión y multa equivalente a 50.000 S.M.L.M.V., así como la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 240 meses.

El 27 de febrero de 2024, SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, fue entregado por el personal del Grupo de Control Migratorio Especializado Regional del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá D.C., luego de ser repatriado a este país, en calidad de deportado en un vuelo procedente de Estados Unidos, a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional -DIJIN, por tener orden de captura vigente con fines de extradición y notificación Roja de Interpol, siendo dejado a disposición del Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, quien dispuso librar la correspondiente boleta de encarcelamiento ante la dirección del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Mínima Seguridad de Bogotá COBOG *"LA PICOTA"* Pabellón de Alta Seguridad, donde fue privado de la libertad[6].

Mediante Auto del 4 de marzo de 2024, la referida Juez Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, concedió la libertad a prueba al postulado condenado parcialmente Salvatore Mancuso Gómez por un término de 4 años, no obstante, lo dejó a

[4] Magistrada Ponente, Dra. Alexandra Valencia Molina.
[5] Magistrado Ponente José Haxel de la Pava Marulanda, Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla.
[6] Auto del 4 de marzo de 2024 del Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional.

disposición del Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Mínima Seguridad de Bogotá COBOG "LA PICOTA", donde se encontraba privado de la libertad, con ocasión de las 33 órdenes de captura que tenía vigentes, respecto de igual número de medidas de aseguramiento consistentes en detención preventiva impuestas en otros procesos transicionales parciales que se le adelantan en su contra, en el auto en cita, en el punto cuatro se dispuso lo siguiente:

> *"CUARTO. – ESTABLECER que el término de libertad a prueba del postulado condenado parcialmente SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, empezará a computarse a partir del día siguiente a la fecha en que recobre la libertad, con base en las consideraciones de esta decisión".*

Por otra parte, mediante Auto No. TP – SA 1633 – del 13 de marzo del año 2024, La Sala de Apelación de La Justicia Especial para la Paz – J.E.P.-, admitió a SALVATORE MANCUSO GÓMEZ como compareciente forzoso dentro del trámite de esa jurisdicción, de manera prevalente y exclusiva, precisando que sería compartido con esta jurisdicción de justicia transicional de Justicia y Paz, solo en la etapa investigativa, en el entendido de que Justicia y Paz podría documentar los hechos, escucharlo en versión libre y hacerle la imputación, pero los asuntos relacionados con la libertad del postulado quedaban bajo la orbe de competencia exclusiva de la J.E.P.

Paralelamente, mediante Auto No. 148 del 13 de marzo del año 2024, la Magistratura con Funciones de Control de Garantías del tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, negó la suspensión de las 33 medidas de aseguramiento vigentes en contra de Salvatore Mancuso Gómez, cuya cancelación y/o suspensión había sido solicitada en razón a su nombramiento como como Gestor de Paz por parte del Gobierno Nacional.

Seguidamente, el 20 de marzo de 2024, el Magistrado con Función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá sustituyó la Medida de Aseguramiento de Detención Preventiva intramural por una no privativa de la libertad al postulado Mancuso Gómez, con fundamento en el Fallo de Tutela SU – 429 de la Corte Constitucional, al tiempo que, propuso conflicto positivo de competencias con la Jurisdicción Especial para la Paz con ocasión de lo expresado en el auto TP-SA1633 del 13 de marzo de 2024, emitido por la Sección de Apelaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz del Tribunal para la Paz.

Por su parte la Magistratura con Funciones de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, mediante auto 173 de 3 de abril de 2024, igualmente propuso conflicto positivo de competencias con la J.E.P., porque, en su criterio, la providencia TP-SA-1633 de 2024, de la Sección de apelación del Tribunal para la Paz de la JEP, vulneraba el principio del juez natural por pretender sustituir el régimen aplicable de Justicia y Paz que estimó, había venido operando de manera

satisfactoria y desconocer los derechos de las víctimas, en especial, la posibilidad de acceder a una indemnización económica decretada por un juez.

Mientras tanto, mediante decisión del 15 de abril de 2024, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Sub-Sala Especial de Decisión y Conocimiento, de la J.E.P., negó la Libertad Transitoria, Condicionada y Anticipada, solicitada ante esa jurisdicción especial por parte del abogado defensor de Salvatore Mancuso Gómez.

El de 9 de mayo de 2024, el Magistrado con Funciones de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, sustituyo 57 Medidas de Aseguramientos de Detención Preventiva Intramural proferidas en contra del Postulado Mancuso Gómez por una no privativa de la libertad.

Por su parte, el Juzgado de Ejecución de Sentencias del Territorio Nacional de Justicia y Paz, el 21 de mayo de 2024 propuso conflicto positivo de competencia entre jurisdicciones, entre ese Juzgado y la Jurisdicción Especial para la Paz; en consecuencia, suspendió todas las actuaciones que le correspondería verificar en sede de ejecución de sentencias a partir de esa fecha, respecto del postulado Salvatore Mancuso Gómez, hasta tanto la H. Corte Constitucional dirimiera la colisión propuesta.

Finalmente, la Honorable Corte Constitucional mediante Auto 1319 del 8 de agosto de 2024, resolvió los conflictos de competencia entre jurisdicciones planteados de la forma descrita en párrafos precedentes, señalando que **la competencia para investigar, juzgar y, si es del caso, sancionar a Salvatore Mancuso Gómez como máximo responsable de violaciones a Derechos Humanos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario se encuentra radicada en esta jurisdicción especial de Justicia Transicional de Justicia y Paz.**

Finalmente se advierte que, con ocasión a que el 4 de marzo de 2024 la Juez de Ejecución de Sentencias de Justicia y Paz del Territorio Nacional, le concedió la libertad a prueba al postulado Salvatore Mancuso Gómez por 4 años y libró boleta de libertad, esta se hizo efectiva el 10 de julio de 2024, fecha desde la cual se encuentra en libertad vigilada.

III. ACTUACIÓN PROCESAL.

1. ETAPA ADMINISTRATIVA.

El Gobierno Nacional dentro del marco del proceso de paz adelantó diálogos con los miembros del Grupo Organizado Armado al Margen de la Ley – GAOML- denominado Autodefensas Unidas de Colombia – A.U.C.-, en aras de lograr un proceso de reconciliación que permitiera no solo la desmovilización del grupo ilegal, sino también su sometimiento a la justicia y la resocialización de sus miembros.

Como consecuencia de lo anterior inicialmente tuvo lugar una fase de acercamiento que dio lugar al acuerdo del Nudo de Paramillo y posteriormente, el 24 de noviembre de 2002, a la declaración de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- de tener voluntad para lograr su desmovilización.

Concluida la fase de acercamiento y la fase exploratoria, la cual tuvo lugar desde el 4 de diciembre de 2002, el 15 de julio de 2003 se suscribió el Acuerdo de Santa Fe de Ralito[7], donde se reiteró por parte del GAOML el propósito de avanzar hacia su reincorporación a la vida civil, comprometiéndose a desmovilizar la totalidad de sus miembros, en un proceso gradual. El Gobierno, por su parte, se comprometió a adelantar las acciones necesarias que les permitieran reincorporarse a la vida civil[8].

En ese orden, surtido la etapa de negociación, se declaró abierto el proceso de diálogo, negociación y firma de acuerdos conforme el contenido del artículo 3 de la Ley 782 de 2002.

En lo que respecta al que fuera conocido como *"Frente Contrainsurgencia Wayúu"*, perteneciente al Bloque Norte de las AUC, estructura con la que se desmovilizó, se tiene que ésta se realizó de manera colectiva en dos fases: la primera, el 8 de marzo del año 2006, en el corregimiento de *"Chimila"* del municipio El Copey (departamento del Cesar); y la segunda, en marzo 10 del año 2006, en el caserío *"El Mamón"*, ubicado en la vereda de La Mesa, municipio de Valledupar (departamento del Cesar).

En síntesis, el 4 de agosto del 2005 el Ministerio del Interior y de Justicia mediante Resolución No. 199, reconoció a Rodrigo Tovar Pupo como miembro representante del Bloque Norte, quien presentó para efecto de la desmovilización, dos listas de integrantes para ser desmovilizados en dos fases. Fue así como el Ministerio del Interior y de Justicia, a través de las resoluciones 017 del 26 de enero del 2006 y 041 del 17 de febrero de ese mismo año, creó dos zonas de ubicación, una en el Caserío El Mamón de la vereda la Mesa de Valledupar, y otra en el Corregimiento Chimila de El Copey, ambos en el departamento del Cesar.

En virtud de lo anterior la desmovilización de esta importante estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia A.U.C., se realizó en dos fases: La primera realizada el 8 de marzo de 2006, en cumplimiento de la Resolución de la Presidencia de la República Número 014 del 17 de febrero de 2006, mediante la cual se determina como zona de ubicación temporal para los integrantes del Bloque Norte, el corregimiento de *"Chimila",* ubicado en el municipio de El Copey, departamento del Cesar; y La segunda fase, en marzo 10 de 2006, conforme se dispuso en Resolución de la Presidencia de la República No 016 del 26 de enero de 2006, mediante la cual se determina como zona de ubicación temporal para los integrantes del Bloque Norte,

[7] Carpeta denominada "Acuerdo Santa Fe de Ralito
[8] Fol. 30 carpeta "*desmovilización de bloque – mal llamado Bloque Resistencia Tayrona"*

el caserío *"El Mamón",* ubicado en la vereda de La Mesa, municipio de Valledupar, departamento del Cesar.

Con el Bloque Norte se desmovilizaron 2.215 miembros relacionados en el listado suscrito por su miembro representante Rodrigo Tovar Pupo, el cual fue aceptado por el Gobierno Nacional el 16 de marzo de 2006.

Al momento de la desmovilización el grupo armado ilegal por conducto de su miembro representante hizo entrega de 625 armas, 378 granadas, 99 radios portátiles, 1 radio base; 5 vehículos automotores y 6 motocicletas.

Posteriormente se remitió a la Fiscalía General de la Nación la lista de miembros desmovilizados suscrita por el miembro representante del GAOML y aceptada de conformidad con lo establecido con el Decreto 3360 del 2003 mediante la comunicación 106 del 9 de febrero del 2006; adicionalmente el 17 de abril del 2006 se remitió un listado de las 1.107 personas desmovilizadas colectivamente a la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la FGN, y, mediante oficio del 17 de abril de 2006 fue remitida la relación del armamento entregado al momento de la desmovilización.

El postulado de este proceso, SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, presenta la siguiente situación dentro de esta etapa administrativa soportada con los Documentos presentados por la Fiscalía 10 Especializada de Justicia Transicional.

Tal y como se anotó en párrafos anteriores SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, conocido dentro del grupo armado ilegal con los alias de "*Mono Mancuso, Santander Lozada, Uno Quince, Manuel y Triple Cero",* se desmovilizó el 10 de diciembre de 2004, como máximo comandante del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, habiendo militado adicionalmente en los Bloques Norte, Córdoba y Montes de María de esa organización criminal, siendo posteriormente postulado por el Gobierno Nacional el 15 de agosto de 2006 al beneficio de la Ley 975 de 2005.

- **Acreditación de la calidad de postulado:**

La acreditación de la calidad del postulado ya ha sido expuesta con suficiencia a lo largo de las 4 sentencias parciales condenatorias que se han proferido en sede de Justicia y Paz en contra del aquí procesado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, con ocasión a su postulación por parte del Gobierno Nacional, la cual tuvo lugar el 15 de agosto de 2006, como candidato a obtener los beneficios punitivos contemplados en la Ley 975 de 2005 y demás normas complementarias y adicionales, a cambio su sometimiento y resocialización, cumpliendo las obligaciones impuestas por la referida ley sobre los pilares de verdad, justicia, reparación y garantías de no

repetición de las conductas delictivas en las cuales estuvo incurso durante y con ocasión de su pertenencia en el GAOML[9].

2. ETAPA JUDICIAL.

Una vez se culminó el proceso de desmovilización, se iniciaron las diligencias de versión libre ante la Fiscalía Delegada para la Justicia y la Paz de la Fiscal General de la Nación.

Tal y como se anotó en acápites anteriores, en contra del postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ se han proferido cuatro sentencias parciales por parte de las Salas de Conocimiento de Justicia y Paz, las cuales se encuentra debidamente ejecutoriadas, a saber: 1. Sentencia del 31 de octubre de 2014, proferida por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, bajo el radicado No. 11 001 600 253 2006 80008; 2. Sentencia del 20 de noviembre de 2014, proferida por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, bajo el radicado No. 11 001 225 2000 2014 00027; 3. Sentencia del 29 de noviembre de 2022, proferida por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, bajo el radicado No. 08 001 22 52 002 2020 00007; 4. Sentencia del 7 de octubre de 2024, proferida por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla bajo el radicado No. 8-001-22-52-002-2020-00005-00, las dos últimas con ponencia del suscrito Magistrado.

No obstante, el postulado Mancuso Gómez ha continuado rindiendo diligencias de versiones libres confesando su participación en hechos delictivos cometidos durante y con ocasión del conflicto armado colombiano, que en consecuencia fueron objeto de formulación de imputación ante el competente Magistrado con funciones de Control de Garantías de esta Sala de Justicia y Paz, y la consecuente imposición de medida de aseguramiento, tal y como se anotó en acápites anteriores.

---

[9] **1.-** Acuerdo Santa Fe de Ralito.
2.- Resolución Presidencial No. 199 del 4 de agosto de 2005, donde se reconoce a **RODRIGO TOVAR PUPO** como miembro representante de las AUC.
3.- Resolución Presidencial No. 017 del 26 de enero de 2006, donde se crea como zona de ubicación temporal para los miembros del Bloque "Norte", caserío El Mamón, vereda La Mesa, del municipio de Valledupar – Cesar.
4.- Fotografías relacionados con la desmovilización de **RODRIGO TOVAR PUPO** y los miembros del Bloque "Norte", el 8 de marzo de 2006.
5.- Escrito dirigido al Alto Comisionado para la Paz, donde, solicita su postulación para acogerse al procedimiento y recibir los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005.
6.- Oficios suscrito por los Doctores **CARLOS HOLGUIN SARDI Y FABIO VALENCIA COSSIO**, para ese entonces, Ministros del Interior y Justicia, dirigido al Dr. **MARIO GERMÁN IGUARÁN ARANA**, entonces Fiscal General de la Nación, donde le envía un listado de las personas desmovilizadas de las Autodefensas Unidas de Colombia.
7.- Actas de Reparto No. 142 del 18-01-2008, No. 063 del 17-08-2007, No. 097 del 28-10-2007, No. 239 del 06-06-2008 y No. 326 del 25-08-2008, de la entonces Jefatura de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, donde se le asigna a la Fiscalía 9 Delegada, los postulados pertenecientes al Bloque "Norte.
8. Orden de inicio No. 12 del 01-02-2008, No. 16 del 16-05-2008, No. 38 del 28-10-2007, sin número del 28-08-2008, donde la Fiscalía 9 Delegada da inicio al trámite judicial a efectos de cumplir el procedimiento de la ley 975 de 2005 con relación al postulado.
9.- Edicto Emplazatorio a las víctimas de las conductas punibles atribuibles al postulado, publicados debidamente**.**

En efecto, la Magistratura de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de esta ciudad, celebró audiencia de formulación de imputación contra el postulado Salvatore Mancuso Gómez los días 31 de enero y 1 de febrero de 2023.

De la misma manera, se realizó audiencia Preliminar de Imposición de Medida de Aseguramiento ante el Magistrado con Funciones de Control de Garantías ya señalado.

Culminada la imputación de cargos antes referida, se radicó ante esta Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, solicitud de audiencia concentrada con 119 hechos para formulación de cargos en contra del postulado, por parte de la Fiscalía Décima Delegada de la Fiscalía General de la Nación.

En ese orden, se inició la audiencia concentrada de *"Formulación y Aceptación de Cargos"* el 19 de noviembre de 2024 y, en el transcurso de la actuación procesal fueron retirados dos (2)[10] hechos por el ente investigador, culminando el proceso con **117 cargos formulados** al mencionado postulado; posteriormente se llevó a cabo en Riohacha – La Guajira, el Incidente de Reparación Integral a las Víctimas, donde los días 7, 8, 9, 10 11,15,16 y 17 de julio de 2025; se agotó la presentación de las pretensiones realizadas por parte de los representantes de víctimas y se procedió a realizar etapa conciliatoria con el postulado MANCUSO GÓMEZ.

La Sala realizó el trámite incidental de manera presencial, con trasmisión virtual en favor de las víctimas que, no les fue posible trasladarse al lugar destinado[11] para la realización de la diligencia, con el propósito de buscar en las diversas sesiones de audiencia un acercamiento a la reparación integral, contando de esta manera con la contribución del excomandante SALVATORE MANCUSO GOMEZ ex integrante de las AUC, y se les concedió a las víctimas un espacio para que indagar al postulado en la búsqueda de la verdad.

En ese orden, se contó con los relatos de las víctimas y el perdón del postulado, contando con la participación voluntaria en la audiencia de varios núcleos familiar de la etnia Wayuu, asesoradas por psicólogos de la Defensoría del Pueblo, tales como: la familia Puchaima, Bravo, Deluque Castro, Florez, Valmiera, Ojeda Toro, Gámez, Berrío Toro, Deluque Monjía y Romero, entre otras; quienes buscaban obtener la verdad que en los trámites de Justicia Transicional constituye un pilar fundamental, significativo y transcendental en el proceso de perdón, aunque muchas veces esa verdad, jamás borra el sufrimiento causado a esas víctimas directas e indirectas.

[10] Hechos No 20 y 86 del Patrón Macrocriminalidad de Homicidio.
[11] Auditorio del Palacio de Justicia-Riohacha –La Guajira.

IV. CONTEXTO.

Para esta Sala de Conocimiento es necesario hacer un recuento del contexto (geográfico, socio-económico y cultural), génesis, estructura y evolución del grupo armado ilegal llamado Bloque Norte de las AUC, como quiera que a ésta estructura finalmente perteneció el denominado **"Frente Contrainsurgencia Wayuu**", sobre el cual ejerció control y liderazgo el postulado en razón a su condición de comandante del referido Bloque Norte de las AUC, para efecto de su desmovilización, procesado a través de las presentes diligencias, a fin de realizar una adecuada y exhaustiva descripción de las circunstancias que rodearon a cada uno de los hechos cometidos por ese Grupo Organizado al Margen de la Ley, por cuanto surge la obligación de buscar la verdad de todo lo ocurrido frente a la grave violación a los Derechos Humanos mediante la comisión de delitos de Lesa Humanidad y que vulneran el Derecho Internacional Humanitario, los cuales serán objeto de pronunciamiento en esta providencia.

De conformidad con lo anterior, teniendo en cuenta la información incorporada al proceso en las múltiples audiencias llevadas a cabo, se esbozarán los aspectos relevantes atinentes al contexto del Bloque Norte de las AUC y sus respectivos frentes. Así:

Tal y como señaló la representante del ente instructor desde el inicio de su presentación en la década de los años setenta, las guerrillas de izquierda querían consolidarse y justificar su aparición en Colombia, a través de la estrategia de ganarse la simpatía del campesinado. Ante esta expansión de las guerrillas el estado colombiano desarrolló la estrategia denominada Doctrina De Seguridad Nacional, Plan Lazo en 1962, mediante el cual se intentó reducir los últimos grupos de guerrilleros liberales, como también los nuevos grupos armados de ideología marxistaleninista. Con el accionar de estos grupos guerrilleros de izquierda, tales como las FARC, el ELN, el EPL y el M-19, que se expandieron y empezaron a hacer presencia en zonas con ausencia institucional del Estado, el gobierno de la época reaccionó y creo el Estatuto de Seguridad y Defensa de la Democracia, expedido en 1978, a través del cual se combatió a los grupos guerrilleros mediante la organización de la "defensa nacional" y se crearon mecanismos para garantizar la "defensa civil" y la creación de "autodefensas". Con estas normas, las fuerzas militares de Colombia instruyeron y dotaron de armas a civiles en las zonas de presencia subversiva, con la finalidad de vincular a la población civil en el conflicto y que apoyaran a las fuerzas militares en la derrota de los grupos subversivos.

Los grupos guerrilleros se expandieron en el territorio nacional y llegaron a la costa atlántica, y se establecieron de la siguiente manera en los departamentos:

Departamento/ Grupo	FARC-EP	ELN	ERP
CÓRDOBA	Frente 5,18,58,35		
GUAJIRA	Frente 59	Frentes, Luciano Ariza, Gustavo Palmesano Ojeda y Compañía Augusto Montes.	Frente CHE Guevara
SUCRE	Frente 35 y 37		Compañía Mariscal Sucre
MAGDALENA	Frente 19	Frentes Francisco Javier Castaño y domingo Barrios	
CESAR	Frente 41	Frentes 6 de diciembre y José Manuel Martínez Quiroz	
BOLIVAR	Frente 37	Frente Jaime Bateman Cayón	Compañía Edwin Buelvas
ATLÁNTICO		Frente Kaleb Gómez y Redes Urbanas José Antequera	l

Estas estructuras guerrilleras para efecto de su financiación se interrelacionaron con las actividades económicas del territorio donde llegaron y además obtuvieron fuentes de ingreso en actividades ilegales como el secuestro (que fue una de las principales acciones sobre la población civil hasta mediados de 1992), también la extorsión a diversas actividades económicas o comerciales, como por ejemplo a los sectores ganaderos, agrícolas, petroleros, energético y mineros; también se financiaron del narcotráfico que en un principio incursionaron colocando un impuesto para luego terminar involucrados en todas las fases de la producción y negocio de la cocaína.

Frente a esta situación los ganaderos del Departamento de Córdoba no fueron ajenos, por lo que, el entonces ganadero y comerciante Salvatore Mancuso Gómez, quien para el año de 1992, siendo acosado por la extorsión de un reductos del grupo subversivo EPL – Frente Pedro León Arboleda, en su finca Campamento de Tierralta – Córdoba, decidió hacerle el seguimiento al grupo que había llegado hasta su finca a extorsionarlo y una vez ubicado, dio la información al Ejército Nacional, institución que los emboscó y dio de baja a los tres subversivos; a raíz de esta acción su fama en la región se acrecentó por haber enfrentado a la guerrilla, e inició de esta manera su propio grupo de autodefensas; organizó a los ganaderos y propietarios de finca, a fin de mantenerse comunicado con las autoridades, su fama sobre la margen derecha del Rio Sinú creció tanto que llamó la atención de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, quienes para esa fecha ya integraban un grupo armado ilegal que combatía a la subversión y hacían presencia en la margen izquierda del Rio Sinú, al punto que fue llamado para que se uniera a ellos y así unificar criterios y establecer la estrategia de un mando único, Salvatore Mancuso escuchó la propuesta y la aceptó; fue así como para mediados del año 1994, después de la muerte de Fidel Castaño ocurrida a mediados de enero de ese mismo año, se crean las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá), las cuales estaban dirigidas por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, éstas en su intención de expandirse incursionaron en la Costa Atlántica colombiana bajo el supuesto exclusivo de combatir los Frentes “6 de Diciembre” y “José Manuel Martínez Quiroz” del E.L.N., y las células de las

F.A.R.C. que operaban en la Serranía del Perijá y sus municipios aledaños, en el departamento del Cesar.

Las guerrillas de las FARC derrotadas en Urabá y Córdoba, se desplazaron hacia el departamento de Sucre con los Frentes 35 y 37, el primero se ubicó en la región de la Mojana y el segundo en la región de los Montes de María, en donde rápidamente comenzaron a protagonizar secuestros bajo las órdenes de Alfonso Arango y Plinio Zambrano alias "Curruco", también operaron en la zona el ELN con el bloque Jaime Bateman Cayón y el Ejército Revolucionario del pueblo (ERP) con la compañía Ernesto Che Guevara, ejerciendo una fuerte presión sobre las economías locales, especialmente sobre los dueños de fincas y ganaderos a quienes amenazaban, secuestraban y extorsionaban. Las FARC en Bolívar llegaron a la Serranía de San Jacinto, se concentraron en el Carmen y su zona rural hasta María La Baja; se extendieron luego por el oriente hacia el río Magdalena, en Zambrano, El Guamo y Córdoba Tetón y vía a Cartagena a los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto. También coparon Ovejas, La Unión, Corozal, Colosó e incluso, hacia el sur en San Benito Abad en Sucre.

A su vez el 15 de marzo de 1999, Carlos Castaño Gil en entrevista al periódico El Tiempo anuncia lo que sería el comienzo del desarrollo de una estrategia a largo plazo con el propósito de tomar el control del territorio del oriente colombiano, los departamentos Norte de Santander y Arauca, siendo los objetivos desplazar las acciones subversivas que hacían presencia allí del ELN, FARC y EPL.

- **GÉNESIS DEL BLOQUE NORTE DE LAS A.U.C.**

Los primeros referentes del paramilitarismo en la zona de Montes de María y su entorno, están ligados a la aparición del narcotráfico y su estructura armada privada, la cuales comenzaron a usar el Golfo de Morrosquillo como una de las principales salidas de drogas ilícitas especialmente de cocaína hacia el exterior. La presencia de la mafia se vio reflejada en la adquisición de tierras, las cuales fueron usadas como zonas de recreo y refugio para algunos capos, basta recordar en este sentido la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha alias El Mexicano, la cual ocurrió en medio de una persecución de la Policía Nacional entre Tolú y Coveñas (localidades costeras de Sucre), en diciembre de 1989.

El Bloque Córdoba estuvo en cabeza de Salvatore Mancuso, pero éste no nació desde su vinculación a las autodefensas, pues primero fue creado el Bloque Norte liderado por Mancuso Gómez, y dentro de éste se manejaba la compañía Córdoba, que posteriormente a principios de 1997 fue constituido como Bloque Córdoba, Sinú y San Jorge.[12]

[12] Versión Libre SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, enero 15 de 2007.

Carlos Castaño, ideo una estrategia y le dijo a Mancuso sobre la ampliación de la cobertura de las Autodefensas y la creación del Bloque Norte conformándolo multiplicando las Convivir en todas las aéreas y recibiendo apoyo de los frentes de Autodefensa que estaban en el área ya que en determinado momento los decretos que legalizaban las convivir se caerían y tendrían que desembocar su mayoría en las Autodefensas, entonces comienza Mancuso Gómez con la misión de multiplicar las convivir en todo el norte de Colombia.

En el año 1995, Salvatore Mancuso, haciendo parte de las ACCU y pasando como prospero ganadero crea como fachada la "Convivir Nuevo Horizonte" que operaba en el municipio de Tierralta (Córdoba), fungiendo como representante legal según la resolución 1732 del 19 de diciembre de 1995, con el personal que hacía parte del grupo especial, modelo que extendió con los Castaño Gil en Sucre con Francisco Javier Piedrahita, Salomón Ferris Chadid Alias "08", con "La Convivir Nuevo Amanecer" y la "Convivir Orden y Desarrollo" siendo integrante Rodrigo Antonio Mercado Pelufo Alias "Cadena", "Convivir Nueva Esperanza En Bolívar", "Sociedad Montes De María" (zona Zambrano y el Guamo). "Asociación Esperanza Futura" (en cabeza de Álvaro Botero Maya, en Magangué- Bolívar)[13].

Con el transcurrir del tiempo, las nacientes ACCU, fueron haciendo su expansión territorial hacia otras zonas del departamento de Córdoba y demás departamentos de la costa norte del país, a través de la creación del Bloque Norte, fue así como para el primer semestre del año de 1996, inician la expansión antisubversiva y se crea o nace la Compañía Córdoba, tal y como se anotó precedentemente, con presencia en Montería, Tierralta y Valencia, cuyo comandante es alias "Cobra", quien tenía bajo su mando a 150 hombres. La sección Sucre con presencia en Ovejas cuyo comandante es alias "Maicol" con 30 hombres, la sección Sucre y Bolívar, con presencia en Toluviejo y el Guamo, cuyo comandante es alias "Bateman" con 30 hombres, posteriormente al Guamo llegó Edwin Manuel Tirado Morales alias "El Chuzo" y después Sergio Manuel Córdoba Ávila alias "El Gordo", la sección Bolívar con presencia en MAGANGUÉ, cuyo comandante es Elkin con 30 hombres.

Desde principios de la década de los noventa y hasta el año de 1996, la presencia de estas estructuras fue esporádica, delinquían en pequeños grupos y con misiones específicas, no se puede decir que estaban asentadas en la zona y mucho menos que controlaban territorios, por el contrario, la guerrilla venía delinquiendo en los Montes de María desde mediados de la década de los ochenta, teniendo una importante presencia que se extendía desde las zonas más montañosas a las áreas planas. Los frentes 35 y 37 de las FARC, el Bloque "Jaime Batemán Cayón" del ELN y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) con la compañía Ernesto Che Guevara, ejercían una fuerte presión sobre las economías locales, especialmente sobre los dueños de fincas y ganaderos a quienes amenazaban, secuestraban y extorsionaban.

[13] Listado de convivir sucre BRIM 1.

En los años 1996 y 1997 se dieron sendas reuniones, la primera en la ciudad de Medellín entre miembros de las elites locales de Sucre y Córdoba, la segunda en la Finca las Canarias de Sincelejo y Salvatore Mancuso, en las que se decidió la conformación de un grupo de autodefensas que entraría a delinquir financiado con las cuotas que aportaban los dueños de fincas y ganaderos. En esta época la influencia del narcotráfico fue notoria, algunos capos compraron tierras en municipios Sucreños como San Onofre, Palmitos, Tolú, Tolú viejo y Coveñas. De esta manera la oferta de seguridad de los grupos paramilitares fue complementada por la consolidación y protección de corredores de tráficos de drogas ilícitas.

Los grupos de autodefensas en el Departamento de Sucre, según afirmó Salvatore Mancuso Gómez, hubo una reunión en Medellín en 1.996, donde estuvieron Joaquín García (ganadero), Miguel Nule Amin (Ganadero y político), Juan Vélez, Javier Piedrahita, Elías Vélez, Antonio Correa, Edward Cobos Téllez Alias *"Diego Vecino"*, Administrador de la Finca las Melenas y otras 50 personas más, el objetivo era implementar el fenómeno de las CONVIVIR en el área, con miras a recoger informaciones para darle a las Fuerzas Militares, Policía, Ejercito y prestar sus hombres para ajusticiar a las personas comprometidas con las organizaciones subversivas, lo cual no podía hacer la fuerza pública[14].

Para el primer periodo del año de 1996, Salvatore Mancuso, integrante de las Autodefensas Córdoba y Urabá ACCU, liderada por los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, se reunió en varias ocasiones con ganaderos del departamento del Cesar para que enviaran un grupo de Autodefensas a los departamento del Cesar y el Magdalena, debido a que varios ganaderos de estos dos departamentos estaban siendo azotados por extorsiones que le hacían los grupos Subversivos; es así cuando en el mes de julio de ese mismo año 1996, los hermanos CASTAÑO GIL, bajo la coordinación de Salvatore Mancuso, envían un grupo de 25 hombres comandados por Rene Ríos González alias "Santiago Tobón", quien decide dividir este personal en dos grupos, donde envió unos al departamento del Magdalena, al mando de alias "Baltazar", y el otro grupo fue enviado al departamento del Cesar, bajo el mando de Martin Alberto Camelo Medina alias "El Negro Medina". Es así como se inicia el accionar de las autodefensas en los departamento del Magdalena y Cesar y lo que posteriormente se conocería como Bloque Norte, este grupo realizaba acciones denominadas tipo *"avispa"*, ya que eran pocos hombres para los dos departamentos y además era necesario hacerle creer a la guerrilla que en la zona tanto del Cesar como del Magdalena, el grupo se expandía rápidamente y con gran pie de fuerza armada, razones por las que realizaban ofensivas en diferentes sitios de manera concertada, armónica, planeada y lo más importante simultánea.[15]

Para el segundo semestre del año 1996, la Compañía Córdoba se convierte en frente Córdoba y las autodefensas continúan con la expansión en los departamentos de

[14] Versión Libre SALVATORE MANCUSO GÓMEZ.
[15] Diligencia de Versión Libre de Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez, alias El Pájaro, ante fiscalía 31 UNJYP

Sucre (Sincelejo, Chinú, Tolú Viejo, Corozal, sector la Mojana y Guaranda), algunos Municipios de Bolívar (como el Guamo, San Pedro, Magangué.

El 30 de noviembre de 1996, en el municipio del Guamo Bolívar se presentó la masacre de cuatro personas, hecho que se le atribuye al Grupo de Autodefensa que delinquía en esa zona. De otra parte, el grupo que ilegal que operaba en Sucre, el 4 de diciembre de 1996 incursionaron en el corregimiento de Pichilín asesinando a 4 personas y en el municipio de Colosó masacraron a 11 habitantes.

El grupo del Cesar que a finales de 1996 se consolida y es comandado por el señor Juan Andrés Álvarez, conocido como alias "Daniel" fue denominado frente *"John Jairo López".*

En aras de lograr el control territorial de esta zona, se perpetraron incursiones que arrojaron como resultados grandes masacres como son la de Medialuna, Los Brasiles y San Diego en el departamento del Cesar, Monterrubio en el departamento del Magdalena, Villanueva en el departamento de La Guajira.

En el año de 1997, el Frente Córdoba se convierte en el Bloque Sinú – San Jorge, con presencia en los Municipios de Montería, Valencia (Frente Abibe), Tierra alta y el corregimiento de Tierradentro en Montelíbano, (Frente Sinú), Montelíbano y Puerto Libertador (Frente San Jorge), para esta fecha el grupo ya tenía 600 hombres en sus filas.

Entre tanto en la zona del Guamo desde 1997 hasta 1999 este grupo fue comandado por Edwin Manuel Tirado Morales Alias "El Chuzo", y a partir de 1999 hasta 31 de julio de 2002 comandado por Sergio Manuel Córdoba Ávila, Alias "120" o "El Gordo", quienes rendían cuentas a Salvatore Mancuso Gómez, como consecuencia de la captura de alias 120 en julio de 2002, esta estructura y zona de injerencia fue asumida desde el mes de octubre de 2002 por Banquéz Martínez, fecha a partir de la cual al grupo lo autodenominan frente Canal del Dique, comandado por alias "Juancho Dique".

En el departamento del Magdalena, Salvatore Mancuso Gómez y su grupo, con el fin de ganar el control territorial, hacen presencia en la región de Fundación, Aracataca y la Zona Bananera con un grupo al mando de Edgar Córdoba Trujillo, alias "Virgilio" quien encuentra en la zona un grupo independiente de Autodefensas conocido como "El Grupo de Los Rojas", presionando a dicho grupo para que formaran parte de sus estructuras, habiéndose negado en ese momento el comandante militar Rigoberto Rojas Mendoza, a pesar de la intermediación de Salvatore Mancuso, decidieron dejar el sector, debido a la desavenencias con los comandantes de las ACCU, tomando el control total de la zona el grupo Víctor Villareal de las ACCU, liderado por Edgar Córdoba Trujillo, alias "Virgilio".

En la zona del sur del Cesar, ya se encontraba un grupo de autodefensas, el cual era comandado por Martin Velasco Galvis alias "Jimmy", este grupo tenía como zona de influencia los municipios de Pailitas, Curumaní, Astrea y Tamalameque; y venía realizando acciones coordinadas con Rene Ríos González alias "Santiago Tobón", quien para esa época era el coordinador del Bloque Norte.

En enero de 1997 Rodrigo Tovar Pupo alias JORGE 40 acompaña a Salvatore Mancuso, en su primera visita al Cesar a pasarle revista al grupo comandado por alias "El Negro", la cual se realizó en una finca de la región de Verdecía, allí se encontraba el comandante Rene Ríos González.

Alias "El Negro Medina" fue dado de baja para el mes de febrero por la misma organización a manos de Rene Ríos González por órdenes de Salvatore Mancuso Gómez.

El 23 de marzo de 1997 en el corregimiento de El Salado Carmen de Bolívar, las autodefensas campesinas toman y masacran a 4 campesinos y a una profesora, hecho que ocasiona el desplazamiento masivo de toda la población, que intentó retornar, fallidamente, el 30 de junio de 1997.

En el año 1997 las estructuras de las ACCU en la región norte del país, bajo la dirección de Salvatore Mancuso estaban conformadas de la siguiente manera:

En el departamento de Sucre existieron dos Grupos, uno al norte al mando de Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, Alias "Cadena" con injerencia en los municipios de Tolú, Toluviejo y San Onofre, con 80 hombres en armas y otro en el sur denominado La Mojana bajo el mando de Eder Pedraza Peña Alias Ramón Mojana, con 40 integrantes.

En el departamento de Bolívar el grupo del Guamo cuyo comandante era Edwin Manuel Tirado Morales alias EL CHUZO, con 40 Hombres y el grupo de MAGANGUE comandado por alias OMEGA, Magangué, San Pedro Sucre, con 40 Hombres.

A finales del año Rene Ríos González alias "Santiago Tobón" continúa como jefe de finanzas y nombran coordinador a Lino Ramón Arias Paternina alias "José María" o "36", luego el señor Hernán De Jesús Fontalvo alias "El Pájaro" le entrega la comandancia al señor JUAN ANDRÉS ÁLVAREZ, conocido como alias "Daniel".

En 1998 Oscar José Ospino Pacheco alias "Tolemaida" pasó a ser comandante de una "urbana móvil" que tenía como base Magdalena, pero operaba hacia el Cesar, en las zonas de Bosconia, cuatro vientos, loma, Potrerillo y Atillo.

El 10 de febrero de 1998 cuando regresaba de la región de Codazzi hacia Valledupar en la salida hacia La Paz, fue capturado Rodrigo Tovar Pupo alias "Jorge 40" en un retén de la policía y permaneció 4 días en las instalaciones del batallón La Popa donde fue dejado en libertad junto a sus escoltas, episodio que lo presionó tanto por ser rotulado como un cabecilla paramilitar obligándolo a pasar a la clandestinidad.

El 13 de diciembre de 1998 es asesinado en una operación militar el comandante JUAN ANDRES ALVAREZ alias DANIEL, por lo cual se denominó en honor a su nombre desde ese momento el "FRENTE JUAN ANDRES ALVAREZ**"**, nombrando comandante a John Jairo Esquivel Cuadrado alias "El Tigre".

En enero de 1999 hace su ingreso al grupo de Autodefensas Golfo de Morrosquillo, Edward Cobos Téllez, Alias "Diego Vecino", quien asumió como comandante de lo que posteriormente se denominó Bloque héroes de los Montes de María, compartiendo mando con Rodrigo Antonio Mercado Peluffo Alias "Cadena".

Se tiene que el 15 de Marzo de 1999, Carlos Castaño Gil en entrevista al periódico El Tiempo anuncia lo que sería el comienzo del desarrollo de una estrategia a largo plazo con el propósito de tomar el control del territorio del oriente colombiano, los departamentos Norte de Santander y Arauca, siendo los objetivos desplazar las facciones subversivas que hacían presencia allí del ELN, FARC y EPL[16].

Entre CARLOS CASTAÑO GIL y SALVATORE MANCUSO GÓMEZ para ese mes de marzo de 1999 convocaron al sitio Los Guayabos, Vereda Velitas, Corregimiento Palmira, del Municipio de Tierra Alta, Córdoba, a un selecto grupo de comandantes de las autodefensas de Córdoba y Urabá con alguna experiencia para que recibieran reentrenamiento y asumieran la responsabilidad de comandar los pelotones o contraguerrillas de lo que sería el Bloque Catatumbo. Según Isaías Montes Hernández alias "Junior" o "Mauricio", que junto al comandante a. "44" y acompañados de los comandantes Camilo y Mauro, a principios de marzo, los mandaron a reentrenamiento en una escuela de El Guamo (Bolívar) y a los cinco días los devuelven a la Finca La 35 en La Acuarela, Urabá, donde entrenaban bajo la dirección de "Doble Cero" y el comandante de la escuela alias "JL" preparaban a los comandantes, el curso duró 45 días y donde estuvieron conocidos de él, alias "El Cura", "Yunda", "El Pollo de Urabá", y alias "Cobra" quien ocupó el primer puesto, y otros 30 o 40 hombres[17].

Terminado el curso en los primeros días del mes de mayo de 1999 se concentran en el sitio Los Guayabos, Vereda Velitas, Corregimiento Palmira, del Municipio de Tierra Alta, Córdoba, incluyendo los hombres que se prepararon en la escuela de El Guamo (Bolívar).

[16] Publicación del periódico El Tiempo del 15/03/1999.
[17] Versión ISAIAS MONTES HERNANDEZ, del 12/03/2008.

SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, desde Montería asume el mando superior de la estructura; mientras que destacó para liderar el grupo en el terreno al ex capitán del ejército nacional Armando Alberto Pérez Betancourt alias "Camilo", seguidamente a bordo de camiones atraviesan de extremo a extremo la costa Norte de Colombia, llegando al municipio Pelaya, departamento de Cesar.
En la finca La Alianza del municipio de Pelaya, Cesar, duraron aproximadamente cinco días, allí recibieron apoyo de las siguientes estructuras:
Cuarenta hombres más, con dos comandantes del Bloque Norte de Jorge 40 o Rodrigo Tovar Pupo, al mando de Jefferson Enrique Martínez López Alias "Omega".

- Cincuenta hombres de las ACCU, que tenían injerencia en el Sur de Bolívar, al mando de Rodrigo Pérez Álzate, Alias "Julián Bolívar", al mando de Héctor Julio Carvajalino, Alias "Miguel Ángel", y como segundo Alias "Ricardo" o "William Chamorro Villanueva", se unieron al grupo de Isaías Montes Hernández.

- Por parte del bloque Héctor Julio Peinado Becerra, al mando de Juan Francisco Prada Márquez, apoyo con el comandante José Antonio Hernández Villamizar, Alias JHON, alias El Negro o Noé Jiménez Ortiz, y alias El Paisa, que tenía injerencia en la zona del Sur del Cesar y los municipios de Ocaña y alrededores del departamento Norte de Santander.

Finalmente, el grupo ilegal llega a las cercanías del corregimiento La Gabarra, sitio El Mirador, a mediados del mes de agosto de 1999, donde incursionan violentamente en el casco urbano el día 21/08/1999, y fueron masacradas, asesinadas y desaparecidas más de cuarenta personas.

La segunda masacre en la cabecera municipal de Tibú se presenta el 17 de julio de 1999, resultando once personas muertas, donde según Isaías Montes Hernández alias "Mauricio", como comandante del grupo perpetrador, ha dicho ante Justicia y Paz que contó con la colaboración del comandante del batallón del Ejército Nacional Mauricio Llorente Chávez, condenado a 40 años de prisión.

Luego vino la masacre del 21 de agosto de 1999 con más de treinta personas asesinadas en el caserío La Gabarra, donde según Edilfredo Esquivel Ruiz alias "Osito", ante Justicia y Paz, contaron con la colaboración del ejército nacional que estaba al mando del Capitán Campuzano, hoy condenado[18].

A través de estas permanentes y continuos atentados a la vida y vejámenes a la población civil, llegaron a asegurar en gran medida la zona cocalera del Catatumbo. Algo terrible en una sociedad civilizada, fue tanta la humillación de estos ilegales que a los pocos días el comandante a. "Camilo" instaló una oficina en el centro de La Gabarra, en pleno casco urbano, se comportaba como cualquier autoridad o un empresario donde atendía sus funciones. Allí también atendía diferentes personas que

[18] Versión libre del postulado EDIFREDO ESQUIVEL RUIZ, del 28/07/2009.

acudían a solucionar problemas y a preguntar por la suerte de sus familiares, de todo esto tenía pleno conocimiento la fuerza pública allí destacada y guardaron silencio. En la finca Matecoco o Casa Bonita manejaban el comercio de la cocaína, y desde allí también dirigió todas las acciones criminales.

Con aproximadamente seis compañías de más de cien hombres cada una se tomaron paulatinamente el territorio desde La Gabarra hasta la Y de Astilleros, entrada al municipio El Zulia, vecino a la ciudad de Cúcuta. Fueron montando grupos urbanos en La gabarra, Tibú, Campo Dos, Pacceli, Luis Vero, en el municipio El Tarra y el caserío Versalles. Para lograr consolidar estos cascos urbanos ejecutaron trágicas incursiones y masacres, generaron zozobra y terror en la población, notándose el abandono del Estado, razón para que la población inerme e indefensa se viera obligada a convivir con esa delincuencia, cambiando sus costumbres y la cultura de los pueblos. El respeto ya no era hacía las autoridades legalmente constituidas, sino hacías estas fuerzas del mal.

Ya cuando este grupo comandado directamente por alias “Camilo” entra al Catatumbo, en la ciudad de Cúcuta y municipios circunvecinos, desde los primeros días del mes de mayo hacía presencia el frente Jorge Iván Laverde Zapata, alias El “Iguano”, “Sebastián”, “Pedro Fronteras” o “Raúl”, con un reducido grupo de hombres hacía presencia, ejecutando acciones de asesinatos individuales y colectivos.

En el primer semestre del año 1999, el Bloque Norte de las AUC hace su ingreso en el departamento del Atlántico; posteriormente en el segundo semestre de ese mismo año pese a que ya dicho grupo conocía como coordinador y apoyo logístico a Rodrigo Tovar Pupo, a finales del mes julio es considerado como el Comandante del Bloque Norte bajo la línea de mando de Salvatore Mancuso. Asentándose en la zona de San Ángel en el departamento del Magdalena, desde donde coordinaba el accionar del grupo en los departamentos de: Cesar, Atlántico y Magdalena. Continua con la expansión territorial creando frentes tales como el Frente Pivijay, en el departamento del Magdalena.

A finales de diciembre de 1999 y hasta primeros días del mes de marzo inician la incursión al corregimiento Filo gringo, municipio El Tarra, Norte de Santander, con más de diez personas muertas y otras desaparecidas.

Se conoció el Frente Héroes de los Montes de María por la incursión paramilitar a partir de la masacre del Salado (Bolívar) y Canutalito (Sucre), hechos ocurridos el 16 y 17 de febrero de 2000, fecha desde la cual aparecen registros del mencionado Grupo. No obstante, existe información de inteligencia sobre la participación de grupos de autodefensas en las masacres del Guamo (Bolívar) y Colosó y Pichilín (Sucre) en los meses de noviembre y diciembre de 1996 respectivamente, donde perdieron la vida 19 personas.

Repiten su accionar criminal en la modalidad de masacres el 6 de abril de 2000 en el casco urbano de Tibú, barrio El Triunfo y La Pista, donde mueren 21 personas que fueron recogidas en las calles y sacadas de sus viviendas, las tienden en el piso y a poca distancia les disparan con potentes armas.

El 5 de agosto de 2000 también bajo el mando de Isaías Montes Hernández, instalan un falso retén entre Sardinata y Cúcuta, haciéndose pasar como miembro de la guerrilla, detienen vehículos e interceptar a ocho personas (8) a quienes acribillan y despojan de sus pertenencias.

Año 2001

En febrero de 2001, se conformó el grupo de María La Baja - Bolívar, bajo el mando de Uber Enrique Banquez Martínez Alias "Juancho", quien venía de ser segundo de Alias "Cadena"; este grupo tuvo injerencia inicialmente en los municipios del Norte de Bolívar, María la Baja, Arjona, Turbaco y Turbana.

Por otro lado, en el segundo semestre de 2001, David Hernández Rojas alias "39" o "Fénix", asume la comandancia de lo que se denominó el frente Mártires Del Cesar con injerencia en la zona norte del departamento del Cesar.

El Frente Resistencia Motilona, inició una ampliación de su zona de influencia y es así como en el año 2001 sus hombres ejercen control y dominio a otros departamentos[19] llegando al Magdalena y Norte de Santander, instalando núcleos armados en municipios como El Banco, Guamal (Magdalena) y a los municipios de El Carmen, Teorama, Convención, en Norte de Santander. Dentro del Departamento del Cesar amplía su jurisdicción a los municipios de La Gloria, Curumaní, Chiriguana, Chimichagua, Guamal, San Sebastián y Aguachica; a este último llegan en el año 2004 a ocupar solo el área urbana, en razón al Frente Héctor Julio Peinado Becerra, entrega este sector al Bloque Norte[20] por diferencias militares con el Bloque Central Bolívar.

En el segundo semestre del año 2001 el Frente del Atlántico adhiere a su zona el municipio de Sitio nuevo del departamento del Magdalena.

A mediados del año 2003, llegó a la zona del Departamento del Atlántico Edgar Ignacio Fierro Flores, alias "Don Antonio", ex Capitán del Ejército Nacional, a tratar de poner orden a una zona que se encontraba en situación caótica;[21] Inicia organizándolas en comisiones. Inicia la división del departamento del Atlántico y la zona de Sitionuevo, en diez comisiones: crea la Comisión Metropolitana, la Comisión

[19] Entrevista de WILSON POVEDA CARREÑO. Comandante del Banco Magdalena, junio 11 de 2006 ante la Fiscalía 34 UNJYP.
[20] Diligencia de Versión Libre de JUAN FRANCISCO PRADA MARQUEZ, alias Juancho Prada, ante la Fiscalía 34 UNJYP.
[21] Versión rendida por el postulado Edgar Fierro Flórez en versión de fecha 26 de septiembre del 2011.

Magdalena, la Comisión Oriental. También crea la Comisión Centro, continua después organizando la Comisión Vía al Mar o Costanera. Esta última en poder de alias "Salomón" quien además sigue asumiendo el cobro del gramaje de la cocaína, pero éste rinde cuentas directamente al señor Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, en los manejos del narcotráfico, conformándose así este fuerte músculo financiero del Bloque Norte.

Igualmente, Edgar Ignacio Fierro, Organiza la comisión de Finanzas separando la zona del mercado y el comercio de Barranquilla, Sigue con la Comisión de Inteligencia; una Comisión Política y, por último, la Comisión de la Gasolina.

Luego de organizar las comisiones en el Atlántico, a principio del año 2004, ante la desaparición de Wilson Posada Reales, decide en su honor cambiar el nombre de Grupo Atlántico a "Frente José Pablo Díaz". Nombre con el cual se desmovilizó dicho frente.
El 26 de octubre de 2004 miembros del ejército nacional adscritos al Batallón de Artillería No 2 La Popa con sede en Valledupar, dan muerte a David Hernández Rojas quien era conocido dentro de la organización paramilitar con el alias de "39" y comandaba el frente Mártires del Cesar que delinquía en la zona norte del municipio de Valledupar, desde ese momento el frente queda sin comandante hasta mediados de 2005.
El día 10 de diciembre del año 2004, Salvatore Mancuso se desmoviliza con el Bloque Catatumbo, entregando la comandancia total del Bloque Norte a Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40".

A mediados del año 2005, el frente Mártires Del Cesar es fraccionado, tomando los nombres de David Hernández Rojas, bajo el mando de Luis Francisco Robles Mendoza alias "Amaury" o "611" y continúa el de Mártires del Cesar, como comandante Adolfo Enrique Guevara Cantillo alias "101". Este último desmovilizó las dos fracciones bajo el nombre de Mártires Del Cesar.

En el mes de junio del año 2005, el mal llamado "Frente Resistencia Tayrona", se independiza del Bloque Norte para asumir el proceso de desmovilización de manera independiente y los comandantes de los diferentes Frentes que conformaban el Bloque Norte empezaron a concretar reuniones con el fin de llevar a cabo la desmovilización.[22]

La desmovilización del Bloque Montes de María se llevó a cabo el 14 de julio de 2005 en el corregimiento de San Pablo del municipio de María La Baja - Bolívar, con 594 integrantes y 76 privados de la libertad al momento de la desmovilización.

En marzo de 2006 se produce la desmovilización del Bloque Norte en cabeza de su miembro representante Rodrigo Tovar Pupo alias JORGE 40 en los corregimientos

[22] Versión libre ADOLFO ENRIQUE GUEVARA CANTILLO.

de Chimila y La Mesa jurisdicción de los municipios de El Copey y Valledupar respectivamente.

- **EL FRENTE CONTRAINSURGENCIA WAYÚU.**

De conformidad con lo expuesto por la representante de la Fiscalía General de la Nación, el Frente Contrainsurgencia Wayuu fue creado en marzo de 2002, siendo Comandante General Carlos Alberto Sosa Castro, conocido con el alias de "*Ramiro",* y como Comandante Militar Francisco Robles Mendoza, alias "*Amaury*"; en sus inicios contó con 150 miembros y absorbió al grupo armado conocido como "Tomarrazon", así como a los comandos urbanos del Centro y Sur de la Guajira, haciendo presencia en las zonas que eran de injerencia de las Autodefensas Campesinas del Magdalena y la Guajira – ACMG, a saber: Corregimientos de Palomino, Rio Ancho, Mingueo, La Punta, Remedios, Punta Enea, El Canal, Campana Nuevo, Pelechua, (comprensión del municipio de Dibulla), Arroyo Arena, Tomarrazon, Monguí, Cotoprix, Juan y medio, Matitas, Cuestecitas, Choles, Hato Nuevo, Carraipia, Majayura, Paraguachón, Papayal y los municipios de Riohacha, Maicao, Barrancas, Albania, Fonseca, y Distracción.

Como antecedentes de la génesis del referido Frente paramilitar señala que, en el departamento de la Guajira, desde muchos años atrás, han hecho presencia grupos armados que operaban a manera de mercenarios y ejércitos privados contratados por contrabandistas e incluso indígenas que se dedicaban al comercio y necesitaban proteger su mercancía de grupos delincuenciales, estos grupos se convirtieron en agentes generadores de violencia a lo largo del departamento y crearon un contexto propicio para el surgimiento de grupos subversivos y grupos paramilitares.

En efecto, a inicios de la década de los 90, el denominado Frente 5 del grupo guerrillero autodenominado "Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia" – FARC-, en su proceso de expansión hacia la zona norte del país se dividió en los Frentes 35 y 37, que a partir del año 1993 pasarían a conformar lo que se denominó como "Bloque Caribe", también conocido como "Bloque Martín Caballero", que operó en los Departamentos de César, Magdalena y La Guajira y cuyo propósito era apropiarse de los múltiples corredores de movilidad ubicados a lo largo de toda la península de La Guajira.

Por su parte, el denominado "Frente 19 José Prudencio Padilla" después de lograr el control de la zona de la Sierra Nevada en el departamento del Magdalena, extendió su radio de operación hacia la zona baja de La Guajira y, en compañía del Frente 41 que provenía del Departamento del Cesar conformaron el frente Cincuenta y Nueve (59) que se estableció de manera permanente en la zona media y baja de la Guajira.

Por su parte, en la segunda mitad de la década de los 80, el otro grupo subversivo conocido como Ejército de Liberación Nacional -ELN-, mediante el Frente "Gustavo Palmesano" fortaleció su presencia en algunos municipios del sur de La Guajira,

especialmente en San Juan del Cesar y La Jagua del Pilar, así como también en las selvas de la Serranía del Perijá.

En ese contexto, hace su arribo a la región de manera incipiente el grupo de autodefensas que se denominó Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira –**ACMG**- ", también conocidas como "Autodefensas del Mamey" y/o "Los Chamizos", comandadas por Hernán Giraldo Serna, conocido con el alias de 'El Patrón'. El grupo bajo el mando de Hernán Giraldo provenía de la Sierra Nevada y debido a su cercanía geográfica con la zona de la Guajira, extendió su radio de operación desde los ríos Manzanares y Piedras, hasta el corregimiento de Palomino y la zona del río Jerez ubicada en la parte baja de la Guajira-, encontrando la colaboración y el respaldo de diferentes sectores económicos y políticos de la región, lo que le permitió crecer y fortalecerse rápidamente en esa zona del país.

Pero solo fue a finales de los 90, con la llegada de las recién conformadas Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, conocido con el alias de "Jorge 40" y, con el respaldo del grupo paramilitar conocido como "Casa Castaño", liderado por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, cuando empezó el proceso de consolidación y control territorial de los grupos paramilitares en el departamento de la Guajira.

Para tal efecto ingresaron a la región por la zona norte del departamento del Cesar y sur de la Guajira, mientras que otro grupo ingresó por la zona limítrofe con la Sierra Nevada, lo que les permitió ejercer el control de las zonas media y alta Guajira.

En el mes de mayo de 1998, por instrucciones de la "Casa Castaño", Salvatore Mancuso Gómez, en su condición de comandante, para ese momento, del recién creado "Bloque Norte", junto con Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", contactaron con el fin de crear alianzas estratégicas a contrabandistas y narcotraficantes de la región creando así "redes de apoyo" que les facilitaran el proceso de expansión y cooptación del Departamento, al tiempo que llevaron a cabo ataques selectivos en municipios del sur de La Guajira, disputando los territorios con frentes de las FARC y el ELN a los que finalmente lograron desplazar.

El 8 de diciembre de 1998, hombres armados bajo el mando de a. "Jorge 40", asesinaron a 12 personas en el municipio de Villanueva, ubicado al sur del departamento de la guajira, hecho que se conoció como la "Masacre de Villanueva" y que constituyó el punto de inflexión de la violencia en el departamento, dando inició a una serie de homicidios sistemáticos y masacres perpetrados por parte de los grupos paramilitares en contra de la población civil.
En el año 2000 desde una base paramilitar ubicada en el corregimiento de Badillo, al norte de la ciudad de Valledupar, zona limítrofe con el departamento de la Guajira, los grupos paramilitares a través de los comandantes conocidos con los alias de "39", "101", "6-11", "38" y "35", entre otros, llevaron a cabo incursiones armadas que

dieron lugar a múltiples homicidios, que se extendieron por toda la zona de sur de la Guajira, generando violencia y terror en la comunidad.

En ese contexto circunstancial, el grupo comandado por Rodrigo Tovar Pupo entró en un enfrentamiento armado con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y Guajira -ACMG-, bajo el mando de Hernán Giraldo Serna, conflicto en el cual resultó vencedor a. "Jorge 40"; en consecuencia, las ACMG, pasaron a hacer parte de las AUC y se convirtieron en dos frentes paramilitares del Bloque Norte, a saber: 1. El Frente mal llamado Resistencia Tayrona y 2. Frente mal llamado Contrainsurgencia Wayúu**.**

En ese orden, una vez consolidada la presencia de las AUC en la Guajira logró el control de los corredores estratégicos de la zona utilizados para el narcotráfico, aunque éstos seguían siendo disputados por contrabandistas y narcotraficantes, al tiempo que entraron en enfrentamientos directos con miembros de la etnia Wayúu; fue así como en el año 2004 miembros del Frente Contrainsurgencia Wayúu llevaron a cabo un hecho de gran connotación en materia de violación de los Derechos Humanos, conocido como la "Masacre de Bahía Portete", que dio inicio a una serie de ataques a la etnia Wayúu por parte del grupo paramilitar[23].

---

[23] La representante de la Fiscalía General de la Nación, en el transcurso de la diligencia de audiencia pública y como soporte del contexto del Frente Contrainsurgencia Wayuu, expuso el documento denominado "Diagnóstico Departamental Guajira", elaborado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos –DH- y Derecho Internacional Humanitario –DIH-, de la Vicepresidencia de la República de Derechos Humanos, dando lectura al siguiente aparte:

"Desde la década de los años setenta, con el advenimiento de la bonanza marimbera, el control de esta región ha sido disputado por los grupos armados irregulares y por bandas delincuenciales que pretender aprovecharse de sus puertos naturales. A esta disputa, se suman los conflictos internos de los indígenas Wayuu, que ancestralmente han estado asentados en las costas y los puertos naturales, por cuya utilización les cobraban dinero a los contrabandistas y narcotraficantes. Las desavenencias entre castas conllevaron a que algunos indígenas acudieran al robo de mercancías de contrabandistas, lo que a su vez implicó que estos últimos conformaran estructuras armadas para su protección. "Algunas castas Wayuu se fortalecieron económicamente y surgieron así los primeros conflictos, de los cuales se derivaron guerras que fueron financiadas a través de los cobros descritos, y los atracos y robos a los contrabandistas, lo que hizo que tanto narcotraficantes como contrabandistas, escoltaran fuertemente el transporte de la mercancía y la droga que debía de salir del puerto"4. Así mismo, el control de los puertos de la Alta Guajira permitió a las Autodefensas obstaculizar el aprovisionamiento de insumos y pertrechos por parte de las Farc y el ELN. Otra de las decisiones tomadas por los contrabandistas y narcotraficantes para proteger su actividad ilícita fue asociarse con el excomandante de las autodefensas, alias "Jorge 40", quien ingresó con el bloque Norte de las AUC a la zona a comienzos del 2000… "en los dos años siguientes, y logrando conocer el funcionamiento del negocio de los puertos, empiezan a interesarse por el control absoluto, tanto de las actividades portuarias que se desarrollan en la Alta Guajira, como de las actividades comerciales que se desarrollan en Maicao", al igual que al tráfico de insumos para el procesamiento de narcóticos por el puerto natural de Bahía Portete.
Otra de las agrupaciones de autodefensas que hizo presencia en la zona es la organización de Chema Balas, quien se disputó el control de Bahía Portete con el Bloque Norte. Una de las consecuencias de esta disputa fue la masacre de Bahía Portete, realizada en abril de 2004.
(…)
Entre los activos que tiene esta parte del departamento están el oleoducto que transporta el crudo hacia la costa y el ferrocarril de carbón de la Drummond; además, esta región se encuentra entre las minas de El Cerrejón y la troncal que conecta en su último tramo el centro del país con la costa norte. Estas condiciones hacen de la Sierra no sólo una ecorregión estratégica y una despensa natural de recursos para las grandes ciudades de la costa, sino también un refugio en el que se reproducen las economías y actividades ilegales de la coca, la guaquería, el contrabando, el secuestro y la extorsión. Los casi treinta ríos principales y medio centenar de pequeños afluentes secundarios son utilizados como corredores estratégicos que usan los diferentes actores de la confrontación para comunicar las distintas caras de la Sierra, creando una red de interconexión entre los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, así como de las zonas planas con las zonas medias y altas y a su vez de éstas con el mar Caribe. En esta parte del departamento hacen presencia los frentes 19 y 59 de las Farc y el frente Gustavo Palmesano Ojeda del ELN, que se implantaron en la parte media de la cara norte de la Sierra Nevada de Santa Marta en

Desde su conformación, el Frente Contrainsurgencia Wayúu operó en quince Municipios, siendo su capital Riohacha-, para lo cual se crearon cinco grupos entre los cuales se repartieron el territorio Wayúu: "Los Escorpiones, Los Buitres, Los Centauros, Los Halcones y Las Águilas".

Esta nueva estructura de las AUC en el Departamento de la Guajira les permitió extender sus acciones hacia los sectores comprendidos entre las zonas media, alta, noroccidental y nororiental de la Guajira, ubicadas en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Los puntos de concentración del grupo eran los siguientes: La Bodega -jurisdicción de Mingueo, contaban con 40 a 50 hombres-; vereda Pueblo Viejo -con 30 hombres-; vereda San Jorge –contaban con una escuela de entrenamiento en jurisdicción de Mingueo-; vereda Saba de Culebra –corregimiento de Palomino con 80 hombres-; Quebrada del Sol -con una escuela, 180 hombres, y era una unidad de choque de la Sierra Nevada, allí se encontraba Zuley Antonio Guerra Castro, alias "*Ramiro"*-; Carraipía -corregimiento del municipio de Maicao-, se encontraban 200 hombres, allí se encontraba alias "*Giovanny*", encargado de la seguridad en la Serranía del Perijá-. Delinquían en estribaciones de la Sierra Nevada en límites con La Guajira, Municipio de Riohacha y sus corregimientos -Matitas, Choles, Tomarrazón, Cascajalito, Juan y Medio, Las Casitas, Las Palmas, Moreneros, Cotoprix, Monguí-; Municipio de Dibulla y sus corregimientos Puente Bomba, Mingueo, Palomino, Rio Ancho-; y parte del sur de La Guajira -Municipios de Hato Nuevo, Barrancas, Fonseca (El Hatico) y San Juan del Cesar (Los Haticos y Los Pondores)-.

---

corregimientos como Mingueo, Palomino y Río Ancho, lugares donde existen cultivos de coca y por donde a su vez cruza el corredor minero.
Por otra parte, en San Juan del Cesar, piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta, se encuentran los corregimientos de Caracolí, La Junta, Los Haticos y el resguardo indígena Kogui-Malayo-Arhuaco, que constituyen una extensa zona que hace parte de un corredor de movilidad que comunica el norte del Cesar con Riohacha y los puertos del Caribe, condición geográfica que facilita el ingreso de contrabando (gasolina venezolana, licores y otros productos), armas y precursores químicos y la salida de narcóticos.
Adicionalmente, en jurisdicción de los municipios de San Juan y Distracción, que abarca territorios del resguardo Wiwa, está en marcha el proyecto de la represa del río Ranchería, que cubre 600 hectáreas y que almacenaría 98.000 millones de metros cúbicos de agua. Este proyecto hará parte integral del Distrito de Riego de San Juan del Cesar y cuenta con una asignación presupuestal superior a los 170.000 millones de pesos, situación que genera una mayor vulnerabilidad de toda la zona. En la zona rural de estas poblaciones, actúan el frente 59 de las Farc, el frente Luciano Ariza del ELN y antes de su desmovilización, grupos de autodefensas.
El accionar de grupos armados ilegales en La Guajira estuvo asociado inicialmente a la bonanza marimbera de la década de los setenta. Posteriormente, las Farc, con los frentes 59 y 41 del bloque Caribe, y el ELN, con los frentes Luciano Ariza y Gustavo Palmesano, comenzaron a actuar en las zonas rurales de los municipios de Dibulla, Riohacha y San Juan del Cesar. Al finalizar la década de los noventa, con la reestructuración de varios grupos de justicia privada, especialmente los denominados "Mamey", las ***AUC*** *lideradas inicialmente por* ***SALVATORE MANCUSO*** *y posteriormente por "Jorge 40", entraron a disputar el poder de la guerrilla en estas zonas y lograron una notable influencia en las áreas rurales de Dibulla y Riohacha, alcanzando así, desplazar a la guerrilla hacia las zonas altas y bloquear los principales accesos que circundan la Sierra.*
A mediados de 2002, la guerrilla inició una contraofensiva para desalojar a las ***AUC*** *de Riohacha y San Juan del Cesar, lo cual se expresó en el incremento de la intensidad de la confrontación y la tasa de homicidio en estos municipios. En ese momento, las autodefensas contuvieron el accionar de la guerrilla, pero en este contexto, crecieron las amenazas contra la población civil y la relativa estabilidad en el dominio que ejercía las* ***AUC*** *se debilitó. A partir de 2004, la intensidad de la confrontación se mantuvo en Riohacha, San Juan del Cesar y Dibulla, y se extendió a los municipios de Maicao, Fonseca, Villanueva y Urumita, en los cuales se registraron altas tasas de homicidio. Cabe mencionar que en Maicao la disputa entre autodefensas y un grupo de resistencia armada, se dio principalmente por el control del contrabando en la región, el ingreso de precursores químicos para el procesamiento de alcaloides, la salida de pasta de coca y cocaína y la entrada de armas y gasolina. …"*

En general el Frente Contrainsurgencia Wayuu estuvo conformado por aproximadamente por cuatrocientos cincuenta -450- miembros que manejaban diferentes tipos de armas, tales como ametralladoras M-60 tipo comando y estándar; morteros de 60 mm; lanzagranadas de 40 mm MGL y M79; fusiles Galil 762 mm; 556 mm; fusiles AK- 47 762X39 y 556 mm y fusiles R-15 calibre 556 mm, entre otros.

GEOREFERENCIACIÓN: El Frente Contrainsurgencia Wayúu tuvo injerencia en el departamento de la Guajira, así: *i)* ***Alta Guajira***: Municipios de Manaure y Uribía y *ii)* ***Guajira media***: Municipios de Maicao, Riohacha, Albania, Hatonuevo, Barrancas y Fonseca. En tanto que, en el Sur de la Guajira, que comprende los municipios de San Juan del Cesar, Villanueva, Urumita, El Molino y las Jagua del Pilar, opero el Frente Mártires del Cesar.

ESTRUCTURA: El Frente Contrainsurgencia Wayuu se estructuró en cinco (5) grupos de Contraguerrillas y tres (3) grupos urbanos.

Comandante General: Carlos Alberto Sosa Castro, conocido con los alias de "*Ramiro", "Rodrigo" y/o "Rubén*"; tuvo como zona de influencia la línea costera desde el corregimiento de Dibulla hasta Riohacha; tenía a su cargo con diez hombres, encargados de prestar seguridad y coordinar con las autoridades, el cobro a narcotraficantes por el paso y salida de drogas ilícitas por esta zona.

Comandante Militar: Francisco Robles Mendoza, conocido con el alias de "Amaury", con un grupo de seguridad conformado por doce (12) hombres.

Comandante Financiero: Como tal se desempeñó el sujeto conocido con el alias de "Giovanny".

Grupos de Contraguerrillas:

- **Contraguerrilla Águilas**:

Bajo el mando de Pedro Martínez Escobar, conocido con los alias de "60", "Charro", "Charrito" y/o "Centauro", estaba integrada por aproximadamente cincuenta y un (51) hombres, con zona de influencia en los corregimientos de Tomarrazon, Matitas, Juan y medio, Choles, Anaime, Treinta, Galán, Morenero, Cascajalito, Tigreras, entre otros, comprensión municipal de Riohacha.

- **Contraguerrilla Buitre y Escorpión**:

La contraguerrilla Buitre estaba Integrada aproximadamente por cuarenta y tres (43) miembros bajo el mando de alias "Walter o "Cero Nueve", y como segundo al mando Luís Fernando Rojas Aguilar, conocido con los alias de "Jader" o "95"; tenía como

zona de injerencia el área rural del municipio de Maicao, conformada por los sitios conocidos como la Bocatoma, Chingolita, Finca La Negrera, Cerro El Indio, Los Remedio, Garrapatero, Porciosa, Majayura, Finca La Victoria, Cerro El Mico.

En el mes de julio de 2002 la Contraguerrilla Buitre absorbe otro grupo de contraguerrilla denominado Escorpión con zona de injerencia en la Majayura, Carraipia, Monte Lara, Porciosa y Los Remedios, esta nueva contraguerrilla quedó bajo el mando de alias "*Jader*".

- **Contraguerrilla Centauros**:

Conformada por treinta y siete (37) hombres bajo el mando de Marlon de La Hoz Marín, conocido con los alias de "*Marco" o "33*"; con zona de influencia en la Sierra Nevada de Santa Marta, jurisdicción del municipio de Dibulla, y los corregimientos de Palomino, Rio Ancho, Los Naranjos, Las Margaritas, Techo Rojo, Los Lagartos, Casa - Aluminio, parte alta de Rio Jerez, Campana Nuevo, Campana Viejo y La Punto de los Remedios.

- **Contraguerrilla Escorpión**:

Conformada por treinta y cuatro (34) hombres, bajo el mando de Ubaldino Bracho, conocido con el alias de "*El Doctor*" y, como segundo al mando encargado de la parte militar Alex Daza Baena, conocido con el alias de "*Guerrero*". Este grupo tenía una dependencia encargada de cobrar ilegalmente sumas de dinero a camiones transportadores de mercancía proveniente de los puertos marítimos y estaba a cargo de Luis Maestre López. Su zona de injerencia fue la parte alta de la Guajira que está conformada por los municipios de Manaure y Uribía, además los corregimientos de Puerto Bolívar, Bahía Portete, Puerto Estrella, Nazaret, Cabo de la Vela, entre otros.

Esta estructura se mantuvo hasta marzo de 2003, cuando fue asesinado Ubaldino Bracho, razón por la cual asumió el mando Arnulfo Sánchez González, conocido con los demás alias de "*Juan", "El Sargento", "Cara de Puño" o "El Señor Del Desierto*".

- **Contraguerrilla Halcones:**

Bajo el mando de Rosendo León Galeano, alias "45", quien tenía a su cargo 45 miembros; la zona de injerencia era el sur de la Guajira que comprende los municipios de Barrancas y Fonseca, y su zona rural como San Pedro, Mangañita, Chorrera, Los Haticos, y otros.

Grupos Urbanos:

- **Grupo Urbano de Maicao**:

Compuesto por 8 hombres bajo el mando de Jairo Alfonso Samper Cantillo conocido con el alias de "*Lucho*".

Grupo Urbano de Riohacha:

- Conformado por 8 hombres bajo el mando de Jaime Alfonso Carvajal Taborda, alias "*Andrés"*.

- **Grupo Urbano de Dibulla**:

Integrado por 6 hombres bajo el mando de William Contreras Bustos, conocido con el alias de "Pantera".

No obstante, lo anterior durante su existencia el Frente Contrainsurgencia Wayúu tuvo algunos cambios en su estructura, por ejemplo, en junio de 2002, el Comandante Militar, a. "Amaury" es trasladado para la región del Cesar, siendo nombrado en su remplazo Ramiro Bejarano Muñoz, a. "Tolima", que hacía parte del Frente Resistencia Tayrona, y de igual forma algunas contraguerrillas sufrieron modificaciones, como la Contraguerrilla Halcones, la cual fue dividida en dos grupos de los cuales nació la Contraguerrilla de Barrancas que operó en Barrancas, Hato Nuevo y Fonseca, de influencia en la Sierra Nevada, en tanto la Contraguerrilla Halcones quedó operando en la zona plana de Dibulla – Guajira.

Esta estructura denominada frente Contrainsurgencia Wayuu de las AUC, era una estructura de orden jerárquico cerrado, cuyas ordenes provenían de los comandantes a sus segundos subalternos quienes a su vez las trasmitían a sus estructuras rurales o urbanas, teniendo también autonomía para decidir sobre el terreno activar acciones de guerra contra quien consideraban enemigo u objetivo.

- **FINANCIACIÓN:**

El Narcotráfico fue una de las fuentes de financiación del Frente Contrainsurgencia Wayúu, pues, como se anotó anteriormente, los puertos del Departamento de la Guajira –Bahía Portete y Bahía Honda-, fueron aprovechados por miembros del grupo para ejercer este tipo de actividad, sumada a la del contrabando de mercancías. La economía y finanzas del frente estaban basadas en el cultivo, procesamiento y producción de cocaína, la cual exportaban hacia los países de Venezuela, Curazao, Aruba, Panamá, Islas de Margarita, y utilizaban el sistema de trueque o intercambio de drogas por armas y municiones. Adicionalmente, les pedían cuotas o sumas de dinero a propietarios de finca y comerciantes de la zona, las cuales eran cobradas mensualmente.

Se tiene información que en reunión efectuada en Río Negro el 14 de enero del 2000, donde tomaron como área de influencia el peaje de Santa Marta hasta el peaje del El Ebanal (La Guajira), se fijó como cuota mensual a los propietarios de fincas el pago de $ 1.000.000.oo por hectárea. A los comerciantes de Maicao, se les exigía cuotas en dinero y en especie según la naturaleza del establecimiento. En dinero piden cuotas

desde $10.000 hasta $50.000. A, algunos cambiadores de bolívares les hacían exigencias millonarias en casos de extorsión. También cobraban por cada caso de "Limpieza" (asesinatos selectivos).

Eran varias las modalidades de extorsión, entre ellas se tenía detectadas en Riohacha y Maicao, la expedición de unas "boletas de rifas", que debían "comprar" los comerciantes y transportistas. A los "*CARITEROS*" (comerciantes de vehículos hurtados en Venezuela), les exigían pagos en especie, consistentes en entrega de vehículos. La contraprestación a este pago de cuotas era el servicio de "*SEGURIDAD*", que se comprometían a prestar al "*AFILIADO*", en lo relacionado con acciones de la subversión y la delincuencia. El campamento madre se encontraba en corregimiento de Palomino y Mingueo Municipio de Dibulla departamento de la Guajira.

La fuente de financiación del Frente Contrainsurgencia Wayuu, también, se derivaba de las extorsiones y vacunas que le imponían a los comerciantes de los diferentes Municipios y corregimientos del Departamento, como en Maicao, Riohacha y Sur de la Guajira, concretamente a los comerciantes de gasolina venezolana, así como el manejo de la planta de gasolina Ayatawacoop, lo que les permitía el flujo de dinero, controlando la entrada de armamento y salida de drogas alucinógenas; aunado a las diferentes contrataciones que se le otorgaba por intermedio de entes territoriales – Alcaldías y Gobernación del Departamento de la Guajira.

V. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.

1. DESMOVILIZACIÓN Y DESARME.

Mediante Oficio OFI108-00022216/AUV1230 del 6 de marzo de 2008, mediante la cual el Alto Comisionado para la Paz reportó al Fiscal General de la Nación, que en cumplimiento del acuerdo suscrito con el Gobierno Nacional en Santa Fe de Ralito el 15 de julio de 2003, los días 8 y 10 de marzo del año 2006, tuvo lugar la desmovilización colectiva de los integrantes del Bloque Norte; que dicha desmovilización se realizó en los lugares reconocidos mediante las resoluciones presidenciales No. 199 del 4 de agosto de 2005 y No. 343 del 19 de diciembre de 2005.

2. DESARME.

Al momento de su desmovilización, el Bloque Norte hizo entrega de múltiple material de guerra: 1.016 armas largas, 335 armas cortas, 109 armas de acompañamiento, 1.015 granadas, 2 cohetes PG7, y 188.767 municiones. Todo lo cual fue corroborado por la Fiscalía en desarrollo de la audiencia pública.

En virtud de lo anterior y por encontrarse debidamente acreditado dentro de las presentes diligencias la Sala encuentra satisfecho el primer requisito de elegibilidad.

3. BIENES ENTREGADOS Y RECURSOS AFECTADOS CON FINES DE REPARACIÓN.

Con informe suscrito por el doctor Francisco Álvarez Córdoba, Fiscal 35 Subunidad Elite de Persecución de Bienes para la Representación de las víctimas, con sede en la ciudad de Barranquilla, suministra información de los bienes con sentencia de extinción de dominio entregados por Rodrigo Tovar Pupo, que luego de revocarse la sentencia extintiva se remitieron a la Unidad Especial de Gestión de Restitución de Tierras.

Por todo lo expuesto, se reitera que en lo que respecta a la entrega de bienes con fines de reparación a las víctimas, dicho requisito de elegibilidad se tiene por cumplido.

4. QUE EL GRUPO PONGA A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR LA TOTALIDAD DE MENORES DE EDAD RECLUTADOS.

El numeral 3º del artículo 10 de la Ley 975 de 2005 establece la obligación del grupo armado ilegal de poner a disposición del ICBF la totalidad de los menores reclutados; Mediante oficio FPJ-11 No.110016000253200782791 del 29 de enero del 2010, suscrito por el Investigador Criminalístico del Cuerpo Técnico Investigativo de la Fiscalía General de la Nación, investigador Víctor Pérez González, se relacionó un listado de 27 menores desvinculados del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia A.U.C.

Por lo anterior, la Sala en cumplimiento del requisito de elegibilidad consagrado en el numeral 3º del artículo 10 de la Ley de Justicia y Paz, tiene por satisfecho este requisito de elegibilidad, toda vez que se advierte que los menores que se desmovilizaron con el grupo armado ilegal fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.

5. ENTREGA DE SECUESTRADOS E INFORMACIÓN SOBRE DESAPARECIDOS.

De conformidad con lo manifestado por el representante de la Fiscalía General de la Nación no se cuentan con registros, ni acreditación, de que al momento de la desmovilización colectiva del GAOML tuviese personas privadas de la libertad en su poder, al tiempo que, según informó la Fiscalía General de la Nación, sus miembros han colaborado con información relacionada con la ubicación y el paradero de víctimas desaparecidas.

La representante del ente instructor aportó el informe de 7 de abril de 2022, emanado de la Fiscalía Seccional 177 del Grupo de Exhumaciones con sede en Valledupar, en el que da cuenta de las diligencias que ese grupo de exhumaciones ha realizado, en las zonas donde tuvo injerencia el Frente Contrainsurgencia Wayuu y en el cual se señala lo siguiente:

"1. En la zona de injerencia de este frente se han realizado 137 diligencias de exhumación donde se han recuperado igual número de cuerpos la gran mayoría de ellos incompletos, vale decir que rara vez se pueden encontrar cuerpos completos habida cuenta que, si falta una sola estructura del cuerpo, vale decir, una Falange de un dedo, por poner algún ejemplo, estamos frente a un cadáver incompleto.

2. Los postulados de este frente que han aportado datos para la ubicación de personas desaparecidas son los siguientes: FERNEY ALBERTO ARGUMEDO TORRES ✓ JAIRO ALFONSO SAMPER CANTILLO. ✓ JOSE GREGORIO ALVAREZ ANDRADE ✓LUIS ANTONIO GIRALDO ✓ROGER ADAN QUINTERO ✓ JHON JAIRO ARRIETA ZULETA ✓ JOSÉ LUIS LARA JIMÉNEZ ✓ ARLES GUILLERMO MERCADO CÁRDENAS ✓ JAIBER RODRÍGUEZ RINCÓN ✓ ROSENDO LEÓN GALEANO.

Los postulados de dicha estructura que han participado activamente en las labores de campo para la ubicación de restos humanos en las zonas que fueran de influencia del denominado frente Contrainsurgencia Wayuu son: ✓ FERNEY ALBERTO ARGUMEDO TORRES ✓ JAIRO ALFONSO SAMPER C. ✓ JOSE GREGORIO ALVAREZ ANDRADE

6. DILIGENCIAS POSTERIORES EXHUMACIÓN CADÁVERES EN CONDICIÓN DE NO IDENTIFICADO.

Una vez recuperado el cuerpo cuando éste tiene condición de no identificado se envía al laboratorio donde se le realizan análisis odontológico antropológico y se toman muestras óseas para el envío al laboratorio de genética.

En esta condición tenemos un total de 70 cadáveres, sobre los cuales se siguen realizando acciones dirigidas al lograr la orientación del cuerpo y de esta manera llegar a la plena identidad, que es la finalidad más importante en nuestro proceso. Venimos realizando jornadas de atención integral a víctimas del conflicto con el objeto de poder redireccionar la investigación de estos casos; tomar prueba para análisis de ADN a todo el grupo familiar de los desaparecidos con el objeto de hallar coincidencias, entre los cuerpos que reposan en laboratorio y los familiares que acuden a nuestras jornadas. El pasado 20 de abril del año en curso se realizó jornada de atención integral en el municipio de Valledupar, donde se recogió información de aproximadamente 70 familias. Para el mes de junio de este año se realizará en este

municipio nueva jornada con un estimado de 200 familias la gran mayoría de ellas del departamento de la Guajira donde obtendremos insumos para nuestras investigaciones.

Cadáveres orientados. *De los 137 cuerpos recuperados, 65 de ellos ya se identificaron y fueron entregados a los familiares de las víctimas y para el mes de junio de este año se tiene programada la entrega de un cuerpo recientemente identificado y que fue entregado por el postulado FERNEY ALBERTO ARGUMEDO TORRES. Se trata de quien en vida respondía al nombre de ENDER ANTONIO RADA DE LA HOZ. Para un total de 67 cuerpos.*

En virtud de lo anterior el requisito de elegibilidad se encuentra cumplido.

7. CESACIÓN INTERFERENCIA AL LIBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y LIBERTADES PÚBLICAS.

El grupo organizado al margen de la ley, Frente Contrainsurgencia Wayúu de las A.U.C., estableció alianzas con la clase política del departamento del Atlántico, a través de las cuales, mediante nocivas prácticas, perturbó el libre ejercicio de los derechos políticos y garantías ciudadanas, lo que dio lugar a tratar de manera detallada en el tópico denominado Parapolítica, porque una vez sometidos los desmovilizados, luego de la confesión de los delitos cometidos, dieron cuenta de estas alianzas, que conllevó a las pertinentes compulsas de copias, produciéndose numerosas condenas contra dirigentes políticos y mandatarios regionales.

Además de lo anterior de conformidad con lo manifestado por el representante de la Fiscalía General de la Nación, el ente instructor verificó la naturaleza de las investigaciones reportadas por la Dirección Seccional de Fiscalías que se registran en el Sistema de Información Judicial –SIJUF, sin que se encontraran investigaciones en curso seguidas en contra de ex miembros del Bloque Norte y/o el Frente Contrainsurgencia Wayuú por delitos que atenten contra los mecanismos de participación ciudadana.
De igual forma señaló el representante del ente acusador que revisado el Sistema de Información Judicial de Justicia y Paz de la Fiscalía –SIJYP- no se encontraron denuncias con posterioridad a la desmovilización en contra de ex miembros del GAOML por delitos que atenten contra los derechos políticos y las libertades públicas, cumpliéndose en tales términos el requisito de elegibilidad referido.

8. QUE EL GRUPO NO SE HAYA ORGANIZADO PARA EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES O EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.

Advierte la Sala que en lo que tiene que ver con que la conformación de la organización ilegal no tenga como finalidad el tráfico de estupefacientes o el

enriquecimiento ilícito, la hipótesis que probó la fiscalía es que el narcotráfico se constituyó en una fuente de financiación del grupo, pero no se constituyó con esa finalidad, pues lo que se destaca de las versiones y demás elementos materiales de acreditación de los hechos, es que los comandantes, desde los inicios tuvieron la convicción de que la finalidad del grupo armado al margen de la ley era combatir a la subversión, precisión que permite concluir que el requisito de elegibilidad previsto por la Ley 975 de 2005 en ese sentido se encuentra satisfecho.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

1. DE LA COMPETENCIA.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PSAA11-8035 de marzo 15 de 2011, creó la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, señalando la competencia territorial con la finalidad de adelantar la etapa de Juzgamiento de los procesos de qué trata la Ley 975 de 2005 y de conformidad con lo reglado por los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 1592 de 2012 que modificara la Ley 975 de 2005 y el artículos 10º y 30 de su Decreto reglamentario 3011 de 2013.

Con los fundamentos anteriores, esta Judicatura tiene plena competencia para conocer del presente proceso, toda vez que se demostró que el postulado ex perteneciente a los Bloques Catatumbo y Norte, estructura de la cual hizo parte el Frente Contrainsurgencia Wayúu, tuvo su área de influencia en los departamentos del Magdalena, el Cesar y la Guajira.

Una vez examinada la actuación que se llevó a cabo dentro de las etapas administrativa y judicial por la que ha transitado el procedimiento adelantado contra el postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, cabe señalar que se han surtido con estricta sujeción a los parámetros referidos por la Ley 975 de 2005–*Ley de Justicia y Paz sus Decretos Reglamentarios y por la Ley 906 de 2004 por principio de complementariedad*-, respetándose los derechos y garantías procesales del mencionado postulado, a quien desde el comienzo se le permitió ejercitar su derecho a la defensa material y técnica. Es así como en el desarrollo de las diligencias de versión, imputación y formulación de cargos, narró los hechos de que tenía conocimiento y le fueron enunciadas las imputaciones jurídicas pertinentes con la asistencia de un defensor. Así mismo, se verificó la participación de las víctimas y sus representantes. Por tanto, no se advierte irregularidad procesal y sustancial alguna que pueda afectar la actuación surtida, y, por ende, se puede continuar con el control formal y material de la actuación.

2. LEGALIDAD FORMAL Y MATERIAL DE LA ACEPTACIÓN DE CARGOS.

2.1. CONTROL FORMAL:

Según lo planteado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia SP5200-2014 con radicado 42534, siendo Magistrada Ponente la doctora María del Rosario González Muñoz, donde se lee textualmente:

"…*Posponer la decisión sobre la legalización de cargos para la sentencia se ajusta al objetivo de la ley 1592 de 2012 de agilizar la actuación en beneficio de la víctimas y demás intervinientes, ante la lentitud observada hasta ese momento en los procesos de justicia transicional…",* la Colegiatura entrará a declarar o no la legalidad de la aceptación de los cargos en lo relativo a la calificación jurídica de los hechos formulados a los postulados, y en los que tuvo su participación durante y con ocasión de su permanencia al grupo armado ilegal.

En ese orden, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 21 de la Ley 1592 de 2012, se tiene que en la audiencia concentrada celebrada dentro del presente proceso se ejerció el control material y formal de la totalidad de los cargos formulados en contra del postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ.

La Sala abordará previamente el contexto jurídico de los criterios de Priorización en el marco de justicia transicional, la identificación de los patrones de macro criminalidad, a efectos de sancionar a los máximos responsables de crímenes de sistema en el marco del proceso especial de Justicia Transicional.

2.2. CONTROL MATERIAL.

La Corte Constitucional en la sentencia C-370 de 2006, manifestó la necesidad e importancia del control formal y material de legalidad de los cargos, cuando realizó el control de constitucionalidad de la Ley 975 de 2005, conservándose en los mismos términos en la Ley 1592 de 2012, así:

> *"Dijo la Corte Constitucional- reviste particular importancia este control que se asigna al juez de conocimiento, el cual debe entenderse como control material de legalidad de la imputación penal que surge a partir de la aceptación de los cargos. Lo anterior implica que el juez de conocimiento debe controlar la legalidad de la aceptación de cargos en lo relativo a la calificación jurídica de los hechos, en el sentido que aquella debe efectivamente corresponder a los hechos que obran en el expediente. Esta interpretación es la única que se ajusta a la garantía de efectividad de los derechos de las víctimas a la justicia y a la verdad"*[24]

[24] Sentencia de fecha 18 de mayo de 2006, Magistrado Ponente. Ponente: H. Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa y otros.

Por otro lado, la H. Corte Suprema de Justicia, desde los primeros pronunciamientos en los asuntos de Justicia y Paz, ha señalado la importancia del acto de la acusación, que en sentencia de fecha 28 de mayo de 2008 dijo: *"la acusación es un acto complejo que comprende el escrito de acusación más el acto oral de control de legalidad material y formal de la aceptación de cargos ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz. De ese acto complejo es del que se predica congruencia con la sentencia"*[25]. Es decir, como hay un acto y etapas procesales anteriores a la sentencia, que fija el marco del juzgamiento, debemos establecer la congruencia entre la acusación y la sentencia.

Tal y como se anotó en precedencia, se verificó en los términos de la H. Corte Suprema de Justicia, el escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación a través de su delegada, la fiscalía Novena, en el sentido que se atendieran los contenidos propios establecidos en el marco de la Ley de Justicia y Paz y cumpliera con los requisitos mínimos que, para esta clase de procesos, se encuentran contemplados en el artículo 337 de la Ley 906 de 2004, desarrollándose así, en las diferentes etapas procesales la imputación de los hechos presentados por la fiscalía, los cuales fueron formulados y aceptados por los postulados, de manera libre, voluntaria, espontánea y con la asesoría de sus defensores, evitando que la aceptación estuviese libre de vicios, en aras de realizar en debida forma el acto procesal de la acusación para las garantías del proceso.

2.2.1. Fines de la Legalización de Cargos.

En la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos, los postulados ratificaron de manera libre, voluntaria y espontánea las conductas punibles cometidas por el accionar del grupo organizado al margen de la ley, del cual formaban parte, asesorados por sus defensores, evitando que la aceptación estuviese libre de vicios, en aras de realizar en debida forma el acto procesal de la acusación para las garantías del proceso.

Antes de proceder al estudio de las conductas a legalizar a los postulados, la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz entrará a analizar si se reúnen las exigencias establecidas en instrumentos y Jurisprudencia Internacionales para que las conductas antes descritas deban ser reconocidas y declaradas *Crímenes de Guerra* y de *Lesa Humanidad*.

2.2.2. Crímenes que tienen relación con el presente asunto:

2.2.2.1. Delito de Lesa Humanidad

Cabe relacionar que el delito de lesa humanidad tiene dos connotaciones: *(i)* infringe un daño directo a un grupo de personas o a un colectivo con características étnicas,

[25] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente, doctor AUGUSTO IBÁÑEZ GUZMÁN, radicado 29560. Postulado Wilson Salazar Carrascal.

religiosas o políticas, y *(ii)* causa un daño por la vía de la representación a toda la humanidad.

En ese orden, encontramos que el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia, aseveró en su sentencia sobre el caso de Erdemovic, la esencia del delito de lesa humanidad, lo siguiente:

> *"Los crímenes contra la humanidad son actos graves de violencia que dañan a los seres humanos al atacar lo que le es más esencial: su vida, su libertad, su bienestar físico, salud y/o dignidad. Son actos inhumanos que por su extensión y gravedad sobrepasan los límites tolerables por la comunidad internacional, la cual debe forzosamente exigir su castigo. Pero los crímenes contra la humanidad también trascienden lo individual, puesto que cuando lo individual es violado, la humanidad viene a ser objeto de ataque y es negada. De allí el concepto de la humanidad como víctima que caracteriza de manera esencial los crímenes contra la humanidad"*

Los Crímenes de Lesa Humanidad reúnen cuatro características que los diferencian de otros crímenes, las cuales se relacionan, así: Son *(i)* actos GENERALIZADOS, *(ii)* SISTEMÁTICOS, *(iii)* Son perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que actúan por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia, ayuda o complicidad. *(iv)* Están dirigidos contra la población civil por motivos sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales.

2.2.2.2. Crímenes de Guerra.

Dentro de las prácticas de la Guerra, se han estipulado una serie de reglas que han permitido la humanización de esta. Estas han sido recopiladas a través de los IV Protocolos de Ginebra junto con sus adicciones, las cuales tienen un efecto y carácter vinculante para los Estados; sin embargo, resultaría utópico afirmar que la aplicación de los principios y normas que se encuentran contenidos en dicho instrumento supranacional se da satisfactoriamente.

"El Derecho Penal Internacional bélico protege bienes jurídicos fundamentales de los individuos durante los conflictos armados. Esto queda especialmente de manifiesto en las disposiciones a cerca de infracciones graves de los Convenios de Ginebra. El círculo de personas protegidas está especialmente expuesto a peligros durante un conflicto armado. Al menos los bienes jurídicos más importantes como vida e integridad física deben permanecer intactos".[26]

Muchas transgresiones a las mencionadas disposiciones se dan en el devenir bélico, ya sea de carácter internacional o no internacional, lo que, en el caso colombiano,

[26] Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Sentencia contra Salvatore Mancuso Gómez, 4 de septiembre de 2012, M. P. Léster María González Romero, párr. 52.

significaría una violación directa a las normas constitucionales, dado el nivel jerárquico de la cual está revestida dicha normativa.

La violación directa a los lineamientos internacionales anteriormente referenciados, que se realice con ocasión, durante o como consecuencia de un conflicto armado[27] de la cual resulten victimas personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa[28], y que se acredite efectivamente que dichas consecuencias devienen de la ocurrencia de un conflicto armado, se entenderán como Crímenes de Guerra.

Expuesto lo anterior, esta Sala de Conocimiento, abordará el estudio y análisis de los hechos que fueron formulados por el Delegado Fiscal al postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, y de igual manera se efectuará la motivación respectiva sobre la decisión acerca del Control de Legalidad de la Aceptación de los cargos formulados.

3. PATRONES DE MACRO-CRIMINALIDAD:

Luego de revisado los hechos, y en ejercicio del control material de los mismos, la Sala procede a considerar si respecto a los mismos se le dio aplicación a la noción de Patrones de Macro criminalidad, conforme los criterios emitidos por la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia[29], al concretar que en la investigación presentada por la Fiscalía permita establecer lo siguiente: (1) El grado de responsabilidad de los integrantes del grupo armado organizado al margen de la ley que fueron objeto de juzgamiento; (2) La estructura; (3) El modus operandi; (4) Las políticas; (5) Las prácticas y (6) El contexto de la organización criminal. Así mismo, lo establecido en la Ley 1592 de 2012, el Decreto 3011 de 2013 y la Directiva 0001 de 2014 de la Fiscalía General de la Nación.

- **Contexto jurídico.**

El fundamento constitucional se encuentra en el Acto Legislativo 01 del 31 de julio del año 2012, el cual introduce el artículo 66 transitorio a la Carta Política con el fin de fortalecer los poderes de dirección y orientación de la actividad investigativa en cabeza de la Fiscalía General de la Nación.

Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia C-873 del año 2003 señaló que el Fiscal General de la Nación tiene competencia para expedir directrices referida a fijar prioridades, parámetros o criterios institucionales para el ejercicio de las actividades

---

[27] Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Sentencia contra Salvatore Mancuso Gómez, 31 de octubre de 2014, M. P. Alexandra Valencia Molina, párr. 685.
[28] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Art. 8.
[29] Radicado 45547- 16 de diciembre de 2015 - Sala Penal H. Corte Suprema de Justicia.

investigativas, razón por la cual es dable concluir que la adopción de criterios de priorización en el ámbito de la Justicia Transicional por parte de la fiscalía General de la Nación encuentra sustento normativo constitucional y jurisprudencial.

Con fundamento en esos principios se tiene que, para mayor eficacia en la gestión investigativa, y por ende en el fortalecimiento del Estado Social y de Derecho, es necesario adoptar y aplicar unos criterios de priorización en la aplicación material de justicia. Todo lo anterior, teniendo en cuenta que no todas las demandas de justicia que solicita la ciudadanía requieren el mismo tratamiento ya que existen situaciones o circunstancias materiales que las diferencian, verbigracia: calidad e interés de la víctima, el grado de responsabilidad, condición y jerarquía del investigado, clase de delito que se investigue, el impacto que haya producido en una comunidad determinada, la comisión de una conducta punible pluriofensiva en la que intervienen de manera coordinada una multiplicidad de sujetos regidos por principios de jerarquía y división de trabajo, entre otros factores.

Entonces tenemos que la actividad investigativa tradicional consistente en atender caso por caso deja de lado la totalidad de víctimas y victimarios, así como la de no comprender todos los delitos, tampoco correspondería con el principio de la búsqueda de la verdad integral tanto en la justicia ordinaria como en la justicia transicional.

Ello no es suficiente y más bien impide la implementación de una verdadera y aterrizada política criminal que conlleve a enfrentar y combatir el crimen organizado y las nefastas consecuencias que produce, relacionadas con la evolución del conflicto armado interno, por lo que se necesita concebir y poner en práctica una nueva política criminal encaminada a vencer dos cruciales y peligrosas situaciones: i.) enfrentar y vencer el fenómeno de la criminalidad masiva dentro del conflicto armado interno Colombiano; y ii.) Demostrar la relación existente entre distintos estamentos de la sociedad y la administración del Estado con el crimen organizado. Para la Fiscalía General de la Nación en lo que concierne al conflicto armado interno, la figura jurídico-penal de la priorización consiste en investigar de manera preferente a los máximos responsables de delitos cometidos por las organizaciones armadas actoras del conflicto interno nacional, teniendo en cuenta sus rituales y escenarios de horror que adquieren la connotación de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, por lo que atentan y vulneran los derechos fundamentales más que de una víctima individual o solitaria, de todo el basto conglomerado social nacional e internacional; con el propósito de ilustrar dicha barbarie para así evitar su repetición y contribuir de esta manera al hallazgo de la verdad sobre las conductas punibles consumadas. Ello sin desconocer, ni descuidar punibles perpetrados por miembros de dichas organizaciones criminales sin jerarquía ni mando, pero que de todas maneras son sujetos pasivos de la acción penal del Estado, ya que de otro modo se correría el riesgo de caer en impunidad.

De acuerdo con lo planteado precedentemente, derechos y garantías fundamentales de las víctimas, tales como la verdad, la justicia, la reparación, y el compromiso social de no repetición, son en esencia los fines últimos de la implementación y aplicación de la justicia transicional en Colombia. Son estos pilares o bastiones sobre los que verdaderamente se erige la aplicación de este modelo y son los que sostienen, materializan y efectivizan su vigencia. No lo es tanto la aplicación de una pena en gran medida concertada con los mismos sujetos pasivos de la acción penal lo que fundamentan su vigencia, son los sagrados derechos de las víctimas directas, indirectas y potenciales, legal y constitucionalmente reconocidas los que se tratan de salvaguardar y potencializar con la efectiva aplicación de este modelo jurídico penal de justicia transicional y su método de investigación que prioriza a los máximos responsables dentro de una estructura criminal de poder. Perseguir y lograr el esclarecimiento de las macro conductas delictivas, la victimización, la verdad completa, y sobre todo desatar el nudo gordiano de su composición y/o estructura es su norte.

En lo que respecta a la aplicación de las normas internacionales en esta materia, es necesario establecer primero cuáles son las conductas punibles sobre las que preferentemente recaen. El Código Penal Colombiano o ley 599 del año 2000 en su Título II de la parte Especial trata los Delitos contra Personas y Bienes Protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. El capítulo único de este Título contiene un total de 30 artículos que son: Homicidio en Persona Protegida, Lesiones en Persona Protegida, Tortura en Persona Protegida, Acceso carnal violento en Persona Protegida, Actos sexuales violentos en Persona Protegida, circunstancias de agravación, Prostitución forzada o esclavitud sexual, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, perfidia, actos de terrorismo, actos de barbarie, tratos inhumanos y degradantes y experimentos biológicos en persona protegida, actos de discriminación racial, toma de rehenes, detención ilegal y privación del debido proceso, constreñimiento a apoyo bélico, despojo en el campo de batalla, omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria, obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias, destrucción y apropiación de bienes protegidos, destrucción o utilización ilícita de bienes culturales y de lugares de culto, ataque contra obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, represalias, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, atentados a la subsistencia y devastación, omisión de medidas de protección a la población civil, reclutamiento ilícito, exacción o contribuciones arbitrarias y destrucción del medio ambiente. En atención a la ley 890 del año 2004, las penas imponibles por la comisión de alguna de estas conductas fueron aumentadas tanto en sus mínimos como en sus máximos.

El Derecho Internacional Humanitario, contenido en los cuatro convenios de Ginebra del año 1949, y en sus dos protocolos adicionales del año 1977, tiene como origen la respuesta normativa de carácter necesariamente internacional, que el hombre ha procurado dar para humanizar, mediante reglas mínimas de comportamiento, el más grave acto de barbarie como lo es la guerra y la resolución armada de conflictos. En

sus orígenes, pretendió la protección y el respeto de quienes estando en combates se encuentren en situaciones de inferioridad o indefensión manifiestas –heridos y enfermos- o de neutralización de todas sus capacidades bélicas por captura o rendición, muy pronto se elaboró el concepto de *"población civil",* para incluir a todos aquellos que no intervienen en la guerra o conflicto.

Desde el punto de vista de la regulación internacional, aplicable al Derecho Internacional Humanitario, este se ha clasificado en "Derecho de la Haya" y "Derecho de Ginebra"; en la primera especie, se incorpora toda la normatividad internacional limitativa de los medios y métodos de combate. Mientras que la segunda, comprende también las normas de carácter internacional concerniente a la protección del ser humano, en plenitud de dignidad y derechos, durante situaciones de conflicto armado. No obstante, hoy día el D.I.H. está determinado por la regulación contenida en los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, que abarca tanto la protección objetiva –Derecho de la Haya- como la tutela subjetiva –Derecho de Ginebra-, en el entendido de que las dos definiciones tienen como finalidad la salvaguarda del ser humano en estas situaciones, limitando y regulando el uso de la fuerza.

En el marco legal nacional tenemos que a partir de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, modificada por la Ley 1592 de 2012 y la Ley 1448 de 2011, se materializan el respeto a los derechos y garantías de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, como también los derechos y deberes de los ex integrantes de los grupo armados organizados al margen de la ley –GAOML- en procura de lograr la reinserción a la vida civil, en el marco del proceso de justicia transicional.

Esta normatividad permite la adopción de criterios de priorización de casos para el ejercicio de la acción penal, los cuales tienen un carácter vinculante, en la investigación y juzgamiento, orientados a esclarecer la existencia de patrones de macro criminalidad en el accionar de las organizaciones criminales, así como develar los contextos, las causas y los motivos, concentrando para ello los esfuerzos investigativos en los máximos responsables, adoptando la Fiscalía General de la Nación un *"Plan Integral de Investigación Priorizada".*

La Constitución Política Colombiana trata en sus artículos 212, 213, 214 y 215 los estados de excepción, siendo la declaratoria de un conflicto interno o no internacional una de sus variantes, y le establece límites a la aplicación de este mecanismo al anotar en el numeral 2º del artículo 214 que los derechos humanos y las garantías fundamentales no pueden ser suspendidos, en "todo caso" se han de respetar las reglas del Derecho Internacional Humanitario.

La Corte Constitucional Colombiana, mediante Sentencia C-802 del día 2 de octubre del año 2002, al revisar la constitucionalidad del decreto 1837 del 11 de agosto del

año 2002, por medio del cual el gobierno de turno decretó el estado de conmoción interior por 90 días, concluyó que el conflicto armado en Colombia existía, y se había incrementado con ocasión de la presencia de los grupos armados. Dijo la Corte:

> *"…la apreciación que hizo el señor presidente de la República sobre la gravedad de los hechos y su potencial para atentar de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, no se salió de los márgenes constitucionales, pues se ha presentado una expansión e intensificación del conflicto armado y de la violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario de dimensiones excepcionales. Los fenómenos de perturbación del orden público representan un cambio cualitativo, no solo cuantitativo en la naturaleza de los hechos de violencia que se han traducidos en ataques indiscriminados contra la población civil, así como en atentados selectivos contra funcionarios del Estado y contra líderes legítimos de la sociedad civil, debido a un aumento en la capacidad de los grupos armados al margen de la ley, presentándose una grave perturbación del orden público una amenaza inminente contra la convivencia ciudadana, dándole facultades extraordinarias ". Se aduce igualmente que dentro de los hechos que aumentan este conflicto armado se tiene: "ha alcanzado Colombia las más altas cifras de criminalidad, ataques contra ciudadanos indefensos, violación a los derechos humanos, comisiones de delitos de lesa humanidad como desaparición, secuestros y desplazamientos".*

Con fundamento en lo anterior, es claro que las actuaciones adelantadas dentro del marco de Ley de Justicia y Paz deben incorporar en los procesos una priorización de los casos en donde se seleccionen a los máximos responsables por la comisión de los delitos más graves, donde exista una exoneración parcial de responsabilidad, se trata de una regulación jurídica que no es muy distinta a los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, siempre y cuando no se trate de exoneraciones de responsabilidad general y absoluta.

3.1. Patrones de Macro Criminalidad en la Legislación

La estrategia de formulación de imputación y de formulación de cargos por patrones de macro criminalidad, tiene como origen, dos fuentes: (i) la nueva normatividad sobre Justicia Transicional en Colombia que tiene su punto de partida en el Acto Legislativo No. 01 de 2012, y en la Ley 1592 de 2012; y (ii) la nueva estrategia de investigación integral que adelanta la Fiscalía General de la Nación, a partir de la expedición de la Directiva No. 01 de 2012, proferida por el Despacho del Fiscal General de la Nación, en su calidad de titular de la acción penal.

El Acto Legislativo No. 01 de 2012 que erige con rango constitucional la Justicia Transicional en Colombia, dispone respecto de la facultad del Fiscal en este contexto,

lo siguiente: "Tanto los criterios de priorización como los de selección son inherentes a los instrumentos de justicia transicional. El Fiscal General de la Nación determinará criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal".

Con base en esa facultad constitucional y aquella que lo empodera del ejercicio de la acción penal, el Fiscal General de la Nación profiere la Directiva No.001 de 2012 mediante el cual se crea un nuevo sistema de investigación penal y de gestión de los criterios de situaciones y casos.

La Directiva define los conceptos de; *(i)* "política de priorización"; *(ii)* "contexto"; *(iii)* "patrones criminales"; y *(iv)* "máximo responsable", de la siguiente manera:

- La **política de priorización** es definida como el conjunto de "directrices y orientaciones encaminadas a introducir un cambio en la manera de cumplir las obligaciones constitucionales y legales a cargo de la Fiscalía General de la Nación que maximice el uso de la información y los recursos a su cargo".

- El **contexto** es el "marco de referencia contentivo de aspectos esenciales, acerca de elementos de orden geográfico, político, económico, histórico y social, en el cual se han perpetrado delitos por parte de grupos criminales, incluidos aquellos en los que servidores públicos y particulares colaboran con aquellos. Debe igualmente, comprender una descripción de la estrategia de la organización delictiva, sus dinámicas regionales, aspectos logísticos esenciales, redes de comunicaciones y mantenimiento de redes de apoyo, entre otros (…)".

- Los **patrones criminales** se definen como el "conjunto de actividades, medios logísticos, de comunicación y modus operandi delictivo, desarrollados en un área y periodo de tiempo determinados, de los cuales se pueden extraer conclusiones respecto a los diversos niveles de mando y control de la organización criminal. Su determinación ayuda a establecer el grado de responsabilidad penal de sus integrantes y hace parte fundamental de la construcción del contexto".

- El **máximo responsable** "(…) se aplica respecto a dos categorías diferentes, a saber: *(i)* aquel que dentro de la estructura de mando y control de la organización delictiva sabía o podía prever razonablemente la perpetración de crímenes en desarrollo de la ejecución de los planes operativos; y *(ii)* de manera excepcional, se trata de aquellas personas que han cometido delitos particularmente notorios, con independencia de la posición que ocupaban en la organización delictiva".

Estos cuatro conceptos, constituyen las principales categorías con base en las cuales se adelanta la nueva estrategia de investigación de la Fiscalía General de la Nación en el contexto de la Justicia Transicional; y han encontrado un desarrollo legal adicional, con la expedición de la Ley 1592 de 2012.

Dicha Ley desde su artículo 1, ordena la implementación de una nueva estrategia de investigación con base en la priorización, en los siguientes términos:

> *"Artículo 1. Modifíquese el artículo 2° de la Ley 975 de 2005 el cual quedará así:*
>
> *Artículo 2°. Ámbito de la ley, interpretación y aplicación normativa. La presente ley regula lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional, aplicando criterios de priorización en la investigación y el juzgamiento de esas conductas".*

Igualmente, el artículo 13 de la Ley dispone lo siguiente:

> *"Artículo 13. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 16ª del siguiente tenor:*
>
> *Artículo 16ª. Criterios de priorización de casos. Con el fin de garantizar los derechos de las víctimas, el Fiscal General de la Nación determinará los criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal que tendrán carácter vinculante y serán de público conocimiento."*

Respecto a los patrones de macro criminalidad, los contextos y los máximos responsables como requisitos de la estrategia de investigación, el mismo artículo 16ª de la Ley 975 de 2005 señala:

> *"Los criterios de priorización estarán dirigidos a esclarecer el patrón de macro criminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley y a develar los contextos, las causas y los motivos de este, concentrando los esfuerzos de investigación en los máximos responsables. Para estos efectos, la Fiscalía General de la Nación adoptará mediante resolución el "Plan Integral de Investigación Priorizada".*

Respecto a la Verdad, como uno de los pilares del proceso de Justicia y Paz que se satisface a partir de la develación de los patrones de macro criminalidad y de los contextos, el artículo 10 de la Ley 975 de 2005, señala:

> *"Artículo 10. Modifíquese el artículo 15 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así: Artículo 15. Esclarecimiento de la verdad. Dentro del procedimiento que establece la presente ley los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad*

sobre el patrón de macro criminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley y se pueda develar los contextos, las causas y los motivos del mismo".

Este conjunto normativo, pese a su claridad no ahonda en definiciones ni detalles respecto del alcance que procesalmente corresponde a los conceptos enunciados, sin embargo, fue desarrollado en la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, a través del Memorando No. 33 de agosto 21 de 2013, en cuyo documento se recogen y complementan los conceptos base que conforman la estrategia de investigación de la Fiscalía General de la Nación en el contexto de la Justicia Transicional. La identificación de los patrones de macro criminalidad es complementada con los conceptos de práctica y modus operandi como partes integrantes del patrón, los cuales son definidos así:

- La **práctica** es una conducta definida en dos sentidos: (i) constituida por tres elementos: sistemático, reiterado y generalizado; y a su vez (ii) como parte constitutiva del patrón. Es decir, una conducta, en la medida en que cumpla una o las tres características mencionadas, se erige como práctica y en ese sentido, forma parte de un patrón.

- Los **modus operandi** constituyen un elemento integrante de la práctica; la manera como se lleva a cabo una práctica, o la forma como se ejerce la práctica que, a su vez, como se dijo en la medida que sea sistemática, generalizada o reiterada, constituye un patrón.

Este método de identificación de los patrones es incorporado con base en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tres decisiones se citan como ejemplo (los dos primeros en el Memorando No. 33/13) para respaldar la investigación con base en la elaboración de contextos y la identificación de patrones de macro criminalidad: los casos *(i)* Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia; *(ii)* La Rochela vs. Colombia; y *(iii)* El Mozote vs. El Salvador.

Sumado a lo anterior, la jurisprudencia nacional en conocimiento de casos sobre Justicia Transicional se ha referido a la necesidad de implementar una nueva estrategia de investigación en el Proceso Especial de Justicia y Paz, que se base en la política de priorización y se refleje materialmente en las audiencias que se adelantan en el proceso.

La Corte Constitucional desde el Comunicado No. 4 de agosto 28 de 2013 sobre la sentencia C-579 de 2013 donde decide sobre la demanda en contra del Acto Legislativo No. 01 de 2012, se refirió al punto, así:

> *"La Corte estimó que a través de los mecanismos de (...) [selección y priorización] es posible modificar la estrategia de juzgamiento 'caso por caso', tradicionalmente utilizada por la justicia ordinaria, y en su lugar, acudir a un sistema que permite agrupar las graves violaciones de derechos en 'macroprocesos' e imputarlas a sus máximos responsables. Esto, a su vez, permite cumplir de forma más eficiente con el deber de proteger los derechos de las víctimas del conflicto."*

Luego, en el texto completo de la Sentencia C-579 de 2013, apoyó lo ya mencionado a través de una alusión directa a la motivación del Legislador en el Proyecto de Acto legislativo 01 de 2012, en los siguientes términos:

Consideraciones, Núm. 8.3.2.

> *"De esta manera, el planteamiento del Acto legislativo 01 de 2012 no se orienta a consagrar la impunidad de unos delitos, sino a cambiar la estrategia de investigación del "caso por caso", que dificulta la garantía del derecho a la justicia de las víctimas de violaciones masivas a los derechos humanos, por la estructuración de macroprocesos en los cuales exista una participación masiva de todas las víctimas y que no se estructuren por el azar, sino en virtud de investigaciones con base en contextos y en el análisis de estructuras de criminalidad organizada.*
>
> *La ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes evidencia precisamente que la expedición del Acto legislativo 01 de 2012 se motivó en los problemas que se han presentado en la investigación "caso a caso" en los procesos de Justicia y Paz, en los cuales solamente se habían proferido cuatro (4) sentencias de un total de 39.546 hechos confesados, por lo cual en palabras de dicha ponencia serían necesarios más de cien (100) años para poder sancionar a todos los responsables, lo cual tendría muy poco sentido, pues en ese momento ya habrían fallecido las víctimas y los propios victimarios.*
> *(...)*
>
> *Como ya se señaló, esta [nueva] estrategia consiste en la construcción de macroprocesos que responden a una serie de elementos comunes determinados por factores relacionados con la gravedad y la representatividad como el lugar, el tiempo, la forma de comisión, los sujetos pasivos o grupos sociales afectados, los sujetos activos, la escala de comisión o la evidencia disponible, los cuales deberán ser determinados por la ley estatutaria".*

En sentido similar, y con un carácter específico respecto de la manera como se deben llevar a cabo las audiencias del proceso de Justicia y Paz a partir de la expedición de

la Ley 1592 de 2012, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en decisión de mayo 29 de 2013, con ponencia del doctor José Luis Barceló Camacho, expresó lo siguiente:

> *"La Ley 1592 de 2012, que modificó la Ley 975 de 2005, constituye fundamentalmente una herramienta jurídica concebida para agilizar el proceso de Justicia y Paz, fijarles un nuevo contenido a las obligaciones legales de los procesados y satisfacer de mejor forma los intereses de reparación de las víctimas.*
>
> *Por ello, la estrategia de investigación de los crímenes de sistema incorporó un cambio sustancial, al consagrar que la verdad ya no se busca desde la perspectiva de los hechos individuales de cada perpetrador, con esquemas de investigación tradicionales, sino sobre* ***los contextos, las causas y los motivos de los patrones de macrocriminalidad en el accionar de los grupos a los que pertenecieron. (Negrilla por fuera del texto).***
>
> Así, la citada Ley 1592, en aras de materializar el principio de celeridad y alcanzar los fines de la justicia transicional, consagró importantes cambios, entre los que cabe citar la aplicación de criterios de priorización de casos dirigidos a establecer los patrones de macro criminalidad y develar los contextos, así como la supresión de una de las audiencias preliminares, quedando solamente la de formulación de imputación y la concentrada de formulación y aceptación de cargos, con el respectivo control formal y material de dicha aceptación, sin que para esto último se requiera de providencia interlocutoria que así lo reconozca. A lo anterior habrá de seguir inmediatamente, dentro de la misma audiencia concentrada, la celebración del incidente para la identificación de las afectaciones causadas a las víctimas (artículo 23)".
>
> (...)
>
> *"(...) porque la finalidad de la norma modificatoria [-Ley 1592 de 2012-] es la de resolver las dificultades de todo orden que pesan actualmente sobre las actuaciones en curso, así como brindar a las numerosas víctimas que hoy se encuentran reconocidas como tales y a los mismos postulados una expectativa razonable de satisfacción de sus intereses y de obtener sentencia pronta, dado que los 8 años de vigencia de la norma original no han sido del todo idóneos para ello".*

3.1.2. Patrones de Macro Criminalidad dentro del Presente Proceso.

Cuando se aborda el tema de los patrones de macro criminalidad, no se pretende que esta estrategia o metodología investigativa conlleve a la falta de investigación de

actores inmediatos tales como los llamados patrulleros o miembros rasos que forman parte de las estructuras de dichas organizaciones criminales. Es muy importante tener en cuenta y dilucidar esta circunstancia, para no generar impunidad en la investigación criminal, ni perder de vista unos eslabones claves e importantes en la cadena de ejecución inmediata de los crímenes. Por ello es necesario que se identifique clara y totalmente el quehacer de esos miembros de inferior rango dentro de la organización ilegal, ya que las ejecuciones materiales de sus conductas ilícitas, cualquiera que sea la obediencia o la línea de mando que obedezcan igualmente debe ser penalizada. Compete entonces al legislador identificar y limar esa tensión y establecer conductos para superarla mediante técnicas que sean claros de selección y priorización dentro de la investigación penal.

La selección de casos y la priorización son instrumentos mediante los cuales el Estado busca garantizar el deber de investigar y aplicar sanciones a los máximos responsables por la comisión de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que se hayan ocasionados durante y con ocasión del conflicto armado interno de un país. En el caso colombiano estos mecanismos se encuentran consagrados como se reitera en el artículo 66 transitorio de la Constitución Política tal como lo establece el acto legislativo 01 del año 2012, –comisión asesora de política criminal del 31 de marzo del año 2012; de la organización de los Estados Americanos, del 19 de octubre del año 2011-. Tal como lo deja sentado la exposición de motivos del mencionado acto legislativo del año 2012.

Esto permite darle una dinámica investigativa diferente al proceso transicional de la que se maneja en un proceso penal ordinario, debido a que resulta mucho más eficaz y rápida la obtención de un veredicto definitivo y esperado por un vasto número de víctimas.

Por lo arriba esbozado, la Colegiatura considera que conforme a la sustentación de la Fiscalía y la exhibición del material probatorio fue posible la construcción de los patrones, y los criterios de selección y priorización de casos, teniendo en cuenta los criterios objetivos, subjetivos, el grado de responsabilidad del postulado y la selección de las más graves afectaciones, que fueron imputados a los mayores responsables.

De lo anterior se puede concluir que, el escrito de acusación, las audiencias preliminares ante el Magistrado de control de garantías y la diligencia de legalización de los cargos, cumplieron con cada uno de los requisitos de ley, por tanto, el control puede continuar respecto de los demás elementos objeto de examen.

4. DECISIÓN LEGALIZACIÓN DE CARGOS.

Tal y como se anotó en precedencia de conformidad con el artículo 19 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 21 de la Ley 1592 de 2012, en la audiencia

concentrada celebrada dentro del presente proceso se ejerció el control material y formal de la totalidad de los cargos formulados en contra del postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ.

La solicitud de legalización comprende la aceptación de responsabilidad para el postulado mencionado MANCUSO GÓMEZ, por el delito de Concierto para delinquir agravado, y otros comportamientos agrupados en cuatro Patrones de Macro criminalidad: *(i)* Homicidio, *(ii)* Desaparición Forzada, *(iii)* Violencia basada en género y, *(iv)* violencia contra comunidades indígenas.

Teniendo en cuenta además la compresión de los controles material y formal de la aceptación de los cargos formulados se considera y resuelve la legalización pedida, atendiendo que los distintos procesos de adecuaciones típicas se derivaron de las circunstancias que dan cuenta los siguientes acontecimientos:

4.1. CONCIERTO PARA DELINQUIR

- **Salvatore Mancuso Gómez.**

Tal y como se señaló en acápites anteriores, la incursión del postulado en la conformación de grupos de autodefensas data del año 1992, en el año 1993, luego del fallecimiento de Mayor Walter Fratini, Salvatore Mancuso empezó a financiar directamente el grupo de autodefensa con recursos propios y con donaciones de otros ganaderos y comerciantes de la región, creando una infraestructura que permitió mantener comunicación permanente entre los ganaderos y el ejército y de esta forma incrementar los patrullajes conjuntos entre el ejército y los miembros del grupo de autodefensa; luego entró a conformar lo que se denominó como “Casa Castaño”.

Mediante enfrentamientos armados sostenidos en la zona del Nudo de Paramillo, consolidó el control de esa zona del país, para luego apropiarse, en compañía de los hermanos Castaño, del cultivo de la hoja de coca ejercido por los campesinos de la región, con el propósito de vender la misma a narcotraficantes y así lograr una fuente de financiación del grupo paramilitar y, logró conformar lo que se conoció como la Primera Dirección de Autodefensas, entrando a formar parte de las denominadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá – ACCU-, comandadas por Carlos Castaño Gil, Rodrigo Tovar Pupo, Alias “Jorge 40”, “Hernando H2” y, Carlos Mauricio García, Alias “Rodrigo Doble Cero”, lo que permitió finalmente el nacimiento el 18 de abril de 1997 de las Autodefensas Unidas de Colombia, como resultado de la Unión de las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio, las Autodefensas Unidas de Sucre, Antioquia y Córdoba, el Grupo de Tolú, de alias “Cadena”, del “Guamo” y de a. “El Alemán”, y asumir en el año 1997 el liderazgo político de la organización, procurando el inicio de un proceso de paz, motivado además por la inclusión de las AUC dentro del listado de organizaciones terroristas reconocidas como tal internacionalmente, hasta la desmovilización del Bloque Catatumbo de las AUC, en la Finca “Brisas de Sardinata”, ubicada en el

corregimiento "Campo Dos" del municipio de Tibú – Norte de Santander, bajo la comandancia de Salvatore Mancuso Gómez, quien se desmovilizó en compañía de 1433 miembros de ese GAOML, hecho que tuvo ocurrencia en el año 2004.

No obstante, **Frente al delito de concierto para delinquir,** tenemos que el despacho 54 de Justicia y Paz en audiencia de Fecha 3 de junio de 2009, le Imputó el Delito de Concierto para Delinquir Agravado frente al Postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, el cual corresponde desde el mes de mayo de 1992 hasta el día 10 de diciembre de 2004, cargo que se encuentra legalizado en la sentencia de fecha 31 de octubre de 2014.

En ese orden, es claro que dentro de las presentes diligencias se encuentra plenamente acreditada la pertenencia del postulado al grupo armado al margen de la ley, sin embargo el representante del ente fiscal se abstuvo de formular el cargo por el delito de Concierto para delinquir agravado debido a que tal y como se anotó en el párrafo precedente, en contra del postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ se han proferido sentencias condenatorias en la jurisdicción ordinaria por el delito de Concierto para delinquir agravado, por hechos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a las Autodefensas Unidas de Colombia, las cuales cobijan diferentes marcos temporales hasta su desmovilización del GAOML.

Declarado y resuelto lo pertinente en torno al delito de Concierto para delinquir y clarificado con suficiencia la proyección de los comportamientos en relación con el D.I.H y los Derechos Humanos, asume la Sala el pertinente pronunciamiento en cuanto a la legalidad de los distintos procesos de adecuaciones típicas y formas de participación atribuidas por la Fiscalía Delegada, conforme a las condiciones modales y temporo espaciales en la que se dieron los distintos eventos delictivos precisando que las mismas fueron agrupadas en cinco patrones de macro criminalidad a saber: *(i)* Homicidio, *(ii)* Desaparición Forzada, *(iii)* Desplazamiento Forzado *(iv)* Violencia basada en género y, *(v)* violencia contra comunidades indígenas.

4.2. LEGALIZACIÓN PATRON DE MACROCRIMINALIDAD DE HOMICIDIO.

Hecho N° 1. Homicidio de Tomas Eduardo Morales Medina

Carpeta: 591834

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Sicariato

Situación Fáctica: El 28 de mayo del 2000 siendo las 20:30 horas aproximadamente, Tomas Eduardo Morales Medina (de 36 años, dedicado a labores de albañilería), se encontraba en inmediaciones del barrio Paraíso de Riohacha (La Guajira), cuando fue abordado por hombres armados que se movilizaban en una camioneta Ford, quienes

le dispararon de manera indiscriminada con arma de fuego, causándole la muerte de manera inmediata.

Delitos: La Fiscalía formuló cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

I1. informe de Policía Judicial N° 9-332820 de fecha 23 de enero de 2020, rendido por el funcionario Miguel Adolfo Cabrera Pertuz.

2.Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 8.747.796 de Tomas Eduardo Morales Medina.

3.Acta de entrega de cadáver de fecha 29 de mayo de 2000 del occiso Tomas Morales Medina.

4.Certificado del proceso ordinario N° 8863 donde consta la investigación en la justicia permanente por el Homicidio de Tomas Eduardo Morales Medina.

5.Denuncia N° 648 realizada ante el Departamento de policía de La Guajira por el Homicidio de Tomas Eduardo Morales Medina.

6.Consulta Vivanto id 24440186 de Paulina Morales Medina.

7.Registro civil de defunción indicativo serial N° 2023787 de fecha 30 de mayo de 2000 del occiso Tomas Eduardo Morales Medina, expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro.

8.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 690980 de Alexander Enrique Morales Medina.

9. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 691150 de Alias Judith Morales Medina.

10. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 662481 de Paulina Morales Medina.

11. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 691005 de Rafael Morales Medina.

12. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 662479 de Tomas Eduardo Morales Medina.

13. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 691000 de Udosio Antonio Morales Medina.

14. Entrevista de fecha 4 de noviembre de 2019 realizada al sr. Udosio Antonio Morales Medina. (folio N°18 de documentos varios).

15. Versión libre de fecha 20 de enero de 2023 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Hecho N° 2. Homicidio de Libardo Antonio Pacheco Gómez

Carpeta: 92923

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Sicariato

Situación Fáctica: El 1 de febrero de 2001, Libardo Antonio Pacheco Gómez, quien se dedicaba a labores del campo como administrador de una finca, se encontraba a las afueras de su lugar de trabajo en el municipio de Astrea (Cesar) cuando fue abordado por hombres armados pertenecientes a las Autodefensas que le dispararon con arma de fuego, causándole la muerte.
Delitos: La Fiscalía formuló cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1.Informe de Policía Judicial N° 9-332820 de fecha 23 de enero de 2020, rendido por el funcionario Miguel Adolfo Cabrera Pertuz.

2.Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 8.747.796 de Tomas Eduardo Morales Medina.

3. Acta de entrega de cadáver de fecha 29 de mayo de 2002 del occiso Tomas Morales Medina.

4. Certificado del proceso ordinario N° 8863 donde consta la investigación en la justicia permanente por el Homicidio de Tomas Eduardo Morales Medina.

5. Denuncia N° 648 realizada ante el Departamento de policía de La Guajira por el Homicidio de Tomas Eduardo Morales Medina.

6. Consulta Vivanto id 24440186 de Paulina Morales Medina.

7. Registro civil de defunción indicativo serial N° 2023787 de fecha 20 de mayo de 2000 del occiso Tomas Eduardo Morales Medina, expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro.

8. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 690980 de Alexander Enrique Morales Medina.

9. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 691150 de Alis Judith Morales Medina.

10.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 662481 de Paulina Morales Medina.

11.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 691005 de Rafael Morales Medina.

12.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 662479 de Tomas Eduardo Morales Medina.

13.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 691000 de Udosio Antonio Morales Medina.

14.Entrevista de fecha 04-11-2019 realizada al sr. Udosio Antonio Morales Medina. (folio N°18 de documentos varios).

15.Versión libre de fecha 20 de enero de 2023 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Hecho N° 3. Homicidio de Ender José Sánchez Arpushana y Gilberto Pinay González.

Carpeta: 148426

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Incursión armada

Situación Fáctica: El 17 de marzo de 2002, un grupo de hombres armados incursionó violentamente en la "ranchería Kepischon" ubicada en Uribia - La Guajira- disparando de manera indiscriminada, impactando con arma de fuego a los señores Eder José Sánchez Arpushana y Jiliberto Epinayu González quienes fallecieron debido a las heridas.

Delitos: La Fiscalía formuló cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C. P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

Víctima: Ender José Sánchez Arpushana

1. Informe de Policía Judicial N° 11-49213 de fecha 11 de septiembre de 2015, rendido por el funcionario Sonia González Garrido

2.Informe de Policía Judicial N° 11-82877 de fecha 11 de marzo de 2016, rendido por el funcionario José Gregorio Acosta Herrera.

3.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 148426 de Efraín Sánchez Arpushana.

4.Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 17.867.722 de Efraín Sánchez Arpushana.

5.Registro Civil de Defunción indicativo serial N° 2024252 de fecha 24-03-2002 del occiso Ender José Sánchez Arpushana, expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro.

6.Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 17-869.649 de Ender José Sánchez Arpushana.

7.Versión libre de fecha 12 de febrero de 2020 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

8.Victima: Gilberto Pinay Y González

Hecho N° 4 Homicidio de José Del Carmen Jaimes Madero

Carpeta: 592513

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual.

Modus operandi: interceptación.

Situación Fáctica: El 1º de junio de 2002, en momentos en los que José Del Carmen Jaimes Madero se encontraba laborando como taxista, en inmediaciones de la carrera 22 con calle 5 en Maicao (La Guajira), fue abordado por dos miembros del Grupo armado ilegal Frente Contrainsurgencia Wayuu, quienes venían huyendo tras perpetrar un homicidio en la calle 8 con carrera 9 y por tal razón le exigieron que los sacara del lugar y, ante su negativa, procedieron a dispararle con arma de fuego ocasionándole la muerte.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1, Informe de Policía Judicial N° 9-332827 de fecha 27 de enero de 2020, rendido por el funcionario Miguel Adolfo Cabrera Pertuz.

2.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 664019 de Brailys Jaimes Sierra.

3.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 664012 de Breiner José Jaimes Sierra.

4.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 664000 de Rosa Emilia Sierra Acuña.

5.Entrevista de fecha 8 de noviembre de 2019 realizada a la Sra. Rosa Emilia Sierra Acuña.

6.Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 39.092.661 de Rosa Emilia Sierra Acuña.

7.Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 77.030.800 de José Del Carmen Jaimes Madero.

8.Informe de la Consulta Web Service de la Registraduría Nacional identificación 77.030.800 de José Del Carmen Jaimes Madero.

9.Certificado de fecha 6 de mayo de 2009, expedido por La Fiscalía 04 de Maicao con radicado N° 998 donde consta la investigación en la justicia permanente por el Homicidio de José Del Carmen Jaimes Madero

10.Acta de inspección a cadáver N° 101 de fecha 01-06-2002 del Occiso José Del Carmen Jaimes Madero.

11.Protocolo de necropsia N° 098-2002 de fecha 01-06-2002 del occiso José Del Carmen Jaimes Madero, expedido por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

12.Registro Civil de Defunción indicativo serial N° 5389123 de fecha 01-06-2002 del occiso José Del Carmen Jaimes Madero, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

13.Certificado donde consta la muerte violenta de José Del Carmen Jaimes Madero, expedido por la personería de Maicao La Guajira el día 12-05-2009.

14.Versión libre de fecha 18-04-2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Hecho N° 5 Homicidio de Robert Romero Baquero

Carpeta: 567474

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Sustracción por fuerza

Situación Fáctica: El día 17 de junio de 2002, el señor **Robert Romero Baquero** se desplazaba en transporte público por la vía que de Matitas conduce a Riohacha, a la altura del puente Comejenes, cuando el vehículo fue interceptado en un retén ilegal instalado por miembros del grupo armado ilegal Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con injerencia en esa zona del departamento de La Guajira.

En dicho retén, los integrantes del grupo armado ordenaron detener el vehículo, hicieron descender a los pasajeros y procedieron a solicitarles los documentos de identificación. Luego de revisarlos, permitieron que los pasajeros volvieran a abordar el vehículo, excepto al señor Robert Romero Baquero, quien fue retenido por los armados y trasladado en otro vehículo con rumbo hacia el municipio de Maicao.

Durante su cautiverio, el señor Romero Baquero fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, consistentes en haberle amarrado las manos y provocado múltiples escoriaciones en la espalda, brazos y piernas. Posteriormente, el 19 de junio de 2002, aproximadamente a las 2:00 a.m., fue ejecutado extrajudicialmente mediante impactos de arma de fuego en la cabeza. Su cuerpo fue abandonado, sin documentos de identificación, en una trocha de acceso al barrio Dividivi, en el kilómetro 2 de la vía Riohacha–Valledupar.

El paradero de Robert Romero Baquero permaneció desconocido por su familia durante más de una década, hasta el 10 de junio de 2014, fecha en la cual el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses les entregó sus restos mortales, luego de ser exhumados y debidamente identificados como los de un cadáver que había sido inhumado como NN en el cementerio de Riohacha.

Previo a su desaparición y muerte, la víctima había recibido amenazas, como consecuencia de actividades de carácter investigativo que realizaba tras haber

culminado su servicio militar obligatorio en el Ejército Nacional. Se había reportado que, en la vivienda familiar, ubicada en Matitas, fueron dejados letreros intimidatorios, en los cuales se les instaba a abandonar el pueblo. Por temor, y una vez consumada la desaparición y posterior muerte de Robert Romero Baquero, su núcleo familiar se desplazó forzadamente.

Delitos: Con fundamento en los anteriores hechos, la Fiscalía General de la Nación formula cargos al postulado **Salvatore Mancuso Gómez**, en calidad de **autor mediato**, por los siguientes delitos:

Homicidio en persona protegida (artículo 135 del Código Penal), en **concurso heterogéneo con actos de terrorismo** (artículo 144 del Código Penal), **tratos crueles, inhumanos y degradantes** (artículo 173 del Código Penal), bajo la circunstancia de **mayor punibilidad** consagrada en el numeral 5 del artículo 58 del Código Penal —Ley 599 de 2000—, referida a la comisión del delito con sevicia o aprovechándose de la indefensión de la víctima.

Elementos Materiales Probatorios:

1.Informe de Policía Judicial N° 9-617788 de fecha 17-04-2023, rendido por el funcionario Sonia María González Garrido.

2.Diligencia de inspección judicial con examen del cuerpo N° 094 de fecha 19-06-2002 del occiso N.N.

3.Protocolo de necropsia N° 02-089 de fecha 19-06-2002 del occiso N.N expedido por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

4.Entrevista 13-04-2023 realizada al sr. Luis Deluque Vaquero.

5.Certificado de fecha 24-04-2009 expedido por La Fiscalía 2 seccional de Riohacha radicado N° 36940 donde consta la investigación en la justicia permanente por el Homicidio de Robert Baquero Romero.

6.Informe de Policía Judicial de fecha 09-07-2007, rendido por el funcionario Francisco Javier Martínez Bonilla.

7.Registro SIRDEC 0040 de fecha 20-04-2007 de Robert Baquero Romero.

8.Versión libre de fecha 25-06-2013 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde confiesa el hecho.

9.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 344896 de Luis Elimines Deluque Baquero.

10.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 345021 de Yadiris Deluque Baquero[14.]

11.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 344473 de Adriana Puerta Vaquero.

12.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 60798 de Yelenis Suarez Rendon.

13.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 62816 de Elizabeth Romero.

Hecho N° 7[30] Homicidio de Rafael Enrique Oñate Benjumea

Carpeta: 516093

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Sicariato

Situación Fáctica: El 29 de septiembre de 2002, Rafael Enrique Oñate Benjumea estaba afuera de su vivienda, ubicada en la calle 8 con carrera 3 de Maicao (La Guajira), cuando fue impactado por varios proyectiles de arma de fuego que le causaron la muerte, los cuales provenían de un enfrentamiento armado entre hombres pertenecientes a las Autodefensas y otro grupo que estaba en la zona.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1.Informe de Policía Judicial N° 44-18344 de fecha 02-01-2015, rendido por el funcionario José Acosta Herrera.

2.Acta de inspección a cadáver N° 175 de fecha 30-09-2002 del occiso Rafael Enrique Oñate Benjumea.

3.Protocolo de necropsia N° 170-2002 ULM de fecha 29-09-2002 del occiso Rafael Enrique Oñate Benjumea, expedido por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

4.Informe de la Consulta Web Service de la Registraduría Nacional identificación N° 17.847.046 de Rafael Enrique Oñate Benjumea.

5.Registro Civil de Defunción indicativo serial N° 5389926 de fecha 29-09-2002 del occiso Rafael Enrique Oñate Benjumea, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

6.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 714658 de Nayla María Oñate Acuña.

7.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 72655 de Divina De Jesús Acuña Altamar.

8.Entrevista de fecha 26-11-2014 realizada a la Sra. Divina Acuña Altamar. (folio N°8 del documento registro N°72655).

9.Entrevista de fecha 26-11-2014 realizada a la Sra. Liceth Oñate Acuña (folio N°10 del documento registro N°72655).

10.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 542501 de Liceth Paola Oñate Acuña.

[30] Nota: El Hecho No.6 fue retirado por la representante de la Fiscalía General de la Nación.

11.Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 1.124.026.318 de Liceth Paola Oñate Acuña.

12.Versión libre de fecha 18-04-2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Hecho N° 8 Homicidio de Manuel De Jesús Calvo Muñoz

Carpeta: 303113

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Sicariato

Situación Fáctica: El 15 de octubre de 2002 en horas de la tarde, Manuel Calvo Muñoz se encontraba en compañía de un familiar en frente de su residencia ubicada en la calle 42 con carrera 9 esquina del barrio Los Almendros de Riohacha (La Guajira), cuando fue abordado por dos miembros de las autodefensas, quienes sin mediar palabra le dispararon en repetidas oportunidades causándole la muerte de manera inmediata.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1.Informe de Policía Judicial N° 11-61969 de fecha 21-11-2015, rendido por el funcionario Servio Tulio Peña Cabeza.

2.Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 19.596.498 de Manuel De Jesús Calvo Muñoz.

3.Acta de inspección a cadáver N° 172 de fecha 15-10-2002 del occiso Manuel De Jesús Calvo Muñoz

4.Certificado de la Personería municipal de Riohacha de fecha 06-10-2003.

5.Consulta SIJUF radicado 18837 por el Homicidio de Manuel De Jesús Calvo Muñoz.

6.Copia de expediente n°18837 por el Homicidio de Manuel De Jesús Calvo Muñoz.

7.Protocolo de necropsia del occiso Manuel De Jesús Calvo Muñoz expedido por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (ilegible)

8.Registro Civil de Defunción indicativo serial N° 2024426 de fecha 15-10-2002 del occiso Manuel De Jesús Calvo Muñoz expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro.

9.Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 1.081.786.691 de Carmen De Jesús Calvo Muñoz.

10.Registro Civil de Nacimiento indicativo serial N° 22227585 de Carmen De Jesús Calvo Muñoz.

11.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 614634 de Albida Esther Calvo Muñoz.

12.Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 22.580.661 de Albida Esther Calvo Muñoz.

13.Entrevista de fecha 18-11-2015 de albida Esther Calvo Muñoz.

14.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 60287 de Zunilda Raquel Calvo Muñoz.

15.Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 57.271.029 de Zunilda Raquel Calvo Muñoz.

16.Informe de Policía Judicial N° 11-62566 de fecha 19-11-2015, rendido por el funcionario Libardo Salgado Acosta.

17.Entrevista de fecha 19-11-2015, realizada a la Sra. Zunilda Raquel Calvo Muñoz.

18.Versión libre de fecha 12 de febrero de 2020 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Hecho N° 9 Homicidio de Elvis Darío Barros Mejía

Carpeta: 351503

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Sicariato

Situación Fáctica: El día 27 de noviembre de 2002, siendo aproximadamente las 20:20 horas, el señor Elvis Darío Barros Mejía salió de su lugar de residencia con el propósito de realizar una compra. Mientras transitaba por la calle 20 con carrera 14 del municipio de Riohacha, La Guajira, fue testigo presencial de un atentado armado perpetrado por hombres que se movilizaban en una motocicleta, quienes abrieron fuego contra el ciudadano Jorge Eliecer Avendaño Barrios, quien se encontraba sentado frente a su vivienda.

Al percatarse de la situación, Elvis Darío Barros Mejía emprendió la huida. No obstante, los agresores, al notar que había sido testigo del ataque, lo persiguieron y le dispararon, impactándolo a la altura del cuello, para luego huir del lugar.
Como consecuencia del disparo recibido, el señor Barros Mejía sufrió una parálisis corporal, siendo trasladado de inmediato a un centro hospitalario, donde permaneció internado por más de un mes. A pesar de recibir atención médica, fue dado de alta en delicadas condiciones de salud. Posteriormente, el día 31 de enero de 2003, falleció como resultado de las complicaciones médicas derivadas de la herida por arma de fuego sufrida en el atentado.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1.Informe de Policía Judicial N° 11-61972 de fecha 21-11-2015, rendido por el funcionario Servio Tulio Peña Cabeza.

2.Certificado de fecha 18-12-2015, expedido por la Registraduría Nacional, donde consta que la cédula 17.807.280 perteneció al Sr. Elvis Darío Barros Mejía y actualmente se encuentra cancelada por muerte.

3.Registro Civil de Defunción indicativo serial N° 05933473 de fecha 31-01-2003 del occiso Elvis Darío Barros Mejía, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

4.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 307071 de Blanca Inés Fragozo Bornacelly.

5.Entrevista de fecha 18-11-2015, realizada a la Sra. Blanca Inés Fragozo Bornacelly.

6.Versión libre de fecha 18-04-2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

7.Historia clínica de Elvis Darío Barros expedida por la IPS Clínica General Del Norte de fecha 30-11-2002.

Hecho N° 10 Homicidio de Francisco Epiayú (víctima de homicidio) Manuel Epiayú y su Núcleo Familiar (Desplazamiento Forzado)

Carpeta: 140944

Política: Control de recursos

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Incursión armada

Situación Fáctica: El 14 de diciembre de 2002, siendo aproximadamente las 10:00 am en la Ranchería Manantial, ubicada en jurisdicción del corregimiento Carraipía-Maicao (Guajira), miembros de las autodefensas que se movilizaban en varios vehículos torturaron y asesinaron mediante disparos de arma de fuego al miembro de la etnia indígena Wayúu Francisco Epiayú, posteriormente procedieron hurtar sus bienes, como consecuencia de estos hechos se desplazaron su hermano Manuel Epiayú su núcleo familiar hacia Maracaibo (Venezuela), dejando abandonados cultivos de maíz, patilla y frijol, algunos chivos y varios chinchorros.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Homicidio en Persona Protegida descrito en el Art.135 cp. en concurso con Destrucción y Apropiación De Bienes Protegidos, art 154 cp. Tortura en Persona Protegida Art 137 cp. Deportación, Expulsión,

Traslado o Desplazamiento forzado de población civil art 159.c.p bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1.Informe de Policía Judicial N° 11-50118 de fecha 09-09-2015 rendido por el funcionario Servio Peña Cabeza.

2.Solicitud de análisis de Elementos Materiales Probatorios: oficio N° 153 de fecha 25-08-2015, rendido por el funcionario Servio Tulio Peña Cabeza.

3. Informe de Policía Judicial N° 11-49205 de fecha 11-09-2015, rendido por la funcionaria Sonia González Garrido.

4. Informe de Policía Judicial N° 288 de fecha 21-11-2013, rendido por el funcionario Oscar Rincón Pretell.

5. Informe de Policía Judicial N° 44-12820 de fecha 30-12-2013, rendido por el funcionario José Acosta Herrera.

6. Informe de Policía Judicial N° 11-50118 de fecha 09-09-2015, rendido por el funcionario Servio Tulio Peña Cabeza.

7. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 140944 de Manuel Epiayú.

8. Entrevista de fecha 16-08-2013 realizada al Sr. Manuel Epiayú.

9. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 17.841.823 de Manuel Epiayú.

10.Versión libre de fecha 20-09-2019 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Hecho N° 11 Homicidio de Mom Pushaine Ipuacea (Víctima de homicidio)

Amalia Pushaina (Desplazamiento Forzado)

Carpeta: 357604

Política: Control de recursos

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Incursión armada

Situación Fáctica: El 3 de enero de 2003, el señor Mon Pushaine Ipuacea se encontraba en la Ranchería Paguasira donde residía en el municipio de Maicao cuando hombres pertenecientes a las Autodefensas le hurtaron uno de sus animales de granja y al este tratar de recuperarlo fue agredido a golpes, lo ahorcaron y dejaron su cuerpo sin vida amarrado a un árbol de palma. Refiere la señora Amalia Pushaina que no se le informo a ninguna autoridad para que realizaran las diligencias de levantamiento de cadáver y que fue enterrado en el cementerio indígena marariwo, como consecuencia de este y otros hechos de violencia contra su etnia y allegados, miembros de la familia del señor Mom como la señora Amalia Pushaina se vieron obligados a salir desplazados de la zona dejando abandonadas sus pertenencias, así como sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Homicidio en Persona Protegida descrito en el Art.135 Ley 599 De 2000 en concurso con Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población civil Art.159, Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art 154 C.P. Tortura en Persona Protegida Art 137 cp. bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1.Informe de Policía Judicial N° 44-11762 de fecha 14-11-2013 rendido por el funcionario Oscar Rincón Pretell.

2.Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 1.787.151 de Mon Pushaine Ipuacea

3.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 60579 de Amalia Pushaina Epiayú.

4.Entrevista de fecha 25-10-2013, realizada a Amalia Pushaina Epiayú.

5.Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N°40.977.933 de Amalia Pushaina Epiayú.

6.Versión libre de fecha 18-04-2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Hecho N° 12. Homicidio de Liney Saudith Prado Velásquez

Carpeta: 411524

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Sicariato

Situación Fáctica: El 7 de enero del año 2003, en Maicao-La Guajira, miembros de las autodefensas asesinaron a Liney Saudith Prado Velásquez mientras esta se encontraba en su residencia mediante disparos de arma de fuego.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1.Informe de Policía Judicial N° 9-360582 de fecha 06-07-2020, rendido por el funcionario Leonardo Pérez Robayo.

2.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 380826 de Doracil Del Carmen Prado Velásquez.

3.Entrevista de fecha 03-07-2020, realizada a Doracil Del Carmen Prado Velásquez.

4.Informe de la Consulta Web Service de la Registraduría Nacional identificación N° 26.215.728 de Liney Saudith Prado Velásquez. (documento adjunto en el informe).

5.Versión libre de fecha 20-09-2019 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Hecho N° 13. Homicidio de Adalfonso Arrieta Tobías
Carpeta: 113903
Política: Control Social
Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Sicariato

Situación Fáctica: El 21 de febrero del año 2003, el señor Adalfonso Arrieta Tobías salió de su vivienda a laborar como vendedor informal de agua en la vía que de Maicao conduce al municipio de Uribia, al terminar la jornada laboral regresó a depositar el agua a su lugar de almacenamiento y a las 10 de la noche salió con destino a su vivienda, pero horas más tarde, fue encontrado su cuerpo sin vida con impactos de proyectil de arma de fuego en la vía, refiere el Protocolo de necropsia que tenía 3 impactos de arma de fuego y la causa de la muerte fue trauma cráneo encefálico producidas por proyectil de arma de fuego propinados por miembros de las autodefensas que operaron en la zona.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1.Informe de Policía Judicial N° 4-18938 de fecha 05-03-2015.

2.Acta de inspección a cadáver N° 040 de fecha 20-02-2003 del occiso Adalfonso Arrieta Tobías.

3.Protocolo de necropsia N° 038-03 de fecha 21-02-2003 del occiso Adalfonso Arrieta Tobías, expedido por Instituto Nacional De Medicina Legal y Ciencias Forenses.

4.Certificado de defunción N° 1163063 de fecha 21-02-2003 del occiso Adalfonso Arrieta Tobías expedido por el DANE.

5.Informe de Policía Judicial N° 20-38369 de fecha 22-01-2015, rendido por el funcionario Hanner López Jaimes.

6.Informe de la Consulta Web Service de la Registraduría Nacional identificación N° 19.706.659 de Adalfonso Arrieta Tobías.

7.Entrevista de fecha 15-01-2015, realizada a José María Martínez Pertuz.

8.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 113903 de Edwin Rafael Arrieta Tobías.

9.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 122073 de Miguel Arrieta Tobías.

10.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 122081 de Elisa Arrieta Tobías.

11.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 122088 de Dubis Arrieta Tobías.

12.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 122096 de Luis Carlos Arrieta Tobías.

13.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 122097 de Julio Arrieta Tobías.

14.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 122099 de Silfredo Arrieta Tobías.

15. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 122120 de Yolanda Nicolasa Tobías.

16. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 122131 de Luis Carlos Arrieta Arrieta.

17. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 145622 de Yolanda Arrieta Tobías.

18. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 147129 de Daici Arrieta Tobías.

19. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 189261 de Juan Carlos Arrieta Tobías.

20. Versión libre de fecha 18-04-2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Hecho N° 14. Homicidio de Rogelio Rafael Beltrán Yepes y desplazamiento de su núcleo familiar

Carpeta: 306297

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: incursión armada

Situación Fáctica: El 08 de marzo del año 2003, aproximadamente a las 11:30 am, el señor Rogelio Rafael Beltrán Yépez se encontraba en la finca La Victoria en el corregimiento la Majayura de Maicao, a la cual ingresaron hombres armados pertenecientes a las autodefensas, quienes sin mediar palabras le dispararon en repetidas oportunidades causándole la muerte; debido a ello, su núcleo familiar se vio obligado a salir desplazado de la zona dejando abandonadas sus pertenencias así como sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, en concurso con Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población civil Art.159, Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art 154

C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1.Informe de Policía Judicial de fecha 11-02-2015, rendido por el funcionario Oscar David Rincón Pretell.

2.Acta de levantamiento de cadáver N° 005 de fecha 08-03-2003 del occiso Rogelio Rafael Beltrán Yepes.

3.Certificado de muerte violenta de fecha 03-05-2011, expedido por el corregidor del municipio de la Majayura.

4.Informe de la Consulta Web Service de la Registraduría Nacional identificación N° 7.593.625 de Rogelio Rafael Beltrán Yepes.

5.Certificado de fecha 26-03-2010, expedido por el registrador municipal de Fundación Magdalena, donde hace constar que la tarjeta alfabética a nombre de Rogelio Rafael Beltrán Yepes se encuentra vigente.

6.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 386867 de Adalis Castro Ordoñez.

7.Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 57.308.050 de Adalis Castro Ordoñez.

8.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 61076 de Fanny Beltrán Yepes.

9.Contraseña de la Cédula de Ciudadanía N° 32.816.329 de Fanny Judith Beltrán Yépez.

10.Versión libre de fecha 18-04-2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Hecho N° 15 Homicidio de Henry De Jesús Salas Díaz (Homicidio en grado de Tentativa y desplazamiento de su núcleo familiar)

Carpeta: 555174

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Sicariato

Situación Fáctica: El 14 de marzo del año 2003, Henry De Jesús Salas Díaz quien se desempeñaba como Corregidor del corregimiento Carraipía-Guajira, fue sorprendido por miembros de las autodefensas que le dispararon con arma de fuego ocasionándole graves heridas que lo mantuvieron hospitalizado durante 15 días en el Hospital de Valledupar. Al ser dado de alta, fue interceptado por miembros del GAOML, quienes nuevamente intentaron asesinarlo. Como consecuencia debió salir de manera forzada de la región en compañía de su núcleo familiar dejando abandonadas sus propiedades que corresponden a dos bienes inmuebles, cultivos y un vehículo que fue incinerado.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P en grado de Tentativa, en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art 154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Informe de Policía Judicial N° 9-322754 de fecha 06-12-2019, rendido por el funcionario Miguel Adolfo Cabrera Pertuz.

2. Certificado de fecha 06-12-2019, expedido por la Registraduría Nacional, donde consta que la cédula 84.042.979 pertenece a Henry De Jesús Salas Diaz.

3. Historia clínica de Henry De Jesús Salas Diaz, fecha 14-03-2003 expedida por la clínica del Cesar NIT.892.300.979.9.

4. Imágenes de diagnóstico de Henry Salas Diaz, de fecha 17-03-2003, expedido por la clínica del Cesar.

5. Consulta Vivanto id 25142220 de Henry De Jesús Salas Diaz.

6. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N°82.042.979 de Henry De Jesús Salas Diaz

7. Entrevista de fecha 08-11-2019, realizada al Sr. Henry De Jesús Salas Pérez.

8. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 603344 de Henry De Jesús Salas Diaz.

9. Versión libre de fecha 20-01-2023, del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Hecho N° 16 Homicidio de la señora Rosalinda Carrera Guerrero

Carpeta: 553869

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Interceptación

Situación Fáctica: El 25 de marzo del año 2003, fue encontrado el cuerpo sin vida de la señora Rosalinda Carrera Guerrero aproximadamente a las 10:00 am, en la vía que de Maicao conduce hacia Riohacha a la altura de Matitas, con impactos de arma de fuego en la cabeza, el cuello y el torso de acuerdo al protocolo de necropsia, refiere el señor Humberto Carrera Pérez padre de la víctima que, los responsables de este crimen eran los paramilitares que operaban en la zona ya que habían recibido amenazas por parte de ellos y que la señora Rosalina Carrera el día de los hechos había salido de su residencia a un velorio, cuando iba de regreso nuevamente a su vivienda, fue bajada del vehículo en el cual se transportaba por hombres armados,

quienes se la llevaron con rumbo desconocido, siendo encontrada posteriormente su cuerpo sin vida.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art.135 CP. en concurso con Amenazas Art 347 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Informe de Policía Judicial N° 9-322751 de fecha 23-11-2019, rendido por el funcionario Miguel Adolfo Cabrera Pertuz.

2. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 601245 de Humberto Carrera Pérez.

3. Protocolo de necropsia N° 2003p-00047 de fecha 25-03-2003 del occiso Rosalinda Carrera Guerrero, expedido por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

4. Registro Civil de Defunción indicativo serial N° 2024515 de fecha 25-03-2003 del occiso Rosalinda Carrera Guerrero, expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro.

5. Tarjeta De Identidad N° 360508-38430 de Rosalinda Carrera Guerrero.

6. Informe N° 1171 de la Policía Judicial – Brigada de homicidio.

7. Registro Civil de Nacimiento indicativo folio N° 10802182 de Rosalinda Carrera Guerrero.

8. Certificado de fecha 21-06-2006, expedido por La Fiscalía 01 de Riohacha radicado N° 20240 donde consta la investigación en la justicia permanente por el Homicidio de Rosalinda Carrera Guerrero.

9. Consulta Vivanto id 23163815 de Humberto Enrique Carrera Pérez.

10. Versión libre de fecha 18-04-2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Hecho N° 17 Homicidio de Orlando Silva Monroy y Jorge Orlando Linero Mercado

Carpeta: 567435

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Sicariato

Situación Fáctica: El 7 de mayo del año 2003 por señalamientos que hicieron miembros de las Autodefensas de que Orlando Silva Monroy y Jorge Orlando Linero

Mercado eran consumidores de sustancias alucinógenas y se dedicaban a hurtar, un grupo de hombres armados pertenecientes a esa estructura criminal abrió fuego contra ellos causándoles la muerte de manera inmediata cuando se encontraban en la calle 32 con Kra 33 del barrio Simón Mejía de Maicao. De acuerdo con la versión libre rendida por el postulado José Luis Lara Jiménez se obtiene la información que fueron asesinados por parte de él, John Jairo Arrieta Zuleta alias "el grillo" y Alexis Arredondo Alias "el culebro", manifestó que: "Alexis" los conocía y alguien le comentó a él que, esos muchachos mantenían robando en el barrio y el sitio donde los matamos era el sitio donde siempre se colocaban en horas de la noche a fumar marihuana. La orden le dio alias "el grillo"

Delito: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Versión libre de fecha 01-09-2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

2. Constancia de registro del hecho en sistema SIJYP de la Dirección De Justicia Transicional, Carpeta N° 567435.

3. Copia Consulta Sistema Archivo Nacional de Identificación ANI, de la Registraduría Nacional del Estado Civil de ORLANDO SILVA MONROY.

4. Copia Consulta Sistema Archivo Nacional de Identificación ANI, de la Registraduría Nacional del Estado Civil de JORGE ORLANDO LINERO MERCADO.

5. Copia de consulta en bases de datos SIJUF, de ORLANDO SILVA MONROY Y JORGE ORLANDO LINERO MERCADO de la Fiscalía General de la Nación.

6. Copia oficios de solicitud y reiteración de copias a la Dirección Seccional de Fiscalías Riohacha, investigación del Homicidio de ORLANDO SILVA MONROY Y JORGE ORLANDO LINERO MERCADO.

7. Copia consulta Sistema de Información SIJYP, de la Dirección de Justicia Transicional, de la Hoja de vida ORLANDO SILVA MONROY Y JORGE ORLANDO LINERO MERCADO.

8. Copia consulta Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres SIRDEC, de ORLANDO SILVA MONROY Y JORGE ORLANDO LINERO MERCADO.

9. Copia oficio DCTI-GIJT No. 56676-01, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Guajira.

10. Copia protocolos de necropsia No. 086-2003, y 087-2003, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Guajira.

Hecho N° 18 Homicidio de Cristóbal Van Grieken

Carpeta: 141627

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Sicariato

Situación Fáctica: El 26 de mayo de 2003 el señor Cristóbal Vangrieken de ocupación vigilante, se encontraba departiendo en un establecimiento ubicado en el barrio Colombia Libre de Maicao, La Guajira, cuando se le acercó un hombre armado miembro de las autodefensas, quien le disparó de manera indiscriminada causándole la muerte en el lugar de los hechos. De acuerdo con el acta de inspección a cadáver, por las costumbres Wayúu, no se le realizó Protocolo de necropsia al cuerpo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Informe de Policía Judicial N° 44-18298 de fecha 29-12-2014, rendido por el funcionario José Acosta Herrera.

2. Informe de la Consulta Web Service de la Registraduría Nacional identificación N° 84.046.665 de Cristóbal Van Grieken.

3. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 84.046.665 de Cristóbal Van Grieken.

4. Acta de inspección a cadáver N° 104 de fecha 26-05-2003 del occiso Cristóbal Van Grieken.

5. Registro Civil de Defunción indicativo serial N° 1703507 de fecha 26-05-2003 del occiso Cristóbal Van Grieken, expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro.

6. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 141627de Bienvenida Jiménez Conde.

7. Entrevista de fecha 27-11-2014, realizada a la Sra. Bienvenida Jiménez Conde.

8. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 156087 de Bienvenida Jiménez Conde.

9. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 33.213.854 de Bienvenida Jiménez Conde.

10. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 185412 de Bienvenida Jiménez Conde.

11. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 576135 de Tibisay Vangrieken Jiménez.

12. Entrevista de fecha 03-12-2014, realizada a Tibisay Vangrieken Jiménez.

13. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 1.124.031.538 de Tibisay Vangrieken Jiménez.

14. Versión libre de fecha 18-04-2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Hecho N° 19. Homicidio de Martin Ramón Martínez Pinto

Carpeta: 142251

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Sicariato

Situación Fáctica: El 10 de junio del año 2003, fue encontrado el cuerpo sin vida del señor Martín Ramón Ramírez Pinto, en el kilómetro 75 de la vía a Paraguachon a Maicao, con signos de maltrato, amordazado y atado de sus extremidades, de acuerdo con la versión libre rendida por John Jairo Arrieta Zuleta, esta persona estaba sindicada de manera infundada por el grupo armado ilegal, de tráfico de armas para dársela a grupos delincuenciales en Maicao. Participó alias cabito de nombre Gabriel Visco Cuello, alias el calvo de nombre Osvaldo, alias “pata de pollo” Alexis Redondo Vásquez y Luis Ospino alias “cachaco o pingüino”.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1.Informe de Policía Judicial N° 11-50140 de fecha 11-09-2015, rendido por el funcionario Servio Tulio Peña Cabeza.

2.Acta de inspección a cadáver N° 116 de fecha 10-06-2003 del occiso Martin Ramon Ramírez Pinto.

3.Informe de la Consulta Web Service de la Registraduría Nacional identificación N° 12.718.751 de Martin Ramon Ramírez Pinto.

4.Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 12.718.751 de Martin Ramón Ramírez Pinto.

5.Protocolo de necropsia N° 114-03 de fecha 11-06-2003 del occiso Martin Ramón Ramírez Pinto, expedido por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

6.Registro Civil de Defunción indicativo serial N° 04515273 de fecha 10-06-2003 del occiso Martin Ramón Ramírez Pinto, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

7.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 142251 de Víctor Segundo Ramírez

8.Versión libre de fecha 20-09-2019 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Hecho N° 20 Homicidios de los señores Edgar Zorro y Adelco Zorro

Blanca Girnu González (Desplazamiento Forzado)

Carpeta: 216327

Política: Control de recursos

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: incursión armada

Situación Fáctica: El 24 de junio del año 2003, un grupo de hombres armados llegaron hasta la finca La Loma ubicada en el municipio de Albania, La Guajira donde residía el señor Adelco Zorro a quien le dispararon causándole la muerte, así como al Señor Edgar Zorro quien recibió impactos con arma de fuego, quienes posterior al hecho, hurtaron el ganado que cuidaban en su predio, apoderándose además de otros elementos de propiedad familiar. Como consecuencia de estos hechos los familiares de los hermanos Zorro como la señora Blanca Girnu González fueron obligados a salir desplazados de la zona dejando abandonadas sus pertenencias, cultivos, animales de granja, así como sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Homicidio en Persona Protegida descrito en el Art.135 Ley 599 De 2000.en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art 154 C.P, Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población civil Art.159 CP, bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1.Informe de Policía Judicial N° 9-360945 de fecha 09-07-2020, rendido por el funcionario Leonardo Pérez Robayo.

2.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 212702 de Blanca Girnu González.

3.Versión libre de fecha 12-02-2020 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

4.Certificación de enfoque diferencial de fecha 18-02-2013, expedido por Secretaria De Asuntos Indígenas Departamental.

5.Entrevista de fecha 22-09-2015, realizada a la Sra. Laura zorro.

6.Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 84.072.068 de Edgar José Zorro González.

7.Registro Civil de Nacimiento indicativo serial N° 55684959 de Edgar José Zorro González.

8.Informe de Policía Judicial N° 11-52788 de fecha 29-09-2015, rendido por el funcionario Servio Tulio Peña Cabeza.

9.Registro Civil de Defunción indicativo serial N° 5384653 de fecha 03-06-2004 del occiso Edgar José Zorro González, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

10.Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 40.981.931 de Blanca Jirnu González.

11.Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 39.490.602 de Laura Remedios Zorro Jirnu.

12.Registro Civil de Nacimiento indicativo serial N° 22836588 de Laura Remedios Zorro Jirnu.

13.Versión libre de fecha 09-08-2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Hecho N° 21 Homicidio de Enrique Ramírez Juyariyu

Carpeta: 566976

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: interceptación

Situación Fáctica: El 16 de septiembre de 2002 en la vía La Esperanza al frente de la finca Cochinera, ubicada en jurisdicción del corregimiento Majayura – Maicao (Guajira), fue asesinado el señor Enrique Ramírez Jayariyu, luego de que fue bajado del vehículo en el que se transportaba. Como consecuencia de estos hechos, su compañera permanente María Luisa Sapuana y su hija Paola Ramírez Fernández, se desplazaron.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, en concurso con Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil, Art.159 CP, Destrucción de Bienes Protegidos, Art 154 CP. bajo circunstancias de mayor punibilidad numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Informe de Policía Judicial N° 11-50349 de fecha 05-09-2015, rendido por la funcionaria Carmen Araque Diaz.

2. Informe de Policía Judicial N° 44-13870 de fecha 21-03-2014, rendido por el funcionario José Acosta Herrera.

3. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 350636 de María Luisa Sapuana.

4. Certificado de la registraduría del estado civil de la cédula 40.788.457 María Luisa Sapuana.

5. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 348059 de Paola Ramírez Fernández.

6. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 384338, Carpeta: 384338, de Magola Ramírez Sapuana.

7. Consulta Sijuf radicado N° 38384 por el Homicidio de Enrique Ramírez Jayariyu.

8. Oficio N° 036-UBM-DSG-2014, expedido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

9. Versión libre de fecha 20-09-2019 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Hecho N° 22 Homicidios de los señores Albert Oliver Montero y William Montero (indígenas comunidad Wiwa) y Desplazamiento Forzado de sus núcleos familiares.

Carpeta: 62493

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: interceptación

Situación Fáctica: El 28 de abril del 2002, en el corregimiento de Tomarrazon – Guajira, hombres fuertemente armados interceptaron el vehículo en que se desplazaban los hermanos y miembros de las comunidad indígena Wiwas, Alberth Enrique y Jolver Enrique Montero Calvo de 22 y 18 años de edad respectivamente, cuando subían de Riohacha hacia la comunidad que quedaba en Tomarrazón, fueron bajados del vehículo y ordenaron que el carro siguiera, causándoles la muerte, siendo reconocidos por sus familiares en la morgue de medicina legal, a donde fueron llevados como NN posterior a ello, su núcleo familiar se vio en la obligación de desplazarse.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Homicidio en Persona Protegida descrito en el Art.135 Ley 599 de 2000.en concurso con Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población civil Art.159 cp., Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art 154 C.P. Tortura en Persona Protegida Art 137 cp. Actos de discriminación racial art.147 cp. bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 62493 de Beatriz Montero.

2.Versión libre de fecha 12-02-2020 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

3.Informe de Policía Judicial N° 1-50150 de fecha 12-09-2015, rendido por el funcionario Servio Tulio Peña Cabeza.

4.Entrevista de fecha 28-08-2015, realizada a la Sra. Beatriz Montero[31].

5.Fotocopia de cédula N° 40.931.749 de Beatriz montero.

Hecho N° 23 Homicidio de Algemiro Ariel Amaya Martínez.

Carpeta: 80077

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: sustracción por engaño

[31] *"NOSOTROS SOMOS INDIGENAS WIWA DE LA COMUNIDAD DE LIMON. EN EL ANO DE 2002, EN EL MES DE ABRIL, EXACTAMENTE EL DIA 28 MIS HERMANOS DE NOMBRE ALBERT Y OLIVER MONTERO, DE 22 Y 18 ANOS DE EDAD RESPECTIVAMENTE, CUANDO SUBIAN DE RIOHACHA HACIA LA COMUNIDAD QUE QUEDABA EN TOMARRAZON, FUERON BAJADOS DE UN CARRO EN QUE VIAJABAN, ES UN CARRO DE LA VIA. LOS PARAMILITARES LOS BAJARON Y ORDENARON QUE EL CARRO SIGUIERA, POSTERIORMENTE EL SENOR DEL CARRO DE LA VIA ME INFORMO LO QUE LE PASO A MIS HERMANOS Y QUE AVERIGUARA EN LA FISCALIA QUE HACE LOS LEVANTAMIENTOS. EFECTIVAMENTE AVERIGUAMOS Y EN LA MORGUE DE MEDICINA LEGAL NOS LOS MOSTRARON. ESTABAN COMO N.N. YO LOS RECLAME Y LES DIMOS SEPULTURA EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD. EL DIA 30 DE AGOSTO DEL ANO 2002, UNOS MESES DESPUES DE LA MUERTE DE MIS HERMANOS LLEGARON A NUESTRA COMUNIDAD LOS PARAMILITARES Y ACABAN CON LA COMUNIDAD, ESO, SE LLEVAN 8 VACAS QUE ERAN MIAS, DE MI PADRE Y MIS HERMANOS, UN TORO REPRODUCTOR, 6 CERDAS, 12 OVEJOS, LAS GALLINAS ERAN 8, LOS PAVOS QUE ERAN 4 PAVAS Y UN MACHO, UNA CERDA PARIDA, 12 QUINTALES DE FRIJOL RECIEN COSECHADOS, ERAN FRIJOL CABECITA BLANCA, UNA HECTAREA CON YUCA Y PLATANO. CUANDO SE LLEVARON LAS VACAS Y EL TORO, ELLOS COGIERON Y MATARON UNAS, SE LAS COMIERON Y LAS QUE NO SE COMIERON LAS MATARON Y LAS DEJARON TIRADAS EN LA SABANA. LOS OTROS ANIMALES SE PERDIERON. EN ESE TIEMPO ERAMOS 35 FAMILIAS LAS QUE VIVIAMOS EN ESA COMUNIDAD, NOSOTROS NO DENUNCIAMOS ANTE LA FISCALIA ESE DESPLAZAMIENTO, A NOSOTROS FUE A BUSCARNOS ARRIBA LA DEFENSA CIVIL Y LA CRUZ ROJA ESTABA EN LAS CASITAS QUE QUEDAN MAS DEBAJO DE LA COMUNIDAD DE LIMON. LA VERDAD NO SE SI SE DENUNCIO ESO, PERO DE NUESTRA PARTE NO LO HICIMOS, POSIBLEMENTE LO REPORTO LA DEFENSA CIVIL, CUANDO NOS DESPLAZAN LLEGAMOS A LA ANTIGUA UNIVERSIDAD, DESPUES EN CASA DE LOS ABUELOS Y DESPUES LLEGAMOS A DONDE ESTAMOS ACTUALMENTE QUE ES EL BARRIO DIVIDIVI. AHI FORMAMOS UNA COMUNIDAD PEQUENITA DE 22 VIVIENDAS A LA QUE LE DIMOS EL NOMBRE DE ABOWIMAQUE.*
ESTANDO ALLI ES CUANDO MI HERMANO WILLIAM DECIDE DEVOLVERSE A LA ANTIGUA COMUNIDAD LIMON Y SE QUEDA EN UN SITIO LLAMADO CONTADERO, EL ME MANDA LLAMAR, ALLA ESTABA MI FAMILIA QUE ERA MI PADRE, MI MADRE, MIS HERMANOS, ERAMOS COMO 11 PERSONAS. ESTANDO ALLA LLEGAN NUEVAMENTE LOS PARAMILITARES DISPARANDO Y DICEN QUE VAN A HACER UNA REQUISA, DESPUES DIJERON QUE QUIETOS, QUE NADIE MUEVA, CUANDO MENOS SE ESPERA LE DISPARAN A MI HERMANO WILLIAM POR LA ESPALDA CUANDO ESTABA TOMANDOSE UN TINTO. ESTANDO MI HERMANO EN EL PISO TODAVIA, VIVO, COMO CONVULSIONANDO, LE DISPARAN TRES TIROS MAS POR LA ESPALDA Y LE DESTROZAN LA CABEZA. NOSOTROS SALIMOS CORRIENDO PARA ESCONDERNOS Y LOS PARAMILITARES SIGUEN A PERSEGUIRNOS HASTA EL MONTE. NOS DISPARAN Y NOS DECIAN QUE PARARAMOS, QUE NO NOS IBAN A HACER NADA. DEJAMOS EL CUERPO DE MI HERMANO ABANDONADO. AL OTRO DIA EN LA TARDE YA CUANDO NO HAY NADIE QUE PODEMOS SALIR, MIRAMOS A MI HERMANO Y ESTABA TODO PANGAO (SIC) EXPLICA LA COMPARECIENTE, LO MACHACARON CON UN PALO Y LE FRACTURARON TODO EL CUERPO, ESO SE LO HICIERON DESPUES DE MUERTO, INCLUSO LE MOCHARON LA CABEZA. NOSOTROS LO ENTERRAMOS SIN CABEZA EN ESE MISMO SITIO DONDE EL HABIA QUE DADO Y NOS VINIMOS OTRA VEZ PARA NUESTRA COMUNIDAD Y AHORA, DESPUES SE COMPUSO LA SITUACION. ES DECIR, SE FUERON LOS PARAMILITARES, FUIMOS Y LO SACAMOS Y LO LLEVAMOS AL CEMENTERIO DE NUESTRA COMUNIDAD QUE ESTA EN LA COMUNIDAD DE LIMON. EN LA EPOCA EN QUE MATARON A MIS HERMANOS, LOS PARAMILITARES QUE YO OIA, ANDABAN EN LA REGION ERAN ALIAS MATEO, QUE ERA EL COMANDANTE Y UNO QUE LE DECIAN EL CURVO O GAMBETO."

Situación Fáctica: El 9 de septiembre del año 2003, en momentos que se encontraba en un establecimiento de billares en el municipio de Dibulla, La Guajira, el señor Argemiro Ariel Amaya Martínez fue abordado por miembros de las autodefensas, quiénes se lo llevaron con rumbo desconocido, siendo encontrado al día siguiente su cuerpo sin vida con heridas de arma blanca de acuerdo con lo establecido en el protocolo de necropsia.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1.Informe de Policía Judicial N° 11-58363 rendido por el funcionario José Sánchez.

2.Carátula de Carpeta N° 80077 del proceso de justicia transicional por el Homicidio de Algemiro Ariel Amaya Martínez.

3.Informe N° 611 UL CTI.SJC de fecha 09-12-2003.

4. Diligencia de inspección judicial con examen del cuerpo N° 0042 de fecha 09-09-2003, del occiso Algemiro Ariel Amaya Martínez.

5.Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 49.771.188 de Oneida Martínez Batista.

6.Protocolo de necropsia de fecha 09-09-2003 del occiso Algemiro Ariel Amaya Martínez, expedido por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

7.Registro Civil de Defunción indicativo serial N° 03948600 de fecha 03-09-2003 del occiso Algemiro Ariel Amaya Martínez, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

8.Contraseña de la Cédula de Ciudadanía N° 84.095.715 de Algemiro Ariel Amaya Martínez

9.Copia de expediente radicado N° 305 de La Fiscalía general sobre el Homicidio de Algemiro Amaya Martínez, hechos ocurridos en Fonseca el día 9 de septiembre de 2003.

10.Entrevista de fecha 24-10-2015, realizada a la Sra. Oneida Martínez Batista.

11.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 80077 de Oneida Martínez Batista.

12.Versión libre de fecha 12 de febrero de 2020 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

13.Informe de la Consulta Web Service de la Registraduría Nacional identificación N° 84.095.715 de Algemiro Ariel Amaya Martínez.

Hecho N° 24. Homicidio de Yobani de Jesús Guerra

Carpeta: 567490

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Sicariato

Situación Fáctica: El 24 de septiembre del año 2003, en el sector del barrio Los Palitos de Maicao el señor Yobanis de Jesús guerra, fue abordado por hombres armados quienes le dispararon de manera indiscriminada causándole la muerte. De acuerdo con la versión libre rendida por el postulado John Jairo Arrieta Zuleta, el señor Yobanis De Jesús Guerra le cobraba dineros (exacciones) a los comerciantes del mercado de ese municipio a nombre del grupo y no los reportaba ni daba cuenta de esos recaudos, por ello, dio la Orden Jairo Alfonso Samper Cantillo y José Luis Lara quien le da muerte.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Informe de Policía Judicial N° 44-18722 de fecha 13-02-2015 rendido por el funcionario José Acosta Herrera.

2. Informe de Policía Judicial N° 9-360586 de fecha 04-07-2020 rendido por el funcionario Leonardo Pérez Robayo.

3. Informe de la Consulta Web Service de la Registraduría Nacional identificación N° 84.071.088 de Yobanis de Jesús guerra.

4. Entrevista de fecha 01-07-2020, realizada a la Sra. Madelein Esther Arrieta Cabana.

5. Registro Civil de Defunción indicativo serial N° 1414802 de fecha 24-09-2003 del occiso Yobanis de Jesús guerra, expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro.

6. Versión libre de fecha 20 de enero de 2023 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Hecho N° 25 Homicidio de José Luis Levete.

Carpeta: 112990

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: interceptación

Situación Fáctica: El 26 de noviembre del año 2003, el señor José Luis Levette trabajaba para la compañía Construdoll y ese día se transportaba de Manaure a Pájaro en un vehículo con otros trabajadores de la empresa, cuando un grupo de hombres

armados aparecieron en el camino y comenzaron a dispararles siendo herido el señor José Luis Levette con arma de fuego siendo trasladado a la clínica, llegando sin signos vitales.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Informe de Policía Judicial N° 11-53581 de fecha 16-09-2015, rendido por el funcionario Carmen Araque Diaz.

2. Informe de Policía Judicial N° 11-44583 de fecha 21-08-2015, rendido por el funcionario Ricardo Lacera Zapata.

3. Acta de inspección a cadáver N° 174 de fecha 26-11-2003 del occiso José Luis Levete.

4. Protocolo de necropsia N° 2003 p-00182 de fecha 28-11-2003, del occiso José Luis Levete, expedido por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

5. Registro Civil de Defunción indicativo serial N° 2024704 de fecha 26-11-2003 del occiso José Luis Levete, expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro.

6. Entrevista de fecha 06-08-2016, realizada a la Sra. María Neidis Brito Ojeda.

7. Álbum fotográfico N° 174 del occiso José Luis Levete.

8. Registro Civil de Nacimiento indicativo serial N° 16396131 de José Luis Levete Brito.

9. Certificado de fecha 15-02-2006, expedido por La Fiscalía unidad primera de vida de Riohacha radicado N° 22641, donde consta la investigación en la justicia permanente por el Homicidio de José Luis Levete.

10. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 112990 de María Brito Ojeda.

11. Copia de caratula de expediente de La Fiscalía general radicado N° 22641 por el Homicidio de José Luis Levete,

12. Informe de la Consulta Web Service de la Registraduría Nacional identificación N° 17.806.114 de José Luis Levete.

13. Versión libre de fecha 12 de febrero de 2020 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Hecho N° 26 Homicidio en grado de Tentativa de Juan Paz Jusayu

Carpeta: 299542

Política: Control de recursos

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: incursión armada

Situación Fáctica: El 28 de noviembre de 2003 el señor Juan Paz Jusayu, miembro de la comunidad indígena Wayúu, fue herido de consideración por sujetos armados quienes después de hurtar parte de sus animales de pastoreo abrieron fuego contra el cuándo se encontraba en la carretera que de Riohacha conduce al corregimiento Cuatro Vías de Maicao, impactándolo en el estómago, heridas de las cuales se recuperó tiempo después.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P en grado de tentativa, en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art 154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Informe de Policía Judicial n°44-11567 de fecha 07-11-2013, rendido por el funcionario Eneldo José Caicedo Daza.

2. Versión libre de fecha 18-04-2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

3. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 60346 de Juan Paz Jusayu.

Hecho N° 27 Tentativa de Homicidio de Luis Alejandro De Ángel Buelvas

Carpeta: 174570

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Sicariato

Situación Fáctica: El 23 de diciembre del año 2003, el señor Luis Alejandro De Ángel Buelvas de oficio conductor, fue herido por disparos de arma de fuego cuando se encontraba en el barrio Camilo Torres de Maicao, fue sorprendido por un sujeto armado quien él conocía por alias de “culebrita” el cual abrió fuego contra el causándole serias heridas que redujeron su movilidad teniendo que movilizarse en una silla de ruedas.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P en grado de tentativa, bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 174570 de Luis Alejandro De Ángel Buelvas.

2. Entrevista de fecha 27-08-2015, realizada a Luis Alejandro De Ángel Buelvas.

3. Copia de historia clínica de Luis Alejandro De Ángel Buelvas, de fecha 23-12-2003.

4. Dictamen médico legal N° 2005c-02030100168 de fecha 03-06-2005 de Luis Alejandro De Ángel Buelvas, expedido por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

5. Entrevista de fecha 08-05-2012, realizada a Luis Alejandro De Ángel Buelvas.

6. Recorte de prensa donde se registra la noticia del atentado en contra de Luis de Ángel Buelvas, de fecha 10-07-2007.

7. Fotocopia de cédula N°7.142.144 de Luis Alejandro De Ángel Buelvas.

8. Versión libre de fecha 20 de enero de 2023 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Hecho N° 28 Homicidio de Reinaldo De Jesús Monsalve Vanegas

Carpeta: 227727

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Sicariato

Situación Fáctica: El 12 de enero del año 2004, el señor Reinaldo De Jesús Monsalve Vanegas de 25 años de edad de acuerdo a la versión rendida por el postulado Jairo Alfonso Samper Cantillo, este era conocido como miembro de la estructura delincuencial de las AUC, con el alias de “mello” o “el paisa”, se encontraba en la calle 11 con carrera 18 del municipio de Maicao, cuando compañeros de él, miembros de la organización armada ilegal, lo abordaron y le dispararon de manera indiscriminada causándole la muerte.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Informe de Policía Judicial N° 11-51552 de fecha 15-08-2015, rendido por el funcionario José Acosta Herrera.

2. Acta de inspección a cadáver N° 005 de fecha 005 del occiso Reinaldo De Jesús Monsalve Vanegas.

3. Protocolo de necropsia N° 2004p-00006 de fecha 12-01-2004 del occiso Reinaldo De Jesús Monsalve Vanegas, expedido por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

4. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 225002 de Roció Vanegas Monsalve.

5. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 43.015.157 de Roció Del Socorro Vanegas Monsalve.

6. Versión libre de fecha 20-09-2019 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

7. Informe de la Consulta Web Service de la Registraduría Nacional identificación N° 71.217.172 de Reinaldo De Jesús Monsalve Vanegas.

Hecho N° 29 Homicidio en Grado de Tentativa de José Vicente Palacio Palencia.

Carpeta: 37094

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Sicariato

Situación Fáctica: El 25 de enero del año 2004 en momentos que se encontraba en su residencia del corregimiento Carraipía, Maicao, el señor José Vicente Palacio Palencia fue sorprendido por dos sujetos armados los cuales abrieron fuego contra él causándole heridas que pusieron en peligro su vida y le dejaron irremediables secuelas que redujeron su visión y movilidad.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P en grado de Tentativa, bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 37094 de José Vicente Palacio Palencia.

2. Versión libre de fecha 20 de enero de 2023 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Hecho N° 30. Homicidio de Gregoria Defina Mieles Medina Alberto Fince, Rolando Fince (Homicidio) y Reyes Antonio Heber Fince (Tentativa).
Carpeta: 140447

Política: Control Social

Practica: Homicidio múltiple

Modus operandi: Incursión Armada

Situación Fáctica: El día 1 de febrero de 2004, la señora Gregoria Delfina Mieles Medina se encontraba en el restaurante "Buena Fe", de su propiedad, ubicado en la vereda Puerto Nuevo, jurisdicción del municipio de Uribía, La Guajira. En ese momento, al lugar arribó una camioneta Toyota Copetrana blanca, en la que se movilizaban varios hombres armados y vestidos de civil, bajo el mando de un sujeto conocido con el alias de "Pablo".

Dos de estos hombres descendieron del vehículo y se dirigieron directamente al restaurante, donde, sin mediar palabra alguna, dispararon en contra de la señora Gregoria Delfina Mieles Medina, causándole la muerte de manera inmediata.

Simultáneamente, otros integrantes del grupo armado se desplazaron hasta una tienda de propiedad de los hermanos Fince, ubicada en las cercanías, donde abrieron fuego indiscriminadamente contra las personas que allí se encontraban, resultandos muertos los señores Alberto Fince y Rolando Fince, y gravemente herido el señor Reyes Antonio Heber Fince.

Las víctimas de estos hechos habían rendido declaración ante autoridades judiciales, en el marco de una investigación penal por el homicidio de varios miembros de la Policía Nacional, ocurrido en el año 2003 en ese mismo sector, y que habría sido perpetrado por miembros del grupo armado ilegal Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Es por ello que se presume que el móvil de los asesinatos fue la retaliación o silenciar de testigos por parte de dicha organización armada.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Homicidio en Persona Protegida descrito en el Art.135 ley 599 de 2000, en concurso con Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil, Art.159, Destrucción y apropiación de Bienes Protegidos Art 154 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Informe de Policía Judicial N° 11-59120 de fecha 28-10-2015, rendido por el funcionario José Gregorio Acosta Herrera.

2. Consulta Sijuf radicado N° 23984 por el Homicidio de Gregoria Delfina Mieles Medina.

3. Inspección judicial por muerte N° 037 de fecha 02-02-2004, del occiso Gregoria Delfina Mieles Medina.

4. Entrevista de fecha 20-10-2015 de Yinnis Cabrales Mieles.

5. Protocolo de necropsia N° 2004p-00039 de fecha 02-02-2004del occiso Gregoria Delfina Mieles Medina, expedido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

6. Registro Civil de Defunción indicativo serial N° 04516305 de fecha 01-02-2004 del occiso Gregoria Delfina Mieles Medina, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

7. Consulta Vivanto id 20673168 de Gregoria Delfina Mieles Medina.

8. Recorte de prensa de fecha 04-02-2004, donde se registra la noticia de los homicidios.

9. Certificado de fecha 25-05-2004 expedido por La Fiscalía Segunda de Riohacha radicado N° 23.984 donde consta la investigación en la justicia permanente por homicidio.

10. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 695758 de Deyvis Cabrales Mieles.

11. Fotocopia de cédula N°40.937.251 de Deyvis Cabrales Mieles.

12. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 140447 de Yinnis Olidis Cabrales Mieles.

13. Fotocopia de cédula N°84.035.523 de Yinnys Cabrales Mieles.

14. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 696012 de Leinis Cabrales Mieles.

15. Fotocopia de cédula N° 40.931.514 de Leinis Cabrales Mieles.

16. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 612416 de Yeilin Cabrales Mieles.

17. Fotocopia de cédula N° 84.093.189 de Yeilin Cabrales Mieles.

18. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 611741 de Yeiner Cabrales Mieles.

19. Fotocopia de cédula N° 1.006.569.018 de Yeiner Cabrales Mieles.

20. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 696173 de Yelmides Cabrales Mieles.

21. Contraseña del documento de identidad N° 1.047.370.582 de Yelmides Cabrales Mieles.

22. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 696176 de Lineidis Cabrales Mieles.

23. Fotocopia de cédula N° 40.928.720 de Lineidis Cabrales Mieles.

24. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 63713 de Rolan Fince Uriana.

25. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 63689 de Roland Evers Fince.

26. Consulta Sijuf Roland Everts Fince

27. Consulta Vivanto Alberto Ever Fince.

28. Consulta Vivanto Reyes Antonio Everts Fince.

29. Consulta Vivanto Roland Everts Fince.

30. Versión libre de fecha 12-02-2020 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Hecho N° 31 Homicidio de Jeider Rafael Duarte Ariza

Carpeta: 140641

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Sicariato

Situación Fáctica: El 12 de febrero de 2004, el señor Jeider Rafael Duarte Ariza salió de su residencia en el municipio de Maicao con destino a su trabajo sin que se volviera a saber de su paradero hasta el día siguiente cuando fue encontrado su cuerpo sin vida con 3 impactos de arma de fuego perpetrados por miembros de las autodefensas y signos de tortura, en el sector conocido como la parte trasera de la caballería en la vía que va al corregimiento de Carraipía.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Homicidio en Persona Protegida descrito en el Art.135 ley 599 de 2000; en concurso con Tortura en Persona Protegida Art 137 cp., bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Informe de Policía Judicial N° 11-51412 de fecha 14-08-2015, rendido por el funcionario José Acosta Herrera.

2. Acta de inspección a cadáver N° 024 de fecha 12-02-2004 del occiso Jeider Duarte Ariza.

3. Protocolo de necropsia N° 2004p-00024 de fecha 13-02-2004 del occiso Jeider Duarte Ariza, expedido por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

4. Informe de la Consulta Web Service de la Registraduría Nacional identificación N° 77.093.101 de Jeider Rafael Duarte Ariza.

5. Registro Civil de Defunción indicativo serial N° 04515379 de fecha 12-02-2004 del occiso Jeider Duarte Ariza, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

6. Certificado de fecha 15-03-2007 expedido por La Fiscalía segunda de Maicao, radicado N° 1502 donde consta la investigación en la justicia permanente por el Homicidio de Jeider Rafael Duarte Ariza.

7. Versión libre de fecha 20 de enero de 2023 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

8. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 140641 de Carmen Ariza Pérez.

Hecho N° 32 Homicidio de Jorge Albeiro Villareal Tordecilla

Carpeta: 100353

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Sicariato

Situación Fáctica: El 3 de abril del año 2004, el señor Jorge Albeiro Villareal Tordecilla, de 32 años se encontraba departiendo en la inauguración de una cantina llamada “Pasión de Gavilanes” en el municipio de Barrancas, cuando fue abordado por un miembro de las AUC, conocido en la zona como “Ñoñi Roy”, quien aprovechó que el señor Villareal Tordecilla se encontraba a las afuera del establecimiento y sin mediar palabras le disparo de manera indiscriminada causándole la muerte.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Informe de Policía Judicial de fecha 02-10-2015, rendido por el funcionario Carlos Mozo Choles.

2. Diligencia de inspección judicial con examen del cuerpo N° 016 de fecha 03-04-2004 del occiso Jorge Albeiro Villareal Tordecilla.

3. Orden para realizar necropsia de fecha 03-04-2004 del occiso Jorge Albeiro Villareal Tordecilla.

4. Registro Civil de Nacimiento indicativo serial N° 5278245 de Jorge Albeiro Villareal Tordecilla.

5. Registro Civil de Defunción indicativo serial N° 04513613 de fecha 03-04-2004 del occiso Jorge Albeiro Villareal Tordecilla, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

6. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 7.151.853 de Jorge Albeiro Villareal Tordecilla.

7. Versión libre de fecha 12 de febrero de 2020 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

8. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 100353 de Leidis Alfaro Torres.

Hecho N° 33 Homicidio de Norge José Carrillo Luquez

Carpeta: 62885

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Sicariato

Situación Fáctica: El 7 de mayo del año 2004, el Señor Norge José Carrillo Luquez de oficio conductor de taxi, se encontraba a la altura del barrio Mareigua de Maicao, La Guajira, cuando 4 miembros de las Autodefensas que se movilizaban en un vehículo blanco, se le acercaron y sin mediar palabras le dispararon en 7 oportunidades con arma de fuego causándole la muerte. El hecho se perpetro porque lo señalaban de transportar a personas pertenecientes a bandas delincuenciales o que eran objetivos militares del grupo armado ilegal de las Autodefensas.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Informe de Policía Judicial de fecha 26-11-2019, rendido por el funcionario Leonardo Pérez Robayo.

2. Certificado de fecha 28-04-2010, expedido por la registraduría de La Guajira, donde certifican que la cedula N° 84.074.794 correspondía a Norge José Carrillo Luquez.

3. Diligencia de inspección judicial por muerte N° 064 de fecha 07-05-2004, del occiso Norge José Carrillo Luquez.

4. Protocolo de necropsia N° 2004p-00061 de fecha 07-05-2004 del occiso Norge José Carrillo Luquez, expedido por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

5. Registro Civil de Defunción indicativo serial N° 04515373 de fecha 08-05-2004 del occiso Norge José Carrillo Luquez, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

6. Entrevista de fecha 09-11-2019, realizada a Norllis Beatriz Carrillo.

7. Certificado de fecha 20-05-2010 expedido por La Fiscalía tercera seccional, radicado N° 1563 donde consta la investigación en la justicia permanente por el Homicidio de Norge José Carrillo Luquez.

8. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 62885 de Elda María Carrillo Luquez.

9. Versión libre de fecha 18-04-2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

10. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 349143 de Norllis Carrillo Luquez.

Hecho N° 34. Homicidio de Gabriel Antonio Gómez Vergara

Carpeta: 141877

Política: Control Social

Práctica: Homicidio individual

Modus operandi: sustracción por fuerza

Situación Fáctica: El 10 de mayo del año 2004, en el municipio de Barrancas en el departamento de La Guajira, al señor Gabriel Antonio Gómez varios hombres pertenecientes a grupos al margen de la ley en dos oportunidades lo habían ido a buscar a su vivienda, hasta que en la tercera oportunidad aproximadamente a las 2 de la tarde regresaron y se lo llevaron con rumbo desconocido, horas después fue encontrado su cuerpo sin vida en la vereda el Guayamal con impactos de arma de fuego.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Informe de Policía Judicial N°11-53487 de fecha 08-10-2015, rendido por el funcionario Luz Elena Arce Royero.

2. Diligencia de inspección judicial por muerte N° 026 de fecha 10-05-2004, del occiso Gabriel Antonio Gómez Vergara.

3. Registro Civil de Defunción indicativo serial N° 04513616 de fecha 11-05-2004 del occiso Gabriel Antonio Gómez Vergara, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

4. Certificado de defunción N° a1696790 de fecha 10-05-2004 del occiso Gabriel Antonio Gómez Vergara

5. Entrevista de fecha 21-09-2015, realizada a la Sra. Sira Elena Leguía Bocanegra.

6. Fotocopia de cedula N° 84.008.499 de Gabriel Antonio Gómez Vergara.

7. Registro Civil de Nacimiento indicativo serial N° 36011509 de Gabriel Antonio Gómez Vergara.

8. Versión libre de fecha 12 de febrero de 2020 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

9. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 141877 de Gabriel Gómez Bastidas.

Hecho N° 35 Homicidio de José Jorge Solano Zarate

Carpeta: 601100

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Sustracción por fuerza

Situación Fáctica: El 16 de julio del año 2004 el señor José Jorge Solano Zarate, salió de su residencia en el barrio Lorenzo Solano del municipio de Barrancas, La Guajira , manifestándole a su esposa que se dirigía hacia el corregimiento el Hatico del municipio de Fonseca a prestar un servicio de música ya que tenía un sistema de sonido, pero el 17 de julio en horas de la mañana, fue encontrado su cuerpo sin vida en la salida hacia el corregimiento Guayabal, con impactos de arma de fuego propinados por miembros de las autodefensas; refiere su padre el Señor Ángel Paul Solano, que a él lo habían contratado los paramilitares que estaban en la zona y que se fue con ellos en una camioneta 350.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Informe de Policía Judicial N° 9-350017 de fecha 29-05-2020, rendido por el funcionario Oscar David Rincón Pretell.

2. Caratula de expediente N°28967 de La Fiscalía general referente al Homicidio de José Jorge Solano Zarate.

3. Diligencia de inspección judicial con examen del cuerpo N° 050 de fecha 17-07-2004 del occiso José Jorge Solano Zarate.

4. Protocolo de necropsia de fecha 18-07-2004 del occiso José Jorge Solano Zarate, expedido por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

5. Registro Civil de Defunción indicativo serial N° 04513626 de fecha 17-07-2004 del occiso José Jorge Solano Zarate, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

6. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 17.955.460 de José Jorge Solano Zarate.

7. Consulta Vivanto id 5697127 de José Jorge Solano Zarate.

8. Entrevista de fecha 11-03-2020, realizada al Sr. Ángel Paul Solano.

9. Entrevista de fecha 12-03-2020, realizada al Sra. Yamelis Rodríguez.

10. Informe de Policía Judicial N° 9-350006 por el desplazamiento de Yamelis Rodríguez daza, de fecha 29-05-2020, rendido por el funcionario Oscar David Rincón Pretell.

11. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 693963 de Yamelis Rodríguez Daza.

12. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 390913 de Yamelis Rodríguez Daza.

13. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 639959 de Ana Ospino Torres.

14. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 681774 de Ángel Paul Solano.

15. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 681782 de Arinda Zarate Pinto.

16. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 693953 de Haldrenis Solano Contreras.

17. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 681786 de Paulo Rafael Solano Zarate.

18. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 681804 de Yalis Solano Zarate.

19. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 693955 de Yeisler Solano Salina.

20. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 682986 de Yucelis Solano Zarate.

21. Versión libre de fecha 18-04-2022 del postulado Salvatore mancuso, donde acepta el hecho.

22. Informe de la Consulta Web Service de la Registraduría Nacional identificación N° 17.955.460 de José Jorge Solano Zarate.

Hecho N° 36. Homicidio de Wilfrido Guerra Zambrano

Carpeta: 116786

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Sicariato

Situación Fáctica: El 22 de julio del año 2004, a eso de las 10:30 horas, el señor Wilfrido Guerra Zambrano, de oficio conductor, se encontraba en la esquina de la calle 12 con carrera 33 de Riohacha jugando dominó con un grupo de amigos, cuando dos miembros de las autodefensas que se movilizaban en una motocicleta le dispararon causándole la muerte.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Informe de Policía Judicial N° 11-44814 de fecha 20-08-2015, rendido por el funcionario Oscar David Rincón Pretell.

2. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 654142 de María Angélica Guerra Mendoza.

3. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 176972 de María Elena Mendoza Hernández.

4. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 116786 de María Elena Mendoza Hernández.

5. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 166525 de María Elena Mendoza Hernández.

6. Entrevista de fecha 13-08-2012, realizada a María Elena Mendoza Hernández.

7. Entrevista de fecha 04-08-2015, realizada a María Elena Mendoza Hernández.

8. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 604277 de Wilfrido Guerra Mendoza.

9. Copia de caratula de expediente radicado n°26975, por el Homicidio de Wilfrido Guerra Zambrano.

10. Acta de inspección a cadáver N° 119 de fecha 22-07-2004 del occiso Wilfrido Guerra Zambrano.

11. Protocolo de necropsia N° 2004p-00136 de fecha 22-07-2004 del occiso Wilfrido Guerra Zambrano, expedido por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

12. Registro Civil de Defunción indicativo serial N° 2024905 de fecha 22-07-2004 del occiso Wilfrido Guerra Zambrano, expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro.

13. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 84.026.313 de Wilfrido Guerra Zambrano.

14. Consulta Sijuf radicado 26975, por el Homicidio de Wilfrido Guerra Zambrano.

15. Certificado de fecha 28-07-2004, expedido por La Fiscalía Segunda Seccional radicado N° 26975 donde consta la investigación en la justicia permanente por el Homicidio de Wilfrido Guerra Zambrano.

16. Álbum fotográfico N° 127 acta de levantamiento N° 119 del 22 de julio de 2004.

17. Informe N° 2130 de fecha 02-08-2004, expedido por la Policía Judicial –Brigada de homicidios.

18. Informe N° 3090 de fecha 13-10-2004, expedido por Alvelio Olivella jefe de Policía Judicial del C.T.I. Riohacha.

19. Informe de la Consulta Web Service de la Registraduría Nacional identificación N° 84.026.313 de Wilfrido Guerra Zambrano.

20. Versión libre de fecha 12-02-2020 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Hecho N° 37 Homicidios de los señores de Luis Guillermo Alfonso Jusayu Epiayú, Luis Sergio Jusayu, Édison Manuel Jusayu Epiayú (Homicidio en grado de tentativa)

Carpeta: 140970

Política: Control de recursos

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Sicariato

Situación Fáctica: en horas de la tarde del 19 de septiembre del año 2004, en momentos que se encontraban departiendo en el mercado público de Maicao, los señores Guillermo Alfonso Jusayu Epiayú, Luis Sergio Jusayu y Édison Manuel Jusayu, fueron sorprendidos por hombres armados quienes le dispararon de manera indiscriminada causándoles la muerte de manera inmediata a los señores Guillermo Alfredo Jusayu, Luis Sergio Jusayu e hirieron al señor Édison Manuel Jusayu Epiayú, como consecuencia de estos hechos los núcleos familiares de las víctimas se vieron obligados a salir desplazados de la zona, dejando abandonadas sus pertenencias, así como sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Homicidio en Persona Protegida descrito en el Art.135 ley 599 de 2000; en concurso con homicidio en persona protegida en grado de tentativa, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 140970 de Édison Manuel Jusayu Epiayú.

2. Entrevista de fecha 31-10-2013, Édison Manuel Jusayu Epiayú.

3. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 84.077.178 de Édison Manuel Jusayu Epiayú.

4. Registro Civil de Nacimiento indicativo serial N° 10558365 de Édison Manuel Jusayu Epiayú.

5. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 343204 de Josefina Epiayú Epiayú,

6. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 40.981.970 de Josefina Epiayú Epiayú.

7. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 344786 de Yuleima Sierra Ortega.

8. Comprobante de documento en trámite N° 56.089.993 de Yuleima Sierra Ortega.

9. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 344790 de Nancy Vangrieken Jusayu.

10. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 56.062.416 de Nancy Vangrieken Jusayu.

11. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 344794.

12. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 344799 de José María Jusayu Epiayú.

13. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 15.207.662 de José María Jusayu Epiayú.

14. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 344803 de Luz Mery Epiayú Epiayú.

15. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 1.121.528.968 de Luz Mery Epiayú.

16. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 344855 de María Luisa Jusayu Epiayú.

17. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 40.877.731 de María Luisa Jusayu Epiayú.

18. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 346062 de José Jusayu.

19. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 15.236.245 de José Jusayu.

20. Registro Civil de Nacimiento indicativo serial N° 20402904 de José Jusayu.

21. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 346067 de Nilda Jusayu.

22. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 40.793.288 de Nilda Jusayu.

23. Entrevista de fecha 23-10-2013, realizada a Nilda Jusayu.

24. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 346075 de Ana Valeria Jusayu Gómez.

25. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 1.124.035.093 de Ana Valeria Jusayu Gómez.

26. Registro Civil de Nacimiento indicativo serial N° 22529609 de Ana Valeria Jusayu Gómez.

27. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 656012 de Katty Epiayú Epiayú.

28. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 1.006.897.040 de Katty Epiayú Epiayú.

29. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 728535 de Guillermo Jusayu Vangrieken.

30. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 728815 de Yesica Jusayu Gómez.

31. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 728928 de Mariana Jusayu Uriana.

32. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 728934 de Isabel Jusayu Uriana.

33. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 728940 de Jhojany Jusayu Uriana

34. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 728954 de Luis Jesús Jusayu Uriana.

35. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 728959 de Ana Jusayu Gómez.

36. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 729643 de Nilda Jusayu.

37. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 736381.

38. Copia del Expediente digital Radicado 27517 donde se encuentra la investigación del hecho y la materialidad que demuestra el mismo.

Víctima: Guillermo Alfonso Jusayu Epiayú

1. Registro Civil de Defunción indicativo serial N° 04515396 de fecha 10-09-2004 del occiso Guillermo Alfonso Jusayu Epiayú, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

2. Certificado de fecha 12-10-2004, expedido por La Fiscalía tercera seccional, radicado N° 27517 donde consta la investigación en la justicia permanente por el Homicidio de Guillermo Alfonso Jusayu Epiayú.

3. Informe de la Consulta Web Service de la Registraduría Nacional identificación N°84.073.843 de Guillermo Alfonso Jusayu Epiayú

4. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 84.073.843 de Guillermo Alfonso Jusayu Epiayú.

Víctima: Luis Sergio Jusayu

1. Copia de expediente de La Fiscalía General de La Nación con radicado 27517 por el delito de Homicidio de Luis Jusayu y Emilo Jusayu.

2. Copia de expediente de la seccional de fiscalías de Riohacha con número de radicado 32293, por el Homicidio de Luis Jusayu, Guillermo Alcides Zapata Legarda.

3. Informe de la Consulta Web Service de la Registraduría Nacional identificación N°17.843.160 de Luis Sergio Jusayu

4. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 17.843.160 de Luis Sergio Jusayu.

Víctima: Édison Manuel Jusayu Epiayú (Tentativa)

1. Registro de historia clínica de Édison Jusayu Epiayú de fecha 19-09-2004, expedido por E.S.E Hospital San José De Maicao – Guajira.

2. Informe de la Consulta Web Service de la Registraduría Nacional identificación N°84.077.178 de Édison Manuel Jusayu Epiayú.

3. Versión libre de fecha 13-09-2013 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Hecho N°38 Homicidio de José Rafael Pérez Pérez

Carpeta: 27156

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Irrupción sitio cerrado

Situación Fáctica: El 28 de octubre del año 2004, mientras se encontraba en la vivienda ubicada en la carrera 1 del barrio en Maicao, el señor José Rafael Pérez Pérez fue sorprendido por un grupo de hombres armados los cuales ingresan violentamente a la residencia y abrieron fuego contra él causándole la muerte de manera inmediata.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Informe de Policía Judicial N° 9-350000 de fecha 29-05-2020, rendido por el funcionario Oscar David Rincón Pretell.

2. Consulta Sijuf radicado 27733 de José Rafael Pérez Pérez.

3. Acta de inspección a cadáver N° 140 de fecha 28-10-2004 del occiso José Rafael Pérez Pérez.

4. Protocolo de necropsia N° 2004p-00137 de fecha 28-10-2004 del occiso José Rafael Pérez Pérez, expedido por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

5. Registro Civil de Defunción indicativo serial N° 03949077 de fecha 28-10-2004 del occiso José Rafael Pérez Pérez, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

6. Informe de la Consulta Web Service de la Registraduría Nacional identificación N° 84.008.386 de José Rafael Pérez Pérez.

7. Entrevista 11-03-2020, realizada al Sra. Eliana Patricia Pérez Pérez.

8. Registro Civil de Nacimiento indicativo serial N° 2788567 de José Rafael Pérez Pérez.

9. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía N° 84.008.386 de José Rafael Pérez Pérez.

10. Versión libre de fecha 20-09-2019 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde confiesa el hecho.

11. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 614730 de Adalberto Pérez Pérez.

12. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 615336 de Eliana Pérez Pérez.

13. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 615293 de Liliana Pérez Pérez.

14. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 615325 de Lilibeth Pérez Pérez.

15. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 615145 de Luis Rafael Pérez Pérez.

16. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 27156 de Rosa Virginia Pérez Duarte.

Hecho N°39. Homicidio de Kevin Oswaldo Paredes Santos

Carpeta: 550787

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Irrupción sitio cerrado

Situación Fáctica: El 19 de noviembre del año 2004, Kevin Oswaldo Paredes Santos de 16 años, se encontraba donde unos vecinos del barrio Santo Domingo de Maicao cuando un grupo de hombres armados irrumpieron violentamente en esa residencia preguntando por John Díaz quien era el propietario de la vivienda, y ante la negativa de que su señora les manifestara donde se encontraba John, estos sujetos armados abrieron fuego contra el causándole la muerte de manera inmediata.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Informe de Policía Judicial N° 11-51961, rendido por el funcionario José Sánchez.

2. Inspección judicial por muerte N° 153 de fecha 19-11-2004 del occiso Kevin Oswaldo Paredes Santos.

3. Certificación de Necropsia médico legal N° 2004p-00149 de fecha 19-11-2004 del occiso Kevin Oswaldo Paredes Santos, expedido por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

4. Registro Civil de Defunción indicativo serial N° 04515403 de fecha 19-11-2004 del occiso Kevin Oswaldo Paredes Santos, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

5. Certificado de fecha 16-01-2015, expedido por La Fiscalía Tercera de Maicao, radicado N° 27885 donde consta la investigación en la justicia permanente por el Homicidio de Kevin Oswaldo Paredes Santos.

6. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 596716 de Diana Santo Carmona.

7. Registro Civil de Nacimiento indicativo serial N° 24224193 de Kevin Oswaldo Paredes Santo.

8. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 597271 de Oswaldo Rafael Paredes Madrid.

9. Entrevista de fecha 28-08-2015, realizada al Sr. Osvaldo Rafael Paredes Madrid.

10. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 598023 de Alba Paredes Santos.

11. Versión libre de fecha 18-04-2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde confiesa el hecho.

Hecho N°40 Homicidio de Jonny Antonio Zambrano Feria

Carpeta: 61779

Política: Control Social

Practica: Homicidio individual

Modus operandi: Sicariato

Situación Fáctica: El 3 de diciembre del año 2004 el señor Johnny Antonio Zambrano feria salió de su casa en Carraipía hacia el mercado de Maicao, cuando ya iba de regreso se bajó del transporte público de donde se movilizaba tras recibir una llamada; más tarde fue encontrado su cuerpo sin vida en inmediaciones del basurero municipal de Maicao con 4 impactos de arma de fuego en el cráneo y estomago de acuerdo con el protocolo de necropsia, propinados por miembros de las autodefensas.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Homicidio en Persona Protegida descrito en el Art.135 ley 599 de 2000; en concurso con Detención Ilegal y Privación del Debido Proceso, art 149 cp., bajo circunstancias de mayor punibilidad, numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, Ley 599 De 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Informe de Policía Judicial N° 11-50385 de fecha 05-09-2015, rendido por el funcionario Carmen Araque Díaz.

2. Protocolo de necropsia N° 2004p-00160 de fecha 04-12-2004 del occiso Jonny Antonio Zambrano Feria, expedido por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

3. Certificado de defunción N° a1696329 de fecha 03-12-2004 del occiso Jonny Zambrano Feria, expedido por el ministerio de salud.

4. Registro Civil de Defunción indicativo serial N° 5389739 de fecha 03-12-2004 del occiso Jhonni Antonio Zambrano Feria, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

5. Informe de la Consulta Web Service de la Registraduría Nacional identificación N° 15.033.652 de jhonni Antonio zambrano feria.

6. Inspección judicial por muerte N° 162 de fecha 04-12-2004 del occiso Jonny Antonio Zambrano Feria.

7. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 61779 de Olga Sapuana González.

8. Versión libre de fecha 20-09-2019 del postulado Salvatore Mancuso Gómez, donde acepta el hecho.

Finalmente se tiene que la representante de la Fiscalía General de la Nación formuló dentro del patrón de macro criminalidad de Desplazamiento Forzado el Hecho que relacionó con el número 7, sin embargo, su recuento fáctico y la consecuente adecuación típica corresponde al patrón de macro criminalidad de Homicidio, razón por la que ha sido trasladado a este acápite en los siguientes términos:

Hecho N° 7 Homicidio de Omar De Jesús Hinojosa López[32]
Carpeta: 304272
Situación Fáctica: El día 25 de febrero del año 2022, el señor Omar De Jesús Hinojosa López, se encontraba en la vivienda ubicada en el barrio nuevo horizonte en la calle 14b con carrera 32 esquina, descansando, cuando hombres armados sin mediar palabras ingresaron de manera violenta a la vivienda y le dispararon de manera indiscriminada causándole la muerte.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Homicidio en Persona Protegida art.135 C.P, en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 61074 de Luzcenith López

2. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez.

En atención a todo lo expuesto, encuentra la Sala ajustado a derecho el proceso de adecuación típica efectuado por la representante de la Fiscalía General de la Nación, así como la debida acreditación probatoria efectuada, en consecuencia, se

[32] Este hecho, en atención al recuento fáctico y la consecuente adecuación típica efectuada por la Fiscalía, se corresponde con el patrón de macro criminalidad de Homicidio, razón por la que ha sido remitido y anexado al acápite respectivo.

LEGALIZARÁN los cargos formulados bajo el **Patrón De Macro Criminalidad De Homicidio** y, así se dispondrá en la parte resolutiva de la presente sentencia.

4.3. LEGALIZACIÓN DEL PATRÓN DE MACROCRIMINALIDAD DE DESAPARICIÓN FORZADA.

Hecho N° 1 Desaparición forzada de Rafael Toro Almazo - Francisco Toro Almazo (Desplazamiento Forzado)

Carpeta: 386437

Política: Control Social

Practica: Inhumación Completa

Modus Operandi: Sin Datos

Situación Fáctica: Rafael Toro trabajaba como conductor de la empresa de productos lácteos CILEDCO; en el mes de marzo del año 2002, salió del Corregimiento de Puente Bomba con destino al Corregimiento de Mingueo, jurisdicción del municipio de Dibulla - Guajira-, con el propósito de comprar ropa para su madre e hija, una vez allí, según indicaron sus familiares, llegó a un establecimiento de comerció de bebidas alcohólicas donde estuvo departiendo, sin que se volviera a tener noticias de su paradero.
Su hermano, Francisco Toro Almazo, informó que días después de su desaparición se trasladó hasta el corregimiento de Mingueo averiguando por él, pero fue abordado por hombres armados pertenecientes a las autodefensas quienes le dieron 5 minutos para que saliera del corregimiento.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Desaparición Forzada en Persona Protegida Art.165 C.P en concurso con Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil art 159 CP. bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 350538 de Francisco Toro Almazo.

2. Versión libre de fecha 22-03-2017, donde el postulado Salvatore Mancuso Gómez acepta los hechos.

3. Versión libre de fecha 18-08-2021, donde el postulado Salvatore Mancuso Gómez, acepta los hechos.

Hecho N° 2. Desaparición forzada de Luis Antonio Berrio Toro - Luis Miguel Berrio Deluque (Desplazamiento forzado)

Carpeta: 598919

Política: Control Social

Practica: Inhumación Completa

Modus Operandi: sin datos

Situación Fáctica: El 20 de enero del año 2003 Luis Antonio Berrio Toro de salió de su vivienda a laborar a la parcela de propiedad de su padre sin que se volviera a tener noticias de su paradero; su padre, Luis Miguel Berrio Deluque, mediante oficio No. 112 del 5 de febrero de 2015 fue informado de que su hijo, Luis Antonio Berrio Toro falleció en un enfrentamiento entre la guerrilla y los paramilitares en el sector conocido como La Laguna, jurisdicción de Caracolí, municipio de San Juan Del Cesar y había sido sepultado como NN, no obstante se logró su identificación decadactilar tal como consta en Acta De Levantamiento De Cadáver No.43 de fecha 10 de febrero del año 2004.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Desaparición Forzada en Persona Protegida Art.165 C.P en concurso con Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Informe de Policía Judicial N° 9-617796 de fecha 17/04/2023 del investigador Sonia María González Garrido.

2. Cédula de Ciudadanía n.17809891 de Luis Miguel Berrio Deluque.

3. Entrevista de fecha 07/11/2019 recepcionada a Luis Miguel Berrio Deluque en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

4. Denuncia de fecha 23/03/2012 presentada por Luis Miguel Berrio Deluque por el punible de desaparición forzada de Luis Antonio Berrio Toro

5. Formato Nacional para búsqueda de Personas Desaparecidas (SIRDEC) con N° 2012d002973 de Luis Antonio Berrio Toro.

6. Consulta individual VIVANTO ID número 23188946 de Luis Miguel Berrio Deluque.

7. Entrevista de fecha 28/07/2020 recepcionada a Luis Miguel Berrio Deluque en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

8. Entrevista de fecha 04/20/2023 recepcionada a Luis Miguel Berrio Deluque en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar

9. Informe de Policía Judicial 9-372150 de fecha 18/08/2020 del investigador Leonardo Pérez Robayo en el cual se investiga el desplazamiento del señor Luis Miguel Berrio Luque.

10. Consulta Sijuf desplazamiento del señor Luis Miguel Berrio Deluque.

11. Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley N° 677082 del señor Luis Miguel Berrio Deluque.

12. Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley N° 677096 del señor Luis Miguel Berrio Deluque.

13. Versión libre del postulado Salvatore Mancuso Gómez en la cual acepta el hecho.

Hecho N° 4 Desaparición forzada de Juan De Jesús Berrio Lara

Carpeta: 302319

Política: Control Social

Practica: Inhumación Completa

modus operandi: sin datos

Situación Fáctica: Se tiene documentado que el 14 de diciembre del año 2003, Juan De Jesús Berrio Lara, de 29 años, salió de su residencia ubicada en el barrio La Mano de Dios del municipio de Riohacha, decidido a trabajar en la vereda Las Palmas, jurisdicción del corregimiento Tomarrazón – Hato Nuevo (Guajira). La última vez que tuvo comunicación telefónica con su familia fue el día 14 de enero de 2004, y desde entonces no se volvió a tener información de su paradero. Se tiene que de acuerdo con el Informe de Policía Judicial de fecha 06 de octubre del año 2015 los hechos antes descritos corresponden al modus operandi atribuibles a las Autodefensas del Frente Contrainsurgencia Wayúu que operaba en la vereda de Las Palmas jurisdicción del municipio de Riohacha La Guajira.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Desaparición Forzada en Persona Protegida Art.165 C.P en concurso con Homicidio en Persona Protegida Art.135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Informe de Policía Judicial número 1153473 de fecha 06/10/2015 del investigador Ricardo José Lacera Zapata

2. Cédula de Ciudadanía número 84088210 de Juan De Jesús Berrio Lara.

3. Tarjeta de preparación del señor Juan De Jesús Berrio Lara

4. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 255173 por el delito de desaparición forzada presentado por Dolis María Cárdenas Pedroza

5. Versión libre del postulado Salvatore Mancuso Gómez en la cual acepta el hecho.

Hecho N° 5. Desaparición Forzada de NAIL ANTONIO PEÑA PABÓN

Carpeta: 221047

Política: Control Social

Practica: Inhumación Completa

Modus Operandi: Sustracción Por La Fuerza

Situación Fáctica: El 25 de abril del año 2004, Nail Antonio Peña Pabón salió hacia Mingueo – Guajira, a hacer a realizar una diligencia, cuando fue interceptado miembros de las autodefensas, quienes mediante el uso de armas de fuego se lo llevaron con rumbo desconocido.

En diligencia de versión libre rendida el 2 de julio del año 2015, el postulado Rosendo León Galeano, ex integrante del Frente Contrainsurgencia Wayúu, aceptó haber asesinado a Nail Antonio Peña Pabón en compañía de otros miembros del GAOML por orden del comandante conocido con el alias de "Ramiro".

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Desaparición Forzada en Persona Protegida Art.165 C.P en concurso con Homicidio en Persona Protegida Art 135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Informe de Policía Judicial no.11-58432 del 22/10/2015, investigador Carlos Mozo Choles.

2. Formato Nacional Para búsqueda de Personas Desaparecidas (Sirdec) N° 2009d003228, de Nail Antonio Peña Pabón.

3. Plena Identidad N° 12617851 DE Nail Antonio Peña Pabón.

4.Fotografía de Nail Antonio Peña Pabón.

5. Denuncia del 9/11/2005, denunciante Norexi De Los Santos Curvelo Bertiz.

6. Consulta De Sijuf N° 31685 por desaparición de Nail Peña Pabón.

7. Entrevista de fecha 14/10/2015, realizada a Norexi De Los Santos Curvelo Bertiz.

8. Entrevista de fecha 20/10/2015 de Norexi Curvelo.

9. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 60198 DE Norexi De Los Santos Cuervelo Bertiz.

10. Cédula De Ciudadanía de Norexi De Los Santos Curvelo Bertiz.

11. Documento de Nail Antonio Peña Pabón adiado 14/07/1997 dirigido a INCORA sede Santa Marta.

12. Documento Acción Social adiado 31/10/2008.

13. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 702627 de Virgelina Peña Pabón.

14. Versión libre del postulado Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 6 Desaparición forzada de Gerardo Rafael Ortiz Barrios

Carpeta: 95664

Política: Control Social

Practica: Inhumación Completa

modus operandi: sin datos

Situación Fáctica: El 18 de agosto del año 2004 el señor Gerardo Rafael Ortiz Barrios, salió de su residencia con destino a la finca llamada “La Cristalina" ubicada en Palomino y desde esa fecha su familia no tiene información certera de su paradero. Refiere su familia que les informaron que había sido asesinado por hombres pertenecientes a grupos al margen de la ley que operaban en la zona y de acuerdo con el informe de policía judicial se tiene que es el accionar delictiva de las Autodefensas.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por el delito de Desaparición Forzada en Persona Protegida Art.165 C.P en concurso con Homicidio en Persona Protegida Art.135 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Informe de policía judicial N° 11-61521 del investigador Cesar Parra Jiménez

2. Sirdec N°2008d012349, victima Gerardo Rafael Ortiz Barrios

3. Plena identidad número 12369367 de Gerardo Rafael Ortiz Barrios

4. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 422558 de Teresa Barrios Pertuz

5. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 696392 de Antonio Manuel Acevedo barrios

6. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 95664 de Mistelva Rosa Montes Barrios

7. Aceptación de hechos en versión libre, postulado Salvatore Mancuso Gómez

En atención a todo lo expuesto, encuentra la Sala ajustado a derecho el proceso de adecuación típica efectuado por la representante de la Fiscalía General de la Nación, así como la debida acreditación probatoria efectuada, en consecuencia, se **LEGALIZARÁN** los cargos formulados bajo el **Patrón De Macro Criminalidad**

De Desaparición Forzada y, así se dispondrá en la parte resolutiva de la presente sentencia.

4.4. PATRÓN DE MACRO CRIMINALIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO

Hecho N° 1 Desplazamiento forzado de Dilibeth Rodríguez Mejía y su núcleo familiar

Carpeta: 598925

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Amenazas Individuales

Situación Fáctica: El 1 de julio del año 2000, en el corregimiento de Cotoprix jurisdicción del municipio de Riohacha -La Guajira-, hombres pertenecientes a las Autodefensas ingresaron a la finca Niña Rosa, haciéndose pasar por guerrilleros exigiendo el pago de vacunas, el propietario Idelfonso Medina Campo, le pagaba a los insurgentes, al entregar el dinero, lo tildaron de guerrillero y colaborador de la guerrilla, lo subieron a un vehículo a él y a la señora Dilibeth Rodríguez Mejía, quien laboraba en la finca, a ella la amenazaron diciéndole que si regresaban a la finca y la encontraban en ese lugar, atentarían contra su vida, por tal motivo, se desplazó junto a su grupo familiar dejando sus bienes abandonados (cultivos de yuca, maíz gallina, patos , y enseres de la casa).

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P y Exacciones o Contribuciones Arbitrarias Art 163 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.cp.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de Policía Judicial N°9332916 de fecha 05/02/2020 realizado por el investigador Miguel Adolfo Cabrera Pertuz.

2. Cédula de ciudadanía N° 40927929 de Dilibeth Rodríguez Mejía.

3. Entrevista de fecha 13/11/2019 recepcionada a Dilibeth Rodríguez Mejía en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

4. Resolución N° 2016-165507 del 1 de septiembre de la Unidad Para La Atención Y Reparación Integral de Las Victimas en la cual se incluye a la señora Dilibeth Rodríguez en el Registro Único De Victimas por desplazamiento forzado.

5. Consulta individual VIVANTO de Dilibeth Rodríguez N° 24675588.

6. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 677099 de Dilibeth Rodríguez Mejía.

7. Versión libre de fecha 22/04/2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez.

8. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 3[33] Desplazamiento forzado de Ismael Enrique Bolívar Arrieta

Carpeta: 374756

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Amenazas Individuales

Situación Fáctica: En el año 2002, el señor Ismael Enrique Bolívar Arrieta quien era administrador de la planta de combustible Atayawayacoop, salió desplazado del municipio de Maicao porque las Autodefensas constantemente le hacían amenazas indicándole que debía abandonar el municipio, y como el señor Ismael hizo caso omiso en un principio a dichas advertencias, este grupo secuestró su núcleo familiar y a varios de los trabajadores de la estación de servicio, inicialmente le pagó a Jorge 40 para su liberación.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Exacciones o Contribuciones Arbitrarias Art 163 C.P. Secuestro Extorsivo Art.169 C.P, Actos De Terrorismo Art.144 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 337157 de Ismael Enrique Bolívar Arrieta.

2. Versión libre de fecha 09/08/2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 4 Desplazamiento forzado de Luis Chamorro Hernández

Carpeta: 423725

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Amenazas Generalizadas

Situación Fáctica: El 1 de febrero del año 2002 el señor Luis Chamorro Hernández refiere que debido a las amenazas recibidas por miembros de un grupo armado ilegal,

[33] El Hecho No. 2 fue retirado.

el cual le manifestó a los campesinos de la zona que debían desalojar sus predios lo obligaron a salir desplazados de la finca La Rubia del corregimiento Mingueo en el municipio de Dibulla donde residía y obtenía su sustento, dejando abandonadas sus pertenencias, cultivos, animales de granja así como sus medios de vida y de trabajo.
Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley 396550 de Luis Chamorro Hernández.

2. Versión de fecha 10/01/2017 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 5 Desplazamiento forzado de Álvaro Ramírez Jiménez

Carpeta: 540445

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Incursiones armadas/operaciones de registro y control de área.

Situación Fáctica: Debido a los abusos, intimidación y el plazo perentorio de 72 horas para salir de la región que le hicieran hombres de un grupo armado de Autodefensas que delinquía en la zona, el señor Álvaro Ramírez Jiménez de 47 años de edad, dedicado a labores del campo, el 2 de febrero del año 2002, se vio obligado junto a su núcleo familiar a salir desplazados de la finca El Contento ubicada en el corregimiento de Matitas del municipio de Riohacha, donde residían y trabajaba, dejando abandonados sus cultivos y medios de vida y trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 582956 de Álvaro Ramírez Jiménez.

2. Versiones libres de fechas 9 de agosto de 2022 y 10/01/2017 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 6 Desplazamiento forzado de Dalitza Yaner Iguarán Arregocés y su núcleo familiar

Carpeta: 596780

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Incursiones armadas/operaciones de registro y control de área.

Situación Fáctica: El 02 de febrero del año 2002, la señora Dalitza Yaner Iguaran Arregocés se encontraba en la finca en la cual laboraba, hasta donde ingresaron varios hombres armados los cuales la agredieron física y verbalmente, amenazándola con atentar contra su vida, la obligaron junto a sus seis hijos a salir desplazados del predio en el corregimiento Barbacoas de la vereda Puerto Colombia en el municipio de Riohacha, dejando abandonadas sus pertenencias, cultivos, animales de granja, así como sus medios de vida y de trabajo. Manifiesta además que las agresiones físicas recibidas el día en mención la hicieron abortar ya que se encontraba en embarazo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de Policía Judicial N°9-332856 de fecha 29 de enero del año 2020 suscrito por el investigador Miguel Adolfo Cabrera Pertuz.

2. Consulta individual VIVANTO N° 24478821 de Dalitza Yaner Iguarán Arregocés.

3. Certificación cedula de Dalitza Yaner Iguaran Arregocés identificada con cedula 40.931.369

4. Entrevista de fecha 12/11/2019 recepcionada a Dalitza Iguarán Arregocés en la cual amplia las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5. ID N° 1118849834 de Yeferson Hernando Iguarán.

6. Registro de nacimiento indicativo seria 26228489 de Yeferson Iguarán.

7. Fotocopia de la cedula de ciudadanía de Yeison David Iguarán.

8. Registro Civil de nacimiento indicativo serial 29895459 de Yeison David Iguarán.

9. Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley N° 672233 de Dalitza Iguarán.

10. Versión libre del postulado Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 8 Desplazamiento forzado de Dalgis María Ávila Rodríguez

Carpeta: 377799

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Amenazas Individuales

Situación Fáctica: El 27 de febrero de 2002, la señora Dalgis María Ávila Rodríguez junto a su núcleo familiar se vieron obligados a salir desplazados de la finca Las Marías en el corregimiento la Alta Guajira de Maicao luego que miembros de un grupo armado les ordenaran desalojar el predio donde residían y devengaban su sustento, perdiendo forzosamente sus pertenencias, así como sus cultivos, animales de granja, medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de Policía Judicial de fecha 16/11/2015 suscrito por el servidor Jasibe Rivera Orozco.

2. Documento de Identidad N° 23007619 de Dalgis María Ávila.

3. Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley N° 340585 de Dalgis María Ávila Rodríguez.

4. Versión libre de fechas 10/01/2017 y 9 de agosto de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 9 Desplazamiento forzado de Eidis María Hernández Guerra y su núcleo familiar Albis Guerra Márquez y su núcleo familiar.

Carpeta: 401436

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Incursiones armadas/operaciones de registro y control de área.

Situación Fáctica: El 19 de marzo del año 2002, en el corregimiento Juan y Medio del municipio de Riohacha - La Guajira, la señora Eidis María Hernández Guerra salió desplazada junto a su núcleo familiar, debido a la presencia de hombres armados pertenecientes a grupos al margen de la ley quienes atentaban contra la humanidad de los pobladores de la zona, es por ello por lo que por temor se desplazó dejando sus bienes abandonados.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o

Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley N° 396653 de Albis Guerra Márquez

2. Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley N° 368129 de Eidis Hernández Guerra.

3. Versiones libres de fechas 09/08/2022, 15/06/2016 y 10/01/2017 del postulado Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 10 Desplazamiento forzado de Cruselis Del Carmen Mejía Medina

Carpeta: 567005

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Incursiones armadas/operaciones de registro y control de área.

Situación Fáctica: El 01 de abril del año 2002, en el corregimiento de Juan y Medio jurisdicción del municipio de Riohacha -La Guajira, la señora Cruselis Del Carmen Mejía se vio en la obligación de desplazarse junto a su núcleo familiar debido a que un grupo de hombres armados realizó una reunión y amenazaron a los pobladores de la región dejando sus bienes abandonados.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios:

1.Version libre del postulado Salvatore Mancuso Gómez de fecha 09/08/2022.

Hecho N° 11 Desplazamiento forzado de Alfredo Segundo Monroy Toro

Carpeta: 140910

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Incursiones armadas/operaciones de registro y control de área.

Situación Fáctica: El día 4 de abril, siendo las 4:30 p.m., un grupo armado realiza una incursión en el corregimiento de Matitas , todos sus habitantes fueron sacado de las viviendas y llevadas hasta la plaza del pueblo, donde se realizaría una reunión; ya

en este sitio a las personas se le comenzó a pedir su documento de identidad, de esta reunión fueron sacadas dos personas, quienes posteriormente fueron asesinadas, porque se opusieron a irse con ellos; a raíz de estos hechos, se generó un desplazamiento masivo desde el corregimiento de Matitas hacia el municipio de Riohacha , donde todos sus habitantes por temor y la inseguridad que le había generado el hecho ocurrido, dejaron todos sus bienes abandonados, entre ellos el señor Alfredo Segundo Monroy Toro.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1.Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 140910 de Alfredo Segundo Monroy Toro

2.Version libre de fecha 9 de agosto de 2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 12 Desplazamiento forzado de William Enrique Fuentes

Carpeta: 417144

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Incursiones armadas/operaciones de registro y control de área.

Situación Fáctica: En el mes de abril de 2002, el señor William Enrique Fuentes y su núcleo familiar salieron desplazados del predio donde residían, ubicado en el corregimiento Tomarrazon jurisdicción del municipio de Riohacha debido a las amenazas recibidas por parte de hombres armados, debido a esta situación dejaron abandonadas sus pertenencias, animales de granja, cultivos, así como sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de Policía Judicial N°9-332961 de fecha 21/01/2020 suscrito por el investigador Leonardo Pérez Robayo.

2. Certificado de desplazamiento de William Enrique Fuentes de Acción Social-

3. Consulta individual VIVANTO id persona N° 479404 de William Enrique Fuentes

4. Entrevista de fecha 13/11/2019 recepcionada a Eliana Yulieth Fuentes Jaramillo en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5. Documento de Identidad de Eliana Yulieth Fuentes Jaramillo N° 1.118.862.493.

6. Documento de Identidad N° 7170581 de William Enrique Fuentes.

7. Documento de Identidad de Wilfredys Fuentes Castro N° 1006578524.

8. Documento de Identidad de Wendy Adelaida Fuentes Castro N° 1121334762.

9. Documento de Identidad de William Enrique Fuentes Castro N° 1121334757.

10. Documento de Identidad de José Rafael Fuentes Castro N° 1121336711.

11. Documento de Isidoria Isabel Fuentes Castro N° 1121338391.

12. Documento de Identidad de Carolina Bouriyu N° 40954918.

13. Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley N° 388075 de William Fuentes.

14. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 13 Desplazamiento forzado de Leogardis Enrique Mejía Bolaño

Carpeta: 532421

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Incursiones armadas/operaciones de registro y control de área.

Situación Fáctica: En el mes de abril del año 2002 el señor Leogardis Enrique Mejía Bolaño y su núcleo familiar salieran desplazados del corregimiento Palomino de Dibulla donde residían y laboraban debido a la violencia que se vivía en la zona, por la presencia de hombres armados pertenecientes a grupos al margen de la ley.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 569748 de Leogardis Enrique Mejía Bolaño.

2. Versiones libres del postulado 9 de agosto de 2022 y 10/01/2017 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 14 Desplazamiento forzado de Nicolas Elías Barros Ariza

Carpeta: 140893

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Amenazas Individuales

Situación Fáctica: El 11 de abril de 2002 miembros de las Autodefensas arribaron a la finca de propiedad del señor Nicolas Elías Barros Ariza, lo amenazaron de muerte obligándolo a desplazarse dejando la finca sola, lo cual aprovecharon para llevarse 7 reses. Se le perdieron 2 hectáreas de maracuyá, 2 hectáreas de papaya en producción, 50 palos de limón, 15 palos de guanábana, implementos de trabajo y le destruyeron la casa.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal.

Elementos Materiales Probatorios

1. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 140893 Nicolás Elías Barros Ariza.

2. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 15 Desplazamiento forzado de Juan Manuel Cataño Guerra.

Carpeta: 300500

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Amenazas Individuales

Situación Fáctica: El 25 de abril del año 2002, el señor Juan Manuel Cataño Guerra se encontraba laborando en la finca Morenero ubicada en el corregimiento de Tomarrazon, cuando hombres armados ingresaron y le informaron que debía irse de la zona o atentarían contra su vida, por tal motivo, salió desplazado dejando sus bienes abandonados.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley N° 59586 de Juan Manuel Catano Guerra.

2. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 16 Desplazamiento forzado de Leohilda Mendoza Bonilla.

Carpeta: 613464

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Amenazas Individuales

Situación Fáctica: El 30 de abril del año 2002, debido a los actos de violencia perpetrados por los integrantes de las Autodefensas que delinquían en la zona y que se ubicaron en la finca Carrizal, del corregimiento de Tomarrazon de Riohacha y las amenazas que hicieron a la población para desalojar la región, obligó a la señora Leohilda Mendoza Bonilla y su núcleo familiar a salir desplazados dejando abandonados sus bienes.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Entrevista de fecha 20/12/2012 recepcionada a Leohilda Mendoza Bonilla en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar

2. Formato único de declaración de Leohilda Mendoza Bonilla

3. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 60253 de Leohilda Mendoza Bonilla.

4. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 17 Desplazamiento forzado de Elsa Beatriz Melo Flórez
Carpeta: 224767

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Amenazas Individuales

Situación Fáctica: El 13 de mayo del año 2002, la señora Elsa Beatriz Melo Flórez, se desplazó de su propiedad dejando sus bienes abandonados debido a la violencia que se vivía en la zona por la presencia de hombres pertenecientes a grupos amados que la obligaron a abandonar la zona y dejar sus bienes.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 222252 de Elsa Beatriz Melo Flórez

2. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 18 Desplazamiento forzado de Eduardo Rafael Hernández Medina y su núcleo familiar y Carlos Javier Tariffa Rodríguez.

Carpeta: 557998

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Amenazas Individuales

Situación Fáctica: Los señores Eduardo Rafael Hernández Medina y Carlos Javier Tariffa Rodríguez residentes en la Finca Los Cocos de propiedad del Señor Mario Cotes, debido a que las Autodefensas hicieron una base en dicha propiedad, en la cual realizaron distintos actos de violencia como homicidios y desapariciones, salieron desplazados junto sus núcleos familiares dejando abandonadas sus pertenencias tales como enseres y animales.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal.

Elementos Materiales Probatorios

1. Cédula de ciudadanía del señor Eduardo Rafael Hernández Medina N° 92029652.

2. Denuncia formulada por el señor Eduardo Rafael Hernández Medina y su núcleo familiar por el delito de desplazamiento forzado.

3. Entrevista de fecha 10/11/2019 recepcionada a Eduardo Rafael Hernández Medina en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

4. Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley N° 608648 de Eduardo Rafael Hernández Medina

5. Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley N° 608677 de Dellis Rodríguez Jaraba.

6. Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley N° 608696 de Rafael Tarriza Rodríguez

7. Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley N° 608705 de Carlos Tarrifa Rodríguez

8. Versión libre del postulado Salvatore Mancuso Gómez de fecha 09/08/2022

Hecho N° 19 Desplazamiento forzado de Miguel Antonio Mendoza Guerrero

Carpeta: 298289

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Amenazas Individuales

Situación Fáctica: El 1 de julio de 2002, el señor Miguel Antonio Mendoza Guerrero se vio forzado a abandonar el predio de 10 hectáreas donde residía junto a su núcleo familiar y devengaban su sustento ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, debido a las amenazas generadas por sujetos armados los cuales les ordenaron abandonar la región.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 251460 de miguel Antonio Mendoza Guerrero

2. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 20 Desplazamiento forzado de José Domingo Peralta Mendoza.

Ibérica Gómez Amaya y su núcleo familiar.

Carpeta: 557008

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Incursiones armadas/operaciones de registro y control de área.

Situación Fáctica: El 30 de agosto del año 2002 un grupo de hombres armados vistiendo prendas de uso militar y portando emblemas de las AUC, llegaron hasta la finca Las Paibas, ubicada en la vereda Las Palmas del corregimiento Tomarrazon de Riohacha , ejerciendo actos de violencia e intimidación contra la población, amenazándolos con asesinarlos si no salían de sus predios, siendo posteriormente retenidos el señor José Domingo Peralta a quien junto a sus hijos los amarraron y obligaron a irse con ellos hasta la vereda El Limón. Como consecuencia de estos hechos de violencia e intimidación, tanto el señor José Domingo como su señora Ibérica Gómez Amaya y su núcleo familiar se vieron obligados a salir desplazados de sus predios, viéndose forzados a dejar abandonadas sus pertenencias, cultivos, animales de granja, así como sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley N° de 606786 de José Domingo Peralta Mendoza.

2. Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley N° 606791 de Ibérica Gómez Amaya.

3. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 21 Desplazamiento forzado de Aníbal Flórez Rivadeneira

Carpeta: 588390

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Incursiones armadas/operaciones de registro y control de área.

Situación Fáctica: El 5 de septiembre del año 2002, el señor Aníbal Flórez Rivadeneira dedicado a labores del campo y su núcleo familiar debido a la violencia que se vivía en la zona se vieron obligados a salir desplazados de la finca La Jupana donde residía y de donde obtenía su sustento, dejando abandonadas sus pertenencias, así como sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de Policía Judicial N°9332806 de fecha 2020/01/21 suscrito por el investigador servidor Miguel Adolfo Cabrera Pertuz.

2. Certificación Registraduría Nacional del Estado Civil de Aníbal Flórez Rivadeneira N° 17.809.106.

3. Consulta individual VIVANTO id N° 23145928 de Aníbal Flórez Rivadeneira

4. Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley N° 655919 de Aníbal Flórez Rivadeneira.

5. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 22 Desplazamiento forzado de Dinnoris Yaneth Radillo Redondo

Carpeta: 597847

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Incursiones armadas/operaciones de registro y control de área.

Situación Fáctica: El 6 de septiembre de 2002, la señora Dinnoris Yaneth Radillo Redondo se desplazó junto a su núcleo familiar debido a que hombres armados pertenecientes a grupos al margen de la ley la obligaron a desocupar la región, dejando sus bienes abandonados tales como animales, cultivos y enseres del hogar.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1.Informe de Policía Judicial N°9-332895 de fecha 31/01/2020 suscrito por el investigador Miguel Adolfo Cabrera Pertuz.

2.Consulta individual VIVANTO id N° 487895 de Dinnoris Yaneth Radillo Redondo por desplazamiento forzado

3.Documento en el cual consta que la señora Dinnoris Yaneth Radillo Redondo, se encuentra incluida en el registro único de victimas

4.Certificacion de la Registraduría Nacional del Estado Civil con Cédula de ciudadanía N° 40938803 de Dinnoris Yaneth Radillo Redondo

5.Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley N° 674699 de Dinnoris Yaneth Radillo Redondo

6.Copia documento de identidad de Deiber Junior Quinto Radillo N° 1006572739.

7.Copia documento de identidad de Jesús Miguel Quinto Radillo N° 1006572738.

8.Version libre de fecha 9 de agosto de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 23 Desplazamiento forzado de Daysi Del Socorro Ortega Pérez

Carpeta: 546442

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Amenazas Individuales

Situación Fáctica: La presencia e intimidación ejercida por miembros de las AUC del municipio de Riohacha, obligaron a que el 25 de septiembre del año 2002, tanto la señora Daysi Del Socorro Ortega Pérez como su núcleo familiar abandonaran el barrio La Lucha, por temor a sus vidas, dejando abandonadas sus pertenencias, así como sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de Policía Judicial N°9-322747 del año 2019 suscrito por el investigador Miguel Adolfo Cabrera Pertuz.

2. Consulta individual VIVANTO id N° 753072 por el desplazamiento forzado de Daysi Del Socorro Ortega Pérez.

3. Certificado Registraduría Nacional del Estado Civil de Daysi Del Socorro Ortega Pérez con N° 64741460

4. Constancia de la Defensoría del Pueblo en el cual consta que la señora Daisy Ortega Pérez, se desplazó.

5. Entrevista de fecha 20/11/2019 de Daysi Del Socorro Ortega Pérez en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

6. Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley N° 591615 de Daysi Del Socorro Ortega Pérez

7. Versión libre de fecha 09/08/2023 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 24 Desplazamiento forzado de Ladis Nicolasa Ochoa Gómez

Carpeta: 600962

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Amenazas Individuales

Situación Fáctica: El 28 de septiembre de 2002, la señora Ladis Nicolasa Ochoa Gómez se encontraba en su residencia del barrio Luis Eduardo Cuellar de Riohacha donde vivía junto a su cónyuge Juan Manuel Rodríguez Diaz y sus hijos, cuando fue sorprendida por hombres desconocidos que llegaron a la residencia preguntando por su esposo, advirtiéndole que como él era presidente de la invasión 15 de diciembre en inmediaciones de los barrios Los Nogales y Gran Colombia, debían irse, por lo cual, ante tal amenaza salieron desplazados dejando abandonadas sus bienes.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de Policía Judicial N°9-332927 de fecha 06/02/2020 de Ladis Nicolasa Ochoa Gómez

2. Consulta individual VIVANTO de Ladis Nicolasa Ochoa Gómez

3. Certificado Registraduría Nacional del Estado Civil N° 26.963.434 de Ladis Nicolasa Ochoa Gómez

4. Entrevista de fecha 14 de noviembre del año 2019 recepcionada a Ladis Nicolasa Ochoa Gómez en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar

5. Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley N° 681488 de Ladis Nicolasa Ochoa

6. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 25 Desplazamiento forzado de Rubén Raúl Pérez Gil

Carpeta: 306753

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: amenazas generalizadas

Situación Fáctica: El 31 de octubre del año 2002 en momentos que celebraban Halloween en la finca El Edén del corregimiento Los Remedios de Albania, el señor Rubén Raúl Pérez Gil manifiesta que un grupo de hombres armados llegaron a la reunión, atentaron contra la vida de una persona y amenazaron a los presentes que si

al día siguiente los encontraban en el lugar también atentarían contra su vida, ante tal hecho el señor reportante Rubén Raúl Pérez Gil no tuvo más alternativa que salir desplazado de la región dejando abandonadas sus pertenencias así como sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 259294 de Rubén Raúl Pérez Gil

2. Versión libre del postulado Salvatore Mancuso Gómez de fecha 09/08/2022.

Hecho N° 26 Desplazamiento forzado de Pedro Pascual Mendoza Loperena- Dulvis Luz Mendoza Maestre

Carpeta: 364416

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Amenazas Individuales

Situación Fáctica: El 18 de noviembre del año 2002 un grupo de aproximadamente 15 hombres armados llegaron hasta la vivienda donde residían los señores Pedro Pascual Mendoza Loperena y Dulvis Luz Mendoza Maestre en el corregimiento La Junta de San Juan Del Cesar en el departamento de La Guajira, ordenándoles salir de la zona o atentarían contra su vida, por lo que salieron desplazados junto a su núcleo familiar dejando abandonadas sus pertenencias, animales de granja sus cultivos así como sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1.Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley N° 324411 de Pedro Pascual Mendoza Loperena.

2.Registo de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley N° 324434 de Dulvis Luz Mendoza Maestre.

3.Version libre de fecha 9 de agosto de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 27 Desplazamiento Forzado de Edegar Manuel Peralta Vega.

Carpeta: 460682

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Incursiones armadas/operaciones de registro y control de área.

Situación Fáctica: El 4 de marzo de 2003 el señor Edegar Manuel Peralta Vega quien residía en la vereda Casitas del corregimiento Tomarrazon de Riohacha y se ganaba la vida en labores del campo, se vio obligado junto a su núcleo familiar a salir desplazados de la zona dejando abandonadas sus incumbías, cultivos, animales de granja y medios de vida, debido a las amenazas y orden de desalojar que les dieron hombres armados.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de Policía Judicial N°9-373164 de fecha 19/08/2020 suscrito por el investigador Leonardo Pérez.

2. Entrevista de fecha 14/08/2020 recepcionada a Edegar Manuel Peralta Vega en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

3. Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley N° 449804 de Edegar Manuel Peralta Vega.

4. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 28 Desplazamiento forzado de Martha Cecilia Mesa Barrios.

Carpeta: 302693

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Incursiones armadas/operaciones de registro y control de área.

Situación Fáctica: Los hechos de violencia y confrontación armada en la zona llevaron a que el 8 de marzo del año 2003, la señora Martha Cecilia Mesa Barrios saliera desplazada de la finca La Trampa ubicada en la vereda Mamaice en el

corregimiento Palomino donde residía, dejando abandonadas sus pertenencias, así como sus cultivos, animales de granja, medos de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 25554 de Martha Cecilia Mesa Barrios

2. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 29 Desplazamiento Forzado de Segismundo Fuenmayor Montero

Carpeta: 63612

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Incursiones armadas/operaciones de registro y control de área.

Situación Fáctica: El señor Segismundo Fuenmayor Montero, atemorizado por los hechos de violencia que hombres armados habían cometido el día 12 de marzo de 2003 contra miembros de su familia, lo llevaron a que el 13 de marzo del año 2003 se viera obligado a salir del corregimiento Mingueo del municipio de Dibulla, dejando atrás sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 63612 de Segismundo Fuenmayor Montero.

2.Version libre de fecha 9 de agosto de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 30 Desplazamiento forzado de Carmen Cecilia Mora

Carpeta: 63220

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Amenazas Individuales

Situación Fáctica: El 23 de junio del año 2003, la señora Carmen Cecilia Mora se vio en obligada a desplazarse debido a las amenazas que le realizaron hombres armados donde le informaban que se debía ir de la región o atentarían contra la vida de ella y la de su hijo, por tal motivo, se fue hacia la ciudad de Barranquilla, Atlántico, dejando sus bienes abandonados.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 63220 de Carmen Cecilia Mora

2. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 31 Desplazamiento forzado de Alba Luz Cortina Miranda y su núcleo familiar

Carpeta: 93895

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Incursiones armadas/operaciones de registro y control de área.

Situación Fáctica: El día 1 de julio de 2003, la señora Alba Luz Cortina Miranda se desplazó de la finca la provincia de Riohacha donde residía y de donde producían su sustento, debido a que hombres pertenecientes a grupos al margen de la ley que delinquían en la zona llegaron hasta el predio preguntando por su marido el señor Luis Alberto Charris Orozco y al no encontrarlo procedieron a marcar la finca con las siglas AUC y a apoderarse del ganado que se encontraba en la finca, por lo que no tuvieron más opción junto a su núcleo familiar que dejar abandonadas sus pertenencias, cultivos, animales de granja y ganado, así como sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P art.154 cp. Actos de terrorismo. art 144 cp., bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de Policía Judicial N°9-322778 de fecha 2019/11/26 suscrito por el servidor Leonardo Pérez Robayo.

2. Consulta individual VIVANTO de Alba Luz Cortina Miranda por desplazamiento forzado

3. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 302042 de Alba Luz Cortina Miranda

4. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 93895 de Alba Luz Cortina Miranda.

5. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 32 Desplazamiento forzado de Francisco Segundo Boscán Ortiz

Carpeta: 142671

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Incursiones armadas/operaciones de registro y control de área.

Situación Fáctica: El 13 de julio del año 2003, el señor Francisco Segundo Boscán Ortiz se vio obligado a desplazarse de la finca La Esperanza en el corregimiento La Majayura de Maicao debido a la presencia en el predio de hombres armados pertenecientes a grupos al margen de la ley por sus constantes abusos y hurtos a su propiedad y ganado.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Entrevista de fecha 08/11/2019 recepcionada a Francisco Segundo Boscán Ortiz en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

2. Documento de Identidad N° 17848132 de Francisco Segundo Boscán Ortiz

3. Registro de hierro no.44-430-000163-075099 de Francisco Segundo Boscán Ortiz

4. Informe de Policía Judicial N°9-332942 de fecha 22/01/2020 suscrito por el investigador Leonardo Pérez Robayo.

5. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 142671 de Francisco Segundo Boscán Ortiz.

6. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

7.Id de Francisco Segundo Boscán.

Hecho N° 33 Desplazamiento forzado de Diana Esther Julio Cueva

Carpeta: 35003

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Amenazas Individuales

Situación Fáctica: El día 8 de noviembre del año 2003 la señora Diana Esther Julio Cueva se desplazó debido junto a su núcleo familiar de la finca en el municipio de Dibulla donde residía y laboraba debido a que llegaron miembros de las Autodefensas ordenándole que tenían que salir del predio debido a conflictos con el dueño de la finca, se vieron obligados a salir dejando abandonados sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 35003 de Diana Esther Julio Cueva.

2. Versión libre del postulado Salvatore Mancuso Gómez de fechas 10/01/2017 y 09/08/2022.

Hecho N° 34 Desplazamiento forzado de Miriam Amelia Sánchez Sanguino

Carpeta: 585072

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Incursiones armadas/operaciones de registro y control de área.

Situación Fáctica: El 26 de diciembre de 2003 la señora Miriam Amelia Sánchez Sanguino se desplazó de la vereda Monte Lara de Maicao junto a su núcleo familiar debido a la presencia y actos de violencia de miembros armados en la zona, viéndose forzados a dejar atrás sus pertenencias, así como sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de Policía Judicial N°20/01/2020 suscrito por el investigador Miguel Adolfo Cabrera Pertuz.

2. Entrevista de fecha 2019/11/20 recepcionada a Miriam Amelia Sánchez Sanguino en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

3. Tarjeta de preparación de Miriam Amelia Sanguino Sánchez N° 49.761.003.

4. Documento de fecha 15/02/2917 en el cual se indica que la señora Miriam Amelia Sánchez Sanguino se encuentra incluida en el registro único de víctimas por el delito de desplazamiento forzado.

5. Consulta individual VIVANTO id N° 13711378 de Miriam Amelia Sánchez Sanguino.

6. Documento de Identidad de María Mercedes.

7. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley N° 651011 de Miriam Amelia Sánchez Sanguino.

8. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley N° 652039 de Liseth Paola Manjarrez Sánchez.

9. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley N° 652041 de María Mercedes Manjarrez Sánchez.

10. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 35 Desplazamiento forzado de Manuel De La Cruz Peñaloza Libardo

Carpeta: 304022

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Incursiones armadas/operaciones de registro y control de área.

Situación Fáctica: El 24 de enero del año 2004, en el municipio de Dibulla La Guajira, el señor Manuel De La Cruz Peñaloza Libardo se desplazó junto a su núcleo familiar de la finca Palma de Vino debido a que un hombre perteneciente a grupos al margen de la ley le indico que atentaría contra su vida.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P.

Elementos Materiales Probatorios

1. Constancia Carpeta en sistema Sijyp N° 304022 por el desplazamiento de Manuel Peñaloza Libardo.

2. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 36 Desplazamiento forzado de Rubén Enrique Mendoza Uriana.

Carpeta: 140319

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Amenazas Individuales

Situación Fáctica: El 10 de febrero del año 2004, un grupo de hombres armados llegaron hasta la finca llamada Sal Si Puedes, ubicada en la vereda Santa Cruz del corregimiento Tomarrazon de Riohacha , en la cual se encontraba el señor Rubén Enrique Mendoza Uriana agrediéndolo físicamente y amenazándolo, por lo que junto a su núcleo familiar no tuvieron más opción que salir desplazados forzosamente ese mismo día dejando abandonadas sus pertenencias, cultivos, animales de granja así como sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 140319 de Rubén Enrique Mendoza Uriana

2. Versiones libres del postulado Salvatore Mancuso Gómez de fechas 10/01/2017 y 09/08/2022.

Hecho N° 37 Desplazamiento forzado de Eliana De La Hoz -Carlos Diaz

Carpeta: 567402

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Incursiones armadas/operaciones de registro y control de área.

Situación Fáctica: El 26 de febrero del año 2004 los señores Carlos Diaz y Eliana De La Hoz salieran desplazados del municipio de Riohacha debido a que hombres armados pertenecientes a grupos al margen de la ley iban a atentar contra su vida, debido a ello, se desplazaron dejando todos sus bienes abandonados.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o

Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Constancia Carpeta N° 567402 en sistema Sijyp por el desplazamiento de Carlos Diaz y Eliana De La Hoz

2. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 38 Desplazamiento forzado de Mauro Carrillo

Carpeta: 78302

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Incursiones armadas/operaciones de registro y control de área.

Situación Fáctica: entre el 1 y 3 de marzo de 2004 del año 2004, el señor Mauro Carrillo residía en la vereda La Sierra del corregimiento Tigreras, fue obligado a salir desplazado de la zona, forzado a dejar abandonadas sus pertenencias, cultivos, animales de granja, medios de vida y de trabajo, como consecuencia de las amenazas recibidas por la población por parte de grupos al margen de la ley

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 78302 de Mauro Carrillo.

2. Versión libre del postulado Salvatore Mancuso Gómez de fecha 09/08/2022.

Hecho N° 39 Desplazamiento forzado de Idalia Beatriz Márquez Contreras y su núcleo familiar.

Carpeta: 337902

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Amenazas Individuales

Situación Fáctica: El 12 de mayo de 2004 se vio obligada a desplazarse la señora Idalia Beatriz Márquez Contreras quien residía en la vereda Las Margaritas en jurisdicción del corregimiento de Rio Ancho municipio Dibulla en compañía de su núcleo familiar por las amenazas que recibieron de miembros de un grupo paramilitar que delinquía en la región, ese grupo armado se había tomado la vereda y cometió varios asesinatos contra campesinos de la región; como consecuencia de estos hechos las víctimas tuvieron que abandonar su tierra y sufrieron la perdida de sus cultivos, animales y enseres.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 337902 de Idalia Beatriz Márquez Contreras.

2. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 40 Desplazamiento forzado de Damaso Rafael Carreño Daza.

Carpeta: 141164

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Amenazas Individuales

Situación Fáctica: El 14 de julio del año 2004 el señor Damaso Rafael Carreño Daza junto a su núcleo familiar salieran desplazados de la finca La Esperanza ubicada en la Vereda Rio Negro del corregimiento Rio Ancho de Dibulla, debido a las amenazas recibidas por parte de hombres armados pertenecientes a grupos al margen de la ley dejando abandonadas sus pertenencias, cultivos, animales de granja, así como sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 141164 de Damaso Rafael Carreño Daza.

2. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 184834 de Damaso Rafael Carreño Daza.

3. Versión libre del postulado Salvatore Mancuso Gómez de fechas 9 de agosto de 2022 y 10/01/2017.

Hecho N° 41 Desplazamiento forzado de Jairo Álvaro Calderón González

Carpeta: 336257

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Incursiones armadas/operaciones de registro y control de área.

Situación Fáctica: El 12 de agosto del año 2004, el señor Jairo Álvaro Calderón González miembros de las AUC que delinquían en la zona de Rio Ancho, en el municipio de Dibulla, asesinaron a un empleado suyo conocido como caliche debido a ello, se vio forzado por temor a su vida a salir desplazado del corregimiento dejando abandonados sus pertenencias, así como sus cultivos, animales de granja, así como sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de Policía Judicial N°11-58382 de fecha 29 de octubre del año 2015 suscrito por el investigador Ricardo José Lacera Zapata.

2. Informe de Policía Judicial N°9-631165 de fecha 01/06/2021 suscrito por el investigador Miguel Adolfo Cabrera Pertuz.

3. Consulta individual VIVANTO id N° 2700658 de Jairo Álvaro Calderón por desplazamiento forzado.

4. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 288544 de Jairo Álvaro Calderón González.

5. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 288659 de Jairo Álvaro Calderón González.

6. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 42 Desplazamiento forzado de Aura Del Socorro Diaz Barraza

Carpeta: 544144

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Amenazas Individuales

Situación Fáctica: La señora Aura Del Socorro Diaz Barraza se desplazó de la finca donde laboraba, llamada Paloquemao ubicada en el corregimiento Rio Ancho, Dibulla, en noviembre del año 2004, debido a la orden perentoria y amenazas de las AUC para que campesinos y moradores abandonaran la región.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 588288 de Aura Del Socorro Diaz Barraza

2. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 y 10/01/2017 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 43 Desplazamiento forzado de Basilia Pérez

Carpeta: 97066

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Amenazas Individuales

Situación Fáctica: El día 10 de julio de 2004, la señora Basilia Pérez se desplazó de la finca El Regalo ubicada en la vereda Naranjal, en el corregimiento Palomino de Dibulla debido a las amenazas y ordenes que les dieron hombres armados de desocupar la zona o estarían en riesgo sus vidas, forzándola a dejar abandonadas sus pertenencias, cultivos, animales de granja, así como sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 97066 de Basilia Pérez.

2. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 44 Desplazamiento forzado de Delio Enrique Ortega Fragoso.

Carpeta: 276967

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Amenazas Individuales

Situación Fáctica: A principios del mes de enero del año 2002 el señor Delio Enrique Ortega Fragoso se desplazó debido a las amenazas recibidas por parte de miembros de las AUC que delinquían en la zona de la vereda los altos en el municipio de Fonseca, de donde se vio forzado a salir dejando abandonadas sus pertenecías, así como sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Amenazas art.347 C.P., Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos art.154 C.P., bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 229159 de Delio Enrique Ortega Fragoso

2. Versión libre del postulado Salvatore mancuso de fecha 20/01/2023.

Hecho N° 45 Desplazamiento forzado de Jaime Darío Espeleta Herrera

Carpeta: 539848

Política: Control Territorial

Practica: Desplazamiento Individual

Modus Operandi: Amenazas Individuales

Situación Fáctica: El año 2002 el señor Jaime Darío Espeleta Herrera se desplazó del municipio de Riohacha debido a las amenazas recibidas de manera personal y mensajes telefónicos por parte de hombres pertenecientes a grupos al margen de la ley que dominaban el municipio quienes se oponían a su campaña para alcanzar una curul en la cámara de representantes por el departamento de La Guajira de donde es oriundo, a razón de comentarios y rumores de ser ideólogo de la guerrilla según su decir por haber sido parte del partido político unión patriótica. Como consecuencia de lo denunciado el señor Espeleta manifiesta haberse sentido obligado a salir desplazado del municipio de Riohacha y de ver frustradas sus aspiraciones políticas.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil Art 159 C.P. en concurso con Amenazas art.347 CP., bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Registro de hechos atribuible a grupos armados organizados al margen de la ley N° 581693 de Jaime Darío Espeleta herrera

2. Versión libre de fecha 20/01/2023 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 46 Desplazamiento forzado de Ana Rosa Caicedo Granados

Carpeta: 140372

Política: control de recursos.

Practica: no aplica.

Modus Operandi: intimidación mediante acciones violentas contra bienes o personas

Situación Fáctica: El 26 de noviembre del año 2003, la señora Ana Rosa Caicedo se vio en la obligación de desplazarse de la vereda Puyalito del municipio de Fonseca cuando un grupo de aproximadamente 6 hombres armados miembros de las AUC, amenazaron a los moradores de la finca San Martin mientras proceden a hurtarse el ganado que pastaba en el predio, según su reporte 15 vacas paridas de 3 años, 8 novillas de 2 años y un toro de 2 años, causándole una grave afectación económica.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad, numeral 3 y 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de Policía Judicial N°9-322785 de fecha 2019/12/06 suscrito por el servidor Leonardo Pérez R.

2. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 140372 de Ana Rosa Caicedo Granados

3. Versión libre de fecha 18 de abril de 2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez.

En atención a todo lo expuesto, encuentra la Sala ajustado a derecho el proceso de adecuación típica efectuado por la representante de la Fiscalía General de la Nación, así como la debida acreditación probatoria efectuada, en consecuencia, se

LEGALIZARÁN los cargos formulados bajo el **Patrón De Macro Criminalidad De Desplazamiento Forzado** y, así se dispondrá en la parte resolutiva de la presente sentencia.

4.5. PATRÓN DE MACRO CRIMINALIDAD DE VIOLENCIA CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS.

Hecho N° 1 Actos de Discriminación Racial en contra de Mema Paz Barros

Carpeta: 306428

Política: Control Territorial

Practica: perturbación del Orden Cotidiano

Modus Operandi: Robo, expropiación y restricción de alimentos

Situación Fáctica: El 26 de marzo del año 2003, miembros de las autodefensas ingresaron violentamente a la ranchería Moscomana donde residía Mema Paz Barros junto a sus hijos, en el municipio de Maicao, una vez allí los tiraron al suelo, le apuntaron con arma de fuego y les hurtaron collares, cadenas de oro y otros elementos valiosos de su cultura.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Acto de Discriminación Racial Art,147 C.P, en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos Art.154 C.P, Tortura en Persona Protegida Art.137 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de policía Judicial N° 11-47824 de fecha 11/09/2015 - Mema Paz Barros

2. Entrevista de fecha 08/09/2015 a Mema Paz Barros en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

3. Documento de identidad de Mema Paz Barros

4. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 87988 de Mema Paz Barros

5. Versión libre de fecha 18 de abril de 2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez.

6. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley de Mema Paz Barros.

Hecho N° 2 Actos de discriminación racial en contra de Marlenis Pana Pushaina

Carpeta: 294939

Política: Control Territorial

Practica: perturbación del Orden Cotidiano

Modus Operandi: Robo, expropiación y restricción de Alimentos

Situación Fáctica: El 10 de octubre del año 2003 aproximadamente 35 miembros de las autodefensas llegaron a la Ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia del Departamento de La Guajira, donde por espacio de cuatro horas aproximadamente se dedicaron a golpear y maltratar a los miembros de la comunidad, así como destruir y apropiarse de los bienes y enseres que se encontraban en el lugar, entre ellos algunos de propiedad de Marlenis Pana Pushaina, tales como un vehículo automotor de placas XWO 675 y varios artículos artesanales: 20 chinchorros doble faz, treinta y siete (37) chinchorros sencillo, 15 mochilas, 18 sombreros, 25 mantas bordadas, bienes que constituyen un medio de subsistencia de los pueblos indígenas Wayúu y que tienen un especial significado como símbolo de cultura.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Acto de Discriminación Racial art,147 C.P, en concurso con Destrucción y Apropiación De Bienes Protegidos art.154 C.P. Tortura en Persona Protegida art.137 cp., bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de policía judicial N°9-335243 de fecha 12/03/2020 del investigador Miguel Adolfo Cabrera Pertuz.

2. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 58798 de Marlenis Pana Apushana.

3. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 600394 de Marlenis Pana Pushaina.

4. Versión libre de fecha 18 de abril de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 3 Actos de discriminación racial en contra de Adelaida Del Carmen Mejía Ojeda

Carpeta: 300460

Política: Control Territorial

Practica: perturbación del Orden Cotidiano

Modus Operandi: Robo, expropiación y restricción de Alimentos

Situación Fáctica: Se tiene documentado que el 5 de diciembre de 2003, la señora Adelaida Del Carmen Mejía Ojeda perteneciente a la etnia indígena Wayúu, se encontraba en la finca La Zapata ubicada en el corregimiento de Matitas, hasta donde llegaron un grupo armado al que identificaron como de las AUC y procedieron a hurtar algunos de sus reses, tres vacas paridas, 3 novillas, 12 chivos, un caballo, 5 puercas, y otros animales de granja y pastoreo, además de algunos de sus artículos de

valor cultural como chinchorros y collares, causándole grandes perjuicios económicos y ante el temor producido tanto la señora reportante como su núcleo familiar deciden salir desplazados del predio.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Actos de Discriminación Racial art,147 cp., en concurso con Deportación, Expulsión, Traslado O Desplazamiento Forzado De Población Civil Art 159 C.P. Destrucción Y Apropiación De Bienes Protegidos art.154 cp. art.154 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de policía judicial N° 9-322796 de fecha 11/12/2019 suscrito por el investigador Leonardo Pérez Robayo

2. Denuncia N° 484 de fecha 27/06/2007 de Adelaida Del Carmen Mejía Ojeda por el delito de hurto.

3. Entrevista de fecha 03/11/2019 recepcionada a Adelaida Del Carmen Mejía Ojeda en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

4. Cédula de ciudadanía de María Concepción Rodríguez Mejía con N° 40.929.030

5. Cédula de ciudadanía de Adelaida Del Carmen Mejía Ojeda con N° 26.975.601

6. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley N° 59899 de Adelaida Del Carmen Mejía Ojeda

7. Versión libre de fecha 18 de abril de 2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez.

8. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley de Adelaida Del Carmen Mejía Ojeda.

Hecho N° 4 Actos de discriminación racial en contra de Sonia Patricia Jusayu Jarariyu

Carpeta: 306777

Política: Control Territorial

Practica: perturbación del Orden Cotidiano

Modus Operandi: Robo, expropiación y restricción de Alimentos

Situación Fáctica: En el mes de abril del año 2004, la señora Sonia Patricia Jusayu Jarariyu, perteneciente a la etnia indígena Wayúu mientras se encontraba en su residencia en la ranchería Anequishimana del municipio de Maicao, hombres armados quienes portaban brazaletes de las AUC, la amenazaron y le hurtaron en varios días de ese mes 5 chivos, dos linternas, 10 gallinas, 8 pavos, y 28 chivos,

además de destrozos que hicieron en su residencia, causándole enormes perjuicios económicos.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Actos de discriminación Racial Art,147 C.P, en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de policía judicial N° 44-11730 de fecha 15/11/2013 del investigador Oscar Rincón Pretel

2. Informe de policía judicial N° 44-11508 de fecha 02/11/2013 del investigador Luis G Jiménez Coronado

3. Certificado Registraduría Nacional Del Estado Civil de Sonia Patricia Jusayu Jayariyu N° 40880907

4. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 259313 de Sonia Patricia Jusayu Jarariyu

5. Versión libre de fecha 18 de abril de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 5 Actos de discriminación racial en contra de Marcial Antonio García Jusayu

Carpeta: 305804

Política: Control Territorial

Practica: Perturbación del Orden Cotidiano

Modus Operandi: Robo, expropiación y restricción de Alimentos

Situación Fáctica: Antonio García Jusayu, miembro de la etnia indígena Wayúu fue víctima por parte de hombres pertenecientes a las Autodefensas de abusos, amenazas y hurtos, en el mes de septiembre del año 2002, cuando reside en la ranchería Anekeshimana en la vereda Garrapatero del municipio de Albania, las AUC le hurtaron un aproximado de 70 chivos de su propiedad y de los cuales obtenía su sustento, causándole grandes perjuicios económicos, viéndose además obligado a salir desplazado de la zona donde residía.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Actos de Discriminación Racial Art,147 C.P, en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de policía judicial N°11-52787 de fecha 29/09/2015 del investigador Servio Tulio Peña Cabeza

2. Copia documento de identidad N° 84062220 de Marcial García Jusayu

3. Consulta de RUAF Marcial García Jusayu

4. Consulta de SISBEN Marcial García Jusayu

5. Consulta de FOSYGA Marcial García Jusayu

6. Entrevista de fecha 22/09/2015 recepcionada a Marcial Antonio García Jusayu en la cual amplia las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

7. Denuncia de fecha 02/04/2009 de Marcial Antonio García Jusayu

8. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 305804 de Marcial Antonio García Jusayu

9. Versión libre de fecha 18 de abril de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 6 Actos de discriminación racial en contra de Rafael Jusayu

Carpeta: 306711

Política: Control Territorial

Practica: Perturbación del Orden Cotidiano

Modus Operandi: Robo, expropiación y restricción de alimentos

Situación Fáctica: El 1 de octubre de 2004, el señor Rafael Jusayu fue víctima de hombres armados pertenecientes a las Autodefensas que delinquían en la zona de la vereda Garrapatero del municipio de Albania, hurtaron varios animales de su propiedad causándole un grave perjuicio económico. Manifiesta el señor Jusayu que el hurto fue de 30 chivos y 10 vacas.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Actos De discriminación Racial Art,147 C.P, en concurso con Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos art.154 C.P bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 259259 de Rafael Jusayu

2. Versión libre de fecha 18 de abril de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 7 Actos de discriminación racial en contra de Angela Bruges Uriana y Estenith Pushaina

Carpeta: 512965

Política: Control Territorial

Practica: Perturbación del Orden Cotidiano

Modus Operandi: Robo, Expropiación y Restricción de Alimentos

Situación Fáctica: El 14 de diciembre del año 2002 las señoras Angela Bruges Uriana y Estenith Pushaina, pertenecientes a la comunidad Wayuú re se encontraban en la ranchería Ishapa, del corregimiento Carraipia de Maicao, hasta donde llegaron varios hombres armados pertenecientes a las Autodefensas que operaban en la zona y comenzaron a golpear a las señoras, las maltrataron física y verbalmente, les hurtaron sus animales de pastoreo, así como varios de sus elementos culturales valiosos para su cultura como son los chinchorros, collares, etc. Como consecuencia de estos actos de violencia, las señoras y sus núcleos familiares se vieron obligadas a salir desplazadas de la ranchería dejando abandonadas sus pertenencias, animales, cultivos, así como sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Actos De Discriminación Racial Art,147 C.P, en concurso con Homicidio en Grado de Tentativa, Art 135 CP, Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado De Población Civil Art 159 C.P. Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos art.154 C.P, Tortura en Persona Protegida art.137 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1.Informe de policía judicial N°11-49072 de fecha 15/09/2015, de Estonito Pushaina suscrito por el investigador Robert de Jesús Rivero Palomino.

2.Entrevista recepcionada a Eligia Pushaina de fecha 27/08/2015 en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

3.Informe de policía Judicial Número 9-333560 de fecha 21/01/2020 suscrito por el investigador Leonardo Pérez Robayo.

4.Entrevista de fecha 09/11/2019 recepcionada a Angela Bruges Uriana en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5.Copia documento de identidad N° 40914900 de Angela Bruges Uriana.

6.Copia documento de identidad N° 27.039.095 de Estenith Pushaina.

7.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 533320 de Angela Bruges Uriana

8.Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° Estenith Pushaina de Angela Bruges Uriana

9.Version libre del postulado Salvatore Mancuso Gómez de fecha 18/04/2022.

Hecho N° 8 Actos de Discriminación Racial en contra de John Jairo Gutiérrez Pedroza

Carpeta: 473839

Política: Control Territorial

Practica: Perturbación del Orden Cotidiano

Modus Operandi: Robo, Expropiación y Restricción de Alimentos

Situación Fáctica: El día 03 de junio del año 2003, el señor John Jairo Gutiérrez Pedroza se vio forzado a salir desplazado de la finca La Esperanza ubicada en el corregimiento de Majayura jurisdicción de Maicao, La Guajira, como consecuencia de la incursión armada y masacre realizada por hombres pertenecientes a las Autodefensas, quienes le habían hurtado sus animales de corral.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Actos de discriminación Racial Art,147 C.P en concurso con Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado De Población Civil Art 159 C.P. destrucción y apropiación de Bienes Protegidos art.154 C.P bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de policía judicial N° 11-49190 de fecha 14/09/2015.

2. Entrevista de fecha 16/08/2013 recepcionada a John Jairo Gutiérrez Pedroza en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

3.Documento de identidad de John Jairo Gutiérrez Pedroza con N°84.068.829

4. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 473839 de John Jairo Gutiérrez Pedroza

5. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez

Hecho N° 9 Actos de discriminación racial en contra de Yeranis Gamez De Epinayu

Carpeta: 554794

Política: Control Territorial

Practica: Perturbación del Orden Cotidiano

Modus Operandi: Robo, expropiación y Restricción de Alimentos

Situación Fáctica: Se tiene documentado que el 20 de enero de 2003, Yeranis Koraima Gamez Epinayu, miembro de la etnia indígena Wayúu residía junto a su núcleo familiar en la ranchería Solita del municipio de Maicao, se vieron obligados a salir desplazados de la zona a razón de la llegada de un grupo armado al que

identificaron como Autodefensas quienes hurtaban sus animales y los amenazaron directamente manifestándoles que si no salían de sus asentamientos serian asesinados, así que ante tal situación de fuerza y temor no tuvieron más opciones que salir desplazada junto a su núcleo familiar dejando abandonadas sus pertenencias, así como sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Actos de discriminación Racial Art,147 C.P, en concurso con Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado De Población Civil Art 159 C.P. Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos art.154 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de policía judicial N° 11-50619 de fecha 17/09/2015 de Yeranis Gómez Epinayu suscrito por el investigador Oscar Rincón Pretell

2. Entrevista de fecha 10/09/2015 recepcionada a Yerali Gómez Epinayu en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar

3. Copia documento de identidad N° 1006886761 de Yerali Gómez Epinayu

4. Certificación en la cual se indica que Yerali Gamez Epinayu es miembro de la comunidad San José que pertenece al clan Epinayu

5. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley N° 602749 de Yerali Gamez Epinayu

6. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 del postulado Salvatore Mancuso Gómez.

En atención a todo lo expuesto, encuentra la Sala ajustado a derecho el proceso de adecuación típica efectuado por la representante de la Fiscalía General de la Nación, así como la debida acreditación probatoria efectuada, en consecuencia, se **LEGALIZARÁN** los cargos formulados bajo el patrón de macro criminalidad de Violencia contra los Pueblos Indígenas y, así se dispondrá en la parte resolutiva de la presente sentencia.

4.6. PATRÓN DE MACRO CRIMINALIDAD DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO.

1. Hecho N° 1 Acceso Carnal Violento en Persona Protegida D.L.G.P

Carpeta: 604809

Política: Control Social

Practica: Acceso Carnal

Modus Operandi: Fuerza

Situación Fáctica: Se tiene documentado que desde el 1 de septiembre de 2001, durante un periodo de aproximadamente cuatro años, la señora D.L.G.P quien tenía 28 años de edad fue víctima de acceso carnal violento y amenazas por parte de un miembro de la estructura paramilitar que delinquía en el municipio de Riohacha llamado Víctor Ramírez conocido por el alias de "Picaso" quien llegaba hasta su vivienda en el corregimiento Galán del municipio de Riohacha y la amenazaba con detonar una granada si no accedía a tener relaciones sexuales con él, ante todos estos hechos de violencia se vio obligada a salir desplazada hacia Riohacha , dejando abandonadas sus pertenencias así como sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Acceso Carnal Violento en Persona Protegida Art.138 C. P, en concurso con Tortura en Persona Protegida Art 137 C. P., Deportación, Expulsión, Traslado O Desplazamiento Forzado De Población, Civil Art 159 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de policía judicial N°9-333074 de fecha 11/02/2020 del investigador Miguel Adolfo Cabrera Pertuz

2. Entrevista de fecha 06/11/2019 recepcionada a D.L.G.P en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

3. Copia documento de identidad N° 40930493 de D.L.G.P

4. Consulta individual VIVANTO id N° 24436639 de D.L.G.P

5. Resolución no.2017-147145 del 22 de noviembre de 2017 por medio de la cual se incluye a D.L.G.P en el registro único de víctimas.

6. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 688527 de D.L.G.P

7. Versión libre de fecha 5 de noviembre de 2021 de Salvatore Mancuso Gómez

8.Solicitud de valoración médico legal de D.L.G.P

Hecho N° 2 Acceso Carnal Violento en Persona Protegida T.D.G.A

Carpeta: 535993

Política: Control Social

Practica: Acceso Carnal

Modus Operandi: Fuerza

Situación Fáctica: Se tiene documentado que el 02 de abril del año 2002, la señora T.D.G.A de 29 años de edad, residente en el corregimiento Matitas de Riohacha, se

encontraba en una fiesta en el pueblo departiendo con unas amistades hasta que aproximadamente a las 11 de la noche perdió el conocimiento, despertándose al día siguiente desnuda junto a un hombre desconocido miembro de las Autodefensas, al despertar tenía la sensación de haber tenido relaciones sexuales que no había consensuado, dejándole estas relaciones la sensación de ardor en sus partes íntimas, refiere la víctima no haber ido al médico por temor.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Acceso Carnal Violento en Persona Protegida Art.138 C. P, en concurso con Tortura en Persona Protegida Art 137 C. P Deportación, Expulsión, Traslado O Desplazamiento Forzado De Población Civil Art 159 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de policía judicial N° 9-497501 de fecha 15/12/2021 del investigador Martha Pacheco Rivera

2. Consulta Sijuf de T.D.C.P.A N°18141

3. Certificado de la Registraduría Nacional Del Estado Civil N° 40.929.831 de T.D.C.P. A 4. Tarjeta de preparación de T.D.C.P.A

5. Consulta individual VIVANTO id 10235046 de T.D.C.P.A

6. Entrevista de fecha 09/12/2021 recepcionada a T.D.C.P.A en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

7. Consulta de SISBEN de T.D.C.P.A

8. Consulta de SPOA de T.D.C.P.A

9. Consulta de ADRES de T.D.C.P.A

10. Informe de policía judicial N° 9-334331 de fecha 29/01/2020 de T.D.C.P.A suscrito por el investigador Leonardo Pérez Robayo.

11. Entrevista de fecha 10/06/2016 recepcionada a T.D.C.P.A

12. Solicitud de valoración médico legal de T.D.C.P.A de fecha 06/11/2019.

13. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 575593 de T.D.C.P.A

14. Versión libre de fecha 5 de noviembre de 2021 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 3 Acceso Carnal Violento en Persona Protegida C.J.P.A.

Carpeta: 535997

Política: Control Social

Practica: Acceso Carnal

Modus Operandi: Fuerza

Situación Fáctica: Se tiene documentado que el 4 de abril del año 2002, la señora C.J.P.A. cuando contaba con 31 años de edad, residía en el corregimiento Matitas de Riohacha, dedicada a labores del campo, cuando miembros de las AUC que delinquían en la zona pasaron por su vivienda y uno de ellos, ingresó de manera violenta por la pate de atrás de su vivienda, siendo sometida físicamente por uno de los paramilitares quien intento abusar de ella pero, sacando fuerzas, pudo evitar que la agresión sexual continuara. Ante esto, el agresor la amenazó con matar a sus hijas si se manifestaba sobre lo ocurrido. Ante estos hechos y el temor que le produjo, se vio obligada a salir desplazada de la zona inicialmente hacia Riohacha, dejando abandonados sus pertenencias, así como sus medios de vida y de trabajo

Delito: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Acceso Carnal Violento en Persona Protegida Art.138 C. P, en concurso con Tortura en Persona Protegida Art 137 C. P, deportación, Expulsión, Traslado O Desplazamiento Forzado De población Civil Art 159 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de policía judicial N° 9-334329 de fecha 31/01/2020 suscrito por el investigador Leonardo Pérez Robayo

2. Entrevista de fecha 06/11/2019 recepcionada a C.J.P.A

3. Copia documento de identidad N° 40924810 de C.J.P.A

4. Solicitud de valoración de Medicina legal de C.J.P.A 05/11/2019.

5. Resolución N° 2016-90756 del 2 de mayo de 2016 de desplazado de C.J.P.A

7. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley N° 575597 de C.J.P.A

8. Versión libre de fecha 5 de noviembre de 2021 de Salvatore Mancuso Gómez.

9. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley de C.J.P.A

Hecho N° 4 Acceso Carnal Violento en Persona Protegida J.E.D.L.M

Carpeta: 514245

Política: Control Social

Practica: Acceso Carnal

Modus Operandi: Fuerza

Situación Fáctica: El día 12 de mayo de 2002, la señora J.E.D.L.M, mientras se encontraba en el corregimiento Carraipia de Maicao, donde residía y laboraba en

actividades del campo, fue víctima de hechos de violencia por parte de miembros de la estructura paramilitar que delinquía en la zona, cuando aproximadamente cinco hombres armados la obligaron a irse con ellos a la fuerza hasta la finca Los Manantiales de ese sector y ya en el predio procedieron a accederla carnalmente en contra de su voluntad, realizándole todo tipo de actos violentos sin importarle la advertencia de que tenía en ese momento dos meses de embarazo, además de agredirla verbalmente.

Delito: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Acceso Carnal Violento en Persona Protegida Art.138 C.P, en concurso con Tortura en Persona Protegida Art 137 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1.copia documento de identidad N° 56084262 de J.E.D.L.M

2.Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 535592 de J.E.D.L.M

3.Version libre de Salvatore Mancuso Gómez de fecha 5 de noviembre de 2021.

Hecho N° 5 Acceso Carnal Violento en Persona Protegida Y.R.A.

Carpeta: 536084

Política: Control Social

Practica: Acceso Carnal

Modus Operandi: Fuerza

Situación Fáctica: Se tiene documentado que el día 9 de julio del año 2002, Y.R.A, quien contaba con 14 años se encontraba en el corregimiento Conejo del municipio de Fonseca, departamento de La Guajira, residiendo en una parcela junto a su familia cuando fueron sorprendidos por un grupo de hombres armados los cuales ingresaron violentamente al predio y los sometieron mediante amenazas y agresiones físicas, manifestándoles que debían salir inmediatamente del lugar o serian asesinados. Uno de esos sujetos, aprovechando la ventaja que le deban las armas y el temor, procedió a llevarla a otra zona de la vivienda accediéndola carnalmente en contra de su voluntad. Ante estas agresiones y sin otra opción, todos los moradores salieron de la parcela dejando abandonadas sus pertenencias, cultivos, animales de granja, así como sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Acceso Carnal Violento en Persona Protegida Art.138 C. P, en concurso con Tortura en Persona Protegida Art 137 C. P, deportación, Expulsión, Traslado O Desplazamiento Forzado De población Civil Art

159 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de policía judicial N° 9-334334 de fecha 31/01/2020 suscrito por el investigador Leonardo Pérez Robayo.

2. Entrevista de fecha 05/11/2019 recepcionada a Y.R.A en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

3. Copia documento de identidad N° 1118820627 de Y.R.A

4. Solicitud de valoración médico legal de Y.R.A número 05/11/2019.

5. Resolución N° 2015-127402 del 5 junio de 2015 de desplazado de Y.R.A

6. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley N° 575739 de Y.R.A

7. Versión libre de fecha 5 de noviembre de 2021 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 6 Acceso Carnal Violento en Persona Protegida Y.P.P.B

Carpeta: 604823

Política: Control Social

Practica: Acceso Carnal

Modus Operandi: Fuerza

Situación Fáctica: Se tiene documentado que la señora Y.P.P.B de 23 años de edad, se encontraba en la vereda Galán del municipio de Riohacha, donde residía y laboraba en una pequeña tienda, hasta donde llegaban miembros de la estructura paramilitar que delinquía en la zona, obligándola a que les entregara víveres sin cancelarlos, cuando ya su negocio no podía aguantar el seguir entregándoles mercancías sin cancelar, un miembro del grupo armado paramilitar el primero de enero del año 2000 ingresó violentamente a la tienda, la golpeo y la accedió carnalmente, amenazándola con quitarle la vida y agredirla físicamente, agresión que duro varios meses donde fue obligada a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad para no ser víctima de hechos que pusieran en peligro su vida ante este nivel de violencia ejercida en su contra.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Acceso Carnal Violento en Persona Protegida Art.138 C. P, en concurso con Tortura en Persona Protegida Art 137 C. P, deportación, Expulsión, Traslado O Desplazamiento Forzado De población Civil Art 159 C.P. Exacción y Contribuciones Arbitrarias art 163 CP. bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de policía judicial N° 9-333083 de fecha 14/02/2020 del investigador Miguel Adolfo Cabrera Pertuz

2. Consulta de vivanto de Y.P.P.B

3. Solicitud de valoración médico legal de Y.P.P.B de fecha 07/11/209

4. Consulta de la Registraduría de Y.P.P.B N° 40931621

5. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley de Y.P.P.B

6. Copia documento de identidad de Y.P.P.B

7. Entrevista de fecha 07/1172019 de Y.P.P.B

8. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley N° 688551 de Y.P.P.B

9. Versión libre de fecha 5 de noviembre de 2021 del postulado Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 7 Acceso Carnal Violento en Persona Protegida Y.Y.R.G.

Carpeta: 535869

Política: Control Social

Practica: Acceso Carnal

Modus Operandi: Fuerza

Situación Fáctica: Se tiene documentado que Y.Y.R.G. cuando contaba con 18 años de edad y estaba terminando su bachillerato, residía junto a su familia en el municipio de Dibulla, el 17 de abril de 2003, tres hombres armados llegaron hasta la finca que administraba su padrastro y donde residían y estos sujetos proceden a accederla carnalmente y a someterla a todo tipo de actos sexuales, hurtaron elementos pertenecientes a la familia y la agredieron físicamente con un cuchillo causándole una herida. A los 4 meses debido a las amenazas que recibía la familia la señora Y.Y.R.G junto a su madre y hermana se vieron obligadas a salir desplazadas del predio.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Acceso Carnal Violento en Persona Protegida Art.138 C. P, en concurso con Tortura en Persona Protegida Art 137 C. P, deportación, Expulsión, Traslado O Desplazamiento Forzado De población Civil Art 159 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de policía judicial N° 9-333563 de fecha 29/01/2020 suscrito por el investigador Leonardo Pérez Robayo

2.Entrevista recepcionada a Y.Y.R.G de fecha 09/06/2016 en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar

3. Copia documento de identidad N° 40943136 de Y.R.A

4. Solicitud de valoración médico legal de Y.Y.R.G

5. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 575406 de Y.Y.R.G

6. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 8 Acceso Carnal Violento en Persona Protegida K.Y.P.M

Carpeta: 536066

Política: Control Social

Practica: Acceso Carnal

Modus Operandi: Fuerza

Situación Fáctica: Se tiene documentado que la señora K.Y.P.M quien tenía 21 años el 4 de octubre de 2003, mientras salía de una discoteca de Riohacha en el sector del parque de Los Cañones junto a unas primas y amigas, fueron obligadas por cuatro hombres armados a subir a una camioneta quienes violentamente las condujeron a las afueras del pueblo y mediante intimidaciones y amenazas, procedieron a accederlas y abusarlas sexualmente en contra de su voluntad, mientras eran agredidas física y verbalmente, dejándolas abandonadas en la zona.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Acceso Carnal Violento en Persona Protegida Art.138 C.P, en concurso con Tortura en Persona Protegida Art 137 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de policía judicial de fecha 03/02/2020 del investigador Leonardo Pérez Robayo

2. Entrevista de fecha 03/11/2019 recepcionada a K.Y.P.M en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

3. Copia documento de identidad N° 40940629 de K.Y.P.M

4. Solicitud de valoración médico legal de fecha 03/11/2019 de K.Y.P.M

5. Resolución N° 2015-125514 del 4 de junio de 2015 de desplazado de K.Y.P.M

6. Informe de policía judicial N° 9-620795 de fecha 17/04/2023 suscrito por Myriam Del Carmen Ochoa González

7. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 536066 de K.Y.P.M

8.Version libre de fecha 9 de agosto de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 9 Acceso Carnal Violento en Persona Protegida L.M.L.N,

Carpeta: 613339

Política: Control Social

Practica: Acceso Carnal

Modus Operandi: Fuerza

Situación Fáctica: Se tiene documentado que la señora L.M.L.N, el 2 de febrero de 2004, en momentos que se encontraba en la parcela donde residía junto a su núcleo familiar y su hermana en la vereda Penjamo del corregimiento Mingueo en el municipio de Dibulla, fueron sorprendidas por un grupo de hombres armados pertenecientes a la estructura criminal de las AUC que delinquía en la zona quienes mediante agresiones físicas y verbales la señalaban de sapa apuntándole con un arma a su compañero permanente mientras otros de los sujetos la accedió sexualmente en contra de su voluntad. A demás de las aberrantes agresiones, este grupo armado los obligan a salir desplazados, por lo que no tuvieron más opciones que salir a la hora de ocurridos los hechos de su vivienda, dejando abandonadas sus pertenencias, cultivos, animales de granja, así como sus medios de vida y de trabajo.
Delito: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Acceso Carnal Violento en Persona Protegida Art.138 C. P, en concurso con Tortura en Persona Protegida Art 137 C. P, deportación, Expulsión, Traslado O Desplazamiento Forzado De población Civil Art 159 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de policía judicial N° 9-417969 de fecha 15/03/2021 del investigador Eduardo Enrique Salazar Gómez

2. Consulta individual vivanto id N° 24469344 de L.M.L.N,

3. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 708808 de L.M.L.N,

4. Versión libre de fecha 5 de noviembre de 2021del postulado Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 10 Acceso Carnal Violento en Persona Protegida M.D.P.P.V.

Carpeta: 536113

Política: Control Social

Practica: Acceso Carnal

Modus Operandi: Fuerza

Situación Fáctica: Se tiene documentado que el 20 de febrero de 2004 la señora M.D.P.P.V, cuando contaba con 20 años de edad y se ganaba la vida junto a su cónyuge como cuidadores de una finca en la zona de Dibulla, La Guajira, a eso de las 4 de la tarde varios sujetos armados llegaron hasta el predio disparando y mediante actos de violencia física y amenazas la redujeron entre ellos y la accedieron carnalmente y también introdujeron la punta de fusil en su zona intima, debido a ello y al temor que les causo el hecho junto a su núcleo familiar se vieron obligados a salir de la finca, dejando abandonadas sus pertenencias, así como sus medios de vida y de trabajo, quedando hasta el presente día con consecuencias físicas y psicológicas.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Acceso Carnal Violento en Persona Protegida Art.138 C. P, en concurso con Tortura en Persona Protegida Art 137 C. P, deportación, Expulsión, Traslado O Desplazamiento Forzado De población Civil Art 159 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de policía judicial N° 9-334335de fecha 03/02/2020 del investigador Leonardo Pérez Robayo

2. Entrevista de fecha 05/11/2019 recepcionada a M.D.P.P.V en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar

3. Copia documento de identidad N° 40941545 de M.D.P.P.V

4. Solicitud de valoración médico legal de M.D.P.P.V de fecha 05/11/2019

5. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 575797 de M.D.P.P.V

6. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 11 Acceso Carnal Violento en Persona Protegida Z.B.C.C.

Carpeta: 614226

Política: Control Social

Practica: Acceso Carnal

Modus Operandi: Fuerza

Situación Fáctica: el día 12 de marzo del año 2004, la señora Z.B.C.C quien contaba con 32 años se encontraba en la finca La Pinta, de la vereda Penjamo en el corregimiento Las Flores del municipio de Dibulla, donde reside junto a varios

familiares hasta donde llegaron un grupo de hombres armados pertenecientes a las Autodefensas quienes de manera violenta ingresan señalándolos de ser colaboradores de la güerilla, manifestándoles que debían irse de la zona antes del amanecer o serian asesinados, la tomaron a la fuerza, la llevaron a un cuarto dos de ellos y bajo golpes, amenazas la accedieron carnalmente en contra de su voluntad, debido a ello, se desplazaron una hora después de lo ocurrido.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Acceso Carnal Violento en Persona Protegida Art.138 C. P, en concurso con Tortura en Persona Protegida Art 137 C. P, deportación, Expulsión, Traslado O Desplazamiento Forzado De población Civil Art 159 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de policía judicial N° 9-417972 de fecha 15/03/2021 del investigador Eduardo Enrique Salazar Gómez

2. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley de 710919 Z.B.C.C

3. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley de 710957 Albert Eduardo Cotes Curvelo

4. Versión libre de fecha 5 de noviembre de 2021 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 12 Acceso Carnal Violento en Persona Protegida J.J.C.C.
Carpeta: 610427

Política: Control Social

Practica: Acceso Carnal

Modus Operandi: Fuerza

Situación Fáctica: Se tiene documentado que el día 15 de marzo de 2004, en el corregimiento Camino Verde de Uribia, la señora J.J.C.C. se encontraba ejerciendo sus labores en la oficina de asuntos indígenas en el cargo de asesora administrativa, hasta que en horas de la noche cuando se encontraba esperando transporte para dirigirse hacia el municipio de Uribia, fue sorprendida por dos sujetos armados quienes se desplazaban en una motocicleta, solicitándole que los acompañara, esta se negó y posterior se subió en un automóvil, el cual minutos más tarde es detenido abruptamente por otro vehículo, bajan a la víctima y la obligan a montarse en la camioneta, la llevan a una finca de la zona donde se encontraban aproximadamente 50 hombres armados y dos de ellos se identifican como comandantes y son los que aprovechando la intimidación, proceden a amenazarla y golpearla, accediéndola carnalmente y le realizaron todo tipo de actos, debido a ello, comenzó a recibir amenazas y a ser víctima de extorsión por parte del grupo viéndose obligada a salir desplazada de la zona.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Acceso Carnal Violento en Persona Protegida Art.138 C. P, en concurso con Tortura en Persona Protegida Art 137 C. P, deportación, Expulsión, Traslado O Desplazamiento Forzado De población Civil Art 159 C.P. Exacción y Contribuciones Arbitrarias art 163 cp., bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Entrevista de fecha 06/02/2021 recepcionada a J.J.C.C. en la cual se amplían las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

2. Tarjeta de preparación con N° 56072107 de J.J.C.C.

3. Valoración por psiquiatría o psicología forense de J.J.C.C.

4. Consulta individual VIVANTO sin resultados.

5. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 702479 de J.J.C.C.

6. Versión libre de fecha 5 de noviembre de 2021 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 13 Acceso Carnal Violento en Persona Protegida L.V.Q.G.

Carpeta: 535874

Política: Control Social

Practica: Acceso Carnal

Modus Operandi: Fuerza

Situación Fáctica: El 14 de junio de 2004 la señora L.V.Q.G quien contaba con 13 años, se encontraba de vacaciones en el corregimiento Palomino del municipio de Dibulla, hasta donde llegaron un grupo de hombres fuertemente armados pertenecientes a las Autodefensas que operaban en la zona, se la llevaron a la fuerza a una zona montañosa, la golpearon, amarraron, abusaron de ella, cometieron todo tipos de actos sexuales y la accedieron carnalmente dejándola en la zona.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Acceso Carnal Violento en Persona Protegida Art.138 C. P, en concurso con Tortura en Persona Protegida Art 137 C. P, deportación, Expulsión, Traslado O Desplazamiento Forzado De población Civil Art 159 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de policía judicial N°9-333558 del investigador Leonardo Pérez Robayo

2. Entrevista de fecha 10/06/2016 de Laura Vanesa Redondo Mindiola

3. Plena identidad de L.V.Q.G

4. Solicitud de valoración médico legal de L.V.Q.G

5. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 575411 de L.V.Q.G

6. Versión libre de fecha 9 de agosto de 2022 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 14 Acceso Carnal Violento en Persona Protegida B.D.O.O.
Carpeta: 535858

Política: Control Social

Practica: Acceso Carnal

Modus Operandi: Fuerza

Situación Fáctica: Se tiene documentado que el día 19 de junio de 2004, la joven B.D.O.O de 19 años residía en el corregimiento La Punta de Los Remedios de Dibulla La Guajira, cuando se dirigía hacia la finca de sus padres en compañía de dos de sus hermanas y una sobrina menor de edad, fueron abordadas por hombres armados que vestían uniformes militares con emblemas de las AUC, los cuales las forzaron a irse con ellos refiriéndoles que estaban retenidas, se las llevaron bajo agresiones físicas y verbales, procediendo a agredirlas sexualmente, accediéndolas carnalmente en contra de su voluntad, posterior al hecho fueron amenazadas con no informar lo ocurrido o atentarían contra su humanidad.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Acceso Carnal Violento en Persona Protegida Art.138 C.P., en concurso con Detención Ilegal Y Privación Del Debido Proceso Art. 149 C.P. Tortura en Persona Protegida Art 137 C. P, deportación, Expulsión, Traslado O Desplazamiento Forzado De población Civil Art 159 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de policía judicial N° 9-333562 del investigador Leonardo Pérez Robayo.

2. Entrevista de B.D.O.O.

3. Entrevista de S.S.O.O.

4. Entrevista de M.J.O.O.

5. Entrevista de I.A.B.B.

6. Plena identidad de B.D.O.O.

7. Plena identidad de S.S.O.O.

8. Plena identidad de M.J.O.O.

9. Plena identidad de I.A.B.B.

10. Solicitud de valoración médico legal de B.D.O.O.

11. Solicitud de valoración médico legal de S.S.O.O.

12. Solicitud de valoración médico legal de M.J.O.O.

13. Solicitud de valoración médico legal de I.A.B.B.

14. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley de B.D.O.O.

15. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley de S.S.O.O.

16. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley de M.J.O.O.

17. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley de I.A.B.B.

18. Versión libre Salvatore Mancuso Gómez

Hecho N° 15 Acceso Carnal Violento en Persona Protegida L.R.H.A

Carpeta: 549460

Política: Control Social

Practica: Acceso Carnal

Modus Operandi: Fuerza

Situación Fáctica: Se tiene documentado que el día 27 de octubre de 2004, L.R.H.A de 28 años, se encontraba en el municipio de Barrancas - La Guajira, donde residía junto a su familia en la finca de nombre La Sierra, en la vereda Oreganal, cuando fueron sorprendidos por un grupo de aproximadamente 15 hombres armados vestidos como militares con emblemas que los identificaban como miembros de las AUC, los cuales comenzaron a agredir verbalmente al núcleo familiar, encerrar a algunos de ellos en la casa, llevándosela para una zona alejada junto a otra familiar, las golpearon y accedieron carnalmente de ellas pese a sus ruegos para que se detuviera la agresión.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Acceso Carnal Violento en Persona Protegida Art.138 C. P, en concurso con Tortura en Persona Protegida Art 137 C. P, deportación, Expulsión, Traslado O Desplazamiento Forzado De población Civil Art 159 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de policía judicial N° 9-412751 del investigador Martha Pacheco Rivera

2. Entrevista de fecha 08/02/2021 recepcionada a L.R.H.A.

3. Consulta de adres de landis Raquel Hernández Asís.

4. Consulta de la Registraduría se landis Raquel Hernández Asís.

5. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 595317 de landis Raquel Henríquez Asís

6. Versión libre de fecha 5 de noviembre de 2021de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 16 Acceso Carnal Violento en Persona Protegida E.T.G.B.

Carpeta: 613368

Política: Control Social

Practica: Acceso Carnal

Modus Operandi: Fuerza

Situación Fáctica:

El 20 de noviembre de 2004 en la vereda Naranjal del corregimiento Tomarrazón de Riohacha, la joven E.T.G.B (de 25 años) se encontraba en su predio, junto con sus hijos y hermanas, cuando fueron sorprendidos por sujetos armados que los interrogaron, intimidaron y agredieron física y verbalmente.

Dos de esos hombres accedieron carnalmente a la joven E.T.G.B. y posteriormente amenazaron a todos con asesinarlos si no desalojaban la zona de inmediato.

Debido a ello el núcleo familiar se vio en la obligación de desplazarse dejando abandonadas sus pertenencias, cultivos, animales de granja, sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Acceso Carnal Violento en Persona Protegida (art. 138 C.P.), en concurso heterogéneo con Tortura en Persona Protegida (art 137 CP), Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil (art 159 C.P.) bajo circunstancia de mayor punibilidad del numeral 5 del artículo 58 del Código Penal (Ley 599 De 2000).

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de policía judicial # 9-417970 de fecha 15/03/2021 suscrita por el investigador Eduardo Enrique Salazar Gómez.

2. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley número 708866 de Enith Teresa Gómez Blanco.

3. Versión libre de fecha 05/11/2021 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 17 Acceso Carnal Violento en Persona Protegida M.Y.G.R

Carpeta: 609506

Política: Control Social

Practica: Acceso Carnal

Modus Operandi: Fuerza

Situación Fáctica: Se tiene documentado que el 1 de diciembre del año 2002, la señora M.Y.M.R. cuando contaba con 21 años de edad, en momentos que se encontraba en la vereda Anaime, corregimiento Matitas de Riohacha, donde residía junto a su núcleo familiar y devengaba su sustento, fueron sorprendidos por sujetos armados pertenecientes a una estructura criminal, quienes entre otros actos de violencia e intimidación sobre la población de la vereda, proceden a agredir sexualmente a la señora reportante, accediéndola carnalmente, dejándole graves secuelas físicas y psicológicas que persisten hasta el día de hoy. Como consecuencia de estos hechos de violencia la señora reportante y su núcleo familiar no tuvieron más opciones que salir desplazados de la zona dejando abandonadas sus medios de vida y de trabajo.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Acceso Carnal Violento en Persona Protegida Art.138 C. P, en concurso con Tortura en Persona Protegida Art 137 C. P, deportación, Expulsión, Traslado O Desplazamiento Forzado De población Civil Art 159 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000

Elementos Materiales Probatorios

1. Informe de policía judicial N° 9-414129 del investigador Hernando Escorcia Barros

2. Plena identidad de M.Y.G.R

3. Consulta de vivanto de M.Y.G.R

4. Entrevista de M.Y.G.R

5. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley de M.Y.G.R

6. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley de X.M.M.M

7. Versión libre de fecha 5 de noviembre de 2021 de Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 18 Acceso Carnal Violento en Persona Protegida P.E.S.M - W.V.P.S

Carpeta: 550535

Política: Control Social

Practica: Acceso Carnal

Modus Operandi: Fuerza

Situación Fáctica: El día 15 de diciembre del año 2002, la señora P.E.S.M se desplazaba junto a su sobrina menor de edad W.V.P.S en un vehículo de transporte público con destino al corregimiento Tomarrazon jurisdicción de Riohacha, La Guajira a fin de visitar a sus hijas que pasaban vacaciones donde una hermana, cuando sujetos armados detuvieron el vehículo e intimidaron a los pasajeros, ordenando al conductor que siguiera y obligaron a la señora reportante y su sobrina a que se quedara retenida con ellos, procediendo a violentarlas a ambas, agrediéndolas física, verbal y sexualmente, tanto a la señora reportante como a la menor de edad, accediéndolas carnalmente.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Acceso Carnal Violento en Persona Protegida Art.138 C. P, en concurso con Tortura en Persona Protegida Art 137 C. P, deportación, Expulsión, Traslado O Desplazamiento Forzado De población Civil Art 159 C.P. bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios.

1. Plena identidad de P.E.S.M

2. Informe de policía judicial de fecha 13/12/2021 del investigador Martha Pacheco Rivera

3. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley de P.E.S.M

4. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley de W.V.P.S

5. Versión libre del postulado Salvatore Mancuso Gómez.

Hecho N° 19 Tratos Inhumanos y Degradantes D.J.P.P

Carpeta: 502910

Política: estatus de poder y control

Practica: servidumbre - esclavitud

Modus operandi: fuerza

Situación Fáctica: Para el mes de enero de 2003, la señora D.J.P.P se encontraba en su vivienda en la región de la vereda Rio Ancho de Dibulla, La Guajira, cuando el miembro de las Autodefensas conocido como alias “Piolín”, llego a su vivienda en una camioneta y la obligo a hacer trabajos de servidumbre, es decir la obligo a tomar

una escoba y se la llevó a la parte de atrás de su vivienda diciéndole que barriera, que había mucho oficio que hacer, humillándola, debido a que días anterior alias "Piolín" había ido en busca de su compañero sentimental y esta no le dio razón de donde se encontraba.

Delitos: La Fiscalía formula cargos al postulado Salvatore Mancuso Gómez en calidad de autor mediato por los delitos de Tratos Inhumanos y Degradantes Art.173 C.P, bajo circunstancias de mayor punibilidad numeral 5 del artículo 58 del Código Penal, ley 599 de 2000.

Elementos Materiales Probatorios

1. Registro de hechos atribuibles al grupo armados organizados al margen de la ley N° 516516 de D.J.P.P.

2. Versión libre del postulado Salvatore Mancuso Gómez de fecha 9 de agosto de 2021.

En atención a todo lo expuesto, encuentra la Sala ajustado a derecho el proceso de adecuación típica efectuado por la representante de la Fiscalía General de la Nación, así como la debida acreditación probatoria efectuada, en consecuencia, se **LEGALIZARÁN** los cargos formulados bajo **el Patrón de Macro Criminalidad de Violencia Basada en Género** y, así se dispondrá en la parte resolutiva de la presente sentencia.

PATRÓN	HECHOS	TOTAL
Homicidio en persona protegida.	1, 2, 3, 4, 5, 7, 7[34],8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, y 40.	**40**
Desaparición Forzada.	1, 2, 4, 5 y 6.	**5**
Desplazamiento Forzado.	1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46.	**44**
Violencia Contra Pueblos Indígenas.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.	**9**
Violencia Basada en Género.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.	**19**
TOTAL, HECHOS LEGALIZADOS		**117[35]**

5. LA RESPONSABILIDAD DEL POSTULADO.

Teniendo en cuenta la aceptación de responsabilidad del postulado de manera voluntaria, espontánea, debidamente asesorado por su defensor y puesta de presente de manera expresa dentro de las presentes diligencias por los cargos formulados, corresponde a esta Sala de conocimiento determinar de manera concluyente dicha

[34] Este hecho fue relacionado en el patrón de desplazamiento forzado, no obstante, atendiendo la situación fáctica, fue relacionado en el patrón de macrocriminalidad de Homicidio en persona protegida.
[35] El total de hechos presentados por la Fiscalía son 117, no obstante durante el trámite de audiencia de Formulación y Aceptación de Cargos, retiró dos (2) hechos

responsabilidad bajo una inferencia mínima probatoria, que permita concluir razonadamente en su forma objetiva y subjetiva en cada uno de los hechos típicos, objeto de formulación de cargos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7°, 381 y 327 de la Ley 906 de 2004 aplicables a este esquema de justicia transicional en virtud del principio de complementariedad.

En ese orden se tiene que para la Sala, no solo la aceptación de responsabilidad del postulado en los términos anotados representa la prueba suficiente para condenar, sino que además los testimonios de las víctimas y el propio recuento fáctico de los hechos, efectuado por el procesado permite establecer la materialidad del mismo y su grado de participación, los cuales acreditan, aún más los elementos necesarios para condenar, en la medida en que es el mismo postulado quien en el proceso aceptó la comisión de graves violaciones de los derechos humanos, mediante actos sistemáticos y generalizados dirigidos en contra de la población civil, bajo la excusa de seguir órdenes desde la cúspide de una estructura armada ilegal creada con el propósito de combatir grupos subversivos.

Por lo anterior, es dable concluir la acreditación de la existencia de los hechos punibles objeto de formulación de cargos y la responsabilidad del postulado, en calidad de autor mediato, por haber sido máximo comandante del Bloque Norte de donde dependía el frente mal llamado Contrainsurgencia wayuu de las extintas AUC, resulta procedente la emisión en su contra de sentencia condenatoria.

En cuanto a los cargos legalizados, formulados en contra SALVATORE MANCUSO GÓMEZ observa la Sala que se les atribuye como forma de participación de autoría mediata establecida por el artículo 29 del Código Penal, respecto de los siguientes delitos:

- **Homicidio en persona protegida** (artículo 135 del Código Penal),
- **Homicidio en persona protegida en grado de tentativa** (artículo 135 del Código Penal),
- **Desaparición Forzada en Persona Protegida** (artículo 165 del Código Penal)
- **Actos de Terrorismo** (artículo 144 del Código Penal),
- **Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes** (artículo 173 del Código Penal),
- **Destrucción y Apropiación De Bienes Protegidos**, (artículo 154 del Código Penal)
- **Tortura en Persona Protegida (**artículo 137 del Código Penal)
- **Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento forzado de población civil (**artículo 159 del Código Penal)
- **Exacciones o Contribuciones Arbitrarias** (artículo 163 del Código Penal)

- **Secuestro Extorsivo** (artículo169 del Código Penal)
- **Amenazas** (artículo 347 del Código Penal)
- **Actos De Discriminación Racial** (artículo147 del Código Penal)
- **Detención Ilegal Y Privación Del Debido Proceso**

  (artículo 149 del Código Penal)
- **Acceso Carnal Violento en Persona Protegida**

  (artículo 138 del Código Penal)
- **Tratos Inhumanos y Degradantes** (artículo 173 del Código Penal).

La **autoría mediata**, consagrada implícitamente en el artículo 29 de la Constitución y desarrollada por el Código Penal en la teoría de la participación, describe una forma de realización del tipo penal mediante un **instrumento humano**. Tradicionalmente, este instrumento carece de dolo o actúa coaccionado. No obstante, en la criminalidad organizada, se reconoce que el ejecutor puede tener plena imputabilidad, pero actúa **dentro de una estructura jerárquica que anula su autonomía decisoria**. En este contexto, el autor mediato **domina el hecho a través del aparato**, y su voluntad se impone mediante mecanismos de disciplina, obediencia ciega o temor a represalias.

La doctrina de Roxin sobre el "dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder" establece tres requisitos esenciales:

1. **Existencia de un aparato organizado de poder** con estructura jerárquica y disponibilidad de ejecutores fungibles.
2. **Dominio funcional del autor mediato**, que puede ordenar, autorizar o detener la comisión del delito.
3. **Sustitución del dominio de hecho por la subordinación estructural del ejecutor**, cuya participación no es libre ni autónoma.

En el caso concreto, se analiza la responsabilidad penal de SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, quien ostentaba el mando superior del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Bajo su jefatura, se desarrollaron de forma sistemática y generalizada conductas como **masacres, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, violencia sexual, extorsiones y ejecuciones extrajudiciales**, en múltiples municipios del país.

Las pruebas recaudadas en el proceso demuestran:

- La existencia de una **estructura jerárquica militarizada**, con líneas de mando vertical y cadenas de control funcional.

- La expedición de **órdenes operacionales** para "limpiar zonas", "neutralizar objetivos", "controlar corredores estratégicos" o "desplazar población civil" bajo la lógica del dominio territorial.

- La implementación de **mecanismos de reporte y rendición de cuentas** de los comandantes subordinados al procesado.

- La sistematicidad y repetición de patrones de macro criminalidad que **responden a una política común** planificada desde la cúpula.

En ese sentido, si bien el procesado no estuvo físicamente en todos los lugares donde se perpetraron los crímenes, sí tenía control funcional y dominio del aparato armado, lo cual hace imputable su conducta a título de autor mediato, en los términos del artículo 29 constitucional, y conforme a lo desarrollado por la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la sentencia Rad. 34360 de 2009.

Conforme a las motivaciones que anteceden, esa Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, proferirá sentencia condenatoria contra: **SALVATORE MANCUSO GÓMEZ** en condición de autor mediato de los delitos antes relacionados.

6. LA DOSIFICACIÓN PUNITIVA

1. Pena Ordinaria.

De conformidad con los cargos imputados y legalizados al postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, la Magistratura procederá a efectuar los cálculos necesarios que señala el Código Penal Colombiano en los artículos 54 a 62, a fin de determinar el *quantum punitivo,* los cuales se expondrán de manera general respecto a cada uno de los delitos por los cuales habrá de impartirse condena.

Para efectos de dar aplicación a la dosimetría penal, se tendrá en cuenta las reglas establecidas en los artículos 54 a 62 del capítulo segundo “De los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad” contenida en el título IV del Libro primero del Código Penal, en atención al quantum punitivo a aplicar en el entendido que se trata de un concurso de delitos homogéneos y heterogéneos, motivo por el cual se partirá de la pena más grave sin que esta supere los parámetros establecidos en el artículo 31 de la ley 599 relacionado al concurso de conductas punibles, así como lo reglado en el título IV del decreto 100 de 1980 referente al concurso de hechos punibles en su artículos 26 y 28 relativo al concurso de hechos punibles y el límite de la pena aplicable en el concurso respectivamente. Así mismo las circunstancias en las que también se desprende el ámbito punitivo de movilidad, se realizará para la aplicación de la pena pecuniaria de multa, descrita en los diferentes tipos penales que la describan.

Conforme lo enunciado, y en denuedo de dar aplicación al principio de legalidad, atendiendo que las conductas punibles constituyen graves crímenes de guerra y de lesa humanidad dentro de cada uno de delitos enrostrados, la Sala esgrimirá la pena a imponer, conforme los presupuestos descritos en los artículos 60 y 61 de la Ley 599 de 2000 referentes a los parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables, así como los fundamentos para la individualización de la pena por los siguientes delitos:

- **Homicidio en persona protegida.**

Establecido en el artículo 135 del Código Penal, se tiene que se trata de comportamientos que se dieron en concurso homogéneo y sucesivo de acuerdo con lo reglado en el artículo 31 ibídem.

De acuerdo con el artículo 135 de la Ley 599 de 2000, según el cual *"El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida conforme a los Convenios Internacionales sobre Derecho Humanitario ratificados por Colombia, incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años, multa de dos mil (2.000) a cinco mil (5.000) Salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años.*

> *"PARÁGRAFO. Para los efectos de este artículo y las demás normas del presente*
> *título se entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario:*
> *"(...)*
> *"(...) Los integrantes de la población civil."*

Como de acuerdo con lo motivado, suficientemente se halla verificado la existencia en Colombia de un conflicto armado interno determinante para la ocurrencia de las muertes violentas de las que además resultaron víctimas integrantes de la población civil; para la Sala no se ofrece dubitación alguna respecto de la adecuación típica definida al acto de legalización, sancionada como se observa con pena de prisión que oscila entre *"treinta (30) a cuarenta (40) años, multa de dos mil (2.000) a cinco mil (5.000) Salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años."*

Por las motivaciones que preceden, la pena de multa oscilará entre los extremos de su cuarto máximo comprendido entre 4.250 y 5.000 S.M.L.M.V., en tanto que la pena de Interdicción de derechos y funciones públicas debe oscilar en el mismo segmento comprendido entre 18 años y 9 meses y 20 años.
De esta manera, por los efectos de circunstancias atendidas para la dosificación de la pena de prisión, se impondrá igualmente en contra del postulado SALVATORE

MANCUSO GÓOMEZ una pena de cuarenta (40) años de prisión, pecuniaria de cinco mil (5000) S.M.L.M.V. e interdicción de Derechos y funciones públicas por veinte (20) años.

- **Desaparición Forzada.**

> *"ARTICULO 165. Desaparición Forzada. El particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea su forma. Seguida de su ocultamiento y de su negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de 20 a 30 años, multa de mil (1.000) a tres mil (3.000) Salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años.*
> *A la misma pena quedará sometido, el servidor público, o el particular que actúe bajo la determinación o la quiescencia de aquel, y realice la conducta descrita en el inciso anterior."*

La conducta descrita consiste en someter a una persona a la privación de su libertad, cualquiera que sea su forma, seguida de su ocultamiento y omitiendo dar información de su paradero a las autoridades. Ésta puede ser ejercida por un particular que pertenezca a un grupo armado al margen de la ley, por un servidor público, o por un particular que actúa por orden, o apoyo de un servidor público.

La conducta típica se encuentra ubicada en el Titulo III de la Ley 599 de 2000, el cual consagra los delitos contra la libertad individual y otras garantías, por lo tanto, es claro que el bien jurídico protegido es el de la libertad individual, entendiendo este como la facultad de todo ciudadano de poder movilizarse libremente.

La prohibición de la desaparición forzada, también se encuentra consagrada en el artículo 12 de la Constitución Política Colombiana, el cual establece que "nadie será sometido a desaparición forzada", y en la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, como quiera que en virtud de esta convención es claro que esta conducta típica CONSTITUYE UN DELITO DE LESA HUMANIDAD.

Ahora, tal como se desprende de la descripción de la conducta señalada en el tipo penal, ésta comprende 2 momentos; el primero que inicia con la privación de la libertad y el segundo consistente en el ocultamiento de la víctima aunado de la intención por parte del sujeto activo de no dar información a las autoridades, sustrayéndola en consecuencia del amparo legal.

Por lo anterior el elemento subjetivo de la conducta también consta de dos aspectos, esto es, la retención de la víctima seguida de su deseo de desaparecerla[36], por lo que

[36] Nuevo Código Penal- Jairo López Morales, Editorial Ediciones Doctrina y Ley.

puede concluirse que la privación de la libertad es el medio para la consecución de un fin, consistente en el desaparecimiento de la víctima.

Frente a la exclusiva concurrencia de circunstancias de mayor punibilidad y por el inequívoco daño real y potencial creado derivado de las condiciones de indefensión de las víctimas y de los fútiles argumentos esgrimidos a manera de justificación, como de la naturaleza pluriofensiva de esta forma de criminalidad, se impone en contra del procesado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ una **pena de 30 años de prisión**, comoquiera que este es el extremo del cuarto máximo que oscila entre 27 años y 6 meses y 30 años.

Como los fundamentos atendidos para la dosificación de la pena de prisión obligan a la Sala a dosificar la **pena de Multa** entre los extremos que informan su cuarto máximo, esto es entre 2.500 y 3.000 S.M.L.M.V. bajo ese entendido se impone la pena máxima establecida en **3.000 S.M.L.M.V.**

Respecto de la **Pena de Interdicción de derechos y funciones públicas**, se impondrá la máxima de los extremos que comprenden su cuarto máximo 17 años y 6 meses y 20 Años, es decir **20 años**.

- **Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento Forzado de Población Civil.**

Tal y como lo señaló la Honorable Corte Constitucional en sentencia T/025 de 2004 el problema del desplazamiento forzado interno en Colombia, cuya dinámica actual tuvo su inicio en la década de los años ochenta, afecta a grandes masas poblacionales. La situación es tan preocupante, que en distintas oportunidades la Corte Constitucional la ha calificado como (a) "*un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas las personas, principiando, como es lógico, por los funcionarios del Estado"*; (b) *"un verdadero estado de emergencia social", "una tragedia nacional, que afecta los destinos de innumerables colombianos y que marcará el futuro del país durante las próximas décadas"* y *"un serio peligro para la sociedad política colombiana"*; y, más recientemente, (c) un *"estado de cosas inconstitucional"* que *"contraría la racionalidad implícita en el constitucionalismo",* al causar una *"evidente tensión entre la pretensión de organización política y la prolífica declaración de valores, principios y derechos contenidas en el Texto Fundamental y la diaria y trágica constatación de la exclusión de ese acuerdo de millones de colombianos"*.

También destacó esa corporación que, por las circunstancias que rodean el desplazamiento interno, las personas –en su mayor parte mujeres cabeza de familia, niños y personas de la tercera edad que se ven obligadas *"a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio nacional"* para huir de la violencia generada por el conflicto armado interno y por el

desconocimiento sistemático de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, quedan expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad, que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus derechos fundamentales y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial atención por las autoridades: *"Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado*". En ese mismo orden de ideas, ha indicado la Corte *"la necesidad de inclinar la agenda política del Estado a la solución del desplazamiento interno y el deber de darle prioridad sobre muchos otros tópicos de la agenda pública"*, dada la incidencia determinante que, por sus dimensiones y sus consecuencias psicológicas, políticas y socioeconómicas, ejercerá este fenómeno sobre la vida nacional.

Téngase en cuenta que constituye una verdad irrebatible, que los distintos actos de terror, secuestros, desaparición forzada, torturas, homicidios selectivos, masacres y otras graves violaciones a los Derechos humanos, constituyeron en su momento, antecedentes claramente determinantes no solo del desplazamiento de los núcleos familiares de víctimas directas de tales actos delictivos, si no igualmente de otros miembros de la comunidad tal y como aconteció en los municipios de los departamento del Magdalena y su capital Santa Marta, así como los municipios del departamento de la Guajira.

Por lo anteriormente expuesto, esta Sala considera que se deben aplicar las penas máximas contempladas en el cuarto que se establezcan, de acuerdo con la dosificación penal; se tendrá como base para hacer los cálculos correspondientes lo reglado en el artículo 159 de la Ley 599 del 2000 (Código Penal), cuyo texto es el siguiente:

> *"DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y sin que medie justificación militar, deporte, expulse, traslade o desplace forzadamente de su sitio de asentamiento a la población civil, incurrirá en prisión de diez (10) a veinte (20) años, multa de mil (1.000) a dos mil (2.000) Salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años".*

En ese orden, teniendo en cuenta que solo se advierten circunstancias de agravación punitiva, como resultan ser las contenidas en los numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, esto es haber ejecutado la conducta por motivos abyectos o fútil y ejecutar la conducta aprovechando las circunstancias de tiempo modo y lugar que impiden la defensa de la víctima, de conformidad con lo ordenado en el artículo 61 ibídem, la pena a imponer oscilara en el cuarto máximo esto es entre **210** a **240** meses de prisión y multa de **1750 a 2000** S.M.M.L.V., por lo que teniendo en cuenta, a su vez, la necesidad de la pena, la intensidad del dolo, el daño causado y la gravedad de

la conducta se impone una pena de **240 MESES DE PRISIÓN Y MULTA POR 2000 S.M.M.L.V.**

- **Actos de terrorismo y Terrorismo (arts. 144 y 344 C.P.).**

De acuerdo a lo que establece el artículo 144 de esa misma legislación, *"El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice u ordene llevar a cabo ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla, incurrirá por esa sola conducta en prisión de quince (15) a veinticinco (25) años, multa de dos mil (2.000) a cuarenta mil (40.000) Salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años*". Comportamiento que por igual se consideró gestado en las circunstancias de mayor punibilidad que establece el artículo 58. 2º y 5º del CP.

Por su parte el artículo 344 ibidem establece que *"El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) Salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta".*

Por lo anterior es claro que, si la conducta cuya finalidad es mantener en zozobra y generar terror en la víctima por fuera del contexto del conflicto armado se adecua al tipo penal de Terrorismo, al tiempo que en el contexto del conflicto armado y llevada a cabo con ocasión y en desarrollo del mismo, el tipo penal que se configura, como en el presente caso ocurre es el de Actos de Terrorismo del artículo 144 citado precedentemente.

El contenido literal del tipo en cuestión informa con claridad, que es sujeto de la sanción que se establece, cualquier persona que en desarrollo de conflicto armado haga objeto a la población civil, entre otras agresiones, de ataques, actos de violencia o amenazas con la finalidad de aterrorizarla. Para el caso del postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, resulta innegable que no solo las circunstancias fácticas que rodearon los indistintos homicidios selectivos eran motivo más que suficientes para generar angustia y zozobra en las comunidades; Por igual debe tenerse en cuenta que la fortaleza operativa del grupo ilegal armado comandado por MANCUSO GÓMEZ, al permitirle como lo informa el proceso, una amplia cobertura operativa desde su óptica geográfica, circunstancias que frente a la población, se traducían en factores generadores de terror y zozobra, pues a decir verdad mal podrían sentirse seguros en lugar alguno. Por ello, incluso el proceso da cuenta de personas que se vieron obligadas a migrar en más de una oportunidad.

Lo anterior, evidencia la finalidad de producir en la población un estado generalizado de terror que facilitara y asegurara la expansión y consolidación del grupo ilegal armado y con mayor importancia, el sometimiento y dominio de la comunidad; de la misma forma, otras de las acciones criminales que aquí se sancionan, estuvieron orientadas a idéntico propósito, tales como los distintos actos de tortura ejecutados materialmente por sus subalternos con su anuencia y complacencia.

Conforme a lo anterior, la **pena de prisión** se impone en su extremo máximo del cuarto máximo que se comprende entre 22 años y 6 meses y 25 años de prisión, esto es **25 años de prisión**.

La Multa. Con aquellos fundamentos se impone la pena de Multa en la expresión máxima de su cuarto máximo - 30.500 a 40.000 S.M.L.M.V.-, esto es, en **40.000 S.M.L.M.V**.

A su turno, la sanción de **interdicción de derechos y funciones públicas**, frente a idénticas circunstancias para considerar su mayor punibilidad, se tasa entre los extremos de su cuarto máximo – 18 años y 9 meses y 20 años-, resolviéndose imponer la máxima, esto es **20 años de interdicción de derechos y funciones públicas**.

- **Destrucción y Apropiación de Bienes Protegidos.**

Artículo 154 de la Ley 599 de 2000:

> ***"DESTRUCCIÓN Y APROPIACIÓN DE BIENES PROTEGIDOS".*** *El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles sancionadas con pena mayor, destruya o se apropie por medios ilegales o excesivos en relación con la ventaja militar concreta prevista, de los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años y multa de quinientos (500) a mil (1.000) Salarios mínimos legales mensuales vigentes.*
>
> *PARÁGRAFO. Para los efectos de este artículo y los demás del título se entenderán como bienes protegidos conforme al derecho internacional humanitario:*
> *1. Los de carácter civil que no sean objetivos militares.*
> *2. Los culturales y los lugares destinados al culto.*
> *3. Los indispensables para la supervivencia de la población civil.*
> *4. Los elementos que integran el medio ambiente natural.*
> *5. Las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas".*

Teniendo en cuenta que solo se advierten circunstancias de agravación punitiva, como resultan ser las contenidas en los numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código

Penal, esto es haber ejecutado la conducta por motivos abyectos o fútil y ejecutar la conducta aprovechando las circunstancias de tiempo modo y lugar de indefensión de la víctima, de conformidad con lo ordenado en el artículo 61 ibídem, la pena a imponer oscilara en el cuatro máximo esto es entre **105** a **120** meses de prisión y multa de **875 a 1000** S.M.M.L.V., por lo que teniendo en cuenta, a su vez, la necesidad de la pena, la intensidad del dolo, el daño causado y la gravedad de la conducta se impone una pena **120 MESES DE PRISIÓN Y MULTA POR 1000 S.M.M.L.V.**

- **Tortura en Persona Protegida.**

El objetivo de prevenir y sancionar la tortura de conformidad con lo señalado en la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-148/05, se erige para los Estados y las sociedades democráticas en un imperativo ético y jurídico, en tanto dicha práctica contradice la condición esencial de dignidad del ser humano, su naturaleza y los derechos fundamentales que se predican inherentes a la misma, por lo que la misma está expresamente proscrita en el ordenamiento internacional.

El contexto aludido se visibiliza mediante el artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 7º del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos; el artículo 5.2. de la Convención Americana de Derechos Humanos; el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre y el artículo 3°, común a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección contra la tortura en personas protegidas por el derecho internacional en caso de conflicto armado.

En ese orden, tal y como señala la H. Corte Constitucional, la tortura ha sido en ese sentido objeto de diversos instrumentos internacionales tendientes a prevenirla y sancionarla, dentro de los que cabe recordar particularmente i) la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; ii) la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; iii) La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura; iv) el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

En cumplimiento de los compromisos internaciones adquiridos por Colombia en materia de Derechos Humanos y de cara al conflicto armado interno imperante en el país, en la Ley 599 de 2000 el Legislador decidió introducir en el Libro Segundo "sobre los delitos en particular" un título específico relativo a los delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.

Como se desprende de los antecedentes de dicha norma la voluntad del Legislador fue la de manifestar la voluntad del Estado colombiano de atender los compromisos internacionales ligados a la aplicación del Derecho Internacional Humanitario y en particular de los Convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales I y II de 1977.

Es así como en el artículo artículo 137 de la Ley 599 de 2000 señala que "*el que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, inflija a una persona dolores o*

sufrimientos graves, físicos o síquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación, incurrirá en prisión de diez (10) a veinte (20) años, multa de quinientos (500) a mil (1000) Salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años.", términos a los que se someterá la correspondiente dosificación punitiva.

Teniendo en cuenta que solo se advierten circunstancias de agravación punitiva, como resultan ser las contenidas en los numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, esto es haber ejecutado la conducta por motivos abyectos o fútil y ejecutar la conducta aprovechando las circunstancias de tiempo modo y lugar que defensa de la víctima, de conformidad con lo ordenado en el artículo 61 ibídem, la pena a imponer oscilara en el cuatro máximo esto es entre **210** a **240** meses de prisión y multa de **875 a 1000** S.M.M.L.V., por lo que teniendo en cuenta, a su vez, la necesidad de la pena, la intensidad del dolo, el daño causado y la gravedad de la conducta se impone una pena **240 MESES DE PRISIÓN Y MULTA POR 1000 S.M.M.L.V.; E INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR 240 MESES.**

- **Exacción o Contribuciones Arbitrarias**.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo art. 163 del CP: *"El que, con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado, imponga contribuciones arbitrarias incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a tres mil (3.000) Salarios mínimos legales mensuales vigentes".*

De acuerdo a lo expuesto en la decisión de legalización, respecto al recaudo de las contribuciones arbitrarias que exigía el grupo armado organizado al margen de la ley a la población civil y de las que da cuenta el proceso, al punto que ello se convirtió en fuente importante de financiación de la organización armada ilegal; y comoquiera que la Fiscalía consideró y así fue legalizado, que frente a este delito, se predicaba de las víctimas su estado de indefensión, la Sala estima que de cara a la concurrencia exclusiva de esta circunstancia de mayor punibilidad, y ante todo por cuanto el daño potencial llegó a superar el real, en la medida en que las víctimas conocían de antemano el riesgo que les representaba el incumplir con el pago de los tributos ilegales, la Sala concluye que debe imponerse en contra del procesado SALAVATORE MANCUSO GÓMEZ, **la pena máxima establecida en 15 años de prisión**, comoquiera que este es el quantum al que asciende el extremo del cuarto máximo.

La Multa. De la misma forma, ante aquellas circunstancias de mayor punibilidad se impondrá en contra de los Procesados la sanción máxima económica establecida en 3.000 S.M.L.M.V.

- **Secuestro extorsivo.**

Establecido en el artículo 169 del Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) se tiene que:

> *"El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de dieciocho (18) a veintiocho (28) años y multa de dos mil (2.000) a cuatro mil (4.000) Salarios mínimos legales mensuales vigentes".*

El secuestro consiste en la privación de la libertad mediante alguna de las formas que describe la disposición que lo tipifica, esto es, arrebatar, sustraer, retener u ocultar a la víctima; todo con un ingrediente subjetivo característico, que parte de la búsqueda de provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo a cambio de la libertad de la víctima, con lo que queda claro que la adecuación típica requiera la búsqueda de alguna finalidad específica, aspecto que lo diferencia de tipo de Secuestro simple, el cual sanciona la sola privación de la libertad sin que se requiera finalidad alguna.[37]

De conformidad con lo anterior, se reitera, resulta claro que, si en la privación de la libertad individual el sujeto activo tiene una finalidad específica, o un designio subjetivo identificable[38], consistente en obtener por la liberación una utilidad, la conducta necesariamente debe adecuarse dentro del tipo penal de Secuestro extorsivo.

Se tiene entonces que el tipo penal de Secuestro extorsivo resulta ser pluriofensivo en la medida en que no solo tutela el bien jurídico de la libertad individual sino otros que resultan involucrados como puede ser el patrimonio económico.

Por la acción de las agravantes específicas que vienen expuestas, ajustadas conforme con lo reglado por el artículo 60 núm. 4º CP., se tiene que los extremos punitivos en este evento oscilan entre los 24 y 42 años de prisión. Sin embargo, como de acuerdo con lo que impone el artículo 37 del CP., la pena de prisión tendrá una duración de 40 años, se atenderá que la pena se comprende entre 24 y 40 años de prisión.

Frente a estas condiciones, se tasará la pena en el marco comprendido por su cuarto máximo, esto es entre 36 y 40 años, atendido el daño real y potencial derivado de delitos que como se dijo, constituyen una práctica sistemática y generalizada o patrón de conducta, por lo que la Sala resuelve imponer, una **pena de 40 años de prisión**, atendiendo al cuarto máximo aludido.

[37] Sentencia del 25 de mayo del 2005, radicado 17.666, M.P. Edgar Lombana Trujillo.

Así mismo, se impone como **multa** atendiendo al cuarto máximo comprendido entre 5.166 y 6.000 S.M.L.M.V., el máximo de **6.000 S.M.L.M.V.**

Acceso carnal violento en persona protegida, en concurso homogéneo sucesivo conforme a lo reglado por los artículos 138 del CP: *"El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice acceso carnal por medio de violencia en persona protegida incurrirá en prisión de diez (10) a diez y ocho (18) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) Salarios mínimos legales mensuales vigentes. "Para los efectos de este Artículo se entenderá por acceso carnal lo dispuesto en el artículo 212 de este código."*

Como fue relacionado en la decisión de legalización de cargos, se trató del reproche de responsabilidad en contra del procesado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ.

En las condiciones que vienen motivadas por cuenta de este comportamiento se impone en contra del procesado una **pena de Dieciocho (18) años de prisión**, atendido a que ello se traduce en el extremo del cuarto máximo comprendido entre 16 y 18 años de prisión.

La Multa. Por igual, la pena pecuniaria se tasa en 1000 S.M.L.M.V., comoquiera que ello se corresponde con el extremo del cuarto máximo que oscila entre 875 y 1000 S.M.L.M.V.

- **Tratos inhumanos y degradantes y experimentos biológicos en persona protegida**.

Contemplado en el artículo 146 de la ley 599 de 2000, sin las modificaciones de la Ley 890 de 2004 en aras de dar aplicación a la pena más favorable para los postulados. Es decir, para el caso en particular se dará a lo descrito en el texto original como indica:

> *"El que, fuera de los casos previstos expresamente como conducta punible, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, inflija a persona protegida tratos o le realice prácticas inhumanas o degradantes o le cause grandes sufrimientos o practique con ella experimentos biológicos, o la someta a cualquier acto médico que no esté indicado ni conforme a las normas médicas generalmente reconocidas incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de cinco (5) a diez (10) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) Salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años."*

Para dar aplicación a la pena máxima establecida en el cuarto extremo, se tiene que la pena de prisión oscila entre (105) a (120) meses de prisión, la multa de (200) a

(1000) S.M.L.M.V. y la pena de interdicción para el ejercicio de derechos y funciones de (105) a (120) meses.

Conforme lo motivado se impondrá al procesado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ la **pena de CIENTO VEINTE (120) meses de prisión**, **multa de MIL (1.000) S.M.L.M.V. y pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas** por un periodo igual a la pena principal, es decir CIENTO VEINTE (120) meses, o lo que es igual a **DIEZ (10) años.**

Actos de discriminación racial. Contemplado en el artículo 147 de la ley 599 de 2000, sin las modificaciones de la Ley 890 de 2004 en aras de dar aplicación a la pena más favorable para los postulados. Es decir, para el caso en particular se dará a lo descrito en el texto original como indica:

> *"El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice prácticas de segregación racial o ejerza tratos inhumanos o degradantes basados en otras distinciones de carácter desfavorable que entrañen ultraje contra la dignidad personal, respecto de cualquier persona protegida, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) Salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años."*

Para dar aplicación a la pena máxima establecida en el cuarto extremo, se tiene que la pena de prisión oscila entre (60) a (120) meses de prisión, la multa de (200) a (1000) S.M.L.M.V. y la pena de interdicción para el ejercicio de derechos y funciones de (105) a (120) meses.

Conforme lo motivado se impondrá al procesado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ la **pena de CIENTO VEINTE (120) meses de prisión, multa de MIL (1.000) S.M.L.M.V. y pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas** por un periodo igual a la pena principal, es decir CIENTO VEINTE (120) meses, o lo que es igual a **DIEZ (10) años**.

- **Amenazas.**

De conformidad con el artículo 347 de la Ley 599 de 2000 se tiene que: "*El que por cualquier medio apto para difundir el pensamiento atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella, incurrirá, por esta sola conducta, en prisión de uno a cuatro años y multa de diez a cien Salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

Si la amenaza o intimidación recayera sobre un servidor público perteneciente a la rama judicial o al ministerio público o sus familiares, en razón o con ocasión al cargo o función que desempeñe, la pena se aumentará en una tercera parte."

De conformidad con lo anterior se tiene que el delito de amenaza pretende un ataque al sosiego y la tranquilidad personal en el normal desarrollo de la vida, bien jurídico protegido en estas conductas. Se requiere que la conducta del culpable sea lo suficientemente realista y seria como para considerarla una verdadera amenaza. En la mayoría de los casos las amenazas recaen sobre cometer otras conductas punibles como lesionar, secuestrar, matar, violar, torturar etc.

Teniendo en cuenta que solo se advierten circunstancias de agravación punitiva, como resultan ser las contenidas en los numerales 2 y 5 del artículo 58 del Código Penal, esto es haber ejecutado la conducta por motivos abyectos o fútil y ejecutar la conducta aprovechando las circunstancias de tiempo modo y lugar que defensa de la víctima, de conformidad con lo ordenado en el artículo 61 ibídem, la pena a imponer oscilara en el cuatro máximo esto es entre **39** a **48** meses de prisión, por lo que teniendo en cuenta, a su vez, la necesidad de la pena, la intensidad del dolo, el daño causado y la gravedad de la conducta se impone una pena **48 MESES DE PRISIÓN y MULTA DE 100 S.M.L.M.V.**

- **Detención ilegal y privación del debido proceso.**

Contemplado en el artículo 149 de la ley 599 de 2000, sin las modificaciones de la Ley 890 de 2004 en aras de dar aplicación a la pena más favorable para los postulados. Es decir, para el caso en particular se dará a lo descrito en el texto original como indica:

> *"El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive ilegalmente de su libertad a una persona y la sustraiga de su derecho a ser juzgada de manera legítima e imparcial, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de mil (1.000) a dos mil (2.000) Salarios mínimos legales mensuales vigentes."*

Para dar aplicación a la pena máxima establecida en el cuarto extremo, se tiene que la pena de prisión oscila entre (120) a (180) meses de prisión, la multa de (1.000) a (2.000) S.M.L.M.V.

Conforme lo motivado se impondrá al procesado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ la pena de CIENTO OCHENTA (180) meses de prisión y multa de MIL (2.000) S.M.L.M.V.

Atendiendo que frente a la actividad concursal de tipos, para efectos de la dosificación de la pena a imponer, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, ha de partirse de la pena que se establezca para el delito más grave, considerados los extremos punitivos impuestos para los distintos comportamientos, lo que se pone de presente es que el delito más grave lo constituye

el Homicidio en persona protegida de que trata el artículo 135 del CP., cuya sanción oscila entre **Treinta (30) y Cuarenta (40) años de prisión**.

Como quiera que en lo que tiene que ver con el delito de *homicidio en persona protegida* las condiciones fácticas en las que se perpetraron evidencian suficientemente la presencia de las circunstancias genéricas de agravación punitiva que se establecen por el artículo 58 numerales 2ºy 5º, del Código Penal, al estar acreditado los motivos abyectos de las muertes violentas que como se vio se derivan de los patrones de conductas, -homicidios selectivos de supuestos colaboradores de la subversión o de la delincuencia común-; la condición de vulnerabilidad e indefensión de las víctimas, derivada no solo de sus imposibilidades de defensa al momento de los hechos, sino de la violencia estructural que simultáneamente las victimizaba; por lo que la Sala estima proporcionado tasar la pena a imponer en el Cuarto máximo, que se comprende entre 450 a 480 meses de prisión.

Atendiendo que las condiciones en las que se ejecutó el múltiple homicidio, dejan de presente no solo la gravedad de estas sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos, sino que tales acontecimientos produjeron en las comunidades afectadas un daño real y potencial respecto de sus sentimientos de confianza y seguridad en su entorno y en las mismas Instituciones, la Sala resuelve que por cuenta de este delito se impondrá en contra del Postulado una pena de **cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión**, tal y como se anotó precedentemente**.**
Ahora bien, por mandato del artículo 31 del CP. para efectos de la sanción penal privativa de la libertad en los eventos de concurso de infracciones penales, la pena establecida para el delito más grave puede ser aumentada hasta en otro tanto, en principio parecería procedente imponer en contra del Postulado una pena equivalente al doble de la que se amerita por el delito más grave; sin embargo, el Legislador impuso tope a esta postura, cuando estableció que para tales eventos la sanción no puede exceder la suma aritmética de las penas que corresponden por cada una de las conductas que concursan.

Por otro lado, a pesar del concurso de conductas punibles como también el Legislador ha puesto límites a la pena de prisión, al establecer en los artículos 31 y 37 de la Ley 599 de 2000, que en **ningún caso** en Colombia la pena privativa de la libertad podrá exceder de cuarenta (40) años, **la Sala atendiendo lo dispuesto en la citada Legislación, condenará al procesado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, a una pena de prisión de Cuarenta (40) años** en razón de las responsabilidades penales que en su contra se acreditaron por los delitos que se señalaron en precedencia.

La multa.

La tasación de la multa es la siguiente: Atendiendo a que, para el *homicidio en persona protegida*, siguiendo los parámetros de la dosificación de la pena de prisión, comoquiera que la pena de multa funge como principal, y viene establecida entre dos

mil (2.000) y cinco mil (5.000) S.M.L.M.V., hechos los correspondientes cálculos, la pena de multa oscilará entre los extremos del cuarto máximo, comprendido entre cuatro mil doscientos cincuenta (4.250) y cinco mil (5.000) S.M.L.M.V. Frente esta comprobación, por el *delito de homicidio en persona protegida* amerita imponer multa en cuantía de cinco mil (5.000) S.M.L.M.V.

No obstante lo anterior, de acuerdo con las reglas que informan la dosificación de penas, frente a la actividad concursal de conductas punibles, es claro que se debe partir de la sanción pecuniaria más grave, aumentada hasta en otro tanto, por lo que atendidos los criterios que viabilizaron la imposición de la pena máxima de prisión que vienen establecidas en los distintos tipos por los que se reclama responsabilidad, en este evento y frente a idénticas circunstancias, se impondrá en contra del postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ una pena de multa que equivale a cinco mil (5.000) S.M.L.M.V., los que aumentados hasta otro tanto por la acción concursal de tipos arrojan un total de **seis mil (6.000) S.M.L.M.V**. La cancelación de la sanción económica se realizará conforme a lo dispuesto por el artículo 39 numeral 5º ibídem.

- **De la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas.**

En los comportamientos por los que se reclama responsabilidad en contra del postulado, se dispone la imposición de la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, a partir del término que consagran los delitos, de la misma forma, en este evento se impondrá la pena que corresponde por el delito más grave, que conforme a lo motivado y según los cálculos que corresponden, oscila entre dieciocho (18) años y nueve (9) meses y veinte (20) años de prisión. Se toma entonces, de acuerdo con todas las motivaciones que preceden, la pena máxima de interdicción de derechos y funciones públicas que se establece por el artículo 44 código penal, esto es **veinte (20) años**.

- **De la Pena Alternativa.**

El beneficio de alternatividad penal[39] comprende la suspensión de la ejecución de la pena ordinaria, entendida bajo los preceptos del Código Penal, para que en su lugar el postulado cumpla una pena alternativa que oscilará entre un mínimo de cinco (5) años y un máximo de (8) ocho años. En este sentido dispone el artículo 29 de la ley 975 de 2005:

> "(…) *En caso de que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos.* (…)"

[39] Ley 975 de 2005, artículo 3: "*ALTERNATIVIDAD. Alternatividad es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. "La concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la presente ley."*

Esta rebaja punitiva obedece a los esfuerzos por equilibrar la tensión entre los valores de la justicia y la paz, de este modo, este descuento significativo del quantum punitivo busca afianzar las negociaciones políticas con los grupos armados al margen de la ley, que han sido autores o partícipes de delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo ilegal y que han venido sometiéndose a un proceso de reincorporación a la vida civil.

A partir de esta apreciación razonable es que consideramos claramente que lo que existió entre el Gobierno Nacional de turno y los Grupos ilegales de autodefensas, mal llamados "paramilitares", fue un proceso real de negociación y dejación de armas, en aras de obtener una paz duradera en todas las regiones de Colombia donde operaban esto grupos ilegales, al Estado se le salió de las manos el control de estos grupos ilegítimos que bañaron de sangre el país, dejando a su paso millones de víctimas que hoy le toca al propio Estado acoger, proteger e indemnizar con el apoyo de todos los colombianos; pero más triste, y que esta Sala no puede dejar pasar de expresarlo, es ver como ahora el Estado no reprogramo la reincorporación de estos miles de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia A.U.C., que en estos 15 años se han podido ver reincidiendo, formando parte de los nuevos grupos ilegales una vez obtienen el beneficio de la sustitución de la medida de aseguramiento por libertad condicionada, en su gran mayoría salieron a la vida civil sin una verdadera y agresiva terapia psicológica y resocializadora, muchos se volvieron más drogadictos en los centros penitenciarios, salieron sin perspectivas ni proyectos de vida, en realidad sin una verdadera y fuerte política de reintegración, muchos de ellos asesinados o nuevamente recluidos en prisión y excluidos del programa de justicia y paz, eso permite ver como el proyecto de acuerdo de paz con estos grupos ilegales de autodefensas, a través del tiempo, se viene debilitando cada día más, la Sala lo puede observar con la cantidad de postulados a la ley de justicia y paz en este momento excluidos por reincidir en la ilegalidad, de como ellos hablan ante la Sala de audiencias pidiendo apoyo del Estado para poder reincorporarse a la vida civil; Súmele a ello la falta de educación a la sociedad a través de programas y publicidad, por parte del Estado, para que se le permitiera darles oportunidad a estos desmovilizados en áreas laborales y así permitir la reincorporación a la vida civil, con medios reales de vida, ello no se hizo, se conoce de los programas de reincorporación, pero no fue suficiente, la realidad diaria lo confirma.

Esta apreciación lleva a la Sala a Exhortar al Gobierno Nacional para que, estudie la posibilidad, a través de su oficina de reintegración de desmovilizados, de conformar una mesa técnica, que haga el diagnostico de los desmovilizados de las AUC que se encuentran en uso de su libertad, a fin de que se fortalezca de manera agresiva y en el menor termino posible los programas que faciliten la reincorporación a estos desmovilizados postulados a la ley de justicia y paz a la sociedad; muchos de los postulados trabajan en oficios varios a escondidas de que se sepa su pasado delincuencial porque la sociedad no se lo permite.

Igualmente se exhortará al Gobierno Nacional para que se estudie la posibilidad que el INPEC disponga de unos profesionales psicólogos de alta calidad, a fin de que se realicen verdaderos diagnósticos y atención a los postulados a la ley de justicia y paz que se encuentran privados de su libertad, diagnósticos que deben de ir de la mano con los programas de reincorporación a la sociedad una vez obtengan el beneficio de la sustitución de la medida de aseguramiento por libertad condicional, no puede perderse de vista que muchos de estos postulados ingresaron a la ilegalidad asesinando personas desde antes de cumplir su mayoría de edad, son verdaderamente personas trastornadas por esa vida pasada de alta criminalidad, hay que tener en cuenta que están respondiendo por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. De no hacer estos programas con verdadera voluntad política, es poner en verdadero riesgo a la sociedad colombiana, ya que el principio fundamental de LA NO REPETICION no estaría garantizada.

La Corte Constitucional, en sentencia C-370 de 2006, reconoció la constitucionalidad de la pena alternativa, sin embargo, entendió que la concesión del beneficio se condiciona al cumplimiento de todos los requisitos legales y materiales orientados a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.

Ahora bien, el artículo 29 de la Ley 975 de 2005 (artículo 8 núm. 2º, Decreto 7060 de 2005) dispone, en relación con la determinación de la pena, que ésta, primero debe establecerse con la normatividad del Código Penal y segundo, previa verificación de las condiciones previstas por la ley se procede a suspender su ejecución para dar pie a la ejecución de la pena alternativa.

La Sala, al momento de realizar el control de legalidad formal y material de los cargos imputados al postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, ya se pronunció sobre las exigencias relativas a la elegibilidad del artículo 10 de la ley 975 de 2005 y contribución con la verdad y reparación de las víctimas.

En consecuencia, la Sala concluye que el postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, **se hace merecedor de la suspensión de la ejecución de la pena principal impuesta de 40 años, y la de interdicción de derechos y funciones públicas de veinte (20) años por una alternativa de ocho (8) años.**

Con la intensión de asegurar el cumplimiento de las obligaciones correlativas a este beneficio, el sentenciado deberá suscribir un acta en la que se comprometa a buscar su resocialización por virtud del trabajo, el estudio o la enseñanza durante el tiempo que permanezca vinculado al proceso transicional; Así mismo, deberá promover actividades orientadas a la desmovilización de todos los integrantes del grupo armado

ilegal al cual perteneció, de acuerdo al artículo 8 del Decreto 4760 de 2005, con el objetivo de buscar la consecución de la paz nacional.

La Sala considera oportuno aclararle al sentenciado que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas derivará INEXORABLEMENTE a la revocatoria del beneficio punitivo concedido.

7. DE LA ACUMULACIÓN JURIDICA DE PENAS.

La acumulación jurídica de penas es la institución del Derecho procesal penal a través de la cual, en aplicación de los principios de unidad y conexidad procesal, y del mecanismo de concurso de conductas punibles, a una persona a la que le han sido impuestas más de una pena principal y accesorias en dos o más procesos penales, les sean consolidadas a efectos de imponer una sola, previo el cumplimiento de determinados requisitos, mediante *"una redosificación punitiva menos gravosa, regida por los parámetros establecidos para el concurso de hechos punibles, en los casos de sentencias proferidas contra un mismo condenado en diferentes procesos"*.

En ese orden a la luz del artículo 20 de la Ley 795 de 2005, 10º del Decreto 3391 de 2006 y 25 del Decreto 3011 de 2013, para el caso del postulado que ha solicitado ante la Sala la acumulación de las penas impuestas en su contra, resulta procedente imprimir dicho mecanismo para efectos de la tasación de la pena principal que en este fallo se imponen, siempre que pueda ser advertido por la Sala que todos y cada uno de los delitos por los que fueron condenados, fueron cometidos durante y con ocasión de la militancia del postulado en la organización ilegal armada a la que perteneció.

8. COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DEL POSTULADO.

El postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ deberá cumplir los compromisos y obligaciones que impondrá la Sala, advirtiendo que, en caso de inobservancia de lo estipulado, se revocará la pena alternativa concedida y consecuencialmente se activarán las sanciones ordinarias:

1. Suscribir de manera inmediata a la ejecutoria de esta decisión, su compromiso de no incurrir en nuevas conductas que sean violatorias de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario y del Ordenamiento Penal Colombiano, y que el mismo sea publicado en un diario de amplia circulación nacional dentro de los 3 meses siguientes a la confirmación de este fallo.

2. Reconocer en un acto público de perdón a las víctimas, su responsabilidad, arrepentimiento y compromiso de no volver a incurrir en la comisión de conductas punibles; el evento deberá realizarse dentro de los 6 meses siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia en la ciudad de Riohacha – La Guajira con la coordinación

de la Defensoría del Pueblo y Gobernación del Departamento, entidades que se exhorta para que lleve a cabo en coordinación con los apoderados de los postulados las gestiones necesitarías para la realización del evento.

3. Para garantizar el acceso de todas las víctimas al acto de perdón de que trata el numeral anterior, de dicho acto deberá realizarse un registro histórico fílmico y fotográfico que se deberá dar a conocer a través de los medios de comunicación nacional.

4. Se conmina al Postulado condenado en el presente proceso, a estar atentos al llamado de la Fiscalía General de la Nación o la Magistratura para los efectos judiciales que se requieran.

La Sala considera necesario solicitar a la respectivas autoridades judiciales ya la defensa del postulado, hagan llegar a la Sala en próximas decisiones copia de todas las sentencias que existan en contra del postulado para proceder a la acumulación jurídica de penas.

9. EXTINCIÓN DE DOMINIO.

Comoquiera que la ley 975 de 2005 y su decreto reglamentario 4760 de 2005, establecen como requisito para acceder a los beneficios de la ley 975 de 2005, que se entreguen los bienes adquiridos por el grupo y/o postulado como producto de la actividad ilegal, con el fin de reparar a las víctimas[40], como fue soportado por la honorable Corte Constitucional: [41]

> *"Al menos en principio, no parece existir una razón constitucional suficiente para que, frente a procesos de violencia masiva, se deje de aplicar el principio general según el cual quien causa el daño debe repararlo. Por el contrario, como ya lo ha explicado la Corte, las normas, la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional han considerado que la reparación económica a cargo del patrimonio propio del perpetrador es una de las condiciones necesarias para garantizar los derechos de las víctimas y promover la lucha contra la impunidad* (...)
>
> *"En efecto, en contextos de transición a la paz, podría parecer proporcionado que el responsable de delitos que ha decidido vincularse a un proceso de negociación, conserve una parte de su patrimonio de forma tal que pueda vivir dignamente e insertarse plenamente en la sociedad democrática y en el Estado de derecho. Lo que sin embargo parece no tener asidero constitucional alguno es que el Estado exima completamente de responsabilidad civil a quienes han producido los daños que es necesario*

[40] Ley 975 de 2005, artículo 10 núm. 2 y artículo 11 núm. 3; Decreto 4760 de 2005, artículo 13.
[41] Corte Constitucional. Sentencia C- 370 del 18 de mayo de 2006. Expediente D-6032. M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, Et. Al.

> *reparar y traslade la totalidad de los costos de la reparación al presupuesto. En este caso se estaría produciendo una especie de amnistía de la responsabilidad civil, responsabilidad que estarían asumiendo, a través de los impuestos, los ciudadanos y ciudadanas de bien que no han causado daño alguno y que, por el contrario, han sido víctimas del proceso macro criminal que se afronta"*.

En la misma decisión, esa Corporación precisó la oportunidad de entrega de bienes según su naturaleza, destacando que si los requisitos establecidos en los artículos 10 y 11 de la ley 975 de 2005 constituyen condiciones para acceder a los beneficios que establece esta norma, resulta comprensible que para aspirar al procesamiento allí diseñado, de manera simultánea a la desmovilización deberán ser entregados por el Bloque y sus postulados aquellos bienes de procedencia ilícita, para que sean devueltos a sus propietarios, lo que no significa un traslado de propiedad con fines de reparación; y de aquellos bienes de origen lícito que integran el patrimonio del Bloque o del desmovilizado, con los que se quiere responder por los perjuicios causados con el delito, sí tienen vocación para reparar, y en consecuencia ser objeto de medidas cautelares[42].

En ese sentido, se recuerda que uno de los requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva, es la entrega de bienes anteriormente aludida (artículo 10, núm. 10, inc. 2, lley 975 de 2005), la cual deberá ser evaluada atendiendo al tipo de desmovilización que se trate, y que para este caso es de carácter colectivo (artículo 5º, decreto 3391 de 2006), comoquiera que el llamado Bloque Norte, incluido el aquí Postulado, se desmovilizaron en el año 2006, de tal manera que aplicando las disposiciones del decreto 3391 de 2006, "(…) *la entrega de bienes de origen ilícitos realizada por el miembro representante o cualquiera de los desmovilizados que pertenecían al grupo armado organizado al margen de la Ley desmovilizado, se entenderá efectuada en nombre del respectivo grupo"* (art. 14, parágrafo).

Con relación a esto, encuentra la Sala que el Bloque Norte sí hizo entrega de bienes durante el acto de su desmovilización colectiva, los cuales han sido objeto de

---

[42] Dice la sentencia:

> *"En estas circunstancias no parece necesario que en esta etapa la persona entregue parte de su patrimonio lícito, pues al menos técnicamente, no existe aún un título para dicho traslado. Ciertamente, los bienes de procedencia ilícita no le pertenecen y, por lo tanto,* ***la entrega no supone un traslado de propiedad sino una devolución a su verdadero propietario – mediante la restitución del bien*** *– o al Estado. Sin embargo, su patrimonio lícito le pertenecerá hasta tanto no exista una condena judicial que le ordene la entrega. En cambio, los bienes producto de la actividad ilegal, todos ellos sin excepción, deben ser entregados como condición previa para acceder a los beneficios que establece la Ley 975/05. El legislador puede establecer ese requisito de elegibilidad, tanto para la desmovilización colectiva como para la desmovilización individual.*
>
> (...)
>
> *"6.2.4.1.20. Ahora bien, constata la Corte que,* ***si los beneficiarios de la ley deben responder con su propio patrimonio por los daños producidos, lo cierto es que no existe*** *ninguna razón para impedir que las medidas cautelares puedan recaer sobre sus bienes lícitos. En efecto, esta prohibición lo que hace es disminuir la efectividad de la acción estatal encaminada al logro de la reparación integral de las víctimas."* (Negrillas fuera de texto).

extinción de dominio en varias sentencias proferidas en sede de justicia y paz, sin embarga dentro del trámite que en esta oportunidad nos compete, la representante de la Fiscalía General de la Nación no presentó solicitud de extinción de dominio.

10. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

Finalizada el trámite de la actuación, la Sala procedió a brindarles un espacio a las partes e intervinientes para que expusieran sus alegaciones finales a efectos de ser tenidas en cuenta al momento de proferir la decisión que en derecho corresponda, en los términos del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004[43]-[44]. En cuanto hace a la importancia de esta etapa procesal en el proceso de Justicia y Paz, la Corte Suprema de Justicia ha indicado:

> *"Desde luego, la especial naturaleza que se ha atribuido al proceso de la Ley 975 de 2005, e incluso la legitimación que las víctimas tienen en el procedimiento ordinario, conforme la jurisprudencia de esta Sala y la Corte Constitucional, implica que ellas, como sucede con la Fiscalía y la defensa, tengan directa participación en esta tramitación, pues, el principio de justicia, tan caro a los afectados y sus familiares, también dice relación con el monto de las penas ordinarias, así que debe escuchárseles y tomarse en cuenta sus apreciaciones para el momento de la dosificación judicial.*
> *(…) luego de superado el filtro de las instancias, es fácil advertir que precisamente después de que se encuentra en firme esa legalización de cargos, ora porque no se controvirtió la decisión del Tribunal, ya en atención a que la segunda instancia de la Corte resolvió el recurso de apelación y el postulado manifestó su aceptación de los mismos, ha de abrirse un espacio procesal para que, ante el Tribunal, los intervinientes hagan uso de la facultad establecida en el artículo 447 de la Ley 906 de 2004."*[45]

10.1. La Fiscalía General de la Nación.

El ente acusador en cumplimiento con el artículo 24 del Decreto 3011 de 2013, manifiesta que se mantiene en lo expuesto en el transcurso de la diligencia, concluyendo en la solicitud que el postulado sea condenado por los hechos que le fueron presentados para su legalización, toda vez que se cumplió con todos los requerimientos establecidos en la Ley de Justicia y Paz, a efectos de establecer la Formulación de los cargos por las conductas punibles cometidas por el

[43] Que enseña: "(…) el juez concederá brevemente y por una sola vez la palabra al fiscal y luego a la defensa para que se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable. Si lo consideraren conveniente, podrán referirse a la probable determinación de pena aplicable y la concesión de algún subrogado".
[44] Aplicable por vía de complementariedad, artículo 62 de la Ley 975 de 2005.
[45] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Decisión del 31 de agosto de 2011, rad. 36125, M.P. Sigifredo Espinoza Pérez.

excomandante SALVATORE MANCUSO GOMEZ, los cuales fueron aceptados por el postulado; así como se acreditaron las víctimas por cada uno de los hechos en los cinco (5) Patrones de Macrocriminalidad constatándose por los representantes de las víctimas.

Por tales razones la Fiscalía le solicita a la Sala, condenar al señor SALVATORE MANCUSO GÓMEZ por cada uno de estos hechos y se imponga la pena ajustada a los hechos formulados. Agrega en sus argumentos que el postulado ha venido cumpliendo con los presupuestos exigidos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, y en ese orden puede ser beneficiario de la pena alternativa. Finalmente reitera su solicitud de impartir legalidad a los cargos formulados con fines de reparación, dando aplicación a lo previsto en el inciso 2º del artículo 42 de la Ley 975 de 2005.

10.2. El Ministerio Público:

Coadyuvó los argumentos esbozados por la Fiscalía requirente, y solicita a la Sala profiera sentencia condenatoria, por haberse cumplido todas las etapas de la Ley de Justicia y Paz; así mismo, solicita se le dé aplicabilidad a los presupuestos de acuerdo al principio de Legalidad y se le imponga la pena que en derecho corresponda por los delitos que se llegaron a probar, y tal como fue sustentado por el ente investigador, el postulado tiene derecho a la pena alternativa, como quiera que ha cumplido con los postulados de verdad, justicia y reparación.

10.3. Representación de las Víctimas. Coadyuvan la solicitud del ente investigador.

10.4. La Defensa:

Señala que, conforme a la Ley de Justicia y Paz (Leyes 975 de 2005, 1592 de 2012 y Decreto 3011 de 2013) y bajo el enfoque de justicia restaurativa, la libertad otorgada a los postulados no implica restricciones excepcionales de movilidad dentro del territorio nacional. En consecuencia, la libertad a prueba no limita el derecho a la locomoción ni obliga a mecanismos sustitutivos o subrogados penales.

Alega que, aplicado al caso de Salvatore Mancuso Gómez, **el fallo debe reconocer expresamente su derecho a fijar residencia y movilizarse libremente en cualquier ciudad o departamento del país**, destacando que cumplió plenamente con las exigencias del proceso de justicia y paz: más de ocho años privado de libertad, aportes a la verdad, reparación, reintegración y ausencia de delitos posteriores a la desmovilización, lo que justifica la concesión de su libertad a prueba.

En ese mismo orden **solicita que la sentencia deje explícito que el postulado ha cumplido de manera satisfactoria con los requisitos legales para acceder a la**

pena alternativa, según los informes de la Fiscalía de Persecución de Bienes (entrega de bienes), la Fiscalía de Justicia Transicional (verdad y antecedentes) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) **y, al no existir denuncias, testimonios o informes que evidencien vulneraciones de derechos o revictimización de su parte en el territorio nacional, no hay fundamento para imponer restricciones a su libre movilidad o residencia en cualquier ciudad o departamento del país**.

Concluye que la prohibición de que el postulado fije su domicilio en el lugar donde reside su familia y tiene arraigo social y laboral resulta excesiva, desproporcionada e inconstitucional, pues vulnera derechos fundamentales como la libertad de locomoción, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la familia. Además, carece de sentido justificar dicha restricción en la protección de las víctimas, ya que estas se encuentran dispersas en todo el país y, en todo caso, Mancuso está permanentemente vigilado por el Estado y tiene prohibido reunirse con víctimas sin autorización de la justicia transicional, lo que ya asegura su protección y evita la revictimización.

Finalmente realizó las siguientes solicitudes:

1. **Elegibilidad**: Declarar cumplidos los requisitos de elegibilidad establecidos en la Ley 975 de 2005, conforme a las verificaciones de la Fiscalía de Justicia Transicional.
2. **Legalización de cargos**: Legalizar los cargos formulados por la Fiscalía contra Mancuso.
3. **Pena alternativa**: Condenar a 480 meses de prisión y conceder la pena alternativa de 8 años.
4. **Acumulación de penas**: Acumular las penas impuestas en la jurisdicción ordinaria por hechos relacionados con el conflicto armado.
5. **Patrones macro-criminales**: Reconocer y declarar acreditada la existencia de patrones macro-criminales en los delitos juzgados.
6. **Reconocimiento de víctimas**: Declarar y acreditar la condición de víctimas de quienes comparecieron en el trámite y reconocer las afectaciones sufridas.
7. **Acta de compromisos**: Ratificar el compromiso suscrito en la primera acta, omitiendo la obligación de firmar una nueva.
8. **Escrito único de perdón**: Sustituir la obligación de publicar reiteradamente en medios un mensaje de arrepentimiento, por la redacción de un único escrito de perdón que acompañe el acta de compromisos, dado que las publicaciones en prensa no garantizan acceso real a las víctimas.
9. **Libertad a prueba**: Ordenar la libertad a prueba, sin restricciones de locomoción o residencia en cualquier departamento del país, y con autorización para salir de Colombia.

10.5.El Postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ.

El postulado alegó que el proceso penal transicional, concebido con un carácter excepcional y temporal, no debía exceder los 12 años. Sin embargo, han pasado ya 20 años sin que exista un fallo definitivo, y al ritmo actual se requerirían tres décadas adicionales para concluir los procesos. Esta dilación vulnera gravemente el principio de plazo razonable, protegido tanto en el artículo 29 de la Constitución colombiana como en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Expuso que, en un contexto transicional, el respeto a este principio resulta aún más exigente, pues de él depende el equilibrio entre verdad, justicia y reintegración social. De lo contrario, el proceso se transforma en una condena interminable, en una sanción perpetua encubierta bajo apariencia de legalidad.

Señaló además que, bajo la figura de libertad a prueba, se han impuesto restricciones indefinidas de desplazamiento que no están previstas en la Ley 975 de 2005. En el caso concreto, se prohíbe al postulado regresar a Montería, su lugar de nacimiento, donde se encuentran su familia y su arraigo, así como circular libremente por ocho departamentos y varios municipios del país. Esto constituye, a su juicio, una forma de destierro indefinido, prolongada más allá de la pena alternativa ya cumplida.

Sostuvo que supeditar el fin de estas restricciones a la conclusión del proceso de Justicia y Paz dentro de 30 años convierte la llamada “libertad” en una cárcel sin rejas, que perpetúa el estigma y la exclusión social, en abierta contradicción con los límites legales y el ordenamiento constitucional, vulnerando además los derechos fundamentales de la dignidad humana, la prohibición de penas perpetuas y el destierro, el derecho al trabajo y el derecho fundamental a la libre circulación, entre otros.

Alegó que la restricción territorial vitalicia y la prohibición general de salir del país impuestas en su contra son inconstitucionales e inconvencionales, pues las limitaciones a la movilidad debieron durar únicamente 12 años, equivalentes a la suma de la pena máxima prevista: 8 años de privación de la libertad y 4 años de libertad a prueba. Sin embargo, tras 20 años de proceso —18 de ellos en reclusión— persiste un arraigo forzoso y un destierro indefinido, lo que en los hechos constituye una pena perpetua prohibida por la Constitución, la ley y el bloque de constitucionalidad.

Sostuvo que esta restricción prolongada equivale a una extensión encubierta de la pena, contraria a los principios nacionales e internacionales de derechos humanos. En consecuencia, **solicitó a la honorable Sala que ampare sus derechos y los de otros postulados, disponiendo el levantamiento inmediato de tales restricciones**. **Asimismo, pidió la inaplicación por inconstitucionalidad del numeral 8 del Decreto 1069 de 2015**, norma reglamentaria que sirvió de

fundamento a la Magistrada del Tribunal Superior de Bogotá para extender dichas limitaciones a la libertad a prueba, pese a que el precepto no puede prevalecer sobre la Constitución ni sobre los tratados que expresamente prohíben el destierro.

Alegó que, habiendo cumplido ya la pena alternativa, no existe justificación para presumir que su mera residencia en Montería constituya una amenaza. Señaló que su conducta en libertad condicional está ya sujeta a obligaciones de no intimidar ni reincidir, y que su sola presencia física no puede interpretarse como agresión. Recordó que miles de desmovilizados de las FARC habitan en los mismos municipios donde operaron sin que la política pública haya sido la de confinarlos fuera de sus comunidades, pues la convivencia tras el conflicto es condición esencial de cualquier proceso de paz.

Finalmente explicó que la garantía de no repetición no significa impedir que las víctimas vuelvan a ver al excombatiente, sino asegurar que no se repitan las conductas violentas. Su eventual regreso a Montería, lejos de implicar afrenta, podría ser ocasión para actos de reconocimiento, perdón y proyectos de convivencia pacífica que contribuyan a sanar heridas. La percepción subjetiva de incomodidad debe manejarse con medidas psicosociales y pedagógicas, preparando a la comunidad y creando espacios de diálogo restaurativo, y no mediante restricciones territoriales indefinidas. En ese sentido, convertir el arraigo forzoso en una sanción perpetua vulnera no solo los derechos del excombatiente, sino también los de su familia y núcleo social.

11. DE LOS INFORMES:

La Colegiatura procede a pronunciarse sobre los informes allegados por algunas entidades administrativas que, tienen a su cargo la respectiva asistencia a las víctimas directas e indirectas, en el siguiente orden:

11.1. Informe Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV-

El Representante de la UARIV, aportó el informe de reparación individual y colectiva, detalló la ruta de acceso al Programa de Reparación por vía Administrativa y Judicial, afirma que la reparación integral comprende 5 medidas, cada una de estas es implementada por las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - SNARIV. Sin embargo, resalta que no todas las víctimas acceden a todas las medidas de reparación, el acceso depende del tipo de hecho, del daño sufrido y de la voluntad de las víctimas para acceder a las mismas, teniendo en cuenta las necesidades, intereses específicos y características especiales en razón de su edad, género, orientación sexual, etnia o condición de discapacidad que presenten, a través de atención, asesoría y acompañamiento integral, adecuado, diferencial y psicosocial

orientado a la transformación del proyecto de vida y a la inversión adecuada de los recursos recibidos a título de indemnización administrativa.

Para dirigir la oferta institucional en cabeza de las entidades responsables, la Unidad remite la información a las diferentes entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas- SNARIV-, tanto a nivel nacional como territorial, para que cada una garantice la ejecución de las medidas de acuerdo con sus competencias y dentro de un término razonable, de acuerdo con cada caso particular y contando con su consentimiento y voluntad buscando contribuir a la reconstrucción y transformación del proyecto de vida afectado.

En ese orden, las víctimas son asesoradas a través de una entrevista –no es requisito- con el fin de brindarles toda la información sobre el derecho a la reparación, por cuanto cuentan con más de 9 millones de personas en el Registro Único de Víctimas y no es posible atenderlas a todas en el mismo momento, por ello se han definido unos criterios de priorización como por ejemplo (edad, discapacidad y enfermedad).

Para que una persona pueda acceder a la oferta que las entidades establecen para víctimas, es necesario que se encuentre reconocida como víctima en el Registro Único de Víctimas – RUV-, el cual es consultado por todas las entidades a fin de corroborar la calidad de víctima de la persona. Para ser incluido en el RUV, las personas deben realizar una solicitud de inscripción en el Registro, y brindar la información requerida, con cada uno de los pasos que debe seguir cada solicitante y posteriormente la entidad tienen 60 días hábiles para decidir sobre la inclusión o no en el Registro único de víctimas al solicitante y su grupo familiar.

Las personas cuya acreditación de calidad de víctima es reconocida en un fallo de Justicia y Paz, no deben adelantar la ruta antes descrita y su inclusión en el RUV se hará de manera automática una vez el fallo cobre ejecutoria y la persona sea expresamente reconocida como víctima en el proveído judicial, y en cuanto a la **Oferta Concreta para las Víctimas del Conflicto Armado** está dirigida a las personas que han sido reconocidas e incluidas en el RUV, como víctimas del conflicto armado ocurrido en Colombia.

- **Estado de víctimas presentadas por la fiscalía general de la nación en el presente incidente de reparación.**

En aras de brindar una información detallando referencias de la victimas realizando cruces con la Red Nacional de Información – RNI – y el Fondo Para la Reparación de Víctimas que permiten identificar la dinámica de cada una frente al acceso de la oferta de las instituciones que componen el SNARIV y finalmente con los datos estadísticos, la Unidad procedió en atención a la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, a señalar lo siguiente:

ESTADO ACTUAL DE ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS	BLOQUE NORTE CONTRAINSURGENCIA WAYÚU – POSTULADO JAIRO ALFONSO SAMPER CANTILLO
Total, Víctimas relacionadas en el Cuadro de la FGN	270
Víctimas Directas	180
Víctimas Indirectas	90
Víctimas con documento de identidad Correcto	202
Víctimas con documento de identidad Incorrecto	68
Víctimas Incluidas en el RUV por vía Administrativa	132
Víctimas Incluidas por vía Judicial	06
Víctimas sin Inclusión	64
Víctimas con entrega de ayudas humanitarias	61
Víctimas sin Entrega de Ayudas Humanitarias	141
Víctimas sin Acceso a la oferta Institucional	23
Víctimas con Acceso a Oferta Institucional	118
Víctimas Indemnizadas por la Vía Judicial	03
Víctimas Indemnizadas por la Vía Administrativa	53
Víctimas con inversión de recursos	10
Víctimas sin Esquema de Acompañamiento	1
Medidas de Satisfacción	05
Víctimas Intervenidas con Apoyo Emocional	06

En el presente informe encontraron un número de SESENTA Y OCHO (68) que cuentan con el número de identificación errado, por tal razón con estas usuarias no se pudo realizar la correspondiente caracterización que diera cuenta de sus accesos a la oferta institucional.

Con relación a los **COMPONENTE DE BIENES DEL BLOQUE NORTE** que se encuentran administrados por el FONDO PARA LA REPARACIÓN DE VÍCTIMAS, presentaron un consolidado de Bienes Entregados al Fondo Para la Reparación de Víctimas por el Bloque Norte.

11.2. Informe Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas o también llamada Unidad de Restitución de Tierras URT

La abogada del Grupo de Defensa Judicial de la Dirección Jurídica de la URT, en aras de brindar acompañamiento y garantizar a las víctimas la satisfacción de sus derechos de acuerdo con lo previsto en la Ley 1448 de 2011 y en la normativa de Justicia y Paz, pone en conocimiento a la Sala de Conocimiento de este Tribunal

Superior, la información conforme a lo establecido en el parágrafo 1º del Art.2.2.5.1.2.2.15 del Decreto 1069 de 2015.[46]

Y, atendiendo a la misionalidad garante de los derechos de la población víctima del abandono forzado y el despojo, relaciona el objetivo del informe que, consiste en proporcionar un panorama claro del marco normativo establecido en la Ley 1448 de 2011, que regula la restitución de tierras y otros derechos de las víctimas del conflicto armado.

El informe detalla el procedimiento de restitución, y protección de derechos de terceros que se divide en una fase administrativa a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras y otra judicial, llevada a cabo por Jueces Especializados, quienes son, en últimas, los que declaran o no la titularidad del derecho. Se tiene en cuenta que la Unidad, se encarga de la inscripción de predios en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzadamente, un paso crucial para acceder a la fase judicial.

De esta manera, también explicó los trámites administrativos que la Unidad lleva a cabo, los cuales se rigen por principios de gradualidad y progresividad de la restitución y la aplicación de las herramientas de focalización no son arbitrarias; por el contrario, atienden a una necesidad evidente de que dicha medida se desarrolle de manera ordenada y sostenible, en favor de las víctimas, atendiendo a los tres (3) criterios técnicos y objetivos previstos por el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, es decir, densidad histórica del despojo, situación de seguridad, y condiciones para el retorno . Se destaca la importancia del Registro Único de Predios y Territorios Abandonados como una medida de protección para los bienes de los damnificados de desplazamiento.

Frente a los trámites administrativos adelantados por la Unidad, señala que una vez la Fiscalía General de la Nación envió a la Unidad la base de datos en la que se relaciona caracterización del total de víctimas que se presentaron en el Incidente de Reparación Integral de la referencia47, la Oficina de Tecnologías de la Información – en adelante OTI – de la Unidad realizó el respectivo cruce de información con el fin de identificar las solicitudes de inscripción en el RTDAF adelantadas y asociadas con el listado de víctimas enviado.

Procedió a señalar el cruce referido, resaltando que se realizó conforme a los nombres, apellidos y número de cédula de las víctimas referidas, y destacando que los referidos documentos o datos suministrados en el informen gozan de reserva legal y confidencial, de conformidad al artículo 29 de la Ley 1448 de

---

[46] ***"***(...) ***PARÁGRAFO 1.*** *(...). Si el magistrado lo considera pertinente, podrá además convocar a la audiencia a la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para efectos de que esta provea la información relacionada con el procedimiento de restitución y con los procesos concretos de restitución en el territorio pertinente y respecto de las víctimas acreditadas en el correspondiente proceso penal especial de justicia y paz, a los que haya lugar (...)." Subrayas propias*

[47] *Obtenida de la matriz de víctimas referida fue remitida por la Fiscalía 10 delegada ante el Tribunal - Dirección de Justicia Transicional – Atlántico. El correo electrónico es del 3 de julio de 2025 a las 15:32 horas.*

2011, artículo 2.15.1.1.3 del Decreto 1071 de 2015 y artículo 24 de la Ley 1437 de 2011.

En el cuadro se señala:

Nombre Victima	Id Restitución	Estado Tramite
Damaso Rafael Carreño Daza C.C. 18930912	1093432	Inicio de estudio formal
Dinnoris Yaneth Radillo Redondo C.C. 40938803	1124722	Análisis previo
Ana Rosa Caicedo de Acosta C.C. 26993881	111810	Desistimiento
Luis Chamorro Hernández C.C. 17830258	64.085	No inscripción
María Silvana Beltrán C.C. 1001799935 Darwin Rafael Beltrán Ortiz C.C. 1004123134	74238	En demanda
Gerardo Rafael Ortiz C.C. 12639367 Mistelva Rosa Montes C.C. 36594299	84141	Sentencia
Miguel Mendoza Guerrero C.C. 36594299	93598	Rechazo de plano

11.3. Informe de Bienes, presentado por el señor Fiscal 35 delegado ante el Tribunal – Grupo Interno de Trabajo de Persecución de Bienes:

El señor Fiscal Delegado con el propósito de garantizar el derecho a la reparación integral de las víctimas, conforme al modelo de justicia transicional previsto en la Ley 975 de 2005, presentó un informe general de bienes relacionados con el **BLOQUE NORTE,** que han sido individualizados, localizados, vinculados o reportados por los postulados de dicha estructura, así como aquellos identificados a partir de labores técnico-jurídicas adelantadas por esa dependencia; incluyendo su naturaleza jurídica, estado actual y posible destinación dentro del proceso.”

11.4. <u>Relación General de Bienes del Bloque Norte</u> y su situación jurídica.

11.4.1. Bienes inmuebles rurales con sentencia de extinción del derecho de dominio:

No	Nombre del Bien	Fecha imposición medida cautelar	Ubicación	M. I	Estimativo	Observaciones
1	LA LORENA 1 MEDIDA CAUTELAR: Impuesta por el Magistrado de Control de Garantías de la ciudad de Barranquilla el 29 de mayo de 2008 en audiencia preliminar de la cual se dejó constancia mediante Acta No. 0021286 1287 de igual fecha.	MEDIDA CAUTELAR: Impuesta por el Magistrado de Control de Garantías de la ciudad de Barranquilla el	SANTA MARTA	080-36907. El juzgado 1º civil del circuito de tierras de santa marta admitió solicitud de	$18.078.000. Estimado catastral	Estos bienes los entregó al momento de su desmovilización el entonces postulado y miembro Representante del

	Por Acta No. 35 del 22/07/2008 fue entregado a la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia de "Acción Social – Fondo para la reparación de las Víctimas".	29 de mayo de 2008 en audiencia preliminar.		restitución el 5/09/2018.		Bloque Norte, RODRIGO TOVAR PUPO, alias "Jorge 40"
2	LA LORENA 2 MEDIDA CAUTELAR: Impuesta por el Magistrado de Control de Garantías de la ciudad de Barranquilla el 29 de mayo de 2008 en audiencia preliminar de la cual se dejó constancia mediante Acta No. 0021286 1287 de igual fecha. Por Acta No. 36 del 22 de julio de 2008 fue entregado a la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia de "Acción Social – Fondo para la reparación de las Víctimas			080-39083 El juzgado 1º civil del circuito de tierras de santa marta admitió solicitud de restitución el 5/09/2018	$17.551.200. Estimado catastral	
3	LA LABRANZA MEDIDA CAUTELAR: Impuesta por el Magistrado de Control de Garantías de la ciudad de Barranquilla el 29 de mayo de 2008 en audiencia preliminar de la cual se dejó constancia mediante Acta No. 0021288 1289 de igual fecha. Por Acta No. 39 del 22 de julio de 2008 fue entregado a la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia de "Acción Social – Fondo para la reparación de las Víctimas			**080-25261 El juzgado 1º civil del circuito de tierras de santa marta admitió solicitud de restitución el 5/09/2018**	$26.374.000. Estimado catastral	
4	SANTA ELENA MEDIDA CAUTELAR: Impuesta por el Magistrado de Control de Garantías de la ciudad de Barranquilla el 29 de mayo de 2008 en audiencia preliminar de la cual se dejó constancia mediante Acta No. 0021290 1291 de igual fecha. Por Acta No. 37 del 22 de julio de 2008 fue entregado a la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia de "Acción Social – Fondo para la reparación de las Víctimas".			**080-36475 El juzgado 1º civil del circuito de tierras de santa marta admitió solicitud de restitución el 5/09/2018**	$121.500.000. Estimado catastral	
5	BELLA VISTA MEDIDA CAUTELAR: Impuesta por el Magistrado de Control de Garantías de la ciudad de Barranquilla el 29 de mayo de 2008 en audiencia preliminar de la cual se dejó constancia mediante Acta No. 0021294 1295 de igual fecha. Por Acta No. 38 del 22 de julio de 2008 fue entregado a la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia de "Acción Social – Fondo para la reparación de las Víctimas".			**080-29509 El juzgado 4º civil del circuito de tierras de santa marta admitió solicitud de restitución**	$97.733.000. Estimado catastral	
6	REMOLINO MEDIDA CAUTELAR: Impuesta por el Magistrado de Control de Garantías de la ciudad de Barranquilla el 29 de mayo de 2008 en audiencia preliminar de la cual se dejó constancia mediante Acta No. 0021296 1297 de igual fecha.			080-89840	$95.289.000. Estimado catastral	

	Por Acta No. 40 del 22 de julio de 2008 fue entregado a la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia de "Acción Social – Fondo para la reparación de las Víctimas"					

11.4.2. 18 Bienes Inmuebles Rurales Sin Sentencia De Extinción Del Derecho De Dominio.

No.	Nombre del Bien	Ubicación	Matricula Inmobiliaria	Estimativo	Observaciones
1	RANCHO ALEGRE	MONTERÍA	140-115829	$ 5.628.306.000	Trámite de incidente de oposición
2	LA ISLA	SABANAS DE SAN ANGEL	226-3612	$ 351.084.000	Sin reclamación en tierra y sin incidente de oposición en tribunal. La apoderada solicitó certificación sobre tramite de extinción. Posiblemente va a presentar incidente. Se solicitaron documentos en la of de tierras, tribunal, etc. No se ha obtenido respuesta.
3	COTOPRIX /EL MAMON	CESAR	192-13936	$ 2.673.554.600	Fue propuesta nulidad la cual fue rechazada por la corte decisión notificada 02-10-2024. Se solicitaron documentos en la of de tierras, tribunal, etc. No se ha obtenido respuesta.
4	LA PECHICHONA	MAGDALENA	226-29263	$ 3.402.000.000	
5	EL JOROPO	MAGDALENA	226-10260	$ 5.454.163.500	Se celebró tramite de oposición frente a una pequeña área del predio que tenía un poseedor y fue resuelto a su favor. Se solicitaron documentos en la of de tierras, tribunal, etc. No se ha obtenido respuesta.
6	EL PRADO	CESAR	190-7507	$ 6.271.560.800	Fue propuesta nulidad la cual fue rechazada por la corte decisión notificada 02-10-2024 Se solicitaron documentos en la of de tierras, tribunal, etc. No se ha obtenido respuesta.
7	MATUSALÉN	SAN ANGEL MAGDALENA	226-29939	$ 10.292.218.000	Sin reclamación en tierra y sin incidente de oposición en tribunal Se solicitaron documentos en la of de tierras, tribunal, etc. No se ha obtenido respuesta.
8	LA GLORIA	MONTERÍA CÓRDOBA	140-48173	$ 258.659.200	Sin reclamación en tierra y sin incidente de oposición en tribunal. Se solicitaron documentos en la of de tierras, tribunal, etc. No se ha obtenido respuesta.
9	LA MORELIA	TAMALAMEQUE CESAR	192-7588	$ 3.645.000.000	
10	LOS BARRIALES	CHIMICHAGUA CESAR	192-15626	$ 1.050.000.000	
11	LA AMÉRICA	CHIMICHAGUA	192-1868	$ 26.164.740.600	Se tramitó reclamación en tierras. Fue negada. Fue objeto de enajenación temprana a la ANI. Está en trámite (audiencia ante el magistrado de control de garantías (21/007/2025) Simultáneamente se está tramitando incidente de oposición ante el tribunal. (audiencias programadas del 9 al 13 y del 16 al 20 de febrero de 2026 para practica de pruebas)

2	LA RASQUIÑITA	CHIMICHAGUA	192-13598	$ 585.184.554	Sin reclamación en tierras. Con incidente de oposición ante el tribunal.
3	TAMARINDO	VALLEDUPAR	190-18662	$ 1.312.350.000	Luego de cautelado fue entregado al fondo para la reparación a las víctimas el día 02-10-2024. Sin reclamación en tierras. Con incidente de oposición ante el tribunal. Fecha próxima| audiencia: 20/08/2025
14	CASA BLANCA	VALLEDUPAR	190-23859	$ 626.061.000	
15	ESPERANZA	VALLEDUPAR	190-23856	$ 380.674.500	
16	LA ALQUERIA	VALLEDUPAR	190-5026	$ 6.562.780.000	
17	CAJA DE AHORRO	VALLEDUPAR	190-106625	$ 1.653.093.600	
18	VILLA DANIA	VALLEDUPAR	190-39620	$ 970.275.000	

11.4.3. 15 Bienes Inmuebles urbanos <u>sin extinción de dominio.</u>

No	Nombre del bien	Ubicación	Folio de matricula	Estimado comercial	Observaciones
1.	DEPOSITO MEDELLIN	SABANAS DE SAN ANGEL	226-33861	$67.251.000	Actualmente se está tramitando reclamación ante la URT.
2.	ALIHER-CALLE 10 N°32-450 MC 29/09/2022	GALAPA	040-179132	$6.800.000.000	INCIDENTE. En apelación en la Corte Suprema de Justicia
3.	APTO 401 CALLE 6 A 12-10 MC 30/06/2023	VALLEDUPAR	190-90792	$782.245.100	Fue propuesta nulidad la cual fue rechazada por la corte decisión notificada 02-10-2024. Se solicitaron documentos en las Oficina de tierras, Tribunal, etc. No se ha obtenido respuesta.
4.	LOTE CALLE 7 No. 8-26 MC 4/10/2023	VALLEDUPAR	190-103517	$2.736.000.000	Fue propuesta nulidad la cual fue rechazada por la corte decisión notificada 02-10-2024. Se solicitaron documentos en la Of de Tierras, Tribunal, etc. No se ha obtenido respuesta.
5.	CASA LOTE CALLE 2B # 5-27 MC 12/02/2014	PAILITAS	192-15391	$26.907.000	Mediante oficio no. 4491 del 28/08/2023, señalando que respecto este predio se presentó incidente de oposición 80287 del 2014 el cual fue desatado por el Mag. de control de garantías del Trib de Justicia y Paz sede de bquilla el día 31/01/2017, pronunciándose en forma negativa. La PARTE INCIDENTANTE presentó recurso de apelación el cual fue resuelto por la corte sup de justicia sala de casación penal 8/03/2017 confirmando en todas sus partes. Tribunal Superior de Bquilla. Se solicitaron documentos en la Of de Tierras, Tribunal, etc. No se ha obtenido respuesta.
6.	CASA LOTE MC 15/10/2020	PAILITAS	192-13988	$98.280.000	Con MEDIDAS CAUTELARES Se presentó solicitud de incidente de oposición bajo el radicado 2021-00070 de 202. Mediante auto no. 346 del 28/10/2021 el magistrado de control de garantías del tribunal de barranquilla resolvió su no viabilidad; por cuanto ese tipo de trámite debe adelantarse por conducto de abogado.

					Se solicitaron documentos en la Of de Tierras, Tribunal, etc. No se ha obtenido respuesta.
7.	CRA 14B N.1B- 45, B. 27 DE MARZO MC 18/06/2021	PAILITAS	192-14252	$120.000.000	Con MEDIDAS CAUTELARES SIN INCIDENTE A LA FECHA. Se solicitaron documentos en la Of de Tierras, Tribunal, etc. No se ha obtenido respuesta.
8.	LOTE URBANO CALLE 2 11-88 MC 30/09/2022	PAILITAS	192-23671	$ 80,000,000	Con MEDIDAS CAUTELARES. SIN INCIDENTE A LA FECHA. Se solicitaron documentos en la Of de Tierras, Tribunal, etc. No se ha obtenido respuesta.
12	PREDIO URBANO CALLE 7C #8A-47 BARRIO NOVALITO MC 30/06/2023	VALLED UPAR. CESAR	190-5120	$1,344,150,000	Con MEDIDAS CAUTELARES SIN INCIDENTE A LA FECHA. Se solicitaron documentos en la Of de Tierras, Tribunal, etc. No se ha obtenido respuesta.
13	INMUEBLE CARRERA 5 7-50 MC 30/03/2022	PAILITAS	192-9063	$150.000.000	Con MEDIDAS CAUTELARES CONFIRMADA POR LA CORTE. Se solicitaron documentos en la Of de Tierras, Tribunal, etc. No se ha obtenido respuesta.
14	CAMPO ALEGRE MC 20/09/2024	VALLED UPAR	190-101987	$ 21.236.400.000	Con MEDIDAS CAUTELARES. ENTREGADO AL FONDO EL DIA 20/11/2024. Con incidente. FECHA PROX AUD 20/08/2025
15	LOS COMPADRES MC 20/09/2024	VALLED UPAR	190-56476	$ 5.682.600.000	Con MEDIDAS CAUTELARES. ENTREGADO AL FONDO EL DIA 20/11/2024. Con incidente. FECHA PROX AUD 20/08/2025

11.4.4. 4 Bienes Inmuebles urbanos con sentencia de extinción de dominio.

No	Nombre del Bien	Ubicación	Folio de Matricula	Estimado comercial	Observaciones
1	Apartamento 2 Edificio Darly KR 18 68A 20	Soledad. Atlántico.	041-129664	$70.468.800	Trib Sup de Bogotá. Sala de Justiicia y Paz. M.P. Dr. Eduardo Castellanos Roso. **SENT 31-07-2015.** Rad. 11-001-60-00253-2007 82791 Rad. interno 1215 JOSÉ GREGORIO MANGONEZ LUGO Rad. 11-001-60-00253-2007 82716 Rad. interno 1233 OMAR ENRIQUE MARTÍNEZ OSSIAS
2	APTO 401 CL. 11A NO. 5-39 RODADERO EDIF. CALIPSO URB. VILLA MAR. MED CAUT: Impuesta por el Mag de Control de Gtías de la ciudad de Bquilla el 29/05/2008 en audiencia preliminar de la cual se dejó constancia mediante Acta No. 0021292 1293 de igual fecha. Por Acta No. 41 del 23/072008 fue entregado a la Subdirección de	SANTA MARTA	080-56322 Mediante resolución 00691 del 21 de noviembre de 2019 no fue admitida la solicitud de extinción. **Persiste la extinción decretada en la sentencia del 7 de diciembre de 2011**		Entregó el postulado y miembro Representante del Bloque Norte, Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40” Se decretó extinción de dominio mediante Sentencia del **7 de diciembre de 2011.** Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. M.P. Dra. Lester María González. Radicación: 11-001-60-00-253-20-068-13-66. Postulado: Edgar Ignacio Fierro Flores. Delito: Homicidio y otros. Procedencia: Fiscalía 03 Unidad Nacional de Justicia y Paz. Bogotá D.C., Envió a Tierras. Mientras se encontraba en apelación, la magistrada recibió oficio de la fiscalía donde se informaba que había

	Atención a Víctimas de la Violencia de "Acción Social – Fondo para la reparación de las Víctimas"				solicitud de reclamación en tierras y lo envió a dicha entidad. Pero finalmente no procedió la reclamación. Es decir quedó en firme la extinción.
3	LOTE URBANO CR. 1 No.22A-54 MED CAUT: Impuesta por el Mag de Control de Gtías de la ciudad de Bquilla el 23/06/2008 en aud preliminar de la cual se dejó constancia mediante Acta No.003 de igual fecha. Por Acta No. 45 del 23/07/2008 fue entregado a la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia de "Acción Social – Fondo para la reparación de las Víctimas.	RIOHACHA	210-43197 Mediante resolución 00605 del 28 febrero de 2018 no fue admitida la solicitud de extinción. **Persiste la extinción decretada en la sentencia del 7 de diciembre de 2011**		
4	CASA LOTE CR 12A No.35-46 MEDIDA CAUTELAR: Impuesta por el Magistrado de Control de Garantías de la ciudad de Bquilla el 23/06/2008 en audiencia preliminar de la cual se dejó constancia mediante Acta No.003. Por Acta No. 441299 del 23/07/2008 fue entregado a la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia de "Acción Social – Fondo para la reparación de las Víctimas.	RIOHACHA	210-43411 Mediante resolución 00606 del 28 de febrero de 2018 no fue admitida la solicitud de extinción. **Persiste la extinción decretada en la sentencia del 7 de diciembre de 2011**		

11.4.5. 19 Bienes Muebles Con Sentencia De Extinción De Dominio:

11.4.5.1. 2 SUMAS DE DINERO:

N	Características	Observaciones: fecha sentencia de extinción de dominio
1	$30'000.000. Suma entregada por el Postulado Miguel Ramón Posada Castillo, con medida cautelar de	Sentencia del **20/11/2014.** Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. M.P. Dra. Lester María González. RAD. 11 001 22 52 000 2014 00027

	embargo y secuestro impuesta por la Magistrada de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla el 13 de abril de 2012. TES CLASE B No. 53531.	Postulados: Salvatore Mancuso Gómez, Edgar Ignacio Fierro Flores, Jorge Iván Laverde Zapata, Uber Enrique Banquéz Martínez, José Gregorio Mangones Lugo, José Bernardo Lozada Ortiz, Leonardo Enrique Sánchez Barbosa, Sergio Manuel Córdoba Ávila, Miguel Ramón Posada Castillo, Julio Manuel Argumedo García, Oscar José Ospino Pacheco y Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez
2	$102.032.700 Suma sometida a trámite de Extinción de Dominio por la Fiscalía 21 seccional bajo el Radicado 3941.	Sentencia del **7/12/2011**. Pág. 975 y ss. Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. M.P. Dra. Lester María González. Radicación: 110016000253-200681366. Postulado: Edgar Ignacio Fierro Flores. Delito: Homicidio y otros. Procedencia: Fiscalía 03 Unidad Nacional de Justicia y Paz.

11.4.5.2. 17 VEHICULOS:

No.	Nombre del Bien y características	Estimado comercial	fecha sentencia de extinción de dominio
1	VOLQUETA Chevrolet Kodiak, placas SBV-282 modelo 199, color blanco, chasis 9GDP7HIJ7VB760524	$4.550.000 MONETIZ FONDO	Extinción decretada a través de Sentencia del **7 de diciembre de 2011**. Pág. 975 y ss. Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. M.P. Dra. Lester María González. Radicación: 110016000253-200681366. Postulado: Edgar Ignacio Fierro Flores. Delito: Homicidio y otros. Procedencia: Fiscalía 03 Unidad Nacional de Justicia y Paz.
2	MOTOCICLETA CROSS-YAMAHA MORADA, chasis 5GP005420 original.	$1.300.000 MONETIZ FONDO	
3	MOTOCICLETA SUZUKI NEGRA, chasis 9SBE11A45C125090	1.300.000	
4	MOTOCICLETA SUZUKI ROJA, chasis SF11ASC77161 original	1.300.000	
5	MOTOCICLETA SUZUKI ROJA, chasis SF11AS21669 regrabado.	1300.000	
6	CAMIONETA TOYOTA BLANCA **CGT 067** modelo 2002, chasis 8XA11UJ80Y9015294.	5.200.000	
7	CAMIONETA TOYOTA BEIGE **BLS 174** modelo 2000 Chasis 8XA11UJ80Y9015294	7.800.000	
8	MOTOCICLETA YAMAHA, verde chasis 3TX-017475 original.	1.300.000	
9	MOTOCICLETA YAMAHA, verde, chasis 3TL-01815 original.	1.300.000	
10	MOTOCICLETA YAMAHA, azul, chasis 3TL-870243 regrabado.	1.300.000	
11	CAMIONETA TOYOTA HILUX. Color verde, marrón y negro., placas QHF 507 chasis 9FH33UNG8600009561, MOTOR 3411920 original.	5.500.000	
12	Motocicleta marca Honda de placas **GDA-68A**, Modelo 2001: Identificado con número de Chasis 205836 y número de motor JD17EW205836		
13	CAMIONETA MITSUBISHI **QHE 623** identificado con las placas Nos. QHE-623, Chasis No.102867, número de motor RN1752 modelo 2005. Entregado por el desmovilizado del Bloque Norte José Gregorio Mangones. Le fue incautado al momento de su captura. medida cautelar impuesta por el Magistrado de Control de Garantías el 21 de octubre de 2008 y mediante Acta No. 070 fue entregado a Acción Social. El referido automotor se encontraba sometido al trámite de Extinción de Dominio regido por la Ley 793 de 2002 bajo el Radicado No. 5663 de la Fiscalía 24 de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, proceso que culminó con sentencia del 12 de junio de 2009 proferida por el Juzgado 3º Penal del Circuito Especializado de descongestión de Bogotá en la que determinó la procedencia de la extinción de dominio del respectivo bien y ordenó dejar el automotor en cabeza del Fondo para la Reparación de las Víctimas.	TES 53-530 $28’031.438	Extinción del **31/07/2015** Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. M.P. Dr. Eduardo Castellanos Roso. Rad. 11-001-60-00253-2007 82791. Postulado. JOSÉ GREGORIO MANGONEZ LUGO. Rad. 11-001-60-00253-2007 82716. Postulado. OMAR ENRIQUE MARTÍNEZ OSSIAS
14	Camioneta marca Toyota de placas **CTU 047** Modelo 2003: Identificado con número de Chasis 8XA11UJ8039019592 y número de motor 1FZ-0528189; figura como propietario del mismo David Mostacilla Silva.		Extinción de dominio decretada mediante Sentencia del **7/12/2011.** Pág. 975 y ss. Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. M.P. Dra. Lester María González.
15	Campero marca Mitsubishi de placas **QGZ-987** Modelo 2004: Identificado con número de Chasis 9FJ0NV13240003423 y número de motor 6G72QK7414; figura como propietario del mismo EDGAR IGNACIO FIERRO FLORES		

			Radicación: 110016000253-200681366. Postulado: Edgar Ignacio Fierro Flores. Delito: Homicidio y otros. Procedencia: Fiscalía 03 Unidad Nacional de Justicia y Paz.
16	camioneta, marca FORD -ECO SPORT, modelo 2004, color verde, placas **QHC 166**, motor No. 4 A 36276, sobre el cual, mediante resolución del 31 de marzo de 2010 se dispuso por parte del Fiscal 38 de la Unidad de Fiscalía de Extinción de Dominio que el rodante se entregara al Fondo para la Reparación de las víctimas, en aplicación de lo ordenado por el artículo 54 de la Ley 975 de 2005		Extinción de dominio decretada mediante Sentencia del **31/07/2015** Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. M.P. Dr. Eduardo Castellanos Roso. Rad. 11-001-60-00253-2007 82791 Postulado. JOSÉ GREGORIO MANGONEZ LUGO. Rad. 11-001-60-00253-2007 82716 Postulado. OMAR ENRIQUE MARTÍNEZ OSSIAS
17	vehículo blindado tipo campero marca Toyota, de placas **BOS-608**, serie No.9FH11VJ9549228, con número de motor 1769169 modelo 2004.	postulado Tovar Pupo además hizo entrega.	Extinción de dominio decretada mediante Sentencia del **20 de noviembre de 2014**. Trib de Bogotá. Sala de Justicia y paz MP Dra. Lester María González. RAD. 11 001 22 52 000 2014 00027 Postulados: Salvatore Mancuso Gómez, Edgar Ignacio Fierro Flores, Jorge Iván Laverde Zapata, Uber Enrique Banquéz Martínez, José Gregorio Mangones Lugo, José Bernardo Lozada Ortiz, Leonardo Enrique Sánchez Barbosa, Sergio Manuel Córdoba Ávila, Miguel Ramón Posada Castillo, Julio Manuel Argumedo García, Oscar José Ospino Pacheco y Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez

11.5. 0 Bienes Muebles sin extinción de dominio.

11.6. 1 Bien Mueble Restituido.

No.	Nombre del Bien	TIPO DE VEHÍCULO
1.	VEHÍCULO	CAMIONETA TOYOTA HILUX VERDE, 2006, PLACA QHF-507.

11.7. 207 Predios enviados a la Unidad de Restitución De Tierras.

Se encuentran en etapa administrativa y judicial en la Unidad de Tierras y en Tribunales pendientes de decisión.

Tienen un listado de 6 bienes inmuebles respecto de los cuales se decretó extinción de dominio mediante Sentencia del 7 de diciembre de 2011 por el Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. M.P. Dra. Lester María González. Radicación: 11-001-60-00-253-20-068-13-66. Dicha decisión fue apelada y mientras se encontraba en apelación, la magistratura recibió oficio de la fiscalía donde se informaba que había solicitud de reclamación en tierras y lo envió a dicha entidad.

1	LA LORENA 1 (Santa Marta, Magdalena) MEDIDA CAUTELAR: Impuesta por el Magistrado de Control de Garantías de la ciudad de Barranquilla el 29 de mayo de 2008 en audiencia preliminar de la cual se dejó constancia mediante Acta No. 0021286 1287 de igual fecha. Por Acta No. 35 del 22/07/2008 fue entregado a la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia de "Acción Social – Fondo para la reparación de las Víctimas".	080-36907
2	LA LORENA 2 (Santa Marta, Magdalena) MEDIDA CAUTELAR: Impuesta por el Magistrado de Control de Garantías de la ciudad de Barranquilla el 29 de mayo de 2008 en audiencia preliminar de la cual se dejó constancia mediante Acta No. 0021286 1287 de igual fecha. Por Acta No. 36 del 22 de julio de 2008 fue entregado a la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia de "Acción Social – Fondo para la reparación de las Víctimas	080-39083
3	LA LABRANZA (Santa Marta, Magdalena) MEDIDA CAUTELAR: Impuesta por el Magistrado de Control de Garantías de la ciudad de Barranquilla el 29 de mayo de 2008 en audiencia preliminar de la cual se dejó constancia mediante Acta No. 0021288 1289 de igual fecha. Por Acta No. 39 del 22 de julio de 2008 fue entregado a la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia de "Acción Social – Fondo para la reparación de las Víctimas	080-25261
4	SANTA ELENA (Santa Marta, Magdalena) MEDIDA CAUTELAR: Impuesta por el Magistrado de Control de Garantías de la ciudad de Barranquilla el 29 de mayo de 2008 en audiencia preliminar de la cual se dejó constancia mediante Acta No. 0021290 1291 de igual fecha. Por Acta No. 37 del 22 de julio de 2008 fue entregado a la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia de "Acción Social – Fondo para la reparación de las Víctimas".	080-36475
5	BELLA VISTA (Santa Marta, Magdalena) MEDIDA CAUTELAR: Impuesta por el Magistrado de Control de Garantías de la ciudad de Barranquilla el 29 de mayo de 2008 en audiencia preliminar de la cual se dejó constancia mediante Acta No. 0021294 1295 de igual fecha. Por Acta No. 38 del 22 de julio de 2008 fue entregado a la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia de "Acción Social – Fondo para la reparación de las Víctimas".	080-29509
6	REMOLINO MEDIDA CAUTELAR: Impuesta por el Magistrado de Control de Garantías de la ciudad de Barranquilla el 29 de mayo de 2008 en audiencia preliminar de la cual se dejó constancia mediante Acta No. 0021296 1297 de igual fecha. Por Acta No. 40 del 22 de julio de 2008 fue entregado a la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia de "Acción Social – Fondo para la reparación de las Víctimas"	080-89840

11.8. 2 Predios a los que no les prosperó solicitud de restitución y fueron cautelados y entregados al fondo para la reparación a víctimas.

Es el caso del predio, Id 60315 (La Morelia) ubicado en Tamalameque (Cesar) (M.I. No. 192-7588), con estimado comercial $3,645'000,000 al cual no le prosperó reclamación en el tribunal de tierras de Cartagena (Radicado N° 20001-31-21-003-2015-00141-007 (Decisión del 25/07/2018. MP. Dra. Ada Patricia Lallemand Abramuck).

Y el predio de Id 60363 (ubicado en la carrera 5 No.7-50 del municipio de Pailitas, Cesar. M.I. No. 192-9063), con estimado comercial de $150,000,000 no prosperó reclamación en la Oficina de Tierras del Casar y Guajira, donde mediante

resolución RE-04375 del 29/12/2015 decidió no incluir en el registro de bienes despojados.

Luego de reasumir la persecución por parte de la fiscalía 35 se logró la imposición de medidas cautelares en el Tribunal de Barranquilla, siendo incautados y entregados al fondo para la reparación a las víctimas.

11.9. 2 Predios destacados de los que se está pendiente de decisión por parte del tribunal de tierras de Cartagena y unidad administrativa de santa marta.

ID 107.485. **FINCA LA GRECIA**.
ID 107.484. **FINCA LA CONCEPCIÓN**.

Se encuentra al despacho de la Magistratura de Cartagena para sentencia.

El despacho 35 está comprometido en seguir rescatando bienes enviados a tierra en los que no prospere la reclamación y de ser procedente se solicitarán las respectivas medidas cautelares.

11.10. 17 Bienes Inmuebles con medidas cautelar impuestas por el Magistrado de Control de Garantía del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla esperando programación de coordinación de esta unidad para entregar al fondo:

No.	ID	ESTIMADO COMERCIAL	ESTADO
1	108765	$ 75.500.000	CON MEDIDA CAUTELARES DEL 31 -03-2025, PENDIENTE ORDEN DE LA COORDINACIÓN PARA ENTREGA AL FONDO,
2	108760	$ 73.000.000	CON MEDIDA CAUTELARES DEL 31 -03-2025, PENDIENTE ORDEN DE LA COORDINACIÓN PARA ENTREGA AL FONDO,
3	108743	$ 72.000.000	CON MEDIDA CAUTELARES DEL 31 -03-2025, PENDIENTE ORDEN DE LA COORDINACIÓN PARA ENTREGA AL FONDO,
4	108824	$ 69.500.000	CON MEDIDA CAUTELARES DEL 31 -03-2025, PENDIENTE ORDEN DE LA COORDINACIÓN PARA ENTREGA AL FONDO,
5	108825	$ 95.000.000	CON MEDIDA CAUTELARES DEL 31 -03-2025, PENDIENTE ORDEN DE LA COORDINACIÓN PARA ENTREGA AL FONDO,
6	108709	$ 296.000.000	CON MEDIDA CAUTELARES DEL 31 -03-2025, PENDIENTE ORDEN DE LA COORDINACIÓN PARA ENTREGA AL FONDO,
7	108744	$ 74.500.000	CON MEDIDA CAUTELARES DEL 31 -03-2025, PENDIENTE ORDEN DE LA COORDINACIÓN PARA ENTREGA AL FONDO,
8	108745	$ 74.000.000	CON MEDIDA CAUTELARES DEL 31 -03-2025, PENDIENTE ORDEN DE LA COORDINACIÓN PARA ENTREGA AL FONDO,
9	108768	$69.865.000	CON MEDIDA CAUTELARES DEL 24/06/2025, PENDIENTE ORDEN DE LA COORDINACIÓN PARA ENTREGA AL FONDO,
10	108769	$69.865.000	CON MEDIDA CAUTELARES DEL 24/06/2025, PENDIENTE ORDEN DE LA COORDINACIÓN PARA ENTREGA AL FONDO,
11	108770	$70.520.000	CON MEDIDA CAUTELARES DEL 24/06/2025, PENDIENTE ORDEN DE LA COORDINACIÓN PARA ENTREGA AL FONDO,
12	108771	$70.520.000	CON MEDIDA CAUTELARES DEL 24/06/2025, PENDIENTE ORDEN DE LA COORDINACIÓN PARA ENTREGA AL FONDO,
13	108772	$69.865.000	CON MEDIDA CAUTELARES DEL 24/06/2025, PENDIENTE ORDEN DE LA COORDINACIÓN PARA ENTREGA AL FONDO,

14	108773	$69.865.000	CON MEDIDA CAUTELARES DEL 24/06/2025, PENDIENTE ORDEN DE LA COORDINACIÓN PARA ENTREGA AL FONDO,
15	107774	$69.865.000	CON MEDIDA CAUTELARES DEL 24/06/2025, PENDIENTE ORDEN DE LA COORDINACIÓN PARA ENTREGA AL FONDO,
16	105342	$ 20.100.000.000	CON MEDIDA CAUTELARES DEL 15/07/2025, PENDIENTE ORDEN DE LA COORDINACIÓN PARA ENTREGA AL FONDO.
17	105353	$52.000.000	CON MEDIDA CAUTELARES DEL 16/07/2025, PENDIENTE ORDEN DE LA COORDINACIÓN PARA ENTREGA AL FONDO.

12.11.3 Predios con solicitud de medida cautelar radicada ante la Magistratura de Control de Garantía del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, pendientes de decisión.

1	108657	$ 5,200,000,000	CON DECSISIÓN SOBRE IMPSOSICÓN DE MEDIDA CAUTELARES EL 05/09/2025
2	108672	$ 4.450.000.000	CON DECSISIÓN SOBRE IMPSOSICÓN DE MEDIDA CAUTELARES EL 05/09/2025
3	108663	$ 7.883.400.000	CON DECSISIÓN SOBRE IMPSOSICÓN DE MEDIDA CAUTELARES EL 05/09/2025

13.12. 22 Predios enviados a la coordinación para realizar diligencias de alistamiento. (reserva)

	ID	PREDIO	VALOR COMERCIAL ESTIMADO	UBICACIÓN
1	108647	FINCA SAN VICENTE		CESAR
2	108789	PREDIO URBANO No. 1		CESAR
3	108790-	PREDIO URBANO No 2		CESAR
4	108791	PREDIO URBANO No 3		CESAR
5	108792	PREDIO URBANO No. 4		CESAR
6	108793	PREDIO URBANO No. 5		CESAR
7	108794	PREDIO URBANO No. 6		CESAR
8	108795	PREDIO URBANO No. 7		CESAR
9	108796	PREDIO URBANO No. 8		CESAR
10	108797	PREDIO URBANO No. 9		CESAR
11	108798-	PREDIO URBANO No. 10		CESAR
12	108799-	PREDIO URBANO No. 1		CESAR
13	108800-	PREDIO URBANO No. 2		CESAR
14	108801	PREDIO URBANO No.3		CESAR
15	108802	PREDIO URBANO No, 4		CESAR
16	108803.	PREDIO URBANO EN VALLEDUPAR		CESAR
17	108804	APTO 101 EDIFICIO BELFORD		BOGOTA
18	108805	GARAJE 19 EDIFICIO BELFORD		BOGOTA
19	108807	APARTAMENTO 703 URBANIZACIÓN MI REFUGIO		SANTA MARTA
20	108808	GARAJE 11 YY 12 URBANIZACIÓN MI REFUGIO		SANTA MARTA
21	108788	LOTE		CESAR
22	108826	LOTE		CESAR

11.13. Carga actual en investigación.

A fecha del **15 de julio del año 2025** el despacho 35, frente a esta estructura tiene una carga activa de **199** procesos en investigación.

11.14. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Actualmente siguen **6** nuevas líneas de investigación (con carácter reservado) para obtener bienes de forma oficiosa para indemnizar a las víctimas del conflicto armado no internacional.

11.15. Situación jurídica de bienes relacionados con el postulado Salvatore mancuso.

Tenemos que, en su condición de miembro representante, el señor **SALVATORE MANCUSO GOMEZ**, al momento de la desmovilización del BLOQUE CATATUMBO ofreció o hizo entrega de los siguientes bienes:

	BIEN	TOTAL DE BIENES	ESTADO
1	INMUEBLES (CASAS Y LOCALES) UBICADOS EN LA CABECERRA CORREGIMENTAL DE LA GABARRA ENTREGADOS EN LA DESMOVILIZACION.	44	RESTITUIDAS 31 ENVIADOS UAEGRTD: 13
2	BOTES, CANOAS Y MOTORES FUERA DE BORDA ENTREGADOS Y DEJADOS EN CUSTODIA EN LA ESTACION DE POLICIA DE LA GABARRA	21	RESTITUIDOS 7 ARCHIVO 14
3	SEMOVIENTES MULARES DEJADOS EN LA FINCA LA MOTILONA, PERO INVENTARIADOS.	22 ENTREGADAS PROVISIONALMENTE MEDIANTE ACTAS INDIVIDUALES – SEGÚN LAS ACTAS RECIBIDAS CONSTA 20 ENTREGAS	
4	PARQUE AUTOMOTOR ENTREGADO AL MOMENTO DE LA DESMOVILIZACION EN VEREDA CAMPO DOS.	11	RESTITUIDOS: 1 CONSULADO VENEZUELA POR HURTO: 5 A FISCALIA POR HURTO: 5
5	BIENES OFRECIDOS POR EL POSTULADO SALVATORE MANCUSO GOMEZ EN DILIGENCIA DE VERSION LIBRE – MEDELLIN 17 DE MAYO DE 2007	35 SE INCLUYÓ LENOTECA ESPERANZA I ESPERANZA II EL CORTIJO	CON SENTENCIA DE EXTINCION DE DOMINIO: 22 CON TRAMITE DE EXTINCION DE DOMINIO, PENDIENTE DECISION MAGISTRATURA: 8 ENVIADOS UAEGRTD: 4 RESTITUIDO: 1
6	DEVOLUCION PARCELAS COSTA DE ORO (**BLOQUE CORDOBA**)	72 SE CORRIGIÓ NUMERO DE PARCELAS RESTITUIDAS Se agregaron 9 parcelas CON ESTADO ENVIADO URT de la revisión con la UARIV	56 RESTITUIDA 16 ENVIADOS UAEGRTD:
7	DEVOLUCION PARCELAS EL PORRO (**BLOQUE CORDOBA**)	33 SE CORRIGIO NUMERO DE RESTITUIDAS	RESTITUIDAS: 26 ENVIADOS UAEGRTD: 7
8	DESPOJO PARCELAS EL LEVANTE UBICADAS EN LA VEREDA EL TORNO DE MONTERIA (CÓRDOBA) Y OTROS. (**BLOQUE CORDOBA**)	30	30 ENVIADOS UAEGRTD:
9	EN DILIGENCIA DE VERSION LIBRE DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2011 EL POSTULADO SALVATORE MANCUSO GOMEZ RATIFICA LA ENTREGA DE 7 BIENES QUE HICIERA SU EXESPOSA MARTA ELENA	1 Se elimina consecutivo predio La Gloria M.I 140-68442; Finca El Guayabo M.I 140-6059; Finca La Fuente M.I 140-96803; Finca Los Almendros M.I 140-96804; Finca Buenos Aires M.I 140-2614; Finca Las Delicias M.I 140-5157 y Finca	1 ENVIADO UAEGRTD:

	DEREIX MARTINEZ (BIENES AFECTOS AL RADICADO 4128 ED) (**BLOQUE CORDOBA**)	La Dicha M.I 140-41606, porque también fue entregada en Diligencia en declaración jurada de Martha Dereix duplicaba la lista de extinguidos	
10	ENTREGA DE BIENES DE PROPIEDAD REAL DE SALVATORE MANCUSO POR LA PROPIETARIA APARANTE SRA. MARTA ELENA DEREIX MARTINEZ DECLARACION JURADA DEL 13 Y 14 DE MOVIEMBRE DE 2013. (**BLOQUE CORDOBA**)	34 Se elimina consecutivo predio La Gloria M.I 140-16253 porque fue entregada en Diligencia de versión por Mancuso duplicaba la lista de extinguidos	18 ENVIADOS UAEGRTD: 12 CON SENTENCIA DE EXTINCION DE DOMINIO: (INCLUYE DEPÓSITO CUENTA CTA CORRIENTE A FAVOR DE LA UARIV) EN INVESTIGACION: 3 CON TRAMITE DE EXTINCION DE DOMINIO, PENDIENTE DECISION MAGISTRATURA: 1 DEPOSITO CUENTA CTA CORRIENTE A FAVOR DE LA UARIV
11	BIENES DENUNCIADOS POR OTROS POSTULADOS COMO DE PROPIEDAD DE SALVATORE MANCUSO GOMEZ	7	SE ACREDITO QUE LAS FINCAS RELACIONADAS NUNCA HAN SIDO DE PROPIEDAD DE SALVATORE MANCUSO GOMEZ.
12	BIENES ADQUIRIDOS POR SALVATORE MANCUSO A TRAVES DE TERCEROS (TESTAFERROS)	2	ENVIADOS UAEGRTD: 2
13	DINERO ENTREGADO EN EFECTIVO POR MARTA DEREIX Y ADOLFO ARRIETA (BLOQUE CÓRDOBA)	$ 1.454.500.000	RESULTADO DE SUMAR: $ 1.288.500.000 $166.000.000
14	LOTES ZONA RURAL DE LA GABARRA OFRECIDOS EN UNA RELACION SOLO CON COORDENADAS.	105	LABORES DE UBICACIÓN TRAMITE EN TIERRAS

Inicialmente el postulado SALVATORE MANCUSO, manifestó, que en la zona de Catatumbo no se adquirieron bienes, que los que obtuvo la organización paramilitar lo hizo porque fueron confiscados a personas sindicadas como pertenecientes o colaboradores de la guerrilla, algunos del Frente 33 de las Farc y otros del ELN y del EPL, quienes en su mayoría fueron asesinados.

También afirmó que la policía de la zona, por instrucciones de la oficina del Alto Comisionado para la Paz de esa época, recibió los predios urbanos y no los predios rurales, por estar ubicados en zona roja.

Al referirse a cada uno de los predios indagados, expresó que no conoce los bienes de Catatumbo, que solo estuvo en tres ocasiones en esa zona, que llegó en helicóptero, puntualmente a tres reuniones y que desconoce la ubicación de cada una de las fincas de la Gabarra.

Señaló, que la forma para ubicar dichos predios rurales de la Gabarra era a través de los comandantes de la zona. Con ese propósito se convocó de manera virtual

para la diligencia del 09 de mayo de 2025, a la cual se conectaron de manera virtual los señores:

- ARMANDO ALBERTO PEREZ BETANCURT *"ALIAS CAMILO". Ex – postulado.* Quien se encuentra recluido en el Batallón General Pedro Nel Ospina. Bello- Antioquia.
- ALBEIRO VALDERRAMA MACHADO. *Postulado en libertad.*
- JOSE FERNANDO LOZADA ARTUZ. *Postulado en libertad.*
- ISAIAS MONTES HERNANDEZ. *Postulado en libertad.*

Se tomó declaración juramentada a los postulados arriba señalados y se les amplio la versión libre; todos coincidieron en que las fincas que tomaron en la Gabarra pertenecían a colaboradores de la guerrilla, y alias CAMILO, quien estuvo de comandante en la zona, señaló que el listado de los 105 predios los entregó al comandante de la Policía, de esa época.

Con el apoyo del investigador de policía judicial a través de la herramienta tecnológica GOOGLE EARTH, los postulados y el declarante, se inició con la indagación sobre cada uno de los 105 predios, logrando obtener información sobre 7 de ellos, así:

1. FINCA BONITA: Ubicada en la vereda Matecoco, fue destinada a la siembra de coca, actualmente está a cargo de los Ariza. Fue despojada por ser colaboradores de la guerrilla.

2. FINCA EL POLICIA: Fue despojada por ser colaboradores de la guerrilla y se encuentra colindante con la bonita.

3. FINCA LA MOTILONA: Decomisada al frente 33 de las FARC.

4. FINCA LAS DELICIAS: No recuerdan bien y no se pudo reconocer.

5. FINCA LA CORDILLERA: Destinada a la siembra de coca y probablemente era de un colaborador de la guerrilla.

6. FINCA DE JESÚS CAMARGO: Se acuerdan de él; pero no recuerdan exactamente dónde estaba ubicada.

7. FINCA DE EDUARDO: Ubicada en la vereda Caño Salado. Eduardo era el administrador de todas las fincas.

8. FINCA MONGUI: Ubicada en la vereda Cuatro Ranchos.

No obstante, se presentaron dificultades para identificar los demás bienes, toda vez que la zona y en particular los predios por el tiempo transcurrido han cambiado. Ante esta circunstancia el postulado SALVATORE MANCUSO, junto con el declarante ARMANDO ALBERTO PEREZ y los demás postulados, sugirieron una reunión presencial utilizando un mapa con mejor escala, por ejemplo, la cartografía que maneja la fuerza aérea, que era la que ellos manejaban e incluso a través de la herramienta que se utiliza en el Grupo de Exhumaciones.

Ante la imposibilidad de realizar diligencia en terreno, por cuestiones de orden público, el postulado SALVATORE MANCUSO manifestó su apoyo para convocar a través de sus abogados a los referidos postulados y expostulado a una reunión presencial en la sede que indique la Fiscalía o en el establecimiento penitenciario donde se encuentra recluido el ex postulado ARMANDO ALBERTO PEREZ.

Para dar continuidad a dicha diligencia se está realizando su planeación y coordinación administrativa, para entre otras cosas, hacer todas las tramites que garanticen la seguridad y el desplazamiento de todos los convocados a afectos de lograr finalmente la identificación de todos y cada uno de los 105 predios rurales aludidos, apoyándose en planos cartográficos de la época con el apoyo de un investigador y de un perito topógrafo. Esta diligencia judicial está prevista para realizarse durante los días 01 al 05 de septiembre de 2025, hasta ahora en el Centro de Reclusión de Mediana Seguridad para la Fuerza Pública, ubicado en el Batallón de Ingenieros N.º 4 - GENERAL PEDRO NEL OSPINA, en el municipio de Bello-Antioquia, sitio de reclusión del expostulado ARMANDO ALBERTO PEREZ BETANCURT.

No obstante, señala que de acuerdo con lo expresado por el postulado SALVATORE MANCUSO y los demás postulados y declarante se vislumbra que estos 105 predios rurales irían a otro componente de la reparación dirigido a víctimas del desplazamiento. Es decir, a Restitución de Tierras.

Finalmente, el postulado SALVATORE MANCUSO, informó que no tiene más bienes por entregar, por cuanto ya hizo entrega de ellos, incluso los que se encontraban a nombre de testaferros.

11.16. Bienes para solicitud de extinción de dominio.

La fiscalía afirma, no contar en esta oportunidad con bienes pendientes de solicitud de extinción relacionados particularmente con el frente **FRENTE CONTRAINSURGENCIA WAYUU** del BLOQUE NORTE, que hoy nos ocupa.

Atendiendo el contenido de la sentencia del 4 de noviembre de 2020, proferida dentro del radicado No. 08-001-22-52-003-2013-83279, MP. Dr. Gustavo Aurelio

Roa Avendaño, quien señaló: "***al respecto, debe indicar la Sala que en esta providencia se abstiene de declarar la extinción del derecho de dominio deprecada por el señor fiscal de bienes, toda vez que el postulado LOBO JARAMILLO, quien ofreció el inmueble antes referenciado, no hace parte del proceso que hoy nos ocupa, así como tampoco militó en la facción paramilitar denominada "Grupo Chivolo", objeto de esta sentencia anticipada. Esto, en el entendido que la extinción de dominio prevista en la Ley de Justicia y Paz no es autónoma ni independiente de la responsabilidad penal, razón por la que el estatuto que rige este especial tramite transicional, establece que la declaratoria de extinción de dominio debe hacerse en la sentencia condenatoria contra el postulado";*** por tales motivos, en la oportunidad se solicitará extinción respecto de bienes relacionados por postulados de otros Frentes, tales como Juan Andrés Álvarez, Resistencia Motilona y José Pablo Díaz, entre otros.

El señor Fiscal delegado, realiza las siguientes observaciones finales:

i. A pesar del tiempo transcurrido persisten limitaciones para la plena recuperación de bienes debido a la informalidad de la tenencia en algunas zonas y a la insuficiente información de ubicación que, sobre muchos de ellos, ofrecieron los desmovilizados y postulados.

ii. Es por esa razón que se continúa con la verificación de bienes reportados en versiones libres, así como con el análisis de los patrimonios familiares de los postulados y sus entornos próximos.

iii. Y, mantiene abierta la línea investigativa sobre posibles bienes no reportados por los miembros del Frente Contrainsurgencia Wayuu, como parte del deber de impulso a la reparación efectiva y la verdad plena.

11.17. Informe De La Fiscal Delegada.

La delegada de la Fiscal Décima de la Dirección Nacional de Justicia Transicional, dispuso a las Unidades de Policía Judicial del Grupo Investigativo de Justicia Transicional, el traslado hacia la ciudad de Riohacha la Guajira, con el fin de realizar entrevistas a líderes de varios Resguardos de las Rancherías, Eirukuu o clanes de la comunidad Wayuu, en coordinación con la Asistente de Fiscala III[48], del Grupo de Derechos Humanos temática Étnica, destacada y autorizada para el enlace entre las Autoridades tradicionales y espirituales.

Se llevó a cabo entrevistas mediante registro videográfico, entre los cuales está el señor MIGUELITO JUSAYU, autoridad tradicional de la Ranchería ANEKICHIMANA de la comunidad Wayuu, teniendo en cuenta que el señor Miguelito no hablaba bien el español, tuvo como acompañante e interprete a la señora Sonia Patricia Jusayu Jayariry. Esta diligencia fue autorizada por el

[48] Doctora Ana Ilba Torres Torres.

señor Miguelito Jusayu para reproducirla en el marco de la audiencia de incidente de reparación a realizarse en el marco del proceso radicado.

Así mismo, lograron identificar y ubicar a la autoridad tradicional de la ranchería ISHAPA, adelantando entrevista con la señora PASTORA ROMERO PUCHAINA, autoridad tradicional de la Ranchería ISHAPA; el señor CLAUDIO JESÚS GÁMEZ EPINAYU, autoridad tradicional de la Ranchería La Solita, teniendo en cuenta que el señor Claudio no habla bien el español, fue acompañado por la señora CAROLINA GÁMEZ EPINAYU líder de esta misma comunidad y Suleyma Carolina Epinayú, como miembro de la comunidad San José; y la señora Libia González, Líder de la ranchería MOCOMANA, todos de la comunidad Wayuu.

A este informe adjuntaron copia entrevista mediante registro videográfico, al señor Miguelito Jusayu, consta de diez (10) folios.; registro videográfico, y entrevista a la señora Pastora Romero Puchaina con trece (13) folios; registro videográfico, al señor Claudio Jesús Gámez Epinayu.; y copia entrevista al señor Claudio Jesús Gámez Epinayu, consta de diez (10) folios.

Conforme con la labor de los investigadores de campo, el ente investigador visibiliza las afectaciones a esta comunidad indígena por la incursión del Frente Contrainsurgencia Wayuu de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.

12. DEL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE CARÁCTER EXCEPCIONAL A LAS VÍCTIMAS.

La aplicación de la Ley de Justicia y Paz, trae consigo un trámite de vital importancia de naturaleza incidental el cual constituye un instrumento valioso y efectivo dirigido a reparar de manera integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, igualmente, al Derecho Internacional Humanitario y demás normas internacionales de Derechos Humanos, en un esfuerzo del estado colombiano para tratar de mitigar en la medida de lo posible el dolor de estas víctimas, restablecer su dignidad, conocer y difundir la verdad de lo acontecido y propender por la no repetición de estos crímenes, bajo presupuesto de respeto y la satisfacción de los derechos de todas estas víctimas.

La reparación hace parte del derecho internacional como principio general, además de hacer parte de las normas consuetudinarias de mayor arraigo. Especialmente la Resolución 60/147 que recoge los "*Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional*

humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones"[49]-[50], se ha constituido en un instrumento relevante en materia de reparación integral de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario como lo hemos advertido, el cual ha sido acogido por *"la Corte Interamericana de Derechos Humanos*[51]*, la jurisprudencia de la Corte Constitucional*[52] *y del Consejo de Estado*[53] *"*[54]. Particularmente, ese instrumento reconoce que: *"al hacer valer el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, la comunidad internacional hace honor a su palabra respecto del sufrimiento de las víctimas, los supervivientes y las generaciones futuras y reafirma los principios jurídicos internacionales de responsabilidad, justicia y Estado de derecho"*, es por lo que, en el título VII relacionado con el *"Derecho de las víctimas a disponer de recursos"*, principio 11, insta a los Estados parte para que: brinden *"acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación"*; así mismo, de acuerdo con el título VIII sobre acceso a la justicia, principio 13, para que se procure el establecimiento de *"procedimientos para que grupos de víctimas puedan presentar demandas de reparación y obtener reparación, según proceda"*, bajo el entendido que:

> *"15. Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad está obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima.*

---

[49] Ver artículo 2.2.5.1.2.15 del decreto 1069 de 2015 y articulo 139 de la ley 1448 de 2011.
[50] ONU, E-CN_4-RES-2005-35. En: http://ap.ohchr.org/documents/S/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2005-35.doc.
[51] Cita del Consejo de Estado. Corte Interamericana de Derecho Humanos, Caso de la "Panela Blanca" (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala, Reparaciones y Costas, sentencia de 25 de mayo de 2001, Serie C No. 76, párr. 119; Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 12 de septiembre del 2005, Serie C No. 132, párr. 77; Caso Tibi vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 7 de septiembre de 2004, Serie C No. 114; Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 2 de julio de 2004, Serie C No. 107; Caso 19 comerciantes Vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C No. 109; Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010, Serie C No. 213.
[52] Cita del Consejo de Estado. Al respecto se remite a las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: sentencias C-578 de 2002; C-872 de 2003; T-025 de 2004; C-979 de 2005; T-188 de 2007; T-821 de 2007; T-458 de 2010.
[53] Cita del Consejo de Estado. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de febrero del 2011, rad. 34387, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 20 de febrero del 2008, rad. 16996, M.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 19 de octubre del 2007, rad 29.273, M.P. Enrique Gil Botero.
[54] Consejo de Estado, Sección Tercera. "Referentes para la reparación de perjuicios inmateriales", documento final aprobado mediante acta del agosto de 2014.

16. Los Estados han de procurar establecer programas nacionales de reparación y otra asistencia a las víctimas cuando el responsable de los daños sufridos no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones.

17. Los Estados ejecutarán, con respecto a las reclamaciones de las víctimas, las sentencias de sus tribunales que impongan reparaciones a las personas o entidades responsables de los daños sufridos, y procurarán ejecutar las sentencias extranjeras válidas que impongan reparaciones con arreglo al derecho interno y a las obligaciones jurídicas internacionales. Con ese fin, los Estados deben establecer en su derecho interno mecanismos eficaces para la ejecución de las sentencias que obliguen a reparar daños.

18. Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición".

Ahora bien, de acuerdo a los mandatos internacionales sobre derechos humanos, tal y como se desprende de lo descrito en precedencia, surge el deber de garantía por parte del Estado de implementar mecanismos para procurar la reparación por la vía administrativa y judicial de las víctimas que lo han sido de violaciones flagrantes de derechos humanos, más aún en tratándose de contextos transicionales en donde *"tiene la obligación de hacer que sean los victimarios quienes en primer término reparen a las víctimas, y de asumir directamente su reparación en caso de renuencia de los victimarios o insuficiencia de la reparación procurada por éstos"*[55], bajo la consideración que:

"La reparación es un derecho complejo, interrelacionado con la verdad y la justicia que tiene como fin proteger la dignidad e integridad de las víctimas y que consiste en la implementación de medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. El derecho a la reparación se considera afectado cuando no se reconoce la condición de víctima a las personas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario con ocasión del conflicto, cuando se continúan vulnerando los derechos de las víctimas, o cuando estas son revictimizadas, cuando se desconocen, ocultan, minimizan o se justifican los crímenes cometidos, cuando la reparación no

[55] Sentencia C-753 de 2013, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo.

se ajusta al daño sufrido o es manifiestamente desproporcionada, o cuando se reduce o niega la posibilidad de las víctimas de sanarse de las heridas físicas y emocionales del conflicto. Con respecto al componente específico de la indemnización administrativa, este se considera afectado cuando no es reconocido, o cuando su valor no se corresponde absolutamente con el daño moral y material ocasionado a las víctimas, es decir cuando resulta desproporcionado y cuando su entrega no es oportuna. En otras palabras, la indemnización resulta afectada cuando no es suficiente, justa y adecuada, impidiendo a las víctimas restablecer su existencia en condiciones dignas y de normalidad"[56].

En consonancia con lo anterior, la máxima autoridad de la jurisdicción contenciosa administrativa, conforme a lo conceptuado por la Corte Constitucional[57] y por la Corte Suprema de Justicia[58], han indicado que el derecho a la reparación comporta para la víctima los siguientes componentes:

a. La restitución o restitutio in integrum, es el restablecimiento de las cosas a su estado normal o anterior a la violación, producto del ilícito internacional, es la forma perfecta de reparación, y que sólo en la medida en que dicha restitución no resulte accesible procede acordar otras medidas reparatorias.

b. La indemnización por los perjuicios materiales sufridos por las víctimas de un caso en particular, comprende el daño material (daño emergente, lucro cesante) y el daño inmaterial.
c. Rehabilitación, comprende la financiación de la atención médica y psicológica o psiquiátrica o de los servicios sociales, jurídicos o de otra índole.

d. Satisfacción, son medidas morales de carácter simbólico y colectivo, que comprende los perjuicios no materiales, como, por ejemplo, el reconocimiento público del Estado de su responsabilidad, actos conmemorativos, bautizos de vías públicas, monumentos, etc.

e. Garantías de no repetición, son aquellas medidas idóneas, de carácter administrativo legislativo o judicial, tendientes a que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones a su dignidad, entre las cuales cabe mencionar aquellas encaminadas a disolver los grupos armados al margen de la ley, y la derogación de leyes, entre otras [59].

En Colombia el derecho a la reparación ha adquirido un carácter integral[60], pero, además, implica: *i)* la exigencia de conocer la verdad de lo ocurrido; *ii)* que se

[56] *Ibídem.*
[57] Sentencia C-579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre otras decisiones.
[58] Sala de Casación Penal, decisión del 27 de abril de 2011, rad. 34547, M.P. María Del Rosario González De Lemos, entre otras decisiones.
[59] Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. 29273, decisión del 19 de octubre de 2007, M.P. Enrique Gil Botero.
[60] Sentencia T-130 el 14 de marzo de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

esclarezcan los delitos que afectan de manera masiva y sistemática los derechos humanos de la población; *iii)* que se investigue y sancione a los responsables de esos ilícitos; *iv)* que se procure por la reparación integral de quienes han resultado afectados. Igualmente, se ha destacado el deber de reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas, artículo 250 de la Constitución Nacional, con base en el principio de dignidad humana como base fundante del Estado social de derecho, artículo 1º superior; el deber de las autoridades de proteger a todas las personas residentes en el país en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, como finalidad esencial del Estado, artículo 2 constitucional; y la aplicación del bloque de constitucionalidad, artículo 93 de la Carta Magna, para el reconocimiento y protección de los derechos a la reparación integral y su conexión con los derechos a la verdad, la justicia y garantía de no repetición[61].

En definitiva, siendo la reparación integral un derecho fundamental para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario que comprende todas las acciones encaminadas a hacer desaparecer, en la medida de lo posible, los efectos del delito, *"sin que el referido derecho se entienda agotado en su aspecto puramente económico, sino que se extiende a diversas manifestaciones tanto materiales como simbólicas"*[62], se erige además en *"un mecanismo de justicia restaurativa, a través del cual se busca devolverle a las víctimas su dignidad y condiciones de vida, reprochando públicamente las conductas que las afectaron, por lo que, además, (…) el referido derecho se relaciona íntimamente con la verdad y la justicia, que son los otros dos componentes principales que identifican el modelo de justicia transicional acogido en la Ley 975 de 2005"*[63].

12.1. Preliminares.

A continuación, se exponen los fundamentos que la Sala ha tenido en cuenta en cuenta para la liquidación en particular de las pretensiones en la forma y términos que fueron presentadas por los señores abogados representantes de víctimas en el Incidente de Reparación Integral de carácter excepcional.

12.2. Fundamentos de la responsabilidad civil extracontractual.

Como una de las variantes de la responsabilidad civil y antagónica a la responsabilidad civil contractual, también conocida como responsabilidad delictual o aquiliana, es una fuente de las obligaciones que conmina al autor de un ilícito, que a su vez causa daño patrimonial a otra persona, a reparar al afectado. Su origen es esencialmente por el "hecho jurídico"[64].

[61] Entre otras, Sentencia C-715 de 2012 y Sentencia SU-254-13.
[62] Corte Constitucional sentencia T-702 del 13 de diciembre de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[63] Ibídem.
[64] Entiéndase por este un delito o también un ilícito civil.

De acuerdo con profesor Jorge Pantoja Bravo[65], la responsabilidad extracontractual es: *"aquella que existe cuando una persona causa, ya por sí misma, ya por medio de otra de la que responde, ya por una cosa de su propiedad o de la que se sirve, un daño a otra persona, respecto de la cual no estaba ligada por un vínculo obligatorio anterior relacionado con el daño producido. Esta área del derecho civil también se conoce como delitos y cuasidelitos civiles (fuente de las obligaciones)".*

El fundamento normativo de la responsabilidad civil extracontractual lo estableció el legislador en el código civil colombiano, desde el artículo 2341 hasta el 2360. El primero de ellos enseña:

> *Art. 2341. El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido.*

Como se puede apreciar, la consagración de la responsabilidad civil es precisa en determinar que todo aquel que produce (por comisión u omisión) un daño a otro es obligado a repararlo mediante indemnización, con independencia de la pena o las penas que le sean imponibles al autor por el delito cometido.

Según la Corte Suprema de Justicia, *"[l]a responsabilidad civil, concebida lato sensu como la obligación de reparar, resarcir o indemnizar un daño causado injustamente, encuentra venero en la eterna búsqueda de la justicia, equidad y solidaridad para restablecer el equilibrio alterado con la conculcación de la esfera jurídica protegida por la norma"*[66].

Es importante resaltar que, como su nombre lo indica, la responsabilidad civil extracontractual se genera a partir de los daños producidos por cualquier circunstancia que se origine al margen de un contrato.

Para que se forje tal responsabilidad, en lo que respecta a la derivada de la comisión de una conducta punible, se requiere:

12.3. El hecho victimizante.

En todo proceso en el que se reclame el pago de perjuicios, debe existir una acción humana voluntaria, que para el caso del derecho penal debe ser típica, antijurídica y culpable, que dé origen a un perjuicio en otra persona, bien sea porque, por ejemplo, dicha acción dañe o menoscabe la salud, la integridad o la vida de esa persona victimizada o porque afecte sus bienes o familiares.

---

[65] Pantoja Bravo, Jorge. *Derecho de daños.* Bogotá D.C.: Leyer, 2015. T. I
[66] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 24 de agosto de 2009, radicado 11001-3103-038-2001-01054-01, M.P. William Namén Vargas.

En este orden, el hecho victimizante, en términos generales: *i)* es aquella acción que realiza una persona con voluntad y con un fin determinado, que se encuadra dentro de una de las conductas tipificadas por la ley penal como delito; *ii)* el cual resulta también antijurídico, pues, además de lesionar o poner en peligro bienes jurídicos tutelados, no hay norma en el ordenamiento jurídico que respalde la acción, lo que en esta justicia especializada se infiere dada la ilicitud del comportamiento criminal, como quedó visto en acápite preliminar en donde se analizaron los cargos en concreto, del cual se derivan detrimentos (perjuicios) materiales e inmateriales en las personas que los padecieron, de manera directa o indirecta; *iii)* de igual forma, debe quedar probado en el proceso que existió un nexo de causalidad entre el hecho y el daño; y *iv)*, por último, culpable, esto es, que el sujeto activo de tal conducta haya podido actuar de otra manera pero aun así optó por trasgredir la ley penal.

La acción generadora del hecho victimizante es la piedra angular de la responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito, pues es, igualmente, eje gravitacional de la teoría del delito.

Con todo, para esta justicia penal especial es menester que tal hecho victimizante sea ejecutado por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley[67], pues es una condición *sine qua non* para que las víctimas puedan concurrir al proceso transicional.
Precisamente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha referido en el sentido de no reconocer perjuicios por un delito que no ha sido probado ni sentenciado, lo cual no obsta para que, con relación a ese delito, se haga una nueva imputación y se intente un nuevo incidente. En efecto, con relación a un caso en el cual se alegó que la primera instancia no reconoció *"daño emergente ni perjuicio moral por el desplazamiento forzado"*, que presuntamente tuvo que padecer una víctima, la Alta Corporación indicó:

> *"No hay lugar a reconocer perjuicios morales debido al desplazamiento, en tanto el caso presente fue fijado exclusivamente como homicidio, de donde deriva que, al no haberse imputado el desplazamiento ni emitido condena por el mismo, mal puede derivarse una consecuencia de este, como sería la reparación. Lo que se impone al respecto es que se acuse y condene por esa conducta y, logrado ello, se reclamen los daños respectivos"*[68].

Lo anterior, permite también a esta Sala precisar que la fijación de las pretensiones por parte de los abogados representantes de víctimas debe estar inescindiblemente vinculada a los delitos que hacen parte de los cargos; en otras palabras, si la reparación se pretende por un delito que no hizo parte de la imputación, ni de la

[67] Art. 5º, inciso primero, Ley 975 de 2005.
[68] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 24 de octubre de 2016, Rad. 46.075, M.P. José Luis Barceló Camacho.

solicitud de terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada y consecuencialmente no ha sido objeto de legalización, será despachada desfavorablemente.

12.4. El daño

Como ya se anticipó, el daño es un elemento esencial de la responsabilidad civil, que es lo que se reclama en esta oportunidad. En palabras del profesor Juan Carlos Henao, el daño es la causa de la reparación, la finalidad misma de la responsabilidad civil[69]. Se trata, en concreto, de la consecuencia que debe acompañar el hecho victimizante.

La Corte Suprema de Justicia[70], respecto del daño ha dicho:

> *"El daño, entendido en sentido icástico, o sea, la lesión, detrimento o menoscabo de un derecho, interés o, incluso, un valor tutelado por el ordenamiento jurídico es el primer elemento o presupuesto de la responsabilidad civil. En tal virtud, el artículo 1494 del Código Civil, dentro de las fuentes de la relación obligatoria, entre otras, enuncia, el "hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos" y, en consecuencia, la obligación de repararlo, parte de su existencia real u objetiva –presente o futura-, sin la cual, por elementales razones lógicas, el mencionado deber de prestación no surge".*

El daño debe ser real, concreto y específico, pues debe ser objetivamente verificable y determinable; en este sentido la Corte Constitucional ha establecido, con carácter de precedente que, "*son titulares de los derechos a la justicia, la verdad y la reparación las víctimas y perjudicados con el delito que hubiesen sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera que sea la naturaleza de éste*"[71].

En ese mismo sentido el profesor Pantoja Bravo sostiene que el daño *"tiene como característica que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida"*[72]. Para la Alta Corporación Judicial, víctima es *i)* quien ha resultado perjudicado o afectado con el delito *ii)* siempre que hubiese sufrido un daño real, concreto y específico, *iii)* no necesariamente de contenido patrimonial.

12.5. Daño individual y colectivo.

---

[69] Henao, Juan Carlos. *El daño*. Bogotá D.C. U. Externado de Colombia. 2007, p. 37.
[70] Decisión del 24 de agosto de 2009, exp. expediente 11001-3103-038-2001-01054-01, M.P. William Namén Vargas.
[71] Sentencias Corte Constitucional: C-516 de 11 de julio de 2007, C-370 de 2006, C-228 de 2002, C-578 de 2002, etc.
[72] Pantoja Bravo, ob. Cit.

La violencia no solo afecta las dimensiones subjetivas e individuales de las personas, sino que también tiene expresiones colectivas, de ahí que sea dable considerar que los individuos, familias y comunidades sean sujetos de daño y reparación[73]. Bajo esa comprensión, los daños individuales *"son aquellos causados a la víctima, a sus familiares o personas cercanas. Se refieren a las afectaciones que la violencia produce en términos materiales e inmateriales, daños a la moral, el buen nombre, al proyecto de vida, las lesiones físicas, emocionales y mentales. De este modo, "el reconocimiento del daño debe […] entender los significados subjetivos que las víctimas han atribuido a lo perdido durante la guerra"*[74]; por su parte, *"Los daños colectivos son aquellos ocasionados a comunidades, grupos poblacionales y sectores sociales que se han configurado como sujetos colectivos, es decir que comparten una identidad colectiva*[75]*. El daño entonces concierne a la forma en que la violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, impactaron su identidad y proyecto colectivo, y cómo perjudicaron la calidad de vida y el goce efectivo de los derechos civiles y políticos de la comunidad o grupo social".*

12.6. Relación de causalidad entre el hecho y el daño

Este elemento de la responsabilidad civil extracontractual hace referencia a la relación que debe existir entre el hecho cometido y el daño alegado, es decir, que debe haber una conexidad causal en el que el hecho victimizante se muestre como real generador del daño causado. De ahí que, el hecho victimizante representado en el delito perpetrado por el postulado exintegrante del otrora Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia en este caso los postulados sentenciados LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO y JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA, debe guardar consonancia con el daño inferido y, en consecuencia, con las pretensiones reparatorias que se hubiesen invocado en el Incidente de Reparación Integral a Víctimas de carácter excepcional.

12.7. Del deber general de reparación.

Sobre el particular, la máxima autoridad de la justicia ordinaria en lo penal ha precisado que:

---

[73] Centro Nacional de Memoria Histórica. Aportes teóricos y metodológicos para la valoración de los daños causados por la violencia. Bogotá: CNMH, 2014.
[74] Cita ibidem, Olga Rebolledo y Lina Rendón, "Reflexiones y aproximaciones al trabajo psicosocial con víctimas individuales y colectivas en el marco del proceso de reparación". *Revista de Estudios Sociales* 36 (2010): 40-50, consultado el 23 de febrero de 2014, http://res.uniandes.edu.co/view.php/648/view.php
[75] Ibidem, "La identidad colectiva de estos sujetos puede ser delimitada a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o puede estar determinada en razón a la cultura, el territorio y un propósito común. Otros elementos que permiten definir la identidad colectiva son: la certeza compartida de pertenencia real a una red social, organización, comunidad o grupo que pueda distinguirse en el espacio, el tiempo o mediante la enumeración de sus integrantes, toda vez que haya permanecido en el tiempo mediante procesos de enseñanza, mecanismos de aprendizaje, reglas compartidas y lazos de compromiso y confianza". Olga Rebolledo y Lina Rendón, "Reflexiones y aproximaciones al trabajo psicosocial", 44.

"de conformidad con el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, «la condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible». Idéntica disposición contiene el artículo 5º de la Ley 975 de 2005.

*De otro lado, y si bien es cierto que de acuerdo con el numeral 3º del artículo 37 de la Ley 975 de 2005, las víctimas tienen derecho a «una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del delito», también lo es que la Corte Constitucional, en sentencia C – 575 de 2006, estableció que «todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren condenados; y también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del grupo armado al cual pertenecieron», **de lo cual se sigue como conclusión clara que no resulta necesaria la condena para efectos de disponer la reparación**.*

Por su parte, el artículo 42 ibídem prevé que «cuando no se haya logrado individualizar al sujeto activo pero se compruebe el daño y el nexo causal con las actividades del Grupo Armado Ilegal Beneficiario por las disposiciones de la presente ley, el Tribunal directamente o por remisión de la Unidad de Fiscalía, ordenará la reparación a cargo del Fondo de Reparación»; norma que fue derogada por el artículo 41 de la Ley 1592 de 2012, pero que recobró vigencia con ocasión de la declaratoria de inconstitucionalidad de este último dispuesta en sentencia C – 286 de 2014, en la que expresamente se expresó su reviviscencia"[76] (negrillas fuera del texto original).

De lo anterior se colige que, conforme al artículo 42 de la Ley 975 de 2005 que recoge el deber general de reparación y de la normativa concordante antes expuesta, en el evento de no haber sido posible atribuirle responsabilidad al postulado en un determinado cargo, con la consecuencia de no haberse efectuado la legalización del mismo, pero: *i)* la víctima se encuentre debidamente identificada, *ii)* la materialidad de la conducta punible esté acreditada, y *iii)* esté probado que los victimarios del hecho punible hacían parte de la estructura paramilitar, existiendo una relación causal entre el concierto para delinquir del grupo y el daño producido, es posible disponer la reparación siempre y cuando estén dados los presupuestos para ello.

12.8. Las víctimas.

[76] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 5 de diciembre de 2018, Rad. 50236, M.P. Eugenio Fernández Carlier.

Antes de entrar a considerar y resolver lo atinente a la acreditación de la condición de víctimas indirectas y la identificación de las afectaciones sufridas por estas, resulta necesario precisar quiénes ostentan esa calidad de conformidad con la Ley 1448 de 201, modificada por la Ley 2421 de 2024, de cara a la eventual reparación judicial:

> *"Artículo 3°.* ***VÍCTIMAS.*** *Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño a sus derechos por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, incluyendo aquellas que se encuentran en el exterior, independientemente de su estatus migratorio en el país donde habita, si goza o no de medidas de protección internacional, refugio o asilo, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones a las normas internacionales de Derechos Humanos o en los eventos de delitos contra los recursos naturales y del medio ambiente, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.*
>
> *También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad o de crianza, primero civil de la víctima directa, en el momento de los hechos y, cuando a esta se le hubiere dado muerte, estuviere desaparecida, hubiese sido secuestrada o hubiese sufrido un daño como consecuencia de crímenes de lesa humanidad y graves infracciones al derecho internacional humanitario o al derecho internacional de los derechos humanos. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad.*
>
> *Los miembros de la Fuerza Pública que en cumplimiento de su deber legal sufran vulneraciones a sus derechos por infracciones al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y sus familias en los términos del presente artículo.*
>
> *Los niños, niñas o adolescentes que hayan sido reclutados ilícitamente siendo menores de edad y que se hayan desvinculado siendo menores de edad por grupos armados organizados al margen de la ley.*
>
> *De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.*
>
> *La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.*
>
> ***PARÁGRAFO 1.*** *Cuando los miembros de la fuerza pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tenga derecho de acuerdo con el régimen especial*

que le sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley. En caso de determinarse que se encuentra por fuera de la cobertura del régimen especial aplicable, tendrán derecho a todas las medidas de reparación integral contempladas en la mencionada ley, incluida la indemnización económica.

También serán reconocidos como víctimas dentro del régimen especial establecido para los miembros de la Fuerza Pública, aquellos ciudadanos que durante la prestación servicio militar obligatorio o voluntario, hayan sufrido daños con ocasión del conflicto armado, de acuerdo con lo establecido en la presente ley.

Si bien la reparación económica de las víctimas miembros de la Fuerza Pública está a cargo del régimen especial, esto no es causal para que se les niegue el acceso a los otros derechos contenidos en la presente ley y en igualdad de condiciones a todas las demás víctimas del conflicto armado.

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas, dentro de los cuatro meses siguientes a la promulgación de la presente ley, reglamentará un programa especial y diferencial que fortalezca las medidas de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas que pertenecieron o pertenecen a la Fuerza Pública, incluyendo a la población referida en el inciso precedente.

La reglamentación de que trata el inciso anterior deberá contener como mínimo la fecha de ocurrencia del hecho victimizante y la fecha de vinculación y/o desvinculación de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de determinar la cobertura del régimen especial de los miembros de la Fuerza Pública como víctimas del conflicto armado. Así mismo, se creará una mesa de trabajo con la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, el Ministerio de Defensa Nacional y la Defensoría del Pueblo para reglamentar las medidas de reparación a miembros de la fuerza pública y la policía cuando sean víctimas conforme a lo señalado en el artículo 3 de la presente ley.

Adicionalmente, en lo relacionado con hechos de homicidio, secuestro y desaparición forzada en miembros de la Fuerza Pública exentos del régimen especial y aquellos ciudadanos que se encuentren prestando o hayan prestado el servicio militar obligatorio o voluntario, sus beneficiarios tendrán derecho a recibir las ayudas y al restablecimiento del derecho por la afectación de acuerdo con lo establecido en la presente ley.

***PARÁGRAFO 2**. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, excepto quienes hubieren*

sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad.

Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o el familiar en primer grado de consanguinidad, de crianza o primero civil, de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos.

***PARÁGRAFO 3**. Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común.*

***PARÁGRAFO 4**. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1 de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, las cuales serán plurales conforme al hecho delictivo ocurrido que determinó el daño; esto como parte del conglomerado social y sin necesidad de qué sean individualizadas.*

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, creará una ruta especial para las personas acreditadas como víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como también a quienes hayan tenido ese reconocimiento por parte de la Unidad de Búsqueda de personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).

***PARÁGRAFO 5**. La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la presente ley, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de manera particular de lo establecido por el artículo tercero (3) común a los Convenios de Ginebra de 1949.*

El ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden en virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de combatir otros actores criminales, no se afectará en absoluto por las disposiciones contenidas en la presente ley.

***PARÁGRAFO 6**. Para los efectos de la presente ley, se consideran víctimas a todas las personas que sufran desplazamiento y confinamiento de manera individual o colectiva, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación aplicable.*

> ***PARÁGRAFO 7****. Para los delitos contra los recursos naturales y del medio ambiente ocurridos con ocasión del conflicto armado, serán objeto únicamente de reparación colectiva.*
>
> ***PARÁGRAFO 8****. La Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, reglamentará el reconocimiento o estatus de víctima para la familia de crianza. En todo caso la acreditación de la familia de crianza debe ser previa a la declaración del hecho ·victimizante.*

El precitado artículo 3º señala de manera clara y concreta como vemos los derroteros que permiten establecer los destinatarios de dicha ley, en la medida en que define quiénes son víctimas para efectos de esta. En efecto, dicho precepto normativo, además de consagrar la definición de víctima, establece como vimos el tipo de infracción que dará lugar a la indemnización contenida en dicha ley para quienes sean tenidos como destinatarios de la misma, y un marco temporal que fija la época a partir de la cual la comisión del hecho generador del daño en el contexto señalado da lugar al acceso preferente a las medidas de reparación administrativa.

En ese orden se tiene que, tal como lo señaló la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C-052 de 2012[77], el inciso primero de la norma en cita, consagra al daño como el factor que determina el reconocimiento de la condición de víctima, pues de la ocurrencia del mismo, en el contexto fáctico y temporal fijado por la normativa, *"depende que las personas interesadas logren ser reconocidas como víctimas y accedan a los importantes beneficios establecidos…"*; en ese sentido, resulta claro que para efectos de la Ley 1448 de 2011, modificada por la Ley 2421 de 2024, es víctima toda persona que haya sufrido un daño como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario y/o a las normas internacionales de Derechos Humanos por hechos cometidos con ocasión del conflicto armado interno después del 1º de enero de 1985.

Adicionalmente, debe precisarse que el concepto de "persona" a que alude la normativa de Justicia y Paz para establecer quién debe considerarse víctima en el contexto del conflicto armado, que excluye la consideración de persona jurídica para esos efectos, no descarta, como se precisó líneas arriba, la existencia de víctimas colectivas a quienes se les ocasiona un daño colectivo y deben ser reparadas conforme a la ley. Así, tanto la Ley 975 de 2005, en su artículo 5, modificado por la Ley 1592 de 2012, como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en su artículo 3, definen el concepto de víctima como la persona que "*individual o colectivamente haya sufrido daños directos"*, como parámetro para acreditar esta calidad dentro de los referidos sistemas transicionales.

12.8.1. Víctimas directas.

[77] M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla

Como se puede advertir del inciso primero de la norma citada en precedencia, las víctimas se pueden clasificar en dos: *i)* víctimas directas, y; *ii)* víctimas indirectas.

En lo atinente a las víctimas directas, se tiene que son las personas que han sufrido el ataque por parte de los grupos armados al margen de la ley, que tuvieron que soportar en sí mismos la injusta vulneración a sus bienes jurídicos, o sea, las personas sobre las que recayeron los delitos.

Es importante para los fines del proceso de liquidación de perjuicios que aquí se hace precisar que jurisprudencialmente solo pueden ser tenidas como víctimas las personas naturales, esto es, a los seres humanos, las personas físicas.

El código civil colombiano precisa este concepto indicando que *"[s]on personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición"*[78].

12.8.2. Víctimas indirectas.

Ahora bien, señala la Corte Constitucional en la sentencia que viene citada[79] que la noción de daño resulta aplicable no solo a los eventos en los que quien reclama resulta ser aquel sobre en el cual recayó el hecho generador del daño, sino que, además, se extiende a los casos en los que una persona se ve afectada por los hechos que recayeron de manera directa sobre otra, como resulta ser el caso de los familiares de la víctima directa, cuando se han afectado de manera jurídicamente desfavorable por el hecho generador del daño del cual resultó victimizado su familiar.

Es por eso que el inciso segundo del artículo 3º de la llamada Ley de Víctimas establece que *"también son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a este se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecido"*; y a falta de las personas que se encuentren en los grados de parentescos señalados, *"lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente".*

El análisis sistemático del inciso primero y segundo del artículo citado, permite concluir que aquellos que no hayan sufrido un daño de manera directa en términos del inciso primero, también son víctimas en la medida en que se encuentren en los grados de relación y parentesco fijados en el inciso segundo, por los hechos generadores que allí se establecen, esto es muerte y desaparición forzada, lo que no necesariamente implica que los familiares que no se encuentren en tales grados de

[78] Código civil colombiano, Art. 74.
[79] C-052 de 2012

relación y parentesco no puedan ser reconocidos como víctimas, puesto que lo serían en la medida en que prueben una afectación directa sufrida por el hecho del que resultó afectado su familiar, caso en el cual, el reconocimiento de la condición de víctima se da bajo los presupuestos señalados en el inciso primero.

12.8.3. Acreditación de la calidad de víctima.

Para la acreditación de las víctimas, la Sala tiene en cuenta los elementos materiales probatorios que ellas o sus representantes judiciales hubiesen introducido oportunamente en la etapa procesal pertinente –desarrollo de la audiencia pública y oral del incidente de reparación integral-, de los que sea posible inferir el daño directamente sufrido, mismo que debe estar relacionado necesariamente, como ya se ha indicado, con alguno de los delitos que hacen parte de los cargos por los cuales se va a condenar al postulado.

Las víctimas indirectas, como ya ha quedado claro en precedencia, no solo deben demostrar el daño sufrido por su familiar sino también el que, por conexidad, se ha generado en ellas, además de demostrar el parentesco entre aquella y quien reclame como su familiar. Es decir, acreditado que el hecho existió y que el autor responsable de tal conducta fue el postulado, a la víctima indirecta le compete demostrar que ella sufrió un menoscabo material o inmaterial, detrimento último que en ciertas condiciones de parentesco la ley presume.

Del mismo modo, a esa víctima indirecta le asiste la carga probatoria de demostrar, con elementos de prueba idóneos, que efectivamente ostenta el grado de parentesco que alega.

Ahora bien, especial consideración merecen las víctimas de desplazamiento forzado, respecto de quienes, conforme a los postulados de favorabilidad, buena fe y principio *pro personae*, deberán tenerse por ciertas sus afirmaciones acerca de su especial condición *"[d]e manera que, al presumirse la buena fe, la carga de la prueba se invierte, correspondiéndole a las autoridades demostrar que la persona que manifiesta tener la calidad de víctima por desplazamiento forzado no ostenta tal condición"*[80]; inclusive, en el evento en el que se esté ante un caso de duda *"se deberán tener por ciertas las afirmaciones que realicen las víctimas del conflicto armado"*[81].

12.8.4. Representación judicial de las víctimas.

Para el caso de las personas que sufrieron el daño, directo o indirecto, mientras ya eran mayores de edad, su reconocimiento sigue los parámetros generales que se deben cumplir en todo proceso judicial, es decir, acudir al proceso mediante

[80] Corte Constitucional sentencia SU599 del 11 de diciembre de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[81] Ibídem.

representación judicial adecuada a las formas legales[82], a menos que sea la misma víctima profesional del derecho y quiera asumir su propia representación.

En cuanto a la víctima que para la fecha de consumación del hecho era menor de edad, y respecto de quien su representante legal o quien asumió su cuidado, sostenimiento y atención, otorgó poder a un abogado en ejercicio para que lo representara judicialmente en el proceso de justicia y paz, se derivan dos situaciones: *i)* quienes en el trascurso del proceso y antes de la presentación de las solicitudes indemnizatorias cumplieron la mayoría de edad; y *ii)* quienes a pesar de lo largo del proceso se mantienen como menores de edad hasta la fecha de presentación del incidente de reparación integral.

En el primero de los casos ya la Sala, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia, ha sentado posición indicando que en esas circunstancias es menester que la víctima actualice el poder que su representante legal haya otorgado al profesional del derecho[83], por cuanto al adquirir una persona la mayoría de edad asume así mismo la autonomía de su voluntad lo cual implica a su vez que debe manifestar su querer frente a la jurisdicción respecto de reclamar indemnización por los perjuicios causados con el accionar delictivo de los aquí postulados.

En la segunda hipótesis no se presenta dificultad, pues siempre las víctimas menores de edad estarán representadas por un abogado, a quien previamente su representante legal o quien asumió su cuidado, sostenimiento y atención, le haya otorgado poder especial para actuar. Al respecto, es de resaltar que, tal y como lo ha dejado sentado la máxima autoridad de la justicia ordinaria, en tratándose de menores de edad víctimas, su representación legal y judicial les será reconocida si acuden al proceso de Justicia y Paz por intermedio de un familiar, inclusive, diferente a su representante legal[84].

Así entonces, la Sala en los casos que involucren a menores víctimas, privilegiará su condición y les brindará un tratamiento preferencial, en garantía de su interés superior, con base en los Convenios Internacionales ratificados por Colombia, en la Constitución Política y en la Ley de la Infancia y la Adolescencia.

12.8.5. Acreditación del parentesco de la víctima indirecta con la víctima directa.

En cuanto a este aspecto, la Magistratura, conforme a lo sostenido por la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en la decisión de segunda instancia del 24 de octubre de 2016, rad. 46.075, M.P. José Luis Barceló Camacho, a la cual se

---

[82] Al respecto el artículo 2.2.5.1.2.6.4. del Decreto 1069 del 2015 enseña: *"Poder con presentación personal. Las víctimas que deleguen su representación para los efectos del presente capítulo deberán otorgar poder especial con nota de presentación personal ante cualquier autoridad judicial".*
[83] Radicados No. 38222 de fecha 12 de diciembre de 2012, y No. 38508 de fecha 6 de junio de 2012, M. P. José Leónidas Bustos Martínez.
[84] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 10 de diciembre de 2015, rad. 46672, M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández.

ha venido aludiendo en el cuerpo de esta sentencia, ha considerado la posibilidad de acreditar el parentesco mediante elementos probatorios diversos al registro civil de nacimiento con base en el principio de libertad probatoria. Efectivamente, con relación a un caso en particular la máxima Corporación de la justicia ordinaria señaló lo siguiente:

> "(…) el Tribunal dijo no reconocer indemnización alguna a los hermanos, porque "no acreditan tal parentesco, comoquiera que no aportan copia del registro civil de nacimiento de E.L.C., único documento idóneo para demostrar tal condición".
>
> La Corte revocará tal decisión. Si bien el asunto de que se trata apunta a la regulación de daños y perjuicios propios de la legislación civil, no debe olvidarse que el procedimiento que rige el asunto se enmarca dentro de los lineamientos de la Ley 906 del 2004 y el Código de Procedimiento Penal y en estos no opera la tarifa probatoria señalada por el Tribunal. Por el contrario, rige el principio de libertad probatoria, en razón del cual el juzgador puede lograr su convencimiento con cualquier medio probatorio.
>
> En esas condiciones, si bien el documento señalado por el Tribunal surge como el más expedito para acreditar el hecho, esa convicción puede lograrse por otras vías, como las aportadas por el apoderado. Así, desde los registros civiles de nacimiento de los reclamantes y sus cédulas de ciudadanía, deriva que tienen los mismos progenitores, esto es, que son hermanos entre sí, lo cual permite inferir que, por unidad de apellidos igual lo son de E., como así, al unísono, lo declaran todos en sus pretensiones.
>
> Igual se hará respecto de L. del C.L.L., en tanto, por oposición a la afirmación del Tribunal de que no acreditó el nexo, en el incidente respectivo se allegaron los testimonios de L.M.M.L., J.R.F.C. y M.A.G. de C., quienes bajo la gravedad del juramento manifestaron que por percepción directa les constaba que desde doce años atrás aquella y el desaparecido hacían vida marital e, incluso, señalaron con nombres propios los hijos habidos dentro de tal unión.
>
> En tales versiones, la Corte no encuentra elementos de confabulación para faltar a la verdad, además de que no fueron negadas por ninguna de las partes e intervinientes.
>
> Por tanto, la decisión del Tribunal será revocada para en su lugar ordenar el reconocimiento de los daños y perjuicios en los montos siguientes, que siguen los criterios del Tribunal (…) (Destacado por la Sala)"[85].

[85] Ibídem.

Al analizar otro asunto en esa decisión señaló la Alta Corporación Judicial:

> *"La queja del recurrente apunta al no reconocimiento de daños morales a C.T.R., que el Tribunal fundamentó en que no se aportó medio de prueba idóneo que demostrara que era la hermana de aquel.*
>
> *Parece que el a quo es del criterio, que dejó expreso en otros eventos, de que en este evento se aplica una especie de tarifa probatoria, en virtud de la cual la única prueba que demuestra el nexo es el registro civil de nacimiento.*
>
> *Obrando como criterio la libertad probatoria, los elementos aportados en el incidente acreditan más allá de duda razonable que la reclamante es hermana de quien falleciera. Se aportaron declaraciones en ese sentido, así como su cédula de ciudadanía, unido a lo cual se tiene que la unidad de apellidos permite concluir en el mismo sentido.*
>
> *Por tanto, se revocará parcialmente el fallo cuestionado, para disponer que a C.T.R. le sea cancelada la suma de (…) por los daños morales sufridos a raíz del homicidio de su hermano" (Resaltas nuestras)".*

Más adelante reiteró:

> *"En contra de lo afirmado por el Tribunal, los documentos allegados acreditan el nexo familiar.*
>
> *Aparte del registro civil de nacimiento, obran documentos allegados dentro de la investigación de la Fiscalía: los hechos fueron fijados como desaparición y homicidio de aquel y desplazamiento de su familia (…) y por ellos se emitió el fallo de condena, esto es, que desde un comienzo en la narración del acontecer fáctico se demuestra que la peticionaria es familiar del occiso, lo cual se corrobora con el reporte de varios informes y documentos en donde la mujer da cuenta del suceso y se especifica su condición de pariente.*
>
> *Por los hechos así fijados se formularon cargos a los postulados, los cuales los aceptaron y así se emitió fallo de condena, en el entendido de la desaparición y homicidio de aquel y el desplazamiento que ello generó en su familia, específicamente en su hermana, de tal forma que si esto se encontró probado para poder proferir fallo, las consecuencias deben admitirse respecto de la reparación reclamada, porque si el parentesco fue suficiente para condenar, igual debe serlo para las consecuencias civiles que de allí derivan" (subrayado fuera del texto original)*[86].

[86] Ídem.

Finalmente enfatizó:

> *en el sistema procesal penal no existe la tarifa que [se] pregona respecto de que el registro civil es el único medio para probar el nexo (…)*[87].

Con base en lo antes expuesto, se itera, que en aquellos casos en los que no se hubiese allegado a la actuación el registro civil de nacimiento por cualquier factor que se alegue y que se erige como el documento con mayor aptitud probatoria para demostrar el parentesco, la Sala aprecia otros elementos demostrativos aportados debidamente y oportunamente en desarrollo del trámite incidental y que lleven al convencimiento acerca de la acreditación de dicha relación, cuando así se reclame, apelando al principio de libertad probatoria que rige en las actuaciones de carácter penal.

12.9. La reparación integral

Como lo ha precisado en varias oportunidades la Corte Constitucional, *"[e]ste derecho se apoya en el principio general según el cual el responsable de un daño o agravio debe repararlo o compensarlo. Sobre el derecho de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a obtener una adecuada reparación versan los artículos 14 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, 9 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el artículo o 75 del Estatuto de Roma*[88] *y el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos*[89]*, relacionado con el deber de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de disponer "el pago de una justa indemnización a la parte lesionada", cuando se ha establecido la violación de un derecho o libertad protegido por la Convención".*

Ese derecho a la reparación integral, tal y como quedó visto en acápite preliminar, tiene componentes particulares, tales como rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantía de no repetición[90], según corresponda al hecho victimizante.

12.9.1. Restitución.

Implica devolver a la víctima a su *statu quo ante*. El artículo 46 de la Ley 975 de 2005, al concretar el deber de restitución advierte que: *"La restitución implica la realización de los actos que propendan por la devolución a la víctima a la situación*

---

[87] Ídem.
[88] La Corte Penal Internacional "establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes"
[89] "1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada."
[90] En los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la materia es un tema pacífico. Entre otras, sentencia C-286 de 2014.

anterior a la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades".

Una manifestación de este derecho es que a las víctimas se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado, independientemente de si quien reclama tiene títulos o no. Para ello, la Ley de Víctimas no sólo busca devolver la tierra con su respectivo título de propiedad, sino también mejorar sus condiciones socioeconómicas para una vida más digna.

La restitución de tierras es una parte de la reparación integral de la Ley de Víctimas, "*por lo cual si una persona fue afectada por otro tipo de delitos podrá reclamar la indemnización, la rehabilitación, garantías de satisfacción y garantías de no repetición"*[91].

12.9.2. La indemnización.

En cumplimiento de las normas constitucionales, se resuelven en derecho las distintas solicitudes de indemnizaciones, atendiendo a lo reglado por el artículo 230 de la Constitución Política[92], en tanto que se ha descartado el criterio de equidad como fundamento base para resolver las indemnizaciones pedidas por los perjuicios derivados de los ilícitos cometidos por el postulado, por considerarse que resulta discriminatorio y que no consultaba criterios de igualdad, en contraste con la obligación prioritaria constitucional del sometimiento de los operadores judiciales a la Constitución y a la ley conforme criterios judiciales de acreditación probatoria[93].

En esa medida, la ley 975 de 2005 en su artículo 8º contempla la indemnización como una acción reparatoria consistente en *"compensar los perjuicios causados por el delito"*, que, de acuerdo a lo precisado por la máxima autoridad de la justicia ordinaria, *"los obligados a reparar los daños ocasionados con la actividad criminal son los postulados declarados penalmente responsables por cuanto el Estado sólo acude en forma subsidiaria a sufragar el "monto establecido en el reglamento correspondiente para la indemnización individual por vía administrativa", según establece el artículo 10 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia C-160 de 2016»"*[94].

12.9.3. Conceptos a indemnizar.

---

[91] Ministerio de Agricultura: https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/preguntas-frecuentes/Paginas/Restitucion-de-Tierras.aspx.
[92] Conforme al cual *"Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial."*
[93] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 27 de abril de 2011, Rad. 34547, M.P.: Dra. María del Rosario González de Lemos. Criterio reiterado decisión del 31 de agosto de 2016, rad. 47510, M.P. José Luis Barceló Camacho.
[94] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 5 de octubre de 2016, rad. 47209, M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.

Entre los conceptos a indemnizar se encuentran los perjuicios materiales y los perjuicios inmateriales. Los primeros, hacen relación a aquellos perjuicios que son tangibles u objetivamente verificables, así sea de aquellos que no existiendo se tenga la posibilidad real de que llegarían a existir. En cuanto a los inmateriales, se trata de aquellos que no son palpables en el mundo fenomenológico pero que hacen parte de la integridad personal.

12.9.4. Perjuicios inmateriales.

Este tipo de perjuicios, también conocidos como perjuicios extrapatrimoniales, están integrados por una amalgama de categorías, donde el daño moral es por excelencia el de mayor aceptación entre la comunidad académica, doctrinal y la jurisprudencial.

También dentro de esta clase de perjuicios se tienen el daño al proyecto de vida, el daño a la vida de relación o alteración de las condiciones de existencia, daño a la salud, y a la afectación de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, entre otros.

A continuación, se hace referencia a los conceptos arriba señalados, con base en las solicitudes que, en concreto, fueron presentadas por los señores representantes judiciales de víctimas que hacen parte de este proceso en desarrollo del incidente de reparación integral a las víctimas de carácter excepcional.

12.9.5. Daño moral.

Para la definición de esta clase de daño, la Sala considera de fundamental importancia referir lo expuesto por el Consejo de Estado, órgano jurisdiccional que ha decantado ampliamente el tema, en los siguientes términos[95]:

> *"Cuando se hace referencia al daño moral, se alude al generado en "el plano psíquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien". Este daño tiene existencia autónoma y se configura una vez satisfechos los criterios generales del daño: que sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado. El daño moral producto de lesiones puede configurarse tanto en la persona que sufre la lesión, a la que se conoce como víctima directa, como también en sus parientes o personas cercanas, víctimas indirectas."*

[95] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de junio de 2011, rad. 19836, M.P. Danilo Rojas Betancourt.

Con relación a ese mismo tópico, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil[96], en reiterada jurisprudencia, además, ha indicado:

> *"Con relación a la usual definición del daño moral, esta Corte ha ratificado que "está circunscrito a la lesión de la esfera sentimental y afectiva del sujeto, 'que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo' (sentencia de 13 de mayo de 2008), de ordinario explicitado material u objetivamente por el dolor, la pesadumbre, perturbación de ánimo, el sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, aflicción, sufrimiento, pena, angustia, zozobra, desolación, impotencia u otros signos expresivos", que se concretan "en el menoscabo de los sentimientos, de los afectos de la víctima y, por lo tanto, en el sufrimiento moral, en el dolor que la persona tiene que soportar por cierto evento dañoso[97]."*

Por su parte, la Sala Penal de la referida Honorable Corte Suprema de Justicia ha considerado que el daño moral tiene dos modalidades: *"el daño moral subjetivado consistente en el dolor, la tristeza, la desazón, la angustia o el temor padecidos por la víctima en su esfera interior como consecuencia de la lesión, supresión o mengua de su bien o derecho. Se trata, entonces, del sufrimiento experimentado por la víctima, el cual afecta su sensibilidad espiritual y se refleja en la dignidad del ser humano; y el daño moral objetivado, manifestado en las repercusiones económicas que tales sentimientos pueden generarle, menoscabo cuya cuantía debe ser demostrada por quien lo alega"*[98]; sin embargo, un sector doctrinario ha considerado que el único daño moral es el subjetivo, en tanto que el daño moral objetivado corresponde en verdad a un perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante, siendo que se ha entendido como la pérdida de ingresos motivada en la difícil situación anímica de la víctima[99].

Así las cosas, basta con señalar que por daño moral debe entenderse como la aflicción, el sufrimiento, el miedo, la tristeza, la angustia, la congoja, la desazón que desde el punto de vista anímico tiene una persona por un daño causado por otra[100]. Se trata de una afectación directa a la parte afectiva del ser humano[101].

12.9.6. Presunción.

[96] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. SC10297-2014, M.P. Ariel Salazar Ramírez.
[97] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, decisión del 18 de septiembre de 2009, exp. 2005-406-01, M.P. William Namén Vargas.
[98] Decisión del 27 de abril de 2011, rad. 34547, M.P. María del Rosario González de Lemos.
[99] Cooperación Técnica Alemana ProFis. "Daño y reparación judicial en el ámbito de la Ley de Justicia y Paz". También, Fernando Hinestrosa en: "Apreciación del daño moral (Aclaración de voto en la Sentencia de 25 de febrero de 1982 de la Sección 3.ª del Consejo de Estado)", en ÍD. Escritos varios, Bogotá, 1983, 722.
[100] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 12 de noviembre de 2014, rad. 43.484, M. P. María del Rosario González Muñoz.
[101] Corte Suprema de Justicia, sentencia del 4 de febrero de 2009, rad. 28085, M.P. Yesid Ramírez B.

Como lo ha dejado claro la jurisprudencia nacional, siguiendo los presupuestos contenidos en el artículo 5 inciso 2º de la Ley 975 de 2005, los perjuicios morales, que afectan a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo, es presumible en los casos de los cónyuges o compañeros permanentes y familiar en primer grado de consanguinidad o primero civil de la víctima directa cuando a esta se le hubiere dado muerte o desaparecido, requiriéndose para los demás casos la acreditación de la afectación sufrida.

La presunción del perjuicio moral no releva la demostración del parentesco, es decir, a los familiares arriba señalados les asiste la carga de demostrar el estado civil y la convivencia, según el caso[102].

En tratándose del delito de desplazamiento forzado, que constituye uno de los patrones de macrocriminalidad en esta sentencia analizado, el Consejo de Estado ha reconocido como un hecho notorio el padecimiento de un daño moral por el dolor, la angustia y la desolación por quienes son víctimas de ese flagelo, de ahí que hubiese considerado que: *"[n]o es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia o asiento de su actividad económica, abandonando todo cuanto poseen, como única alternativa para salvar sus vidas, conservar su integridad física o su libertad, sufriendo todo tipo de carencias y sin la certeza del retorno, pero sí de ver aún más menguada su precaria condición económica, social y cultural. Quienes se desplazan forzadamente experimentan, sin ninguna duda, un gran sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales, como lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional"*[103], criterio que es tenido en cuenta por la Sala al momento de valorar las pretensiones que por daño moral se expusieron en el trámite incidental.

12.9.7. Montos para indemnizar por concepto de daño moral.

La Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia[104], ha concretado los montos a indemnizar por concepto de daño moral o no patrimonial con relación a

[102] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 23 de septiembre de 2015, rad. 44595, M.P. Dr. Eugenio Fernández Carlier. También, decisión del 5 de febrero del 2020, rad. 50100, M.P. Dr. Eyder Patiño Cabrera. Última decisión en la que, sobre el particular enfáticamente indicó: *"Ahora, esta Sala también ha señalado con insistencia, con fundamento en las disposiciones reseñadas, que el daño moral se presume en relación con el cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad o primero civil de la víctima directa de los delitos de homicidio o desaparición forzada, y que los parientes que pretendan ser indemnizados en el proceso transicional de Justicia y Paz, ubicados en grados diferentes a los mencionados -hermanos, sobrinos y nietos, por ejemplo-, deben demostrar su parentesco, el perjuicio sufrido y su monto, sin que ello signifique que pierdan la condición de víctimas (CSJ SP, 6 jun. 2012, rad. 35637; CSJ SP, 23 sep. 2015, rad 44595; CSJ SP, 16 dic. 2015, rad. 45321; CSJ SP, 21 feb. 2018, rad. 49170; CSJ SP, 23 ene. 2019, rad. 48348 entre otras); postura pacífica y reiterada (…)".*

[103] Sentencia SI 00213-01 de 2006 S3, Acción de grupo adelantada por el desplazamiento causado por la toma del corregimiento La Gabarra del municipio de Tibú. Citada por la Corte Constitucional en la sentencia SU 254 del 24 de abril de 2013, M.P. Luis Eduardo Vargas Silva.

[104] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 5 de diciembre de 2018, rad. 50236, M.P, Eugenio Fernández Carlier; también, decisión del 5 de octubre de 2016, rad. 47209, M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.

los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y secuestro o detención ilegal y toma de rehenes, de la siguiente manera:

Homicidio y desaparición forzada	**Desplazamiento Forzado**	**Secuestro o detención ilegal o toma de rehenes[105].**	**Tentativa de homicidio.**
100 SMLMV para familiares en primer grado (padres, hijos, cónyuge, esposa (o) o compañera (o)) y 50 SMLMV para familiares en segundo grado (Abuelos, hermanos, nietos).	50 SMLMV para cada víctima directa sin superar 224 SMLMV por grupo familiar	30 SMLMV para víctima directa, así como para familiares en primer grado (padres, hijos, esposa (o) o compañera (o)).	30 SMLMV para la víctima directa, 15 SMLMV para familiares en primer grado (padres, hijos, esposa (o) o compañera (o)) y 5 SMLMV para familiares en segundo grado (Abuelos, hermanos, nietos).

Además, la alta Corporación, en tratándose de perjuicios morales, ha establecido los siguientes montos conforme a la naturaleza y la magnitud del daño causado por los crímenes juzgados en el trámite transicional[106]:

Grados	**Homicidio**	**Desplazamiento forzado**	**Secuestro o Detención Ilegal**
1er grado (padres, hijos, esposa/o o compañera/o)	100 SMLMV	50 SMLMV para cada víctima directa sin superar 224 SMLMV por grupo familiar	30 SMLMV para la victima directa.
2º grado (Abuelos, hermanos, nietos)	50 SMLMV		

En cuanto hace al punible de destrucción y apropiación de bienes protegidos, recogido en el artículo 154 del Código Penal, la Sala ha considerado razonable el reconocimiento de 50 SMLMV por concepto de daño moral, monto que ha sido tenido en cuenta en otra decisión para casos análogos[107].

Precisado lo anterior, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, ha reconocido que existen casos de excepción referidos a graves violaciones a los derechos humanos, en los cuales se puede otorgar una indemnización mayor a la señalada cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral sin que en tales casos el monto de la indemnización pueda superar el triple de los ya señalados[108]; de todas maneras, *"la aplicación de ese criterio – como se desprende del texto mismo de la providencia reseñada – requiere que el interesado acredite aquellas circunstancias fácticas por razón de las cuales los hechos victimizantes causaron, en el caso*

[105] Con relación al monto a indemnizar por el delito de toma de rehenes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha considerado que resulta *"equiparable (…) al que surgiría para quien resulte víctima de secuestro o detención ilegal conforme se ha explicado en CSJ SP, 27 abr. 2011, rad. 34547; CSJ SP12969-2015 y CSJ SP2045-2017".* Decisión del 3 de octubre de 2018, rad. 48579, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero.
[106] Decisión del 5 de octubre de 2016, rad. 47209, M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.
[107] Por ejemplo, decisión del 29 de agosto del 2017, rad. 08-001-22-52-002-2014-81105, M.P. José Haxel de la Pava Marulanda.
[108] Sección Tercera, *"documento final aprobado mediante acta del 28 de agosto de 2014 referentes para la reparación de perjuicios inmateriales".*

concreto, una mayor perjuicio al que, de ordinario, entrañan conductas similares"[109].

Por último, la Sala aclara que no es dable predicar varias indemnizaciones por daño moral, en tanto que esa situación podría devenir en un indeseado enriquecimiento sin justa causa. Al respecto el profesor Juan Carlos Henao, al distinguir entre formas de reparación y tipología de daños, ha precisado:

> *"Las formas de reparación se aplican a los rubros del daño, pero formas de reparación y daño no son conceptos sinónimos. Una cosa es admitir la presencia de un determinado daño, como pueden ser, para citar algunos ejemplos, el moral, el lucro cesante o el daño a la vida de relación, y otra cosa es estudiar cómo la jurisprudencia de un determinado país busca su reparación.* ***El gran debate en este punto se orienta a impedir que las diversas formas de reparación resarzan idéntico daño, y la respuesta exitosa consistirá en que cualquier clasificación de rubros del daño determine con claridad qué y cómo se repara, para no violentar la regla de la prohibición de indemnizar dos veces el mismo daño***[110]*. El tema es fácil de resolver en lo que tiene que ver con los daños pecuniarios o materiales, puesto que su medición en dinero permite que, ya sea in natura o en equivalente pecuniario, la reparación se otorgue por este medio (…)* ***El problema se presenta cuando se conjugan varios daños no pecuniarios, donde el operador jurídico habrá de tener sumo cuidado en no reparar dos veces el mismo daño****. Es decir, en lo relacionado con los daños no pecuniarios, no se trata de afirmar que cada rubro tiene una forma específica de ser reparado, porque todo dependerá del caso concreto, en el cual pueden darse varias de sus formas*[111]*."*

De ahí entonces que, se itera, sean despachadas desfavorablemente las pretensiones en una sentencia cuando versen sobre el reconocimiento de varias indemnizaciones por concepto de daño moral respecto de una misma víctima (excepto para los casos en los cuales concurra en una misma persona las calidades de víctima directa e indirecta) y de un mismo hecho, lo cual se corresponde, igualmente, con el criterio que ha venido sosteniendo el Consejo de Estado en el sentido de que *"Ningún daño o perjuicio inmaterial podrá ser indemnizado doblemente"*[112]. En otras palabras, en

---

[109] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 5 de diciembre de 2018, Rad. 50236, M.P. Eugenio Fernández Carlier.

[110] Nota del autor Sobre esta temática remite a dos obras de su autoría, complementarias a lo que aquí se escribe: "De las distintas formas de concebir la tipología de perjuicios", en *Responsabilidad civil, derecho de seguros y filosofía del derecho. Homenaje al profesor Javier Tamayo Jaramillo,* t. I, Bogotá, Diké, 2011, pp. 139-167, y *El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, cap. segundo.

[111] Henao, Juan Carlos. "Formas de Reparación en la Responsabilidad del Estado: Hacia su Unificación Sustancial en Todas las Acciones contra el Estado, Las." *Rev. Derecho Privado* 28 (2015): 277.

[112] Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Documento Final Aprobado Mediante Acta del 28 de agosto de 2014. Referentes para la Reparación de Perjuicios Inmateriales. En: http://bu.com.co/sites/default/files/documentos/consejo-de-estado-Sala-de-lo-contencioso-administrativo-seccion-tercera-documento-final-aprobado-mediante-acta-de-28-de-agosto-de-2014.pdf

criterio de la Sala, en tratándose de un hecho en el cual se hubiese logrado verificar la ocurrencia de varias conductas punibles, no es posible reconocer en favor de una misma víctima (sea directa o indirecta) varios montos indemnizatorios por cada delito, para lo cual se escogerá el mayor, diferente a lo acontecido en el caso en el que una persona ostente la doble calidad de víctima directa e indirecta (ejemplo, víctima indirecta de homicidio y directa de desplazamiento forzado), evento en el cual sí sería posible como se hace en algunos casos reconocer indemnización por concepto de daño moral por cada delito[113].

12.9.8. Perjuicios materiales o patrimoniales.

Otra variante de los perjuicios, como consecuencia de un daño, son los perjuicios materiales, es decir, aquellos que representan una merma patrimonial, bien sea porque afectan el patrimonio actual de la víctima o los perjudicados, ora porque impide que una expectativa razonable de ingreso no se materialice.

El daño material o patrimonial implica la destrucción o menoscabo de algunos derechos patrimoniales de una persona ya sea en forma directa, o de manera indirecta.

Dentro de esta clase o vertiente de perjuicios se encuentran dos categorías: daño emergente y el lucro cesante.

De acuerdo con los lineamientos expuestos por la Honorable Sala Penal de Corte Suprema de Justicia, en la decisión del 24 de octubre de 2016[114], la representación de los valores a indemnizar se hará inicialmente en pesos y teniendo en cuenta, en este caso, como fecha de liquidación el 31 de enero del 2024[115], pero también se efectuará en Salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para permitir su constante actualización.

12.9.8.1 Daño emergente.

El código civil colombiano[116] enseña que el daño emergente es *"…el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento…"*

El daño emergente entonces consiste en una pérdida patrimonial sufrida que necesariamente determina que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima como consecuencia principalísima del hecho dañoso, es decir, debe existir una relación directa de causalidad entre este y el detrimento o disminución patrimonial que se alega.

---

[113] Criterio tenido en cuenta por la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en casos de determinación de indemnización por daño moral en tratándose del concurso de conductas punibles, por ejemplo, en la decisión del 5 de octubre de 2016, rad. 47209, M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.
[114] Rad. 46.075, M.P. José Luis Barceló Camacho.
[115] Que corresponde a la fecha de liquidación de esta sentencia.
[116] Art. 1614.

En este orden, se entiende que el daño emergente lo constituyen las pérdidas efectivamente sufridas, la lesión que realmente se produce al patrimonio del perjudicado, es la pérdida efectiva de bienes que ya estaban en el patrimonio de la víctima, en otras palabras, se trata de un empobrecimiento patrimonial, algo que sale del patrimonio (sea por pérdida o detrimento)[117].

12.9.8.2. Actualización o indexación de valores.

La actualización de los valores que dicen haber perdido las víctimas y/o los perjudicados serán actualizados conforme a la fórmula de indexación y el procedimiento que ha dispuesto el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Por lo tanto, la fórmula es la siguiente:

Vr = Vh (I.P.C. actual/I.P.C. inicial)
Vr: Valor real, corresponde al valor a reintegrar o actualizado.
Vh: Valor histórico, que corresponde al monto perdido o sufragado.
I.P.C: Índice de Precios al Consumidor

El IPC inicial corresponde al del mes y año en que se adquirió el bien o servicio motivo de reclamación, mientras que el IPC final hace referencia al índice señalado para la fecha en que se liquida la sentencia.

Es importante señalar que dada la complejidad de esta clase de decisiones y que la elaboración de esta sentencia tomó varios meses, el IPC final que se ha tomado como referencia ha sido el establecido al 31 de enero del 2024, en todos los casos.

12.9.8.3. Lucro cesante.

Otra de las categorías del perjuicio material o patrimonial es el denominado lucro cesante, el cual consiste en el patrimonio que dejó de ingresar al peculio de la víctima o perjudicado.

Dice el artículo 1614 del Código Civil Colombiano: *"Entiéndase por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento."*

La doctrina ha dicho[118] que el lucro cesante está constituido por todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirán luego, con el mismo

[117] Pantoja Bravo, Ob. Cit.
[118] Pantoja Bravo, Ob. Cit.

fundamento de hecho; está representado por la cantidad que el acreedor efectivamente dejó de recibir, es decir, la ganancia dejada de obtener al no cumplirse el crédito o ventaja económica que representaba para él la obligación.

El lucro cesante hace referencia a la ganancia frustrada a todo bien económico que, si los acontecimientos hubieran seguido su curso normal, habría ingresado o lo haría en el futuro al patrimonio de la víctima. Sin embargo, vale señalar que este perjuicio corresponde a una consecuencia accesoria del hecho dañoso, por cuanto no es causado de manera directa con su ocurrencia sino que está sujeto a la condición de que se afecte la percepción de un ingreso, lo cual puede que ocurra en algunos casos, sin que ello implique que pueda predicarse categóricamente como una consecuencia necesaria.

Así entonces, los titulares de este derecho son todas aquellas víctimas y/o perjudicados que logren probar su condición de tal y la consumación del daño. Se trata de una pretensión enteramente rogada que debe quedar expresamente delimitada por la víctima, indicando los fundamentos fácticos y probatorios en que se finca la misma.

12.9.8.4. Acreditación.

En lo que tiene que ver con la acreditación de los perjuicios materiales, la legislación penal colombiana, como viene citado, establece que: *"Los daños materiales deben probarse en el proceso"*.

Si bien la normativa de justicia y paz prevé criterios de flexibilización probatoria, conforme lo ha dejado sentando en su jurisprudencia la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, debe entenderse que esa flexibilización se orienta hacia la evidencia con la que han de soportarse las afectaciones o perjuicios cuya reparación se muestre procedente, *"permitiendo la verificación del daño a partir de hechos notorios, modelos baremos, presunciones y reglas de la experiencia, sin embargo, ello de ninguna manera significa que haya desaparecido la necesidad de demostrar la condición de víctima y el menoscabo padecido con el accionar criminal"*, por manera que, tal criterio no implica ausencia de prueba[119].

Así entonces, quien pretenda su reconocimiento como víctima y el reconocimiento de una pretensión indemnizatoria, tiene la carga de aportar los elementos mínimos que demuestren su condición y los daños causados por el accionar delictivo, los cuales han de ser valorados con mayor indulgencia que en la justicia ordinaria, sin que, por ello, se itera, se elimine la obligación de presentar algún soporte.

Consideración especial merecen las víctimas del punible de desplazamiento forzado, respecto de quienes, no obstante para el reconocimiento en su favor de

[119] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 15 de noviembre de 2017, rad. 49067, M.P. Fernando León Bolaños Palacios.

lucro cesante sería necesario que hubiesen brindado información y acreditado la actividad desarrollada por cada integrante del grupo familiar, su nivel de ingresos, el interregno en el que estuvieron cesantes, la fecha de reanudación de su actividad, entre otros factores indispensables para establecer los elementos de ese daño material, lo cierto es que, a falta de esos elementos de convicción, se reconocerá en su favor el tiempo que razonablemente que debieron requerir para lograr su estabilización socioeconómica, auto sostenimiento y asentamiento equivalente a un (1) año, periodo ponderado bajo el criterio de *"justa indemnización"* y como un término lo suficientemente amplio *"para compensar, en la medida de lo posible, la pérdida sufrida"*[120], en los eventos en que se hubiese esgrimido pretensión indemnizatoria por concepto de lucro cesante por estas particulares circunstancias; bajo el entendido, además, que toda persona laboralmente activa en Colombia debe obtener un Salario mínimo legal mensual vigente, y en aquellos casos en que dicha renta sea inferior a éste, para la liquidación se deberá aplicar el Salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la sentencia[121]-[122].

Adicional a lo anterior, se tiene en cuenta para los fines de la responsabilidad civil derivada de la conducta punible los siguientes parámetros:

1. Bajo el entendido que el daño material (lucro cesante y daño emergente) debe estar probado, se verificará la existencia de los perjuicios con las pruebas incorporadas al expediente, las introducidas en desarrollo del incidente de reparación integral por las víctimas y/o sus apoderados y ante la ausencia de éstas, se tendrá en cuenta *el juramento estimatorio*, aclarando que de estas evidencias se corrió el pertinente traslado al postulado.

---

[120] Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la sentencia de indemnización compensatoria, Sentencia de 17 de agosto de 1990, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 9 (1990). Párr. 27.

[121] La Sala Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia en decisión del 13 de abril de 2013, rad. 40559, M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández, tuvo en cuenta este criterio al señalar: *"(…) la Sala acogiendo los planteamientos que vienen siendo reiterados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, frente a la actualización de la renta, es decir el valor del Salario devengado por la víctima al momento de los hechos, utilizará el valor del Salario mínimo actual, si al momento de realizar la correspondiente actualización de la renta, con la fórmula que para ello existe, el valor que se obtiene está por debajo del Salario mínimo legalmente para el año 2012; en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y de los principios de reparación integral y equidad allí contenidos (…)"*.

[122] Este criterio y el término establecido fueron tenidos en cuenta por la Sala homóloga del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en la decisión del 20 de noviembre de 2014, rad. 1100122 52000201400027, postulados Salvatore Mancuso Gómez y otros, M.P. Léster M. González R., la cual sirvió de base en el presente asunto para sustentar la terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada por la Fiscalía General de la Nación. En efecto, al respecto se indicó: *"12 meses, que será el periodo con el cual se liquidará el lucro cesante de la víctima, en tanto que la Sala, razonablemente presume que en dicho tiempo, la víctima y su núcleo familiar se han provisto de medios laborales para procurar su sustento"*.
Luego, al desatarse los recursos de apelación de esa providencia, la Sala Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia con relación al cuestionamiento efectuado por un apoderado de víctimas respecto al tiempo de 12 meses estimado por el *a quo* para el cálculo del lucro cesante en los casos de desplazamiento, porque, en su criterio, la Sala había desconocido *"que la situación de desplazado se sufre en la actualidad"*, la máxima autoridad indicó que el Tribunal *"acudió a una presunción que se muestra razonada y, desde ella, asignó un cuantía por [lucro cesante]"*, así mismo que *"el lapso reconocido por el Tribunal obedece a los lineamientos genéricos establecidos con antelación y a los patrones baremo"*. Decisión del 24 de octubre de 2016, rad. 46.075, M.P. José Luis Barceló Camacho.
Aunado a lo anterior, en pasadas oportunidades la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla ha considerado el término de 12 meses para el cálculo del lucro cesante en los casos de desplazamiento forzado, entre otras, las sentencias del 29 de agosto de 2017 rad. 08-001-22-52-002-2014-81105, y del 18 de diciembre del 2018 rad. 08-001-22-52-002-2013-80003.

Sobre el particular, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha indicado lo siguiente:[123]

> *"b) También es importante acudir al instituto del juramento estimatorio reglado en la normativa procesal civil, en aplicación del principio de integración establecido en el estatuto procesal, en concordancia con la norma que sobre complementariedad contiene el artículo 62 de la Ley 975 de 2005.*
> *(…)*
>
> *"Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. El juez, de oficio, podrá ordenar la regulación cuando considere que la estimación es notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión.*
>
> *(…) esta figura procesal se funda en el principio constitucional de la buena fe del artículo 83 Superior y busca otorgar agilidad a las actuaciones procesales permitiendo a las partes participar activamente en la solución de sus conflictos de índole pecuniario. Por ello, como se expuso ampliamente en acápites anteriores, se tendrá como prueba de la cuantía del perjuicio material, la manifestación jurada de la víctima, siempre que el material probatorio acopiado no la desvirtúe.*
>
> *(…)*
>
> *No sobra indicar que la valoración del juramento estimativo debe sujetarse a las reglas de apreciación del mismo, en virtud de las cuales, no basta con las afirmaciones del demandante, pues es menester de una parte, que las sumas se encuentren señaladas de manera razonada, y de otra, que de conformidad con la sustancialidad de las formas debe mediar un principio de acreditación, siquiera precario, de cuanto se expresa en él, sin olvidar, que corresponde en el trámite de la Ley de Justicia y Paz al postulado pronunciarse al respecto y formular las objeciones u observaciones a que haya lugar, o por el contrario, asumir una actitud pasiva, denotando con ello que se allana al pedimento en tales condiciones presentado." (Destacado por la Sala).*

Igualmente, la máxima autoridad de la justicia ordinaria, respecto al juramento estimatorio ha considerado que no es *"(…) prueba suficiente de la acreditación del daño sufrido o pueda equipararse a un elemento de convicción de naturaleza*

[123] Decisión del 27 de abril de 2011, rad. 34547, M.P. María Del Rosario González De Lemos.

sumaria, pues tal apreciación subjetiva no permite establecer la existencia y valor de bienes y/o afectaciones reclamadas"; además, que si bien *"la jurisprudencia ha llamado a la flexibilidad probatoria en este tipo de asuntos solventados bajo criterios de justicia transicional, también ha aclarado que ello no puede equipararse a total y absoluta ausencia de prueba, pues al implicar pagos considerables, que el Estado asume de manera subsidiaria, los aspectos pecuniarios que pretenden ser reconocidos deben estar acreditados con suficiencia (…)"*, por tal manera que *"el juramento estimatorio como única prueba aportada para acreditar las pérdidas de bienes muebles e inmuebles con ocasión del desplazamiento forzado no es suficiente para acceder al reconocimiento y pago de la indemnización"* (Destaca la Sala)[124].

2. De igual forma para los fines del Daño Emergente derivado de *pérdidas materiales* consistentes en muebles y enseres domésticos, aves de corral, ganado vacuno, porcino, ovino y caprino, cultivos para su comercialización y de pan coger, la Sala demanda en cuanto se trate de comercialización de animales y de productos agrícolas, soportes probatorios idóneos que muestren verosímiles tales actividades: registros de hierro vigente para la época de ocurrencia de los hechos, certificados de vacunación, documentos contables o facturas de los que se pueda inferir tales actividades, así como la posesión o tenencia proporcional de tierras para la crianza y sostenimiento de los semovientes declarados como abandonados, etc.

3. Por el contrario, cuando se trate de reconocimiento de perjuicios por daño emergente derivado de *pérdidas materiales* consistentes en muebles y enseres domésticos, aves de corral, ganado vacuno, porcino, caprino y ovino, cultivos de pan coger, que se hubieren tenido para el sostenimiento de la economía familiar básica, la Sala atenderá los testimonios aportados por las víctimas y los juramentos estimatorios, siempre que las cantidades declaradas sean razonables y no permitan suponer una actividad comercial para lo cual se tendrán en cuenta los criterios del numeral anterior.

4. Así mismo, se analizará a partir de lo declarado por las víctimas, el valor de sus bienes y de los cánones de arrendamiento en que incurrieron con ocasión del desplazamiento, para lo cual se atendrá a lo establecido en la tabla elaborada por la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal en el fallo de segunda instancia dentro del expediente 34547 Justicia y Paz, contra los postulados Edwar Cobos Téllez y Uber Enrique Banquéz Martínez, donde se señaló el valor promedio de tales elementos, a partir de modelos baremo o diferenciados, comunes a la mayoría, a fin de ajustar las declaraciones juradas, superiores a esos valores, con el único propósito de evitar abusos en la tasación de los perjuicios ocasionados y, especialmente, preservar el principio de igualdad.

[124] Decisión del 5 de febrero del 2020, rad. 50100, M.P. Dr. Eyder Patiño Cabrera.

De todas maneras, con relación a las víctimas de desplazamiento forzado, en aquellos eventos en los que se hubiere pedido indemnización por este concepto pero no se hubiese aportado algún elemento probatorio sobre los cánones de arrendamiento sufragados, se reconocerá, como ya se dijo, el valor establecido en la tabla baremo que se ilustra a continuación, hasta por un tiempo máximo de un (1) año, que es el periodo que, conforme viene advertido, razonablemente requieren las víctimas para su restablecimiento socioeconómico.

Así las cosas, el valor reconocido por la Sala a título de daño emergente se ceñirá de acuerdo con los criterios del modelo baremo fijado en la precitada sentencia. En los eventos en que proceda su reconocimiento se actualizará multiplicando la cifra correspondiente a los bienes perdidos por la constante (1.856532193) resultante de dividir el IPC del 31 de enero del 2024 (fecha de liquidación de esta sentencia) por el IPC de abril del 2011 (fecha de la sentencia que contiene el modelo baremo que se toma como referencia). Los valores indexados como ya se explicaron quedan de la siguiente forma:

CLASE DE BIEN	VALOR PROMEDIO	VALOR ACTUALIZADO
Casa bahareque	2.000.000	3.713.064.
Casa Material	4.000.000	7.426.129
Hectáreas Cultivadas	3.000.000	5.569.597
Hectáreas Preparadas	500.000	928.266
Arriendos (Mensual)	60.000	111.392
Reces (c/u)	1.000.000	1.856.532
Terneros (c/u)	400.000	742.613
Caballos (c/u)	500.000	928.266
Ganado Mular (c/u)	600.000	1.113.919
Ganado Porcino (c/u)	100.000	185.653
Ganado Asnar (c/u)	250.000	464.133
Gallinas (c/u)	5.000	9.283
Patos (c/u)	10.000	18.565
Pavos (c/u)	25.000	46.413

Además, con relación a otros bienes que no se relacionan en la tabla antes descrita pero que resultan comunes a varias de las víctimas, como son el ganado ovino (carneros y ovejos) y el caprino (cabras y chivos), se calcula su valor promedio de acuerdo con lo declarado por las víctimas y sus representantes judiciales, resultando lo siguiente:

CLASE DE BIEN	VALOR PROMEDIO DECLARADO	VALOR ACTUALIZADO
Ganado Ovino (c/u)	70.000	129.957
Ganado Caprino (c/u)	150.000	278.480

5. De todas maneras, para el reconocimiento de los bienes y valores determinados en la tabla baremo se acude a las reglas de la experiencia y a la sana crítica para establecer con razonabilidad, en los casos en que haya lugar, que, en efecto, los bienes manifestados como perdidos o abandonados a causa del hecho victimizante, pudieron estar en cabeza de la víctima o del núcleo familiar.

6. En cuanto a la perdida de maquinaria, motores, joyas, dinero en efectivo, etc., que se aleguen bajo el concepto de daño emergente, se demanda la acreditación de su propiedad.

12.9.8.5. Clases de lucro cesante.

12.9.8.5.1. Lucro cesante causado, debido o consolidado.

Esta clase de perjuicios materiales o patrimoniales hacen referencia a la ganancia que dejó de obtener el reclamante desde el momento del hecho hasta el día de liquidación de la sentencia, que, para el caso, como ya se ha dicho, se ha tomado el 31 de enero de 2024.

La fórmula para calcular este concepto será la que de antaño ha establecido la jurisprudencia contenciosa administrativa, esto es, la que se explica a continuación:

$$S = RA\ \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

S: corresponde a la indemnización debida o consolidada, es la suma resultante del período a indemnizar;
Ra: es la renta actualizada, es decir, el monto mensual actualizado;
i: es la tasa de interés puro mensual (0,004867)[125];
n: es el número de meses que comprende al periodo a indemnizar, esto es, el número de meses transcurrido entre la fecha del hecho dañino y el momento de la liquidación en la sentencia; y
1: es una constante matemática.

12.9.8.5.2. Lucro cesante futuro o anticipado

[125] La tasa de interés parte del límite legal del 6% anual de acuerdo con el artículo 2232 del Código Civil, invertido financieramente a mensuales así:
$i= (1+ip)^{n} -1$
$i= (1+0.06)^{1/12} – 1$
$i= 0.004867$

Se conoce como tal a la ganancia o incremento que por causa del hecho victimizante ya no se podrá verificar.

Ese perjuicio se calcula desde el día siguiente a la fecha de emisión de la sentencia hasta la fecha en que se extinguiría el crédito u obligación.

Señala el profesor Pantoja Bravo[126] que *"[e]xistirá daño futuro si éste aparece como una previsible prolongación o agravación de un daño actual, según las circunstancias del caso o la experiencia de la vida, o si se presenta como una razonable probabilidad objetiva, de acuerdo con el curso normal y ordinario de las cosas. Asimismo, si dichos daños pueden llegar a producirse de acuerdo con un grado de probabilidad objetiva suficiente según las circunstancias del caso, si es indudable que sucederán, o si su causa generadora ya existe aunque estos aún no se hayan producido"*.

La fórmula para calcular el perjuicio de lucro cesante futuro o anticipado es la que se describe a continuación:

$$S = RA\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$$

S: corresponde a la indemnización debida o consolidada, es la suma resultante del período a indemnizar;
Ra: es la renta actualizada, es decir, el monto mensual actualizado;
i: es la tasa de interés puro o técnico mensual (0.004867);
n: es el número de meses que transcurrirán entre la fecha de la sentencia hasta terminar el período indemnizatorio o vida probable.
1: es una constante matemática.

- **Rehabilitación**

En lo atinente a este componente de la reparación integral, se tiene que la ley 975 de 2005 se encargó de precisar el término, indicando que *"[l]a rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito*"[127].
En el artículo 47 de la misma ley advierte:

> *"La rehabilitación deberá incluir la atención médica y psicológica para las víctimas o sus parientes en primer grado de consanguinidad de*

[126] Pantoja Bravo, Ob. Cit.
[127] Ley 975 de 2005, inciso 4º del Art. 8º.

conformidad con el Presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.[128]"

Esa rehabilitación será reconocida por la Sala bajo parámetros concretos y con fundamento en experticias presentadas por los apoderados de las víctimas.

- **Satisfacción y garantías de no repetición.**

A su turno, en lo referente a la satisfacción o compensación moral, como componente de la reparación integral, la Ley de Justicia y Paz ha precisado que esta *"consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido"*[129].

Se trata entonces de acciones que buscan restablecer el honor, la dignidad, la honra, de aquellas personas que resultaron víctimas del conflicto armado; mientras tanto, las garantías de no repetición son aquellas que *"comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley"*[130]

Tanto las medidas de satisfacción como las medidas de no repetición tienen unos componentes que la misma ley prescribe de la siguiente manera[131]:

"Las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición, adoptadas por las distintas autoridades directamente comprometidas en el proceso de reconciliación nacional, deberán incluir:

*49.1 *Apartes subrayados CONDICIONALMENTE exequibles* La verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad judicial, en la medida en que no provoque más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni cree un peligro para su seguridad.*

49.2 La búsqueda de los desaparecidos o de las personas muertas y la ayuda para identificarlas y volverlas a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias. Esta tarea se encuentra principalmente a cargo de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz.

*49.3 *Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible* La decisión judicial que restablezca la dignidad, reputación y derechos de la víctima y las de sus parientes en primer grado de consanguinidad.*

[128] Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante s**entencia C**-370 **de 2006**, en el entendido que no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.
[129] Inciso 5º, ibídem.
[130] Inciso 6º, ídem.
[131] Art. 48 de la Ley 975 de 2005.

49.4 La disculpa, que incluya el reconocimiento público de los hechos y la aceptación de responsabilidades.

49.5 La aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones, todo lo cual estará a cargo de los órganos judiciales que intervengan en los procesos de qué trata la presente ley.

49.6 La Sala competente del Tribunal Superior de Distrito judicial podrá ordenar conmemoraciones, homenajes y reconocimiento a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley. Adicionalmente, la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones podrá recomendar a los órganos políticos o de gobierno de los distintos niveles, la adopción de este tipo de medidas.

49.7 La prevención de violaciones de derechos humanos.

49.8 La asistencia a cursos de capacitación en materia de derechos humanos a los responsables de las violaciones. Esta medida podrá ser impuesta a los condenados por la Sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial".

Estas medidas serán decretadas por esta Sala conforme se muestren necesarias, pertinentes y adecuadas para la integral reparación a las víctimas, siempre que los sujetos procesales hayan aportado elementos de prueba que lleven a esta Corporación a esa conclusión.

De esta manera la Sala da por expuestos los componentes de la reparación integral.

- **Cuestión final.**

Se finaliza el presente acápite indicando que las medidas de reparación que se solicitan de manera individual deben estar debidamente concretadas en cada persona y tener un soporte probatorio que le permita a la Sala establecer la necesidad, conducencia y pertinencia de la medida solicitada, pues mal podría la judicatura ordenar, por ejemplo, una medida de atención psicológica a una persona cuando un profesional de esa área no lo ha recomendado.

No obstante ello, los derechos de cada una de las personas que han sufrido los embates del conflicto armado en Colombia no dejan de tener efectividad por el hecho de que no sean reconocidos en una sentencia judicial, pues la reparación integral es de rango constitucional y, por lo tanto, todas las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas –SNARIV- siguen con

la obligación general de atender a quien solicite ayuda o acompañamiento de las mismas, previo sometimiento a los procedimientos establecidos para tal fin.

12.10. La prueba

12.10.1. Necesidad de la prueba.

Como en todo proceso judicial, la prueba es el elemento *sine qua non* para tomar la decisión, por lo tanto, ella debe estar presente y tener el poder suasorio suficiente para llevar al convencimiento del operador judicial sobre la ocurrencia del hecho alegado, la responsabilidad del actor y la consecuencia jurídica que ello conlleve.

El proceso especial de Justicia y Paz no escapa de esa exigencia, de ahí que en el artículo 23 de la Ley 975 de 2005 alude, con relación al incidente de reparación, que la *"audiencia se iniciará con la intervención de la víctima o de su representante legal o abogado de oficio, para que exprese de manera concreta la forma de reparación que pretende, e indique las pruebas que hará valer para fundamentar sus pretensiones"* (Se destaca).

Del mismo modo, la Ley 906 de 2004, que por integración se aplica al procedimiento especial de Justicia y Paz, dispone, en el Título IV, Capítulo III, Parte I, lo atinente a los fines, libertad, oportunidad, pertinencia, entre otros aspectos del régimen probatorio penal colombiano, del que se puede extraer que la prueba es la base fundamental para la toma de la decisión.

En relación con los fines de la prueba, señala el artículo 372 de la normativa procesal penal que: *"[l]as pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado, como autor o partícipe."*; mientras tanto, el artículo 381 de la misma codificación dispone: *"Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio."*

Los hechos objeto de debate y, en el caso del incidente de reparación integral, los perjuicios que sufrieron las víctimas y perjudicados, pueden ser demostrados con cualquiera de los medios establecidos por la ley *o por cualquier otro medio técnico o científico, que no viole los derechos humanos*[132], teniendo en cuenta lo advertido por la Sala en precedencia sobre el punto.

12.10.2. El dictamen pericial.

[132] Art. 373 de la Ley 906 de 2004.

El dictamen pericial, o informe pericial, es el resultado de la experticia técnica, científica o artística que una persona con expresos y profundos conocimientos en el tema ofrece al operador judicial con el fin de coadyuvar en la toma de la decisión.

En relación con el dictamen pericial la Honorable Corte Constitucional ha explicado lo siguiente:

> **"***La doctrina tradicional en materia probatoria confiere al dictamen pericial una doble condición: Es, en primer término, un instrumento para que el juez pueda comprender aspectos fácticos del asunto que, al tener carácter técnico, científico o artístico, requieren ser interpretados a través del dictamen de un experto sobre la materia de que se trate. En segundo lugar, el experticio es un medio de prueba en sí mismo considerado, puesto que permite comprobar, a través de valoraciones técnicas o científicas, hechos materia de debate en un proceso. Es por esta última razón que los ordenamientos procedimentales como el colombiano, prevén que el dictamen pericial, en su condición de prueba dentro del proceso correspondiente, debe ser sometido a la posibilidad de contradicción de las partes, mediante mecanismos como las aclaraciones, complementaciones u objeciones por error grave. Este carácter dual es confirmado por autores como Silva Melero, quien sostiene que el dictamen pericial cumple una doble función. De un lado "… llevar al proceso conocimientos científicos o prácticos que el juez podría conocer, pero que no está obligado a ello, y que son precisos para adoptar la decisión." Por otro lado, el dictamen también opera como "concepto de pericia de constatación de hechos", o lo que es lo mismo "… constataciones objetivas, que pueden ser independientes la persona del inculpado." A idéntica conclusión arriba la jurisprudencia constitucional. Sobre el particular, en la sentencia T-796/06 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), se pone de presente cómo el dictamen pericial responde a una naturaleza jurídica dual. De un lado, es comprendido como "…un verdadero medio de prueba, debido a que el dictamen pericial se dirige a provocar la convicción en un determinado sentido, esto es, la actividad que realiza el perito tiene finalidad probatoria, ya que tiende a la fijación de la certeza positiva o negativa de unos hechos.". De otro, la experticia también es comprendida como "…un mecanismo auxiliar del juez, ya que mediante el dictamen pericial no se aportan hechos distintos de los discutidos en el proceso sino que se complementan los conocimientos necesarios para su valoración por parte del juez. Mientras los medios de prueba introducen en el proceso afirmaciones fácticas relacionadas con las afirmaciones iniciales de las partes, con interés exclusivo para el proceso concreto, la pericia introduce máximas de experiencia técnica especializadas de validez universal para cualquier tipo de proceso.*[133]"

[133] Sentencia C-124 del primero de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

Como se puede advertir, el informe pericial no es cualquier documento dentro del andamiaje probatorio procesal, se trata de una importante actuación en la que es indispensable apreciar todos los requisitos que, por complementariedad, determina la normativa procesal penal contenida en la Ley 906 de 2000 y en la Ley 600 de 2000.[134]

En la medida en que los informes periciales presentados en la etapa probatoria del incidente cumplan con los requisitos legales y se sometan a la posibilidad de contradicción por la contraparte, serán documentos idóneos para tenerlos en cuenta al momento de efectuar los pronunciamientos en materia de reparación integral.

12.10.3. De los peritajes psicosociales.

La doctrina especializada ha venido considerando que existe una diferencia entre *"daño psicosocial y daño psicológico"*, entendiéndose el primero como *"Los daños causados por violaciones a los derechos humanos [que] generalmente trascienden la individualidad del sujeto o sujetos directamente afectados, alcanzando, por lo general, al grupo familiar, a la comunidad u organización social e, incluso, a toda la sociedad". Este concepto difiere del daño psicológico, pues éste último corresponde a un perjuicio únicamente individual"*[135].

En cuanto hace al contenido de la valoración sobre afectaciones psicosociales y a la importancia que tiene en el proceso judicial de justicia y paz, la Honorable Corte Constitucional ha señalado[136]:

> *"Como bien lo indican los intervinientes y los estándares internacionales en la materia como el Protocolo de Estambul, las valoraciones psicosociales trascienden el ámbito individual de la persona, al contexto del grupo familiar, la comunidad y la sociedad. Se reconoce al ser humano, no solamente desde su subjetividad y sufrimiento, sino desde sus distintas dimensiones y contexto. Estas tienen tres objetivos principales. Primero, identificar el sufrimiento de la víctima y daños psicosociales en contraste con el entorno social, político, económico y cultural en el que habita. Segundo, mediante el peritaje, convertir la valoración del daño en un elemento de prueba que sirva para el proceso judicial. Y tercero, la creación de una propuesta de reparación integral donde se procure reparar el daño valorado.*

---

[134] Artículo 62 de la ley 975 de 2005, *"Complementariedad.* Para todo lo no dispuesto en la presente ley se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal". Además, el Decreto 4760 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 975 de 2005, estableció que en lo no previsto por esta ley, se aplicarán las normas de procedimiento penal de la Ley 906 de 2004, y en lo compatible con su estructura, la Ley 600 de 2000.
[135] Concepto emitido por el grupo docente de la Maestría en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás, al interior del trámite de la tutela T-702 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[136] Sentencia T-702 del 13 de diciembre de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez

Realizar una valoración psicosocial debe comprender un estudio completo y detallado sobre el contexto social, económico y cultural en el que ocurrieron los hechos violentos y su relación con los daños ocasionados a las víctimas. Estas valoraciones resultan fundamentales en contextos de conflicto armado debido a que se enfocan en los casos donde la víctima no manifiesta daños físicos o patologías mentales evidentes, que resultan ser en la mayoría de las personas.

La valoración psicosocial debe ser comprendida, más que como una prueba del proceso judicial, como un proceso en sí mismo. Este tipo de valoraciones requieren un peritaje continuo, desde la información del caso y el contexto, la planeación y el análisis de las condiciones en que la evaluación se llevará a cabo, hasta los mecanismos de seguimiento y posterior proceso terapéutico o de acompañamiento, finalizadas las diligencias judiciales. En otras palabras, el peritaje como un proceso que contiene un elemento y un valor probatorio relevante que aporta nuevos hechos al proceso y da nuevos argumentos al juez para soportar su decisión, debe tener elementos esenciales como el acompañamiento a las víctimas durante todas las diligencias judiciales. Esto genera un mayor conocimiento y confianza por parte de las mismas."

Respecto al profesional perito encargado de hacer la valoración psicosocial, *"que si bien no tiene que ser un psicólogo forense, debe contar con suficiente experiencia en el trato de daños psicosociales a víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos. Sus competencias cognitivas, praxiológicas, axiológicas y comunicativas deben conocer profundamente el contexto del conflicto colombiano, sus consecuencias y dinámicas"*, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos al momento de rendir su dictamen:

"*(i) Los daños psicosociales son determinables como un proceso que consta de un origen y una evolución. Su análisis debe comprender todos los elementos que lo rodean y lo particularizan, como la intencionalidad, la duración, el lugar y la identidad de los victimarios;*

(ii) La determinación de los daños debe tener un enfoque diferencial, es decir, tener en cuenta factores que muestran características particulares de las personas como el género, la edad, el contexto cultural y socioeconómico.

(iii) Debido a los diversos factores que inciden en la generación y duración del daño, es necesario concebir distintos métodos de investigación y herramientas investigativas que se adecúen a las particularidades de los contextos e historias de cada una de las personas y grupos que se pretende valorar. De esa forma, podrá determinarse el daño de manera integral;

> *(iv) Finalmente, la valoración del daño debe sustentarse bajo principios éticos consagrados en documentos como el Protocolo de Estambul, que consideran a la dignidad humana y el bienestar como eje central de la valoración*[137]*."*

El contenido de las valoraciones psicosociales debe tener como propósitos: *"Primero, identificar el sufrimiento de la víctima y daños psicosociales en contraste con el entorno social, político, económico y cultural en el que habita. Segundo, mediante el peritaje, convertir la valoración del daño en un elemento de prueba que sirva para el proceso judicial. Y tercero, la creación de una propuesta de reparación integral donde se procure reparar el daño valorado"*, y debe comprender *"un estudio completo y detallado sobre el contexto social, económico y cultural en el que ocurrieron los hechos violentos y su relación con los daños ocasionados a las víctimas. Estas valoraciones resultan fundamentales en contextos de conflicto armado debido a que se enfocan en los casos donde la víctima no manifiesta daños físicos o patologías mentales evidentes, que resultan ser en la mayoría de las personas"*, contemplándose como metodología y protocolo especial para la valoración de los daños con las siguientes etapas: *"la etapa previa a la evaluación, la evaluación, la elaboración del informe pericial, la presentación oral del peritaje y el seguimiento"*[138].

12.11. Trámite incidental.

El incidente de reparación integral a las víctimas fue instituido por el legislador del 2005 como un componente necesario para el proceso de reconciliación y dejación de armas por parte de los grupos armados organizados al margen de la Ley –GAOML-, no solo en aras de cumplir con exigencias internacionales sino de lograr la efectiva convivencia pacífica sin sacrificar por completo los derechos de quienes fueron los sujetos pasivos de las conductas punibles del accionar de dichas organizaciones criminales y con el ánimo de cumplir con el propósito primordial de resguardar las garantías de las víctimas dirigidas a una reparación integral de los daños causados, se procuró inicialmente en la Ley 975 de 2005 un trámite Incidental para tal efecto dispuesto en el artículo 23.

Con posterioridad, se promulgó la Ley 1592 de 2012 con el fin de imprimirle celeridad al proceso y, entre otras cosas, la expedición de esa normativa implicó la supresión del incidente de reparación integral como inicialmente fue concebido para, en su lugar, establecer otro incidente pero de "identificación de afectaciones causadas"; sin embargo, mediante las sentencias C-180 y C-286 de 2014, la Corte Constitucional declaró inexequibles todas las modificaciones que se hicieron por la ley 1592 de 2012 a la ley 975 de 2005, en lo referente al incidente de reparación

[137] Ibidem.
[138] Sentencia T-702 del 13 de diciembre de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez

integral, esto es, los artículos 23, 24, 25, la expresión "*y contra el fallo del incidente de identificación de las afectaciones causadas*" contenida en el inciso 3° del artículo 27, y los artículos 33, 40 y 41 de esa normativa, por considerar, en términos generales, que al suprimirse el "Incidente de Reparación Integral" y en consecuencia la reparación por la vía judicial penal del régimen de transición de justicia y paz, como inicialmente estuvo establecido en la Ley 975 de 2005, se vulneró a las víctimas el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y a un recurso judicial efectivo, además de desconocer el principio de juez natural, correspondiéndole nuevamente a la Sala de Justicia y Paz efectuar la cuantificación de los daños causados y velar porque la reparación de las víctimas se haga de manera integral.

Por su parte, la institución jurídica de la terminación anticipada como las que nos ocupa del proceso por sentencia anticipada estatuida en el parágrafo del artículo 18 de la Ley 975 de 2005 y en el artículo 36 del Decreto Reglamentario 3011 de 2013, compilado por el artículo 2.2.5.1.2.3.2 del Decreto 1069 de 2015, aparejó la realización de un incidente de Reparación Integral de carácter excepcional en aquellos casos *"en los que se (...) identifiquen víctimas que no hubiesen sido incluidas en la sentencia que previamente hubiese esclarecido un contexto o un patrón de macrocriminalidad"*, para lo cual *"la Fiscalía General de la Nación deberá allegar la información necesaria que permita demostrar que las víctimas han sido acreditadas y que en efecto los hechos de los que fueron víctimas hacen parte del patrón de macrocriminalidad o contexto previamente establecido"*, con observancia del trámite comúnmente dispuesto para el Incidente de Reparación Integral a las Víctimas.

El trámite incidental en el presente asunto se adecuó y desarrolló con observancia de las previsiones contenidas en la Ley 975 de 2005 y en el artículo 2.2.5.1.2.2.15 del Decreto 1069 de 2015, y, en consecuencia, en acápite subsiguiente, se adoptarán las determinaciones a que haya lugar, de acuerdo a los elementos de prueba y las alegaciones expuestas por las partes e intervinientes, aplicando para cada caso en concreto y para cada petición en particular, de resultar pertinentes, los parámetros de la jurisprudencia constitucional, contenciosa, de la justicia común u ordinaria, de la especializada de Justicia y Paz, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además, las concordantes con el bloque de constitucionalidad conforme a criterios que vienen expuestos en el acápite preliminar y en los precedentes.

12.12. DE LAS LIQUIDACIONES EN CONCRETO.

A continuación, la Sala pasa a resolver las solicitudes de reparación en la forma y términos que fueron presentadas por los representantes judiciales de las víctimas que hacen parte de este proceso con relación a los casos objeto de sentencia dentro de este asunto, teniendo en cuenta, además, que, tal y como se registró en desarrollo del trámite incidental, la Fiscalía efectuó la acreditación sumaria y provisional de

quienes fueron presentadas como víctimas de los hechos legalizados cometidos por los aquí postulados exintegrantes del extinto Frente Contrainsurgencia Wayuu del Bloque Norte, **SALVATORE MANCUSO GÓMEZ.**

En aras de preservar los intereses superiores de los menores que resultaren víctimas, la Sala en el caso de registrar víctimas menores se referirá únicamente a las iniciales de los nombres de quienes al momento de la liquidación de la sentencia aún registraban minoría de edad; así mismo se hará con relación a aquellas víctimas que pudieren resultar de **delitos sexuales**.

Por otro lado, es preciso señalar, que por cada víctima directa se relaciona el grupo familiar correspondiente en un cuadro de liquidación correspondiente a las pretensiones indemnizatorias de quienes alegan ser sus víctimas indirectas, conforme a las carpetas digitales que hayan sido entregadas por los representantes de víctimas.

- **Medidas de Reparación Colectiva.**

En ese orden, se tiene que las medidas de reparación[139] que se han relacionado también se pueden verificar desde lo colectivo, en términos políticos, materiales y simbólicos[140]; son sujetos de esta clase de medidas colectivas las comunidades, las organizaciones y grupos sociales y políticos.[141]

Las violaciones a los derechos colectivos, violaciones graves y manifiestas de los derechos individuales de miembros de los colectivos y el impacto colectivo de la violación de derechos individuales, son las causas por las cuales se pueden generar esta clase de reparaciones, siempre que estas guarden relación con el conflicto armado desde el 1° de enero de 1985.

Específicamente se dice que el daño colectivo es la transformación negativa en el contexto social, comunitario y cultural, asociada a la percepción que, del sufrimiento, la pérdida, la transformación negativa de sus formas de vida, el menoscabo de los recursos para afrontar el futuro o para construir el proyecto que se tenía en perspectiva antes de los hechos violentos, tienen las comunidades, grupos y organizaciones. Así, no se refiere a la sumatoria de daños individuales.

Tal reparación se ejecuta mediante un programa creado por el Decreto 4800 de 2011, y consiste en un conjunto de acciones de diferentes entidades del Estado orientadas a tender los puentes entre las medidas de rehabilitación, restitución, compensación, justicia, satisfacción y de construcción de memoria histórica y verdad, y las políticas estatales relacionadas con las reformas institucionales para fortalecer el Estado Social

---

[139] Medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición.
[140] Las comunidades étnicas tienen derecho a la reparación colectiva especial normada en los decretos ley 4633 y 4635 de 2011.
[141] Ello conforme a la ley 1448 y Dto. 4800 de 2011.

de Derecho, la participación y la focalización de la política y de la inversión, para el goce efectivo de derechos fundamentales.

Para tal efecto, el Programa se implementa a través de Planes de Reparación Colectiva siguiendo los pasos de una ruta que ha sido definida para ello. Inicia con el registro del sujeto colectivo, hasta la formulación por parte de las víctimas, y la implementación por parte de las entidades del SNARIV, de un plan de reparación, que es aprobado por el respectivo Comité Territorial de Justicia Transicional. El Plan, en función del diagnóstico del daño que se realice, puede contener medidas de satisfacción, restitución, rehabilitación y garantía de no repetición.

Es un programa de implementación gradual y progresiva. Eso quiere decir que los sujetos de reparación colectiva van a ir siendo atendidos de manera escalonada y por fases a lo largo del tiempo, en función de su grado de vulnerabilidad y de la capacidad del Estado para atenderlos de manera integral.

Así tenemos que los enfoques en que se trabaja para lograr dicha reparación son los siguientes[142]:

i) Enfoque Psicosocial. Consiste en la incorporación de los elementos que permitan dotar de sentido el proceso de asistencia, atención y reparación integral que realiza la Unidad. A través del enfoque psicosocial se busca que la reparación a las víctimas atienda las formas de interpretación que ellos y ellas, y las comunidades a las que pertenecen, dan a lo que les sucedió, desde su experiencia emocional, cognitiva y relacional, y al significado que dan a la reparación y al restablecimiento de sus derechos.
ii) Reconstrucción del Tejido Social.
iii) La reconstrucción del tejido social es la estrategia que busca el restablecimiento de las relaciones sociales, comunitarias e institucionales que rompió el conflicto armado. Se denomina Entrelazando, será implementada por tejedores y tejedoras comunitarias, y busca desarrollar cinco líneas de trabajo: recuperación de prácticas sociales, duelos colectivos, memoria, pedagogía social e imaginarios colectivos.

Es una estrategia de intervención que conlleva a la generación de mecanismos y sinergias para la efectiva articulación de las entidades responsables de la reparación integral. Esta estrategia implica la coordinación de diferentes instituciones, focalizando la oferta de retornos, restitución de tierras y procesos de reparación individual y colectiva (cuando se identifique un sujeto de reparación colectiva) en un territorio previamente identificado.

[142] Información tomada de la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas: http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/reparacion/9-uncategorised/155-reparacion-colectiva.

Con fundamento en los argumentos previamente señalados, procede la Sala de Conocimiento al estudio y decisión de las pretensiones indemnizatorias a que haya lugar, en el siguiente orden:

- **PATRON DE MACROCRIMINALIDAD DE HOMICIDIO.**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	4				
DELITOS LEGALIZADOS	HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA				
VICTIMA DIRECTA	**JOSÉ DEL CARMEN JAIMES MADERO**				
FECHA DE NACIMIENTO	2 DE ABRIL DE 1969				
FECHA DE LOS HECHOS	14 DE JUNIO DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	2	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		1	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	ROSA EMILIA SIERRA ACUÑA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	39.062.661		
SIJYP	664000				
PARENTESCO	COMPAÑERA PERMANENTE				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 9-10. **3.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 11. **4.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 12. **5.** Declaración extraproceso donde no tiene hijos. Folio13. **6.** Declaración extraproceso de convivencia - tiene dos hijos. Folio 14.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	100 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	$ 206.322.624				
LUCRO CESANTE FUTURO	$ 216.379.176				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		
VÍCTIMA N° 2					
NOMBRES COMPLETOS	BRAILYS JAIMES SIERRA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.124.076.895		
SIJYP	664000				

PARENTESCO	HIJA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 9-10. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 11. **4.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 12. **5.** Declaración extraproceso donde no tiene hijos. Folio13. **6.** Declaración extraproceso de convivencia y cual conta tiene dos hijos. Folio 14.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	100 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	N/A				
LUCRO CESANTE FUTURO	N/A				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		
VÍCTIMA N° 3					
NOMBRES COMPLETOS	BREINER JOSÉ JAIMES SIERRA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.124.044.496		
SIJYP	664000				
PARENTESCO	HIJO				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 15-16. **2.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 17. **3.** Fotocopia del registro civil de nacimiento de la víctima indirecta. Folio 18				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	100 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	N/A				
LUCRO CESANTE FUTURO	N/A				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado "*Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de

daño moral a favor de la señora **ROSA EMILIA SIERRA ACUÑA**, en calidad de compañera permanente, en ocasión al delito de homicidio en persona protegida, de quien en vida se llamaba JOSÉ DEL CARMEN JAIMES MEDERO, la suma equivalente a 100 SMLMV.
Para los hijos **BREINER JOSÉ JAIMES SIERRA** Y **BRAILYS JAIMES SIERRA**, quienes eran menores para la fecha del hecho victimizante y demostraron el parentesco, se les reconoce a cada uno, la suma de 100 SMLMV, por concepto de daño moral por el delito de homicidio en persona protegida de su padre; es decir, un total de 200 SMLMV.

Perjuicios materiales:

Lucro cesante causado.

Teniendo en cuenta la edad de la señora **ROSA EMILIA SIERRA ACUÑA**, como compañera permanente de la víctima directa, cuando ocurrió el suceso, quien contaba con 31 años, se tiene que la edad de vida probable de acuerdo con la tabla que adoptó la Sala es de 278.53 meses, tiempo este que se tendrá en cuenta para la liquidación, toda vez que es menor a la probabilidad de vida del occiso al momento de fallecer. Siguiendo los criterios referidos en la parte pertinente a la explicación de las indemnizaciones, se procede a liquidar así:

CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN DEBIDA O LUCRO CESANTE PASADO

Víctima Directa	**JOSÉ DEL CARMEN JAIMES MADERO**	
Fecha de Nacimiento	2 de abril de 1969	
Fecha del Hecho	14 de junio de 2002	
Delitos	Homicidio en Persona Protegida	
Víctima Indirecta	**ROSA EMILIA SIERRA ACUÑA**	
Parentesco	Compañera permanente	
Fecha de Nacimiento	04/02/1971	
Fecha de sentencia	**30/08/2025**	
Fecha de los hechos	Fecha de la Liquidación Sentencia	Periodo Mensual Vencido
14/06/2002	30/08/2025	278.53
Glosario aplicado en la fórmula		
SP	Lucro cesante pasado o valor actual de las rentas pasadas	
1	Número constante en la operación en los ceros a la izquierda del interés mensual	1
RA	Renta actualizada	533.813

I	Tasa de interés mensual legal (6% anual)	0.004867
N	Número de meses desde la fecha de los Hechos hasta la fecha de la sentencia	278.53
Fórmula Aplicar		
$SP = RA \times \frac{(1+i)^{N}-1}{i}$		
REEMPLAZAR FÓRMULA		
$SP = 533.813 \frac{1.004867}{0.004867}$		
$SP = 533.813 \frac{5.8724}{0.004867}$		
SP = 533.813 588.8536		
RESULTADOS		
SP (Lucro Cesante Pasado) 314.390.809		
Distribución del Lucro Cesante		
CONYUGE/COMPAÑERA PERMANENTE 50%	314.390.809	
Total	**314.390.809**	

Por este concepto se le reconoce a la señora **ROSA EMILIA SIERRA ACUÑA,** quien demostró parentesco y convivencia con el occiso, se tendrá teniendo en cuenta lo siguiente: como Ra $ 533.813 y como n (278.53), la suma de $314.390.809 por concepto de Lucro Cesante Consolidado, la cual se dividirá en un 50% correspondiéndole a la compañera permanente de la víctima directa el monto de $ 314.390.809 y el otro 50% se divide entre los 2 hijos, quienes no solicitaron el mencionado perjuicio por superar la edad de 25 años.

Lucro cesante Futuro o anticipado:

En este punto se le liquidará a la señora **ROSA EMILIA SIERRA ACUÑA,** el tiempo de 291.47 meses, que corresponde a la probabilidad de vida que tenía el occiso a partir del día de liquidación de la sentencia, así:

CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN DEBIDA O LUCRO CESANTE FUTURO

Víctima Directa	**JOSE DEL CARMEN JAIMES MADERO**
Fecha de Nacimiento	2 de abril de 1969
Fecha del Hecho	14 de junio de 2002
Delitos	Homicidio en Persona Protegida
Víctima Indirecta	**ROSA EMILIA SIERRA ACUÑA**
Parentesco	Compañera permanente
Fecha de Nacimiento	04/02/1971
Fecha de sentencia	27/10/2025

AÑO DE NACIDO DE LA VICTIMA	AÑO DE LOS HECHOS	EDAD (FECHA DE LOS HECHOS)	AÑOS DE VIDA ESPERADO	NÚMERO DE MESES DE VIDA PROBABLE	P. VENCIDO MESES	DESCUENTO
1969	2002	33	47.5	570.0	0.00	570.00
1971	2002	31	19.4	592.8	0.00	592.80

Glosario aplicado en la fórmula		
SP	Lucro cesante Pasado o valor Actual de las Rentas pasadas	
1	Número constante en la operación en los ceros a la izquierda del interés mensual	1
RA	Renta Actualizada	1.067.625
I	Tasa de Interés Mensual Legal (6% anual)	0.004867
N	Número de meses desde la fecha de los Hechos hasta la fecha de la sentencia	570.00
Periodo mensual futuro	**Periodo Mensual vencido**	**Descuento**
570.00	278.53	291.47

Fórmula Aplicar

$$SF = RA \times \frac{(1+i)^{N-1}}{i(1+i)^{N}}$$

REEMPLAZAR FÓRMULA

$$SF = 1.067.625 \quad \frac{1.004867}{0.004867}$$

$$SF = 1.067.625 \quad \frac{3.1170}{0.0200}$$

$$SF = 1.067.625 \times 155.5589$$

RESULTADO

Lucro Cesante Futuro $ 166.078.604

Pretensiones como medidas de Rehabilitación:

Solicita el apoderado en favor de las víctimas indirectas, en el siguiente orden:

1) Medidas de Restitución de Vivienda.

2) Medidas de Formación para el Empleo. Que a través del SENA se dé acceso preferencial a la oferta educativa para aprendices, con apoyo al sostenimiento mientras participan en los cursos.

3) Medida de generación de empleo rural y urbano en la perspectiva De Restitución del Derecho a la subsistencia.

4) Medida de Restitución de bienes despojados o abandonados de manera forzada. Inclusión de las víctimas en programas de alivio de pasivos respecto de sus predios con el fin de sanearlos financieramente.

5) Otorgamiento u obtención de libreta militar.

6) Inclusión en el registro civil. Incluir a los hijos de los fallecidos ya sean nacidos antes de la época del fallecimiento o los póstumos legalmente para que se ordene otorgarles el apellido de sus padres, modificando el actual u ordenando su inscripción.

7) Atención y apoyo psicológico. Como las siguientes:

- Atención psicoterapéutica: esta atención debe darse de manera individualizada y familiar.

- Educación: capacitación para el empleo y la culminación del proceso académico.

8) Garantías de no repetición: En lo que tiene que ver con LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN, se solicita disponer lo necesario y lo que en derecho corresponda, con el fin de asegurar que no se presentarán retaliaciones o amenazas o situaciones similares, por haber concurrido las víctimas a este escenario procesal, de justicia transicional que per se concibe todo lo contrario, esto es, reconciliación y perdón. En tal virtud el postulado deberá manifestar de viva voz que no volverán a cometer conducta alguna violatoria de Derechos Humanos.

PRETENSIONES COMUNES A TODOS LOS CASOS.

De rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, otras medidas de reparación integral y declaratoria de crimen de lesa humanidad, ello con el fin de economía procesal.

1.- **REHABILITACIÓN:** Es por todo lo anterior que se solicita como medida rehabilitación: intervención terapéutica individual para los miembros de la familia de la víctima directa. Al igual que acceso gratuito en atención a salud mental para el tratamiento psicológico necesario a la víctima, así como medicamentos gratuitos para que la atención sea integral.

2.- **SATISFACCIÓN:** que busca restablecer la dignidad de las víctimas y de difundir la verdad sobre lo sucedido: De conformidad con el artículo 44 de la Ley 1592 de 2012, solicito de la Sala de Conocimiento al momento de emitir la sentencia disponga de parte del postulado los actos de contribución a la reparación

integral que en cada caso se solicitan, con el fin de que se restablezca la dignidad de la víctima, en especial un acto público de reconocimiento de responsabilidad, en desagravio de las víctimas y en memoria de las personas asesinadas, de parte del postulado, al igual que una declaración pública de sus arrepentimientos y de sus compromisos de no incurrir en conductas punibles y su participación en los actos simbólicos de resarcimiento y re dignificación de las víctimas a los que haya lugar.

3.- **GARANTIAS DE NO REPETICIÓN:** Que se investigue, se juzgue y se le apliquen sanciones a los responsables por acción u omisión de las violaciones a los derechos humanos de que se tratan en cada uno de los cargos imputados a los postulados, todo lo cual estará a cargo de los órganos judiciales y disciplinarios competentes.

4.- **OTRAS MEDIDAS DE REPARACION INTEGRAL:** Que se concedan a las víctimas las otras formas de reparación que no surjan de un proceso penal, las cuales están contempladas en la Ley 1448 de 2011 y las que están a cargo de las Unidades Administrativas Especiales de Atención y Reparación Integral a las víctimas y de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de acuerdo con las competencias señaladas en la mencionada ley.

5.- **DECLARATORIA DE CRIMEN DE LESA HUMANIDAD.**

Se solicita, que cada uno de los crímenes de que aquí se trata se declaren crímenes de lesa humanidad, de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma y el inciso segundo del artículo 15 de la Ley 1719 de 2014, en la que se dispuso: *"La autoridad judicial competente que adelante la investigación y el juzgamiento, deberá declarar que la(s) conducta(s) por la cual se investiga o juzga es de lesa humanidad, cuando así se establezca."*

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 4						
JOSÉ DEL CARMEN JAIMES MADERO						
RECLAMANTE	IDENTIFICACION		ITEMS RECONOCIDOS			
			DAÑOS INMATERIALES			
	TIPO	NUMERO	PERJUCIO MORAL Homicidio en Persona Protegida (EN SMLMV)	LUCRO CESANTE		
				CAUSADO	FUTURO	TOTAL
ROSA EMILIA SIERRA ACUÑA	CC	39.062.661	142.350.000	314.390.809	166.078.604	622.819.414
BRAILYS JAIMES SIERRA	CC	1.124.076.895	142.350.000	-	-	142.350.000
BREINER JOSÉ JAIMES SIERRA	CC	1.124.044.496	142.350.000	-	-	142.350.000
TOTAL						**907.519.414**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	8				
DELITOS LEGALIZADOS	HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA				
VICTIMA DIRECTA	**MANUEL DE JESÚS CALVO MUÑOZ**				
FECHA DE NACIMIENTO	18 DE SEPTIEMBRE DE 1977				
FECHA DE LOS HECHOS	14 DE OCTUBRE DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	ALBIDA ESTHER CALVO MUÑOZ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	22.580.661		
SIJYP	60287				
PARENTESCO	HERMANA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 9-10. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 11. **4.** Fotocopia del Registro Civil N° 8589999 perteneciente de la víctima indirecta. Folio 12. **5.** Certificación del Registro Civil de nacimiento de la Victima Directa. Folio13. **6.** Declaración extraproceso. Folio 19.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	N/A				
LUCRO CESANTE FUTURO	N/A				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

VÍCTIMA N° 2				
NOMBRES COMPLETOS	ZUNILDA RAQUEL CALVO MUÑOZ			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	57.271.029	
SIJYP	60287			
PARENTESCO	HERMANA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 14-15. **2.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 16. **3.** Fotocopia del Registro Civil N° 22227580 de nacimiento de la Víctima Indirecta. Folio 17. **4.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 18. **5.** Declaración extraproceso de afectaciones. Folio 19.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	N/A			
LUCRO CESANTE FUTURO	N/A			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

De conformidad con lo descrito en el acápite denominado "*Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de daño moral la suma de **50 SMLMV** a cada una de las señoras **ALBIDA ESTHER CALVO MUÑOZ** y **ZUNILDA RAQUEL CALVO MUÑOZ**, quienes acreditaron el parentesco como hermanas de la víctima directa y dependencia

psicoafectiva con el señor **MANUEL DE JESÚS CALVO MUÑOZ (Q.E.P.D)**, en ocasión al delito de homicidio en persona protegida.

Perjuicios materiales: No presentaron pretensiones por este ítem.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, doctor REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, toda vez que fueron reseñadas en el hecho 4 y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macrocriminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 8						
MANUEL DE JESÚS CALVO MUÑOZ						
RECLAMANTE	IDENTIFICACION		ITEMS RECONOCIDOS			
			DAÑOS INMATERIALES			
	TIPO	NUMERO	PERJUCIO MORAL (EN SMLMV)	LUCRO CESANTE		
				CAUSADO	FUTURO	TOTAL
ALBIDA ESTHER CALVO MUÑOZ	CC	22.580.661	71.175.000	-	-	71.175.000
ZUNILDA RAQUEL CALVO MUÑOZ	CC	57.271.029	71.175.000	-	-	71.175.000
TOTAL						**142.350.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NÚMERO DE HECHO	9				
DELITOS LEGALIZADOS	HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA				
VICTIMA DIRECTA	**ELVIS DARIO BARROS MEJÍA**				
FECHA DE NACIMIENTO	NO ANEXARON CÉDULA				
FECHA DE LOS HECHOS	27 DE NOVIEMBRE DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		1	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	BLANCA INÉS FRAGOZO BORNACELLY				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	57.447.569		
SIJYP	307071				
PARENTESCO	COMPAÑERA PERMANENTE				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-6. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 7-8. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 9. **4.** Declaración extraproceso de convivencia (2 hijos). Folio 10-11.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	100 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	$206.322.624				
LUCRO CESANTE FUTURO	$216.379.176				
TOTAL LUCROS	$422.701.800				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado" *Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de daño moral a favor de la señora **BLANCA INÉS FRAGOZO BORNACELLY**, en calidad de compañera permanente, en ocasión al delito de homicidio en persona protegida, de quien en vida se llamaba **ELVIS DARIO BARROS MEJIA**, la suma equivalente a 100 SMLMV.

Perjuicios materiales:

Lucro cesante causado.

Se calcula teniendo en cuenta la edad de la señora **BLANCA INÉS FRAGOZO BORNACELLY**, como compañera permanente de la víctima directa, cuando ocurrió el suceso, quien contaba con 28 años, se tiene que la edad de vida probable de acuerdo con la tabla que adoptó la Sala es de 273.10 meses, tiempo este que se tendrá en cuenta para la liquidación, toda vez que es menor a la probabilidad de vida del occiso al momento de fallecer. Siguiendo los criterios referidos en la parte pertinente a la explicación de las indemnizaciones, se procede a liquidar así:

CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN DEBIDA O LUCRO CESANTE PASADO

Víctima Directa	**ELVIS DARIO BARROS MEJIA**
Fecha de Nacimiento	No se anexó documento para establecer la fecha de nacimiento.
Fecha del Hecho	27/11/2002
Delitos	Homicidio en Persona Protegida
Víctima Indirecta	BLANCA INÉS FRAGOZO BORNACELLY
Parentesco	Compañera permanente
Fecha de Nacimiento	05/04/1974

Fecha de sentencia	**30/08/2025**	
Fecha de los hechos	Fecha de la Liquidación Sentencia	Periodo Mensual Vencido
27/11/2002	30/08/2025	273.10
Glosario aplicado en la fórmula		
SP	Lucro cesante pasado o valor actual de las rentas pasadas	
1	Número constante en la operación en los ceros a la izquierda del interés mensual	1
RA	Renta actualizada	533.813
I	Tasa de interés mensual legal (6% anual)	0.004867
N	Número de meses desde la fecha de los Hechos hasta la fecha de la sentencia	273.10
Fórmula Aplicar		
$SP = RA \times \frac{(1+i)^{N}-1}{i}$		
REEMPLAZAR FÓRMULA		
$SP = 533.813 \quad \frac{1.004867}{0.004867}$		
$SP = 533.813 \quad \frac{2.7658}{0.004867}$		
SP = 533.813 568.2709		
RESULTADOS		
SP (Lucro Cesante Pasado) $ **303.350.135**		
Distribución del lucro Cesante		
CONYUGE/COMPAÑERA PERMANENTE 50%	**$ 303.350.135**	
Total		

Por este concepto se le reconoce a la señora **BLANCA INÉS FRAGOZO BORNACELLY,** quien demostró parentesco y convivencia con el occiso, se tendrá teniendo en cuenta lo siguiente: como Ra $ 533.813 y como n (273.10), la suma de $303.350.135 por concepto de Lucro Cesante Consolidado, la cual se

dividirá en un 50% correspondiéndole a la compañera permanente de la víctima directa.

Lucro cesante Futuro o anticipado:

Se deniega el lucro cesante futuro, porque no fue aportada la fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa, situación que no permite proceder con la liquidación de la reclamación invocada, toda vez, que no es posible señalar la probabilidad de vida entre la víctima directa y la señora **BLANCA INÉS FRAGOZO BORNACELLY**, quien acude a este proceso como compañera permanente.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, doctor REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, toda vez que fueron reseñadas en el hecho 4 y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macrocriminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 9						
ELVIS DARIO BARROS MEJÍA						
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**			
			DAÑOS INMATERIALES			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUICIO MORAL Homicidio en Persona Protegida (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE**		
				CAUSADO	**FUTURO**	**TOTAL**
BLANCA INÉS FRAGOZO BORNACELLY	CC	57.447.569	142.175.000	303.350.135	-	446.000.135
TOTAL						**446.000.135**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	14				
DELITOS LEGALIZADOS	HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA EN GRADO DE TENTATIVA EN CONCURSO DE DESTRUCCIÓN Y APROPIACIÓN DE BIENES PROTEGIDOS (DESPLAZAMIENTO FORZADO)				
VICTIMA DIRECTA	**ROGELIO RAFAEL BELTRÁN YEPES**				
FECHA DE NACIMIENTO	21 DE JUNIO DE 2001				
FECHA DE LOS HECHOS	06 DE MARZO DE 2003				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	1	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	MARIA SILVANA BELTRÁN CASTRO				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.001.799.935		
SIJYP	61076				
PARENTESCO	HIJA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9. **3.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 31982175. Folio 11. **4.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 12.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Homicidio)	150 SMLMV				
DAÑO MORAL (Desplazamiento)	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Respecto al daño moral causado por el delito de Homicidio en persona protegida en grado de **TENTATIVA** ocurrido al señor **ROGELIO RAFAEL BELTRAN YEPES**, no se accede al valor solicitado por el abogado, en la suma de 150 SMLMV, sino conforme lo descrito en el acápite denominado *"Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, razón por la cual **se le reconoce la suma equivalente a 15 SMLMV**, como víctima indirecta a la señora **MARÍA SILVANA BELTRÁN CASTRO**, quien acreditó el parentesco como hija de la víctima directa.

Por otro lado, se le concede por concepto de daño moral en ocasión al delito de Desplazamiento Forzado a la Población Civil, la suma de **50 SMLMV**, a la señora **MARIA SILVANA BELTRÀN CASTRO**.

Siguiendo con el orden de las pretensiones indemnizatorias, el representante de víctimas, solicita en ocasión al desplazamiento forzado sufrido por la víctima directa el lucro cesante equivalente a 12 meses de salario por el tiempo dejado de percibir; no obstante, revisada la carpeta digital, se observa en el registro civil de nacimiento de la señora **MARIA SILVANA BELTRAN CASTRO**, que para la fecha de los hechos (06 de marzo de 2003) contaba con tan solo dos años, tres meses de edad (21 de junio de 2003); razón por la cual se deniega la pretensión indemnizatoria.

Perjuicios materiales: No se solicitaron.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, doctor REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, toda vez que fueron reseñadas en el hecho 4 y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macrocriminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 14							
ROGELIO RAFAEL BELTRÁN YEPES							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES				
			PERJUCIO MORAL TENTATIVA DE HOMICIDIO (EN SMLMV)	**DAÑO MORAL POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE**		
	TIPO	**NUMERO**			**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
MARIA SILVANA BELTRÁN CASTRO	CC	1.001.799.935	21.352.500	71.175.000	-	-	92.527.500
TOTAL							**92.527.500**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	15				
DELITOS LEGALIZADOS	HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA EN GRADO DE TENTATIVA EN CONCURSO DE DESTRUCCIÓN Y APROPIACIÓN DE BIENES PROTEGIDOS				
VICTIMA DIRECTA	**HENRY DE JESÚS SALAS DÍAZ**				
FECHA DE NACIMIENTO	05 DE ABRIL DE 1964				
FECHA DE LOS HECHOS	14 DE MARZO DE 2003				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	3	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**			1
HERMANOS	5	**PADRE**	SI	**MADRE**	NO
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	HENRY DE JESÚS SALAS DÍAZ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	84.042.979		
SIJYP	603344				
PARENTESCO	N/A				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-11. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 21-22. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 23-24. **4.** Historia clínica de la víctima directa. Folio 25-28. **5.** Declaración extra proceso de convivencia (2 hijos). Folio 10-11.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	100 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	$71.088.614				
LUCRO CESANTE FUTURO	$216.379.176				
TOTAL LUCROS	$422.701.800				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

VÍCTIMA N° 2				
NOMBRES COMPLETOS	ADELAIDA ANTONIA MARULADA LÓPEZ			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	56.085.760	
SIJYP	603344			
PARENTESCO	COMPAÑERA PERMANENTE			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 21-22. **2.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 29-30. **3.** Declaración extra proceso de convivencia. Folio 32-33.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (homicidio)	100 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento)	100 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV por un periodo de 12 meses y que este valor sea indexado			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**		**NO**	X
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**		**NO**	X
VÍCTIMA N° 3				
NOMBRES COMPLETOS	YENRY JOSÉ SALAS MARULANDA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.124.067.578	
FECHA DE NACIMIENTO	29 DE AGOSTO DE 1995			
EDAD AL MOMENTO DE LOS HECHOS	8 AÑOS			
SIJYP	603344			
PARENTESCO	HIJO			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 24224393. Folios 20. **2.** Poder conferido al Doctor Reginaldo Lora. Folio 44-47. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 48.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (homicidio)	100 SMLMV			

DAÑO MORAL (Desplazamiento)	100 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV por un periodo de 12 meses y que este valor sea indexado			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 4				
NOMBRES COMPLETOS	YAIRLETH KARELI SALAS RODRIGUEZ			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.124.007.364	
FECHA DE NACIMIENTO	10 DE SEPTIEMBRE 1987			
EDAD AL MOMENTO DE LOS HECHOS	16 AÑOS			
SIJYP	603344			
PARENTESCO	HIJA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 11959037. Folios 18. **2.** Poder conferido al Doctor Reginaldo Lora. Folio 41. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 42.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (homicidio)	100 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento)	100 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV por un periodo de 12 meses y que este valor sea indexado			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 5				
NOMBRES COMPLETOS	CRISTIAN RAFAEL SALAS CAMARGO			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.118.849.178 (Ilegible)	
FECHA DE NACIMIENTO	10 DE DICIEMBRE DE 1991			
EDAD AL MOMENTO DE LOS HECHOS	12 AÑOS			
SIJYP	603344			

PARENTESCO	HIJO			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 20351203. Folios 19. **2.** Poder conferido al Doctor Reginaldo Lora. Folio 43-44. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 45.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (homicidio)	100 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento)	100 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV por un periodo de 12 meses y que este valor sea indexado			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 6				
NOMBRES COMPLETOS	ELIO RAFAEL SALAS PERALTA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	15.235.332	
SIJYP	603344			
PARENTESCO	PADRE			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido al Doctor Reginaldo Lora. Folio 34-35. **2.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 36. **3.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 62362569. Folios 37.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (homicidio)	100 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento)	100 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV por un periodo de 12 meses y que este valor sea indexado			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

VÍCTIMA N° 7				
NOMBRES COMPLETOS	LENIN JESÚS SALAS MEDINA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	17.902.801	
SIJYP	603344			
PARENTESCO	HERMANO			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 11241969. Folios 14. **2.** Certificación del Registro de Hechos atribuibles SIJYP 553708. Folio 40. **3.** Poder conferido al Doctor Reginaldo Lora. Folio 34-35. **4.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 54. **5.** Declaración extraproceso de afectaciones. Folio 65-66.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (homicidio)	100 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento)	100 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV por un periodo de 12 meses y que este valor sea indexado			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 8				
NOMBRES COMPLETOS	ANGELO SALAS TEJEDA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	Ilegible	
SIJYP	760601			
PARENTESCO	HERMANO			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 29316751. Folios 39. **2.** Certificación del Registro de Hechos atribuibles SIJYP 760601. Folio 38. **3.** Poder conferido al Doctor Reginaldo Lora. Folio 55-56. **4.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 60. **5.** Declaración extraproceso de afectaciones. Folio 65-66.			

PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (homicidio)	100 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento)	100 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV por un periodo de 12 meses y que este valor sea indexado			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 9				
NOMBRES COMPLETOS	RUBIS MERCEDES BLANCO DIAZ			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	56.083.484	
SIJYP	603344			
PARENTESCO	HERMANA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 9435665. Folios 15-16. **2.** Poder conferido al Doctor Reginaldo Lora. Folio 58-59. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 42. **4.** Declaración extraproceso de afectaciones. Folio 65-66.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (homicidio)	100 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento)	100 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV por un periodo de 12 meses y que este valor sea indexado			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 10				
NOMBRES COMPLETOS	ELIANA JUDITH SALAS MEDINA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.881.084	
SIJYP	603344			
PARENTESCO	HERMANA			

ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 11241970. Folios 13. **2.** Poder conferido al Doctor Reginaldo Lora. Folio 61-62. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 63-64. **4.** Declaración extraproceso de afectaciones. Folio 65-66.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (homicidio)	100 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento)	100 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV por un periodo de 12 meses y que este valor sea indexado			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 11				
NOMBRES COMPLETOS	OSMAN JOSÉ ARREGOCÉS DIAZ			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	77.015.346	
SIJYP	603344			
PARENTESCO	HERMAN0			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Registro civil de nacimiento de la víctima. Folios 17. **2.** Poder conferido al Doctor Reginaldo Lora. Folio 49. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 50. **4.** Declaración extraproceso de afectaciones. Folio 65-66. **Víctima no acreditada por el ente acusador.**			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (homicidio)	100 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento)	100 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV por un periodo de 12 meses y que este valor sea indexado			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Respecto al daño moral causado por el delito de Homicidio en persona protegida en grado de TENTATIVA al señor **HENRY DE JESÚS SALAS DIAZ,** se tiene en cuenta lo descrito en el acápite denominado *"Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce la suma equivalente a 30 SMLMV, como víctima directa y a su compañera permanente señora **ADELAIDA ANTONIA ARULANDA LÒPEZ,** el mismo monto de **30 SMLMV**.[143]

Por otro lado, se les reconoce a su padre, señor **ELIO RAFAEL SALS PERALTA** y sus hijos de la víctima directa, señores **YENRRY JOSE SALAS MARULANDA, YAIRLET KARELY SALAS RODRIGUEZ, CRISTIAN RAFAEL SALAS CAMARGO, LENIN JESUS SALAS MEDINA, y ANGELO SALAS TEJEDA**, quienes acreditaron el parentesco, por daño moral la suma de **15 SMLMV**, a cada uno de los miembros del núcleo familiar debidamente relacionados, en ocasión al delito de Homicidio en persona protegida en grado de Tentativa.

En lo pertinente a los hermanos de la víctima directa, señores **RUBIS MERCEDES BLANCO DIAZ, ELIANA JUDITH SALAS MEDINA,** quienes acreditaron el parentesco y el daño sufrido por el delito ocasionado a su hermano, se les reconoce a estos ciudadanos, la suma de **5 SMLMV**, a cada uno de los miembros de grupo familiar, para un total de **15 SMLMV.**

[143] De conformidad con los criterios impartidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 5 de octubre de 2016.

Por concepto de daño moral en ocasión al delito de Desplazamiento Forzado a la Población Civil, el representante de víctimas solicitó para cada uno de los integrantes del grupo familiar, la suma de **100 SMLMV**, tal reclamación se deniega por cuanto la Fiscalía General de La Nación, a través de su delegada, no formuló el mencionado delito.

Respecto a las solicitudes indemnizatorias presentadas por el señor **OSMAN ARREGOCÉS DÍAZ**, no se reconocerán dichas pretensiones teniendo en cuenta que este no se encuentra acreditado por el ente acusador.

Perjuicios materiales: No lo solicitaron.

Lucro cesante presente: De igual manera, no se accede a lo pretendido por causa del delito de desplazamiento forzado, toda vez que no se formuló el delito por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Lucro cesante futuro:

Esta pretensión es en favor de la **VÍCTIMA N° 1,** señor **HENRY DE JESUS SALAS DIAZ,** quien para la época del hecho víctimizante contaba con 39 años de edad, y de conformidad con lo narrado por la Fiscalía Delegada, la víctima directa ocupaba un cargo en el corregimiento Carraipia, pero se echa de menos soportes probatorios que conlleven a la ocupación laboral, su nivel de ingreso; además de una incapacidad médica después del atentado en contra de su vida e integridad, con el fin de establecer el capital que dejó de percibir y el tiempo dejado de laborar; no obstante, revisado el expediente digital, se desprende el escrito de incidente, copia de la cédula, declaración extra proceso de convivencia y tres (3) folios de la historia clínica que, no permiten determinar los ingresos que la víctima habría obtenido en el futuro y el tiempo en que la víctima no generaba ingresos debido a las secuelas del daño. En ese orden, se deniega la pretensión solicitada.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, doctor REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, toda vez que fueron reseñadas en el hecho 4 y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macrocriminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 15						
HENRY DE JESÚS SALAS DÍAZ						
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**			
			DAÑOS INMATERIALES			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL TENTATIVA DE HOMICIDIO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE**		
				CAUSADO	**FUTURO**	**TOTAL**
HENRY DE JESÚS SALAS DÍAZ	CC	84.042.979	42.705.000	-	-	42.705.000
ADELAIDA ANTONIA MARULADA LÓPEZ	CC	56.085.760	42.705.000	-	-	42.705.000
YENRY JOSÉ SALAS MARULANDA	CC	1.124.067.578	21.352.500	-	-	21.352.500
YAIRLETH KARELI SALAS RODRIGUEZ	CC	1.124.007.364	21.352.500	-	-	21.352.500
CRISTIAN RAFAEL SALAS CAMARGO	CC	1.118.849.178 (Ilegible)	21.352.500	-	-	21.352.500
ELIO RAFAEL SALAS PERALTA	CC	15.235.332	21.352.500	-	-	21.352.500
LENIN JESÚS SALAS MEDINA	CC	17.902.801	21.352.500	-	-	21.352.500
ANGELO SALAS TEJEDA	CC	Ilegible	21.352.500	-	-	21.352.500
RUBIS MERCEDES BLANCO DIAZ	CC	56.083.484	7.117.500	-	-	7.117.500

ELIANA JUDITH SALAS MEDINA	CC	40.881.084	7.117.500	-	-	7.117.500
TOTAL						**277.760.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO		29			
DELITOS LEGALIZADOS		HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA EN GRADO DE TENTATIVA			
VICTIMA DIRECTA		**JOSÉ VICENTE PALACIO PALENCIA**			
FECHA DE NACIMIENTO		NO APORTARON CÉDULA DE CIUDADANÍA			
FECHA DE LOS HECHOS		25 DE ENERO DE 2004			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS		JOSÉ VICENTE PALACIO PALENCIA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	NO ANEXARON	
SIJYP		37094			
PARENTESCO		VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS		**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-10. **3.** Personería Municipal de Maicao – La Guajira. Folio 11. **4.** Historia Clínica Exámenes especializados Biometría – Ecometría Ocular. Folio 12. **5.** Certificación de la Defensoría del Pueblo Seccional Sucre del Desplazamiento Forzado. Folio13. **6.** Certificación del presunto delito Lesiones Personales. Folio 14.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL		200 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE		N/A			
LUCRO CESANTE FUTURO		N/A			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN		**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN		**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

El apoderado del señor **JOSÉ VICENTE PALACIO PALENCIA**, solicitó daño moral por el delito de Homicidio en Persona Protegida en grado de Tentativa por hechos ocurrido el 25-01-2004 en el municipio de Maicao – La Guajira, no obstante, revisado la carpeta digital se observa que, el representante de víctimas no aportó ningún documento que acredite la identificación de la víctima directa, que para el caso que nos ocupa, es su cédula de ciudadanía, a fin de garantizar su derecho a la indemnización, de conformidad con los soportes probatorios aportados durante el trámite incidental.

En ese orden, se destaca el pronunciamiento de la Corte Constitucional, señalado en sentencia T-375/21[144]**,** respecto a la cédula de ciudadanía, dijo:

> *"32… que solo con este documento «se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exige la prueba de tal calidad». Asimismo, garantiza el reconocimiento de los atributos de la personalidad en ella consignados, por parte de las demás personas y de las instituciones civiles y oficiales con las cuales se relacione directa o indirectamente la persona".*
>
> *"33. La Corte en la sentencia C-511 de 1999 indicó que la Constitución y la ley asignan a la cédula de ciudadanía tres funciones particularmente diferentes pero unidas por una finalidad común. A saber: (i) identificar a las personas, (ii) permitir el ejercicio de sus derechos civiles y (iii) asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad política que propicia y estimula la democracia."*
>
> *"En ese sentido, esta corporación afirmó que «la identificación constituye la forma como se establece la individualidad de una persona con arreglo a las previsiones normativas. La ley le otorga a la cédula el alcance de prueba de la identificación personal, de donde se infiere que sólo con ella se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exija la prueba de tal calidad»*[145] *"*

[144] Referencia: Expediente T-8.193.214 - Acción de tutela instaurada por JUNE DARLYN ARCHBOLD BERRY en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Magistrada Ponente: Dra. CRISTINA PARDO SCHLESINGER
[145] Sentencia C-511 de 1999.

> *"34. Para esta corporación, la cédula de ciudadanía juega un papel importante en el proceso de acreditación de la ciudadanía, que se ejerce por los nacionales a partir de los 18 años, y resulta un presupuesto esencial para el ejercicio de los derechos políticos. Así como, para atestiguar la mayoría de edad y la capacidad civil total, física y mental, y permite ejercitar válidamente sus derechos y asumir o contraer obligaciones civiles [60]".*

En ese orden, no es posible proceder con el estudio de la petición y en su lugar la Sala, deniega la pretensión indemnizatoria por la omisión injustificada en aportar la cédula de ciudadanía, por parte del apoderado del señor **JOSÉ VICENTE PALACIO PALENCIA**, quien acudió en calidad de víctima directa; no obstante, se advierte que, puede presentar sus reclamaciones indemnizatorias en la apertura de otro **INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL A VICTIMAS**, que se adelante en contra de ex miembros del mismo grupo armado ilegal.

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	30		
DELITOS LEGALIZADOS	HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA		
VICTIMA DIRECTA	**GREGORIA MIELES**		
FECHA DE NACIMIENTO	NO APORTARON CÉDULA DE CIUDADANÍA		
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE FEBRERO DE 2004		
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR			
N° HIJOS	1	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**	0
VÍCTIMAS RECLAMANTES			
VÍCTIMA N° 1			
NOMBRES COMPLETOS	YEILIN CABRALES MIELES		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	84093189
SIJYP	140447		
PARENTESCO	HIJA		
	1. Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7.		

ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9. **3.** Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 10. **4.** Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento N° 91443663 de la víctima indirecta. Folio 11.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	100 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	N/A			
LUCRO CESANTE FUTURO	N/A			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

De conformidad con lo descrito en el acápite denominado "*Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de daño moral a la señora **YEILIN CABRALES MIELES**, quien acreditó el parentesco como hija de la víctima directa, la suma de cien (100) SMLMV, en ocasión al delito de homicidio en persona protegida de su madre. **Perjuicios materiales:** No presentaron pretensiones por este ítem.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, doctor REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, porque fueron reseñadas en el hecho 4 y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 30						
GREGORIA MIELES						
RECLAMANTE	IDENTIFICACION		ITEMS RECONOCIDOS			
			DAÑOS INMATERIALES			
	TIPO	NÚMERO	PERJUCIO MORAL (EN SMLMV)	LUCRO CESANTE		
				CAUSADO	FUTURO	TOTAL
YEILIN CABRALES MIELES	CC	84.093.189	142.350.000	-	-	142.350.000
TOTAL						**142.350.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO		35			
DELITOS LEGALIZADOS		HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA			
VICTIMA DIRECTA		**JORGE SOLANO ZARATE**			
FECHA DE NACIMIENTO		21 DE JULIO DE 1973			
FECHA DE LOS HECHOS		17 DE JULIO DE 2004			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	3	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**			2
HERMANOS	3	**PADRE**	SI	**MADRE**	SI
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS		ARINDA MARÍA ZÁRATE PINTO			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**		26.982.611
SIJYP		681782			
PARENTESCO		**MADRE**			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS		**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-11. **2.** Registro civil de defunción de la víctima directa N° 04513626. Folio 12. **3.** Registro civil de nacimiento de la víctima directa N° 10836631. Folio 13-14. **4.** Certificación de la Registraduría nacional del estado civil de la víctima directa. Folio 15. **5.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 0996229. Folio 16. **6.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 17. **7.** Declaración extraproceso de dependencia económica y afectaciones. Folio 18-22. **8.** Certificación del registro de hechos atribuibles SIJYP 681782. Folio 23. **9.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 24-25.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					

DAÑO MORAL (Homicidio)	100 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 2				
NOMBRES COMPLETOS	**ANGEL PAUL SOLANO**			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	5.152.523	
SIJYP	681786			
PARENTESCO	PADRE			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Registro civil de defunción de la víctima directa N° 10836631. Folio 26-27. **2.** Registro civil de defunción de la víctima directa N° 04513626. Folio 28. **3.** Certificación de la Registraduría nacional del estado civil de la víctima directa. Folio 29. **4.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 9403916. Folio 30-31. **5.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 32. **6.** Declaración extraproceso de dependencia económica y afectaciones. Folio 33-37. **7.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 38-39.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (Homicidio)	100 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 3				
NOMBRES COMPLETOS	PAUL RAFAEL SOLANO ZÁRATE			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	84.005.569	
SIJYP	681786			
PARENTESCO	HERMANO			

ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Registro civil de defunción de la víctima directa N° 10836631. Folio 26-27. **2.** Registro civil de defunción de la víctima directa N° 04513626. Folio 28. **3.** Certificación de la Registraduría nacional del estado civil de la víctima directa. Folio 29. **4.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 9403916. Folio 30-31. **5.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 32. **6.** Declaración extraproceso de dependencia económica y afectaciones. Folio 33-37. **7.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 38-39.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	100 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		
VÍCTIMA N° 4					
NOMBRES COMPLETOS	YALIS JUDITH SOLANO ZÁRATE				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	26.984.629		
SIJYP	681786				
PARENTESCO	HERMANA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Registro civil de nacimiento de la víctima directa N° 10836631. Folio 57-60. **2.** Certificación de la Registraduría nacional del estado civil de la víctima directa. Folio 61. **3.** Registro civil de defunción de la víctima directa N° 04513626. Folio 62. **4.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 7809028. Folio 63-64. **5.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 65. **6.** Declaración extraproceso de dependencia económica y afectaciones. Folio 66-71.				

	7. Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 72-73.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	50 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 5				
NOMBRES COMPLETOS	YUCELIS FRANCISCA SOLANO ZÁRATE			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	26.988.725	
SIJYP	682986			
PARENTESCO	HERMANA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Registro civil de nacimiento de la víctima directa N° 10836631. Folio 74-75. **2.** Certificación de la Registraduría nacional del estado civil de la víctima directa. Folio 76. **3.** Registro civil de defunción de la víctima directa N° 04513626. Folio 77. **4.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 9403769. Folio 78-79. **5.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 80. **6.** Declaración extraproceso de dependencia económica y afectaciones. Folio 81-82. **7.** Certificación del Registro de hechos atribuibles SIJYP 601100. Folios 83-84.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	50 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 6				
NOMBRES COMPLETOS	ILSA YADIRA CONTRERAS ASÍS			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	26.985.373	
SIJYP	601100			
PARENTESCO	COMAPAÑERA PERMENENTE			

ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Registro civil de Defunción de la víctima directa N° 04513626. Folio 94. **2.** Registro civil de nacimiento de la víctima directa N° 10836631. Folios 95-96. **3.** Certificación de la Registraduría nacional del estado civil de la víctima directa. Folio 97. **4.** Declaración Extraproceso de dependencia económica y afectaciones. Folios 98-100. **5.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 101. **6.** Poder conferido al doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folio 102. **7.** Certificación del Registro de hechos atribuibles SIJYP. Folios 103-106.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	100 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	$106.366.163				
LUCRO CESANTE FUTURO	$78.567.808				
TOTAL LUCROS	$184.933.971				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	**X**	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	**X**	**NO**		
VÍCTIMA N° 7					
NOMBRES COMPLETOS	HALDRENIS YULIETH SOLANO CONTRERAS				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.122.819.249		
FECHA DE NACIMIENTO	26 DE SEPTIEMBRE DE 1994				
EDAD AL MOMENTO DE LOS HECHOS	10 AÑOS				
SIJYP	693953				
PARENTESCO	HIJA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Registro civil de nacimiento de la víctima directa N° 10836631. Folios 85-86. **2.** Certificación de la Registraduría nacional del estado civil de la víctima directa. Folio 87. (Cancelación por muerte).				

	3. Registro civil de defunción de la víctima directa N° 04513626. Folio 88-89. **4.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 90. **5.** Certificación del Registro de hechos atribuibles SIJYP. 601100. Folios 91. **6.** Poder conferido al doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 92-93.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	100 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	**X**	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	**X**	**NO**	
VÍCTIMA N° 8				
NOMBRES COMPLETOS	YAMELIS FIDELIA RODRIGUEZ DAZA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.927.814	
SIJYP	693963			
PARENTESCO	COMPAÑERA PERMANENTE			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Registro civil de nacimiento de la víctima directa N° 10836631. Folios 115-116. **2.** Certificación de la Registraduría nacional del estado civil de la víctima directa. Folio 117. **3.** Registro civil de Defunción de la víctima directa N° 04513626. Folio 118. **4.** Declaración Extraproceso de dependencia económica y afectaciones. Folios 119. **5.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 120. **6.** Declaración Extraproceso de dependencia económica y afectaciones. Folios 119. **7.** Certificación del Registro de hechos atribuibles SIJYP. Folios 123. **8.** Poder conferido al doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folio 124-125.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	100 SMLMV			

LUCRO CESANTE PRESENTE	$106.366.163			
LUCRO CESANTE FUTURO	$78.567.808			
TOTAL LUCROS	$184.933.971			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	**X**	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	**X**	**NO**	
VÍCTIMA N° 9				
NOMBRES COMPLETOS	YERLIS ANDREA SOLANO RODRIGUEZ			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.120.658.100	
FECHA DE NACIMIENTO	31 DE ENERO DE 2004			
EDAD AL MOMENTO DE LOS HECHOS	MESES DE NACIDA			
SIJYP	N/A			
PARENTESCO	HIJA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Registro civil de nacimiento de la víctima directa N° 10836631. Folios 107-108. **2.** Certificación de la Registraduría nacional del estado civil de la víctima directa. Folio 109. **3.** Registro civil de Defunción de la víctima directa N° 04513626. Folio 110. **4.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 34923806. Folios 111-112. **5.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 113. **6.** Poder conferido al doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folio 114.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	100 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	**X**	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	**X**	**NO**	
VÍCTIMA N° 10				
NOMBRES COMPLETOS	ANA YASIRA OSPINO TORRES			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	26.988.445	

SIJYP	69693959				
PARENTESCO	COMPAÑERA PERMANENTE				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Registro civil de nacimiento de la víctima directa N° 10836631. Folios 133-134. **2.** Certificación de la Registraduría nacional del estado civil de la víctima directa. Folio 135. **3.** Registro civil de Defunción de la víctima directa N° 04513626. Folio 136. **4.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 137. **5.** Declaración extraproceso de dependencia económica. Folios 138-140. **6.** Certificación del Registro de hechos atribuibles SIJYP. Folio 141. **7.** Poder conferido al doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folio 142.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	100 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	$106.366.163				
LUCRO CESANTE FUTURO	$78.567.808				
TOTAL LUCROS	$184.933.971				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	**X**	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	**X**	**NO**		
VÍCTIMA N° 11					
NOMBRES COMPLETOS	YULIANA SOLANO OSPINO				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.192.761.715		
FECHA DE NACIMIENTO	24 DE ABRIL DE 2001				
EDAD AL MOMENTO DE LOS HECHOS	3 AÑOS				
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	HIJA				
	1. Registro civil de nacimiento de la víctima directa N° 10836631. Folios 126-127.				

ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**2.** Certificación de la Registraduría nacional del estado civil de la víctima directa. Folio 128. (Cancelación por muerte) **3.** Registro civil de Defunción de la víctima directa N° 04513626. Folio 129. **4.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 0996230. Folios 130. **5.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 131. **6.** Poder conferido al doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folio 132.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	100 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	**X**	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	**X**	**NO**		
VÍCTIMA N° 12					
NOMBRES COMPLETOS	YEISER JOSÉ SOLANO				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	N/A	**NÚMERO**	N/A		
FECHA DE NACIMIENTO	N/A				
EDAD AL MOMENTO DE LOS HECHOS	N/A				
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	N/A				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS					
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	N/A				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	**X**	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	**X**	**NO**		

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado "*Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de daño moral a favor de cada uno de los señores **ARINDA MARÍA ZARATE PINTO Y ÁNGEL PAUL SOLANO**, en calidad de padres del occiso, en ocasión al delito de homicidio en persona protegida, de quien en vida se llamaba **JOSE JORGE SOLANO ZARATE**, la suma equivalente a 100 SMLMV, para un total de 200 SMLMV, quienes demostraron el parentesco.

Respecto a los hermanos, quienes probaron el parentesco y el demostraron el perjuicio moral acaecido por la muerte de la víctima directa, se les reconoce la suma de 50 SMLMV a cada uno de los señores **YALIS JUDITH SOLANO ZARATE, YUCELIS FRANCISCA SOLANO ZARATE, Y PAUL RAAEL SOLANO ZARATE**, para un total de 150 SMLMV.

Para los hijos, revisando la carpeta digital, se observa que el apoderado aportó material probatorio para demostrar el parentesco con la víctima directa, respecto a la señora **YERLIS ANDREA SOLANO RODRIGUEZ y YULIANA SOLANO OSPINO**, se les reconoce por concepto de daño moral la suma de 100 SMLMV, a cada una, para un total de 200 SMLMV.

Respecto a la señora **HALDRENIS YULIETH SOLANO CONTRERAS**, no se le reconoce indemnización por este concepto, por cuanto el apoderado no arribó prueba que permita acreditar el parentesco, tal como es el registro civil de nacimiento.

Con relación al señor **YEISER JOSÉ SOLANO SALINA,** el cual fue referenciado en el escrito de incidente de reparación integral, siendo sustentada las reclamaciones indemnizatorias el día 10 de julio del año 2025, por parte de su apoderado, se pudo verificar en la carpeta anexa al expediente digital del mencionado proceso que, no se evidencia ningún elemento material probatorio como soporte de las reclamaciones elevadas. De tal manera que, para este caso

en particular, debido a la imposibilidad del estudio de lo solicitado, la Sala como consecuencia de la omisión del representante judicial de víctima, deniega la petición por este concepto.

En ese orden, la Sala le recuerda al representante judicial que, debe velar por los intereses de sus representados, cumplir cabalmente y en debida forma su mandato, por manera que, no solo están llamados a representarlos dentro de la etapa del trámite incidental -en este asunto- sinó que debe estar atento a la verificación del material probatorio que soportar la petición de quien le depósito confianza y le creó una expectativa de obtener una reparación integral, por los daños y perjuicios causados por el grupo armado ilegal.

Perjuicios materiales: No presentaron pretensiones indemnizatorias en este ítem.

Lucro cesante causado.

Se procede con el respectivo estudio de las pretensiones indemnizatorias de las compañeras permanentes del occiso, que para el caso son tres (3), **YAMELIS FIDELIA RODRIGUEZ DAZA**, **ANA YASIRA OSPINO TORRES** e **ILSA YADIRA CONTRERAS ASIS,** advirtiendo que, esta última no presentó reclamaciones indemnizatorias, por este concepto. Así las cosas, se procede con lo siguiente:

Teniendo en cuenta la edad de la señora **YAMELIS FIDELIA RODRIGUEZ DAZA,** como compañera permanente de la víctima directa, cuando ocurrió el suceso, quien contaba con 33 años, se tiene que la edad de vida probable de acuerdo con la tabla que adoptó la Sala es de 253.43 meses, tiempo este que se tendrá en cuenta para la liquidación, toda vez que es menor a la probabilidad de vida del occiso al momento de fallecer. Siguiendo los criterios referidos en la parte pertinente a la explicación de las indemnizaciones, se procede a liquidar así:

CALCULO DE LA INDEMNIZACIÓN DEBIDA O LUCRO CESANTE PASADO

Víctima Directa	**JORGE SOLANO ZARATE**	
Fecha de Nacimiento	21/07/1973	
Fecha del Hecho	17/07/2004	
Delitos	HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA	
Víctima Indirecta	YAMELIS FIDELINA RODRIGUEZ DAZA	
Parentesco	COMPAÑERA PERMANENTE	
Fecha de Nacimiento	13/01/1971	
Fecha de sentencia	**30/08/2025**	
Fecha de los hechos	Fecha de la Liquidación Sentencia	Periodo Mensual Vencido
17/07/2004	**30/08/2025**	253.43
Glosario aplicado en la fórmula		
SP	Lucro cesante pasado o valor actual de las rentas pasadas	
1	Número constante en la operación en los ceros a la izquierda del interés mensual	1
RA	Renta actualizada	177.938
I	Tasa de interés mensual legal (6% anual)	0.004867
N	Número de meses desde la fecha de los Hechos hasta la fecha de la sentencia	253.43
Fórmula Aplicar		
$SP = RA \times \frac{(1+i)^{N-1}}{i}$		
REEMPLAZAR FÓRMULA		
$SP = 177.938 \quad \frac{1.004867}{0.004867}$		
$SP = 177.938 \quad \frac{2.4228}{0.004867}$		
SP = 177.938 497.8080		
RESULTADOS		
SP (Lucro Cesante Pasado)		

Distribución del lucro Cesante	
CONYUGE/COMPAÑERA PERMANENTE 50% SE DIVIDIRA ENTRE 3 CORRESPONDE 16.66% C/U	$ 88.578.707
Total	**$ 88.578.707**

Por concepto de lucro cesante consolidado se le reconoce a la señora **YAMELIS FIDELIA RODRIGUEZ DAZA,** en calidad de compañera permanente (No.1) de conformidad con las pruebas aportadas, en ese orden se tiene en cuenta la que del 100%, le corresponde un 50% a las compañeras permanentes que, para el caso que nos ocupa son tres (3), las cuales se liquidaran de manera individual, correspondiéndoles el 16.66% a cada una.
Con relación a la primera compañera permanente, señora **YAMELIS FIDELIA RODRIGUEZ DAZA**, se tienen en cuenta la fórmula: Ra $ 177.938 y como n (253.43), el total que le corresponde es $ 88.578.707.

En lo pertinente al otro 50% de la liquidación les corresponden a los hijos, y como no existe reclamación, se deja la respectiva reserva.

Lucro cesante Futuro o anticipado:

En este punto se le liquidará a la señora **YAMELIS FIDELIA RODRIGUEZ DAZA,** el tiempo de 570.00 meses, que corresponde a la probabilidad de vida que tenía el occiso a partir del día de liquidación de la sentencia, así:

CALCULO DE LA INDEMNIZACIÓN DEBIDA O LUCRO CESANTE FUTURO

Víctima Directa	**JORGE SOLANO ZARATE**
Fecha de Nacimiento	21/07/1973
Fecha del Hecho	17/07/2004
Delitos	HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA
Víctima Indirecta	YAMELIS FIDELINA RODRIGUEZ DAZA
Parentesco	COMPAÑERA PERMANENTE

Fecha de Nacimiento		13/01/1971				
Fecha de sentencia		**30/08/2025**				
AÑO DE NACIDO DE LA VICTIMA	AÑO DE LOS HECHOS	EDAD (FECHA DE LOS HECHOS)	AÑOS DE VIDA ESPERADO	NÚMERO DE MESES DE VIDA PROBABLE	P. VENCIDO MESES	DESCUENTO
1971	2004	33	47.5	570.0	0.00	570.00
1973	2004	31	49.4	592.8	0.00	592.80

Glosario aplicado en la fórmula		
SP	Lucro cesante Pasado o valor Actual de las Rentas pasadas	
1	Número constante en la operación en los ceros a la izquierda del interés mensual	1
RA	Renta Actualizada	177.938
I	Tasa de Interés Mensual Legal (6% anual)	0.004867
N	Número de meses desde la fecha de los Hechos hasta la fecha de la sentencia	570.00
Periodo mensual futuro	**Periodo Mensual vencido**	**Descuento**
570.00	253.43	316.57

Fórmula Aplicar

$$SF = RA \times \frac{(1+i)^{N-1}}{i(1+i)^{N}}$$

REEMPLAZAR FÓRMULA

$$SP = 177.938 \quad \frac{1.004867}{0.004867}$$

$$SP = 177.938 \quad \frac{3.6506}{0.0226}$$

$$SP = 177.938 \quad 161.2848$$

RESULTADOS

Lucro Cesante Futuro $ 28.698.618

Lucro cesante causado.

Teniendo en cuenta la edad de la señora**,** como compañera permanente **ANA YASIRA OSPINO TORRES** de la víctima directa, cuando ocurrió el suceso, quien contaba con 25 años, se tiene que la edad de vida probable de acuerdo con la tabla que adoptó la Sala es de 253.43 meses, tiempo este que se tendrá en cuenta para la liquidación, toda vez que es menor a la probabilidad de vida del occiso al momento de fallecer. Siguiendo los criterios referidos en la parte pertinente a la explicación de las indemnizaciones, se procede a liquidar así:

CALCULO DE LA INDEMNIZACIÓN DEBIDA O LUCRO CESANTE PASADO

Víctima Directa	**JORGE SOLANO ZARATE**	
Fecha de Nacimiento	21/07/1973	
Fecha del Hecho	17/07/2004	
Delitos	HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA	
Víctima Indirecta	ANA YASIRA OSPINO TORRES	
Parentesco	COMPAÑERA PERMANENTE	
Fecha de Nacimiento	20/05/1979	
Fecha de sentencia	**30/08/2025**	
Fecha de los hechos	Fecha de la Liquidación Sentencia	Periodo Mensual Vencido
20/05/1979	**30/08/2025**	253.43
Glosario aplicado en la fórmula		
SP	Lucro cesante pasado o valor actual de las rentas pasadas	
1	Número constante en la operación en los ceros a la izquierda del interés mensual	1
RA	Renta actualizada	177.938
I	Tasa de interés mensual legal (6% anual)	0.004867
N	Número de meses desde la fecha de los Hechos hasta la fecha de la sentencia	253.43
Fórmula Aplicar		

$SP = RA \times \frac{(1+i)^{N-1}}{i}$	
REEMPLAZAR FÓRMULA	
$SP = 177.938 \quad \frac{1.004867}{0.004867}$	
$SP = 177.938 \quad \frac{2.4228}{0.004867}$	
SP = 177.938 497.8080	
RESULTADOS	
SP (Lucro Cesante Pasado)	
Distribución del lucro Cesante	
CONYUGE/COMPAÑERA PERMANENTE 50% SE DIVIDIRA ENTRE 3 CORRESPONDE 16.66% C/U	$ 88.578.707
Total	**$ 88.578.707**

Por concepto de lucro cesante consolidado se le reconoce a la señora **ANA YASIRA OSPINO TORRES,** en calidad de compañera permanente (No.2), de conformidad con las pruebas aportadas; en ese orden, se tiene en cuenta del 100%, es decir, le corresponde un 50% a las compañeras permanentes que, para el caso que nos ocupa son tres (3), las cuales se liquidaran de manera individual, correspondiéndoles el 16.66% a cada una.

Con relación a la segunda compañera permanente, señora ANA YASIRA OSPINO TORRES, se tienen en cuenta la fórmula: Ra $ 177.938 y como n (253.43), para un valor total $ 88.578.707 que le corresponde por el lucro cesante consolidado.
En lo pertinente al otro 50% de la liquidación les corresponden a los hijos, y como no existe reclamación, se deja la respectiva reserva.

Lucro cesante Futuro o anticipado:

En este punto se le liquidará a la señora ANA YASIRA OSPINO TORRES**,** el tiempo de 592.80 meses, que corresponde a la probabilidad de vida que tenía el occiso a partir del día de liquidación de la sentencia, así:

CALCULO DE LA INDEMNIZACIÓN DEBIDA O LUCRO CESANTE FUTURO

Víctima Directa	**JORGE SOLANO ZARATE**
Fecha de Nacimiento	21/07/1973
Fecha del Hecho	17/07/2004
Delitos	HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA
Víctima Indirecta	ANA YASIRA OSPINO TORRES
Parentesco	COMPAÑERA PERMANENTE
Fecha de Nacimiento	20/05/1979
Fecha de sentencia	**30/08/2025**

AÑO DE NACIDO DE LA VICTIMA	AÑO DE LOS HECHOS	EDAD (FECHA DE LOS HECHOS)	AÑOS DE VIDA ESPERADO	NÚMERO DE MESES DE VIDA PROBABLE	P. VENCIDO MESES	DESCUENTO
1979	2004	25	55.1	661.2	0.00	661.20
1973	2004	31	49.4	295.8	0.00	592.80

Glosario aplicado en la fórmula		
SP	Lucro cesante Pasado o valor Actual de las Rentas pasadas	
1	Número constante en la operación en los ceros a la izquierda del interés mensual	1
RA	Renta Actualizada	177.938
I	Tasa de Interés Mensual Legal (6% anual)	0.004867
N	Número de meses desde la fecha de los Hechos hasta la fecha de la sentencia	592.80
Periodo mensual futuro	**Periodo Mensual vencido**	**Descuento**
592.80	253.43	339.37

Fórmula Aplicar

$$SF = RA \times \frac{(1+i)^{N-1}}{i(1+i)^{N}}$$

REEMPLAZAR FÓRMULA

SP = 177.938 $\frac{1.004867}{0.004867}$
SP = 177.938 $\frac{4.1950}{0.0253}$
SP = 177.938 165.9146
RESULTADOS
Lucro Cesante Futuro $ 29.522.422

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No.35							
JORGE SOLANO ZARATE							
RECLAMANTE	IDENTIFICACION		ITEMS RECONOCIDOS				
			DAÑOS INMATERIALES	DAÑOS MATERIALES			
	TIPO	NUMERO	PERJUCIO MORAL (EN SMLMV)	DAÑO EMERGENTE HOMICIDIO	LUCRO CESANTE		
					CAUSADO	FUTURO	TOTAL
ARINDA MARÍA ZÁRATE PINTO	CC	26.982.611	142.350.000	-	-	-	142.350.000
ANGEL PAUL SOLANO	CC	5.152.523	142.350.000	-	-	-	142.350.000
PAUL RAFAEL SOLANO ZÁRATE	CC	84.005.569	71.175.000	-	-	-	71.175.000
YALIS JUDITH SOLANO ZÁRATE	CC	26.984.629	71.175.000	-	-	-	71.175.000
YUCELIS FRANCISCA SOLANO ZÁRATE	CC	26.988.725	71.175.000	-	-	-	71.175.000
ILSA YADIRA CONTRERAS ASÍS	CC	26.985.373	71.175.000	-	-	-	71.175.000
HALDRENIS YULIETH SOLANO CONTRERAS	CC	1.122.819.249	-	-	-	-	-
YAMELIS FIDELIA RODRIGUEZ DAZA	CC	40.927.814	142.350.000	-	88.578.707	26.698.618	259.627.325
YERLIS ANDREA SOLANO RODRIGUEZ	CC	1.120.658.100	142.350.000	-	-	-	142.350.000
ANA YASIRA OSPINO TORRES	CC	26.988.445	142.350.000	-	88.578.707	29.522.422	260.451.129

YULIANA SOLANO OSPINO	CC	1.192.761.715	142.350.000	-	-	-	142.350.000
YEISER JOSÉ SOLANO ZÁRATE	CC	N/A	-	-	-	-	-
TOTAL							1.254.418.276

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	36				
DELITOS LEGALIZADOS	HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA				
VICTIMA DIRECTA	**WILFRIDO GUERRA ZAMBRANO**				
FECHA DE NACIMIENTO	08 DE AGOSTO DE 1962				
FECHA DE LOS HECHOS	22 DE JULIO DE 2004				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	1	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	WILFRIDO RAFAEL GUERRA MENDOZA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.010.065.690		
SIJYP	604277				
PARENTESCO	HIJO				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8. **3.** Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento N° 24224193 de la víctima indirecta. Folio 9. **4.** Declaración extraproceso de convivencia con sus padres. Folio 12.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	100 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	N/A				
LUCRO CESANTE FUTURO	N/A				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

De conformidad con lo descrito en el acápite denominado *"Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de daño moral al señor **WILFRIDO RAFAEL GUERRA MENDOZA**, quien acreditó el parentesco como hijo de la víctima directa, la suma de cien (100) SMLMV, en ocasión al delito de homicidio en persona protegida de su padre.

Perjuicios materiales: No presentaron pretensiones por este ítem.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, doctor REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macrocriminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 36						
WILFRIDO GUERRA ZAMBRANO						
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**			
			DAÑOS INMATERIALES			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE**		
				CAUSADO	**FUTURO**	**TOTAL**
WILFRIDO RAFAEL GUERRA MENDOZA	CC	1.010.065.690	142.350.000	-	-	142.350.000
TOTAL						**142.350.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	39			
DELITOS LEGALIZADOS	HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA			
VICTIMA DIRECTA	**KEVIN OSWALDO PAREDES SANTO**			
FECHA DE NACIMIENTO	19 DE SEPTIEMBRE DE 1988			
FECHA DE LOS HECHOS	19 DE NOVIEMBRE DE 2004			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR				
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**	0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES				
VÍCTIMA N° 1				
NOMBRES COMPLETOS	DIANA SANTO CARMONA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.878.415	
SIJYP	596716			
PARENTESCO	MADRE			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 9. **3.** Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento N° 3547355 de la víctima indirecta. Folio 9. **4.** Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 10. **5.** Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de la víctima directa. Folio 11.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	100 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	$308.498.563			
LUCRO CESANTE FUTURO	$243.326.048			
TOTAL LUCROS	$551.824.611			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado *"Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de daño moral a favor de la señora **DIANA SANTO CARMONA**, en calidad de madre de la víctima directa, en ocasión al delito de homicidio en persona protegida, de quien en vida se llamaba **KEVIN OSWALDO PAREDES SANTO**, la suma equivalente a 100 SMLMV.

Perjuicios materiales:

Lucro cesante causado y futuro.

La Sala procede a la revisión de las pretensiones indemnizatorias teniendo cuenta que la víctima directa, el joven **KEVIN OSWALDO PAREDES SANTO** para la fecha de los hechos[146] contaba con **16[147] años,** y lo que pretende el apoderado de la reclamante es obtener en beneficio de la madre del occiso, el lucro cesante; en ese orden, se trae al presente asunto la decisión en segunda instancia proferida por la Sala de Casación Penal de la CSJ[148] que dice:

> *"El lucro cesante «es la utilidad, ganancia o beneficio dejado de percibir con la conducta punible»*[149] *que se calcula, según las pautas establecidas por el Consejo de Estado, con fundamento en el ingreso promedio mensual de la víctima directa, el cual, de no probarse, se presume en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual vigente para la época de los hechos y de reconocerse se actualiza a la fecha de la sentencia*[150] *.Esta última cifra se incrementa en un 25% por concepto de prestaciones sociales y, a su vez, se disminuye en igual proporción*

[146] 19 de noviembre de 2004
[147] Fecha de nacimiento 19 de septiembre de 1988).
[148] Magistrada Ponente, doctora MYRIAM ÁVILA ROLDÁN - Segunda instancia N° 59780 CUI: 11001020400020210131800 FORTUNATO DE JESÚS DUQUE GÓMEZ y ROMULO DAVID GUTIÉRREZ
[149] CSJ SP659-2021, rad. 54860,
[150] CE, 26 feb. 2015, rad. 28666 y CSJ SP, 27 abr. 2011, rad. 34547.

por gastos personales, de cuyo resultado se obtiene la denominada renta actualizada. Dicho monto sirve para calcular el dinero que hubiese aportada la víctima directa de homicidio a cada una de las víctimas indirectas que dependían económicamente de ella (CSJ SP659-2021, rad. 54860).

En ese orden dice la jurisprudencia que: "La dependencia económica se divide en aquella que se presume y la que debe probarse. Se presume por el vínculo de matrimonio o convivencia cuando la víctima directa provee la manutención al esposo/a - compañero/a permanente, también a los hijos hasta 18 años o hasta 25 años si se demuestra su dependencia económica. ***Debe probarse, pues no se presume, la dependencia económica de los padres respecto de sus hijos que son víctimas directas,*** *así como la eventual dependencia económica de otros familiares sin capacidad de valerse por sí mismos respecto de las víctimas directas*[151]*" (lo subrayado es nuestro).*

Examinadas las pruebas aportadas por el representante de víctimas, se desprende la fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa e indirecta, el poder y una declaración extra proceso, donde se afirma que el joven **KEVIN OSWALDO PAREDES SANTO,** convivía con sus padres hasta la fecha de su fallecimiento; es decir, la referida declaración no estuvo acompañada de un mínimo de prueba de la cual pueda concluirse que el menor de edad[152] llevaba un sustento para sus padres, de modo que, ante la ausencia de la acreditación de los lucros cesantes en favor de su madre, se deniega la pretensión indemnizatoria.

[151] (CSJ SP659-2021, rad. 54860).
[152] Advertido que los padres le deben alimentos a sus hijos hasta que cumplan la mayoría de edad, sin embargo, se puede extender hasta los 25 años y en otros casos de hijos con discapacidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 39						
KEVIN OSWALDO PAREDES SANTO						
RECLAMANTE	IDENTIFICACION		ITEMS RECONOCIDOS			
			DAÑOS INMATERIALES			
	TIPO	NUMERO	PERJUCIO MORAL HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA (EN SMLMV)	LUCRO CESANTE		
				CAUSADO	FUTURO	TOTAL
DIANA SANTO CARMONA	CC	40.878.415	142.350.000	-	-	142.350.000
TOTAL						**142.350.000**

- **PATRON DE MACROCRIMINALIDAD DE DESPLAZAMIENTO FORZADO.**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1		
DELITOS LEGALIZADOS	DESPLAZAMIENTO FORZADO		
VICTIMA DIRECTA	**DILIBETH RODRIGUEZ MEJÍA**		
FECHA DE NACIMIENTO	09 DE NOVIEMBRE DE 1974		
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE JUNIO DE 2000		
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR			
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**	0
VÍCTIMAS RECLAMANTES			
VÍCTIMA N° 1			
NOMBRES COMPLETOS	DILIBETH RODRIGUEZ MEJÍA		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.927.929
SIJYP	677099		
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA		
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9 **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.		
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS			
DAÑO MORAL	50 SMLMV		
LUCRO CESANTE PRESENTE (Desplazamiento)	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses		
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicio material:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado "*Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, con ocasión al delito de Desplazamiento Forzado a la Población Civil, la suma de 50 SMLMV, a la señora **DILIBETH RODRIGUEZ MEJÍA.**

Siguiendo con las pretensiones indemnizatorias, se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1							
DILIBETH RODRIGUEZ MEJÍA							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**DAÑO INMATERIALES**	**DAÑOS MATERIALES**			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO**	**LUCRO CESANTE**		**TOTAL**
					CAUSADO	**FUTURO**	
DILIBETH RODRIGUEZ MEJÍA	CC	40.927.929	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							**88.257.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	2		
DELITOS LEGALIZADOS	DESPLAZAMIENTO FORZADO		
VICTIMA DIRECTA	**ARNOLVI DARIO ROMERO ARREGOCÉS**		
FECHA DE NACIMIENTO	26 DE ENERO DE 1965		
FECHA DE LOS HECHOS	18 DE AGOSTO DE 2002		
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR			
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**	0
VÍCTIMAS RECLAMANTES			
VÍCTIMA N° 1			
NOMBRES COMPLETOS	ARNOLVI DARIO ROMERO ARREGOCÉS		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	84.043.631
SIJYP	N/A		
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA		
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.		
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS			
DAÑO MORAL	50 SMLMV		
LUCRO CESANTE PRESENTE (Desplazamiento)	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses		
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicio material:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado "*Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, con ocasión al delito de Desplazamiento Forzado a la Población Civil, la suma de 50 SMLMV, al señor ARNOLVI DARIO ROMERO ARREGOCÉS.

Siguiendo con las pretensiones indemnizatorias, se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 2								
ARNOLVI DARIO ROMERO ARREGOCÉS								
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**				**DAÑOS MATERIALES**			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO (EN SMLMV)**	**DAÑO EMERGENTE POR DESPLAZAMIENTO**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO**	**LUCRO CESANTE**		**TOTAL**
						CAUSADO	**FUTURO**	
ARNOLVI DARIO ROMERO ARREGOCÉS	CC	84.043.631	71.175.000	-	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL								**88.257.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	15		
DELITOS LEGALIZADOS	DESPLAZAMIENTO FORZADO		
VICTIMA DIRECTA	**JUAN MANUEL CATAÑO GUERRA**		
FECHA DE NACIMIENTO	30 DE ENERO DE 1977		
FECHA DE LOS HECHOS	24 DE MAYO DE 2002		
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR			
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**	0
VÍCTIMAS RECLAMANTES			
VÍCTIMA N° 1			
NOMBRES COMPLETOS	JUAN MANUEL CATAÑO GUERRA		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	84.085.515
SIJYP	59586		
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA		
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.		
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS			
DAÑO MORAL	50 SMLMV		
LUCRO CESANTE PRESENTE (Desplazamiento)	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses		
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicio material:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado "*Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, con ocasión al delito de Desplazamiento Forzado a la Población Civil, la suma de 50 SMLMV, al señor **JUAN MANUEL CATAÑO GUERRA**.

Siguiendo con las pretensiones indemnizatorias, se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 15								
JUAN MANUEL CATAÑO GUERRA								
RECLAMANTE	**IDENTIFICACIÓN**		**DAÑOS INMATERIALES**		**DAÑOS MATERIALES**			
	TIPO	**NÚMERO**	**PERJUICIO MORAL DESPLAZAMIENTO (EN SMLMV)**	**DAÑO EMERGENTE POR DESPLAZAMIENTO**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO**	**LUCRO CESANTE**		**TOTAL**
						CAUSADO	**FUTURO**	
JUAN MANUEL CATAÑO GUERRA	CC	84.085.515	71.175.000	-	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL								**88.257.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	18		
DELITOS LEGALIZADOS	DESPLAZAMIENTO FORZADO		
VICTIMA DIRECTA	**DELLIS SOFIA JARABA RODRIGUEZ**		
FECHA DE NACIMIENTO	18 DE NOVIEMBRE DE 1963		
FECHA DE LOS HECHOS	26 DE MAYO DE 2002		
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR			
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**	0
VÍCTIMAS RECLAMANTES			
VÍCTIMA N° 1			
NOMBRES COMPLETOS	DELLIS SOFIA JARABA RODRÍGUEZ		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	23.066.613
SIJYP	59586		
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA		
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9.		
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS			
DAÑO MORAL	50 SMLMV		
LUCRO CESANTE PRESENTE (Desplazamiento)	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses		
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

El apoderado de la señora **DELLIS SOFIA JARABA RODRÍGUEZ**, solicitó daño moral por el delito de Desplazamiento Forzado, y teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado "*Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* se le reconoce, la suma de 50 SMLMV.

Siguiendo con las pretensiones indemnizatorias, se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 18								
DELLIS SOFIA JARABA RODRIGUEZ								
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**DAÑOS INMATERIALES**		**DAÑOS MATERIALES**			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO (EN SMLMV)**	**DAÑO EMERGENTE POR DESPLAZAMIENTO**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO**	**LUCRO CESANTE**		**TOTAL**
						CAUSADO	**FUTURO**	
DELLIS SOFIA JARABA RODRIGUEZ	CC	23.066.613	71.175.000	-	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL								**88.257.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	20		
DELITOS LEGALIZADOS	DESPLAZAMIENTO FORZADO		
VICTIMA DIRECTA	**IBERICA GÓMEZ AMAYA**		
FECHA DE NACIMIENTO	2 DE ABRIL DE 1960		
FECHA DE LOS HECHOS	31 DE AGOSTO DE 2002		
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR			
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**	0
VÍCTIMAS RECLAMANTES			
VÍCTIMA N° 1			
NOMBRES COMPLETOS	IBERICA GÓMEZ AMAYA		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	26.994.748
SIJYP	59586		
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA		
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9. **3.** Certificación del registro de hechos atribuibles SIJYP 606791.		
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS			
DAÑO MORAL	100 SMLMV		
LUCRO CESANTE PRESENTE (Desplazamiento)	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses		
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado" *Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, con ocasión al delito de Desplazamiento Forzado a la Población Civil, se le concede la suma de 50 SMLMV, a la señora IBÉRICA GÓMEZ ANAYA, en calidad de victima directa.

Perjuicios materiales:

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Teniendo en cuenta la manifestación de la víctima, se le concede indemnización a título de lucro cesante, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 20								
IBERICA GÓMEZ AMAYA								
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**DAÑOS INMATERIALES**		**DAÑOS MATERIALES**			
					LUCRO CESANTE			**TOTAL**
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO (EN SMLMV)**	**DAÑO EMERGENTE POR DESPLAZAMIENTO**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO**	**CAUSADO**	**FUTURO**	
IBERICA GÓMEZ AMAYA	CC	26.994.748	71.175.000	-	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL								**88.257.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	20				
DELITOS LEGALIZADOS	DESPLAZAMIENTO FORZADO				
VICTIMA DIRECTA	**JOSÉ DOMINGO PERALTA MENDOZA**				
FECHA DE NACIMIENTO	NO ANEXA CÉDULA				
FECHA DE LOS HECHOS	31 DE AGOSTO DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	JOSÉ DOMINGO PERALTA MENDOZA.				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	NO ANEXA CÉDULA		
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folio 8.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE (Desplazamiento)	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

De lo resuelto por la Sala:

El apoderado del señor **JOSÉ DOMINGO PERALTA MENDOZA**, solicitó daño moral por el delito de DESPLAZAMIENTO FORZADO, no obstante, revisado la carpeta digital se observa que, el representante de víctimas no aportó

ningún documento que acredite la identificación de la víctima directa, que para el caso que nos ocupa, es su cédula de ciudadanía, a fin de garantizar su derecho a la indemnización, de conformidad con los soportes probatorios aportados durante el trámite incidental.

En ese orden, se destaca el pronunciamiento de la Corte Constitucional, señalado en sentencia T-375/21[153]**,** respecto a la cédula de ciudadanía, dijo:

> *"32… que solo con este documento «se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exige la prueba de tal calidad». Asimismo, garantiza el reconocimiento de los atributos de la personalidad en ella consignados, por parte de las demás personas y de las instituciones civiles y oficiales con las cuales se relacione directa o indirectamente la persona".*
>
> *"33. La Corte en la sentencia C-511 de 1999 indicó que la Constitución y la ley asignan a la cédula de ciudadanía tres funciones particularmente diferentes pero unidas por una finalidad común. A saber: (i) identificar a las personas, (ii) permitir el ejercicio de sus derechos civiles y (iii) asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad política que propicia y estimula la democracia."*
>
> *"En ese sentido, esta corporación afirmó que «la identificación constituye la forma como se establece la individualidad de una persona con arreglo a las previsiones normativas. La ley le otorga a la cédula el alcance de prueba de la identificación personal, de donde se infiere que sólo con ella se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exija la prueba de tal calidad»*[154]*"*
>
> *"34. Para esta corporación, la cédula de ciudadanía juega un papel importante en el proceso de acreditación de la ciudadanía, que se ejerce por los nacionales a partir de los 18 años, y resulta un presupuesto*

[153] Referencia: Expediente T-8.193.214 - Acción de tutela instaurada por JUNE DARLYN ARCHBOLD BERRY en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Magistrada Ponente: Dra. CRISTINA PARDO SCHLESINGER
[154] Sentencia C-511 de 1999.

esencial para el ejercicio de los derechos políticos. Así como, para atestiguar la mayoría de edad y la capacidad civil total, física y mental, y permite ejercitar válidamente sus derechos y asumir o contraer obligaciones civiles [60] *".*

En ese orden, no es posible proceder con el estudio de la petición y en su lugar la Sala, deniega la pretensión indemnizatoria por la omisión injustificada en aportar la cédula de ciudadanía, por parte del apoderado del señor **JOSÉ DOMINGO PERALTA MENDOZA**, quien acudió en calidad de víctima directa; no obstante, se advierte que, puede presentar sus reclamaciones indemnizatorias en la apertura de otro INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL A VICTIMAS, que se adelante en contra de ex miembros del mismo grupo armado ilegal.

No es posible calcular esta pretensión por cuanto el abogado omitió presentar los documentos idóneos mínimos necesarios del Señor **JOSÉ DOMINGO PERALTA MENDOZA** para establecer la edad de la compañera permanente y así verificar cuál era la probabilidad de vida de este. La Sala desconoce dichos datos por lo que le es imposible hacer el cálculo indemnizatorio mediante presunciones o especulaciones. Por tal razón se despacha desfavorable esa solicitud.

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO		29	
DELITOS LEGALIZADOS		DESPLAZAMIENTO FORZADO	
REPORTANTE		**SEGISMUNDO FUENMAYOR MONTERO**	
FECHA DE NACIMIENTO		NO ANEXARON FOTOCOPIA DE LA CÉDULA	
FECHA DE LOS HECHOS		31 DE AGOSTO DE 2002	
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR			
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**	0
VÍCTIMAS RECLAMANTES			
VÍCTIMA N° 1			
NOMBRES COMPLETOS		SEGISMUNDO FUENMAYOR MONTERO	

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	N/A	
SIJYP	63612			
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9. **3.** Certificación del registro de hechos atribuibles SIJYP. Folio 10. NO FUE APORTADA LA CÉDULA DE CIUDADANÍA			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE (Desplazamiento)	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 2				
NOMBRES COMPLETOS	ENRIQUE FUENMAYOR MONTERO			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	84.089.397	
SIJYP	31738			
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 11. **2.** Certificación del registro de hechos atribuibles SIJYP. Folio 12. No fue aporta la cédula de ciudadanía			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE (Desplazamiento)	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 3				

NOMBRES COMPLETOS	ROSIEL LAUDITH FUENMAYOR MONTERO				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	N/A		
SIJYP	622550				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 13. **2.** Certificación del registro de hechos atribuibles SIJYP. Folio 14. No fue aportada la cédula de ciudadanía				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE (Desplazamiento)	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		
VÍCTIMA N° 4					
NOMBRES COMPLETOS	WILVIS FUENMAYOR				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	N/A		
SIJYP	622662				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 15. **2.** Certificación del registro de hechos atribuibles SIJYP. Folio 16. No fue aportada la cédula de ciudadanía				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE (Desplazamiento)	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

El apoderado de los señores **SEGISMUNDO FUENMAYOR MONTERO, ENRIQUE FUENMAYOR MONTERO, ROSIEL LAUDITH FUENMAYOR MONTERO y WILVIS FUENMAYOR**, solicitaron daño moral por el delito de Desplazamiento Forzado, no obstante, revisado la carpeta digital se observa que, el representante de víctimas no aportó documento que acredite la identificación de las víctimas directa, que para el caso que nos ocupa, es su cédula de ciudadanía, a fin de garantizar su derecho a la indemnización, de conformidad con los soportes probatorios aportados durante el trámite incidental. Se advierte que, fue anexada una sola fotocopia de la cédula de ciudadanía, la cual es totalmente ilegible.

En ese orden, se destaca el pronunciamiento de la Corte Constitucional, señalado en sentencia T-375/21[155]**,** respecto a la cédula de ciudadanía, dijo:

> "*32… que solo con este documento «se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exige la prueba de tal calidad». Asimismo, garantiza el reconocimiento de los atributos de la personalidad en ella consignados, por parte de las demás personas y de las instituciones civiles y oficiales con las cuales se relacione directa o indirectamente la persona".*
>
> *"(…)"*
>
> *"34. Para esta corporación, la cédula de ciudadanía juega un papel importante en el proceso de acreditación de la ciudadanía, que se ejerce por los nacionales a partir de los 18 años, y resulta un presupuesto esencial para el ejercicio de los derechos políticos. Así como, para atestiguar la mayoría de edad y la capacidad civil total, física y mental, y permite ejercitar válidamente sus derechos y asumir o contraer obligaciones civiles [60] ".*

[155] Referencia: Expediente T-8.193.214 - Acción de tutela instaurada por JUNE DARLYN ARCHBOLD BERRY en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Magistrada Ponente: Dra. CRISTINA PARDO SCHLESINGER

En ese orden, no es posible proceder con el estudio de la petición y en su lugar la Sala, deniega la pretensión indemnizatoria por la omisión injustificada en aportar la cédula de ciudadanía, por parte del apoderado de las víctimas; no obstante, se advierte que, pueden presentar sus reclamaciones indemnizatorias en la apertura de otro **INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL A VICTIMAS**, que se adelante en contra de ex miembros del mismo grupo armado ilegal.

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	43		
DELITOS LEGALIZADOS	DESPLAZAMIENTO FORZADO		
VICTIMA DIRECTA	**SOR MARIA MANJARREZ MANJARREZ**		
FECHA DE NACIMIENTO	17 DE ENERO DE 1975		
FECHA DE LOS HECHOS	31 DE AGOSTO DE 2002		
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR			
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**	0
VÍCTIMAS RECLAMANTES			
VÍCTIMA N° 1			
NOMBRES COMPLETOS	SOR MARÍA MANJARREZ MANJARREZ		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	49.782.741
SIJYP	97068		
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA		
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.		
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS			
DAÑO MORAL	50 SMLMV		
LUCRO CESANTE PRESENTE (Desplazamiento)	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses		

MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado "*Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, con ocasión al delito de Desplazamiento Forzado a la Población Civil, se le concede la suma de 50 SMLMV, a la señora **SOR MARÍA MANJARREZ MANJARREZ**.

Siguiendo con las pretensiones indemnizatorias, se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 43								
SOR MARIA MANJARREZ MANJARREZ								
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**DAÑOS INMATERIALES**		**DAÑOS MATERIALES**			
					LUCRO CESANTE			**TOTAL**
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO (EN SMLMV)**	**DAÑO EMERGENTE POR DESPLAZAMIENTO**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO**	**CAUSADO**	**FUTURO**	
SOR MARIA MANJARREZ MANJARREZ	CC	49.782.741	71.175.000	-	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL								**88.257.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	43		
DELITOS LEGALIZADOS	DESPLAZAMIENTO FORZADO		
VICTIMA DIRECTA	**BASILIA PEREZ**		
FECHA DE NACIMIENTO	11 DE FEBRERO DE 1948		
FECHA DE LOS HECHOS	10 DE JULIO DE 2005		
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR			
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**	0
VÍCTIMAS RECLAMANTES			
VÍCTIMA N° 1			
NOMBRES COMPLETOS	BASILIA PEREZ		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.912.885
SIJYP	97066		
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA		
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.		
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS			
DAÑO MORAL	50 SMLMV		
LUCRO CESANTE PRESENTE (Desplazamiento)	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses		
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado "*Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, con ocasión al delito de Desplazamiento Forzado a la Población Civil, se le concede la suma de 50 SMLMV, a la señora **BASILIA PÉREZ**.

Siguiendo con las pretensiones indemnizatorias, se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 43								
BASILIA PEREZ								
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**DAÑOS INMATERIALES**		**DAÑOS MATERIALES**			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO (EN SMLMV)**	**DAÑO EMERGENTE POR DESPLAZAMIENTO**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO**	**LUCRO CESANTE**		**TOTAL**
						CAUSADO	**FUTURO**	
BASILIA PEREZ	CC	40.912.885	71.175.000	-	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL								**88.257.000**

PATRÓN DE MACROCRIMINALIDAD "VIOLENCIA CONTRA PUEBLOS INDIGENAS" .

La Sala ha considerado realizar una decisión conjunta frente a las pretensiones por daño moral en ocasión al delito de Actos de discriminación racial, sustentada por los abogados REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO y DORIS AVILA CANTILLO, representantes de víctimas en los hechos **4, 5, 8, y 9,** adscritos a la Defensoría del Pueblo – Regional Atlántico.

NUMERO DE HECHO	4		
DELITOS LEGALIZADOS	ACTOS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL CONTRA DE PUEBLOS INDIGENAS EN CONCURSO CON DESTRUCCIÓN Y APROPIACIÓN DE BIENES PROTEGIDOS Y DESPLAZAMIENTO FORZADO		
VICTIMA DIRECTA	**SONIA PATRICIA JUSAYÚ JAYARIYU**		
FECHA DE NACIMIENTO	5 DE AGOSTO DE 1983		
FECHA DE LOS HECHOS	1 DE ABRIL DE 2004		
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR			
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**	0
VÍCTIMAS RECLAMANTES			
VÍCTIMA N° 1			
NOMBRES COMPLETOS	SONIA PATRICIA JUSAYÚ JAYARIYU		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.880.907
SIJYP	259313		
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA		
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 9-10. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 11.		
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS			

DAÑO MORAL	100 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE (Desplazamiento forzado)	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		
NUMERO DE HECHO	5				
DELITOS LEGALIZADOS	ACTOS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL CONTRA DE PUEBLOS INDIGENAS EN CONCURSO CON DESTRUCCIÓN Y APROPIACIÓN DE BIENES PROTEGIDOS Y DESPLAZAMIENTO FORZADO				
VICTIMA DIRECTA	**MARCIAL ANTONIO GARCÍA JUSAYÚ**				
FECHA DE NACIMIENTO	24 DE AGOSTO DE 1982				
FECHA DE LOS HECHOS	31 DE DICIEMBRE DE 2004				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	MARCIAL ANTONIO GARCÍA JUSAYÚ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	84.062.220		
SIJYP	258347				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 9-10. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 11.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	100 SMLMV				

LUCRO CESANTE PRESENTE (Desplazamiento forzado)	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		
NUMERO DE HECHO	6				
DELITOS LEGALIZADOS	ACTOS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL CONTRA DE PUEBLOS INDIGENAS EN CONCURSO CON DESTRUCCIÓN Y APROPIACIÓN DE BIENES PROTEGIDOS Y DESPLAZAMIENTO FORZADO				
VICTIMA DIRECTA	**RAFAEL JUSAYÚ**				
FECHA DE NACIMIENTO	31 DE DICIEMBRE DE 1951				
FECHA DE LOS HECHOS	1 DE OCTUBRE DE 2004				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	RAFAEL JUSAYÚ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	2.739.169		
SIJYP	259259				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 9-10. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 11.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	100 SMLMV				

LUCRO CESANTE PRESENTE (Desplazamiento forzado)	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
NUMERO DE HECHO	7[156]			
DELITOS LEGALIZADOS	ACTOS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL CONTRA DE PUEBLOS INDIGENAS EN CONCURSO CON DESTRUCCIÓN Y APROPIACIÓN DE BIENES PROTEGIDOS Y DESPLAZAMIENTO FORZADO			
VICTIMA DIRECTA	**ESTENITH PUSHAINA**			
FECHA DE NACIMIENTO	31 DE DICIEMBRE DE 1938			
FECHA DE LOS HECHOS	14 DE DICIEMBRE DE 2002			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR				
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**	0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES				
VÍCTIMA N° 1				
NOMBRES COMPLETOS	ESTENITH PUSHAINA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	27.039.095	
SIJYP	512965			
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-4. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 5-6. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 7.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	100 SMLMV			

[156] Hecho representado por la Dra. DORIS ÁVILA CANTILLO.

LUCRO CESANTE PRESENTE (Desplazamiento Forzado)	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		
NUMERO DE HECHO	8				
DELITOS LEGALIZADOS	ACTOS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL CONTRA DE PUEBLOS INDIGENAS EN CONCURSO CON DESTRUCCIÓN Y APROPIACIÓN DE BIENES PROTEGIDOS Y DESPLAZAMIENTO FORZADO				
VICTIMA DIRECTA	**JOHN JAIRO GUTIERREZ PEDROZA**				
FECHA DE NACIMIENTO	20 DE OCTUBRE DE 1970				
FECHA DE LOS HECHOS	13 DE JULIO DE 2003				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	JOHN JAIRO GUTIERREZ PEDROZA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	84.068.829		
SIJYP	470250				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 9-10. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 11.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	100 SMLMV				

LUCRO CESANTE PRESENTE (Desplazamiento Forzado)	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Para el caso que nos ocupa, los apoderados judicial de estos grupos familiares conformados por los señores **SONIA PATRICIA JUSAYÚ JAYARIYÚ** (Hecho N° 4)**, MARCIAL ANTONIO GARCIA JUSAYÚ** (Hecho N°5)**; RAFAEL JUSAYÚ** (Hecho N°6)**, ESTENITH PUSHAINA** (Hecho N°7) **Y JHON JAIRO GUTIERREZ PEDROZA** (Hecho N°8), presentó las pretensiones indemnizatorias encaminadas a obtener un valor pecuniario por el daño inmaterial ocasionado por el delito de actos de discriminación racial contemplado en el artículo 147[157] del C.P; en ese orden, procede la Sala de Conocimiento a exponer de manera general lo siguiente:

Iniciamos con la definición de la expresión **"discriminación racial"** en los términos del artículo primero de la Convención Internacional Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD de 1965); según la cual señala*: "toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública"*[158]*. (ONU, 1965).*

[157] El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice prácticas de segregación racial o ejerza tratos inhumanos o degradantes basados en otras distinciones de carácter desfavorable que entrañen ultraje contra la dignidad personal, respecto de cualquier persona protegida, incurrirá en prisión de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses, multa de doscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (266.66) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses.
[158] Artículo 1º ICERD.

En lo que concierne a los Instrumentos Internacionales[159], tenemos las declaraciones de muchas organizaciones, entre ellas, Declaración Internacional de los Derechos Humanos (1948)[160]; Declaración de las Naciones Unidas sobre Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (1992) y Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). Entre los Tratados Internacionales, tenemos: *(i)* el Convenio de los Pueblos Indígenas y Tribales de Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (169 de 1989); *(ii)* Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (1965); *(iii)* Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y *(iv)* Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (1966).

Para visibilizar las afectaciones por el delito de "actos de discriminación racial", a los miembros que integran la Comunidad étnica Wayuu ubicadas en el departamento de La Guajira, es necesario destacar el marco jurídico y cultual de las comunidades indígenas en Colombia, que son conceptos fundamentales, tales como la Ley de Origen[161], la Ley Natural[162], el Derecho Mayor o Derecho Propio[163], y bajo los principios de la Unidad y la Autonomía[164], en el contexto de los derechos que se reconocen a través del bloque de Constitucionalidad, la Constitución Política de Colombia, y en especial todas las normas contenidas en

[159] Basado en "La consulta previa a los pueblos indígenas y tribales: Compendio de legislación, jurisprudencia y documentos de Estado", Ministerio del Interior y de Justicia (2006).
[160] Reglamenta en su artículo 2 que "Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición". Este mandato alcanza una mayor especificidad en el artículo 7 de la misma Carta Universal de Derechos cuando establece que *"Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación."*
[161] "Se entiende como el conjunto de normas, principios y valores que rigen la vida y la organización de las comunidades indígenas, basados en su cosmovisión y tradiciones ancestrales.
[162] "Está relacionada con el orden natural y la armonía que las comunidades indígenas buscan mantener con la naturaleza y el universo, según su perspectiva cultural y autoridades tradicionales para resolver conflictos y tomar decisiones.
[163] Se refiere al sistema jurídico propio de las comunidades indígenas, que comprende sus normas, procedimientos y autoridades tradicionales para resolver conflictos y tomar decisiones"
[164] Las comunidades indígenas tienen derecho a gobernarse según sus propias normas y autoridades tradicionales

el Decreto Ley 4633 de 2011[165], Decreto 2333 de 2014 compilado en el Decreto 1071 de 2015, Decreto Ley 902 de 2017, Decreto 1232 de 2018, y el Decreto 1397 de 1996[166], que sirven como parámetros para el estudio de la mencionada pretensión.

Asì mismo, las entrevistas realizadas a varios miembros de la autoridad tradicional y Espiritual de la etnia Wayuu, por parte de servidores de Policìa Judicial y Tècnicos Investigador I, y II, donde e despenden perjuicios causados por el grupo armado ilegal, cuando incursionaron en esa región y fueron desplazados obligándolos abandonar todos sus animales, chichorros , collares, entre otros, situación que va en contra de su cultura Wayuu, tal como lo dice una de las líderes que, *"…parecen Arijuna.."*, término que se utiliza para referirse a los no Wayuu, es decir, a las personas que no pertenecen a su comunidad o cultura.

De manera que, para garantizar y proteger los derechos a las comunidades indígenas, se tendrá en cuenta el **enfoque diferencial** e integral establecido en el Título II del Decreto ley 4633 de 2011, que establece los artículos 47[167], 48[168] y 53[169], para reducir la diferencia existente en toda la comunidad en la relación cultural y espiritual que estos tienen con el territorio a partir de su carácter sagrado

[165] Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.
[166] El Decreto 1397 de 1996 en Colombia creó la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas, con el fin de concertar y evaluar políticas relativas a los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas y supervisar su aplicación, incluyendo aspectos de presupuesto, educación y ordenamiento territorial
[167] **Artículo 47.** *Carácter de las medidas de los sujetos de especial reconocimiento y protección.* Las medidas que se establezcan para las personas reconocidas en este decreto como de especial reconocimiento y protección estarán dirigidas a fortalecer la unidad familiar y la integridad cultural y social de los pueblos indígenas.
[168] Artículo 48. *Derechos prevalentes*. Los derechos de los niños, niñas y jóvenes indígenas víctimas son prevalentes de conformidad con la Ley de Origen, Ley Natural, el Derecho Mayor, el Derecho Propio, la Constitución Política y las Normas de Derechos Humanos y, dado el carácter inadmisible y apremiante de su situación, y su importancia para la permanencia y pervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas a que pertenecen. Las violaciones ejercidas contra ellos y ellas tienen por sí mismas impactos colectivos en los Pueblos Indígenas que deben ser reparados integralmente en los términos de lo contemplado en el presente decreto. Lo anterior, sin perjuicio de las reparaciones integrales individuales a que tengan derecho
[169] *Daños a las personas de especial protección*. Para efectos del presente decreto se evaluarán de manera diferenciada los daños que ocasionen afectaciones a las personas de especial reconocimiento y protección.

y ancestral; de igual manera, el Titulo III que, instituye los artículos 54[170] y 55[171], los alcances de la protección y dimensiones de los pueblos indígenas afectados por el conflicto armado en nuestro país.

Tomando en cuenta lo anterior, y considerando el conjunto de normas e instrumentos internacionales[172] de protección, en aras de respetar, reconocer y preserva su cultura e identidad, la Sala de conocimiento siguiendo tambièn **los lineamientos** de la Corte Constitucional que señala: *"En consecuencia, el principio de enfoque diferencial no implica que las comunidades étnicas estén relevadas del cumplimiento de tal carga probatoria, sino que, para tales fines, se debe atender la cosmovisión del pueblo o comunidad indígena. Razonar de manera diferente, implicaría que en todos los casos en donde aparezca como víctima un integrante de un pueblo o comunidad indígena, se deba, por ese solo hecho, reconocer la indemnización individual, lo que resultaría contrario al derecho a la igualdad y a la distribución proporcional y temporal de los recursos disponibles para costear las indemnizaciones";* **dispone reparar a través de las medidas de satisfacción, y** no se liquidará suma monetaria en relación con el pedimento por daño inmaterial, por cuanto los representantes de víctimas no presentaron argumentación que, les permitiera justificar el monto indemnizatorio solicitado; en ese orden, para garantizar y proteger los derechos a las comunidades indígenas, se tiene :

1.INSTAR al Ministerio de Justicia y de Derecho para que realice esfuerzos acordes con los programas del Estado, encaminados a medidas de atención, asistencia y reparación contenidas en la presente Ley que contribuyan a la **eliminación de los esquemas de discriminación** que pudieron ser la causa de los hechos victimizan es, acorde con los artículos 13 de la Ley 1448 de 2011, así como el artículo 5º del Decreto 4800 de 2011 y los artículos 16, 24, 44, 47,48,49,50 y 51 del Decreto Ley 4633 de 2011.

---

[170]Las medidas de protección contempladas en el presente decreto se desarrollarán en coordinación con las autoridades indígenas, conforme a lo establecido en el artículo 246 de la Constitución Política, la legislación vigente y el bloque de constitucionalidad.

[171] *Dimensiones de la protección de los pueblos indígenas.* El Estado garantiza la protección de los pueblos indígenas en su dimensión colectiva e individual con el fin de detener los factores subyacentes y vinculados al conflicto armado.

[172] *Sentencia del 27 de junio de 2012-Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, Vs. Ecuador- Corte Interamericana de Derechos Humanos*

2. EXORTAR a la red del SNARIV[173] para promocionar actividades de desagravio y reparación del tejido social, con el fin de restaurar la dignidad de las personas afectadas en esa comunidad indígena.

3.El postulado SALVATORE MANCUSO GOMEZ, en aras de brindar su efectiva contribución a la reparación integral frente a esta comunidad étnica deberá comprometerse de conformidad con los artículos 2.2.5.1.2.2.19 del Decreto 1069 de 2015 y 44 de la Ley 975 de 2005, modificado por la Ley 1592 de 2012, al reconocimiento público de responsabilidad, la declaración pública de arrepentimiento y el compromiso de no incurrir en conductas punibles, y participar en los actos simbólicos de resarcimiento y re dignificación de las víctimas, a los que sea convocado dentro de su proceso de reintegración, en coordinación con **la Unidad de Reparación Integral a Víctimas**.

Por otro lado, con relación a las pretensiones indemnizatorias por el **Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:**

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctimas directas **SONIA PATRICIA JUSAYÚ JAYARIYÚ** (Hecho N° 4)**, MARCIAL ANTONIO GARCIA JUSAYÚ** (Hecho N°5)**; RAFAEL JUSAYÚ** (Hecho N°6)**, ESTENITH PUSHAINA** (Hecho N°7) **Y JHON JAIRO GUTIERREZ PEDROZA** (Hecho N°8), en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

[173] Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS								
HECHOS No. 4, 5, 6 y 8.								
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**DAÑOS INMATERIALES**		**DAÑOS MATERIALES**			
						LUCRO CESANTE		**TOTAL**
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL ACTOS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL (EN SMLMV)**	**DAÑO EMERGENTE POR DESPLAZAMIENTO**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO**	**CAUSADO**	**FUTURO**	
SONIA PATRICIA JUSAYÚ JAYARIYU **(Hecho N°4)**	CC	40.880.907	-	-	17.082.000	-	-	17.082.000
MARCIAL ANTONIO GARCÍA JUSAYÚ **(Hecho N°5)**	CC	84.062.220	-	-	17.082.000	-	-	17.082.000
RAFAEL JUSAYÚ **(Hecho N°6)**	CC	2.739.169	-	-	17.082.000	-	-	17.082.000
ESTENITH PUSHAINA **(Hecho N° 7)**	CC	27.039.095	-	-	17.082.000	-	-	17.082.000
JOHN JAIRO GUTIERREZ PEDROZA **(Hecho N°8)**	CC	84.068.829	-	-	17.082.000	-	-	17.082.000
TOTAL								**85.410.000**

- **PATRÓN DE MACROCRIMINALIDAD DE DESAPARICIÓN FORZADA**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NÚMERO DE HECHO		2			
DELITOS LEGALIZADOS		DESAPARICIÓN FORZADA			
VICTIMA DIRECTA		**LUIS ANTONIO BERRIO TORO**			
FECHA DE NACIMIENTO		CEDULA DE CIUDADANIA INCOMPLETA			
FECHA DE LOS HECHOS		13 DE JULIO DE 2003			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**			0
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS		LUIS MIGUEL BERRIO DELUQUE			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**		17.089.891
SIJYP		761329			
PARENTESCO		PADRE			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS		**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-10. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 11. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 12. **4.** Registro civil de nacimiento de la víctima directa No 10909141. Folio 13. **5.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 14.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL		250 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE		$371.473.670			
LUCRO CESANTE FUTURO		172.242.123			
TOTAL, DAÑOS Y PERJUICIOS		543.715.793.			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN		**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN		**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 2					
NOMBRES COMPLETOS		CARLOS ALBERTO FUENMAYOR TORO			

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.118.852.368	
SIJYP	761329			
PARENTESCO	HERMANO			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 15-17. **2.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 16. **3.** Registro civil de nacimiento de la víctima directa N° 29252931. Folio 18. **4.** Declaración extraproceso de afectaciones. Folio 19.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	100 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 3				
NOMBRES COMPLETOS	ELEIDIS MARIA GÓMEZ TORO			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.933.506	
SIJYP	761329			
PARENTESCO	HERMANA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 25-26. **2.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 27. **3.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 25835408. Folio 28. **4.** Declaración extraproceso de afectaciones. Folio 29.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	100 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 4				
NOMBRES COMPLETOS	NORALIS TORO MOLINA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.939.273	

SIJYP	761329				
PARENTESCO	HERMANA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 30-31. **2.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 32. **3.** Declaración extraproceso de afectaciones. Folio 33.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	100 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		
VÍCTIMA N° 5					
NOMBRES COMPLETOS	KARLA CARINA FUENMAYOR TORO				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.118.835.667		
SIJYP	761329				
PARENTESCO	HERMANA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 34-35. **2.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 36. **3.** Fotocopia de registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 1.118.835.667. Folio 37. **4.** Declaración extraproceso de afectaciones. Folio 38.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	100 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Se le reconoce por concepto de daño moral la suma de 100 SMLMV, a favor del señor **LUIS MIGUEL BERRIO DELUQUE,** quien acreditó el parentesco con

el occiso, quien en vida se llamaba **LUIS ANTONIO BERRIO TORO**, en ocasión al delito de Desaparición Forzada, y no lo solicitado por el apoderado, de conformidad con lo descrito en el acápite denominado *"Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia.

Respecto a los hermanos de la víctima directa, señores **ELEIDIS MARIA GOMEZ TORO, NORALIS TORO MOLINA, KARLA KARINA FUENMAYOR TORO Y CARLOS ALFREDO FUENMAYOR TORO y LUIS ANDERSON BERRIO DELUQUE,** se les reconoce a cada uno de los miembros del grupo familiar la suma de 50 SMLMV, por concepto de daño moral por la desaparición forzada y homicidio de su hermano; y no se accede al valor solicitado por el apoderado en atención a los parámetros descrito en esta sentencia en el acápite denominado *"Montos a indemnizar por concepto de daño moral"*.

Perjuicio material: No solicitaron pretensiones indemnizatorias.

Lucro cesante causado y futuro.

Se deniega estos conceptos, porque no fue aportada la fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa, situación que no permite proceder con la liquidación de la reclamación invocada, toda vez, que no es posible señalar la probabilidad de vida entre la víctima directa y su progenitor; además, porque no fueron aportados elementos de convicción que demuestren que la víctima indirecta dependía económicamente de su hijo.

Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 2						
LUIS MIGUEL BERRIO TORO						
RECLAMANTE	IDENTIFICACION		ITEMS RECONOCIDOS			
			DAÑOS INMATERIALES	DAÑOS MATERIALES		
				LUCRO CESANTE		
	TIPO	NUMERO	PERJUCIO MORAL (EN SMLMV)	CAUSADO	FUTURO	TOTAL
LUIS MIGUEL BERRIO DELUQUE	CC	17.089.891	142.350.000	-	-	142.350.000
CARLOS ALBERTO FUENMAYOR TORO	CC	1.118.852.368	71.175.000	-	-	71.175.000
ELEIDIS MARIA GÓMEZ TORO	CC	40.933.506	71.175.000	-	-	71.175.000
NORALIS TORO MOLINA	CC	40.939.273	71.175.000	-	-	71.175.000
KARLA CARINA FUENMAYOR TORO	CC	1.118.835.667	71.175.000	-	-	71.175.000
TOTAL						**427.050.000**

- **PATRÓN DE MACROCRIMINALIDAD DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1			
DELITOS LEGALIZADOS	**ACCESO CARNAL VIOLENTO** EN PERSONA PROTEGIDA CONCURSO CON TORTURA EN PERSONA PROTEGIDA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO			
VICTIMA DIRECTA	**D.L.R.P.**			
FECHA DE NACIMIENTO	15 DE AGOSTO DE 1973			
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE SEPTIEMBRE DE 2002			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR				
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**	0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES				
VÍCTIMA N° 1				
NOMBRES COMPLETOS	D.L.R.P.			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.930.493	
SIJYP	688527			
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-9. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 10. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 11. **4.** Informe psicológico actividades periciales forenses de la Defensoría del pueblo. Folios 12-20.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (Acceso Carnal Violento)	200 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)	50 SMLMV			
AFECTACIÓN PSICOLÓGICA Y DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN	200 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado *"Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de daño moral a favor de la señora **D.L.R.P.**, en ocasión al delito de Acceso carnal violento en persona protegida, la suma equivalente a 100 SMLMV.

Como existe reclamación por el delito de desplazamiento forzado, el cual fue legalizado se reconoce la suma de 50 SMLMV, a la víctima directa.

En lo pertinente a la petición elevada por el apoderado de la víctima, relacionada con la afectación psicológica y el daño a la vida de relación, la Sala de decisión, concede lo peticionado en la **suma de 50 SMLMV**, atendiendo las pruebas aportadas, entre las cuales, se encuentra la valoración realizada a la víctima directa por la perito psicóloga[174] adscrita a la Defensoría del Pueblo, quien concluyó especificando las lesiones física y psíquicas que ocasionan sufrimiento emocional, pérdida o daño material y pérdida o menoscabo en los derechos (visible a folios 12-20).

Perjuicio material: No solicitaron pretensiones indemnizatorias.
Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

[174] Entrevista clínico-forense y Prueba de Reconocimiento, (Pruebas Psicométricas)- realizadas por la doctora Beatriz Carrillo Murillo.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1									
D.L.R.P.									
RECLAMANTE	IDENTIFICACION		ITEMS RECONOCIDOS						
			DAÑOS INMATERIALES			DAÑOS MATERIALES			
						LUCRO CESANTE			
	TIPO	NUMERO	PERJUICIO MORAL ACCESO CARNAL VIOLENTO (EN SMLMV)	PERJUICIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	PERJUICIO MORAL DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN (EN SMLMV)	LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	CAUSADO	FUTURO	TOTAL
D.L.R.P.	CC	40.930.493	142.350.000	71.175.000	71.175.000	-	-	-	284.700.000
TOTAL									**284.700.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	3				
DELITOS LEGALIZADOS	ACCESO CARNAL VIOLENTO EN PERSONA PROTEGIDA CONCURSO CON TORTURA EN PERSONA PROTEGIDA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO				
VICTIMA DIRECTA	**C.J.P.A.**				
FECHA DE NACIMIENTO	28 DE MARZO DE 1971				
FECHA DE LOS HECHOS	02 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	C.J.P.A.				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.924.810		
SIJYP	575597				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 9.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Acceso Carnal Violento)	200 SMLMV				
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)	50 SMLMV				
AFECTACIÓN PSICOLÓGICA Y DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN	200 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado" *Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de daño moral a favor de la señora **C.J.P.A.**, en ocasión al delito de Acceso carnal violento en persona protegida, la suma equivalente a 100 SMLMV.

Como existe reclamación por el delito de desplazamiento forzado, el cual fue legalizado se reconoce la suma de 50 SMLMV, a la víctima directa.

En lo pertinente a la petición elevada por el apoderado de la víctima, relacionada con la afectación psicológica y el daño a la vida de relación, la Sala de decisión, no accede a las pretensiones indemnizatorias, por cuanto no se observa en la carpeta digital ningún elemento material probatorio que conduzca probar el daño o las modificaciones graves que le afectan a la víctima ante la sociedad y su núcleo familiar, u otra alteración negativa en su estado emocional, como consecuencia ocasión a la conducta atroz cometida por el grupo armado ilegal.

Perjuicio material: No solicitaron pretensiones indemnizatorias.

Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 3									
C.J.P.A.									
RECLAMANTE	IDENTIFICACION		ITEMS RECONOCIDOS						
			DAÑOS INMATERIALES			DAÑOS MATERIALES			
						LUCRO CESANTE			
	TIPO	NUMERO	PERJUCIO MORAL ACCESO CARNAL VIOLENTO (EN SMLMV)	PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	PERJUCIO MORAL DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN (EN SMLMV)	LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	CAUSADO	FUTURO	TOTAL
C.J.P.A.	CC	40.924.810	142.350.000	71.175.000	-	-	-	-	213.525.000
TOTAL									**213.525.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO		4			
DELITOS LEGALIZADOS		ACCESO CARNAL VIOLENTO EN PERSONA PROTEGIDA CONCURSO CON TORTURA EN PERSONA PROTEGIDA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO			
VICTIMA DIRECTA		**J.E.D.M.**			
FECHA DE NACIMIENTO		20 DE EJULIO DE 1973			
FECHA DE LOS HECHOS		12 DE MAYO DE 2002			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS		J.E.D.M.			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	56.084.262	
SIJYP		535592			
PARENTESCO		VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS		**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-9. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 10-11. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 12. **4.** Informe psicológico actividades periciales forenses de la Defensoría del pueblo. Folios 13-30.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Acceso Carnal Violento)		200 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)		50 SMLMV			
AFECTACIÓN PSICOLÓGICA Y DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN		200 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN		**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN		**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado" *Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de daño moral a favor de la señora **J.E.D.M**, en ocasión al delito de Acceso carnal violento en persona protegida, la suma equivalente a 100 SMLMV.

Como existe reclamación por el delito de desplazamiento forzado, el cual fue legalizado se reconoce la suma de 50 SMLMV, a la víctima directa.

En lo pertinente a la petición elevada por el apoderado de la víctima, relacionada con la afectación psicológica y el daño a la vida de relación, la Sala de decisión, concede lo peticionado en la **suma de 50 SMLMV**, atendiendo las pruebas aportadas, entre las cuales, se encuentra la valoración realizada a la víctima directa por la perito psicóloga[175] adscrita a la Defensoría del Pueblo, quien concluyó especificando las lesiones física y psíquicas que ocasionan sufrimiento emocional, pérdida o daño material y pérdida o menoscabo en los derechos (visible a folios 13-30).

Perjuicio material: No solicitaron pretensiones indemnizatorias.

Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

[175] Entrevista clínico-forense y Prueba de Reconocimiento, (Pruebas Psicométricas)- realizadas por la doctora Beatriz Carrillo Murillo.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 4									
J.D.E.M.									
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**						
			DAÑOS INMATERIALES			**DAÑOS MATERIALES**			
						LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL ACCESO CARNAL VIOLENTO (EN SMLMV)**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**PERJUCIO MORAL DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
J.D.E.M.	CC	56.084.262	142.350.000	71.175.000	71.175.000	-	-	-	284.700.000
TOTAL									**284.700.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO		5			
DELITOS LEGALIZADOS		ACCESO CARNAL VIOLENTO EN PERSONA PROTEGIDA CONCURSO CON TORTURA EN PERSONA PROTEGIDA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO			
VICTIMA DIRECTA		**Y.R.A.**			
FECHA DE NACIMIENTO		16 DE DICIEMBRE DE 1987			
FECHA DE LOS HECHOS		09 DE JULIO DE 2002			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS		Y.R.A.			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.118.820.827	
SIJYP		575598			
PARENTESCO		VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS		**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folio 9. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Acceso Carnal Violento)		200 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)		100 SMLMV			
AFECTACIÓN PSICOLÓGICA Y DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN		200 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN		**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN		**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado" *Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de daño moral a favor de la señora **Y.R.A** en ocasión al delito de Acceso carnal violento en persona protegida, la suma equivalente a 100 SMLMV.

Como existe reclamación por el delito de desplazamiento forzado, el cual fue legalizado se reconoce la suma de 50 SMLMV, a la víctima directa.

En lo pertinente a la petición elevada por el apoderado de la víctima, relacionada con la afectación psicológica y el daño a la vida de relación, la Sala de decisión, no accede a las pretensiones indemnizatorias, por cuanto no se observa en la carpeta digital ningún elemento material probatorio que conduzca probar el daño o las modificaciones graves que le afectan a la víctima ante la sociedad y su núcleo familiar, u otra alteración negativa en su estado emocional, como consecuencia ocasión a la conducta atroz cometida por el grupo armado ilegal.

Perjuicio material: No solicitaron pretensiones indemnizatorias.

Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 5									
Y.R.A.									
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**						
			DAÑOS INMATERIALES			**DAÑOS MATERIALES**			
						LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL ACCESO CARNAL VIOLENTO (EN SMLMV)**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**PERJUCIO MORAL DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
Y.R.A.	CC	1.118.820.827	142.350.000	71.175.000	-	-	-	-	213.525.000
TOTAL									**213.525.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO		6			
DELITOS LEGALIZADOS		ACCESO CARNAL VIOLENTO EN PERSONA PROTEGIDA CONCURSO CON TORTURA EN PERSONA PROTEGIDA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO			
VICTIMA DIRECTA		**Y.P.P.B.**			
FECHA DE NACIMIENTO		21 DE DICIEMBRE DE 1977			
FECHA DE LOS HECHOS		01 DE SEPTIEMBRE DE 2001			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS		Y.P.P.B.			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.931.621	
SIJYP		688527			
PARENTESCO		VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS		**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 9. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Acceso Carnal Violento)		200 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)		50 SMLMV			
AFECTACIÓN PSICOLÓGICA Y DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN		200 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN		**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN		**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado *"Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de daño moral a favor de la señora **Y.P.P.B**, en ocasión al delito de Acceso carnal violento en persona protegida, la suma equivalente a 100 SMLMV.

Como existe reclamación por el delito de desplazamiento forzado, el cual fue legalizado se reconoce la suma de 50 SMLMV, a la víctima directa.

En lo pertinente a la petición elevada por el apoderado de la víctima, relacionada con la afectación psicológica y el daño a la vida de relación, la Sala de decisión, no accede a las pretensiones indemnizatorias, por cuanto no se observa en la carpeta digital ningún elemento material probatorio que conduzca probar el daño o las modificaciones graves que le afectan a la víctima ante la sociedad y su núcleo familiar, u otra alteración negativa en su estado emocional, como consecuencia ocasión a la conducta atroz cometida por el grupo armado ilegal.

Perjuicio material: No solicitaron pretensiones indemnizatorias.

Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No.6									
Y.P.P.B									
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**						
			DAÑOS INMATERIALES			**DAÑOS MATERIALES**			
						LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL ACCESO CARNAL VIOLENTO (EN SMLMV)**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**PERJUCIO MORAL DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
Y.P.P.B	CC	40.931.621	142.350.000	71.175.000	-	-	-	-	213.525.000
TOTAL									**213.525.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	9				
DELITOS LEGALIZADOS	ACCESO CARNAL VIOLENTO EN PERSONA PROTEGIDA CONCURSO CON TORTURA EN PERSONA PROTEGIDA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO				
VICTIMA DIRECTA	**L.M.L.N.**				
FECHA DE NACIMIENTO	02 DE ENERO DE 1984				
FECHA DE LOS HECHOS	2/02/2004				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	L.M.L.N.				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.943.381		
SIJYP	708808				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios10. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Acceso Carnal Violento)	200 SMLMV				
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)	50 SMLMV				
AFECTACIÓN PSICOLÓGICA Y DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN	200 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado *"Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de daño moral a favor de la señora **L.M.L.N**, en ocasión al delito de Acceso carnal violento en persona protegida, la suma equivalente a 100 SMLMV.

Como existe reclamación por el delito de desplazamiento forzado, el cual fue legalizado se reconoce la suma de 50 SMLMV, a la víctima directa.
En lo pertinente a la petición elevada por el apoderado de la víctima, relacionada con la afectación psicológica y el daño a la vida de relación, la Sala de decisión, no accede a las pretensiones indemnizatorias, por cuanto no se observa en la carpeta digital ningún elemento material probatorio que conduzca probar el daño o las modificaciones graves que le afectan a la víctima ante la sociedad y su núcleo familiar, u otra alteración negativa en su estado emocional, como consecuencia ocasión a la conducta atroz cometida por el grupo armado ilegal.

Perjuicio material: No solicitaron pretensiones indemnizatorias.

Otras Medidas:

El apoderando de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 9									
L.M.L.N.									
RECLAMANTE	IDENTIFICACION		ITEMS RECONOCIDOS						
			DAÑOS INMATERIALES			DAÑOS MATERIALES			
						LUCRO CESANTE			
	TIPO	NUMERO	PERJUCIO MORAL ACCESO CARNAL VIOLENTO (EN SMLMV)	PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	PERJUCIO MORAL DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN (EN SMLMV)	LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	CAUSADO	FUTURO	TOTAL
L.M.L.N.	CC	40.943.381	142.350.000	71.175.000	-	-	-	-	213.525.000
TOTAL									**213.525.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO		10			
DELITOS LEGALIZADOS		ACCESO CARNAL VIOLENTO EN PERSONA PROTEGIDA CONCURSO CON TORTURA EN PERSONA PROTEGIDA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO			
VICTIMA DIRECTA		**M.P.P.V.**			
FECHA DE NACIMIENTO		29 DE OCTUBRE DE 1983			
FECHA DE LOS HECHOS		20 DE FEBRERO DE 2004			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS		M.P.P.V.			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.941.542	
SIJYP		575797			
PARENTESCO		VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS		**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 11. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 12.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Acceso Carnal Violento)		200 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)		100 SMLMV			
AFECTACIÓN PSICOLÓGICA Y DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN		200 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN		**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN		**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado *"Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de daño moral a favor de la señora **M.P.P.V**, en ocasión al delito de Acceso carnal violento en persona protegida, la suma equivalente a 100 SMLMV.

Como existe reclamación por el delito de desplazamiento forzado, el cual fue legalizado se reconoce la suma de 50 SMLMV, a la víctima directa.

En lo pertinente a la petición elevada por el apoderado de la víctima, relacionada con la afectación psicológica y el daño a la vida de relación, la Sala de decisión, no accede a las pretensiones indemnizatorias, por cuanto no se observa en la carpeta digital ningún elemento material probatorio que conduzca probar el daño o las modificaciones graves que le afectan a la víctima ante la sociedad y su núcleo familiar, u otra alteración negativa en su estado emocional, como consecuencia ocasión a la conducta atroz cometida por el grupo armado ilegal.

Perjuicio material: No solicitaron pretensiones indemnizatorias.

Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 10									
M.P.P.V.									
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**						
			DAÑOS INMATERIALES			**DAÑOS MATERIALES**			
						LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL ACCESO CARNAL VIOLENTO (EN SMLMV)**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**PERJUCIO MORAL DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
M.P.P.V.	CC	40.941.542	142.350.000	71.175.000	-	-	-	-	213.525.000
TOTAL									**213.525.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO		11			
DELITOS LEGALIZADOS		ACCESO CARNAL VIOLENTO EN PERSONA PROTEGIDA CONCURSO CON TORTURA EN PERSONA PROTEGIDA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO			
VICTIMA DIRECTA		**A.E.C.C.**			
FECHA DE NACIMIENTO		03 DE SEPTIEMBRE DE 1970			
FECHA DE LOS HECHOS		12 DE MARZO DE 2004			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS		A.E.C.C.			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	84.035.544	
SIJYP		710957			
PARENTESCO		VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS		**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 11. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 12.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Acceso Carnal Violento)		200 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)		50 SMLMV			
AFECTACIÓN PSICOLÓGICA Y DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN		200 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN		**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN		**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado *"Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de daño moral a favor de la señora **A.E.C.C**, en ocasión al delito de Acceso carnal violento en persona protegida, la suma equivalente a 100 SMLMV.

Como existe reclamación por el delito de desplazamiento forzado, el cual fue legalizado se reconoce la suma de 50 SMLMV, a la víctima directa.

En lo pertinente a la petición elevada por el apoderado de la víctima, relacionada con la afectación psicológica y el daño a la vida de relación, la Sala de decisión, no accede a las pretensiones indemnizatorias, por cuanto no se observa en la carpeta digital ningún elemento material probatorio que conduzca probar el daño o las modificaciones graves que le afectan a la víctima ante la sociedad y su núcleo familiar, u otra alteración negativa en su estado emocional, como consecuencia ocasión a la conducta atroz cometida por el grupo armado ilegal.

Perjuicio material: No solicitaron pretensiones indemnizatorias.

Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 11									
A.E.C.C.									
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**						
			DAÑOS INMATERIALES			**DAÑOS MATERIALES**			
						LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL ACCESO CARNAL VIOLENTO (EN SMLMV)**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**PERJUCIO MORAL DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
A.E.C.C.	CC	84.035.544	142.350.000	71.175.000	-	-	-	-	213.525.000
TOTAL									**213.525.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO		11			
DELITOS LEGALIZADOS		ACCESO CARNAL VIOLENTO EN PERSONA PROTEGIDA CONCURSO CON TORTURA EN PERSONA PROTEGIDA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO			
VICTIMA DIRECTA		**Z.B.C.C.**			
FECHA DE NACIMIENTO		02 DE NOVIEMBRE DE 1972			
FECHA DE LOS HECHOS		12 DE MARZO DE 2004			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS		Z.B.C.C.			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.926.758	
SIJYP		710957			
PARENTESCO		VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS		**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 11. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 12.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Acceso Carnal Violento)		200 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)		50 SMLMV			
AFECTACIÓN PSICOLÓGICA Y DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN		200 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN		**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN		**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado *"Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de daño moral a favor de la señora **Z.B.C.C**, en ocasión al delito de Acceso carnal violento en persona protegida, la suma equivalente a 100 SMLMV.

Como existe reclamación por el delito de desplazamiento forzado, el cual fue legalizado se reconoce la suma de 50 SMLMV, a la víctima directa.

En lo pertinente a la petición elevada por el apoderado de la víctima, relacionada con la afectación psicológica y el daño a la vida de relación, la Sala de decisión, no accede a las pretensiones indemnizatorias, por cuanto no se observa en la carpeta digital ningún elemento material probatorio que conduzca probar el daño o las modificaciones graves que le afectan a la víctima ante la sociedad y su núcleo familiar, u otra alteración negativa en su estado emocional, como consecuencia ocasión a la conducta atroz cometida por el grupo armado ilegal.

Perjuicio material: No solicitaron pretensiones indemnizatorias.

Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

UADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 11									
Z.B.C.C.									
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**						
			DAÑOS INMATERIALES			**DAÑOS MATERIALES**			
						LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL ACCESO CARNAL VIOLENTO (EN SMLMV)**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**PERJUCIO MORAL DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
Z.B.C.C.	CC	40.926.758	142.350.000	71.175.000	-	-	-	-	213.525.000
TOTAL									**213.525.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	13				
DELITOS LEGALIZADOS	ACCESO CARNAL VIOLENTO EN PERSONA PROTEGIDA CONCURSO CON TORTURA EN PERSONA PROTEGIDA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO				
VICTIMA DIRECTA	**L.V.Q.G.**				
FECHA DE NACIMIENTO	01 DE ENERO DE 1991				
FECHA DE LOS HECHOS	14 DE JUNIO DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	L.V.Q.G.				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**		1.118.834.775	
SIJYP	575411				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 10. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 11.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Acceso Carnal Violento)	200 SMLMV				
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)	50 SMLMV				
AFECTACIÓN PSICOLÓGICA Y DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN	200 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X		**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X		**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado *"Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de daño moral a favor de la señora **L.V.Q.G**, en ocasión al delito de Acceso carnal violento en persona protegida, la suma equivalente a 100 SMLMV.

Como existe reclamación por el delito de desplazamiento forzado, el cual fue legalizado se reconoce la suma de 50 SMLMV, a la víctima directa.

En lo pertinente a la petición elevada por el apoderado de la víctima, relacionada con la afectación psicológica y el daño a la vida de relación, la Sala de decisión, no accede a las pretensiones indemnizatorias, por cuanto no se observa en la carpeta digital ningún elemento material probatorio que conduzca probar el daño o las modificaciones graves que le afectan a la víctima ante la sociedad y su núcleo familiar, u otra alteración negativa en su estado emocional, como consecuencia ocasión a la conducta atroz cometida por el grupo armado ilegal.

Perjuicio material: No solicitaron pretensiones indemnizatorias.

Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 13									
L.V.Q.G.									
RECLAMANTE	IDENTIFICACION		ITEMS RECONOCIDOS						
			DAÑOS INMATERIALES			DAÑOS MATERIALES			
						LUCRO CESANTE			
	TIPO	NUMERO	PERJUCIO MORAL ACCESO CARNAL VIOLENTO (EN SMLMV)	PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	PERJUCIO MORAL DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN (EN SMLMV)	LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	CAUSADO	FUTURO	TOTAL
L.V.Q.G.	CC	1.118.834.775	142.350.000	71.175.000	-	-	-	-	213.525.000
TOTAL									**213.525.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO		14			
DELITOS LEGALIZADOS		ACCESO CARNAL VIOLENTO EN PERSONA PROTEGIDA CONCURSO CON TORTURA EN PERSONA PROTEGIDA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO			
VICTIMA DIRECTA		**S.S.O.O.**			
FECHA DE NACIMIENTO		08 DE NOVIEMBRE DE 1985			
FECHA DE LOS HECHOS		19 DE JULIO DE 2004			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS		S.S.O.O.			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.944.732	
SIJYP		575398			
PARENTESCO		VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS		**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 11-12. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 13.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Acceso Carnal Violento)		200 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)		100 SMLMV			
AFECTACIÓN PSICOLÓGICA Y DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN		200 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN		**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN		**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado *"Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de daño moral a favor de la señora **S.S.O.O**, en ocasión al delito de Acceso carnal violento en persona protegida, la suma equivalente a 100 SMLMV.

Como existe reclamación por el delito de desplazamiento forzado, el cual fue legalizado se reconoce la suma de 50 SMLMV, a la víctima directa.

En lo pertinente a la petición elevada por el apoderado de la víctima, relacionada con la afectación psicológica y el daño a la vida de relación, la Sala de decisión, no accede a las pretensiones indemnizatorias, por cuanto no se observa en la carpeta digital ningún elemento material probatorio que conduzca probar el daño o las modificaciones graves que le afectan a la víctima ante la sociedad y su núcleo familiar, u otra alteración negativa en su estado emocional, como consecuencia ocasión a la conducta atroz cometida por el grupo armado ilegal.

Perjuicio material: No solicitaron pretensiones indemnizatorias.

Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 14									
S.S.O.O.									
RECLAMANTE	IDENTIFICACION		ITEMS RECONOCIDOS						
			DAÑOS INMATERIALES			DAÑOS MATERIALES			
						LUCRO CESANTE			
	TIPO	NUMERO	PERJUCIO MORAL ACCESO CARNAL VIOLENTO (EN SMLMV)	PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	PERJUCIO MORAL DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN (EN SMLMV)	LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	CAUSADO	FUTURO	TOTAL
S.S.O.O.	CC	40.944.732	142.350.000	71.175.000	-	-	-	-	213.525.000
TOTAL									**213.525.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO		16			
DELITOS LEGALIZADOS		ACCESO CARNAL VIOLENTO EN PERSONA PROTEGIDA EN CONCURSO CON TORTURA EN PERSONA PROTEGIDA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO			
VICTIMA DIRECTA		**E.T.G.B.**			
FECHA DE NACIMIENTO		21 DE SEPTIEMBRE DE 1979			
FECHA DE LOS HECHOS		20 DE NOVIEMBRE DE 2004			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS		E.T.G.B.			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.935.237	
SIJYP		708866			
PARENTESCO		VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS		**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 11- **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 12			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Acceso Carnal Violento)		200 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)		100 SMLMV			
AFECTACIÓN PSICOLÓGICA Y DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN		200 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN		**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN		**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado "*Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de daño moral a favor de la señora **E.T.G.B**, en ocasión al delito de Acceso carnal violento en persona protegida, la suma equivalente a 100 SMLMV.

Como existe reclamación por el delito de desplazamiento forzado, el cual fue legalizado se reconoce la suma de 50 SMLMV, a la víctima directa.

En lo pertinente a la petición elevada por el apoderado de la víctima, relacionada con la afectación psicológica y el daño a la vida de relación, la Sala de decisión, no accede a las pretensiones indemnizatorias, por cuanto no se observa en la carpeta digital ningún elemento material probatorio que conduzca probar el daño o las modificaciones graves que le afectan a la víctima ante la sociedad y su núcleo familiar, u otra alteración negativa en su estado emocional, como consecuencia ocasión a la conducta atroz cometida por el grupo armado ilegal.

Perjuicio material: No solicitaron pretensiones indemnizatorias.

Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 16									
E.T.G.B.									
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**						
			DAÑOS INMATERIALES			**DAÑOS MATERIALES**			
						LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUICIO MORAL ACCESO CARNAL VIOLENTO (EN SMLMV)**	**PERJUICIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**PERJUICIO MORAL DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
E.T.G.B.	CC	40.935.237	142.350.000	71.175.000	-	-	-	-	213.525.000
TOTAL									**213.525.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO		17			
DELITOS LEGALIZADOS		ACCESO CARNAL VIOLENTO EN PERSONA PROTEGIDA CONCURSO CON TORTURA EN PERSONA PROTEGIDA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO			
VICTIMA DIRECTA		**M.Y.M.R.**			
FECHA DE NACIMIENTO		03 DE ABRIL DE 1972			
FECHA DE LOS HECHOS		01 DE DICIEMBRE DE 2002			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS		M.Y.M.R.			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.925.389	
SIJYP		700023			
PARENTESCO		VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS		**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 9. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10. **4.** Informe psicológico actividades periciales forenses de la defensoría del pueblo. Folio 11-16.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Acceso Carnal Violento)		200 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)		50 SMLMV			
AFECTACIÓN PSICOLÓGICA Y DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN		200 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN		**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN		**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado *"Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de daño moral a favor de la señora **M.Y.M.R**, en ocasión al delito de Acceso carnal violento en persona protegida, la suma equivalente a 100 SMLMV.

Como existe reclamación por el delito de desplazamiento forzado, el cual fue legalizado se reconoce la suma de 50 SMLMV, a la víctima directa.

En lo pertinente a la petición elevada por el apoderado de la víctima, relacionada con la afectación psicológica y el daño a la vida de relación, la Sala de decisión, concede lo peticionado en la **suma de 50 SMLMV**, atendiendo las pruebas aportadas, entre las cuales, se encuentra la valoración realizada a la víctima directa por la perito psicóloga[176] adscrita a la Defensoría del Pueblo, quien concluyó especificando las lesiones física y psíquicas que ocasionan sufrimiento emocional, pérdida o daño material y pérdida o menoscabo en los derechos (visible a folios 11-16).

Perjuicio material: No solicitaron pretensiones indemnizatorias.

Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

[176] Entrevista clínico-forense y Prueba de Reconocimiento, (Pruebas Psicométricas)- realizadas por la doctora Beatriz Carrillo Murillo.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 17									
M.Y.M.R.									
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**						
			DAÑOS INMATERIALES			**DAÑOS MATERIALES**			
						LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL ACCESO CARNAL VIOLENTO (EN SMLMV)**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**PERJUCIO MORAL DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
M.Y.M.R.	CC	40.925.389	142.350.000	71.175.000	71.175.000	-	-	-	284.700.000
TOTAL									**284.700.000**

DOCTOR JOSE ASCENDRA PALACIO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO		**14**			
DELITOS LEGALIZADOS		HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA			
VICTIMA DIRECTA		**ROGELIO RAFAEL BELTRAN CHEPEZ**			
FECHA DE NACIMIENTO		**4 DE AGOSTO DE 1964**			
FECHA DE LOS HECHOS		**4 DE ABRIL DE 2004**			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS		**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**			1
HERMANOS	1	**PADRE**		**MADRE**	

VÍCTIMAS RECLAMANTES			
VÍCTIMA N° 1			
NOMBRES COMPLETOS	ADALIS JUDITH CASTRO ORDOÑEZ		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	57.308.050
SIJYP	306297		
PARENTESCO	Compañera Permanente		
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-2. **2.** Poder Conferido. Folios 3-5. **3.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 6. **4.** Certificación de la cedula de ciudadanía de la víctima directa de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Folio 7. **5.** Declaración extra proceso de convivencia. Folios 8-9. **6.** Registro civil de nacimiento de la víctima directa N° 5309835. Folio 11		
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS			
DAÑO MORAL (Homicidio)	100 SMLMV		
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**		**NO**
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**		**NO**
VÍCTIMA N° 2			
NOMBRES COMPLETOS	FANNY JUDITH BELTRAN YEPES		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	32.816.329
SIJYP	306297		
PARENTESCO	Hermana		
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	1. Poder Conferido. Folios 12-14. 2. Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 15. 3. Registro civil de Nacimiento de la víctima indirecta N° 39578022. Folio 16.		
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS			
DAÑO MORAL (Homicidio)	100 SMLMV		
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	x	**NO**

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	x	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado "*Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce a favor de la señora **ADALIS JUDITH CASTRO ORDOÑEZ,** en calidad de compañera permanente, una suma equivalente a **100 SMLMV** por concepto de daño moral derivado del delito **HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA**, acaecido a la víctima directa.

Con relación a la hermana de la víctima directa, señora **FANNY JUDITH BELTRÁN YEPES,** quien se encuentra en el segundo grado de consanguinidad, no solo debe probar el parentesco sino también el daño real causado o el perjuicio indemnizable; situación que fue omitida dentro de las pruebas aportadas al expediente digital, por su representante legal; en ese orden, se deniega la pretensión solicitada por la peticionaria.

Otras medidas

El apoderado de las víctimas, doctor REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 14						
ROGELIO RAFAEL BELTRAN CHEPEZ						
RECLAMANTE	**IDENTIFICACIÓN**			**DAÑOS MATERIALES**		
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE**		
				CAUSADO	**FUTURO**	**TOTAL**
ADALIS JUDITH CASTRO ORDOÑEZ	CC	57.308.050	71.175.000	-	-	71.175.000
FANNY JUDITH BELTRAN YEPES	CC	32.816.329	-	-	-	-
TOTAL						71.175.000

DOCTOR JOSE ASCENDRA PALACIO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO		**5**		
DELITOS LEGALIZADOS		ACCESO CARNAL VIOLENTO EN PERSONA PROTEGIDA CONCURSO CON TORTUTA EN PERSONA PROTEGIDA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO		
VICTIMA DIRECTA		**K.Y.P.M**		
FECHA DE NACIMIENTO		**24 DE OCTUBRE DE 1981**		
FECHA DE LOS HECHOS				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR				
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0
VÍCTIMAS RECLAMANTES				
VÍCTIMA N° 1				
NOMBRES COMPLETOS		**K.Y.P.M**		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.940.629
SIJYP		536066		
PARENTESCO		Victima Directa		
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS		1. Escrito Incidente de Reparación integral a víctimas. Folios 1-6. 2. Poder Conferido. Folios 7-8. 3. Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 9.		
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (Acceso Carnal Violento)		100 SMLMV		
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)		100 SMLMV		
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN		**SI**	X	**NO**
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN		**SI**	X	**NO**

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado "*Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce a favor de la señora **K.Y.P.M,** en calidad de víctima directa, una suma equivalente a 100

SMLMV por concepto de daño moral derivado del delito de ACCESO CARNAL VIOLENTO.

Como existe reclamación indemnizatoria por el delito DESPLAZAMIENTO FORZADO por parte de la señora **K.Y.P.M**, en calidad de víctima directa, se reconoce por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, el monto de cincuenta (50) SMMLV.

Otras medidas

El apoderado de las víctimas, doctor REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 5							
K.Y.P.M							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES		**DAÑOS MATERIALES**		
					LUCRO CESANTE		
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL ACCESO CARNAL VIOLENTO (EN SMLMV)**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
K.Y.P.M	CC	40.940.629	142.350.000	71.175.000	-	-	213.525.000
TOTAL							213.525.000

INCIDENTES DE REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS DIFERIDOS.

Los representantes de víctimas en la sustentación de todos los incidentes diferidos de reparación integral a víctimas en el marco de Justicia Transicional, hicieron referencia concretamente a la sentencia condenatoria de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, proferida el 20 de noviembre de 2014[177], siendo Magistrada Ponente, doctora LESTER MARIA GONZALEZ R., mediante la cual se legalizaron los cargos formulados por la Fiscalía y consecuentemente se CONDENO a procesados postulados desmovilizados del BLOQUE CATATUMBO de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (A.U.C.), en especial para esta sentencia en contra del Frente Contrainsurgencia Wayuu, que vincula a SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, quien hizo parte de la macro estructura de las AUC, quien cuenta con esa sentencia que declaró la existencia de patrones de macro criminalidad.

A su vez, pretenden que se reparen a las víctimas de los delitos cometidos en el contexto del conflicto armado, los cuales corresponden a hechos que fueron imputados, formulados y legalizados, los cuales quedaron enmarcados dentro de los patrones de macro criminalidad el que hacen parte del contexto de justicia y paz, y fueron objeto de precisión y esclarecimiento en el fallo arriba reseñado.

En la sentencia que se apoyan los abogados, fueron develados cinco patrones de macro criminalidad y victimización, siendo ellos: HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, DESAPARICIÓN FORZADA, DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACION CIVIL, VIOLENCIA DE GÉNERO, Y RECLUTAMIENTO ILICITO, los que fueron construidos con apego a los criterios legales, constitucionales y supra constitucionales establecidos sobre la materia. En ese orden, se procede con la relación de las reclamaciones indemnizatorias presentadas, así:

[177] Sentencia que en derecho corresponde respecto de los procesados postulados Salvatore Mancuso Gómez, Edgar Ignacio Fierro Flores, Jorge Iván Laverde Zapata, Uber Enrique Banquéz Martínez, José Gregorio Mangonez Lugo, José Bernardo Lozada Artúz, Leonardo Enrique Sánchez Barbosa, Sergio Manuel Córdoba Villa, Miguel Ramón Posada Castillo, Julio Manuel Argumedo García, Hernando De Jesús Fontalvo Sánchez y Oscar José Ospino Pacheco, desmovilizados de los Bloques Catatumbo, Córdoba, Norte y Montes de María de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (A.U.C.), quienes fueron postulados por el Gobierno Nacional en los términos establecidos por la ley 975 de 2005.

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	172 (Diferido)		
DELITOS LEGALIZADOS	HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA; EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON DESAPARICIÓN FORZADA; EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL.[178]		
VICTIMA DIRECTA	**DEOMILDE RAFAEL FINCE TORO**		
FECHA DE NACIMIENTO	N/A		
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002		
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR			
N° HIJOS	5	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**	1
VÍCTIMAS RECLAMANTES			
VÍCTIMA N° 1			
NOMBRES COMPLETOS	LAINIS JOSEFINA BRAVO ALVAREZ		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.922.017
SIJYP	329760		
PARENTESCO	COMPAÑERA PERMANENTE		
VICTIMA DIRECTA	DESPLAZAMIENTO FORZADO		
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-9. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 10-11. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 12. (Ilegible). **4.** Declaración extra proceso de dependencia económica y afectaciones (2 hijos). Folio 13-14. 5. Cédula de ciudadanía de la víctima directa. [179]		
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS			
DAÑO MORAL (Homicidio)	150 SMLMV		

[178] La Fiscalía formuló cargos a Salvatore Mancuso Gómez, a título de autor mediato por los delitos arriba mencionados, todos en circunstancia de mayor punibilidad de los numerales 2 y 5 del artículo 58 de la ley 599 de 2000.
[179] Visible a folio 21 de la carpeta Yoskaris Mantilla Ojeda del mismo grupo familiar.

DAÑO MORAL (Desplazamiento)	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE (Homicidio)	$337.271.085			
LUCRO CESANTE PRESENTE (Desplazamiento)	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses			
LUCRO CESANTE FUTURO	$185.013.914			
TOTAL LUCROS	$22.284.998			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 2				
NOMBRES COMPLETOS	YISETH DAYA FINCE BRAVO			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.118.827.258	
SIJYP	329760			
PARENTESCO	HIJA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 15. **2.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 16. **3.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 19428823. Folio17.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (homicidio)	150 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento)	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV por un periodo de 12 meses y que este valor sea indexado			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 3				
NOMBRES COMPLETOS	YAIRETH DAIRETH FINCE BRAVO			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.118.849.518	
FECHA DE NACIMIENTO	22 DE DICIEMBRE DE 1993			
SIJYP	329760			
PARENTESCO	HIJA			

ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 18. **2.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 19. **3.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 21152220. Folio 20.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (homicidio)	150 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento)	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV por un periodo de 12 meses y que este valor sea indexado			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 4				
NOMBRES COMPLETOS	YOSAIRIS DENICE FINCE BRAVO			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.118.835.464 (Ilegible)	
FECHA DE NACIMIENTO	05 DE NOVIEMBRE DE 1990			
SIJYP	329760			
PARENTESCO	HIJA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 21. **2.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 22. **3.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 184288808. Folio 23.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (homicidio)	150 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento)	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV por un periodo de 12 meses y que este valor sea indexado			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 5				

NOMBRES COMPLETOS	YURANIS YULIVETH FINCE BRAVO			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.118.854.686	
FECHA DE NACIMIENTO	15 DE FEBRERO DE 1995			
SIJYP	329760			
PARENTESCO	HIJA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 24-25. **2.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 26. **3.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 22111859. Folio 27.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (homicidio)	150 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento)	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV por un periodo de 12 meses y que este valor sea indexado			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 6				
NOMBRES COMPLETOS	RAYNER DAVID FINCE BERTI			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.129.525.010	
FECHA DE NACIMIENTO	20 DE JUNIO DE 1985			
SIJYP	671278			
PARENTESCO	HIJO			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 28. **2.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 29. **3.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta. Folio 30.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (homicidio)	150 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento)	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV por un periodo de 12 meses y que este valor sea indexado			

MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 7				
NOMBRES COMPLETOS	YOSKARIS MANTILLA OJEDA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.006.569.870	
SIJYP	603344			
PARENTESCO	SOBRINA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-14. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 15-16. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 17. **4.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 6414221. Folio 18. **5.** Declaración extra proceso de afectaciones. Folio 19. **6.** Registro civil de defunción de la víctima directa N° 15576001. Folio 20. **7.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 21. **8.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 8336855. Folio 22. **9.** Registro civil de defunción de la víctima directa N° 10431120. Folio 23.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (homicidio)	50 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado "*Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de daño

moral a favor de la señora **LAINIS JOSEFINA BRAVO ALVAREZ**, en calidad de compañera permanente, en ocasión al delito de homicidio en persona protegida, de quien en vida se llamaba **DEOMILDE RAFAEL FINCE TORO**, la suma equivalente a 100 SMLMV.

Para los hijos **YISETH DAYA FINCE BRAVO, YAIRETH DAIRETH FINCE BRAVO, YOSAIRIS DENIE FINCE BRAVO, YURANIS YULIVETH FINCE BRAVO, y RAYNER DAVID FINCE BERTI**, quienes eran menores para la fecha del hecho victimizante y demostraron el parentesco, se le reconoce a cada uno, la suma de 100 SMLMV, por concepto de daño moral por el delito de homicidio en persona protegida de su padre; es decir, un total de **500 SMLMV**.

Por otro lado, se le concede a la señora **YOSKARIS MANTILLA OJEDA**, la suma de 15 SMLMV, por concepto de daño moral, tiendo en cuenta las pruebas aportadas que demuestra que es sobrina del occiso y el hecho de la muerte le causó afectaciones psicoactivas.

Desplazamiento forzado:

La representante de víctimas solicitó para cada uno del grupo familiar el monto pretendido de cincuenta (50) SMMLV, por concepto de daño moral en ocasión al delito de Deportación, Expulsión o Desplazamiento Forzado a la Población Civil, conformado por los señores **LAINIS JOSEFINA BRAVO ALVAREZ, YISETH DAYA FINCE BRAVO, YAIRETH DAIRETH FINCE BRAVO, YOSAIRIS DENIE FINCE BRAVO, YURANIS YULIVETH FINCE BRAVO, y RAYNER DAVID FINCE BERTI, y YOSKARIS MANTILLA OJEDA,** cabe recordar los lineamientos del Consejo de Estado y los montos definidos por la Corte Suprema de Justicia, también ha hecho el ejercicio de establecer una especie de tarifa indemnizatoria para los casos de desplazamiento forzado, con un tope máximo de 224 SMMLV dividido entre el grupo familiar; para el caso que nos ocupa, la familia está conformado por siete (7) personas que al dividir el tope máximo de 224SMMLV, es equivalente al monto de 32 SMMLV establecido por víctimas, es decir, sería proporcional a los lineamientos descritos en precedencia.

Por lo anterior, la Sala fijará el monto de 32 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de daños morales en ocasión al delito de Desplazamiento Forzado, para cada uno de los miembros del grupo familiar, señores **LAINIS JOSEFINA BRAVO ALVAREZ, YISETH DAYA FINCE BRAVO, YAIRETH DAIRETH FINCE BRAVO, YOSAIRIS DENIE FINCE BRAVO, YURANIS YULIVETH FINCE BRAVO, y RAYNER DAVID FINCE BERTI, y YOSKARIS MANTILLA OJEDA**, correspondiéndoles la suma de $ 45.552.000 (32 SMMLV), para cada miembro del núcleo familiar y una afectación total para el grupo familiar de $ 318.864.000 equivalentes a 224 SMMLV.

Perjuicios materiales: No presentaron solicitud.

Lucro cesante causado y Lucro cesante Futuro o anticipado:

El apoderado de la señora LAINIS JOSEFINA BRAVO ALVAREZ, compañera permanente del occiso, solicitó los lucros cesantes causado y futuro, y para poder calcular se hace necesario contar con el documento que acredite la fecha de nacimiento de la víctima directa (visible a folio 21)[180], que para el caso que nos ocupa es la cédula de ciudadanía; sin embargo, no es posible calcular estas pretensiones por cuanto se omitió adjuntar entre los elementos materiales probatorios, el documento idóneo mínimo necesario de la compañera permanente para establecer la edad de la reclamante y así verificar cuál era la probabilidad de vida de la víctima directa, y como consecuencia, la Sala desconoce dicho, por lo que le es imposible hacer el cálculo indemnizatorio mediante presunciones o especulaciones. Por tal razón se despacha desfavorable esa solicitud.

[180] Carpeta del grupo familiar conformado por la señora YOSKARIS MANTILLA OJEDA.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 172 (DIFERIDO)							
DEOMILDE RAFAEL FINCE TORO							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES		**DAÑOS MATERIALES**		
					LUCRO CESANTE		
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA (EN SMLMV)**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
LAINIS JOSEFINA BRAVO ALVAREZ	CC	40.922.017	142.350.000	45.552.000	-	-	187.902.000
YISETH DAYA FINCE BRAVO	CC	1.118.827.258	142.350.000	45.552.000	-	-	187.902.000
YAIRETH DAIRETH FINCE BRAVO	CC	1.118.849.518	142.350.000	45.552.000	-	-	187.902.000
YOSAIRIS DENICE FINCE BRAVO	CC	1.118.835.464 (Ilegible)	142.350.000	45.552.000	-	-	187.902.000
YURANIS YULIVETH FINCE BRAVO	CC	1.118.854.686	142.350.000	45.552.000	-	-	187.902.000
RAYNER DAVID FINCE BERTI	CC	1.129.525.010	142.350.000	45.552.000	-	-	187.902.000
YOSKARIS MANTILLA OJEDA	CC	1.006.569.870	21.352.500	45.552.000	-	-	66.904.500
TOTAL							**563.706.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	297 (Diferido) Masacre de Matitas				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA[181].				
VICTIMA DIRECTA	**ALVARO ENRIQUE JIMENEZ RAMOS**				
FECHA DE NACIMIENTO	19 DE JUNIO DE 1972				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	ÁLVARO ENRIQUE JIMENEZ RAMOS				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	19.705.143		
SIJYP					
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-9. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 9-10. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 11.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X		**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X		**NO**	
VÍCTIMA N° 2					
NOMBRES COMPLETOS	NENIS JOHANA JIMENEZ RAMOS				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.938.593		
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 22. **2.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 23.				

[181] Sentencia proferida por la Magistrada Ponente, doctora LESTER MARIA GONZALEZ R.-11 001 22 52 000 2014 00027-Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 3				
NOMBRES COMPLETOS	ANA VICTORIA RAMOS SILVIA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	36.620.875	
SIJYP	N/A			
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 26. **2.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 23.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado a los señores **ÁLVARO ENRIQUE JIMÉNEZ RAMOS, NENIS JOHANA JIMÉNEZ RAMOS, ANA VICTORIA RAMOS SILVIA,** por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado *"Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, les reconoce la suma de 50 SMLMV, a cada uno de los miembros del grupo familiar.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a cada una de las víctimas directas afectadas, señores: **ÁLVARO ENRIQUE JIMÉNEZ RAMOS, NENIS JOHANA JIMÉNEZ RAMOS, y ANA VICTORIA RAMOS SILVIA** en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce

(12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297(Diferido)							
ALVARO ENRIQUE JIMENEZ RAMOS							
RECLAMANTE	IDENTIFICACIÓN		ITEMS RECONOCIDOS				
			DAÑOS INMATERIALES		DAÑOS MATERIALES		
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	NUMERO	PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	CAUSADO	FUTURO	TOTAL
ÁLVARO ENRIQUE JIMENEZ RAMOS	CC	19.705.143	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
NENIS JOHANA JIMENEZ RAMOS	CC	40.938.593	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
ANA VICTORIA RAMOS SILVIA	CC	36.620.875	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							**264.771.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA[182].				
VICTIMA DIRECTA	**HECTOR RAFAEL BRAVO ALVAREZ**				
FECHA DE NACIMIENTO	19 DE OCTUBRE DE 1954				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	HECTOR RAFAEL BRAVO ALVAREZ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	17.805.680		
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X		**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X		**NO**	

De lo resuelto por la Sala:
Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado al señor **HÉCTOR RAFAEL BRAVO ÁLVAREZ,** por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado *"Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, la suma de 50 SMLMV.

[182] Sentencia proferida por la Magistrada Ponente, doctora LESTER MARIA GONZALEZ R.-11 001 22 52 000 2014 00027 - Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a cada una de las víctimas directas afectadas, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO **No.** 1-297(Diferido)							
HECTOR RAFAEL BRAVO ALVAREZ							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
HECTOR RAFAEL BRAVO ALVAREZ	CC	17.805.680	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							**88.257.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1- 297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.				
VICTIMA DIRECTA	**COMNIE AURORA BERTI RADILLO**				
FECHA DE NACIMIENTO	11 DE ENERO DE 1971				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	COMNIE AURORA BERTI BADILLO				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.924.142		
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 9.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X		**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X		**NO**	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado a la señora **COMNIE AURORA BERTI RADILLO,** por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV, a cada una de las víctimas directas.
Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se

traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO **No.** 1-297(Diferido)							
COMNIE AURORA BERTI RADILLO							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
COMNIE AURORA BERTI RADILLO	CC	40.924.142	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							**88.257.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1- 297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA				
VICTIMA DIRECTA	**MAYERLIN DAYANA PINTO BRAVO**				
FECHA DE NACIMIENTO	29 DE JULIO DE 1991				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	MAYERLIN DAYANA PINTO BRAVO				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**		1.033.738.093	
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X		**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X		**NO**	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado a la señora **MAYERLIN DAYANA PINTO BRAVO,** por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce

a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO **No.** 1-297(Diferido)							
MAYERLIN DAYANA PINTO BRAVO							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
MAYERLIN DAYANA PINTO BRAVO	CC	1.033.738.093	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							**88.257.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1- 297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA				
VICTIMA DIRECTA	**JOSÉ RAMON GAMEZ SUÁREZ**				
FECHA DE NACIMIENTO	26 DE MAYO DE 1972				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	JOSÉ RAMON GAMEZ SUÁREZ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	84.080.170		
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado al señor **JOSÉ RAMÓN GÁMEZ SUÀREZ,** por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento

forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297(Diferido)							
JOSÉ RAMON GAMEZ SUÁREZ							
RECLAMANTE	IDENTIFICACION		ITEMS RECONOCIDOS				
			DAÑOS INMATERIALES	DAÑOS MATERIALES			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	NUMERO	PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	CAUSADO	FUTURO	TOTAL
JOSÉ RAMON GAMEZ SUÁREZ	CC	84.080.170	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							**88.257.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1- 297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA				
VICTIMA DIRECTA	**IVETH PATRICIA MARTINEZ PELAEZ**				
FECHA DE NACIMIENTO	24 DE SEPTIEMBRE DE 1977				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	IVETH PATRICIA MARTINEZ PELAEZ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.934.269		
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 10. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 11.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X		**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X		**NO**	
VÍCTIMA N° 2					
NOMBRES COMPLETOS	YUSDANY YISETH DELGADO MARTINEZ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.006.577.017		
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 12. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 13.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X		**NO**	

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado a los señores **IVETH PATRICIA MARTÍNEZ PELÁEZ Y YUSDANY YISETH DELGADO MARTÍNEZ,** por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV, a cada una de las víctimas directas.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a las víctimas directas afectadas, señores **IVETH PATRICIA MARTÍNEZ PELÁEZ Y YUSDANY YISETH DELGADO MARTÍNEZ**, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO **No.** 1-297(Diferido)							
IVETH PATRICIA MARTINEZ PELAEZ							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
IVETH PATRICIA MARTINEZ PELAEZ	CC	40.934.269	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
YUSDANY YISETH DELGADO MARTINEZ	CC	1.006.577.017	71.175.000	17.082.000			88.257.000
TOTAL							176.514.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA				
VICTIMA DIRECTA	**SIXTO FIDEL BRAVO ALVAREZ**				
FECHA DE NACIMIENTO	29 DE DICIEMBRE DE 1971				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	SIXTO FIDEL BRAVO ALVAREZ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	84.079.375		
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Formato de registro de hechos atribuibles SIJYP 596185. Folios 8-10. **3.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 11-12. **4.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 14.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado al señor **SIXTO FIDEL BRAVO ÁLVAREZ**, por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento

forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297(Diferido)							
SIXTO FIDEL BRAVO ALVAREZ							
RECLAMANTE	IDENTIFICACION		ITEMS RECONOCIDOS				
			DAÑOS INMATERIALES	DAÑOS MATERIALES			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	NUMERO	PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	CAUSADO	FUTURO	TOTAL
SIXTO FIDEL BRAVO ALVAREZ	CC	84.079.375	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							88.257.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1 -297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA				
VICTIMA DIRECTA	**YASMIN BOLAÑO AGUILAR**				
FECHA DE NACIMIENTO	1 DE OCTUBRE DE 1984				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	YASMIN BOLAÑO AGUILAR				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.943.920		
SIJYP	326328				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 9.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		
VÍCTIMA N° 2					
NOMBRES COMPLETOS	YON JANER BOLAÑO AGUILAR				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	84.093.060		
SIJYP	326352				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 10. **2.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 11.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				

MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado a las señoras **YASMIN BOLAÑO AGUILAR, y YON JANER BOLAÑO AGUILAR,** por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce las víctimas directas la suma de 50 SMLMV, a cada una de las víctimas directas; es decir, para un total de 100 SMLMV.

Perjuicios materiales.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a las víctimas directas afectadas, señores: **YASMIN BOLAÑO AGUILAR, y YON JANER BOLAÑO AGUILAR,** en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO **No.** 1-297(Diferido)							
YASMIN BOLAÑO AGUILAR							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
YASMIN BOLAÑO AGUILAR	CC	40.943.920	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
YON JANER BOLAÑO AGUILAR	CC	84.093.060	71.175.000	17.082.000			88.257.000
TOTAL							176.514.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO		1-297 (Diferido)			
DELITOS LEGALIZADOS		DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA			
VICTIMA DIRECTA		**SORAIDA FINCE AGUILAR**			
FECHA DE NACIMIENTO		22 DE MARZO DE 1973			
FECHA DE LOS HECHOS		01 DE ABRIL DE 2002			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS		SORAIDA FINCE AGUILAR			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.927.662	
SIJYP		311486			
PARENTESCO		VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS		**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL		50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE		1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN		**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN		**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado a la señora **SORAIDA FINCE AGUILAR**, por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento

forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO **No.** 1-297(Diferido)							
SORAIDA FINCE AGUILAR							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
SORAIDA FINCE AGUILAR	CC	40.927.662	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							88.257.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297(Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA				
VICTIMA DIRECTA	**JUDITH EDIT BRAVO ALVAREZ**				
FECHA DE NACIMIENTO	17 DE ENERO DE 1964				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	JUDITH EDIT BRAVO ALVAREZ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	22.444.148		
SIJYP	225612				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 9. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		
VÍCTIMA N° 2					
NOMBRES COMPLETOS	SAÍN DODINO BRAVO				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.124.026.306		
SIJYP	225612				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 11. **2.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 17.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				

MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado a los señores **JUDITH EDIT BRAVO ÁLVAREZ Y SAÍN DODINO BRAVO**, por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV, para cada uno de los integrantes del grupo familiar, es decir, un total de 100 SMLMV.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a las víctimas directas afectadas, señores: **JUDITH EDIT BRAVO ÁLVAREZ Y SAÍN DODINO BRAVO**,, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297(Diferido)							
JUDITH EDIT BRAVO ALVAREZ							
RECLAMANTE	IDENTIFICACION		ITEMS RECONOCIDOS				
			DAÑOS INMATERIALES	DAÑOS MATERIALES			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	NUMERO	PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	CAUSADO	FUTURO	TOTAL
JUDITH EDIT BRAVO ALVAREZ	CC	22.444.148	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
SAÍN DODINO BRAVO	CC	1.124.026.306	71.175.000	17.082.000			88.257.000
TOTAL							176.514.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO		1-297 (Diferido)			
DELITOS LEGALIZADOS		DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA			
VICTIMA DIRECTA		**MAROLIS MERCEDES BRAVO ALVAREZ**			
FECHA DE NACIMIENTO		24 DE ENERO DE 1968			
FECHA DE LOS HECHOS		01 DE ABRIL DE 2002			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS		MAROLIS MERCEDES BRAVO ALVAREZ			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.924.178	
SIJYP		225584			
PARENTESCO		VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS		**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 9-10. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 11.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL		50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE		1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN		**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN		**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado a la señora **MAROLIS MERCEDES BRAVO ÁLVAREZ**, por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297 (Diferido)							
MAROLIS MERCEDES BRAVO ALVAREZ							
RECLAMANTE	IDENTIFICACION		ITEMS RECONOCIDOS				
			DAÑOS INMATERIALES	DAÑOS MATERIALES			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	NUMERO	PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	CAUSADO	FUTURO	TOTAL
MAROLIS MERCEDES BRAVO ALVAREZ	CC	40.924.178	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							88.257.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DESAPARICIÓN FORZADA				
VICTIMA DIRECTA	**ROGER DE JESÚS BRAVO ALVAREZ**				
FECHA DE NACIMIENTO	20 DE JUNIO DE 1950				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		1	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	IVIS DEL SOCORRO PERALTA IBARRA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.919.308		
SIJYP	130500				
PARENTESCO	COMPAÑERA PERMANENTE				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente de reparación integral de víctimas. Folios 1-9. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 10. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 11. **4.** Declaración extra proceso de afectaciones. Folios 12-14.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Desaparición forzada)	100 SMLMV				
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)	50 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		
VÍCTIMA N° 2					
NOMBRES COMPLETOS	CLARINA LAUDITH BRAVO ALVAREZ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.916.824		
SIJYP	130500				
PARENTESCO	HERMANA				

ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 15. **2.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 16. **3.** Fotocopia del Registro Civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 15576121. Folios 17.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Desaparición forzada)	100 SMLMV				
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)	50 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		
VÍCTIMA N° 3					
NOMBRES COMPLETOS	MAROLIS MERCEDES BRAVO ALVAREZ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.924.178		
SIJYP	130500				
PARENTESCO	HERMANA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 18-19. **2.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 20. **3.** Fotocopia del Registro Civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 6625248. Folios 21. 4. Declaración extra proceso de afectaciones. Folios 22-23. 5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 24.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Desaparición forzada)	100 SMLMV				
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)	50 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		
VÍCTIMA N° 4					
NOMBRES COMPLETOS	**ADID MABEL BRAVO ÁLVAREZ**				

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.924.469		
SIJYP	130500				
PARENTESCO	HERMANA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 25-27. **2.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 20. **3.** Fotocopia del Registro Civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 6625248. Folios 21. 4. Declaración extra proceso de afectaciones. Folios 22-23. **5.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 24.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Desaparición forzada)	100 SMLMV				
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)	50 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado" *Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de daño moral a favor de la compañera permanente, señora **IVIS DEL SOCORRO PERALTA IBARRA**, en ocasión al delito de Desaparición Forzada del señor **ROGER DE JESUS BRAVO ALVAREZ**, la suma equivalente a 100 SMLMV.

En lo pertinente a los hermanos del occiso, quienes probaron el parentesco y demostraron el daño moral por la desaparición forzada de su familiar, se les reconoce a cada uno de los señores **CLARINA LAUDITH BRAVO ÁLVAREZ, MAROLIS MERCEDES BRAVO ÁLVAREZ, Y ADID MABEL BRAVO ÁLVAREZ,** la suma de 50smlmv, para un total de 150 SMLMV.

Perjuicio material: No solicitaron pretensiones indemnizatorias.

Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

Es importante mencionar, que el apoderado de víctimas, en igual sentido solicitó pretensiones indemnizatorias en favor de la señora **ADID MABEL BRAVO ÁLVAREZ,** respecto al hecho N°172 de la sentencia emitida por Tribunal Superior de Bogotá D.C., el 20 de noviembre de 2014 por la Magistrada Ponente, DRA. LÉSTER GONZÁLEZ, por lo que no se reconocieron pretensiones indemnizatorias a la víctima en mención, por lo que esta sala procederá a resolver de fondo la solicitud.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 172 (Diferido)						
ROGER DE JESÚS BRAVO ALVAREZ						
RECLAMANTE	**IDENTIFICACIÓN**		**ITEMS RECONOCIDOS**			
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**		
				LUCRO CESANTE		
	TIPO	**NÚMERO**	**PERJUICIO MORAL DESAPARICIÓN FORZADA (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
IVIS DEL SOCORRO PERALTA IBARRA	CC	40.919.308	142.350.000	-	-	142.350.000
CLARINA LAUDITH BRAVO ALVAREZ	CC	40.916.824	71.175.000	-	-	71.175.000
MAROLIS MERCEDES BRAVO ALVAREZ	CC	40.924.178	71.175.000	-	-	71.175.000
ADID MABEL BRAVO ÁLVAREZ	CC	40.924.469	71.175.000	-	-	71.175.000
TOTAL						**355.875.000**

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO		1-297 (Diferido)			
DELITOS LEGALIZADOS		DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA			
VICTIMA DIRECTA		**MAIREN DALENE IGUARÁN LENGUA**			
FECHA DE NACIMIENTO		16 DE DICIEMBRE DE 1985			
FECHA DE LOS HECHOS		01 DE ABRIL DE 2002			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS		MAIREN DALENE IGUARÁN LENGUA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.118.823.917	
SIJYP		405263			
PARENTESCO		VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS		**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 9.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL		50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE		1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN		**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN		**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:
Respecto al daño moral causado a la señora **MAIREN DALENE IGUARAN LENGUA,** por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se

traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297 (Diferido)							
MAIREN DALENE IGUARÁN LENGUA							
RECLAMANTE	IDENTIFICACION		ITEMS RECONOCIDOS				
			DAÑOS INMATERIALES	DAÑOS MATERIALES			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	NUMERO	PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	CAUSADO	FUTURO	TOTAL
MAIREN DALENE IGUARÁN LENGUA	CC	1.118.823.917	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							88.257.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA				
VICTIMA DIRECTA	**LUIS ALFONSO GARCÍA BRAVO**				
FECHA DE NACIMIENTO	19 DE ABRIL DE 1973				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	LUIS GABRIEL MARTINEZ BRAVO				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	84.088.850		
SIJYP	761943				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 9.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		
VÍCTIMA N° 2					
NOMBRES COMPLETOS	DELKIS CAROLINA MARTINEZ BRAVO				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	52.895.297		
SIJYP	761943				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 11. **2.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 12.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				

MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 3				
NOMBRES COMPLETOS	LUIS ALFONSO GARCÍA BRAVO			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	84.078.932	
SIJYP	761943			
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 13-14. **2.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 15.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado a los señores **LUIS ALFONSO GARCÍA BRAVO, DELKIS CAROLINA MARTÍNEZ BRAVO, y LUIS GABRIEL MARTÍNEZ BRAVO,** por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:
Se le concede indemnización a título de lucro cesante a las víctimas directas afectadas, señores: **LUIS ALFONSO GARCÍA BRAVO, DELKIS CAROLINA MARTÍNEZ BRAVO, y LUIS GABRIEL MARTÍNEZ BRAVO** en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297 (Diferido)							
LUIS ALFONSO GARCÍA BRAVO							
RECLAMANTE	IDENTIFICACION		ITEMS RECONOCIDOS				
			DAÑOS INMATERIALES	DAÑOS MATERIALES			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	NUMERO	PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	CAUSADO	FUTURO	TOTAL
LUIS GABRIEL MARTINEZ BRAVO	CC	84.088.850	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
DELKIS CAROLINA MARTINEZ BRAVO	CC	52.895.297	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
LUIS ALFONSO GARCÍA BRAVO	CC	84.078.932	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							264.771.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.				
VICTIMA DIRECTA	**MAGALY LAUDITH MOVIL MEJÍA**				
FECHA DE NACIMIENTO	22 DE SEPTIMEBRE DE 1959				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	MAGALY LAUDITH MOVIL MEJÍA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**		40.922.089	
SIJYP	416307				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 9. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X		**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X		**NO**	

De lo resuelto en la Sala

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado a la señora **MAGALY LAUDITH MOVIL MEJÍA**, por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.
Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297 (Diferido)							
MAGALY LAUDITH MOVIL MEJÍA							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUICIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
MAGALY LAUDITH MOVIL MEJÍA	CC	40.922.089	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							88.257.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA				
VICTIMA DIRECTA	**ALFONSO RAFAEL LÓPEZ**				
FECHA DE NACIMIENTO	25 DE FEBRERO DE 1954				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	ALFONSO RAFAEL LÓPEZ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.922.089		
SIJYP	416307				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X		**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X		**NO**	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:
Respecto al daño moral causado al señor **ALFONSO RAFAEL LOPEZ**, por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se

traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297 (Diferido)							
ALFONSO RAFAEL LÓPEZ							
RECLAMANTE	IDENTIFICACION		ITEMS RECONOCIDOS				
			DAÑOS INMATERIALES	DAÑOS MATERIALES			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	NUMERO	PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	CAUSADO	FUTURO	TOTAL
ALFONSO RAFAEL LÓPEZ	CC	40.922.089	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							88.257.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)			
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA			
VICTIMA DIRECTA	**ALICIA LEONOR PINTO QUINTERO**			
FECHA DE NACIMIENTO	07 DE MAYO DE 1950			
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR				
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**	0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES				
VÍCTIMA N° 1				
NOMBRES COMPLETOS	ALICIA LEONOR PINTO QUINTERO			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	26.963.107	
SIJYP	N/A			
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 9.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado a la señora **ALICIA LEONOR PINTO QUINTERO**, por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297 (DIFERIDO)							
ALICIA LEONOR PINTO QUINTERO							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACIÓN**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NÚMERO**	**PERJUICIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
ALICIA LEONOR PINTO QUINTERO	CC	26.963.107	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							88.257.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.				
VICTIMA DIRECTA	**YANDRIS YANIOTH CARDENAS HERRERA**				
FECHA DE NACIMIENTO	02 DE NOVIEMBRE DE 1990				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	YANDRIS YANIOTH CARDENAS HERRERA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**		1.118.837.556	
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 9. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10. **4.** Unidad de satélite de Fiscalía para Justicia y Paz. Folio 11.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X		**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X		**NO**	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado a la señora **YANDRIS YANIOTH CARDENAS HERRERA**, por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297 (DIFERIDO)							
YANDRIS YANIOTH CARDENAS HERRERA							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
YANDRIS YANIOTH CARDENAS HERRERA	CC	1.118.837.556	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							88.257.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)			
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.			
VICTIMA DIRECTA	**GREGORIA TEHERÁN CARMONA**			
FECHA DE NACIMIENTO	11 DE AGOSTO DE 1959			
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR				
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**	0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES				
VÍCTIMA N° 1				
NOMBRES COMPLETOS	GREGORIA TEHERÁN CARMONA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	45.366.046 (Ilegible)	
SIJYP	N/A			
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10. **4.** Informe Psicológico actividades periciales forenses de la. Folio 11.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado al señor **GREGORIA TEHERÁN CARMONA**, por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. a la inicial 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297 (DIFERIDO)							
GREGORIA TEHERÁN CARMONA							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
GREGORIA TEHERÁN CARMONA	CC	45.366.046 (Ilegible)	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							88.257.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.				
VICTIMA DIRECTA	**RITA ACASIA AGUILAR CASTRO**				
FECHA DE NACIMIENTO	23 DE JULIO DE 1958				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	RITA ACASIA AGUILAR CASTRO				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.916.715		
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado a la señora **RITA ACASIA AGUILAR CASTRO,** por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297 (DIFERIDO)							
RITA ACASIA AGUILAR CASTRO							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUICIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
RITA ACASIA AGUILAR CASTRO	CC	40.916.715	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							88.257.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.				
VICTIMA DIRECTA	**RAMIRO RAFAEL DELUQUE BRITO**				
FECHA DE NACIMIENTO	NO ANEXARON CÉDULA CIUDADANÍA				
FECHA DE LOS HECHOS	08 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	RAMIRO RAFAEL DELUQUE BRITO				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	NO ANEXARON		
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9. **3.** Unidad satélite de Fiscalía para Justicia y la Paz. Folio 10.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Respecto al daño moral causado al señor **RAMIRO RAFAEL DE LUQUE BRITO,** por el delito de Desplazamiento Forzado, se observa en el expediente digital que el apoderado no adjunto el documento de identidad, que para el caso que no ocupa, es la cédula de ciudadanía, tal como lo ha dicho en repetidas oportunidades la H. Corte Constitucional así: *"... Respecto a la cédula de ciudadanía, la jurisprudencia ha señalado que solo con este documento «se acredita la*

personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exige la prueba de tal calidad». "Asimismo, garantiza el reconocimiento de los atributos de la personalidad en ella consignados, por parte de las demás personas y de las instituciones civiles y oficiales con las cuales se relacione directa o indirectamente la persona.
"La Corte en la sentencia C-511 de 1999 indicó que la Constitución y la ley asignan a la cédula de ciudadanía tres funciones particularmente diferentes pero unidas por una finalidad común. A saber: (i) identificar a las personas, (ii) permitir el ejercicio de sus derechos civiles y (iii) asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad política que propicia y estimula la democracia".

En ese sentido, no se puede establecer la individualidad del peticionario por omisión del documento de identificación personal, razón por la cual no es posible proceder con el estudio de las pretensiones indemnizatorias, razón por la cual se deniega dicha pretensión.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)			
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.			
VICTIMA DIRECTA	**ROGER ELIAS BRAVO PERALTA**			
FECHA DE NACIMIENTO	20 DE MARZO DE 1992			
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR				
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0
VÍCTIMAS RECLAMANTES				
VÍCTIMA N° 1				
NOMBRES COMPLETOS	ROGER ELIAS BRAVO PERALTA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**		1.123.408.477
SIJYP	N/A			
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado al señor **ROGER ELIAS BRAVO PERALTA**, por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297 (DIFERIDO)							
ROGER ELIAS BRAVO PERALTA							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
ROGER ELIAS BRAVO PERALTA	CC	1.123.408.477	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							88.257.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)		
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.		
VICTIMA DIRECTA	**TOMÁS RAFAEL DÍAZ RODRIGUEZ**		
FECHA DE NACIMIENTO	N/A		
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002		
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR			
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**	0
VÍCTIMAS RECLAMANTES			
VÍCTIMA N° 1			
NOMBRES COMPLETOS	TOMÁS RAFAEL DÍAZ RODRIGUEZ		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	N/A
SIJYP	N/A		
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA		
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	No se encuentran los elementos materiales probatorios del reclamante, se observa que por error el apoderado adjuntó pruebas que corresponden a otra víctima de nombre **ALFONSO RAFAEL LÓPEZ,** de los cuales se desprenden: Escrito de Incidente de reparación integral a víctimas de carácter excepcional, poder y cédula de ciudadanía.		

De lo resuelto en la Sala:

En el presente caso, el doctor Rafael Reynaldo Lora Lentino, como representante judicial del señor **TOMÁS RAFAEL DÍAZ RODRIGUEZ,** sustentó en audiencia pública dentro del trámite "INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE CARÁCTER EXCEPCIONAL[183]", las pretensiones indemnizatorias para acceder a la reparación; no obstante, para proceder con el estudio de dichas reclamaciones se procedió con la revisión de las carpetas aportadas y se puede verificar que adjuntó las pruebas que corresponde a otra víctima; de este modo, concluyó la Sala que no se aportó ningún medio de convicción que acreditara continuar con el estudio de las reclamaciones indemnizatorias de conformidad con la afectación moral presentada por su abogado, quien aportó de manera errónea la documentación requerida.

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)

[183] Llevada a cabo en la ciudad de Riohacha – La Guajira (7al 11 de julio) y en la ciudad de Barranquilla – Atlántico.

DELITOS LEGALIZADOS		DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.			
VICTIMA DIRECTA		**ROSA ANGELICA ALVAREZ MAYA**			
FECHA DE NACIMIENTO		19 DE OCTUBRE DE 1959			
FECHA DE LOS HECHOS		01 DE MARZO DE 2002			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS		ROSA ANGELICA ALVAREZ MAYA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.929.347	
SIJYP		N/A			
PARENTESCO		VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS		**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL		50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE		1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN		**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN		**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado a la señora **ROSA ANGELICA ÁLVAREZ AMAYA**, por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos

esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial-

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297 (DIFERIDO)							
ROSA ANGELICA ALVAREZ MAYA							
RECLAMANTE	IDENTIFICACION		ITEMS RECONOCIDOS				
			DAÑOS INMATERIALES	DAÑOS MATERIALES			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	NUMERO	PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	CAUSADO	FUTURO	TOTAL
ROSA ANGELICA ALVAREZ MAYA	CC	40.929.347	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							88.257.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.				
VICTIMA DIRECTA	**TERESA LEONOR BRAVO ALVAREZ**				
FECHA DE NACIMIENTO	18 DE OCTUBRE DE 1952				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	TERESA LEONOR BRAVO ALVAREZ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.914.719		
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 14-15. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 16.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		
VÍCTIMA N° 2					
NOMBRES COMPLETOS	AUDREIS ANTONIO BRAVO PERALTA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	80.224.470		
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 12. **2.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 13.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					

DAÑO MORAL	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 3				
NOMBRES COMPLETOS	LAIDYS JOSEFINA PERALTA BRAVO			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.938.861	
SIJYP	N/A			
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 9-10. **2.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 11.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado a los señores **TERESA LEONOR BRAVO ÁLVAREZ, AUDREIS ANTONIO BRAVO PERALTA y LAIDYS JOSEFINA PERALTA BRAVO**, por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a las víctimas directas afectadas, señores **TERESA LEONOR BRAVO ÁLVAREZ, AUDREIS ANTONIO BRAVO PERALTA y LAIDYS JOSEFINA PERALTA BRAVO**, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen

haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial-

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297 (DIFERIDO)							
TERESA LEONOR BRAVO ALVAREZ							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
TERESA LEONOR BRAVO ALVAREZ	CC	40.914.719	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
AUDREIS ANTONIO BRAVO PERALTA	CC	80.224.470	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
LAIDYS JOSEFINA PERALTA BRAVO	CC	40.938.861	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							264.771.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.				
VICTIMA DIRECTA	**YASMINA PAOLA CARPINTERO PERALTA**				
FECHA DE NACIMIENTO	31 DE MARZO DE 1990				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	YASMINA PAOLA CARPINTERO PERALTA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.118.832.592		
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado a la señora YASMINA PAOLA CARPINTERO PERALTA, por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa, YASMINA PAOLA CARPINTERO PERALTA, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial-

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297 (DIFERIDO)							
YASMINA PAOLA CARPINTERO PERALTA							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
YASMINA PAOLA CARPINTERO PERALTA	CC	1.118.832.592	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							88.257.000

DR. REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.				
VICTIMA DIRECTA	**LEVIS MARITZA BRAVO ALVAREZ**				
FECHA DE NACIMIENTO	03 DE JULIO DE 1961				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	LEVIS MARITZA BRAVO ALVAREZ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.919.356		
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 9. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado al señor **LEVIS MARITZA BRAVO ÁLVAREZ**, por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.
Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respect4 (las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297 (DIFERIDO)							
LEVIS MARITZA BRAVO ALVAREZ							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
LEVIS MARITZA BRAVO ALVAREZ	CC	40.919.356	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							88.257.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)			
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.			
VICTIMA DIRECTA	**ERIKA KARINA MEJIA MONRROY**			
FECHA DE NACIMIENTO	30 DE AGOSTO DE 1976			
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR				
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0
VÍCTIMAS RECLAMANTES				
VÍCTIMA N° 1				
NOMBRES COMPLETOS	ERIKA KARINA MEJIA MONRROY			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**		40.943.673
SIJYP	N/A			
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 9.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado a la señora **ERIKA KARINA MEJÍA MONRROY**, por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297 **(DIFERIDO)**							
ERIKA KARINA MEJIA MONRROY							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
ERIKA KARINA MEJIA MONRROY	CC	40.943.673	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							88.257.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)			
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.			
VICTIMA DIRECTA	**HERNÁN DE JESÚS SUAZA PIMIENTA**			
FECHA DE NACIMIENTO	18 DE NOVIEMBRE DE 1968			
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR				
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0
VÍCTIMAS RECLAMANTES				
VÍCTIMA N° 1				
NOMBRES COMPLETOS	HERNÁN DE JESÚS SUAZA PIMIENTA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**		84.034.034
SIJYP	N/A			
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado al señor **HERNÁN DE JESÚS SUAZA PIMIENTA**, por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial-

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297 (DIFERIDO)							
HERNÁN DE JESÚS SUAZA PIMIENTA							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
HERNÁN DE JESÚS SUAZA PIMIENTA	CC	84.034.034	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							88.257.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.				
VICTIMA DIRECTA	**KEILY KATERINE CAMPO MÓVIL**				
FECHA DE NACIMIENTO	07 DE ABRIL DE 1982				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	KEILY KATERINE CAMPO MÓVIL				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	32.570.757		
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X		**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X		**NO**	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado a la señora **KEILY KATERINE CAMPO MÓVIL**, por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.
Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No.1-297 (DIFERIDO)							
KEILY KATERINE CAMPO MÓVIL							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
KEILY KATERINE CAMPO MÓVIL	CC	32.570.757	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							88.257.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)			
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.			
VICTIMA DIRECTA	**KEINER ALBERTO RIVADENEIRA MARTÍNEZ**			
FECHA DE NACIMIENTO	07 DE DICIEMBRE DE 1996			
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR				
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**	0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES				
VÍCTIMA N° 1				
NOMBRES COMPLETOS	KEINER ALBERTO RIVADENEIRA MARTÍNEZ			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.118.862.623	
SIJYP	N/A			
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 2				
NOMBRES COMPLETOS	OSCAR DAVID RIVADENEIRA MARTINEZ			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	N/A	
SIJYP	N/A			
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**NO APORTA DOCUMENTACIÓN**			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				

DAÑO MORAL	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado al señor **KEINER ALBERTO RIVADENEIRA MARTÍNEZ**, por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.

Respecto del señor **OSCAR DAVID RIVADENEIRA MARTINEZ**, el apoderado presento pretensiones indemnizatorias por daño moral y lucro cesante por el delito de desplazamiento forzado; no obstante para el estudio de dichas reclamaciones indemnizatorias se procedió con la revisión de las carpetas aportadas y se puede verificar que no adjuntó las pruebas que corresponde al señor **OSCAR DAVID RIVADENEIRA MARTINEZ**; de este modo, concluyó la Sala que no se aportó ningún medio de convicción que acreditara continuar con el estudio de las pretensiones indemnizatorias; es decir, el apoderado omitió el material probatorio, razón por la cual se deniegan las pretensiones solicitadas, respecto al señor **OSCAR DAVID RIVADENEIRA MARTINEZ.**

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297 (DIFERIDO)							
KEINER ALBERTO RIVADENEIRA MARTÍNEZ							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
KEINER ALBERTO RIVADENEIRA MARTÍNEZ	CC	1.118.862.623	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							88.257.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.				
VICTIMA DIRECTA	**LUIS MANUEL PIRELA PERALTA**				
FECHA DE NACIMIENTO	NO APORTA CÉDULA				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	LUIS MANUEL PIRELA PERALTA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	NO APORTA CÉDULA		
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-10.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado al señor **LUIS MANUEL PIRELA PIMIENTA,** por el delito de Desplazamiento Forzado, y el lucro cesante por el desplazamiento forzado; revisada la carpeta digital se observa que, el representante de víctimas no aportó ningún documento que acredite la identificación de la víctima directa, que para el caso que nos ocupa, es su cédula de ciudadanía, a fin de garantizar su derecho

a la indemnización, de conformidad con los soportes probatorios aportados durante el trámite incidental.

En ese orden, se destaca el pronunciamiento de la Corte Constitucional, señalado en sentencia T-375/21[184]**,** respecto a la cédula de ciudadanía, dijo:

> *"32… que solo con este documento «se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exige la prueba de tal calidad». Asimismo, garantiza el reconocimiento de los atributos de la personalidad en ella consignados, por parte de las demás personas y de las instituciones civiles y oficiales con las cuales se relacione directa o indirectamente la persona".*
> *"(…)"*
> *"34. Para esta corporación, la cédula de ciudadanía juega un papel importante en el proceso de acreditación de la ciudadanía, que se ejerce por los nacionales a partir de los 18 años, y resulta un presupuesto esencial para el ejercicio de los derechos políticos. Así como, para atestiguar la mayoría de edad y la capacidad civil total, física y mental, y permite ejercitar válidamente sus derechos y asumir o contraer obligaciones civiles [60] ".*

En ese orden, no es posible proceder con el estudio de la petición elevada por el señor **LUIS MANUEL PIRELA PIMIENTA**, y en su lugar la Sala, deniega la pretensión indemnizatoria por la omisión injustificada en aportar la cédula de ciudadanía, por parte del apoderado del señor , quien acudió en calidad de víctima directa; no obstante, se advierte que, puede presentar sus reclamaciones indemnizatorias en la apertura de otro INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL A VICTIMAS, que se adelante en contra de ex miembros del mismo grupo armado ilegal.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)

[184] Referencia: Expediente T-8.193.214 - Acción de tutela instaurada por JUNE DARLYN ARCHBOLD BERRY en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Magistrada Ponente: Dra. CRISTINA PARDO SCHLESINGER.

DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.				
VICTIMA DIRECTA	**MAYKEL EDUARDO IGUARÁN LENGUA**				
FECHA DE NACIMIENTO	29 DE MARZO DE 1983				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	MAYKEL EDUARDO IGUARÁN LENGUA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**		84.092.536	
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 9-10.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado al señor **MAYKEL EDUARDO IGUARAN LENGUA**, por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento

forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297 (DIFERIDO)							
MAYKEL EDUARDO IGUARÁN LENGUA							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
MAYKEL EDUARDO IGUARÁN LENGUA	CC	84.092.536	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							88.257.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO		1-297 (Diferido)			
DELITOS LEGALIZADOS		DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.			
VICTIMA DIRECTA		**SANTA APSHANA**			
FECHA DE NACIMIENTO		31 DE DICIEMBRE DE 1951			
FECHA DE LOS HECHOS		01 DE ABRIL DE 2002			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS		SANTA APSHANA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	26.973.666	
SIJYP		N/A			
PARENTESCO		VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS		**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8-9. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL		50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE		1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN		**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN		**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado al señor **SANTA APSHANA**, por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.
Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297 (DIFERIDO)							
SANTA APSHANA							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
SANTA APSHANA	CC	26.973.666	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							88.257.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.				
VICTIMA DIRECTA	**CARLOS AGUILAR CASTRO**				
FECHA DE NACIMIENTO	NO APORTA CÉDULA				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	CARLOS AGUILAR CASTRO				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	NO APORTA CÉDULA		
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder Conferido. Folios 1-2. **2.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa incompleta. Folio 3. **3.** Escrito Incidente de Reparación integral a víctimas. Folios 4-10.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**		**NO**	X	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**		**NO**	X	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicios inmateriales:

El apoderado del señor **CARLOS AGUILAR CASTRO**, revisado la carpeta digital se observa que, el representante de víctimas no aportó ningún documento que acredite la identificación de la víctima directa, que para el caso que nos ocupa, es su cédula de ciudadanía, a fin de garantizar su derecho a la indemnización, de conformidad con los soportes probatorios aportados durante el trámite incidental.

En ese orden, se destaca el pronunciamiento de la Corte Constitucional, señalado en sentencia T-375/21[185]**,** respecto a la cédula de ciudadanía, dijo:

> "*32… que solo con este documento «se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exige la prueba de tal calidad». Asimismo, garantiza el reconocimiento de los atributos de la personalidad en ella consignados, por parte de las demás personas y de las instituciones civiles y oficiales con las cuales se relacione directa o indirectamente la persona".*
>
> *"33. La Corte en la sentencia C-511 de 1999 indicó que la Constitución y la ley asignan a la cédula de ciudadanía tres funciones particularmente diferentes pero unidas por una finalidad común. A saber: (i) identificar a las personas, (ii) permitir el ejercicio de sus derechos civiles y (iii) asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad política que propicia y estimula la democracia."*
>
> *"En ese sentido, esta corporación afirmó que «la identificación constituye la forma como se establece la individualidad de una persona con arreglo a las previsiones normativas. La ley le otorga a la cédula el alcance de prueba de la identificación personal, de donde se infiere que sólo con ella se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exija la prueba de tal calidad»*[186] *"*
>
> *"34. Para esta corporación, la cédula de ciudadanía juega un papel importante en el proceso de acreditación de la ciudadanía, que se ejerce por los nacionales a partir de los 18 años, y resulta un presupuesto esencial para el ejercicio de los derechos políticos. Así como, para atestiguar la mayoría de edad y la capacidad civil total, física y mental, y permite ejercitar válidamente sus derechos y asumir o contraer obligaciones civiles [60] ".*

En ese orden, no es posible proceder con el estudio de la petición y en su lugar la Sala, deniega la pretensión indemnizatoria por la omisión injustificada en aportar la cédula de ciudadanía, por parte del apoderado del señor **CARLOS AGUILAR CASTRO**, quien acudió en calidad de víctima directa; no obstante, se advierte que, puede presentar sus reclamaciones indemnizatorias en la apertura de otro INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL A VICTIMAS, que se adelante en contra de ex miembros del mismo grupo armado ilegal.

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)

[185] Referencia: Expediente T-8.193.214 - Acción de tutela instaurada por JUNE DARLYN ARCHBOLD BERRY en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Magistrada Ponente: Dra. CRISTINA PARDO SCHLESINGER.
[186] Sentencia C-511 de 1999.

DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.				
VICTIMA DIRECTA	**ELENA MARIA ATENCIO AARON**				
FECHA DE NACIMIENTO	16 DE ENERO DE 1961				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	ELENA MARIA ATENCIO AARON				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.914.357		
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido al Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folio 8. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 9.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado a la señora **ELENA MARÍA ATENCIO AARON**, por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento

forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297 (DIFERIDO)							
ELENA MARIA ATENCIO AARON							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
ELENA MARIA ATENCIO AARON	CC	40.914.357	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							88.257.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)			
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.			
VICTIMA DIRECTA	**ELENIA YANET FINCE DE ARMA**			
FECHA DE NACIMIENTO	21 DE ABRIL DE 1974			
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR				
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**	0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES				
VÍCTIMA N° 1				
NOMBRES COMPLETOS	ELENIA YANET FINCE DE ARMA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	32.867.364	
SIJYP	N/A			
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido al Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folio 8-9. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado a la señora **ELENIA YANET FINCE DE ARMA**, por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297 (DIFERIDO)							
ELENIA YANET FINCE DE ARMA							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUICIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
ELENIA YANET FINCE DE ARMA	CC	32.867.364	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							88.257.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA.				
VICTIMA DIRECTA	**CELINA BEATRIZ BRAVO ÁLVAREZ**				
FECHA DE NACIMIENTO	16 DE AGOSTO DE 1951				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	CELINA BEATRIZ BRAVO ÁLVAREZ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	26.973.664		
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido al Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folio 8. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 9.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X		**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X		**NO**	

De lo resuelto en la Sala:

Perjuicio inmaterial:

Respecto al daño moral causado a la señora **CELINA BEATRIZ BRAVO ÁLVAREZ**, por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala conforme con lo que viene expuesto en precedencia, reconoce la suma de 50 SMLMV.
Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa afectada, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, el apoderado judicial, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-297 (DIFERIDO)							
CELINA BEATRIZ BRAVO ÁLVAREZ							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
CELINA BEATRIZ BRAVO ÁLVAREZ	CC	26.973.664	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							88.257.000

DOCTOR REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	1-172 (Diferido)			
DELITOS LEGALIZADOS	HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA; EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON DESAPARICIÓN FORZADA; EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL.			
VICTIMA DIRECTA	**ADID MABEL MENDEZ BRAVO**			
FECHA DE NACIMIENTO	19 DE SEPTIEMBRE DE 1974			
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR				
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0
VÍCTIMAS RECLAMANTES				
VÍCTIMA N° 1				
NOMBRES COMPLETOS	ADID MABEL MENDEZ BRAVO			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**		40.934.172
SIJYP	N/A			
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder conferido Doctor Rafael Reinaldo Lora Lentino. Folios 8. **3.** Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 9.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	1 SMLMV indexado por un periodo de 12 meses.			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**		**NO**	X
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**		**NO**	X

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Respecto al daño moral causado a la señora **ADID MABEL MÉNDEZ BRAVO,** por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominados "*Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce la suma de 50 SMLMV.

Frente a las pretensiones indemnizatorias de las señoras ROSA AGUILAR CASTRO[187], y LUZ ELENA AGUILAR CASTRO, sustentadas por su apoderado

[187] Sustentada en sesión vespertina del 9 de julio de 2025 en la ciudad de Riohacha – La Guajira.

judicial dentro del trámite de la audiencia de incidente de reparación integral a víctimas, la Sala no reconocerá estas reclamaciones por las siguientes razones:

En cuanto a la primera víctima, señora ROSA AGUILAR CASTRO, se verificó en la carpeta digital que el apoderado judicial omitió aportar los elementos de prueba que conllevara a la Colegiatura al estudio de dichas reclamaciones, para lo cual no existe convicción que nos demuestre que la víctima directa del delito de desplazamiento forzado padeció algún daño moral.

Y en cuanto a la segunda, señora LUZ ELENA AGUILAR CASTRO, se procedió de igual manera, con la revisión de la carpeta digital, encontrándose en la misma, documentos de pruebas que no corresponden a la víctima directa, sino a nombre de la señora RITA ACACIAS; razón por la cual la Sala no le es posible proceder con el estudio de las pretensiones solicitadas.

Lo anterior no obsta para que, una vez subsanadas las falencias probatorias, las víctimas puedan comparecer a otro incidente de reparación integral que se tramite en contra de algún exmiembro del grupo armado ilegal del Frente Contrainsurgencia Wayúu del Bloque Norte de las extintas AUC y hacer valer su garantía de reparación integral.

Se advierte al abogado adscrito a la Defensoría del Pueblo – Regional Atlántico, en cumplimiento de su deber del mandato, en lo sucesivo revisar la foliatura con el contenido de las pruebas que adjunta en la carpeta digital de cada una de las víctimas que representa, toda vez que esas imprecisiones señaladas, no le permiten a la Sala efectuar un posible calculo indemnizatorio, porque no estamos llamados a llenar los vacíos a partir de meras presunciones o suposiciones por la omisión de los apoderados judiciales.

Perjuicios materiales. No se hicieron solicitudes indemnizatorias por este ítem.

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras Medidas:

El apoderado de las víctimas, doctor REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1-172 (DIFERIDO)							
ADID MABEL MENDEZ BRAVO							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES	**DAÑOS MATERIALES**			
				LUCRO CESANTE			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE POR DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
ADID MABEL MENDEZ BRAVO	CC	40.934.172	71.175.000	17.082.000	-	-	88.257.000
TOTAL							**88.257.000**

DOCTORA DORIS ENITH ÁVILA CANTILLO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	01				
DELITOS LEGALIZADOS	HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA				
VICTIMA DIRECTA	**TOMAS EDUARDO MORALES MEDINA**				
FECHA DE NACIMIENTO	29 DE MARZO DE 1964				
FECHA DE LOS HECHOS	28 DE MAYO DE 2000				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**			0
HERMANOS	5	**PADRE**	0	**MADRE**	0
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	ALEXANDER ENRIQUE MORALES MEDINA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	84.083.611		
SIJYP	690980				
PARENTESCO	HERMANO				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación integral a víctimas. Folios 1-7. **2.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 8. **3.** Registro civil de nacimiento de la víctima directa. Folio 9. **4.** Registro civil de defunción de la víctima directa N° 2023787. Folio 10. **5.** Poder Conferido. Folio 11. **6.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 12. **7.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta. Folio 13. **8.** Certificación del Registro de Hechos Atribuible SIJYP 690980. Folio 14. **9.** Peritaje psicólogo Ley 975- de 2005. Folios 33-36				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Homicidio)	100 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		
VÍCTIMA N° 2					
NOMBRES COMPLETOS	ALIS JUDITH MORALES MEDINA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.927.369		
SIJYP	690150				
PARENTESCO	HERMANA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder Conferido. Folio 15. **2.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 16.				

	3. Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta. Folio 17. **4.** Certificación del Registro de Hechos Atribuible SIJYP 690150. Folio 18. **5.** Peritaje psicólogo ley 975- de 2005. Folios 33-36				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Homicidio)	100 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		
VÍCTIMA N° 3					
NOMBRES COMPLETOS	PAULINA MORALES MEDINA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.918.769		
SIJYP	662479				
PARENTESCO	HERMANA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder Conferido. Folio 19. **2.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 20. **3.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta. Folio 21. **4.** Certificación del Registro de Hechos Atribuible SIJYP 662479. Folio 22. **5.** Peritaje psicólogo ley 975- de 2005. Folios 33-36				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	100 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		
VÍCTIMA N° 4					
NOMBRES COMPLETOS	UDOSIO ANTONIO MORALES MEDINA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	84.079.731		
SIJYP	691000				
PARENTESCO	HERMANO				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder Conferido. Folios 23-24. **2.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 25. **3.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta. Folio 26. **4.** Certificación del Registro de Hechos Atribuible SIJYP 691000. Folio 27. **5.** Peritaje psicólogo ley 975- de 2005. Folios 33-36				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	100 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**		X	**NO**	
VÍCTIMA N° 5					
NOMBRES COMPLETOS	RAFAEL JUSTINIANO MORALES MEDINA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	84.032.175		
SIJYP	691005				
PARENTESCO	HERMANO				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder Conferido. Folios 28-29. **2.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 30. **3.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta. Folio 31. **4.** Certificación del Registro de Hechos Atribuible SIJYP 691005. Folio 32. **5.** Peritaje psicólogo ley 975- de 2005. Folios 33-36				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	100 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**		X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**		X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado" *Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de daño moral a favor de los señores **ALEXANDER ENRIQUE MORALES MEDINA, PAULINA MORALES MEDINA, ALIS JUDITH MORALES MEDINA, UDOSIO ANTONIO MORALES MEDINA Y RAFAEL JUSTINIANO MORALES MEDINA**, en ocasión al delito de HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, la suma equivalente a **50 SMLMV** a cada uno, quienes probaron el parentesco y demostraron el daño moral sufrido.

Perjuicio material: No solicitaron pretensiones indemnizatorias.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 1						
TOMAS EDUARDO MORALES MEDINA						
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**			
			DAÑOS INMATERIALES			
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL Homicidio en Persona Protegida (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE**		
				CAUSADO	**FUTURO**	**TOTAL**
ALEXANDER ENRIQUE MORALES MEDINA	CC	84.083.611	71.175.000	-	-	71.175.000
ALIS JUDITH MORALES MEDINA	CC	40.927.369	71.175.000	-	-	71.175.000
PAULINA MORALES MEDINA	CC	40.918.769	71.175.000	-	-	71.175.000
UDOSIO ANTONIO MORALES MEDINA	CC	84.079.731	71.175.000	-	-	71.175.000
RAFAEL JUSTINIANO MORALES MEDINA	CC	84.032.175	71.175.000	-	-	71.175.000
TOTAL						**355.875.000**

DOCTORA DORIS ENITH AVILA CANTILLO

APODERADA DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	37				
DELITOS LEGALIZADOS	HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA EN CONCUCRSO CON HOMICIDIO EN GRANDO DE TENTATIVA				
VICTIMA DIRECTA	**GUILLERMO ALFONSO JUSAYU EPIAYÚ Y EDINSON JUSAYU EPIAYÚ**				
FECHA DE NACIMIENTO	29 DE MAYO DE 1975 – 02 DE MAYO DE 1977				
FECHA DE LOS HECHOS	19 DE SEPTIEMBRE DE 2004				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	1	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**			
HERMANOS	5	**PADRE**	1	**MADRE**	1
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	EDINSON MANUEL JUSAYU EPIAYÚ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	84.077.178		
SIJYP					
PARENTESCO	VÍCTIMA DIRECTA DE TENTATIVA DE HOMICIDIO Y HERMANO DE GUILLERMO ALFONSO JUSAYU EPIAYÚ				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-9. **2.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10. **3.** Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento de la víctima directa N° 10558366. Folio 11. **4.** Fotocopia del Registro Civil de defunción N° 04515396. Folios 12-13. **5.** Poder Conferido. Folios 14-15. **6.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 16. **7.** Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento de la víctima directa. Folio 17. **8.** Declaración extra-proceso de afectaciones. Folios 52-54.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Homicidio grado de Tentativa)	100 SMLMV				
DAÑO MORAL (Homicidio)	100 SMLMV				
DAÑO MORAL (Desplazamiento Forzado)	50 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		
VÍCTIMA N° 2					

NOMBRES COMPLETOS	JOSÉ JUSAYU			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	15.236.245	
SIJYP				
PARENTESCO	PADRE			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder Conferido. Folios 18-19. **2.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 20. **3.** Poder Conferido. Folios 21-22. **4.** Declaración extra-proceso de afectaciones. Folios 52-54.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (Homicidio grado de Tentativa)	100 SMLMV			
DAÑO MORAL (Homicidio)	100 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento Forzado)	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	$78.707.893.			
LUCRO CESANTE FUTURO	$ 33.105.731			
TOTAL, LUCROS	$ 111.813.625.			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 3				
NOMBRES COMPLETOS	JOSEFINA EPIAYÚ EPIAYÚ			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.981.970	
SIJYP				
PARENTESCO	MADRE			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder Conferido. Folios 23-24. **2.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 25. **3.** Unidad Satélite de Fiscalías para la Justicia y la Paz. Folio 26. **4.** Declaración extra-proceso de afectaciones. Folios 52-54			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (Homicidio grado de Tentativa)	100 SMLMV			
DAÑO MORAL (Homicidio)	100 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento Forzado)	50 SMLMV			
LUCRO CESANTE PRESENTE	$78.707.893.			
LUCRO CESANTE FUTURO	$ 33.105.731			
TOTAL, LUCROS	$ 111.813.625.			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		
VÍCTIMA N° 4					
NOMBRES COMPLETOS	GUILLERMO ALFONSO JUSAYU VANGRIEKEN				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.124.060.866		
FECHA DE NACIMIENTO	09/03/1996				
EDAD AL MOMENTO DE LOS HECHOS	8 AÑOS				
SIJYP					
PARENTESCO	HIJO				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder Conferido. Folios 27-30. **2.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 31. **3.** Certificación de la Notaria del Circuito de Maico la Guajira. Folio 32. **4.** Declaración extra-proceso de afectaciones. Folios 52-54				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Homicidio en Persona Protegida)	100 SMLMV				
DAÑO MORAL (Homicidio grado de Tentativa)	100 SMLMV				
DAÑO MORAL (Desplazamiento Forzado)	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	$157.415.786.				
LUCRO CESANTE FUTURO	$ 0				
TOTAL, LUCROS	$ 157.415.786.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		
VÍCTIMA N° 5					
NOMBRES COMPLETOS	KATTY GRACIELA EPIAYÚ EPIAYÚ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.006.897.040		
SIJYP					
PARENTESCO	HERMANA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder Conferido. Folios 33-36. **2.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 37. **3.** Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento de la víctima indirecta N° 1006897040. Folio 38. **4.** Declaración extra-proceso de afectaciones. Folios 52-54				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Homicidio grado de Tentativa)	100 SMLMV				
DAÑO MORAL (Homicidio en Persona Protegida)	100 SMLMV				

DAÑO MORAL (Desplazamiento Forzado)	50 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	
VÍCTIMA N° 6				
NOMBRES COMPLETOS	MARÍA LUISA JUSAYU EPIAYU			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.877.731	
SIJYP				
PARENTESCO	HERMANA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder Conferido. Folios 39-40. **2.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 41. **3.** Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento de la víctima indirecta N° 16166344. Folio 42. **4.** El Suscrito Alaüla (Autoridad Tradicional) De La Ranchería De Chonkamaana, Resguardos indígenas De La Alta Y Media Guajira, Con Jurisdicción En El Municipio De Maicao, Departamento De La Guajira. Folio 43. **5.** Declaración extra-proceso de afectaciones. Folios 52-54			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (Homicidio grado de Tentativa)	100 SMLMV			
DAÑO MORAL (Homicidio en Persona Protegida)	100 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento Forzado)	50 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	**X**	**NO**	
VÍCTIMA N° 7				
NOMBRES COMPLETOS	LUZ MERY EPIAYÚ EPIAYÚ			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.121.528.968	
SIJYP				
PARENTESCO	HERMANA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder Conferido. Folios 44-45. **2.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 46. **3.** Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento de la víctima indirecta N° 1121528968. Folio 47. **4.** Declaración extra-proceso de afectaciones. Folios 52-54			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (Homicidio grado de Tentativa)	100 SMLMV			
DAÑO MORAL	100 SMLMV			

(Homicidio en persona Protegida)				
DAÑO MORAL (Desplazamiento Forzado)	50 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	**X**	**NO**	
VÍCTIMA N° 8				
NOMBRES COMPLETOS	JOSÉ MARÍA JUSAYU EPIAYÚ			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	15.207.662	
SIJYP				
PARENTESCO	HERMANO			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder Conferido. Folios 48-49. **2.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 50. **3.** Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento de la víctima indirecta N° 16166343. Folio 51. **4.** Declaración extra-proceso de afectaciones. Folios 52-54.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (Homicidio grado de Tentativa)	100 SMLMV			
DAÑO MORAL (Homicidio en Persona Protegida)	100 SMLMV			
DAÑO MORAL (Desplazamiento Forzado)	50 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	**X**	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	**X**	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado" *Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, Sala de decisión en ocasión al delito de homicidio en persona protegida del señor **GUILLERMO ALFONSO JUSAJU EPIAYÚ**, reconoce a los padres, señores **JOSE JUSAYU** y **JOSEFINA EPIAYÚ EPIAYÚ**, y al hijo del occiso, señor **GUILLERMO ALFONSO JUSAYU VANGRIEKEN**, la suma de 100 SMLMV a cada uno, para un total de 300 SMLMV.

Para los hermanos, **KATTY GRACIELA EPIAYÚ EPIAYÚ, MARIA LUISA JUSAYU EPIAYÚ, LUZ MERY EPIAYÚ EPIAYÚ, JOSE MARIA JUSAYU EPIAYÚ, y EDINSON MANUEL JUSAYU EPIAYÚ,** quienes probaron el parentesco y demostraron el perjuicio moral, se les reconoce a cada

uno de los miembros del grupo familiar, la suma de 50 SMLMV; es decir un total de 250 SMLMV.

Como nos encontramos en este mismo hecho, con el delito de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, ocurrido al señor **EDINSON MANUEL JUSAYU EPIAYU**, quien reclama daño moral por el perjuicio, se le reconoce como víctima directa, la suma de 30 SMLMV; y para los padres, como víctimas indirectas, señores **JOSE JUSAYU** y **JOSEFINA EPIAYÚ EPIAYÚ**, la suma de 15 SMLMV a cada uno, para un total de 30 SMLMV. tal como lo ha venido reconociendo esta Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, en anteriores decisiones.

En ese orden, en lo pertinente a la reclamación de los hermanos del señor EDINSON MANUEL JUSAYU EPIAYU, quienes demostraron el parentesco y el perjuicio sufrido, se les reconoce por concepto de daño moral a favor de los señores **KATTY GRACIELA EPIAYÚ EPIAYÚ. MARIA LUISA JUSAYU EPIAYÚ, LUZ MERY EPIAYÚ EPIAYÚ Y JOSE MARIA JUSAYU EPIAYÚ,** la suma de 15 SMLMV, para cada uno de los miembros del grupo familiar relacionados, para un total de 60 SMLMV.

Desplazamiento Forzado:

La representante de víctimas solicitó para el grupo familiar el reconocimiento por concepto de daño moral en ocasión al delito de desplazamiento forzado, advirtiendo la Sala que este delito no fue formulado y en consecuencia no se legaliza; razón por la cual se deniega al núcleo familiar la pretensión indemnizatoria.

Perjuicio material: No presentaron pretensiones indemnizatorias por este ítem.

De lo resuelto por la Sala con relación a las pretensiones por lucro cesante causado y futuro:

La apoderada judicial, en el trámite del incidente de reparación integral a víctimas el día 10 de julio del año 2025, solicitó lucro cesante relacionando al grupo familiar del occiso GUILLERMO ALFONSO JUSAYU EPIAYÙ[188] en el siguiente orden: padres, señores **JOSE JUSAYU** y **JOSEFINA EPIAYÚ EPIAYÚ**, hijo del occiso, señor **GUILLERMO ALFONSO JUSAYU VANGRIEKEN**, y su excompañera permanente NANCY VANGRIEKEN.

Se advierte que, durante la sustentación de las pretensiones indemnizatorias realizada por la abogada, respecto del núcleo familiar en mención, la señora **JOSEFINA EPIAYÚ EPIAYÚ** – madre de la víctima directa – solicitó[189] que no se tenga en cuenta para el reconocimiento de dichas pretensiones a la señora

[188] Corresponde al Hecho N.37 del Patròn de macrocriminalidad de Homicidio en persona protegida.
[189] A través de traductor durante la diligencia.

NANCY VANGRIEKEN, argumentado en su lengua nativa (wayuunaiki), que para esa reclamación se debe tener en cuenta lo reglamentado en su ley de origen; así mismo, lo hizo la hermana de la víctima directa; procediendo la Sala, luego de la sustentación de dicha reclamación indemnizatoria, solicitarle a la apoderada adscrita a la Defensoría del Pueblo, que elevara una consulta a las **autoridades indígenas** de lo planteado en audiencia, como parte fundamental de la cultura y la identidad del pueblo Wayuu, con el fin de proceder con el estudio de la petición tendiendo presente su linaje étnico.

Frente a la situación, se corrió traslado a la doctora Doris Ávila, con el fin de analizar muy bien dichas pretensiones frente a la víctima reclamante, quien solicitó un espacio para consultar, concedió el uso de la palabra a la doctora Pimienta, quien manifestó que convocaría a una Junta Mayor de Puchi (palabreros) para que dirima el conflicto presentado en el transcurso de la audiencia de Incidente de reparación Integral a Víctimas, otorgando el Magistrado Ponente un tiempo adicional para que sustentara el mencionado concepto.

Al día siguiente, 11 de julio de 2025, una vez advertidas las circunstancias en el presente asunto, la apoderada judicial del grupo familiar procedió a presentar nuevamente el núcleo familiar correspondiente al Hecho No.37, **excluyendo** a la señora NANCY BANGRIEKEN de la narrativa fáctica. y frente a la consulta, la abogada, no hizo manifestación alguna; es decir, se mantuvo con la pretensión indemnizatoria excluyendo a la señora Nancy Bangrieken.

Posteriormente, se recibió el concepto emitido el cual fue firmado por la Defensora del Pueblo -Regional de La Guajira y un palabrero[190],el cual contempla una reseña del universo cultural y lógica del sistema normativo Wayúu.

Es preciso señalar que, para la liquidación del lucro cesante consolidado y futuro, el cual corresponde a la pérdida de una ganancia, utilidad o beneficio económico que dejó de ingresar al patrimonio de la víctima directa como consecuencia de una conducta dañosa, el objetivo es, reconocer el valor sobre un bien que, no se encontraba en poder de esa persona antes de la ocurrencia del hecho lesivo.

En ese orden, se tiene que, para el reconocimiento del lucro cesante consolidado y futuro, tal como lo advirtió la Corte Suprema de Justicia[191] en los procesos de Justicia y Paz, la Sala ha dado aplicación, tal como fue señalado en el cuadro relacionado en el en el acápite denominado **"*Montos a indemnizar por concepto de lucro cesante*"** de esta sentencia; de tal manera que, descendiendo al caso en concreto, se tiene:

[190] El día 22 de julio de 2025, mediante correo electrónico.
[191] SP12668-2017, rad. 47053, que se aplicarán los niveles y porcentajes del Consejo de Estado, traídos a colación en el radicado 66001233100020010073101 del 28 de agosto de 2014.

Lucro Cesante Causado

De conformidad con lo solicitado por la apoderada judicial, quien en este ítem elevò únicamente pretensión por lucro cesante consolidado al hijo del occiso, señor **GUILLERMO ALFONSO JUSAYU,** se le concede en el siguiente orden:

Para la fecha del suceso el señor **GUILLERMO ALFONSO JUSAYU,** contaba con 8 años, por lo que la edad de vida probable de acuerdo con la tabla que adoptó la Sala es de 251.37 meses, tiempo este que se tendrá en cuenta para la liquidación, toda vez que es menor a la probabilidad de vida del occiso al momento de fallecer.

El núcleo familiar estaba compuesto por la compañera permanente y su hijo, **GUILLERMO ALFONSO JUSAYU** quienes tienen derecho a ser indemnizados a la fecha de liquidación de esta sentencia, por lo tanto, la liquidación del lucro cesante causado se hará en una sola operación matemática en las mismas proporciones que ordena la ley, es decir, el 50 % para la compañera permanente y el restante 50 % le corresponderá a su hijo.

En ese orden, se tendrá como Ra $ 533.813 y como n (251.37), y se reconocerá por concepto de Lucro Cesante Consolidado la suma de $261.988.006, correspondiéndole a su hijo el 50%, por concepto de lucro cesante presente.

Es pertinente anotar, tal como lo ha reiterado la Corte Suprema que, el valor del salario base de liquidación se ha tomado del resultado de la suma del salario mínimo actual ($ 1.423.500), "…esta cifra se incrementa en un 25% por concepto de prestaciones sociales y, a su vez, se disminuye en igual proporción por gastos personales, de cuyo resultado se obtiene la denominada *renta actualizada.* Dicho monto sirve para calcular el dinero que hubiese aportada la víctima directa de homicidio a cada una de las víctimas indirectas que dependían económicamente de ella" (CSJ SP659-2021, rad. 54860).

Así las cosas, se procede con la liquidación:

CALCULO DE LA INDEMNIZACIÓN DEBIDA O LUCRO CESANTE PASADO

Víctima Directa	GUILLERMO ALFONSO JUSAYU EPIAYÚ
Fecha de Nacimiento	29/05/1975
Fecha del Hecho	19/09/2004
Delitos	HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA
Víctima Indirecta	GUILLERMO ALFONSO JUSAYU
Parentesco	HIJO
Fecha de Nacimiento	10/05/1996
Fecha de sentencia	**30/08/2025**

Fecha de los hechos	Fecha de la Liquidación Sentencia	Periodo Mensual Vencido
19/09/2004	30/08/2025	251.37
Glosario aplicado en la fórmula		
SP	Lucro cesante pasado o valor actual de las rentas pasadas	
1	Número constante en la operación en los ceros a la izquierda del interés mensual	1
RA	Renta actualizada	533.813
I	Tasa de interés mensual legal (6% anual)	0.004867
N	Número de meses desde la fecha de los Hechos hasta la fecha de la sentencia	251.37
Fórmula Aplicar		
$SP = RA \times \frac{(1+i)^{N}-1}{i}$		
REEMPLAZAR FÓRMULA		
$SP = 533.813 \quad \frac{1.004867}{0.004867}$		
$SP = 533.813 \quad \frac{2.3887}{0.004867}$		
SP = 533.813 490.7866		
RESULTADOS		
SP (Lucro Cesante Pasado)		
Distribución del lucro Cesante		
HIJO LE CORRESPONDERA 50%	261.988.006	
Total	**261.988.006**	

De tal manera que el hijo del occiso le corresponde el 50% en un monto de $261.988.006; y el otro 50% queda reservado.

Ahora bien, como existe pretensión indemnizatoria frente a los padres, señores **JOSE JUSAYU** y **JOSEFINA EPIAYÚ EPIAYÚ**, para que se les conceda el lucro cesante presente y futuro, es preciso señalar que:

La petición en el caso que nos ocupa, la apoderada no aportó documentación para acreditar el daño padecido a los progenitores de la víctima directa de homicidio; por cuanto al revisar el expediente digital no se desprende un mínimo de prueba de la cual pueda advertirse que los padres dependían económicamente del hijo, y como se trata de un daño material que no se presume, sino que debe probarse[192] . De tal manera, que, ante la ausencia de la acreditación del lucro cesante en favor de los padres por el homicidio de su hijo, la Sala deniega

[192] CSJ SP659-2021, rad. 54860.

las pretensiones indemnizatorias por lucro cesante consolidado y futuro, por carecer de pruebas frente a la dependencia económica de sus progenitores

Otras Medidas:

La apoderada de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 37							
GUILLERMO ALFONSO JUSAYU EPIAYÚ Y EDINSON JUSAYU EPIAYÚ							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES				
					LUCRO CESANTE		
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA (EN SMLMV)**	**PERJUCIO MORAL HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
EDINSON MANUEL JUSAYU EPIAYÚ	CC	84.077.178	71.175.000	42.705.000	-	-	113.880.000
JOSÉ JUSAYU	CC	15.236.245	142.350.000	21.352.500	-	-	163.702.500
JOSEFINA EPIAYÚ EPIAYÚ	CC	40.981.970	142.350.000	21.352.500	-	-	163.702.500
GUILLERMO ALFONSO JUSAYU VANGRIEKEN	CC	1.124.060.866	142.350.000	7.117.500	261.988.006	-	411.455.506
KATTY GRACIELA EPIAYÚ EPIAYÚ	CC	1.006.897.040	71.175.000	7.117.500	-	-	78.292.500
MARÍA LUISA JUSAYU EPIAYU	CC	40.877.731	71.175.000	7.117.500	-	-	78.292.500
LUZ MERY EPIAYÚ EPIAYÚ	CC	1.121.528.968	71.175.000	7.117.500	-	-	78.292.500
JOSÉ MARÍA JUSAYU EPIAYÚ	CC	15.207.662	71.175.000	7.117.500	-	-	78.292.500
TOTAL							**1.165.910.506**

DOCTORA DORIS ENITH AVILA CANTILLO

APODERADA DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	37				
DELITOS LEGALIZADOS	HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA				
VICTIMA DIRECTA	**LUIS SERGIO JUSAYU**				
FECHA DE NACIMIENTO	NO ANEXARON CÉDULA				
FECHA DE LOS HECHOS	19 DE SEPTIEMBRE DE 2004				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	5	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**			
HERMANOS		**PADRE**		**MADRE**	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	ISABEL JUSAYU URIANA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.123.995.004		
SIJYP					
PARENTESCO	HIJA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Fotocopia del Registro Civil de defunción la víctima directa N° 06036913. Folio 8. **3.** Poder Conferido. Folios 9-10. **4.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 11. **5.** Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento de la víctima indirecta N°1.123.995.004. folio 12.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Homicidio)	100 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		
VÍCTIMA N° 2					
NOMBRES COMPLETOS	MARIANA JUSAYU URIANA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.124.378.012 ILEGIBLE		
SIJYP					
PARENTESCO	HIJA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder Conferido. Folios 13-14. **2.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 15. **3.** Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento de la víctima indirecta N° 1.124.378.012. folio 16.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Homicidio)	100 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**		X	**NO**	
VÍCTIMA N° 3					
NOMBRES COMPLETOS	JHOJANY JUSAYU URIANA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.192.890.634		
SIJYP					
PARENTESCO	HIJA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder Conferido. Folios 17-18. **2.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 19. **3.** Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento de la víctima indirecta N° 30259521. folio 16				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Homicidio)	100 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**		X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**		X	**NO**	
VÍCTIMA N° 4					
NOMBRES COMPLETOS	ANA VALERIA JUSAYU GÓMEZ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.124.381.578		
SIJYP					
PARENTESCO	HIJA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder Conferido. Folios 21-22. **2.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 23. **3.** Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento de la víctima indirecta. folio 24.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Homicidio)	100 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**		X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**		X	**NO**	
VÍCTIMA N° 5					
NOMBRES COMPLETOS	YESICA PAOLA JUSAYU GÓMEZ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.124.051.025		
SIJYP					
PARENTESCO	HIJA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder Conferido. Folios 25-26. **2.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 27. **3.** Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento de la víctima indirecta N° 22529608. folio 28.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Homicidio)	100 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**		X	**NO**	

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

De conformidad con lo descrito en el acápite denominado *"Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce por concepto de daño moral a favor de las señoras **ISABEL JUSAYU URIANA, MARIANA JUSAYU URIANA, JHOJANY JUSAYU URIANA, ANA VALERIA JUSAYU GÓMEZ y YESICA PAOLA JUSAYU GÓMEZ**, en calidad de hijas del occiso LUIS SERGIO JUSAYU, la suma equivalente a **100 SMLMV** a cada uno de los integrantes del núcleo familiar relacionado, en ocasión al delito de HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, para un total de 600 SMLMV.

Perjuicio material: No solicitaron pretensiones indemnizatorias.

Otras Medidas:

La apoderada de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 37							
LUIS SERGIO JUSAYU							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES				
					LUCRO CESANTE		
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA (EN SMLMV)**	**PERJUCIO MORAL HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
ISABEL JUSAYU URIANA	CC	1.123.995.004	142.350.000	-	-	-	142.350.000
MARIANA JUSAYU URIANA	CC	1.124.378.012	142.350.000	-	-	-	142.350.000
JHOJANY JUSAYU URIANA	CC	1.192.890.634	142.350.000	-	-	-	142.350.000
ANA VALERIA JUSAYU GÓMEZ	CC	1.124.381.578	142.350.000	-	-	-	142.350.000
YESICA PAOLA JUSAYU GÓMEZ	CC	1.124.051.025	142.350.000	-	-	-	142.350.000
TOTAL							**711.750.000**

DOCTORA DORIS ENITH AVILA CANTILLO

APODERADA DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	45			
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL Y AMENAZAS.			
VICTIMA DIRECTA	**JAIME DARIO ESPELETA HERRERA**			
FECHA DE NACIMIENTO	14 DE SEPTIEMBRE DE 1967			
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ENERO DE 2002			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR				
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**	0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES				
VÍCTIMA N° 1				
NOMBRES COMPLETOS	**JAIME DARIO ESPELETA HERRERA**			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	84.031.907	
SIJYP	581693			
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación integral a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder Conferido y sustitución. Folio 8-10. **3.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 11. **4.** Certificación del Registro de Hechos Atribuibles. Folio 12-15. **5.** Credencial de registraduría. Folio 16. **6.** Artículo periodístico. Folio 17. **7.** Peritaje financiero. Folio 18.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL	80 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:
Respecto al daño moral causado al señor **JAIME DARIO ESPELETA HERRERA,** por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado" *Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce la suma de 50 SMLMV.

Perjuicios materiales: no se solicitaron pretensiones indemnizatorias.

Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 45							
JAIME DARÍO ESPELETA HERRERA							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES		**DAÑOS MATERIALES**		
					LUCRO CESANTE		
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**DAÑO EMERGENTE POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO**	**LUCRO CESANTE POR EL DESPLAZAMIENTO**	**FUTURO**	**TOTAL**
JAIME DARÍO ESPELETA HERRERA	CC	84.031.907	71.175.000		-	-	71.175.000
TOTAL							**71.175.000**

INCIDENTE DIFERIDOS

DOCTORA DORIS ENITH AVILA CANTILLO
APODERADA DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	01-172/297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA; EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON DESAPARICIÓN FORZADA; EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL.				
VICTIMA DIRECTA	**ALIDIS GILBERTO GÓMEZ TORO.**				
FECHA DE NACIMIENTO	14 DE JUNIO DE 1964.				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	ALIDIS GILBERTO GÓMEZ TORO				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**		84.028.404	
SIJYP	586763				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**8.** Escrito Incidente Excepcional de reparación integral a víctimas. Folios 1-3. **9.** Poder Conferido y sustitución. Folio 4-6. **10.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 7. **11.** Certificación del Registro de Hechos Atribuibles. Folio 8. **12.** Declaraciones de Convivencia. Folio				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X		**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X		**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado" *Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, con ocasión al delito de Desplazamiento Forzado a la Población Civil, se le concede la suma de 50 SMLMV, al señor ALIDIS GILBERTO GÓMEZ TORO.

Perjuicio material: No solicitaron pretensiones indemnizatorias.

Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 01 – 172/297 (DIFERIDO)							
ALIDIS GILBERTO GOMEZ							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES		**DAÑOS MATERIALES**		
					LUCRO CESANTE		
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**DAÑO EMERGENTE POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO**	**LUCRO CESANTE POR EL DESPLAZAMIENTO**	**FUTURO**	**TOTAL**
ALIDIS GILBERTO GOMEZ	CC	84.028.404	71.175.000		-	-	71.175.000
TOTAL							**71.175.000**

DOCTORA DORIS ENITH AVILA CANTILLO

APODERADA DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	02 – 172/297				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL.				
VICTIMA DIRECTA	**YARELSY BEATRIZ IGUARAN LENGUA**				
FECHA DE NACIMIENTO	3 DE AGOSTO DE 1980				
FECHA DE LOS HECHOS	1 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS		**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**			
HERMANOS	5	**PADRE**		**MADRE**	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	YARELSY BEATRIZ IGUARAN LENGUA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.936.923		
SIJYP					
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-3. **2.** Poder otorgado por YARELSY BEATRIZ IGUARAN LENGUA a DORIS ENITH AVILA CANTILLO. Folios 4-5. **3.** Copia de cédula de ciudadanía de YARELSY BEATRIZ IGUARAN LENGUA, número 40’936.923 expedida en Riohacha. Folio 6 **4.** Copia del Registro Civil de Nacimiento de YARELSY BEATRIZ IGUARAN LENGUA número 4934474.hija de NANCY LENGUA y HERNALDO IGUARAN. Folio 7. **5.** Constancia de la Unidad satélite de Fiscalías Para la Justicia y la Paz a nombre de YARELSY BEATRIZ IGUARAN LENGUA. Folios 8. **6.** Registro de Orientación y Asesoría a las Víctimas en el Proceso de Justicia y Paz suscrito a YARELSY BEATRIZ IGUARAN LENGUA en el que menciona, entre otras perdidas, 20 cerdos y 30 gallinas. Folios 9-12. **7.** Liquidación Daño Material y Perjuicios económicos en delitos de desplazamiento, hurto y secuestro suscrita por perito financiero Álvaro Parra Hernández. Folio 13.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Desplazamiento Forzado)	50 SMLMV				
Daño Emergente Actualizado	$ 7.880.216.				
Lucro Cesante Presente	$ 36.523.547.				
Total, del Daño	$ 44.403.763.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**		**NO**	**X**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**		**NO**	**X**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Respecto al daño moral causado a la señora **YARELSY BEATRIZ IGUARAN LENGUA,** por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado *"Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce la suma de 50 SMLMV.

Daño emergente:

Se deniega el daño emergente por el desplazamiento forzado, por cuanto no existe claridad en el material probatorio aportado por la pérdida de los cultivos, al igual que carece de elementos de prueba para establecer los montos de dicha pérdida. En cuanto a los perjuicios materiales por la pérdida de 20 cerdos y 30 gallinas, se le concede lo pretendido y se procederá a realizar la correspondiente liquidación conforme a la tabla de baremos, de la siguiente manera:

CLASE DE BIEN	CANTIDAD	VALOR PROMEDIO	VALOR IPC	VALOR ACTUALIZADO	VALOR RECONOCIDO
Ganado Porcino (c/u)	20	$ 100.000	3,125439868	$ 312.544	$ 6.250.880
Gallinas (c/u)	30	$ 5.000	3,125439868	$ 15.627	$ 468.816
TOTAL, VALOR RECONOCIDO					**$ 6.719.696**

Perjuicio material:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 02 – 172/297 (DIFERIDO)							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES				
					LUCRO CESANTE		
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**DAÑO EMERGENTE POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO**	**LUCRO CESANTE POR EL DESPLAZAMIENTO**	**FUTURO**	**TOTAL**
YARELSY BEATRIZ IGUARAN LENGUA	CC	40.936.923	71.175.000	6.719.696	17.082.000	-	94.976.696
TOTAL							**94.976.696**

DOCTORA DORIS ENITH AVILA CANTILLO

APODERADA DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	03 - 172/297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL.				
VICTIMA DIRECTA	**DENIRIS LEONOR BERMUDEZ**				
FECHA DE NACIMIENTO	6 DE NOVIEMBRE DE 1954				
FECHA DE LOS HECHOS	1 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS		**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**			
HERMANOS	0	**PADRE**	0	**MADRE**	0
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	DENIRIS LEONOR BERMÚDEZ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.912.460		
SIJYP					
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	1. Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. 2. Poder Conferido. Folio 8. 3. Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 9. 4. Unidad Satélite de Fiscalías para la Justicia y la Paz. Folio 10. 5. Red de Solidaridad Social Municipio de Riohacha Departamento de la Guajira. Folio 11-12. 6. El Suscrito Jefe de Almacén y Archivo del Municipio Riohacha Hierro quemador. Folio 13. 7. Certificación del Depósito San Luis 2013 compra y víveres y abarrotes. Folio 14. 8. Juramento Estimatorio de la Defensoría del Pueblo. Folio 15-16. 9. Liquidación Daño Material y Perjuicios económicos en delitos de desplazamiento, hurto y secuestro. Folio 17.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Desplazamiento Forzado)	50 SMLMV				
DAÑO EMERGENTE ACTUALIZADO	$ 40.626.643.				
LUCRO CESANTE PRESENTE	$ 37.245.764				
TOTAL	$ 77.872.407.				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**		**NO**	**X**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**		**NO**	**X**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Respecto al daño moral causado a la señora **DENIRIS LEONOR BERMUDEZ,** por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado *"Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce la suma de 50 SMLMV.

Perjuicio material:

Daño emergente:

El daño emergente reclamado por la víctima está estimado en el juramento estimatorio relacionado gastos de desplazamiento por un valor $500.000, por pérdidas de bienes y enseres que tuvo que abandonar al huir del grupo armado ilegal del lugar donde residía en la población de Matitas – La Guajira, estimado en la suma de 7.400.000 y de conformidad con el soporte probatorio donde relacionan las reclamaciones comerciales para surtir la tienda que poseía, señala el valor de $6.000.000.oo, para un total de 13.900.000. Esos valores son para la Sala razonables, por lo que previa indexación se procederá a su reconocimiento.

Víctima Directa	DENIRIS LEONOR BERMUDEZ		
Fecha De Nacimiento	6/11/1954		
Fecha del Hecho	1/04/2002		
Delito	DESPLAZAMIENTO FORZADO		
Fecha de sentencia	30/08/2025		

DE	Monto Actualizado		
MH	Monto Histórico a Indexar		13.900.000
IPC FINAL	IPC del mes anterior a la fecha de la sentencia (Liquidación)	202507	150,71
IPC INICIAL	IPC a la fecha en la cual ocurrieron los hechos	200204	48,31

Formula

$$DE = MH \times \frac{IPC\text{-}FINAL}{IPC\ INICIAL}$$

REEMPLAZAR FORMULA

$$DE = 13.900.000 \times \frac{150,71}{48,31}$$

DE=	13.900.000	3,1196

RESULTADO	
TOTAL, DAÑO EMERGENTE	43.363.051

En cuanto a la pérdida de los seis (6) semovientes, la reclamante no señaló la cuantificación, por cada una de las reses pérdidas; de igual manera, no hizo clasificación de las reses (terneros, novillos, toros, vacas), únicamente se cuenta como soportes probatorios la certificación del registro de una marca quemadora de hierro para identificar los semovientes, suscrita por el Jefe de Almacén y Archivo de la Alcaldía de Riohacha – La Guajira; y es del caso señalar que "el daño emergente representa el perjuicio sufrido en la estructura actual del patrimonio del lesionado, ponderando para ello el valor de los bienes perdidos o su deterioro que afecta el precio, las expensas asumidas para superar las consecuencias del suceso lesivo, etc., cuya acreditación debe obrar en el diligenciamiento"[193]. Este daño se reconocerá a quien lo pruebe[194], y se echa de menos, entre otros, el reporte oficial del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que tiene entre sus funciones llevar las estadísticas de vacunación para controlar la propagación de plagas que puedan afectar las especies animales y/o vegetales.

En estos casos de graves violaciones de Derechos Humanos, si bien la normativa de Justicia y Paz prevé criterios de la flexibilización probatoria, la postura de la Corte Suprema de Justicia en escenarios que abarcan el tema de la Justicia Transicional, ha hecho un llamado para que las víctimas tengan una oportunidad de probar los hechos, pero también ha aclarado que ello no puede equipararse a la total y absoluta ausencia de pruebas, pues los aspectos pecuniarios que pretenden ser reconocidos no han sido acreditados objetivamente la preexistencia y propiedad de estos, así como tampoco se allegaron elementos de convicción que permitan calcular o determinar su valor. En ese orden, no se accede a las pretensiones indemnizatorias para obtener el reconocimiento del daño Emergente, por las razones esbozadas.

En lo pertinente a la reclamación indemnizatoria por concepto de seis (6) meses de arriendo, como consecuencia del desplazamiento forzado, no fue aportada prueba alguna para determinar las sumas de los cañones sufragados, razón por la cual para efectos de la determinación de los valores de arriendo, bienes muebles, enseres, animales abandonados a causa del hecho punible, la Sala atendrá lo establecido en la tabla elaborada por la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal [195] donde se señaló el valor promedio de tales elementos, a partir

[193] Sentencia CSJ. M.P. doctor Fernando Alberto Castro Caballero- providencia No. SP14143-2015 de fecha 15/10/2015.
[194] Excepto los gastos fúnebres.
[195] Fallo de segunda instancia dentro del expediente 34547 Justicia y Paz, contra los postulados Edwar Cobos Téllez y Uber Enrique Banquez Martínez.

de modelos baremo o diferenciados, comunes a la mayoría, a fin de ajustar las declaraciones juradas, superiores a esos valores, con el único propósito de evitar abusos en la tasación de los perjuicios ocasionados y, especialmente, preservar el principio de igualdad.

Así las cosas, el valor reconocido por la Sala a título de daño emergente se ceñirá de acuerdo con los criterios del modelo baremo fijado en la precitada sentencia, que se ilustra a continuación, razón por la cual se le reconoce a la señora **DENIRIS LEONOR BERMUDEZ,** el tiempo solicitado en la pretensión que es de seis (6) meses, debidamente indexado.

CLASE DE BIEN	CANTIDAD	VALOR PROMEDIO	VALOR IPC	VALOR ACTUALIZADO	VALOR RECONOCIDO
Arriendos (Mensual)	6	$ 60.000	3,125439868	$ 187.526	$ 1.125.158
TOTAL RECONOCIDO					**$1.125.158**

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 03 – 172/297 (DIFERIDO)							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES				
					LUCRO CESANTE		
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**DAÑO EMERGENTE POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO**	**LUCRO CESANTE POR EL DESPLAZAMIENTO**	**FUTURO**	**TOTAL**
DENIRIS LEONOR BERMUDEZ	CC	40.912.460	71.175.000	44.488.209	17.082.000	-	132.745.209
TOTAL							**132.745.209**

DOCTORA DORIS ENITH AVILA CANTILLO

APODERADA DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	04 – 172/297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL.				
VICTIMA DIRECTA	**NANCY MARIA LENGUA NAVARRO**				
FECHA DE NACIMIENTO	22 DE FEBRERO 1963				
FECHA DE LOS HECHOS	1 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	NANCY MARIA LENGUA NAVARRO				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.918.205		
SIJYP					
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder otorgado por NANCY MARIA LENGUA NAVARRO a DORIS ENITH AVILA CANTILLO. Folios 8-9 **3.** Copia de cédula de ciudadanía de NANCY MARIA LENGUA NAVARRO, número 40.918.205 expedida en Riohacha. Folio 10 **4.** Juramento estimatorio suscrito por NANCY MARIA LENGUA NAVARRO ante perito financiero de la Defensoría del Pueblo. Folios 11-12 **5.** Liquidación Daño Material y Perjuicios económicos en delitos de desplazamiento, hurto y secuestro presentada y sustentada por el perito financiero Dr. Álvaro Parra Hernández. Folios 18				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Desplazamiento Forzado)	50 SMLMV				
Daño Emergente Actualizado	$112.925.812				
Lucro Cesante Presente	$31.957.522				
Total, del Daño	$ 144.883.334				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**			**NO**	**X**
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**			**NO**	**X**
VÍCTIMA N° 2					
NOMBRES COMPLETOS	AIDA MARIA IGUARAN LENGUA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.118.823.907 ilegible		

SIJYP	410822			
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Poder otorgado por AIDA MARIA IGUARAN LENGUA a DORIS ENITH AVILA CANTILLO. Folios 13-14 **2.** Copia de la cédula de ciudadanía de AIDA MARIA IGUARAN LENGUA número 1.118.823.907. Folio15 **3.** Registro SIJYP a nombre de AIDA MARIA IGUARAN LENGUA bajo el número 410822. Folio 16 **4.** Registro Civil de Nacimiento de AIDA MARIA IGUARAN LENGUA número 21152381. Folio 17			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (Desplazamiento Forzado)	50 SMLMV			
Daño emergente	**1.** Pérdida de 12 hectáreas de cultivos- valor unitario $3.800.000- suma total $45.600.000 **2.** Arriendo cultivos $3.800.000 **3.** Arriendo por el desplazamiento $14.760.000 **4.** Transporte por el desplazamiento $1.000.000 **5.** Salarios dejados de percibir			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**		**NO**	X
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**		**NO**	X

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Respecto al daño moral causado a las señoras **NANCY MARIA LENGUA NAVARRO** y **AIDA MARIA IGUARAN LENGUA,** por el delito de Desplazamiento Forzado, la Sala teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado *"Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce la suma de 50 SMLMV, a cada una, para un total de 100 SMLMV.

Perjuicio material:
Daño emergente:

La apoderada de las reclamantes solicita indemnización por la pérdida de cultivos, relacionando 12 hectáreas $3.800.000 valor unitario, además del valor por el arriendo de $45.600. 000.oo, y revisado el material probatorio que se aportó, se encuentra el juramento estimatorio y el informe del perito contable adscrito a la Defensoría del Pueblo, en procura de encontrar respaldo alguno para determinar el perjuicio.

Del informe pericial, del cual se adjunta de manera conjunta con el grupo de víctimas que representa la abogada; no se observa más información frente a la liquidación, tal como la fórmula que conlleva a la liquidación de la indexación

con el monto señalado por las reclamantes y el daño emergente inicialmente referenciado, razón por la cual no es posible de manera directa la liquidación por los perjuicios solicitados. Se deniega las pretensiones.

La Sala hace el reconocimiento del valor declarado por desplazamiento que realizaron las víctimas directas al trasladarse al país de Caracas - Venezuela, toda vez que se torna razonable la cuantía y la justificación de sufragar algún dinero para trasladarse a otro lugar de la geografía nacional. Por tal motivo, se procede a la indexación de la suma de un $1.000. 000.oo.

En lo pertinente a la reclamación indemnizatoria por concepto de arriendo durante el período comprendido del mes de mayo de 2002 hasta febrero de 2009, como consecuencia del desplazamiento forzado, no fue aportada prueba alguna para determinar las sumas de los cañones sufragados, razón por la cual para efectos de la determinación de los valores de arriendo, bienes muebles, enseres, animales abandonados a causa del hecho punible, la Sala atendrá lo establecido en la tabla elaborada por la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal [196] donde se señaló el valor promedio de tales elementos, a partir de modelos baremo o diferenciados, comunes a la mayoría, a fin de ajustar las declaraciones juradas, superiores a esos valores, con el único propósito de evitar abusos en la tasación de los perjuicios ocasionados y, especialmente, preservar el principio de igualdad.

Así las cosas, el valor reconocido por la Sala a título de daño emergente se ceñirá de acuerdo con los criterios del modelo baremo fijado en la precitada sentencia, que se ilustra a continuación, razón por la cual se le reconoce a las señoras **NANCY MARIA LENGUA NAVARRO y AIDA MARIA IGUARAN LENGUA, el** tiempo de seis (6) meses, debidamente indexado.

NANCY MARIA LENGUA NAVARRO

CLASE DE BIEN	CANTIDAD	VALOR PROMEDIO	VALOR IPC	VALOR ACTUALIZADO	VALOR RECONOCIDO
Arriendos (Mensual)	6	$ 60.000	3,125439868	$ 187.526	$ 1.125.158
		TOTAL, VALOR RECONOCIDO			**$ 1.125.158**

AIDA MARIA IGUARAN

CLASE DE BIEN	CANTIDAD	VALOR PROMEDIO	VALOR IPC	VALOR ACTUALIZADO	VALOR RECONOCIDO
Arriendos (Mensual)	6	$ 60.000	3,125439868	$ 187.526	$ 1.125.158
		TOTAL, VALOR RECONOCIDO			**$ 1.125.158**

[196] Fallo de segunda instancia dentro del expediente 34547 Justicia y Paz, contra los postulados Edwar Cobos Téllez y Uber Enrique Banquéz Martínez,

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Se le concede indemnización a título de lucro cesante a la víctima directa, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, de conformidad con el juramento estimatorio aportado por la reclamante, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 04 – 172/297 (DIFERIDO)							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES				
					LUCRO CESANTE		
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**DAÑO EMERGENTE POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO**	**LUCRO CESANTE POR EL DESPLAZAMIENTO**	**FUTURO**	**TOTAL**
NANCY MARIA LENGUA NAVARRO	CC	40.918.205	71.175.000	1.125.158	17.082.000	-	89.382.158
AIDA MARIA IGUARAN LENGUA	CC	1.118.823.907	71.175.000	1.125.158	17.082.000	-	89.382.158
TOTAL							**178.764.317**

DOCTORA DORIS ENITH AVILA CANTILLO

APODERADA DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	05 - 172/297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL.				
VICTIMA DIRECTA	**ADAULFO GOMEZ SUAREZ**				
FECHA DE NACIMIENTO	NO ANEXARON CÉDULA DE CIUDADANÍA				
FECHA DE LOS HECHOS	1 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS		**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**			
HERMANOS	5	**PADRE**		**MADRE**	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	ADAULFO GÓMEZ SUAREZ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	NO APORTA CÉDULA		
SIJYP	324922				
PARENTESCO	Victima Directa				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder Conferido. Folios 8-9. **3.** Certificación del Registro de Hechos Atribuible SIJYP 324922. Folio 10. **4.** Constancia de Entrevista con la Víctima de la Defensoría del Pueblo. Folio 11. **5.** Juramento Estimatorio de la Defensoría del Pueblo. Folio 12-13.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Desplazamiento Forzado)	50 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**		**NO**	**X**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**		**NO**	**X**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Respecto al daño moral causado al señor **ADAULFO GÓMEZ SUAREZ,** por el delito de Desplazamiento Forzado, se observa en el expediente digital que el apoderado no adjunto el documento de identidad, que para el caso es la cédula de ciudadanía, razón por la cual no es posible proceder con el estudio de las pretensiones indemnizatorias, razón por la cual se deniega dicha pretensión.

DOCTORA DORIS ENITH AVILA CANTILLO

APODERADA DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	06-172/297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL.				
VICTIMA DIRECTA	**ANDRÉS JOSÉ CARDENAS HERRERA**				
FECHA DE NACIMIENTO	05 DE ENERO DE1996				
FECHA DE LOS HECHOS	01 DE ABRIL DE 2002				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	ANDRÉS JOSE CARDENAS HERRERA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**		1.118.858.698	
SIJYP	323112				
PARENTESCO	VICTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación integral a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder Conferido. Folio 8. **3.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 9. **4.** Certificación del Registro de Hechos Atribuible. Folio 10.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL	50 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X		**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X		**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado *"Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, con ocasión al delito de Desplazamiento Forzado a la Población Civil, se le concede la suma de 50 SMLMV, al señor ANDRÉS JOSÉ CÁRDENAS HERRERA.

Perjuicio material: teniendo en cuenta que la apoderada en su escrito manifestó que *"… remito a la Liquidación Daño Material y Perjuicios económicos en delitos de desplazamiento,* ***hurto y secuestro*** *suscrito por el perito financiero de la Defensoría del Pueblo, Dr. Álvaro Parra Hernández la cual se lee en su aparte pertinente a las víctimas de este hecho y se anexa a la carpeta."* (*lo subrayado es nuestro.* Es de señalar que, los delitos resaltados no fueron objetos de formulación de cargos, como se echa de menos los soportes probatorios, razón por la cual se deniega dicha pretensión.

Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 06 – 172/297 (DIFERIDO)							
ANDRES JOSE CARDENAS HERRERA							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES		**DAÑOS MATERIALES**		
					LUCRO CESANTE		
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**DAÑO EMERGENTE POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO**	**LUCRO CESANTE POR EL DESPLAZAMIENTO**	**FUTURO**	**TOTAL**
ANDRÉS JOSÉ CARDENAS HERRERA	CC	1.118.858.698	71.175.000		-	-	71.175.000
TOTAL							**71.175.000**

DOCTORA DORIS ENITH AVILA CANTILLO
APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO		07-172/297 (Diferido)			
DELITOS LEGALIZADOS		DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL.			
VICTIMA DIRECTA		**JOSÉ LUIS CÁRDENAS FRAGOZO**			
FECHA DE NACIMIENTO		10 DE OCTUBRE DE1966			
FECHA DE LOS HECHOS		01 DE ABRIL DE 2002			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS		JOSÉ LUIS CÁRDENAS FRAGOZO			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	85.452.834	
SIJYP		323112			
PARENTESCO		VICTIMA DIRECTA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS		**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación integral a víctimas. Folios 1-7. **2.** Poder Conferido. Folio 8. **3.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 9. **4.** Certificación del Registro de Hechos Atribuible. Folio 10. **5.** Denuncia de fecha 13 de abril de 2010. Folio 11-14. **6.** Declaración de convivencia. Folios 15.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL		50 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN		**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN		**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado *"Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, con ocasión al delito de Desplazamiento Forzado a la Población Civil, la suma de 50 SMLMV, al señor JOSÉ LUIS CÁRDENAS FRAGOZO.

Perjuicio material: No solicitaron pretensiones indemnizatorias.

Otras Medidas:

El apoderado de la víctima presentó pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de estas, ya que

fueron reseñadas en el hecho 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 07 – 172/297 (DIFERIDO)							
JOSÉ LUIS CÁRDENAS FRAGOZO							
RECLAMANTE	IDENTIFICACION		ITEMS RECONOCIDOS				
			DAÑOS INMATERIALES		DAÑOS MATERIALES		
					LUCRO CESANTE		
	TIPO	NUMERO	PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	DAÑO EMERGENTE POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO	LUCRO CESANTE POR EL DESPLAZAMIENTO	FUTURO	TOTAL
JOSÉ LUIS CARDENAS FRAGOZO	CC	85.452.334	71.175.000		-	-	71.175.000
TOTAL							**71.175.000**

Frente a las pretensiones indemnizatorias de los hechos diferidos de las victimas ADOLFO SEGUNDO ESCOBAR[197] y DEOMILDE FINCE TORO[198], sustentadas por su apoderada judicial dentro del trámite de la audiencia de incidente de reparación integral a víctimas, la Sala no reconocerá estas reclamaciones en razón a que, se verificó en la carpeta digital (one drive) que la apoderada judicial omitió aportar los elementos de prueba que conllevara a la Colegiatura al estudio de dichas reclamaciones, para lo cual no existe convicción que nos demuestre que la víctima directa del delito de desplazamiento forzado padeció algún daño moral.

Lo anterior no obsta para que, una vez subsanadas las falencias probatorias, las víctimas puedan comparecer a otro incidente de reparación integral que se tramite en contra de algún exmiembro del grupo armado ilegal del Frente Contrainsurgencia Wayúu del Bloque Norte de las extintas AUC y hacer valer su garantía de reparación integral.

[197] Sustentada en sesión vespertina del 8 de julio de 2025 en la ciudad de Riohacha – La Guajira.
[198] Sustentada en sesión vespertina del 10 de julio de 2025 en la ciudad de Riohacha – La Guajira.

DOCTOR JOSE ACENDRA PALACIO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO		**14**			
DELITOS LEGALIZADOS		HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA			
VICTIMA DIRECTA		**ROGELIO RAFAEL BELTRÁN YEPEZ**			
FECHA DE NACIMIENTO		4 DE AGOSTO DE 1964			
FECHA DE LOS HECHOS		4 DE ABRIL DE 2004			
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**			1
HERMANOS	1	**PADRE**	0	**MADRE**	0
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS		ADALIS JUDITH CASTRO ORDOÑEZ			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**		57.308.050
SIJYP		N/A			
PARENTESCO		COMPAÑERA PERMANENTE			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS		**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-2. **2.** Poder Conferido. Folios 3-5. **3.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 6. **4.** Certificación de la cedula de ciudadanía de la víctima directa de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Folio 7. **5.** Declaración extra proceso de convivencia. Folios 8-9. **6.** Registro civil de nacimiento de la víctima directa N° 5309835. Folio 11			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Homicidio)		100 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN		**SI**		**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN		**SI**		**NO**	
VÍCTIMA N° 2					
NOMBRES COMPLETOS		FANNY JUDITH BELTRAN YEPES			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**		32.816.329
SIJYP		N/A			
PARENTESCO		HERMANA			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS		**1.** Poder Conferido. Folios 12-14. **2.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima indirecta. Folio 15. **3.** Registro civil de Nacimiento de la víctima indirecta N° 39578022. Folio 16.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Homicidio)		100 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN		**SI**	x	**NO**	

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	x	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado "*Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce a favor de la señora **ADALIS JUDITH CASTRO ORDOÑEZ,** en calidad de compañera permanente, una suma equivalente a 100 **SMLMV** por concepto de daño moral derivado del delito **HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA**, acaecido a la víctima directa.

Con relación a la hermana de la víctima directa, señora **FANNY JUDITH BELTRAN YEPES,** quien se encuentra en el segundo grado de consanguinidad, no solo debe probar el parentesco sino también el daño real causado o el perjuicio indemnizable; situación que fue omitida dentro de las pruebas aportadas al expediente digital, por su representante legal; en ese orden, se deniega la pretensión solicitada por la peticionaria.

Otras medidas

El apoderado de las víctimas, doctor REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho N° 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 14						
ROGELIO RAFAEL BELTRÁN YEPEZ						
RECLAMANTE	**IDENTIFICACIÓN**			**DAÑOS MATERIALES**		
	TIPO	**NÚMERO**	**PERJUCIO MORAL HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE**		
				CAUSADO	**FUTURO**	**TOTAL**
ADALIS JUDITH CASTRO ORDOÑEZ	CC	57.308.050	71.175.000	-	-	71.175.000
TOTAL						71.175.000

DOCTOR JOSE ASCENDRA PALACIO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO		**8**		
DELITOS LEGALIZADOS		ACCESO CARNAL VIOLENTO EN PERSONA PROTEGIDA CONCURSO CON TORTUTA EN PERSONA PROTEGIDA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO		
VICTIMA DIRECTA		**K.J.P.M**		
FECHA DE NACIMIENTO		**24 DE OCTUBRE DE 1981**		
FECHA DE LOS HECHOS		N/A		
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR				
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0
VÍCTIMAS RECLAMANTES				
VÍCTIMA N° 1				
NOMBRES COMPLETOS		**K.J.P.M**		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**		40.940.629
SIJYP		N/A		
PARENTESCO		Victima Directa		
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS		**1.** Escrito Incidente de Reparación integral a víctimas. Folios 1-6. **2.** Poder Conferido. Folios 7-8. **3.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 9.		
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (Acceso Carnal Violento)		100 SMLMV		
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)		100 SMLMV		
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado "*Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce a favor de la señora **K.J.P.M,** en calidad de víctima directa, una suma equivalente a 100 SMLMV por concepto de daño moral derivado del delito de ACCESO CARNAL VIOLENTO.

Como existe reclamación indemnizatoria por el delito DESPLAZAMIENTO FORZADO por parte de la señora **K.J.P.M**, en calidad de víctima directa, se reconoce por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, el monto de cincuenta (50) SMMLV.

Otras medidas

El apoderado de las víctimas, doctor REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho N° 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 8							
K.Y.P.M							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES		**DAÑOS MATERIALES**		
					LUCRO CESANTE		
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL ACCESO CARNAL VIOLENTO (EN SMLMV)**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
K.Y.P.M	CC	40.940.629	142.350.000	71.175.000	-	-	213.525.000
TOTAL							213.525.000

DOCTOR JOSE ASCENDRA PALACIO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	15				
DELITOS LEGALIZADOS	ACCESO CARNAL VIOLENTO EN PERSONA PROTEGIDA CONCURSO CON TORTUTA EN PERSONA PROTEGIDA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO				
VICTIMA DIRECTA	**L.R.H.A.**				
FECHA DE NACIMIENTO	**12 DE JUNIO DE 1969**				
FECHA DE LOS HECHOS	N/A				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS		**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**			
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	L.R.H. A				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	26.984.493		
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	Victima Directa				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente de Reparación integral a víctimas. Folios 1-5. **2.** Poder Conferido. Folios 6-8. **3.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 9.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Acceso Carnal Violento)	100 SMLMV				
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)	100 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado "*Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce a favor de la señora **L.R.H.A.,** en calidad de víctima directa, una suma equivalente a 100 SMLMV por concepto de daño moral derivado del delito de ACCESO CARNAL VIOLENTO.

Como existe reclamación indemnizatoria por el delito DESPLAZAMIENTO FORZADO por parte de la señora **L.R.H.A.**, en calidad de víctima directa, se reconoce por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, el monto de cincuenta (50) SMMLV.

Otras medidas

El apoderado de las víctimas, doctor REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho N° 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 15							
L.R.H.A.							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACIÓN**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES		**DAÑOS MATERIALES**		
					LUCRO CESANTE		
	TIPO	**NÚMERO**	**PERJUCIO MORAL ACCESO CARNAL VIOLENTO (EN SMLMV)**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**CAUSADO**	**FUTURO**	**TOTAL**
L.R.H.A.	CC	26.984.493	142.350.000	71.175.000	-	-	213.525.000
TOTAL							213.525.000

INCIDENTES DE REPARACIÓN INTEGRAL A VICTIMAS
DIFERIDOS

DOCTOR JOSÉ ACENDRA PALACIO
DEFENSOR DE VICTIMAS – DEFENSORIA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	172 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO				
VICTIMA DIRECTA	**CESAR BERTIS BRITO**				
FECHA DE NACIMIENTO	CEDULA DE CIUDADANIA ILEGIBLE				
FECHA DE LOS HECHOS	1 DE ABRIL DE 2004				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS	1	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**			0
HERMANOS	0	**PADRE**	0	**MADRE**	0
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	**CESAR EDUARDO BERTIS PINTO**				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	84.083.984		
SIJYP	671638				
PARENTESCO	HIJO				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-6. **2.** Poder Conferido. Folios 7-8. **3.** Asignación de Apoderado Judicial Defensoría del Pueblo. Folio 9. **4.** Certificación del Registro de Hechos Atribuible SIJYP 671638. Folio 10. **5.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 11. **6.** Fotocopia de la cedula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 12. (legible) **7.** Registro civil de nacimiento de la víctima indirecta N° 8742796. Folio 13. (ilegible) **8.** Registro civil de defunción de la víctima directa N° 2024241. Folio 14. (ilegible)				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Homicidio)	100 SMLMV				
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)	50 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado "*Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce a favor del señor **CESAR EDUARDO BERTIS PINTO**, en calidad de hijo de **CESAR BERTIS BRITO,** la suma equivalente a 100 SMLMV por concepto de daño moral derivado del delito HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, quien probó el parentesco con la víctima directa.

Respecto al daño moral causado al señor **CESAR EDUARDO BERTIS PINTO,** por el delito de DESPLAZAMIENTO FORZADO, la Sala teniendo en cuenta en referido acápite, le reconoce la suma de 50 SMLMV.

Otras medidas:

El apoderado de las víctimas, doctor REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No.172 (Diferido)							
CESAR BERTIS BRITO							
RECLAMANTE	IDENTIFICACION		ITEMS RECONOCIDOS				
			DAÑOS INMATERIALES		DAÑOS MATERIALES		
					LUCRO CESANTE		
	TIPO	NUMERO	PERJUCIO MORAL HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA (EN SMLMV)	PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	CAUSADO	FUTURO	TOTAL
CESAR BERTIS PINTO	CC	84.083.984	142.350.000	71.175.000	-	-	213.525.000
TOTAL							213.525.000

DOCTOR JOSE ASCENDRA PALACIO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	297 (Diferido)				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, EN CONCURSO CON EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA[199]				
VICTIMA DIRECTA	**ELIMELET DE LA HOZ OJEDA**				
FECHA DE NACIMIENTO	**16 DE JUNIO DE 1968**				
FECHA DE LOS HECHOS	**4 DE ABRIL DE 2004**				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS		**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**			
HERMANOS		**PADRE**		**MADRE**	
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	ELIMELET DE LA HOZ OJEDA				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.924.885		
SIJYP					
PARENTESCO	VÍCTIMA DIRECTA				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-8. **2.** Poder Conferido. Folios 9-10. **3.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 11. **4.** Juramento Estimatorio de la Defensoría del Pueblo. Folio 12-13. **5.** Liquidación Daño Material y Perjuicios económicos en delitos de desplazamiento forzado. Folio 14.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)	50 SMLMV				
LUCRO CESANTE PRESENTE	Un (1) SMLMV por un periodo de 12 meses y que este valor sea indexado.				
DAÑO EMERGENTE ACTUALIZADO	$ 17.550.000				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**	X	**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**	X	**NO**		

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

[199] Sentencia proferida por la Magistrada Ponente, doctora LESTER MARIA GONZALEZ R.-11 001 22 52 000 201400027-Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado "*Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se le reconoce a favor del señor **ELIMELET DE LA HOZ OJEDA** la suma equivalente a 50 SMLMV por concepto de daño moral derivado del delito DESPLAZAMIENTO FORZADO.

Perjuicio material:

Daño emergente:

La peticionaria a través de su apoderado reclama el daño emergente soportado en el material probatorio que adjuntó al plenario, conformado por juramento estimatorio, a favor del señor ELIMELET DE LA HOZ OJEDA, visible a folios 12 y 13, quien se desplazó y perdió semovientes, aves de corral, y cultivos que se encontraban en el patrimonio de la víctima directa.

Es del caso señalar que, se entiende que el daño emergente lo constituyen las pérdidas efectivamente sufridas, la lesión que realmente se produce al patrimonio del perjudicado, es la pérdida efectiva de bienes que ya estaban en el patrimonio de la víctima, en otras palabras, se trata de un empobrecimiento patrimonial, algo que sale del patrimonio (sea por pérdida o detrimento)[200].

No obstante para el caso que nos ocupa, se debe tener en cuenta lo que viene expuesto en precedencia por la Sala, frente a la pérdida de semovientes (terneros, toros, vacas, etc.), por cuanto se tendrá como elementos de prueba los certificados expedidos por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el registro de hierro (marca), así como las declaraciones de renta, impuestos de Industria y Comercio, juramentos estimatorios, en virtud de la flexibilidad probatoria, y para el caso que nos ocupa **no** fue aportado el registro del hierro quemador, ni otro elemento de convicción que nos conlleve a la certeza de lo pedido, razón por la cual considera esta Colegiatura que la víctima debió brindar elementos probatorios, en los que pudiera soportar la pérdida de los semovientes, que indicó haber sufrido, porque la flexibilidad probatoria en esta clase de procesos de Justicia Transicional, no significa la ausencia de los requisitos sine qua non, para obtener indemnización por la cantidad de semovientes relacionados. Por lo anterior, se deniega la pretensión.

En cuanto a la pérdida de las 20 gallinas, se accede a dicha pretensión y, lo pertinente al pago del arriendo, no se adjuntó ningún elemento de convicción para acceder al monto solicitado; no obstante, en consideración a lo establecido en la Tabla de Baremo, se accede al reconocimiento del arriendo en un monto de $60.000, durante 6 meses, en ocasión al desplazamiento forzado, y los gastos de transportes que les ocasionó el desplazamiento, en la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150. 000.oo). Se deniegan las demás pretensiones indemnizatorias

[200] Pantoja, ob. Cit.

por no aportar elementos probatorios que soporten las mencionadas reclamaciones.

Tabla Baremo

CLASE DE BIEN	CANTIDAD	VALOR PROMEDIO	VALOR IPC	VALOR ACTUALIZADO	VALOR RECONOCIDO
Gallinas (c/u)	20	$ 5.000	3,125439868	$ 15.627	$ 312.544
		TOTAL VALOR RECONOCIDO			**$ 312.544**

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Teniendo en cuenta la manifestación de la víctima, visible a folios 12 y 13, se le concede indemnización a título de lucro cesante, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 12 meses, lo que se traduce a doce (12) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

Otras medidas

El apoderado de las víctimas, doctor REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho N° 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No.172 (Diferido)								
ELIMELET DE LA HOZ OJEDA								
RECLAMANTE	IDENTIFICACION		ITEMS RECONOCIDOS					
			DAÑOS INMATERIALES			DAÑOS MATERIALES		
						LUCRO CESANTE		
	TIPO	NUMERO	PERJUICIO MORAL HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA (EN SMLMV)	PERJUICIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)	DAÑO EMERGENTE DESPLAZAMIENTO	LUCRO CESANTE CAUSADO POR EL DESPLAZAMIENTO	FUTURO	TOTAL
ELIMELET DE LA HOZ OJEDA	CC	40.924.885		71.175.000	312.544	17.082.000	-	88.569.544
TOTAL								88.569.544

DOCTOR JOSE ASCENDRA PALACIO

APODERADO DE VÍCTIMAS – DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NUMERO DE HECHO	297 (Diferido) Masacre de Matitas				
DELITOS LEGALIZADOS	DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL[201]				
VICTIMA DIRECTA	**ALBIS GUERRA MARQUEZ**				
FECHA DE NACIMIENTO	5 DE ABRIL DE 1974				
FECHA DE LOS HECHOS	4 DE ABRIL DE 2004				
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR					
N° HIJOS		**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**			
HERMANOS	0	**PADRE**		**MADRE**	0
VÍCTIMAS RECLAMANTES					
VÍCTIMA N° 1					
NOMBRES COMPLETOS	ALBIS GUERRA MARQUEZ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	40.930.967		
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	víctima Directa				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-2. **2.** Poder Conferido. Folios 3-5. **3.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 6.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)	100 SMLMV				
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**		**NO**		
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**		**NO**		
VÍCTIMA N° 2					
NOMBRES COMPLETOS	IDAYLIS LUZ GUERRA MÁRQUEZ				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	1.006.572.885		
SIJYP	N/A				
PARENTESCO	víctima Directa				
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	**1.** Escrito Incidente de reparación integral a víctimas d carácter excepcional 1-6 **2.** Poder Conferido. Folios 7-9. **3.** Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 10.				
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS					
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)	100 SMLMV				

[201] Sentencia proferida por la Magistrada Ponente, doctora LESTER MARIA GONZALEZ R.-11 001 22 52 000 201400027-Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.

MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**		**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**		**NO**	
VÍCTIMA N° 3				
NOMBRES COMPLETOS	LEONALBIS OCHOA GUERRA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	ilegible	
SIJYP	N/A			
PARENTESCO	víctima Directa			
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS	1. Poder Conferido. Folios 11-13. 2. Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 14.			
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL (Desplazamiento forzado)	100 SMLMV			
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN	**SI**		**NO**	
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN	**SI**		**NO**	

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Como existe reclamación indemnizatoria del grupo familiar conformado por las señoras **ALBIS GUERRA MARQUEZ**, **IDAYLIS LUZ GUERRA MÁRQUEZ y LEONALBIS OCHOA GUERRA,** en calidad de víctimas directas, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado "*Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, se les concede a las reclamantes, la suma de 50 SMLMV a cada una, para un total de 150 SMLMV.

Otras medidas

El apoderado de las víctimas, doctor REGINALDO RAFAEL LORA LENTINO, presentó idénticas pretensiones respecto de las medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en todos los hechos por él representados, razón por la cual la Sala omitirá la transcripción de las mismas, ya que fueron reseñadas en el hecho N° 4 (Homicidio en Persona Protegida) y se pronunciará al finalizar las decisiones de las pretensiones por prejuicios materiales e inmateriales de todos los patrones de macro criminalidad.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 297 (Diferido)						
ALBIS GUERRA MARQUEZ						
RECLAMANTE	**IDENTIFICACIÓN**			**DAÑOS MATERIALES**		
	TIPO	**NÚMERO**	**PERJUICIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**LUCRO CESANTE**		
				CAUSADO	**FUTURO**	**TOTAL**
ALBIS GUERRA MARQUEZ	CC	40.930.967	71.175.000	-	-	71.175.000
IDAYLIS LUZ GUERRA MÁRQUEZ	CC	1.006.572.885	71.175.000			71.175.000
LEONALBIS OCHOA GUERRA	CC	ilegible	71.175.000			71.175.000
TOTAL						213.525.000

DOCTORA LESBIA DEL SOCORRO MELO ZUÑIGA

APODERADA CONTRACTUAL DE VÍCTIMAS

NÚMERO DE HECHO		73		
DELITOS LEGALIZADOS		DESPLAZAMIENTO FORZADO		
VICTIMA REPORTANTE		**MARTHA CECILIA MEZA BARRIOS**		
FECHA DE NACIMIENTO		23 DE OCTUBRE DE 1982		
FECHA DE LOS HECHOS		08 DE MARZO DE 2003		
N° INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR				
N° HIJOS	0	**CÓNYUGE O COMPAÑERA PERMANENTE**		0
VÍCTIMAS RECLAMANTES				
VÍCTIMA N° 1				
NOMBRES COMPLETOS		MARTHA CECILIA MEZA BARRIOS		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA	**NÚMERO**	26.970.255
SIJYP		557345		
PARENTESCO		VICTIMA DIRECTA		
ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS		**1.** Escrito Incidente Excepcional de reparación a víctimas. Folios 1-3. **2.** Registro civil de defunción de la víctima directa N° 32692941. Folio 4-5. **3.** Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa. Folio 6. **4.** Oficio de la defensoría del pueblo – asignación de un abogado defensor. Folio 7. **5.** Ficha socioeconómica de la víctima directa. Folios 8-9. **6.** Certificado de víctima y Registro de hechos. Folio 10-13. **7.** Constancia de Residencia. Folios 14-15. **8.** Poder Conferido a la Dra. LESBIA MELO ZUÑIGA. Folio 16.		
PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS				
DAÑO MORAL		50 SMLMV		
LUCRO CESANTE PRESENTE		1 SMLMV INDEXADO POR UN PERIODO DE 6 MESES		
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN		**SI**		**NO** X
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN		**SI**		**NO** X

De lo resuelto por la Sala:

Perjuicios inmateriales:

Teniendo en cuenta lo descrito en el acápite denominado" *Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, con ocasión al delito de Desplazamiento Forzado a la Población Civil, se le concede la suma de 50 SMLMV, a la señora MARTHA CECILIA MEZA BARRIOS.

Perjuicios materiales:

Lucro cesante por causa del desplazamiento forzado:

Teniendo en cuenta la manifestación de la víctima, se le concede indemnización a título de lucro cesante, en lo concerniente a los salarios dejados de percibir a causa del desplazamiento forzado sufrido, lo equivalente a un (1) S.M.L.M.V. por 6 meses, lo que se traduce a seis (06) S.M.L.M.V., dado que de conformidad a los planteamientos esbozados por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se presume con base en las reglas de la experiencia, que las personas afectadas por dicho punible que aducen haber desempeñado labor en aquel lugar del cual fueron deportados, pero no demuestran con elementos suficientes una relación laboral o contractual preexistente, devengaron por lo menos un (1) S.M.L.M.V. durante el transcurso de un (1) año, que pudo haber durado el asentamiento en territorio distinto al inicial.

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS DEL HECHO No. 73							
MARTHA CECILIA MEZA BARRIOS							
RECLAMANTE	**IDENTIFICACION**		**ITEMS RECONOCIDOS**				
			DAÑOS INMATERIALES		**DAÑOS MATERIALES**		
					LUCRO CESANTE		
	TIPO	**NUMERO**	**PERJUCIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO (EN SMLMV)**	**DAÑO EMERGENTE POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO**	**LUCRO CESANTE POR EL DESPLAZAMIENTO**	**FUTURO**	**TOTAL**
MARTHA CECILIA MEZA BARRIOS	CC	26.970.255	71.175.000	-	8.541.000	-	79.716.000
TOTAL							**79.716.000**

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS																				
	VICTIMA DIRECTA E INDIRECTA	PARENTESCO	IDENTIFICACIÓN		ÍTEMS RECONOCIDOS															
					DAÑOS INMATERIALES												DAÑOS MATERIALES				
			TIPO	NUMERO	DAÑO MORAL POR HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA	VALOR EN PESOS	DAÑO MORAL POR TENTATIVA DE HOMICIDIO	VALOR EN PESOS	PERJUICIO MORAL DESPLAZAMIENTO FORZADO	VALOR EN PESOS	DAÑO MORAL DESAPARICION FORZADA	VALOR EN PESOS	PERJUICIO MORAL ACCESO CARNAL VIOLENTO	VALOR EN PESOS	PERJUICIO MORAL DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN	VALOR EN PESOS	DAÑO EMERGENTE	LUCRO CESANTE CAUSADO POR EL DESPLAZAMIENTO	LUCRO CESANTE CAUSADO	LUCRO CESANTE FUTURO	TOTAL, DAÑOS MORALES Y PERJUICIOS MATERIALES
	JOSÉ DEL CARMEN JAIMES MADERO	**HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA**																			
1	ROSA EMILIA SIERRA ACUÑA	COMPAÑERA PERMANENTE	cc	39.062.661	100	142.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	314.390.809	166.078.604	622.819.414
2	BRAILYS JAIMES SIERRA	HIJA	cc	1.124.076.895	100	142.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	142.350.000
3	BREINER JOSÉ JAIMES SIERRA	HIJO	cc	1.124.044.496	100	142.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	142.350.000
	MANUEL DE JESÚS CALVO MUÑOZ	**HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA**																			
4	ALBIDA ESTHER CALVO MUÑOZ	HERMANA	cc	22.580.661	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	71.175.000
5	ZUNILDA RAQUEL CALVO MUÑOZ	HERMANA	cc	57.271.029	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					71.175.000
	ROGELIO RAFAEL BELTRÁN YEPES	**HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA**																			
6	MARIA SILVANA BELTRÁN CASTRO	HIJA	cc	1.001.799.935	0	0	15	21.352.500	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	92.527.500
	HENRY DE JESÚS SALAS DÍAZ	**VICTIMA DIRECTA TENTATIVA DE HOMICIDIO**																			
7	HENRY DE JESÚS SALAS DÍAZ	VICTIMA DIRECTA	cc	84.042.979	0	0	30	42.705.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	42.705.000
8	ADELAIDA ANTONIA MARULADA LÓPEZ	COMPAÑERA PERMANENTE	cc	56.085.760	0	0	30	42.705.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	42.705.000
9	YENRY JOSÉ SALAS MARULANDA	HIJO	cc	1.124.067.578	0	0	15	21.352.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	21.352.500
10	YAIRLETH KARELI SALAS RODRIGUEZ	HIJA	cc	1.124.007.364	0	0	15	21.352.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	21.352.500
11	CRISTIAN RAFAEL SALAS CAMARGO	HIJO	cc	1.118.849.178 (Ilegible)	0	0	15	21.352.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	21.352.500
12	ELIO RAFAEL SALAS PERALTA	PADRE	cc	15.235.332	0	0	15	21.352.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	21.352.500
13	LENIN JESÚS SALAS MEDINA	HERMANO	cc	17.902.801	0	0	15	21.352.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	21.352.500
14	ANGELO SALAS TEJEDA	HERMANO	cc	Ilegible	0	0	15	21.352.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	21.352.500
15	RUBIS MERCEDES BLANCO DIAZ	HERMANA	cc	56.083.484	0	0	5	7.117.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	7.117.500

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS																					
16	ELIANA JUDITH SALAS MEDINA	HERMANA	cc	40.881.084	0	0	5	7.117.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	7.117.500
17	OSMAN JOSÉ ARREGOCÉS DIAZ	HERMANO	cc	77.015.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	JOSÉ VICENTE PALACIO PALENCIA	**VICTIMA DIRECTA TENTATIVA DE HOMICIDIO**						0													
18	JOSÉ VICENTE PALACIO PALENCIA	VICTIMA DIRECTA	cc	NO ANEXARON DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	GREGORIA MIELES	**HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA**						0													
19	YEILIN CABRALES MIELES	HIJA	cc	84.093.189	100	142.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	142.350.000
	JORGE SOLANO ZARATE	**HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA**						0													
20	ARINDA MARÍA ZÁRATE PINTO	MADRE	cc	26.982.611	100	142.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	142.350.000
21	ANGEL PAUL SOLANO	PADRE	cc	5.152.523	100	142.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	142.350.000
22	PAUL RAFAEL SOLANO ZÁRATE	HERMANO	cc	84.005.569	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	71.175.000
23	YALIS JUDITH SOLANO ZÁRATE	HERMANA	cc	26.984.629	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					71.175.000
24	YUCELIS FRANCISCA SOLANO ZÁRATE	HERMANA	cc	26.988.725	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	71.175.000
25	ILSA YADIRA CONTRERAS ASÍS	COMAPAÑERA PERMENENTE	cc	26.985.373	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					71.175.000
26	HALDRENIS YULIETH SOLANO CONTRERAS	HIJA	cc	1.122.819.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
27	YAMELIS FIDELIA RODRIGUEZ DAZA	COMPAÑERA PERMANENTE	cc	40.927.814	100	142.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			88.578.707	28.698.618	259.627.325
28	YERLIS ANDREA SOLANO RODRIGUEZ	HIJA	cc	1.120.658.100	100	142.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	142.350.000
29	ANA YASIRA OSPINO TORRES	COMPAÑERA PERMANENTE	cc	26.988.445	100	142.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	88.578.707	29.522.422	142.350.000
30	YULIANA SOLANO OSPINO	HIJA	cc	1.192.761.715	100	142.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	142.350.000
31	JEISER JOSE SOLANO SALINA	HIJO	cc	NO ANEXARON DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	WILFRIDO GUERRA ZAMBRANO	**HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA**						0													

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS																					
32	WILFRIDO RAFAEL GUERRA MENDOZA	HIJO	cc	1.010.065.690	100	142.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	142.350.000
	ELVIS DARIO BARROS MEJÍA	**HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA**						0													
33	BLANCA INÉS FRAGOZO BORNACELLY	COMPAÑERA PERMANENTE	cc	57.447.569	100	142.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	303.650.135	-	446.000.135
	KEVIN OSWALDO PAREDES SANTO	**HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA**						0													
34	DIANA SANTO CARMONA	MADRE	cc	40.878.415	100	142.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	142.350.000
35	DILIBETH RODRIGUEZ MEJÍA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	40.927.929	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
36	ARNOLVI DARIO ROMERO ARREGOCÉS	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	84.043.631	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
37	JUAN MANUEL CATAÑO GUERRA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	84.085.515	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
38	DELLIS SOFIA JARABA RODRIGUEZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	23.066.613	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
39	IBERICA GÓMEZ AMAYA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	26.994.748	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
40	JOSE DOMINGO PERALTA MENDOZA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	NO ANEXARON CÉDULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	SEGISMUNDO FUENMAYOR MONTERO	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS																					
41	SEGISMUNDO FUENMAYOR MONTERO	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	NO ANEXARON CÉDULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
42	ENRIQUE FUENMAYOR MONTERO	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	NO ANEXARON CÉDULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
43	ROSIEL LAUDITH FUENMAYOR MONTERO	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	NO ANEXARON CÉDULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
44	WILVIS FUENMAYOR	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	NO ANEXARON CÉDULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
45	BASILIA PEREZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	40.912.885	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
46	SOR MARIA MANJARREZ MANJARREZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	49.782.741	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
47	SONIA PATRICIA JUSAYÚ JAYARIYU	**ACTOS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL EN CONTRA DE PUEBLO VIOLENCIA PUEBLO INDIGENAS EN CONCURSO**	cc	40.880.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	17.082.000
48	MARCIAL ANTONIO GARCÍA JUSAYÚ	**ACTOS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL EN CONTRA DE PUEBLO VIOLENCIA PUEBLO INDIGENAS EN CONCURSO**	cc	84.062.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	17.082.000
49	RAFAEL JUSAYÚ	**ACTOS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL EN CONTRA DE PUEBLO VIOLENCIA PUEBLO INDIGENAS EN CONCURSO**	cc	2.739.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	17.082.000
50	JOHN JAIRO GUTIERREZ PEDROZA	**ACTOS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL EN CONTRA DE PUEBLO VIOLENCIA PUEBLO INDIGENAS EN CONCURSO**	cc	84.068.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	17.082.000

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS																					
	LUIS MIGUEL BERRIO TORO	**DESAPARICION FORZADA**																			
51	LUIS MIGUEL BERRIO DELUQUE	PADRE	cc	17.089.891	0	0	0	0	0	0	100	142.350.000	0	0	0	0	-	-	-	-	142.350.000
52	CARLOS ALBERTO FUENMAYOR TORO	HERMANO	cc	1.118.852.368	0	0	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	-	-	-	-	71.175.000
53	ELEIDIS MARIA GÓMEZ TORO	HERMANA	cc	40.933.506	0	0	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	-	-	-	-	71.175.000
54	NORALIS TORO MOLINA	HERMANA	cc	40.939.273	0	0	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	-	-	-	-	71.175.000
55	KARLA CARINA FUENMAYOR TORO	HERMANA	cc	1.118.835.667	0	0	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	-	-	-	-	71.175.000
56	D.L.R.P.	**ACCESO CARNAL VIOLENTO**	cc	40.930.493	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	100	142.350.000	50	71.175.000	-	-	-	-	284.700.000
57	C.J.P.A.	**ACCESO CARNAL VIOLENTO**	cc	40.924.810	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	100	142.350.000	0	0	-	-	-	-	213.525.000
58	J.E.D.M.	**ACCESO CARNAL VIOLENTO**	cc	56.084.262	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	100	142.350.000	50	71.175.000					284.700.000
59	Y.R.A.	**ACCESO CARNAL VIOLENTO**	cc	1.118.820.827	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	100	142.350.000	0	0	-	-	-	-	213.525.000
60	Y.P.P.B.	**ACCESO CARNAL VIOLENTO**	cc	40.931.621	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	100	142.350.000	0	0					213.525.000
61	L.M.L.N.	**ACCESO CARNAL VIOLENTO**	cc	40.943.381	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	100	142.350.000	0	0	-	-	-	-	213.525.000
62	M.P.P.V.	**ACCESO CARNAL VIOLENTO**	cc	40.941.542	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	100	142.350.000	0	0	-	-	-	-	213.525.000
63	A.E.C.C.	**ACCESO CARNAL VIOLENTO**	cc	84.035.544	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	100	142.350.000	0	0	-	-	-	-	213.525.000
64	Z.B.C.C.	**ACCESO CARNAL VIOLENTO**	cc	40.926.758	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	100	142.350.000	0	0	-	-	-	-	213.525.000
65	L.V.Q.G.	**ACCESO CARNAL VIOLENTO**	cc	1.118.834.775	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	100	142.350.000	0	0	-	-	-	-	213.525.000
66	S.S.O.O.	**ACCESO CARNAL VIOLENTO**	cc	40.944.732	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	100	142.350.000	0	0	-	-	-	-	213.525.000
67	E.T.G.B.	**ACCESO CARNAL VIOLENTO**	cc	40.935.237	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	100	142.350.000	0	0	-	-	-	-	213.525.000
68	M.Y.M.R.	**ACCESO CARNAL VIOLENTO**	cc	40.925.389	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	100	142.350.000	50	71.175.000	-	-	-	-	284.700.000
	DIFERIDOS																				
	ROGER DE JESÚS BRAVO ALVAREZ	**DESAPARICION FORZADA**																			
69	IVIS DEL SOCORRO PERALTA IBARRA	COMPAÑERA PERMANENTE	cc	40.919.308	0	0	0	0	0	0	100	142.350.000	0	0	0	0	-	-	-	-	142.350.000

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS																					
70	CLARINA LAUDITH BRAVO ALVAREZ	HERMANA	cc	40.916.824	0	0	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	-	-	-	-	71.175.000
71	MAROLIS MERCEDES BRAVO ALVAREZ	HERMANA	cc	40.924.178	0	0	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	-	-	-	-	71.175.000
72	ADID MABEL BRAVO ÁLVAREZ	HERMANA	cc	40.924.469	0	0	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	-	-	-	-	71.175.000
	DEOMILDE RAFAEL FINCE TORO	**HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA**																			
73	LAINIS JOSEFINA BRAVO ALVAREZ	COMPAÑERA PERMANENTE	cc	40.922.017	100	142.350.000	0	0	32	45.552.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	187.902.000
74	YISETH DAYA FINCE BRAVO	HIJA	cc	1.118.827.258	100	142.350.000	0	0	32	45.552.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	187.902.000
75	YAIRETH DAIRETH FINCE BRAVO	HIJA	cc	1.118.849.518	100	142.350.000	0	0	32	45.552.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	187.902.000
76	YOSAIRIS DENICE FINCE BRAVO	HIJA	cc	1.118.835.464 (Ilegible)	100	142.350.000	0	0	32	45.552.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	187.902.000
77	YURANIS YULIVETH FINCE BRAVO	HIJA	cc	1.118.854.686	100	142.350.000	0	0	32	45.552.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	187.902.000
78	RAYNER DAVID FINCE BERTI	HIJO	cc	1.129.525.010	100	142.350.000	0	0	32	45.552.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	187.902.000
79	YOSKARIS MANTILLA OJEDA	SOBRINA	cc	1.006.569.870	15	21.352.500	0	0	32	45.552.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	66.904.500
	ALVARO ENRIQUE JIMENEZ RAMOS	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
80	ÁLVARO ENRIQUE JIMENEZ RAMOS	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	19.705.143	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
81	NENIS JOHANA JIMENEZ RAMOS	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	40.938.593	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
82	ANA VICTORIA RAMOS SILVIA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	36.620.875	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	HECTOR RAFAEL BRAVO ALVAREZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS																				
83	HECTOR RAFAEL BRAVO ALVAREZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	17.805.680	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	COMNIE AURORA BERTI RADILLO	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
84	COMNIE AURORA BERTI RADILLO	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	40.924.142	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	MAYERLIN DAYANA PINTO BRAVO	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
85	MAYERLIN DAYANA PINTO BRAVO	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	1.033.738.093	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	JOSÉ RAMON GAMEZ SUÁREZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
86	JOSÉ RAMON GAMEZ SUÁREZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	84.080.170	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	IVETH PATRICIA MARTINEZ PELAEZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
87	IVETH PATRICIA MARTINEZ PELAEZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	40.934.269	0	0	0	0	50	71.175.000		0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
88	YUSDANY YISETH DELGADO MARTINEZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	1.006.577.017	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	SIXTO FIDEL BRAVO ALVAREZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
89	SIXTO FIDEL BRAVO ALVAREZ	**VICTIMA DIRECTA DE**	cc	84.079.375	0	0	0	0	50	71.175.000		0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS																					
		DESPLAZAMIENTO																			
	YASMIN BOLAÑO AGUILAR	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
90	YASMIN BOLAÑO AGUILAR	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	40.943.920	0	0	0	0	50	71.175.000		0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
91	YON JANER BOLAÑO AGUILAR	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	84.093.060	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	SORAIDA FINCE AGUILAR	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
92	SORAIDA FINCE AGUILAR	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	40.927.662	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	JUDITH EDIT BRAVO ALVAREZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
93	JUDITH EDIT BRAVO ALVAREZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	22.444.148	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
94	SAÍN DODINO BRAVO	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**		1.124.026.306	0	0	0	0	50	71.175.000		0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	MAROLIS MERCEDES BRAVO ALVAREZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
95	MAROLIS MERCEDES BRAVO ALVAREZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	40.924.178	0	0	0	0	50	71.175.000		0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	MAIREN DALENE IGUARÁN LENGUA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
96	MAIREN DALENE IGUARÁN LENGUA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	1.118.823.917	0	0	0	0	50	71.175.000		0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	LUIS ALFONSO GARCÍA BRAVO	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
97	LUIS GABRIEL MARTINEZ BRAVO	**VICTIMA DIRECTA DE**	cc	84.088.850	0	0	0	0	50	71.175.000		0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS																					
		DESPLAZAMIENTO																			
98	DELKIS CAROLINA MARTINEZ BRAVO	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	52.895.297	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
99	LUIS ALFONSO GARCÍA BRAVO	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	84.078.932	0	0	0	0	50	71.175.000		0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	MAGALY LAUDITH MOVIL MEJÍA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
100	MAGALY LAUDITH MOVIL MEJÍA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	40.922.089	0	0	0	0	50	71.175.000		0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	ALFONSO RAFAEL LÓPEZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
101	ALFONSO RAFAEL LÓPEZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	40.922.089	0	0	0	0	50	71.175.000		0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	ALICIA LEONOR PINTO QUINTERO	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
102	ALICIA LEONOR PINTO QUINTERO	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	26.963.107	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	YANDRIS YANIOTH CARDENAS HERRERA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
103	YANDRIS YANIOTH CARDENAS HERRERA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	1.118.837.556	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	GREGORIA TEHERÁN CARMONA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
104	GREGORIA TEHERÁN CARMONA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	45.366.046 (Ilegible)	0		0	0	50	71.175.000		0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	RITA ACASIA AGUILAR CASTRO	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
105	RITA ACASIA AGUILAR CASTRO	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	40.916.715	0		0	0	50	71.175.000		0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS																				
	RAMIRO RAFAEL DELUQUE BRITO	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																		
106	RAMIRO RAFAEL DELUQUE BRITO	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	NO ANEXARON CÉDULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	ROGER ELIAS BRAVO PERALTA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																		
107	ROGER ELIAS BRAVO PERALTA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	1.123.408.477	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
108	**TOMÁS RAFAEL DÍAZ RODRIGUEZ**	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	NO ANEXARON DOCUMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	ROSA ANGELICA ALVAREZ MAYA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																		
109	ROSA ANGELICA ALVAREZ MAYA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	40.929.347	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	TERESA LEONOR BRAVO ALVAREZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																		
110	TERESA LEONOR BRAVO ALVAREZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	40.914.719	0		0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
111	AUDREIS ANTONIO BRAVO PERALTA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	80.224.470	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
112	LAIDYS JOSEFINA PERALTA BRAVO	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	40.938.861	0		0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	YASMINA PAOLA CARPINTERO PERALTA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																		
113	YASMINA PAOLA CARPINTERO PERALTA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	1.118.832.592	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	LEVIS MARITZA BRAVO ALVAREZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																		
114	LEVIS MARITZA BRAVO ALVAREZ	**VICTIMA DIRECTA DE**	cc	40.919.356	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS																					
		DESPLAZAMIENTO																			
	ERIKA KARINA MEJIA MONRROY	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
115	ERIKA KARINA MEJIA MONRROY	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	40.943.673	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	HERNÁN DE JESÚS SUAZA PIMIENTA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
116	HERNÁN DE JESÚS SUAZA PIMIENTA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	84.034.034	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	KEILY KATERINE CAMPO MÓVIL	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
117	KEILY KATERINE CAMPO MÓVIL	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	32.570.757	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	KEINER ALBERTO RIVADENEIRA MARTÍNEZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
118	KEINER ALBERTO RIVADENEIRA MARTÍNEZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	1.118.862.623	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
119	OSCAR RIVADENEIRA MARTÍNEZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	NO ANEXARON CÉDULA																	
	LUIS MANUEL PIRELA PERALTA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
120	LUIS MANUEL PIRELA PERALTA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	NO ANEXARON CÉDULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	MAYKEL EDUARDO IGUARÁN LENGUA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
121	MAYKEL EDUARDO IGUARÁN LENGUA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	CC	84.092.536	0	0	0	0	50	71.175.000		0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	SANTA APSHANA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS																				
122	SANTA APSHANA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	CC	26.973.666	0	0	0	0	50	71.175.000		0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
123	**CARLOS AGUILAR CASTRO**	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	CC	NO ANEXARON CÉDULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	ELENA MARIA ATENCIO AARON	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
124	ELENA MARIA ATENCIO AARON	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	CC	40.914.357	0		0	0	50	71.175.000		0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	ELENIA YANET FINCE DE ARMA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
125	ELENIA YANET FINCE DE ARMA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	cc	32.867.364	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	CELINA BEATRIZ BRAVO ÁLVAREZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
126	CELINA BEATRIZ BRAVO ÁLVAREZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	CC	26.973.664	0		0	0	50	71.175.000		0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	ADID MABEL MENDEZ BRAVO	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
127	ADID MABEL MENDEZ BRAVO	VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO	CC	40.934.172	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	88.257.000
	TOMAS EDUARDO MORALES MEDINA																				
128	ALEXANDER ENRIQUE MORALES MEDINA	HERMANO	CC	84.083.611	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	71.175.000
129	ALIS JUDITH MORALES MEDINA	HERMANA	CC	40.927.369	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	71.175.000
130	PAULINA MORALES MEDINA	HERMANA	CC	40.918.769	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	71.175.000
131	UDOSIO ANTONIO MORALES MEDINA	HERMANO	CC	84.079.731	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	71.175.000
132	RAFAEL JUSTINIANO MORALES MEDINA	HERMANO	CC	84.032.175	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	71.175.000
	GUILLERMO ALFONSO JUSAYU EPIAYÚ Y EDINSON JUSAYU EPIAYÚ																				
133	EDINSON MANUEL JUSAYU EPIAYÚ	VICTIMA DIRECTA	CC	84.077.178	50	71.175.000	30	42.705.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	113.880.000

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS																					
		TENTATIVA DE HOMICIDIO																			
134	JOSÉ JUSAYU	PADRE	CC	15.236.245	100	142.350.000	15	21.352.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	163.702.500
135	JOSEFINA EPIAYÚ EPIAYÚ	MADRE	CC	40.981.970	100	142.350.000	15	21.352.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	163.702.500
136	GUILLERMO ALFONSO JUSAYU VANGRIEKEN	HIJO	CC	1.124.060.866	100	142.350.000	5	7.117.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	261.988.006	-	411.455.506
137	KATTY GRACIELA EPIAYÚ EPIAYÚ	HERMANA	CC	1.006.897.040	50	71.175.000	5	7.117.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	78.292.500
138	MARÍA LUISA JUSAYU EPIAYU	HERMANA	CC	40.877.731	50	71.175.000	5	7.117.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	78.292.500
139	LUZ MERY EPIAYÚ EPIAYÚ	HERMANA	CC	1.121.528.968	50	71.175.000	5	7.117.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	78.292.500
140	JOSÉ MARÍA JUSAYU EPIAYÚ	HERMANO	CC	15.207.662	50	71.175.000	5	7.117.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	78.292.500
	LUIS SERGIO JUSAYU																				
141	ISABEL JUSAYU URIANA	HIJA	CC	1.123.995.004	100	142.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	142.350.000
142	MARIANA JUSAYU URIANA	HIJA	CC	1.124.378.012 ILEGIBLE	100	142.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	142.350.000
143	JHOJANY JUSAYU URIANA	HIJA	CC	1.192.890.634	100	142.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	142.350.000
144	ANA VALERIA JUSAYU GÓMEZ	HIJA	CC	1.124.381.578	100	142.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	142.350.000
145	YESICA PAOLA JUSAYU GÓMEZ	HIJA	CC	1.124.051.025	100	142.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	142.350.000
	JAIME DARÍO ESPELETA HERRERA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
146	JAIME DARÍO ESPELETA HERRERA	VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO	CC	84.031.907	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	71.175.000
147	ESTENITH PUSHAINA	**ACTOS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL EN CONTRA DE PUEBLO VIOLENCIA PUEBLO INDIGENAS EN CONCURSO**	CC	27.039.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	17.082.000	-	-	17.082.000
	DIFERIDOS																				
	ALIDIS GILBERTO GOMEZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
148	ALIDIS GILBERTO GOMEZ	VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO	CC	84.028.404	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	71.175.000
	YARELSY BEATRIZ IGUARAN LENGUA	**VICTIMA DIRECTA DE**																			

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS																					
		DESPLAZAMIENTO																			
149	YARELSY BEATRIZ IGUARAN LENGUA	VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO	CC	40.936.923	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	6.719.696	17.082.000	-	-	94.976.696
	DENIRIS LEONOR BERMUDEZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
150	DENIRIS LEONOR BERMUDEZ	VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO	CC	40.912.460	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	44.488.209	17.082.000	-	-	132.745.209
	NANCY MARIA LENGUA NAVARRO	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
151	NANCY MARIA LENGUA NAVARRO	VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO	CC	40.918.205	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	1.125.158	17.082.000	-	-	89.382.158
152	AIDA MARIA IGUARAN LENGUA	VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO	CC	1.118.823.907	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	1.125.158	17.082.000	-	-	89.382.158
153	**ADAULFO GÓMEZ SUAREZ**	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	CC	NO ANEXARON CÉDULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	ABDRES JOSE CARDENAS HERRERA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	CC																		
154	ABDRES JOSE CARDENAS HERRERA	VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO	CC	1.118.858.698	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	71.175.000
	JOSE LUIS CARDENAS FRAGOZO	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																			
155	JOSE LUIS CARDENAS FRAGOZO	VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO	CC	85.452.334	0		0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	71.175.000
	ROGELIO RAFAEL BELTRAN CHEPEZ																				
156	ADALIS JUDITH CASTRO ORDOÑEZ	Compañera Permanente	CC	57.308.050	100	142.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	142.350.000
157	FANNY JUDITH BELTRAN YEPES	HERMANA	CC	32.816.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
158	K.Y.P.M	**ACCESO CARNAL VIOLENTO**	CC	40.940.629	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	100	142.350.000	0	0	-	-	-	-	213.525.000
159	L.R.H. A	**ACCESO CARNAL VIOLENTO**	CC	26.984.493	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	100	142.350.000	0	0	-	-	-	-	213.525.000

CUADRO RESUMEN DE LAS LIQUIDACIONES PECUNIARIAS																				
	DIFERIDOS																			
	CESAR BERTIS BRITO																			
160	CESAR BERTIS PINTO	HIJO	CC	84.083.984	100	142.350.000	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	213.525.000
	ELIMELET DE LA HOZ OJEDA	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**																		
161	ELIMELET DE LA HOZ OJEDA	VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO	CC	40.924.885	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	312.544	17.082.000	-	88.569.544
	ADALIS GUERRA MARQUEZ	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**						0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
162	ADALIS GUERRA MARQUEZ	VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO	CC	40.930.967	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	71.175.000
163	IDAYLIS LUZ GUERRA MÁRQUEZ	VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO	CC	1.006.572.885	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	71.175.000
164	LEONALBIS OCHOA GUERRA	VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO	CC	ilegible	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	71.175.000
165	MARTHA MEDA BARRIOS	**VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO**	CC	26.970.255	0	0	0	0	50	71.175.000	0	0	0	0	0	0	-	-	8.541.000	-	79.716.000
	TOTAL DE VÍCITMAS	**165**																		

RELACIÓN FINAL DE VICTIMAS	
Victimas indemnizadas	150
Víctimas no indemnizadas	15
Total Victimas	**165**

13.1. SOBRE LA DECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL.

Esta Sala en acatamiento de lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en las sentencias C-180 y C-286 de 2014, procedió al adelantamiento del trámite del Incidente de Reparación Integral de carácter excepcional de conformidad con lo establecido en la Ley 975 de 2005[202]; y, en razón a ello, procedió al análisis en particular de las peticiones de reparación y efectuó la cuantificación individual de las indemnizaciones solicitadas por los representantes de víctimas, tal y como se detalló precedentemente.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, la Sala dispondrá el envío a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la información personal de las víctimas, en anexo reservado[203], para que proceda a incluirlas en el Registro Único de Víctimas y permita su acceso preferente a las medidas de reparación integral conforme a la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800, así como lo dispuesto en los cánones 2.2.5.1.3.1, 2.2.5.1.3.2 y en el párrafo tercero del artículo 2.2.5.1.2.2.19 del Decreto 1069 de 2015, y demás normas concordantes.

- **Prohibición de la doble reparación.**

Con relación a las víctimas a quienes se les ha reconocido indemnizaciones por los perjuicios y daños causados y han resultado beneficiadas por pagos realizados por la Unidad Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en ningún caso podrán recibir doble reparación, ya sea por el pronunciamiento de este fallo, por decisión de la jurisdicción ordinaria, por vía administrativa, o por fallo internacional en donde se hubiese declarado la responsabilidad del Estado.

En consecuencia, dicha entidad, en los casos en que proceda, deberá descontar las cifras ya reconocidas en virtud de la prohibición de la doble reparación, una vez en firme la presente decisión, con fundamento en lo dispuesto en la ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 del mismo año.

RESPUESTA A LOS ALEGATOS DE LA DEFENSA Y DEL POSTULADO SALVATORE MANCUSO GÓMEZ

La Sala de Conocimiento debe precisar que su competencia, conforme a lo establecido en la **Ley 975 de 2005** y la jurisprudencia que la desarrolla, se circunscribe a adelantar el trámite de formulación y aceptación de cargos, verificar los requisitos de elegibilidad, establecer la verdad judicial en el marco de la versión libre y, en su momento, dictar la **sentencia condenatoria con la imposición de la pena alternativa**, entre otras decisiones.

---

[202] Porque, como se señaló líneas arriba, operó la "reviviscencia" y la reincorporación al ordenamiento jurídico de los artículos de la Ley 975 de 2005, que habían sido derogados por la Ley 1592 de 2012, y que regulan el incidente de reparación integral.

[203]

En ese sentido, los planteamientos expuestos por el postulado en relación con las condiciones de la **libertad a prueba** no son objeto de decisión por parte de esta Sala, en tanto dichos asuntos pertenecen a la **fase de ejecución de la sentencia**.

La propia Ley 975 DE 2005 remite de manera expresa la vigilancia y el control de la pena alternativa al **juez de ejecución de penas y medidas de seguridad**, autoridad judicial que ostenta la competencia para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el postulado y para decidir sobre eventuales solicitudes de modificación, levantamiento o sustitución de las medidas restrictivas impuestas.

En consecuencia, la Sala de Conocimiento no puede pronunciarse sobre la extensión de la libertad a prueba, pues hacerlo supondría desconocer el **principio de juez natural** (art. 29 de la Constitución), exceder los límites de su función jurisdiccional y generar una indebida invasión en la esfera de competencias del juez de ejecución de sentencias para justicia y paz; por lo tanto, corresponde al petente, acudir ante el **juez de ejecución de sentencias competente,** para que, en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, resuelva las inconformidades planteadas respecto a esta libertad a prueba.

No obstante, sin perjuicio de lo resuelto en cuanto a la falta de competencia de esta Sala de conocimiento, en lo anteriormente expuesto, resulta pertinente dejar sentado un criterio no solo orientador del tema, sino acogido al reciente pronunciamiento de la H. Corte Suprema de Justicia en decisión del 30 de julio del 2025, radicado No. 68821, MP DR. CARLOS ROBERTO SOLORZANO GARAVITO, en los siguientes términos:

En efecto, la Sala advierte que el eventual levantamiento de las restricciones de movilidad del postulado SALVATORE MANCUSO GOMEZ, **no necesariamente compromete las garantías de no repetición ni los derechos de las víctimas**, en tanto:

1. La **garantía de no repetición** no puede interpretarse como el derecho de las víctimas a no volver a coincidir con el postulado en sus lugares de residencia, sino como la obligación del Estado y del compareciente de asegurar que no se reproduzcan las conductas violentas que motivaron el conflicto. La mera presencia física del postulado en su lugar de arraigo no constituye, por sí misma, un acto de intimidación o revictimización, prueba de ello es que desde tiempo atrás, de hecho, hay miembros de las extintas A.U.C. residiendo en los mismos lugares donde se encuentran muchas víctimas del conflicto armado, y por el contrario han sido aceptados, incluso les ha quedado más fácil este acercamiento para socializar con ellas los propósitos para la cual fue creada la ley de justicia y paz, así lo han mencionado alguno de estos postulados.

2. La **experiencia comparada** en otros procesos de desmovilización y en el marco del Acuerdo Final con las FARC EP ha mostrado que la reinserción en los territorios

de origen, acompañada de medidas psicosociales y restaurativas, no socava los derechos de las víctimas, sino que puede convertirse en oportunidad para la **reconciliación y el reconocimiento del daño**. No puede considerarse que a través de medios digitales se pueda lograr la reconciliación, lograr el perdón de las víctimas, ni mucho menos aportarles efectivos medios para la reparación que ellas merecen.

3. La **Ley 975 de 2005** tiene como finalidad no solo asegurar a las víctimas su derecho a la verdad, justicia y reparación integral, sino también la **reinserción social de los excombatientes**, mantener restricciones indefinidas de movilidad podría desnaturalizar ese objetivo y convertir la libertad a prueba en una sanción eterna encubierta, lo cual contraría los principios de temporalidad y excepcionalidad de la justicia transicional, como bien lo alegaron los peticionarios. Ahora, debe considerarse que para que los postulados en general de la ley de justicia y paz, puedan acompañar a las víctimas en esos propósitos de la reparación integral, es menester asegurar por parte de las instituciones públicas que estos postulados tengan acceso al trabajo una vez recuperan la libertad, a su estabilidad familiar y a las buenas condiciones de salud, se tratan de personas que delinquieron de manera grave, pero que el Estado negocio con ellos unos beneficios punitivos y que están sometidos al cumplimiento por parte del Estado.

4. La H. Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación penal, en reciente decisión, si bien es cierto concluye que la restricción de movilidad para los postulados no es una restricción máxima a la libertad general de acción por encontrar sustento en los objetivos perseguidos por la ley de justicia y paz, concluye: ***"…No obstante, con el objetivo de asegurar los derechos de las víctimas y permitir que los postulados atiendan las eventuales actividades de reincorporación y reparación en los territorios donde delinquieron, la Sala deberá modular la prohibición absoluta de acudir a dichos lugares…"***

La sala Considera que las víctimas del conflicto armado interno en estos procesos de justicia y paz requieren toda la atención institucional, especialmente por parte de la Justicia, si bien es cierto que, con un temor moderado, en justicia y paz no se aplican, con prioridad, las penas restaurativas como si lo hizo la JEP al sentenciar a los comandantes de las FARC EP, pese a que las dos justicias son transicionales, es porque las víctimas del conflicto no están preparadas para ver a quienes tuvieron un proceso de negociación y que fueron sus victimarios, salir de la mesa de negociación a gozar de libertad y sin un solo día de privación de la libertad por aquellos delitos de LESA HUMANIDAD que se cometieron, en su mayoría de ocasiones, de manera injusta.

Las penas restaurativas vienen implícitas al momento en que se les otorga a los postulados la libertad a prueba, se les invita, entre otras acciones, a buscar el perdón de las víctimas en actos públicos, a ofrecerles a las victimas la garantía de no repetición de esos actos ilícitos violentos que cometieron, incluso desde cuando se les sustituye la medida de aseguramiento por parte de los magistrados de Control de Garantías, se les ordena el cumplimiento de esas actividades judiciales; y, se inician

después de que los postulados han cumplido con la pena de prisión alternativa pactada en el acuerdo de paz que hicieron con el Gobierno Nacional.

Estas decisiones restaurativas son la razón más poderosa que tiene la jurisdicción de justicia y paz, para determinar que se cumpla por parte de los postulados esas actividades judiciales, y ello se logra solamente dándole libertad completa de movilidad a los postulados, a fin de que en los territorios donde actuaron ilegalmente busquen no solamente reparar en su totalidad a las víctimas sino mostrar su verdadero arrepentimiento y buscar la reconciliación y el perdón de ellas; tareas que deben ser visibles, reales y publicitadas en compañía con las instituciones del Estado que fueron creadas para tal fin.

Solo de esta manera, es que se cumple con una verdadera reparación integral a las víctimas del conflicto armado "paramilitar". Que sepan de primera mano la verdad, ayuden a buscar restos humanos hoy desaparecidos, que busquen los bienes entregados y supuestamente perdidos en el entramado administrativo de custodia de estos.
Entonces, si bien es cierto que la ley de justicia y paz protege tanto a las víctimas como a los postulados victimarios para que no coincidan en el mismo lugar donde sucedieron esas graves conductas ilícitas, también es cierto que, como lo dijo la H, Corte Suprema de Justicia:

"…No obstante, con el objetivo de asegurar los derechos de las víctimas y permitir que los postulados atiendan las eventuales actividades de reincorporación y reparación en los territorios donde delinquieron, la Sala deberá modular la prohibición absoluta de acudir a dichos lugares…" (negrillas, cursivas y subrayado fuera de texto) y es lo que estamos haciendo, en defensa de los derechos de las victimas que son el núcleo, el eje central de este proceso transicional.

Ahora bien, mayor razón encontramos en este tema con el postulado SALVATORE MANCUSO GOMEZ, postulado a quien se le ha certificado su importante colaboración al proceso transicional, entregando no solo información en contra de terceros que hoy están procesados penalmente, sino en el esclarecimiento de la verdad suministrada a las víctimas, en la entrega abundante de bienes, y organización de los antiguos comandantes de las AUC para conformar mesas técnicas que permitan, junto al Gobierno Nacional, agilizar el proceso de justicia y paz y atender a las víctimas del conflicto, ello se lee dentro de la resolución No. 327 del 21 de septiembre del año 2025, donde el Gobierno Nacional a través del Presidente de la República de Colombia, lo designa como GESTOR DE PAZ, junto con 14 excomandantes de las extintas autodefensas unidas de Colombia A.U.C.

Esta resolución de gestoría de paz del Gobierno Nacional, no tiene razón diferente que buscar en estas personas que tuvieron el mando de aquellos Bloques y Frentes ilegales, por su conocimiento y experiencia, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE PAZ

Y GARANTIAS DE NO REPETICION, ESTRUCTURACION DE PROCESOS DE PAZ Y ESTRATEGIAS DE ACERCAMIENTOS CON ACTORES ARMADOS ILEGALES; prácticamente fusiona las actividades en la búsqueda de una paz integral con todos los actores del conflicto, y el acercamiento con las víctimas del paramilitarismo donde se ofrezca LAS GARANTIAS DE NO REPETICION; para ello el Gobierno Nacional pide solicitar a las autoridades nacionales o extranjeras tomar las medidas necesarias para garantizar la participación de los gestores de paz.

La Sala considera que es necesario unir esfuerzos con todas las instituciones para que se pueda lograr una verdadera paz, rodeando a las víctimas del conflicto, indemnizándolas, reconociéndoles sus derechos a conocer la verdad, a encontrar a sus seres queridos desaparecidos, cumpliendo los innumerables exhortos que ha proferido la sala para proporcionar a las víctimas sobrevivientes del conflicto salud y educación gratuita, entre otros, que medianamente se viene cumpliendo.

Así las cosas, consideramos que estos gestores de paz tienen un instrumento legal para que cumplan con la ACTIVIDAD JUDICIAL que se viene desarrollando en justicia y paz, como lo es acercarse a las víctimas del conflicto proporcionarles la verdad de lo sucedido, procurar encontrar los sitios donde fueron inhumados los cuerpos de sus familiares, encontrar los bienes, al parecer, desaparecidos en la extinta DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, hoy SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (S.A.E.), pedir públicamente perdón a las víctimas en sus territorios y ayudar profundamente a desmantelar mediante procesos alternos de paz con el Estado, los grupos ilegales que tomaron las posiciones dejadas por las AUC en otros tiempos, las víctimas no solo siguen siendo víctimas sobrevivientes del conflicto con las extintas AUC sino que están siendo revictimizadas por otros grupos similares que tomaron esas posiciones e incrementaron el narcotráfico insumo propio para generar mayor violencia.

Por todos estos motivos, considera la sala que se debe autorizar al postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, para que dé cumplimiento a las ACTIVIDADES JUDICIALES que se determinan en esta sentencia, y en las demás sentencias proferidas por la Sala de Conocimiento, mediante su desplazamiento por todo el territorio nacional donde actuaron los grupos bajo su mando, sin autorización previa alguna, pero informando a esta Sala de Conocimiento y a la juez Única de ejecución de sentencias, no solo el plan o la actividad a realizar, sino el sitio donde se va a efectuar, y los resultados de las mismas. Esta evaluación servirá de base para ver no solo los resultados buscados con las víctimas del conflicto, sino que va de la mano con el proceso de resocialización y reincorporación a la vida civil del postulado.

Es necesario considerar que tanto el poder ejecutivo, como el legislativo y sin indiferencia el poder judicial, están de acuerdo en que el proceso de justicia transicional donde se juzgan a todos y cada uno de los desmovilizados y postulados a la ley de justicia y paz, debe culminar prontamente, la discusión está en que este

proceso se debe terminar cumpliendo con las necesidades de las victimas sobrevivientes del conflicto armado, y precisamente para lograrlo se requiere agilización legal de procedimientos, aplicación de las buenas prácticas judiciales evadiendo repeticiones procesales que se van presentando en los procesos y decisiones parciales que se les lleva a los postulados, en buscar mecanismos agiles para indemnizar a las víctimas y en permitir que los designados gestores de paz vinculados al proceso transicional, puedan efectivamente realizar su trabajo bajo la coordinación de las instituciones del Estado y el control de la jurisdicción penal transicional, así existirá una gran probabilidad de culminar el proceso en un término mucho más corto que el que hoy en día se cuenta, desafortunadamente por el cumplimiento que hoy hay q darle a las actuaciones y etapas procesales.

Ahora bien, pese a la gran reparación que se les ha hecho a las víctimas sobrevivientes del conflicto por parte de la jurisdicción penal transicional, como reconocerles sus indemnizaciones a través de las sentencias proferidas en justicia y paz, de entregarles a muchas de ellas los restos de sus seres queridos, en encontrar las victimas la verdad a través de las miles de versiones libres rendidas por los postulados, aún persisten muchas inconformidades de otras de estas víctimas sobrevivientes, precisamente porque no les ha llegado su espacio para recibir una reparación integral, por ello el hecho que el postulado SALVATORE MANCUSO llegue a los territorios con un programa serio de reparación a ellas, acompañado con el pedido de perdón publico redundaría positivamente en los resultados buscados por la ley de justicia y paz.

13.2. DE LO RESUELTO POR LA SALA - PETICIONES GENERALES:

Los abogados de la Defensoría del Pueblo, solicitaron como medidas generales de reparación para las víctimas del Bloque Norte – Frente Contrainsurgencia Wayuu en contra del postulado Salvatore mancuso Gómez, o en su defecto, de forma subsidiada al Fondo para la Reparación a las Víctimas y al Estado Colombiano, para que se condene al pago de la indemnización y reparación integral correspondiente, por ser éstos responsables de manera penal por los daños y perjuicios ocasionados por los delitos ya enunciados a la población civil, tales como: Rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, otras medidas de reparación integral y declaratoria de crimen de lesa humanidad, ello con el fin de economía procesal.

La Sala, no encuentra objeción alguna a las medidas solicitadas por los abogados apoderados de víctimas, de tal manera que dispone en la parte resolutiva EXHORTAR a las entidades de conformidad con las peticiones e las siguientes medidas:

1.- **REHABILITACIÓN:** Intervención terapéutica individual para los miembros de la familia de la víctima directa. Al igual que acceso gratuito en atención a salud mental para el tratamiento psicológico necesario a la víctima, así como medicamentos gratuitos para que la atención sea integral.

2.- **SATISFACCIÓN:** que busca restablecer la dignidad de las víctimas y de difundir la verdad sobre lo sucedido: De conformidad con el artículo 44 de la Ley 1592 de 2012, solicito de la Sala de Conocimiento al momento de emitir la sentencia disponga de parte del postulado los actos de contribución a la reparación integral que en cada caso se solicitan, con el fin de que se restablezca la dignidad de la víctima, en especial un acto público de reconocimiento de responsabilidad, en desagravio de las víctimas y en memoria de las personas asesinadas, de parte del postulado, al igual que una declaración pública de sus arrepentimientos y de sus compromisos de no incurrir en conductas punibles y su participación en los actos simbólicos de resarcimiento y re dignificación de las víctimas a los que haya lugar.

3.- **GARANTIAS DE NO REPETICIÓN:** Que se investigue, se juzgue y se le apliquen sanciones a los responsables por acción u omisión de las violaciones a los derechos humanos de que se tratan en cada uno de los cargos imputados a los postulados, todo lo cual estará a cargo de los órganos judiciales y disciplinarios competentes.

4.- **OTRAS MEDIDAS DE REPARACION INTEGRAL:** Que se concedan a las víctimas las otras formas de reparación que no surjan de un proceso penal, las cuales están contempladas en la Ley 1448 de 2011 y las que están a cargo de las Unidades Administrativas Especiales de Atención y Reparación Integral a las víctimas y de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de acuerdo con las competencias señaladas en la mencionada ley.

5.- DECLARATORIA DE CRIMEN DE LESA HUMANIDAD.

Se solicita, que cada uno de los crímenes de que aquí se trata se declaren crímenes de lesa humanidad, de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma y el inciso segundo del artículo 15 de la Ley 1719 de 2014, en la que se dispuso: *"La autoridad judicial competente que adelante la investigación y el juzgamiento, deberá declarar que la(s) conducta(s) por la cual se investiga o juzga es de lesa humanidad, cuando así se establezca."*

12.13. DAÑO COLECTIVO.

La delegada del Ministerio Público en audiencia del 16 de julio del año 2025, *(Récord 09:10)* sustentó y exhibió un informe[204] detallado sobre las reparaciones de solicitudes de reparación colectiva, destacando las zonas donde habitaban y aún permanecen miembros de las comunidades de Carraipia, Majayura , Malaki en Uribia y Matitas en Riohacha – La Guajira, ocasionados por el actuar del grupo armado

[204] Anexó los siguientes soportes: Oficio de 2 de octubre de 2024 donde se reconoce como sujeto de reparación colectiva al Clan Uriana e Ipuana de Holuluy, comunidad wayuu Finca la Esperanza Majayura. Hecho No. 8 suscrito por la Doctora ZAIDA HERNANDEZ PEDRAZA Directora Técnica de la Dirección de reparación de la UARIV.

ilegal Frente Contrainsurgencia Wayuu de las extintas AUC, soportado de manera general en los artículos 118, 250 y 277 numeral 7º de la Constitución Política, así como el artículo 111 de la Ley 906 de 2004 y el 28 de la Ley 975 de 2005 que la facultan para intervenir en los procesos ante las autoridades judiciales, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales; además de las contempladas en las leyes 1448 del 2011, decreto 4800 de 2011, y el decreto 3011 del 2013.

Resaltar que, el inciso 8 del artículo 8º de la Ley 975 de 2005, establece que la reparación colectiva debe orientarse "*a la reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia".* Por su parte el artículo 49 de la misma ley, refiriéndose a los programas de reparación colectiva puntualiza la necesidad de acciones orientadas a *"recuperar la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho particularmente en las zonas más afectadas por la violencia; a recuperar y promover los derechos de los ciudadanos afectados por hechos de violencia, y a reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia".*

Siguiendo con su argumentación, hizo identificación de los sujetos de reparación colectiva, a las comunidades Wayuu del departamento de la Guajira, acudiendo a información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, en el desarrollo de todas las audiencias, los relatos e intervenciones de las víctimas y las versiones libres con los postulados y los apoderados que representan víctimas. Así mismo, refiere que consultó fuentes formales y no formales[205].

Posteriormente, realizó una breve reseña de la génesis del grupo armado ilegal, y su excomandante al que, se le atribuyen los hechos delictivos que son objeto del referenciado incidente, y concluye que los ex miembros del FRENTE CONTRAINSURGENCIA WAYUU, impactaron en esa comunidad afectando su sistema cultural, espiritual, organizativo, subsistencia, la destrucción social y territorial de la colectividad, al igual que sus bienes materiales e intangible.

Señaló los daños colectivos en el siguiente orden:

TERRITORIAL. Se produce el desarraigo masivo de clanes wayuu en estas zonas como Carraipia, Majayura, Malky en Uribia y Matitas en Riohacha, por ello el abandono forzado de sus rancherías cementerios (Amaka) fuentes de agua, se perdió el control ancestral sobre los territorios espirituales y productivos.

[205] Sentencias de Tribunales de Justicia y Paz, en especial la sentencia dictada por este Tribunal del Justica y Paz en contra del postulado FERNEY ARGUMEDO TORRES; igualmente de la Corte Suprema, Corte Constitucional, así como investigaciones y textos elaborados por la Comisión Nacional de Reparación y reconciliación, Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, Centro Nacional de Consultoría, Centro Nacional de Memoria Histórica, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Verdad Abierta, diarios y revistas de opinión de circulación nacional y regional, entrevista por video con el líder wayuu ANUAR AVILA BOSCAN.

ESPIRITUAL Y CULTURAL. Se produjo la interrupción de rituales, tales como el segundo entierro (Jepiera) imposibilitando la conexión con los muertos; se dio la pérdida de memoria oral, saberes ancestrales y prácticas tradicionales como el palabrero (putchiupu) y también lo fue la afectación de elementos centrales como la alama (Ain) el Buen vivir (Anas) y la cosmogonía wayuu.

ORGANIZATIVO Y DE AUTORIDAD TRADICIONAL. Con el debilitamiento o suplantación de las autoridades tradicionales, tíos maternos y representantes claniles se dio la ruptura de los vínculos entre clanes y afectación al sistema de reciprocidad e intercambio; la estigmatización de líderes y desconfianza interna sembrada por infiltración del grupo armado.

PSICOSOCIAL Y DE IDENTIDAD. Se dio el trauma generacional por asesinatos, desapariciones, desplazamientos, violencia de género, generando miedo colectivo, pérdida de sentido de pertenencia e identidad, aislamiento cultural. Afectación diferenciada a mujeres, niños y niñas wayuu que cargaron con el peso de la disolución familiar y comunitaria.

Como consecuencia de la incursión del grupo armado ilegal en esas regiones, se originaron los delitos contenidos en los patrones de macro criminalidad de Homicidios, Desaparición Forzada, desplazamiento forzado, violencia contra pueblo indígenas y violencia basada en género,

12.13.1. SOLICITUD DE MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA.

A.- Presencia del Estado. Comunidades de Carraipia, Majayura, Malaki en Uribia y Matitas en Riohacha, sugiere relevante como punto de partida para la adopción de las demás medidas y su materialización, porque no puede postergarse más en el tiempo, ni mucho menos seguir siendo marginada de políticas sociales y del respaldo de las instituciones gubernamentales.

B.- Daño psicosocial, considera pertinente la solicitud de las siguientes medidas de reparación colectiva: Se implementen la creación, implementación y promoción de un Programa de Atención Psicosocial Comunitario para la dignificación de las víctimas de la violencia en la población Carraipia, Majayura, Malaky en Uribia, Matitas en Riohacha.

C-Relación al daño respecto a la garantía y protección de los derechos fundamentales de las comunidades, de las siguientes medidas de reparación colectiva.

Solicita como reparación para las víctimas de Carraipia, Majayura, Malaki en Uribia y Matitas en Riohacha el acompañamiento del estado para la creación de proyectos productivos con ENFOQUE DIFERENCIAL, es decir, los adecuados para esta

especial región del norte del país, como lo es: la agricultura, ganadería, pesca y turismo, teniendo en cuenta que en el sector agrícola de acuerdo al clima y la tierra se puede sembrar variedad de productos, y a la vez que, se apoye la cadena de producción alimentaria , entendida como el proceso integral que abarca todas las etapas necesaria para llevar los alimentos desde su origen hasta el consumidor y de ser necesario los centros de acopios de estos productos con el mismo criterio. Todo debe ser concretado con la comunidad indígena.

D. Garantía de no repetición, solicita la Restricción Voluntaria de la Movilidad del postulado, en el sentido de que no podrá retornar a las zonas donde ejerció su actividad delictiva del postulado, como garantía de no repetición. Como agente reparador, el postulado.

Dado que esta comunidad Wayuu es rica y diversa destacándose por sus tejidos coloridos y diseños, solicita la Implementación de Programas recreativos y culturales, en el marco de una feria de Servicios en espacios cercanos e inclusivos el objetivo primordial es la promoción de la cultura desarrollo comercial, industria, como mochilas, hamacas, sombreros, chinchorros, mantas creadas por las mujeres y los sobreros de palma y otros objetos utilitarios creados por hombres, a fin de dar estimulo comercial y generar lucro o ganancias para esta comunidad - Garantías de no Repetición. Como agente reparador, enuncia el Ministerio de Comercio. Industria y Turismo, a través de artesanías de Colombia MINCIT, Gobernación de la Guajira, Alcaldías de Riohacha y Uribía.

Solicitud de saneamiento dentro de los territorios para el pueblo Wayuu en cada clan relacionado con las comunidades de esta audiencia, así: Físico-jurídico, cuyo objeto es el reconocimiento, protección y restitución de los territorios colectivos de los clanes wayuu ocupados o abandonados por causa de los actores armados. Cultural y espiritual, el objeto es restaurar los lugares sagrados, practicas rituales y vínculos comunitarios, reconstrucción del equilibro espiritual afectado por este grupo. Organizativo y político, fortalecer la autonomía y gobernanza indígena, restaurando la legitimidad de sus autoridades y el sistema normativo propio. Económico y ambiental, reactiva los medios de vida tradicionales del pueblo wayuu de forma sostenible, respetando sus formas de organización productiva, el Institucional y garantías de no repetición, Reconstruir la confianza de la comunidad wayuu en las instituciones del Estado con mecanismos eficaces de protección.

Concluye la delegada que *"…se tiene probado que este Frente mal llamado Contrainsurgencia Wayuu perteneciente al Bloque Norte, siendo su excomandante, el postulado de esta audiencia SALVATORE MANCUSO GOMEZ , afectó las comunidades étnicas, campesinas que conviven en el Departamento de La Guajira, donde afirma que por parte de la UARIV se viene realizado el diagnóstico del daño Colectivo, apenas en uno de los territorios relacionados en esta audiencia,*

deprecando de la magistratura nuevamente se ordene a la citada entidad dar celeridad a este proceso, ya que desde la resolución de inclusión en mayo de 2017 poco ha sido el avance, amén, de proceder a continuar con la identificación de otros sujetos de reparación colectiva en ese territorio en beneficio de las comunidades".

Por todo lo anterior, solicita a la Colegiatura que reconozcan como sujeto de reparación colectiva a las comunidades antes citadas quedando identificada respecto de los daños susceptibles de reparación colectiva.

De lo resuelto por la Sala:

Teniendo en cuenta lo señalado por la delegada de la Procuraduría, en el informe sobre daño colectivo que presentó ante esta Sala de Conocimiento de Justicia y Paz dentro del trámite del presente proceso, con el fin de identificar daños colectivos, ocasionados en las regiones de Carraipia, Majayura, Malaki en Uribia y Matitas en Riohacha – La Guajira, pertenecientes a la etnia indígena Wayuu, quienes se encontraban organizados social y políticamente en su territorio debidamente consolidados de acuerdo a sus leyes, cosmovisión y costumbres ancestrales, **se concluye que son sujetos de reparación colectiva**, tal como lo establece el citado artículo 152[206] de la Ley 1448 de 2011.

Siguiendo esa línea, dado que la reparación es colectiva, no va a favorecer a determinados individuos, sino a toda la comunidad, así lo indicó la Corte Suprema de Justicia:

> *"…La víctima colectiva del conflicto armado es un conjunto de personas miembros de una comunidad o colectividad, a quienes, ya sea a través de la amenaza de violación o por su transgresión efectiva, se les ha causado daño a un interés, un derecho o un bien jurídico colectivo, jurídico perteneciente a la comunidad, de donde los individuos resultan perjudicados en tanto pertenecen a esa comunidad y deben ser reparadas colectivamente, diferente del daño plural que es la lesión de derechos individuales causado a varias personas, es decir, es un conjunto de daños individuales, que sin embargo también pueden a su vez generar daño colectivo[207]."*

Consecuente con lo anterior, la Sala, desarrollará las siguientes consideraciones frente al DAÑO COLECTIVO que se ordenará en la parte resolutiva de esta sentencia, que implica establecer su reconocimiento, y reconocer que los grupos armados al margen de la ley afectaron en gran medida el tejido social, institucional

---

[206] "*ARTÍCULO 152. SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA. Para efectos de la presente ley, serán sujetos de la reparación colectiva de que trata el artículo anterior: 1. Grupo y organizaciones sociales y políticos; 2. Comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un propósito común…"*
[207] Sentencia 37048 del 6 de diciembre de 2012

y jurídico del Estado, quienes ejercieron un deterioro en el ejercicio de los derechos y garantías mínimas de las comunidades indígenas, en el siguiente orden:

PRIMERO: EXHORTAR al Ministerio del Interior -Dirección de Asuntos indígenas- Ministerio de Cultura, Gobernación, Alcaldía de Riohacha y de Uribia – La Guajira, en coordinación con la Unidad de Atención Integral a Víctimas, para que implementen proyectos que tengan como fin el reconocimiento, protección, saneamiento y restitución de los territorios colectivos de los clanes wayuu, ocupados o aquellos abandonados por causa de los actores armados. Así como restaurar los lugares sagrados, practicas rituales y vínculos comunitarios.

SEGUNDO: EXORTAR al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, en articulación con la Gobernación del departamento de La Guajira, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, en coordinación con la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas, para que difundan disculpas públicas, debido al abandono institucional desarrollado en los municipios – *Resguardos Indígenas*- donde tuvo injerencia el Frente Contrainsurgencia Wayuu del Bloque Norte; que produjo la consolidación de la estructura paramilitar y el total sometimiento de los habitantes de esas comunidades.

TERCERO: EXHORTAR al Ministerio del Interior, Gobernación y Alcaldías Municipales de Riohacha y Uribia en el departamento de La Guajira, para que en desarrollo de ceremonias públicas pidan perdón a las comunidades indígenas mencionadas por el abandono institucional donde tuvo injerencia el grupo armado ilegal, "FRENTE CONTRAINSURGENCIA WAYUU" del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC, que permitió la consolidación de la estructura paramilitar y el sometimiento de sus pobladores, en especial de las comunidades indígenas de Carraipia, Majayura, Malaki en Uribia y Matitas en Riohacha – La Guajira.

CUARTO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y Protección Social, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la implementación y promoción de un Programa de Atención Psicosocial Comunitario para la dignificación de las víctimas, entrelazando estrategias dirigidas a sujetos de reparación colectiva de esos grupos étnicos, y de acuerdo a la solicitud de la comunidad indígena sean atendidos con especialistas entre otros, psicólogos de la misma etnia que, entienda su cosmovisión y el contexto Wayuu. Y, se reactiven las mesas de víctimas del conflicto armado de esas comunidades.

QUINTO: EXHORTAR a la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, Ministerio de Comercio. Industria y Turismo, a través de artesanías de Colombia MINCIT, Gobernación de la Guajira, Alcaldías de Riohacha y Uribía, para que diseñen políticas públicas dirigidas al restablecimiento y preservación de las tradiciones culturales de las comunidades indígenas de la etnia Wayuu, ubicadas en el

departamento de La Guajira, tales como el fortalecimiento de la elaboración de artesanías como un mecanismo de generación de ingresos, en coordinación con la Unidad de Atención Integral a Víctimas.

SEXTO: EXHORTAR al Ministerio de Cultura que disponga de intérpretes de las lenguas nativas de la etnia Wayuu, en conjunto con el Ministerio de Educación, la Secretaria de Gobierno de Riohacha -La Guajira, en coordinación con la Unidad de Reparación Integral a víctimas, para que las víctimas afectadas por el grupo armado ilegal conozcan el contenido del fallo en su lengua Wayunaiki, dado la importancia de esa cultural e identidad.

SEPTIMO: EXHORTAR al Ministerio del Interior Gobernación, Alcaldía de Riohacha y Uribia del Departamento de la Guajira, reactiven las mesas de víctimas del conflicto armado de esas comunidades, porque son los espacios de interlocución con las instituciones del Estado, donde les pueden ofrecer a la población, mecanismos para garantizar la incidencia de las políticas que los afectan.

OCTAVO: EXHORTAR: al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Fondo para el financiamiento del sector Agrario FINAGRO- Instituto Colombiano Agropecuario -ICA, para el fortalecimiento en la cadena de producción ovino-caprina, con el fin de mejorar las condiciones de producción y promover el desarrollo del sector en sus diferentes eslabones, creando un escenario que permita fortalecer el consumo interno y lograr ser competitivos en otros mercados.

NOVENO: EXHORTAR al Centro Nacional de Memoria Histórica en coordinación con La Procuraduría General de La Nación y Fiscalía General de La Nación, para la realización de memoria histórica que, concluya con unos folletos, documentales o compendio para ser publicado en las redes sociales y otros medios, donde se evidencie el histórico abandono estatal del Departamento del Departamento de La Guajira.

DECIMA: EXHORTAR a la Unidad de Reparación Integral a Víctimas, para que le dé cumplimientos a todos los EXHORTOS ordenados en esta sentencia.

13. OTRAS DETERMINACIONES DE LA SALA:

PRIMERO: RECONOCER como víctimas de los hechos delictivos llevados a cabo por los miembros del Bloque Norte – Frente Contrainsurgencia Wayúu de las AUC, a las personas que acreditaron tal condición y fueron reconocidas como tal dentro del incidente de reparación integral, para efecto de la remisión de la presente sentencia una vez cobre ejecutoria formal y material a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las víctimas, con anexo reservado que contenga el listado

completo de víctimas reconocidas para lo de su competencia, en atención a lo establecido en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 del mismo año, y lo previsto en los artículos 2.2.5.1.3.1, 2.2.5.1.3.2 y en el parágrafo tercero del artículo 2.2.5.1.2.2.19 del Decreto 1069 de 2015.

SEGUNDO: DECLARAR que las víctimas aquí reconocidas y que fueron objeto de pronunciamiento en la presente decisión, en ningún caso podrán recibir doble indemnización, fruto de fallo judicial o acto administrativo, en virtud de la prohibición de la doble reparación. La oficina de reparación a las víctimas será la encargada de vigilar esta situación jurídica.

TERCERO: DECLARAR. Que el Frente Contrainsurgencia Wayuu, como estructura que integró y se desmovilizó con Bloque Norte adoptó patrones de macro criminalidad constitutivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, consistentes en la comisión de masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, secuestros, amenazas contra personas protegidas y con la apropiación y destrucción de bienes y lugares protegidos, siendo los pobladores de la región instrumentalizados, principalmente con el argumento falaz de pertenecer o colaborar con la Subversión.

CUARTO: SOLICITAR a la defensa del postulado SALVATORE MANCUSO GOMEZ, hacer llegar a la Sala copias de las sentencias proferidas en su contra para proceder a la respectiva acumulación jurídica de penas.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Conocimiento de **Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla,** administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

VII. RESUELVE.

1. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD. LEGALIZACIÓN DE CARGOS. ACUMULACIÓN JURIDICA DE PENAS, PENAS PRINCIPALES, ACCESORIAS Y ALTERNATIVIDAD PENAL.

1.1. DECLARAR que en lo atinente a los requisitos de elegibilidad consagrados por la Ley 975 de 2005 para los eventos de Desmovilización colectiva, hasta la fecha y conforme a las comprobaciones aportadas por la Fiscalía General de la Nación, se encuentran cumplidos por el postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ.

1.2. LEGALIZAR los cargos formulados por la Fiscalía Décima (10ª) de la Dirección Nacional de Justicia Transicional, en contra de SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, por su participación en los delitos de Homicidio en persona, Desaparición Forzada en Persona Protegida, Actos de Terrorismo, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, Destrucción y Apropiación De Bienes Protegidos, Tortura en Persona

Protegida, Deportación, Expulsión, Traslado o Desplazamiento forzado de población civil, Exacciones o Contribuciones Arbitrarias, Secuestro Extorsivo, Amenazas, Actos De Discriminación Racial, Detención Ilegal Y Privación Del Debido Proceso, Acceso Carnal Violento en Persona Protegida y Tratos Inhumanos y Degradantes.

1.3. CONDENAR a SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía número Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 6.892.624 expedida en Montería (Córdoba), a la pena privativa de la libertad de CUATROCIENTOS OCHENTA (480) MESES DE PRISIÓN y MULTA DE 30.000 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS POR EL TERMINO DE DOSCIENTOS CUARENTA (240) MESES, en razón de su acreditada responsabilidad en la ejecución de los delitos referenciados en el numeral I.2 de la parte resolutiva de esta sentencia.

1.4. CONCEDER al postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, Identificado con la CC No. 6.892.624 expedida en Montería (Córdoba), la **ALTERNATIVA** de ejecutar la pena principal privativa de la libertad que en este fallo se impuso en CUATROCIENTOS OCHENTA (480) MESES DE PRISION, en un término de OCHO (8) AÑOS de prisión. Se le hace saber al postulado que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas dentro de la presente sentencia ocasionará la revocatoria de esta alternativa.

1.5. A efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas, el sentenciado deberá suscribir acta en la que se comprometa a su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca vinculado a este proceso transicional, y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció, en los términos señalados por el artículo 8º del Decreto 4760 de 2005, inciso segundo.

1.6. El postulado **SALVATORE MANCUSO GÓMEZ** aquí condenado, deberá reconocer públicamente su responsabilidad, arrepentimiento y compromiso de no volver a incurrir en la comisión de conductas punibles; tales manifestaciones deberán ser publicadas en un periódico de circulación nacional y realizarse en los términos estipulados en la parte motiva de la presente sentencia.

2. PATRONES DE MACRO CRIMINALIDAD

2.1. DECLARAR que en el presente proceso conforme a lo motivado, se acredita la estructura de **PATRONES MACRO-CRIMINALES** que se evidenciaron mediante los delitos de Homicidio en Persona Protegida, Desaparición Forzada, Desplazamiento Forzado, Violencia en contra de Pueblos Indígenas y Violencia Basada en Género, a los que se adecuaron las acciones desplegadas de manera

sistemática y generalizada por el postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ en sus condición de miembro del desmovilizado Frente Contrainsurgencia Wayuu del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.

2.2. DECLARAR que los **PATRONES MACRO CRIMINALES** acreditados se corresponden con graves, sistemáticas y generalizadas violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Los delitos cometidos por el postulado se enmarcan como DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y CRIMENES DE GUERRA.

3. ACREDITACION DE VÍCTIMAS Y MEDIDAS DE REPARACIÓN ORDENADAS.

3.1. DECLARAR la acreditación de condición de víctimas de quienes, conforme a lo motivado, soportaron tal calidad.

3.2. DECLARAR la acreditación de las afectaciones que vienen reconocidas en las motivaciones de esta sentencia.

3.3. CONDENAR al postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ al pago solidario de los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados con los delitos objeto de esta sentencia, de acuerdo con los montos establecidos en la parte motiva de esta sentencia.

3.4. LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICITIMAS -UARIV- CANCELARÁ las Indemnizaciones comprendidas en el esquema de reparación administrativa de su competencia, atendiendo los gravísimos impactos y perjuicios causados por los delitos objeto de la presente sentencia.

3.5. En firme la presente **sentencia,** se remitirá la actuación ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que con fundamento en lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 del mismo año, de cumplimiento a las diferentes medidas de reparación aquí ordenadas.

4. EXHORTOS

4.1. EXHORTAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que las víctimas directas e indirectas acreditadas en la actuación, sean diagnosticadas de manera inmediata a través de la red de Salud Pública con presencia en los municipios donde se encuentran ubicados, a fin de someterlas a un programa de tratamiento médico y psicológico de manera gratuita y prioritario

coordinado por el Ministerio de Salud y desarrollado por las Secretarías departamentales y municipales de Salud, de los lugares de origen de las víctimas.

4.2. EXHORTAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que previo estudio de campo, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, evalúe la necesidad y pertinencia de implementar programas técnicos y tecnológicos dirigidos a personas afectadas por el conflicto armado interno, en las zonas de injerencia del mal llamado Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.

4.3. EXHORTAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que, ante el Ministerio de Educación Nacional, gestione becas de estudios profesionales y/ o de capacitación o posgrado en favor de las víctimas directas o indirectas, especialmente a las jóvenes víctimas del conflicto armado interno, que, reuniendo los requisitos académicos, quieran acceder a los mismos.

4.4. EXHORTAR a la Gobernación de La Guajira, a la Policía y al Ejército Nacional para que en coordinación con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a la defensa del postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, procesado y condenado en estas diligencias, adelanten las gestiones necesarias para llevar a cabo los actos públicos de perdón y reconocimiento de todos aquellos daños individuales y colectivos causados a los hombres y a las mujeres con ocasión del accionar y el despliegue paramilitar en sus territorios, buscando la garantía de no repetición y no olvido de lo sucedido.

4.5. EXHORTAR al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Agricultura, al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural a garantizar el reconocimiento del status de víctima y se implemente un enfoque de género diferenciado dentro del proceso de restitución, reubicación de núcleos familiares y titulación de tierras en armonía con la legislación vigente, facilitando el acceso de tierra a aquellas personas sobrevivientes del accionar paramilitar, asumiendo que gran parte de ellas integran la población campesina y rural colombiana.

4.6. EXHORTAR al Gobernador, Alcalde de Riohacha y Uribia del Departamento de La Guajira para diseñar y poner en funcionamiento los programas necesarios para la reparación colectiva concedida por esta Magistratura en la parte motiva de este proveído.

4.7. EXHORTAR al FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, AL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL (DIPOL), al DIRECTOR DE LA DIJIN, al CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA, al PROCURADOR GENERAL DE LA NACION y al DIRECTOR DE LA U.I.A.F., a fin de que estudien la posibilidad y viabilidad de crear una UNIDAD INTERINSTITUCIONAL, CON FUNCIONARIOS DE INTELIGENCIA, que permitan, con exclusividad, investigar

de manera permanente y efectiva los bienes de los perpetradores (Patrulleros y Comandantes) de las AUC, así como de los financiadores, y de quienes de manera directa o indirecta participaron con el accionar "paramilitar" de estos G.A.O.M.L.

4.8. EXHORTAR al GOBIERNO NACIONAL, OFICINA DE REINCORPORACIÓN DE DESMOVILIZADOS, estudie la posibilidad de crear un COMITÉ TECNICO, que diagnostique la situación personal de cada uno de los miembros de las, mal llamadas, Autodefensas Unidas De Colombia, a fin de crear programas eficaces, que permitan la reincorporación de cada uno de ellos a la sociedad, así como educar a la sociedad colombiana mediante mecanismos publicitarios que permitan esa reincorporación, esto con el propósito de darle paso al verdadero principio de la NO REPETICION.

4.9. EXHORTAR al GOBIERNO NACIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTO NACIONAL PENTENCIARIO Y CARCELARIO - I.N.P.E.C., a fin de que estudie la viabilidad de crear un grupo de psicólogos y trabajadoras sociales especializados, de alta calidad, que permitan realizar de manera efectiva los estudios psicológicos a todos los miembros de las A.U.C. privados de su libertad, con el propósito que una vez sustituida la pena de prisión por libertad condicionada, sea de mayor facilidad su incorporación a la vida civil; esto en atención al principio fundamental de Justicia y Paz de la NO REPETICIÓN.

4.10. Désele cumplimiento a los exhortos ordenados conforme con lo ordenado en la decisión de "DAÑO COLECTIVO", presentado por el Agente delegada de la Procuraduría General de la Nación**.**

-Dar cumplimiento a los demás EXHORTOS realizados por esta Sala de Conocimiento en el cuerpo de este proveído.

-Dar cumplimiento a lo dispuesto en el acápite de OTRAS DETERMINACIONES.

Contra la presente decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ HAXEL DE LA PAVA MARULANDA
Magistrado Ponente

CECILIA LEONOR OLIVELLA ARAUJO
Magistrada

ROMEL DAVID ARÉVALO GONZÁLEZ
Magistrado.

Firmado Por:

Jose De La Pava Marulanda
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 2 Justicia Y Paz
Tribunal Superior De Barranquilla - Atlantico

Cecilia Leonor Olivella Araujo
Magistrada
Sala 3 Justicia Y Paz
Tribunal Superior De Barranquilla - Atlantico

Romel David Arevalo Gonzalez
Magistrado
Sala 004 Justicia Y Paz
Tribunal Superior De Barranquilla - Atlantico

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0dae45e30c284d685ac36d336f574f7c2f5f17b515fdca0345e4877f09f3acb3**
Documento generado en 16/12/2025 02:30:44 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica